

**EL PATRIMONIO Y EL ESTADO EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE CHILE: DESARROLLO DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO Y SU APROPIACIÓN POR LA SOCIEDAD CHILENA ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XXI**



**Palacio de La Moneda, sede de la Presidencia de la República, Santiago de Chile.  
Foto A. Cabeza**

**Doctorando: Ángel Emilio Cabeza Monteiro**  
**Profesor Director: Francisco Javier Rodríguez Barberán**

**Universidad de Sevilla, España**  
**Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica**

**2015**

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>Presentación.....</b>	pág. 4
<b>1. Introducción.....</b>	pág. 5
<b>2. Marco Teórico, Metodología e Hipótesis de Trabajo.....</b>	pág.10
2.1 La Cultura y la Identidad Cultural como marcos conceptuales del Patrimonio.....	pág.10
2.2 Los Conceptos de Estado y Nación.....	pág.21
2.3 El Desarrollo del Concepto de Patrimonio.....	pág.27
2.4 Las Cartas y Convenciones Internacionales y su aplicación en América Latina y Chile.....	pág.57
2.5 Hipótesis y Metodología.....	pág.67
<b>3. Formación Histórica Del Estado De Chile Y De La Identidad Nacional.....</b>	pág.76
3.1 La Diversidad Ambiental y Cultural del Territorio de Chile.....	pág.76
3.2 La Formación de la Nacionalidad e Identidades Culturales de Chile.....	pág.96
3.3 La Formación de la Identidad Nacional: Procesos, Símbolos y Arquitectura	pág.104
3.4 La Independencia de Chile de la Corona Española, la Formación del Estado Republicano y de la Identidad Nacional del siglo XIX y comienzos del siglo XX	pág.123
<b>4. Desarrollo de los Conceptos de Patrimonio en Chile y su Evolución Legal e Institucional durante los Siglos XIX Y XX.....</b>	pág.211
4.1 Introducción.....	pág.211
4.2 Las primeras Instituciones, Normativas Legales y Acciones Republicanas vinculadas al patrimonio.....	pág.212
4.3 La Primera Legislación Patrimonial de Chile de 1925.....	pág.261
4.4 La Evolución del Consejo de Monumentos Nacionales entre 1925 y 1970	pág.271
4.5 La Ley de Monumentos Nacionales de 1970 y su aplicación.....	pág.290
4.6 La legislación de vivienda y urbanismo y su vinculación con el patrimonio	pág.338
4.7 La legislación del patrimonio natural y de las áreas silvestres protegidas su vinculación con el patrimonio cultural.....	pág.343
4.8 Resumen de la legislación y la organización institucional sobre el patrimonio en Chile.....	pág.351
4.9 Análisis legislativo comparativo del Patrimonio Cultural de Chile con otras realidades en América Latina y Europa.....	pág.353
4.10 Análisis comparativo de los monumentos declarados entre 1926 y 2008	pág.361
<b>5. Síntesis de Contenidos y Conclusiones.....</b>	pág.376
5.1 El patrimonio y su vinculación con los conceptos de identidad cultural, Estado y Nación.....	pág.377
5.2 La génesis y síntesis inicial de la sociedad chilena en la conquista y la colonia	pág.381
5.3 El patrimonio y los monumentos en la Independencia, formación de la	

República de Chile y construcción de una identidad nacional en el siglo XIX	pág.384
5.4. El patrimonio y los monumentos en la formación de una identidad cultural nacional más plural y diversa en el siglo XX y comienzos del siglo XXI.....	pág.390
<b>6. Bibliografía.....</b>	<b>pág.404</b>
<b>Anexo N° 1.....</b>	<b>pág.425</b>
<i>Real Cédula de S(u) M(ajestad) y Señores del Consejo, por la qual se aprueba y manda observar la Instrucción formada por la Real Academia de la Historia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos ó que se descubran en el Reyno (6 de julio de 1803)</i>	
<b>Anexo N° 2.....</b>	<b>pág.429</b>
Decreto Orgánico de Creación del Consejo Superior de Letras y Bellas Artes	
<i>Santiago, 31 de Mayo de 1909.</i>	
<b>Anexo N° 3.....</b>	<b>pág.434</b>
Ministerio De Instrucción Pública Mensaje presentado al H. Consejo de Estado sobre conservación de Monumentos Históricos	
<b>Anexo N° 4.....</b>	<b>pág.440</b>
Resolución de la Quinta Conferencia Panamericana de Santiago de Chile aprobada el 13 de abril de 1923 sobre Protección de los Documentos Arqueológicos.	
<b>Anexo N° 5.....</b>	<b>pág.442</b>
Documento incluido en el libro de Ricardo Donoso (1937): Recopilación de Leyes, Reglamentos y Decretos relativos a la Enseñanza Pública. Ministerio de Educación Pública. Talleres de Imprenta de la Dirección General de Prisiones, Santiago de Chile.	
<b>Anexo N° 6.....</b>	<b>pág.447</b>
Biblioteca del Congreso Nacional Decreto Ley N° 651 Sobre Monumentos Nacionales. Santiago, 17 de octubre de 1925.	
<b>Anexo N° 7.....</b>	<b>pág.454</b>
Ley N° 17.288 de 1970: Legisla sobre Monumentos Nacionales.	
<b>Anexo N° 8.....</b>	<b>pág.469</b>
Campos de la base de datos de monumentos nacionales de Chile 1926-2008.	

## **PRESENTACIÓN**

La identidad cultural, la memoria histórica y el patrimonio siempre han sido un tema central de toda sociedad en su proceso de formación, continuidad y cambio. Comprender la relación entre estos conceptos en realidades concretas siempre ha sido un desafío, más aún cuando los vinculamos a las ideas de nación y estado de los últimos siglos. Unos investigadores argumentan que la nación crea al estado y otros al revés. Otros explican que cada comunidad va construyendo, imaginando y creando tales conceptos en su devenir para mantener cierta cohesión y permanencia. Lo concreto es que los grupos humanos siempre han sido muy diferentes en su constitución y sujetos a profundos cambios, por cierto unos más que otros en diferentes etapas de su historia. En el contexto mundial el continente americano es muy interesante de analizar tanto en sus últimos siglos como en su futuro próximo. Esta investigación trata el caso de Chile y explora cómo comunidades diversas en su origen, mestizas a través de los siglos, construyen a través de sus élites una idea de nación y estado unitario, y cómo en su propio proceso histórico el patrimonio es utilizado para fundamentar tales propósitos.

Por cierto ha sido un trabajo dilatado en el tiempo que sin embargo ha ayudado a comprender mejor el objeto de estudio en el cual la experiencia de vida y profesional del suscrito han sido claves, quien desde inmigrante en su origen se integró en la sociedad chilena y fue ejerciendo diversos cargos en la administración del estado en el área patrimonial. Tal situación ofrece ciertas ventajas pero también riesgos de objetividad en el análisis. No es fácil ser actor y crítico de los propios procesos en los cuales uno participa. Pero tampoco uno puede restarse de analizarlos y entregar su propia visión, aunque algunos la consideren subjetiva. Al finalizar este trabajo enuncio ciertas conclusiones pero también incertidumbres porque el futuro siempre tiene ese carácter propio de la naturaleza humana.

No quiero concluir estas palabras sin reconocer el permanente apoyo de mi compañera de vida Angélica y de mis hijos Camila e Inti, como también de mis nietos Luciana y Bastián. Son mi familia en este país que quiero, mi identidad y patrimonio máspreciado. También debo agradecer a mi profesor Francisco Javier Rodríguez Barberán por su paciencia y dedicación en revisar los manuscritos y por sus sabios consejos. Mil gracias a todos los que ayudaron en este periplo tan largo y espero contribuir con mi trabajo a que el patrimonio es vital en la construcción de toda comunidad siempre y cuando reconozca y respete la diversidad como eje central del desarrollo de la humanidad en su conjunto.

Ángel Cabeza Monteiro



# **EL PATRIMONIO Y EL ESTADO EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE CHILE: DESARROLLO DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO Y SU APROPIACIÓN POR LA SOCIEDAD CHILENA ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XXI**

## **1. INTRODUCCIÓN**

El patrimonio natural y cultural de América tiene una particular significación a nivel mundial. Es el último continente en ser poblado por la Humanidad. Por miles de años estuvo alejado de las influencias del resto del mundo hasta que la conquista y colonización europea, iniciada hace cinco siglos, alteró radicalmente su entorno natural y cultural.

Tradicionalmente se divide el continente en dos grandes áreas culturales y económicas: Estados Unidos y Canadá por una parte, y América Latina y el Caribe por la otra. En realidad, tanto ayer como hoy, las fronteras de tales divisiones son difusas y en constantes procesos de transformación, donde las migraciones siguen igual de activas y los fundamentos culturales indígenas, coloniales y modernos están presentes y en permanente contradicción, junto a desarrollos desiguales, democracias en procesos de construcción y con el anhelo de millones de personas de crear un mundo más libre, justo y mejor para todos y todas.

En este contexto debemos destacar que el patrimonio cultural de América Latina y el Caribe está viviendo una etapa de extensión y profundización poco estudiada y analizada en su conjunto. Por cierto, la amenaza de deterioro y destrucción es mayor en la actualidad por los cambios radicales que ha implicado la vida moderna, el impacto de la globalización, la expansión económica y la concentración urbana, además de las intensas transformaciones productivas de los sectores rurales.

Sin embargo existe un despertar creciente de la conciencia e interés ciudadano por el patrimonio, el cual es percibido no solo como parte de la identidad y la memoria colectiva de cada comunidad, sino también como un medio para un mejor desarrollo y calidad de vida de toda la población. Este proceso ha sido lento pero progresivo. Algunos gobiernos de los estados latinoamericanos han promovido y acompañado estos cambios a través de su historia, otros han quedado rezagados.

La situación es diferente en cada país y los factores de estos procesos tienen distinta valoración o integración en cada caso. En unos, el descubrimiento de su propio patrimonio e identidad surge como un escudo para los efectos negativos de

la globalización; en otros permite un reencuentro, un diálogo entre las diversidades culturales y la posibilidad de construir nuevos referentes sociales.

Por otra parte, el patrimonio comienza a ser valorado como factor de desarrollo, no solo en el campo de las identidades, de la cultura y del turismo, sino también de la construcción, de la producción y el medioambiente. En tal sentido, nuevas áreas del patrimonio son exploradas superando las visiones tradicionales que destacaban solo las ciudades prehispánicas, coloniales y los monumentos aislados; por otra parte, recientes políticas públicas de construcción de viviendas sociales urbanas y rurales incorporan elementos, materiales y diseños patrimoniales en las nuevas construcciones; así también observamos como empresarios asocian los valores patrimoniales naturales y culturales locales a sus productos de exportación y, por último, vemos como en las políticas públicas ambientales se incluye el patrimonio como un valor que debe ser protegido, incorporándolo al desarrollo, evitándose o mitigándose los efectos adversos de los proyectos públicos y privados que lo impactan negativamente.

Estos procesos de reconocimiento y valoración del patrimonio llevan décadas y la diversidad de situaciones es grande entre los países y al interior de cada uno de ellos, pero también con algunos retrocesos debido a los conflictos políticos y problemas económicos.

La hipótesis principal que impulsa esta investigación es demostrar que el desarrollo del concepto de patrimonio en Chile ha sido impulsado y controlado desde el Estado y desde las elites que han administrado su poder, siendo esta última relación uno de los factores fundamentales en la formación de la nación chilena y de su identidad cultural oficial, la cual sólo en las últimas décadas se abre a reconocer su propia diversidad debido a los procesos de democratización y globalización. En el desarrollo de esta investigación veremos que tan certera es esta aseveración o si llegamos a una conclusión distinta.



Volcanes altiplano, Parinacota, Norte de Chile  
Fotos A. Cabeza



Fiordos del Sur de Chile, sector de Tortel

El territorio actual de Chile es de una gran diversidad geográfica, histórica y cultural. Sus primeros habitantes llegan hace por lo menos 14.000 años y desde entonces se formaron distintas identidades culturales, siendo las primeras de ellas las comunidades de cazadores y recolectores hasta los pueblos agricultores que formaron parte del Imperio Inca. El siglo XVI marca una ruptura profunda de este proceso debido a la conquista hispana, la cual implica la desaparición de varias culturas nativas y el mestizaje durante el período colonial y republicano hasta la actualidad con las recientes migraciones.

La emancipación de la corona española a comienzos del siglo XIX lleva a los hacendados patriotas al poder y a la formación de un estado republicano inspirado en los ideales de la revolución francesa y la ilustración, con el respaldo de las potencias internacionales interesadas en la apertura del comercio y en el declive del poder colonial de España.

El Estado republicano controlado por la aristocracia criolla se encontró con una sociedad mestiza en formación, con extensos territorios todavía en poder de pueblos indígenas, identidades culturales regionales no integradas a un ideal de nación y con asentamientos rurales muy dispersos, secularmente fragmentados y con fronteras políticas difusas con las otras repúblicas americanas que nacieron en la Independencia.

En este contexto historiadores chilenos como Mario Góngora (1981) y más recientes como Luis Mizón (2001) han llevado a concluir que el Estado republicano fue el principal formador de la nación chilena y de su identidad cultural. Esta investigación pretende analizar cuál ha sido el rol del patrimonio en este proceso, cómo el Estado controlado por la élite económica e intelectual, tanto conservadora como liberal, impuso su ideal de país durante el siglo XIX, estableciendo símbolos de identidad unitaria, pretendiendo anular la diversidad cultural existente y educando a la población con un sentido nacionalista integrador fiel al Estado.



Oficina Salitrera de Humberstone, Iquique  
Fotos A. Cabeza



Santiago de Chile

De igual manera se busca analizar el desarrollo de las instituciones fundacionales del patrimonio y de la legislación que sientan las bases de la selección de los bienes culturales que serían meritorios de ser reconocidos como símbolos de la nacionalidad emergente y que deberían ser conservados para la posteridad.

Así mismo se quiere comprender las contradicciones existentes en este proceso, tanto en su etapa formativa del siglo XIX, como en su consolidación en el siglo XX y su decadencia a finales de dicho siglo, para despertar con nuevos bríos a comienzos del siglo XXI con un sello más amplio, participativo, popular y crítico de las decisiones de la autoridad estatal y vinculado a los conflictos económicos y políticos. Cuáles han sido los actores y factores de estos procesos, cuáles son las tendencias actuales que nos permiten avizorar el futuro del patrimonio y su rol en la sociedad actual, son también parte de este desafío intelectual.

Resolver estas preguntas y muchas más nos llevará a comprender mejor qué funciones sociales ha tenido el patrimonio en Chile, desde su concepción tradicional de monumentos a las más amplia de espacios protegidos que incluyen tanto el patrimonio natural como el cultural. El análisis comparativo nos permitirá descubrir procesos similares o divergentes tanto en América como en otros continentes.



Ceremonia del nguillatún de mapuches-pehuenches de Lonquimay, Araucanía.  
Foto A. Cabeza



El estudio histórico de las diversas fuentes documentales y las entrevistas a los actores institucionales nos revelarán datos y visiones no registradas y analizadas sistemáticamente hasta ahora, como por ejemplo la revisión de las actas oficiales del Consejo de Monumentos Nacionales durante los últimos 90 años, o realizar análisis de qué tipo de bienes se protegían legalmente, cuáles se rechazaban y por qué, cuáles recibieron recursos fiscales o privados para su conservación, etc.

Por otra parte la revisión crítica de la legislación y las discusiones parlamentarias para su actualización, además de los análisis de los medios de comunicación, tanto de ayer como de hoy, nos permitirán tener una visión y comprensión de estos procesos, y de cuáles son las tensiones entre conservación y desarrollo en la actualidad. Por otra parte el estudio de la iconografía y de otras fuentes no tradicionales, como las manifestadas por las poblaciones indígenas o la memoria reciente de los grupos de inmigrantes, ofrecerá nuevas formas de validar o modificar en el proceso de investigación nuestras hipótesis de trabajo. Especial preocupación tendremos de estudiar los silencios y lagunas de la historia del patrimonio en Chile, por qué las autoridades, con la anuencia de los grupos de poder, privilegiaron determinados bienes en desmedro de otros, cómo se han tratado desde el punto patrimonial los hechos dramáticos que recientemente ha vivido nuestra sociedad en las últimas cuatro décadas, cómo algunos hechos y procesos de gran relevancia e impacto tienden a ser olvidados y transformados en la memoria colectiva.

Finalmente, creemos que esta investigación permitirá analizar la información existente sobre monumentos y patrimonio en Chile, cuyo estudio crítico es incipiente. También este esfuerzo será una oportunidad para plantear los desafíos que tiene el patrimonio hoy para alcanzar una sociedad más armónica entre su pasado, su devenir y su entorno natural y cultural.



Fiesta roto chileno Yungay



Mapuche-Pehuenche



Inmigrantes asturianos. Fotos A. Cabeza

## **2. MARCO TEÓRICO, MÉTODO E HIPÓTESIS DE TRABAJO**

### **2.1 La Cultura y la Identidad Cultural como marcos conceptuales del Patrimonio**

Para comprender las diversas nociones de patrimonio en las sociedades actuales y las actuales tendencias en su definición es necesario tener como referentes los enfoques teóricos mediante los cuales se han explicado los conceptos de cultura e identidad. La construcción moderna de ambas ideas tiene procesos semejantes con etapas de énfasis diferentes durante los siglos XVIII, XIX, XX y recientemente, quedando envueltas las dos en las discusiones postmodernistas actuales, donde sus significados son cada vez más apropiados por la sociedad en su conjunto, quitándoles sus acepciones elitistas y académicas tradicionales.

#### **La Cultura**

El concepto de cultura ha sido tratado extensamente en Occidente, primero desde la filosofía y después desde la antropología, la sociología, la psicología, la arqueología y la historia, aunque es la antropología la que sitúa el concepto como su eje y fundamento de su campo de estudio. En cambio, respecto del concepto de patrimonio, no deja de sorprender que solo en las últimas décadas sea objeto de un estudio teórico y práctico para estas disciplinas, salvo para aquellos que desde la arquitectura o el arte se han dedicado a la conservación o restauración de los bienes heredados del pasado. Estos pioneros incursionaron desde el Renacimiento en la construcción del concepto, aunque no pocas veces en sentidos contradictorios, donde por una parte los bienes materiales e ideas del pasado eran estudiados, coleccionados, conservados y objeto de admiración y, por otra, eran considerados como un peso negativo para la innovación, la creación y el cambio.

En América Latina esta discusión teórica es aún más reciente (Ferreira, M. et al 2007; Cabeza, A. 1997), salvo en países como México y Perú, los cuales tienen antecedentes previos en atención a movimientos intelectuales y políticos de comienzos del siglo XX que valoraban su pasado, sus diversidades étnicas y buscaban insertarlas en sus proyectos nacionales. Algunas de estas ideas influyeron en otros países y procesos sociales de la región, aunque para ser más precisos, tales ideas, bajo otros términos, fueron objeto de discusión y proyectos políticos desde la independencia de los países americanos, cuyo ideario se encontraba en la Ilustración y en las consecuencias políticas de la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica y en la Revolución Francesa.

La definición académica de cultura es de la segunda mitad del siglo XIX y surge de la necesidad de comprender la variabilidad de los seres humanos que se agrupan

en ciertas entidades sociales que compartían históricamente características que las diferenciaban de otras. El primero en definir el concepto fue Edward B. Tylor en 1871, quien escribió que cultura:

*"... es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad."*  
(Tylor, E.B. 1975:29)

Por cierto, los antecedentes de tal concepto, para explicar la forma de ser de un pueblo o de una comunidad, las encontramos en el filósofo John Locke en el siglo XVII y después en el economista Anne Robert Turgot en el siglo XVIII. No obstante su definición en el siglo XIX, dentro del enfoque teórico evolucionista, logra su pleno desarrollo inicial en la antropología con Tylor, para después construir nociones cada vez más complejas con los aportes de la sociología, la historia y la psicología.

Paralelamente, el concepto de cultura adquirió desde sus comienzos una acepción más popular ligada al dominio de ciertos conocimientos y asociada a las creaciones artísticas en sus diferentes expresiones, vinculadas preferentemente a la élite de cada sociedad, nexo que actualmente está cambiando, incorporándose además los saberes, costumbres y bienes producidos por todo grupo humano que vive en una comunidad. Desde el punto de vista académico, el concepto de cultura ha sido entendido de maneras distintas, enfatizando algunas corrientes los aspectos materiales, históricos, normativos, cognitivos o estructurales.

Para Tylor la cultura era todo lo creado por el ser humano, su forma de comportarse, de vivir en comunidad, sus creencias, sus ideas, destacando el hecho de que la cultura se aprende, se hereda socialmente y que progresa con la acumulación de conocimientos. Teniendo como antecedente las revolucionarias ideas de Charles Darwin, los antropólogos, historiadores y arqueólogos de la segunda mitad del siglo XIX propusieron con mejores argumentos sus ideas del desarrollo progresivo de la humanidad que ya habían sido planteadas con anterioridad. El enfoque teórico evolucionista fue muy discutido en sus orígenes al enfrentarse con las creencias religiosas que todavía imperaban en muchos científicos y en la sociedad en general. No obstante ello, los nuevos enfoques fueron poco a poco aceptados, adscribiendo algunos estudiosos la idea de una evolución unilineal, con un solo foco de origen, desde donde se difundieron y expandieron los conocimientos y descubrimientos que permitieron el avance de la humanidad, y otros, que plantearon un evolucionismo múltiple y diferentes focos de origen. En todos ellos estaba firme la idea del progreso desde sociedades primitivas a civilizadas, cuestión que algunos llevaron a una doctrina de superioridad cultural, e incluso racial, de algunos grupos humanos por sobre otros.

Gracias a la investigación en terreno y el estudio comparado de diversas culturas, este enfoque comienza a ser discutido a finales del siglo XIX y comienzos del XX por varios especialistas, entre ellos el antropólogo Franz Boas, quien propone que la cultura es:

*“...la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva o individualmente en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo, que también incluye los productos de esas actividades y su función en la vida de los grupos.” (Boas, F.1964:166)*

En este enfoque, conocido después por sus seguidores como particularismo histórico, se enfatiza las relaciones de los individuos o grupos entre sí, con su entorno natural y con su propia historia. Esta corriente de pensamiento negaba la posibilidad de formular leyes que explicaran la evolución general de las sociedades, oponiéndose al determinismo cultural o biológico, ya que enfatizaba la capacidad que tienen los seres humanos de crear cosas distintas con los mismos elementos en ambientes similares, reconociendo así la diversidad y los aspectos psicológicos de los individuos que permiten múltiples desarrollos.

Algunos discípulos de Boas se entregaron al estudio particular de cada cultura, enfatizando los aspectos de la personalidad de los grupos humanos, apoyándose para ello en los avances que estaba teniendo la psicología. Uno de los principales exponentes de esta escuela teórica, centrada en las relaciones entre cultura y personalidad, fue el antropólogo Ralph Linton (1945), quien definió cultura como conductas aprendidas que los miembros de una sociedad comparten y transmiten. Para este antropólogo la cultura posee tres aspectos: material, cinético y síquico. En el primero se encuentran los productos de la actividad humana, en el segundo la conducta humana y en el tercero los conocimientos, las actitudes y los valores.

Otra antropóloga que siguió este enfoque en tales años fue Ruth Benedict (1971), para quien cada cultura estaba moldeada con un modelo único e integrado de personalidad, organizado a través de su forma de comportarse, el cual era aprendido al interior de cada grupo social, siendo la personalidad de los individuos definidos por su cultura.

En forma paralela, la antropología social británica en la década de los 30 y 40 del siglo XX adoptó el enfoque funcionalista de Bronislaw Malinowsky (1981), un antropólogo de origen polaco, quien con un profundo conocimiento empírico de las sociedades de melanesia, destacó la relación entre las necesidades básicas de los seres humanos y el aspecto instrumental y funcional de la cultura, dando un renovado impulso al materialismo. Sin embargo, en la misma época, el



antropólogo A. Radcliffe-Brown (1972) enfatizó en la definición de cultura el rol de las estructuras sociales.

Al mismo tiempo, algunos historiadores y arqueólogos, como por ejemplo Gordon Childe (1996), suscribieron variantes del materialismo histórico elaborando el concepto de cultura arqueológica, el cual estaba definido no por la observación directa de los individuos, sino por los vestigios materiales que quedaron de su existencia.

Por su parte otros arqueólogos como por ejemplo Julian Steward (1955), desarrollaron el enfoque teórico y metodológico de la ecología cultural, dando a la cultura un enfoque más ambiental y territorial, mientras que otros investigadores avanzaron en la línea del materialismo cultural, rescatando y renovando las ideas del evolucionismo, como por ejemplo el antropólogo Leslie White (1975), quien distinguió tres aspectos de la cultura: lo tecnológico, lo sociológico y lo ideológico, señalando que el factor tecnológico, el factor simbólico y la capacidad de controlar y aprovechar la energía era determinante en la evolución de la cultura.

Varios antropólogos de mediados del siglo XX profundizaron la concepción del carácter eminentemente simbólico de la cultura. El antropólogo Clifford Geertz (1973) planteó que la cultura es un sistema de símbolos en continua interacción y que las mediaciones simbólicas son las que ordenan en la práctica un medio cultural determinado.

Mientras tanto, la antropología francesa, heredera de las corrientes de pensamiento de Emile Durkheim y Marcel Mauss, logró a través del antropólogo Claude Lévi-Strauss (1969) dar un gran salto teórico a mediados del siglo XX en el análisis de la cultura mediante el enfoque estructuralista, basado principalmente en la teoría lingüística, que explicaba cada cultura en relación a la existencia de estructuras inconscientes, que condicionaban el comportamiento y organizaban la sociedad.

A lo largo del siglo XX los académicos de las ciencias sociales se han preocupado de comprender la cultura en sus aspectos materiales, sociales, psicológicos e ideológicos, de analizar sus características, sus estructuras conscientes e inconscientes, sus procesos de cambio, sus formas de construir mundos de significados diversos para cada grupo humano. Los enfoques teóricos han privilegiado unos aspectos por sobre otros, pero todos han contribuido a explicar cada vez mejor el concepto de cultura como un sistema de organización social y de símbolos que dan cierta coherencia a cada sociedad humana, que situada en contextos ambientales e históricos, va construyendo e integrando sus propios aportes y los de otros.

No obstante lo anterior, tal como hemos aseverado antes, solo vemos tangencialmente una preocupación de estas corrientes antropológicas en tratar el tema del patrimonio en relación a la cultura y su función y significado en las sociedades actuales, aunque esto está cambiando en los últimos años de una manera cada vez más recurrente. Por tanto, sigue siendo desde la sociología, la historia y también desde la arquitectura y las ciencias naturales preocupadas de la conservación, donde encontramos mayores avances conceptuales (Álvarez, J. 1992; Ballart, J. et al 2001; Canclini, N. 1992).

La UNESCO, desde sus inicios, ha contribuido a la conceptualización moderna y difusión del concepto de cultura, tratando de que éste no quede radicado sólo en la noción general de su asociación con determinados conocimientos y actividades, generalmente vinculadas a la cultura de las élites de cada país. Con ocasión de la “*Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales*”, realizada en ciudad de México en 1982, la UNESCO no sólo definió el concepto, sino que le dio un sentido político al establecer lo que cultura es y hace en las sociedades humanas. En tal conferencia internacional se definió cultura como:

*“Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden”.* (Declaración de México sobre Políticas Culturales UNESCO, 1982)

Sin embargo, en los últimos años varios investigadores de la cultura han utilizado en sus análisis una aproximación teórica y metodológica, elaborada de manera complementaria a lo largo del siglo XX, que algunos han denominado constructivistas sociales, estructurales o históricos, cuyos exponentes más leídos han sido Lev Vygotsky, Robin Collingwood, Norbert Elías, Anthony Giddens, Peter Berger, Thomas Luckman, Aaron Cicourel y más recientemente Pierre Bourdieu (Giménez, G. 2011). En Chile, Jorge Larraín (2001), siguiendo en parte a estos autores, ha explicado que la cultura es la estructura general de significados incorporados en contextos precisos, la cual se va construyendo, rechazando visiones tradicionales, sostenidas por varios historiadores nacionales que sostienen enfoques esencialistas.

Los constructivistas no constituyen una corriente homogénea desde el punto de vista teórico, sino más bien proponen una serie de problemas donde convergen una diversidad de tradiciones intelectuales que buscan superar las explicaciones que sobrevaloran lo colectivo a expensas de lo individual, y las posturas individualistas que sobrevaloran al individuo a expensas de lo colectivo y estructural. Estos autores pretenden comprender las realidades sociales como construcciones históricas tanto individuales como colectivas, las cuales muchas veces escapan al control de sus mismos actores.

En este contexto Gilberto Giménez (2011) explica la importancia de la historicidad para los constructivistas, en función de tres aspectos: 1) lo social se construye a partir del pasado; 2) las formas sociales pasadas son reproducidas, apropiadas y transformadas en la vida diaria de los actores; y 3) la acción cotidiana sobre la herencia del pasado permite un campo de posibilidades en el futuro.

Pierre Bourdieu (1971) analiza la cultura desde una perspectiva donde las clases sociales se diferencian por su relación con la producción de los bienes materiales e inmateriales y de su apropiación por parte de éstas, pero también por el aspecto simbólico de su consumo, procesos mediante los cuales las clases hegemónicas se reproducen en el campo económico, pero se legitiman en el campo cultural. Especialmente importante para este trabajo serán las propuestas de este autor en relación a los aspectos intelectuales como campos de poder en nuestras sociedades.

Respecto de los diferentes marcos teóricos y su utilidad para comprender el concepto de cultura Pierre Bourdieu nos señala que:

*“Para salir de uno u otro de estos círculos mágicos sin caer simplemente en otro diferente y sin condenarse a saltar indefinidamente de uno a otro, en resumen, para procurarse los medios que permitan integrar en un sistema coherente, sin ceder a la compilación escolar o a la amalgama ecléctica, los aportes de las teorías parciales y mutuamente exclusivas (aportes tan insuperables, en el estado actual, como las antinomias que los oponen), hay que pugnar por situarse en el lugar geométrico de las diferentes perspectivas, es decir, en el punto desde donde se puede percibir a la vez lo que puede y lo que no puede ser percibido a partir de cada uno de los puntos de vista”. (Bourdieu, P. 1971:295)*

Concluyendo al respecto, debemos entender la cultura en toda su complejidad material, social e ideológica, como una entidad creada por los seres humanos, modificada permanentemente, de manera consciente e inconsciente, por un grupo humano condicionado, pero no determinado para ello, por su historia y visiones de mundo. Tal grupo humano recibe distintas influencias, construye sus propios instrumentos, adopta otros, incorpora nuevos grupos humanos con sus ideas,

bienes e historia, persiste en lo propio o cambia, creando nuevas entidades. Los conocimientos, creencias, bienes materiales, construcciones y la forma de relacionarse con el entorno, constituyen herencias colectivas que conforman su patrimonio, el cual es seleccionado, codificado o destruido en función de sus propios proyectos comunitarios o colectivos.

## **La Identidad Cultural**

La identidad, como expresión de pertenencia de un individuo o grupo a una determinada cultura o comunidad, cobró especial importancia en las ciencias sociales a partir de la segunda mitad del siglo XX, aunque ya a principios de dicho siglo el concepto es objeto de preocupación especial de la psicología. Sin embargo, es en los ochenta, cuando el concepto se pone de moda en distintas disciplinas, coincidiendo con la disolución de varios estados nacionales, la creación de nuevos estados, la demanda de autonomía cultural y política de varios pueblos y con el desarrollo del pensamiento postmodernista, el cual rechazaba los discursos totalitarios y esencialistas que la modernidad había construido al plantear ésta su fe máxima en el progreso, la tecnología, la ciencia, la razón y el cambio de las estructuras sociales tradicionales y del poder.

Interesa aclarar esta disposición reciente de muchos intelectuales respecto del postmodernismo, debido que tales ideas nos permitirán explicar mejor después como el patrimonio ha sido y es un concepto importante, tanto en el modernismo como en el postmodernismo, siendo incluso, por contradictorio que parezca, un concepto utilizado por ambos. El postmodernismo, tal como señala Hal Foster (2006: 16-17) se expresa como una crisis de representación de Occidente, de su poder, de sus afirmaciones universales. Es una crítica a las ficciones de la modernidad; un deseo de pensar desde la diferencia, de reflexionar sin jerarquías, de negar los supuestos campos autónomos del saber y de los expertos; una aspiración de comprender las relaciones actuales entre política y cultura, de permitir que los discursos plurales se expresen.

Tal vez la mejor manera de definir el postmodernismo es como un conflicto entre formas culturales y económicas nuevas y antiguas, es una ruptura con el modernismo, de su ideario de superioridad moral y de progreso infinito de la ciencia, planteando un modo nuevo de ser en el espacio y en el tiempo. Pero tal corriente de pensamiento tiene anclajes o postulados diferentes. Hay un postmodernismo de resistencia y otro de reacción. El primero trata de cambiar el objeto y su contexto social, en cierta manera de recobrar, en un espacio nuevo, las ideas primigenias del modernismo, que fueron tergiversadas con el tiempo. El segundo repudia el modernismo, busca cambiar el orden actual invocando el neoconservadurismo, siendo utilizado por algunos neoliberales como su filosofía y fundamento ideológico al privilegiar la indeterminación, la fragmentación, la

diferencia, lo heterogéneo y la desconfianza en las verdades absolutas (Foster, H. 2006:11; Larraín, J.1996: 244, 250).

El concepto de identidad cultural o social tiene un lugar central y común como objeto de estudio de la psicología, la sociología, la antropología y la historia. El concepto es definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en lo que nos compete, como “*conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás*” o como la “*conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás*”. Vemos aquí los aspectos centrales del concepto, que de acuerdo a los marcos teóricos de cada disciplina, adquieren connotaciones diversas respecto de sus características, de cómo constituye, de cómo cambia, de las relaciones entre la identidad individual y la colectiva, de las relaciones entre identidades de diferentes comunidades y grupos humanos.

La idea de que la identidad de los individuos se definía en función de los otros, en un proceso de relaciones sincrónicas y diacrónicas, ganó fuerza desde finales del siglo XIX. Por ejemplo el psicólogo William James, en su obra *Principios de la Psicología*, publicada en Londres en 1890, la cual influenció a más de una generación de especialistas, postulaba que la identidad de los individuos no era algo dado sino construido en base a tres aspectos: lo material, lo social y lo espiritual (Larraín, J. 1996:99). Posteriormente Sigmund Freud (2011) logró un gran aporte al concepto planteando que la identidad de los individuos era formada también por fuerzas de las cuales no era consciente. Después los estructuralistas fueron más lejos, argumentando que la identidad de los individuos era construida fundamentalmente por estructuras externas, invocando la frase de Claude Lévi-Strauss: “... es vano acudir a la conciencia histórica para el más verdadero de los significados...” (Larraín, J. 1996:104).

Sin embargo, la visión más común entre los especialistas de las ciencias sociales, tiende a los enfoques constructivistas o historicistas al definir la identidad, donde los actores colectivos, mediante su experiencia, intereses o representaciones compartidas, constituyen sistemas de referencia y de sentido, que los hacen reconocerse como integrantes de una comunidad, que es diferente a otras comunidades próximas o distantes (Pinto, J. et al, 2003: 279).

Jorge Larraín da cuenta tres tipos de concepciones teóricas sobre la identidad al estudiar América Latina: (1) el constructivismo, en el cual ciertos discursos construyen la nación y los sujetos nacionales; (2) el esencialismo, que define la identidad como un hecho acabado y estable de experiencias comunes y de valores compartidos constituidos en el pasado desde el poder y (3) la histórica-estructural, que busca alcanzar un equilibrio entre el constructivismo y esencialismo, indicando que la identidad está en permanente construcción dentro de determinados contextos históricos, y que no considera solamente los discursos

públicos, sino también los privados de cada individuo, existiendo una dinámica de interacción entre ellos (Larraín, J. 2001:15-16).

El sicólogo Pierre Tap, citado por Jorge Pinto et al (2003), resalta el sentido relacional del concepto de identidad, en tensión permanente entre lo propio y lo ajeno, señalando que las identidades son:

*“...sistemas dinámicos de sentimientos axiológicos y de representaciones mediante las cuales el actor social, individual o colectivo, orienta sus conductas, organiza sus proyectos, construye su historia, busca resolver las contradicciones y superar los conflictos, en función de determinaciones diversas ligadas a sus condiciones de vida, a las relaciones de poder en las que se encuentra implicado, en relaciones constantes con otros actores sociales sin los cuales no puede ni definirse ni reconocerse.” (Tap, P. 1986:11-12)*

La mayor parte de los autores que han trabajado el concepto de identidad destacan que la formación de identidades supone la noción del otro, la relación de oposición, de diferencia. Por ejemplo Jorge Larraín (1996) señala que la identidad de uno siempre implica distinguirse de los valores, visiones y modos de vidas de otros; que en cualquier construcción de una identidad las comparaciones son fundamentales; que el mecanismo de oposición, de nosotros versus otros, es crucial. Para este autor, el otro, puede definirse en tres dimensiones: (1) la dimensión temporal por la cual nos diferenciamos de otros en el pasado; (2) la dimensión social actual, en la cual los otros que no son como yo, que no comparten mis códigos, mis valores básicos, aunque pertenezcan a la misma sociedad, mencionando como ejemplo nuestra división en clases sociales; y (3) la dimensión espacial, que son aquellos que viven afuera de mi sociedad (Larraín, J. 1996:91-92).

El sociólogo chileno José Bengoa (2004) señala que hay tres niveles para comprender la identidad: primero, un texto profundo, que se expresa en lo cotidiano, en el lenguaje, en las formas básicas; segundo, un discurso de identidad que constituye un texto ritualizado de lo que se ha sido, un discurso mítico sobre la comunidad; y tercero, un meta-discurso, un texto elaborado de mayor conciencia que reúne distintas memorias, un discurso construido para los demás que implica diversos actos de representación.

En este mismo sentido, Jorge Larraín plantea que la identidad es un proceso social en permanente construcción que tiene al menos tres elementos constitutivos: (1) los individuos que se definen a sí mismos por ciertas categorías sociales compartidas, tales como religión, género, clase, etnia, profesión, nacionalidad, las cuales son determinadas culturalmente; (2) el elemento material, que incluye el cuerpo y otras posesiones materiales que entregan al sujeto rasgos

de reconocimiento y que los considera de su propiedad, proyectándose en ellos; (3) la existencias de otros, tanto aquellos con los cuales nos identificamos, como con quienes nos sentimos diferentes (Larraín, J. 2001: 27-28).

Por su parte, el sociólogo Manuel Castells (1999), define la identidad como un proceso de construcción de sentidos respecto de ciertos atributos culturales, a los cuales se les da mayor importancia que a otros. En cambio el filósofo Charles Taylor (1989), define la identidad como los compromisos e identificaciones que dan un horizonte, dentro del cual los individuos intentan determinar lo que se debe hacer, aprobar o rechazar, y el marco de acción dentro del cual se puede adoptar una postura. Al respecto la antropóloga chilena María Ignacia Ibarra, al entrevistar el intelectual mapuche Rosamel Millamán, señalaba otro aspecto importante de la identidad, indicando que ésta “...no es solamente una cosa que se asume en las relaciones humanas, sino también en la relación que establece el ser humano con su ambiente...” (Ibarra, M. 2008: 18).

Para el historiador y sociólogo chileno Hernán Cuevas (Gissi, J. et al 1995) la cultura es una herencia o patrimonio de toda sociedad cuyo legado puede ser mantenido, interpretado o puesto en cuestión por ella, existiendo una dualidad de pertenencia y de distancia crítica, construyendo los individuos mapas mentales en base a procesos conscientes e inconscientes, tanto personales como comunitarios, del pasado y del presente, que son el producto de una manera comunitaria de negociar significados y de construir su realidad. En este contexto el núcleo de cada cultura es su identidad, la cual no es fruto de una relación solamente reflexiva al interior de los miembros de una comunidad sino también de su relación con otras. Al respecto el profesor Hernán Cuevas nos señala:

*“La identidad supone un sentimiento de pertenencia que subyace al autorreconocimiento del grupo y expresa la valorización de los elementos que conforman la propia cultura: hábitos, costumbres, creencias, folclor, artefactos, técnicas, organizaciones e instituciones, conocimientos, conceptos e ideas. Pero, por otra parte, la identidad implica la contrastación con lo ajeno, con lo foráneo, con lo extraño, con lo diferente, y desde ese punto de vista es un sentimiento y una percepción de autorreconocimiento frente a lo otro. Por tanto, la identidad es un modo de ser que nace no sólo de la pertenencia común, sino también de la diferencia.” (Gissi, J. et al 1999: 12)*

Concluyendo al respecto, de acuerdo a Jorge Larraín, la identidad se refiere a un conjunto de cualidades, con las cuales un grupo de personas se sienten conectadas de manera íntima. Estas cualidades son subjetivas, cambian con el tiempo, y el medio social tiene una gran importancia en ello. Siguiendo a este autor, identidad es permanencia, cohesión y reconocimiento, como también continuidad, unidad y autoconciencia, en la que toda identidad personal está

basada en contextos colectivos culturalmente definidos. Según este autor, lo que más influye en la identidad cultural y social de los individuos, es la identidad de clase y la identidad nacional. En su opinión la identidad colectiva no es solo una herencia inmutable, recibida desde el pasado, sino también un proyecto de futuro, la cual va cambiando y construyéndose, creando al mismo tiempo visiones plurales de ella misma, la cual se va transformando internamente en base a la propia experiencia social de cada grupo, pero también en base a la oposición con otros, existiendo discursos tanto hegemónicos como contestatarios de ella (Larraín J. 1996:114; Larraín, J. 2001: 10-23).

En tal contexto, como veremos después, la identidad tiene en la memoria un componente básico en su construcción, más bien en las memorias que cada grupo humano privilegia, o en las que unos logran imponer sobre otros, siendo el patrimonio un aspecto esencial de ella. En este sentido debemos reconocer el aporte del pensamiento postmodernista al concepto de identidad, al resaltar la pluralidad de los discursos, pero teniendo presente que estos discursos son contruidos, que son recordados intencionalmente, pero también olvidados y reemplazados por otros.

Respecto de la memoria y el olvido, el antropólogo Marc Augé (1998), plantea que vivimos de manera simultánea varios relatos. Algunos de ellos son más íntimos que otros. Estos relatos son fundamentales en la construcción de la memoria de una sociedad, los cuales se modifican, se alteran, se olvidan. Sobre el particular, Augé menciona tres características de la memoria y del olvido que serán importantes cuando analicemos la construcción del concepto de patrimonio, las que entiende como dispositivos destinados a pensar y administrar el tiempo: (1) El retorno, cuya principal pretensión es recuperar el pasado perdido, olvidando el presente y que busca establecer una continuidad con el pasado más antiguo; (2) El suspenso, que busca recuperar el presente separándolo del pasado y del futuro, olvidando este último, en cuanto a que se identifica con el retorno al pasado; y (3) El comienzo o re-comienzo, como una inauguración radical, el cual es un nuevo principio que olvida el pasado (Augé, M. 1998:47,65-67).

Por otro lado, el concepto de identidad asociado a la cultura de un pueblo o comunidad, ha sido incorporado al ideario de acciones de política pública internacional desarrollado por la UNESCO desde hace décadas, lo cual se ha expresado a través de declaraciones, recomendaciones y, finalmente, en las convenciones sobre protección del patrimonio en caso de conflicto armado, tráfico ilícito de bienes culturales, patrimonio mundial, patrimonio inmaterial y, más recientemente, de diversidad cultural.

En la Conferencia Mundial de UNESCO sobre Políticas Culturales realizada en México, en 1982, se acordó la llamada *Declaración de México*, en la cual se le dio al concepto identidad cultural un sentido no solo funcional sino ético, al señalar:



(1) que cada cultura representa un conjunto de valores único e irremplazable; (2) que la identidad cultural contribuye a la liberación de los pueblos y, que cualquier forma de dominación, la niega o deteriora; (3) que la identidad cultural potencia las posibilidades de realización de cada pueblo para nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos compatibles con su idiosincrasia; (4) que todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad; (5) que la identidad cultural de un pueblo se enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los demás; (6) que la cultura es diálogo, intercambio de ideas, apreciación de otros valores y tradiciones y que se agota y muere en el aislamiento; (7) que identidad cultural y diversidad cultural son indisolubles; (8) que las diferencias culturales no obstaculizan, sino que favorecen, la comunión en los valores universales que unen a los pueblos; (9) que la comunidad internacional considera su deber velar por la preservación y la defensa de la identidad cultural de cada pueblo, por estimular políticas que protejan, estimulen y enriquezcan su identidad y patrimonio cultural favoreciendo el más absoluto respeto por todas las culturas del mundo; y (9) en reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas, así como el derecho de cada pueblo y de cada comunidad cultural, a afirmar y preservar su identidad cultural y a exigir su respeto.

Por cierto, este manifiesto político internacional sobre la identidad cultural, debe comprenderse dentro del esquema de los derechos humanos establecidos como carta fundamental de las Naciones Unidas en 1948. Desde entonces y hasta el presente, la comprensión y práctica de algunos de estos derechos, han estado en contradicción, velando la comunidad internacional porque todos los Estados los suscriban y dirimiendo, a través de convenciones y leyes internacionales, aquellos aspectos, que siendo prácticas culturales aceptadas, sea por la religión o por costumbres ancestrales, son contrarias a los valores y principios éticos que la Carta Internacional de los Derechos Humanos impone a todos los Estados.

## **2.2 Los Conceptos de Estado y Nación**

Los conceptos de Estado y Nación aparecen muy relacionados en el siglo XIX y XX, a tal punto de ser confundidos o entendidos como uno solo. Por otro lado, generalmente se cree que el concepto de “*Nación*” es tan antiguo como el de “*Estado*” o incluso anterior, remitiéndose al sentido de unidad cultural o identidad cultural de las comunidades que lograban alcanzar ciertos niveles de organización social y autonomía. Otros, como Eric Hobsbawm (2004), sostienen que el concepto de nación es más reciente. Sin embargo ambas ideas, han estado presente, bajo diferentes nombres, en distintas sociedades, de la antigüedad.

El concepto de “*Estado*” es definido por el Diccionario de la Academia Real de la Lengua Española, en la connotación que nos importa, como *el “Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano.”* Tal concepto ya es usado en la

Antigua Grecia, siendo mencionado en los *Diálogos de Platón* (2003), en donde se plantea la estructura del “Estado ideal” en relación a la “República”, pero es Nicolás Maquiavelo, durante el Renacimiento, quien da fama a la palabra “Estado” en su célebre obra *El Príncipe*, usando el término de la lengua italiana “Stato”, que evolucionó de la palabra “Status” del latín, escribiendo que los “Estados” que han tenido o tienen autoridad sobre la gente fueron o son repúblicas o principados (Maquiavelo, N. 1534).

Por su parte, Max Weber, en 1919, define el Estado moderno como una:

*“...asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas.” (Weber, M. 1979:5)*

Esta definición de Estado se adapta a diversas formas de gobierno de sociedades del pasado o el presente, que alcanzaron cierta complejidad, de acuerdo a su tipo de economía, cantidad de personas, territorio y una cierta forma de administración del poder político, militar y de la justicia. De acuerdo al historiador Eric Hobsbawm, el Estado moderno:

*“...gobernaba a un pueblo definido territorialmente y lo hacía en calidad de suprema agencia nacional de gobierno sobre su territorio, y sus agentes llegaban cada vez más hasta el más humilde de los habitantes de sus pueblos más pequeños”. (Hobsbawm, E, 2004:89)*

Lo anterior implicaba que el poder del Estado debía imponer entre sus habitantes, fueran súbditos o ciudadanos, cierta lealtad e identificación. Ambas se facilitaban al existir una comunidad o comunidades que reconocían una unidad de origen, o una historia común de relaciones sociales y de parentesco, o una administración territorial o una identidad cultural reconocida como propia.

Los primeros Estados modernos, estaban gobernados por dinastías, la cuales tenían la administración de territorios no necesariamente contiguos, con pueblos que hablaban diferentes lenguas y que incluso podían tener distintas religiones, que poseían una unidad principalmente política y el poder estaba representado generalmente a través del príncipe, rey o del emperador, quienes fueron construyendo mecanismos de poder sobre los habitantes del territorio que gobernaban. Para lograr este control total sometieron primero a los señores feudales que constituían la aristocracia local, después establecieron estructuras de impuestos sobre la producción, los bienes, el comercio, ejerciendo además el

control único de la fuerza militar, imponiendo frecuentemente la religión del soberano, la cual pasaba a ser la religión oficial del Estado.

Si bien, en sus orígenes, el territorio administrado por el soberano no era necesariamente una unidad cultural, las tensiones políticas, sociales, religiosas y étnicas motivaron que desde el Estado, pero también desde las comunidades culturales más numerosas, se llevara a cabo un proceso de identificación de todos los habitantes de dicho territorio, con una entidad política y cultural denominada nación. Desde entonces, algunos autores explicarán este proceso argumentando que la Nación era la base del Estado y otros que el Estado construyó la Nación.

Desde finales del siglo XIX, el concepto de nación es foco de atención de las ciencias sociales y de la historia. En un trabajo del francés Ernest Renán de 1882 titulado “¿*Qué es una nación?*” se planteaba lo novedoso del tema (Hobsbawm, E. 2004:21). No obstante apreciamos el desarrollo político del concepto en el movimiento de la ilustración, en los procesos revolucionarios de Estados Unidos y Francia de la segunda mitad del siglo XVIII y, en los de la América hispana, de comienzos del siglo XIX. Sea desde la sociología, la antropología, la historia, como desde la acción política, el concepto será usado y abusado.

En consecuencia, la literatura sobre el concepto de nación tendrá desde entonces y hasta la actualidad dos énfasis, para unos la idea de nación se asimila al concepto de pertenencia a un pueblo que comparte un mismo territorio o las pretensiones sobre un espacio ancestral, que poseen una lengua común, una misma historia y tradiciones; para otros el concepto de nación es más político que cultural, es una asociación que puede incluir grupos de distintos orígenes, los cuales deciden unirse y autogobernarse en un determinado territorio. Si vamos a la definición de la palabra en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, veremos que tales acepciones siguen vigentes: Nación, “...del latín *Natio...conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno; territorio de ese país; conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.*”

Hobsbawm (2004:17) define nación como: “...*cualquier conjunto de personas suficientemente nutrido cuyos miembros consideren que pertenecen a una nación.*” Aunque esta definición nos parece tautológica, corresponde a la orientación del concepto que acepta la mayoría de los investigadores académicos: que la nación es un pacto político, un contrato social entre individuos, una invención concordada más o menos consciente.

Benedict Anderson, un académico de origen inglés radicado en Estados Unidos, ha sido uno de los investigadores que más ha influenciado el desarrollo del concepto en las últimas décadas, al definir nación como una “*comunidad política imaginada*”. Anderson argumentaba que era imaginada, porque no se podía

conocer a todos sus miembros; que era limitada, porque tenía contornos definidos en integrantes y territorio; que era imaginada como soberana, en oposición al orden establecido de los monarcas que suplantó; que era imaginada, porque aspiraba a un compañerismo horizontal. Para este autor, la idea de nación, o de manera más precisa del Estado-Nación, nacería a finales del siglo XVIII en Europa, como una respuesta o consecuencia al nacionalismo que nace en América del Norte y, después, en América del Sur. Anderson sostiene que el nacionalismo, como instrumento de construcción nacional, fue una invención americana. Para Anderson la nación, la nacionalidad y el nacionalismo son artefactos culturales, son creaciones humanas. Se crearon a finales del siglo XVIII y se convirtieron en modelo hegemónico de organización y control social, uniéndose al concepto de Estado-Nación (Anderson, B. 1983).

Para este autor y quienes lo siguen en sus aspectos más importantes, las naciones son creaciones sociales elaboradas con fines políticos y económicos por ciertos grupos hegemónicos o aquellos que aspiran al poder. Este artefacto social y cultural es precedido muchas veces, y sostenido casi siempre después, por el nacionalismo. Al respecto Hobsbawm define el nacionalismo como “...*un principio que afirma que la unidad política y nacional debería ser congruente...*” (Hobsbawm, E. 2004:17).

Anderson argumenta que otros ejemplos de comunidades imaginadas en el pasado y en el presente son las constituidas en base a la religión o a las dinastías. También señala que el nacionalismo moderno aparece como consecuencia del capitalismo, la imprenta y la diversidad lingüística y que, en la actualidad, es el concepto político más universal y clave de organización de todos los pueblos soberanos del mundo.

Si bien hay investigaciones, como las de Anderson y Hobsbawm, que demuestran que el concepto de nación tiene poco más de dos siglos, hay otras, como por ejemplo las del sociólogo Anthony D. Smith, que otorgan al concepto una mayor antigüedad, y que critica algunos de los fundamentos de las explicaciones de Anderson, señalando que hay aspectos étnicos que sobreviven en las naciones modernas, que la idea de nación tiene un núcleo duro o fundamento en la etnicidad de un grupo o población, que se sostiene en un parentesco de origen, en una historia común, en ciertos lazos de solidaridad comunitaria. Este autor, que tiene una orientación etno-simbólica, pregunta ¿Por qué se lucha y se muere por una nación?; ¿Si el nacionalismo fue creado por las élites sólo como un propósito económico, de dominio y de cohesión, por qué tiene tantos seguidores incondicionales? Para Smith el nacionalismo se explica en la historia de cada grupo, en un sentido de identidad común y de historia compartidas. Dicha historia puede ser falsa o inventada, pero hay un sentimiento, una emoción al respecto, que se enlaza con aspectos históricos comunes. Para Smith la nación no implica

que sus miembros deban ser parecidos, sino más bien que deben compartir un sentimiento de unidad (Smith, A.1994).

Esta discusión teórica sobre el origen de las naciones, nos lleva al concepto de etnia, más utilizado por la antropología, para caracterizar generalmente a grupos que no tenían una organización estatal, pero que compartían un conjunto de rasgos comunes como parentesco, lengua, cultura, historia e incluso aspectos raciales. Al respecto, existen diferencias de énfasis entre los antropólogos para definir un grupo étnico, a las cuales se suman los arqueólogos, con sus definiciones de culturas arqueológicas. Los arqueólogos y antropólogos soviéticos desarrollaron el concepto de etnogénesis, estableciendo que los grupos étnicos se basaban en la integración a través del tiempo de rasgos como el lenguaje, ser parte de un grupo racial y compartir características culturales que consideran como propias. Este enfoque fue discutido por algunos arqueólogos y antropólogos occidentales, quienes plantearon que los grupos étnicos están constantemente cambiando de acuerdo al contexto histórico en el cual existen y que la etnicidad, al igual que la cultura, siempre está en proceso de formación y de cambio (Khol, P. y Fawcett, C. 1998).

El reconocimiento de tales grupos hasta la actualidad nos lleva a la discusión entre etnicidad y nacionalidad, siendo el primero un componente de suma importancia en el nacimiento de las naciones modernas, donde hay un grupo mayoritario que comparte dichos rasgos y que logra acuerdos o se impone a otros grupos, a veces menores en número de población o más débiles en cuanto a su poder económico, político o de prestigio.

Por tanto, debemos tener presentes que la idea de nación tiene, por una parte, un componente en su formación o génesis, centrado en la identidad cultural de un grupo y, por otra parte, un componente formativo en la asociación política de individuos y grupos, que pueden tener o no, tales características culturales y étnicas de origen común.

Los estados modernos, en sus procesos formativos originales, aspiraban a construir una unidad nacional en los territorios que controlaban, basándose más o menos en la identidad cultural e histórica de los grupos mayoritarios. Algunos de estos estados impusieron o imponen, a través de instrumentos políticos, jurídicos y educativos, la unidad nacional que consideran fundamental para su organización administrativa y el control de todos los habitantes de su territorio. En muchos casos la diferencia cultural es combatida como contraria a la unidad. En otros casos de estados modernos, tanto desde su formación o como producto de su evolución histórica, especialmente cuando hay diferentes grupos mayoritarios con identidades culturales particulares, tienden a constituir estados plurinacionales, donde la asociación política de los ciudadanos está por sobre su diversidad étnica,

cultural o lingüística, la cual se reconoce y respeta, incluso con distintos grados de autonomía regional, pero donde la nacionalidad es más bien política que cultural.

Tal como señala el historiador chileno Ricardo Krebs en un trabajo publicado inicialmente en 1984, los conceptos nación, nacionalismo y Estado nacional han sido discutidos de manera intensa por los historiadores sin llegar a un acuerdo:

*“...los unos inscriben la nación en el marco de las organizaciones políticas determinadas por el proceso dialéctico de la lucha de clases, los otros ponen la nación por encima de las clases, comprenden el nacionalismo como una fuerza integradora y entienden la nación... como expresión de una voluntad general de los ciudadanos...como comunidad de destino, dotada de un alma colectiva...Sin embargo, quizás pueda haber acuerdo en que esa entidad que llamamos nación, tal como se presenta en la realidad histórica, tiene y debe tener una “conciencia nacional”, una conciencia que hace que esa entidad se comprenda como una individualidad, distinta de las demás, conciencia que dé un contenido y una orientación a la voluntad política.” (Krebs, R. 2009:3)*

El historiador Mario Góngora escribía en 1981, en su famoso ensayo sobre la noción de Estado en Chile recordando a Burke y Spengler, que el Estado mirado desde un punto de vista histórico:

*“...no es un aparato mecánicamente establecido con una finalidad utilitaria, ni es el Fisco, ni es la burocracia. Es como dijo Burke, algo “que no debiera ser considerado como apenas mayor que un contrato de sociedad para negocios sobre pimienta o café, telas de indiana o tabaco...Debe ser considerado con reverencia; porque no es una sociedad sobre cosas...Es una sociedad sobre toda ciencia; una sociedad sobre todo arte...Y como las finalidades de tal sociedad no pueden obtenerse en muchas generaciones, no es solamente una sociedad entre los que viven, sino entre los que están vivos, los que han muerto y los que nacerán”. Y diríamos también, con Spengler, “...el verdadero Estado es la fisonomía de una unidad de existencia histórica.” (Góngora, M. 2003:59-60)*

La discusión teórica entre autores que se inclinan por enfoques más esencialistas o más constructivistas, se fundamenta en el análisis de casos históricos que entregan elementos tanto en un sentido como en el otro, dependiendo de las circunstancias específicas. Nuestra posición para explicar estos procesos en relación a Chile, dentro del contexto latinoamericano, se inclina más hacia el marco conceptual elaborado por Jorge Larraín (1996; 2001), quien adscribe una visión histórica y estructural, en el cual todos estos aspectos están presentes, de manera consciente e inconsciente, pero donde la acción de los individuos y grupos van fortaleciendo antiguas identidades culturales o crean formas de asociación, en

donde se construyen nuevas identidades. De igual manera pensamos que los individuos pueden transitar de una identidad cultural a otra, como también compartir dos o más identidades culturales, de acuerdo a la comunidad donde se insertan o viven.

Tal como indica Néstor García Canclini:

*“Los países latinoamericanos son actualmente resultado de la sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre todo en las áreas mesoamericana y andina), del hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas. Pese a los intentos de dar a la cultura de élite un perfil moderno, recluyendo lo indígena y lo colonial en sectores populares, un mestizaje interclasista ha generado formaciones híbridas en todos los estratos sociales. Los impulsos secularizadores y renovadores de la modernidad fueron más eficaces en los grupos “cultos”, pero ciertas élites preservan su arraigo en las tradiciones hispánico-católicas, y en zonas agrarias también en tradiciones indígenas, como recursos para justificar privilegios del orden antiguo desafiados por la expansión de la cultura masiva”. (García Canclini, N. 1990:71)*

## **2.3 El Desarrollo del Concepto de Patrimonio**

Todas las sociedades humanas tienen una actitud hacia su pasado, la cual varía según cada cultura y el período temporal en que se encuentren. La forma de ver, de comprender, de transmitir aquello que queremos recordar del pasado es parte de nuestro patrimonio, de nuestra herencia, como también lo es el entorno y los vestigios de las obras de quienes son nuestros ancestros y de los que vivieron previamente donde hoy habitamos. Es la herencia común, individual, familiar y colectiva que recibimos de anteriores generaciones y que dejamos, de manera consciente o no, a las futuras.

El patrimonio, en su sentido más social y de herencia colectiva, es una actitud construida socialmente respecto de la memoria, que se expresa en nuestra comprensión del tiempo, del espacio, de la gente, de los objetos, de las ideas y de las relaciones entre ellos. Estas actitudes hacia el patrimonio las encontramos en las primeras agrupaciones humanas y la arqueología nos da cuenta de ellas como también la antropología.

Estas actitudes hacia lo que recibimos del pasado tienen un alto grado de simbolismo, siendo los objetos, los lugares, el recuerdo de los antepasados y las ideas, cargados con una serie de significados, que cuando socialmente son más compartidos y apreciados, más duraderos son. Las fronteras acá entre lo sagrado

y lo profano son difusas y quizás debamos situarnos en otra dimensión para comprender la forma como procesamos el pasado en el presente y lo proyectamos.<sup>1</sup> Es común que muchos autores, situados en el marco cultural que nos ofrece Occidente, fundamenten que el desarrollo inicial del patrimonio se encuentra en las nuevas ideas y corrientes de pensamiento del Renacimiento y después de la Ilustración, en las cuales se va perfilando el concepto central de lo que hoy definimos como patrimonio<sup>2</sup>. Pero no debemos olvidar que esta relación con el pasado existía desde antes, donde las fronteras entre lo social, lo político y lo religioso estaban fusionadas. Por ello es necesario comprender estas actitudes hacia el pasado en las sociedades más antiguas.

Una primera actitud social hacia el patrimonio está centrada en mantener en la memoria el recuerdo de los seres queridos que han muerto. La forma de expresar tal relación es muy diversa pero existe y ha existido en todas las culturas, sea enterrando a sus muertos, cremándolos o momificando sus cuerpos; sea que marquemos sus tumbas o entreguemos sus restos para que alimenten la tierra, las aguas, el fuego o los espacios o fuerzas simbólicas que nutren la vida y su continuidad en cada grupo humano.

Una segunda muestra de tal actitud la vemos en los ajuares que acompañan a los muertos, en los objetos que se quiere conservar de ellos, o en la forma en que veneramos los lugares en que descansan sus restos, los cuales permiten mantener su memoria, la cual también se puede lograr a través de recordar sus vidas, transmitiendo sus aspectos más relevantes de generación en generación.

Una tercera actitud hacia el patrimonio la encontramos en el deseo de plasmar, sea en objetos, o a través de grabados o pinturas en las cavernas o rocas, la imagen real o ideal de la gente, de escenas de caza y recolección, de ceremonias, de la flora, de la fauna, de símbolos que tienen una intención de perpetuar la memoria y su particular interpretación por cada comunidad.

Una cuarta forma de tal actitud es la de establecer, reconocer y transmitir a los descendientes, ciertos atributos de sus antecesores, de los lugares o rasgos físicos del territorio que ocupan, como también las construcciones, aspectos todos que vinculan a una comunidad con su espacio y tiempo, sea por el recuerdo de hechos pasados, por razones religiosas u otras. Montañas, lagunas, cavernas,

---

<sup>1</sup> Al respecto ver por ejemplo el artículo de Joana Bruck que aborda este tema en la sociedad neolítica de la antigua Inglaterra en Bruck, J. (2001). "Monuments, power and personhood in the British Neolithic". *Royal Anthropological Institute*. Vol. 7, p. 649-667.

<sup>2</sup> Una compilación de artículos con algunos de los autores que han sido más influyentes al respecto la encontramos en Price, N., Talley, M. y Vaccaro, A. Editores (1996). *Readings in Conservation, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage*. Publicado por Getty Conservation Institute, Los Ángeles, California, Estados Unidos.



bosques, islas, etc., como también lugares donde ocurrieron hechos memorables y determinadas construcciones que tienen un alto valor simbólico, constituyen hitos o espacios que dan sentido de pertenencia, de continuidad, de vínculos que construyen identidad, coherencia y seguridad, tanto individual como colectivamente. A muchos de estos lugares, objetos e ideas, les hemos dado el carácter sagrado (Cabeza, A. 2011).

Pero también, desde la antigüedad, aunque de manera parcial, tales atributos se han conferido a lugares, objetos e ideas que tenían una significación más política. Sin embargo, de manera frecuente, lo profano y lo secular se mezclaban y confundían en la memoria colectiva, especialmente en aquellas comunidades donde la forma de ver y comprender el mundo estaba integrada, no existiendo las separaciones entre lo económico, lo social y lo ideológico que la modernidad nos ha impuesto en Occidente.

Desde los primeros grupos humanos, estas actitudes hacia la memoria, expresadas en lugares, construcciones o los recuerdos que se transmiten de generación en generación, se han manifestado en conceptos que tienen una doble y contradictoria expresión respecto del tiempo y del espacio, pero que en realidad comprenden una mirada integradora. Por una parte, una construcción de la imagen del pasado y, por otra, una construcción del futuro que queremos, que incorpora la anterior, aunque no necesariamente y muchas veces de manera controversial. En nuestra cultura occidental, tales conceptos los hemos concentrado en los vocablos "*monumento*" y "*patrimonio*", aunque también este último es homologable al vocablo "*herencia*". Ambos conceptos son muy antiguos y los podemos rastrear en la antigüedad greco-romana e incluso antes en Asia Menor y otras culturas de diferentes regiones del mundo.

En los últimos siglos tales ideas van adquiriendo nuevos sentidos y muchas veces se confunden, pero en las últimas décadas, por lo menos entre los especialistas y en parte de la opinión pública, el concepto de monumento aparece como pasado de moda, añejo, gastado y cobra más fuerza el de patrimonio y herencia. No obstante, en el imaginario popular más amplio como de muchas acciones del Estado o de los Gobiernos, sigue estando presente el concepto de monumento en su forma más prístina, en relación a la conmemoración del pasado.

En su sentido original el monumento era un hito, una construcción, que buscaba perpetuar la memoria de personas o actos significativos, que quienes detentaban el poder querían fueran admirados en su presente y recordados por las futuras generaciones. Tales monumentos tenían un sentido colectivo, tanto religioso como político. Las pirámides y obeliscos del antiguo Egipto, como también los arcos triunfales y estatuas de la antigua Grecia y Roma tenían tal intención.

Por otra parte, el patrimonio o herencia, tanto en su acepción individual o colectiva, incluye el conjunto de bienes materiales e inmateriales que recibimos o heredamos de nuestros ancestros, fuera familiarmente o como comunidad, algunos de los cuales se consumían, se destruían o se legaban a los descendientes o futuras generaciones. En la antigüedad greco-romana era de carácter familiar y centrado generalmente en la figura del padre, del jefe del linaje, en la línea masculina, desde quien se heredaban los bienes y se situaba la descendencia. Sin embargo, en otros pueblos de la antigüedad, tal patrimonio podía heredarse tanto por el lado paterno como materno, como también de manera colectiva. Al respecto hay diferencias claras entre las sociedades de tipo tribal y las que se organizan a través de estados centralizados.

En los monumentos primigenios hay una intencionalidad conmemorativa; una persona, un grupo de ellas, busca determinar qué es lo importante de recordar; hay una mirada del presente hacia el futuro. En el caso del patrimonio, el sentido primigenio del concepto era el conjunto de bienes heredados de los ancestros directos que se traspasaban en propiedad y sólo en los últimos siglos el concepto tiene una característica más colectiva, en el sentido de una herencia común. Aunque debemos advertir que lo patrimonial estaba muy presente, aunque de manera inconsciente, en el respeto por las tradiciones y en los mecanismos para educar y transmitir la identidad cultural grupal. Podemos concluir al respecto que en los monumentos había una acción desde el presente hacia el futuro, de mantener ciertos hechos en la memoria de las próximas generaciones. En cambio, en el concepto de patrimonio, la idea principal se centraba en lo que recibimos del pasado.

En los idiomas más directamente derivados del latín, el concepto de patrimonio es hoy día ampliamente usado tanto en su sentido de herencia, de bienes que se traspasan de padres a hijos, como también en su aspecto más económico, como conjunto de bienes de los cuales alguien o una entidad es heredera y propietaria. Sin embargo, desde fines del siglo XVIII y de manera creciente en los siglos XIX y XX, el concepto también incluye al conjunto de bienes, construcciones, inmuebles, ideas, tradiciones, lugares y territorios, los que pueden tener un régimen de propiedad privada o pública, pero a los cuales la sociedad les asigna un valor cultural, de cierta pertenencia colectiva, y que son parte de un sistema que representa su identidad (Llull, J. 2005).

En el idioma inglés se usa la palabra "*patrimony*", la cual es utilizada preferentemente en su sentido de bienes que se heredan, de la propiedad material que se traspasa por la herencia. Sin embargo el concepto "*heritage*" es el más ampliamente utilizado, el cual tiene un carácter distinto, más vinculado a la herencia común, a la cultura, identidad y tradiciones que se reciben de los ancestros. En cambio la palabra "*monument*", vocablo que llega al inglés desde el latín y el francés, mantiene el sentido original de hito recordatorio. En ambos

conceptos lo central es el tiempo y cómo lo procesamos. Pasado, presente y futuro, la idea del tiempo en el espacio, la memoria que recibimos del ayer y que heredamos al mañana, están en los fundamentos de los conceptos de patrimonio y de monumento.

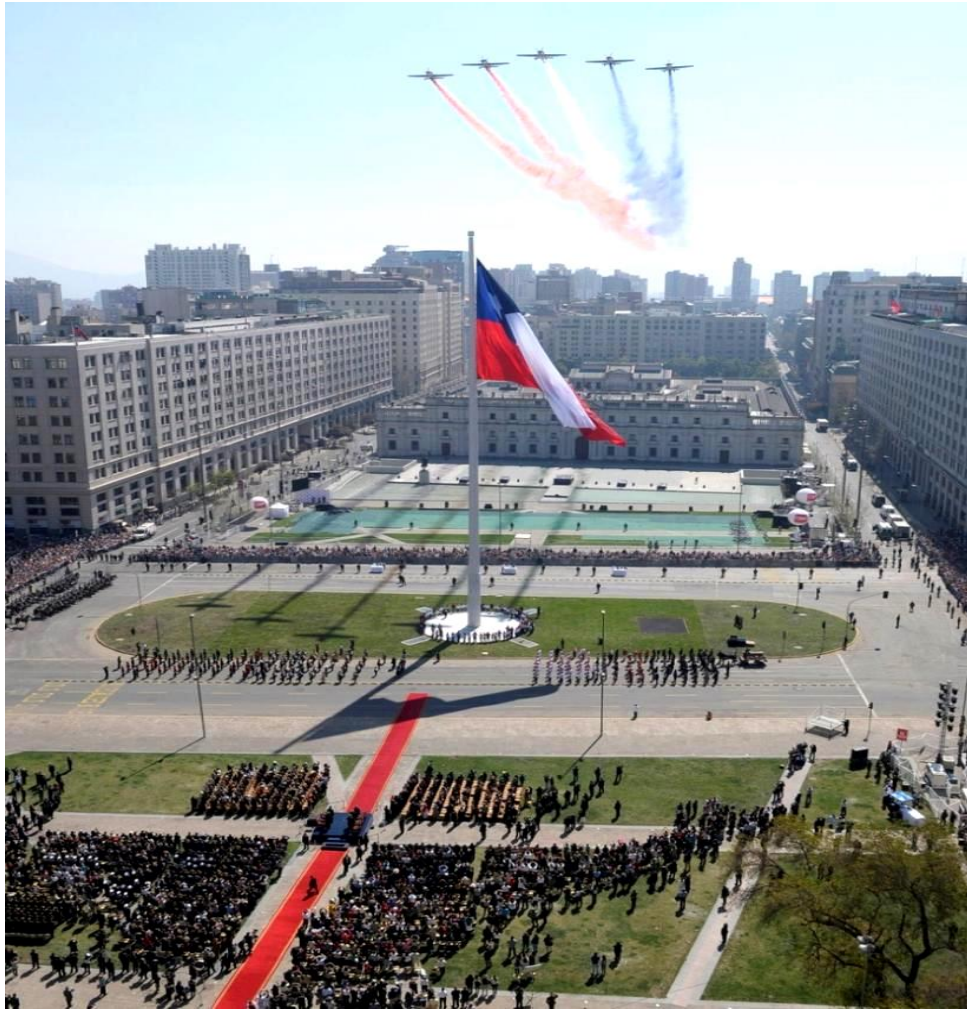
Un ejemplo claro de cómo estos dos conceptos y cómo su función social siguen estando presentes, lo constituye el acto principal y más solemne de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Chile o mejor dicho de los 200 años de la Primera Junta Nacional de Gobierno, celebrado en Santiago, en Septiembre de 2010, mediante la construcción de un mástil de 61 metros, en el cual se izó una bandera de gigantescas proporciones, de 27 por 18 metros, y que se emplazó en la avenida principal de la capital y frente al Palacio de La Moneda, la casa de gobierno de Chile, el cual se presentó como un monumento que simbolizaba al país y su historia como nación independiente. En el mismo acto se inauguró el traslado de la estatua de José Miguel Carrera, la cual se instaló al lado de la estatua de Bernardo O'Higgins, ambos próceres de la Guerra de la Independencia y considerados como Padres de la Patria. En tal ceremonia, presidida por el Presidente de la República Sr. Sebastián Piñera, quien fue acompañado por los ex presidentes, se simbolizaba el patrimonio histórico colectivo del ayer en un monumento a la bandera que buscaba representar a la nación toda y su sentido de unidad de hoy y mañana.



Monumento a B. O'Higgins. Foto A. Cabeza



Monumento a José Miguel Carrera. Foto F. España



Santiago, Ceremonia del Bicentenario el 18 de Septiembre de 2010. Foto Archivo Prensa de La Moneda

Como hemos visto, toda sociedad tiene una forma de concebir su tiempo, de construir su memoria. Las antiguas culturas del Medio Oriente y después del Mediterráneo, fueron adoptando un concepto del tiempo lineal, una idea de historia secuencial. Otros pueblos, como las culturas de América precolombina, construyeron un concepto del tiempo por ciclos. En ambos conceptos se fue construyendo una forma de registrar la memoria, de historicidad. La concepción religiosa, la forma de comprender el universo, dominó las dos en su proceso formativo, pero con un sentido distinto, las cuales se expresan en sus mitos de origen.

En los pueblos herederos de la tradición judaico-cristiana se adopta la creencia de un solo acto creador situado en el “*Jardín del Edén*”, donde un solo Dios crea a Adán y de éste crea a Eva y de quienes proceden todos los seres humanos. En los pueblos americanos, el concepto que se construye de manera diferente. No

hay un solo acto creador y tampoco los seres humanos nacen de un solo individuo o pareja, si no que salen de la tierra, de las lagunas, de las cavernas, de donde brota el agua, como pueblos, como comunidades, no como individuos. Tampoco existe la idea de un “*Jardín del Edén*”, sino la idea de la dualidad, de las oposiciones, de la diversidad, donde la tierra, el agua, los astros constituyen entidades de fertilidad que permiten la continuidad de todos los seres vivos (Reyes, L. 2008).

No obstante estas diferencias hacia el tiempo, el espacio y los orígenes, todas las sociedades construyen formas de recordar y de legar a las futuras generaciones esas ideas a través de lugares, objetos y construcciones, los cuales conforman su patrimonio colectivo. Incluso, muchas construyeron grandiosos monumentos para perpetuar dichas memorias. Situaciones similares ocurren en Asia, Oceanía y África, con lo cual queremos dar cuenta que la actitud hacia el patrimonio ha estado siempre en las sociedades humanas, tanto del ayer como del presente, respecto de cómo tratamos el tiempo y la memoria.

### **Hacia la Definición Contemporánea del Patrimonio**

La definición de patrimonio que se ha adoptado desde fines del siglo XVIII está directamente relacionada con las corrientes de pensamientos imperantes, la posición teórica de los autores, las profesiones de las cuales provienen y de su experiencia de terreno. El concepto tiene distintos niveles de aproximación, desde el nivel individual, familiar, comunitario, nacional y mundial, en sucesivas esferas de complejidad entre lo privado y lo público, y de las relaciones entre generaciones. Por otro lado el concepto puede tener diferentes énfasis si nos centramos en lo que es, o en las funciones que cumple en una determinada sociedad, si nos referimos a objetos, un conjunto de ellos, un sistema con ámbitos materiales e inmateriales, además de su entorno natural y social.<sup>3</sup>

Hoy día el concepto de patrimonio, tanto en el ámbito natural como cultural, está definido legalmente en cada país y, a nivel internacional, a través de tratados bilaterales y de convenciones multilaterales. En todos ellos, con mayor o menor énfasis, su definición tiene relación con el conjunto de bienes, naturales o culturales, ecosistemas y especies naturales, objetos, construcciones, lugares, ideas, tradiciones, y todo aquello que represente el quehacer humano y el entorno natural, a los cuales se le otorgan una serie de valores y significados, que los hacen meritorios de ser apreciados, protegidos y que existe una voluntad de traspasarlos de generación en generación. En las últimas décadas el concepto se

---

<sup>3</sup> Una resumida pero brillante introducción a este tema la ofrece Nicholas Stanley Price (1996) en el prólogo del libro editado por el junto a otros autores: *Readings in Conservation, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage*. Getty Conservation Institute, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

ha ido expandiendo, abarcando tanto lo cultural como lo natural, con una creciente valoración social y protección legal.

Si bien la protección del patrimonio natural y el patrimonio cultural tienen orígenes diferentes, que se expresan hasta el presente en legislaciones e instituciones distintas, es cada vez más frecuente que sus definiciones y, especialmente su administración, tenga una mirada más holística, existiendo en algunos países instituciones o servicios públicos que velan por su protección y gestión de manera integral como es el caso de Estados Unidos de América o Canadá.

El patrimonio cultural, centrado en un inicio en objetos y en lo material, hoy involucra también lugares, conjuntos construidos, bienes inmateriales, tradiciones, saberes y los territorios o ambientes de donde son propios. Por otro lado, si bien antes el patrimonio, natural o cultural, era foco de atención principalmente de especialistas, hoy día es de preocupación de las comunidades, quienes desafían a las autoridades y al mundo académico respecto de qué se debe proteger, cómo cuidarlo y con qué criterios se los puede intervenir (Cabeza, A. 2009).

En el mundo antiguo, autores de la Grecia Clásica como Homero, Herodoto y Pausanias, cuyas obras han sobrevivido hasta el presente, nos dan señas de una actitud especial hacia el pasado y sus reliquias, las cuales también en encontramos en la antigua China (Ballart, J. y Juan i Tresserras, J. 2001:31-33; Ballart, J. 2002: 30-59).

Al respecto, es digno de mencionar la actitud de Alejandro Magno quien, después de conquistar Persia, se preocupa de restaurar la tumba de Ciro El Grande (Jokilehto, J. 2002:4). Pero también hay que destacar al respecto la importancia que tenía la apropiación del patrimonio y monumentos de los vencidos, algunos de los cuales fueron llevados a Atenas y colocados en sus templos, tal como nos cuenta en el siglo I antes de Cristo el arquitecto romano Marco Lucio Vitruvio:

*“Colocaron en él las estatuas de los persas cautivos...en actitud de sostener la bóveda, para castigar de este modo a aquel pueblo con el oprobio que su soberbia merecía y dejar a sus descendientes un monumento, a cuya vista... se sintieran siempre dispuestos a defender su libertad.” (Vitruvio, Marco Lucio 1955:7)<sup>4</sup>*

En la Roma imperial varios autores clásicos dan cuenta del interés por coleccionar objetos de la antigüedad, propios o ajenos, más allá de los que simplemente significaban riqueza, como también la preocupación de las autoridades respecto

---

<sup>4</sup> Este mismo arquitecto romano da cuenta en su obra del monumento construido en honor de Eurípides, en Macedonia (1955:29) y de los monumentos construidos en mármol o piedra labrada en la antigua Roma (1955:50).



de la conservación de sus edificios y monumentos conmemorativos, destinando incluso un funcionario a cargo de ellos, teniendo algunos emperadores una especial política respecto de ellos (Jokilehto, J. 2002:2-5).

Luego del colapso del imperio romano y durante la expansión del cristianismo en la época medieval, el saber se concentra en los conventos y monasterios, siendo estos los principales lugares donde se conservan algunos bienes del pasado como libros manuscritos y reliquias, salvo casos dignos de mencionar como lo realizado por Carlo Magno en su reinado. No obstante, también se destruyen o quedan en total abandono, otros bienes que eran considerados un atentado contra las nuevas creencias religiosas. Una práctica común entonces era la utilizar los materiales de antiguas construcciones en las nuevas o construir sobre ellas.

El Renacimiento permite una nueva lectura del pasado, marcando el inicio de una renovada consciencia histórica, menos atada a las creencias religiosas, siendo en el arte donde se expresan las nuevas actitudes hacia el cambio, a las que siguen otras en lo social y lo político, que dan cuenta de la pérdida del poder de la iglesia católica. El sacerdote, arquitecto, poeta y filósofo Leon Battista Alberti (1404-1472), un claro referente del renacimiento italiano, que se inspiró en los clásicos y especialmente en los conceptos "*firmitas, utilitas y venustas*" de Vitruvio, expresa los nuevos valores que debían representar el arte y la arquitectura, tales como ser funcional, durable y elegante, destacando su rol educativo e histórico. Tales ideas son desarrolladas en su tratado de arquitectura *De re aedificatoria* escrito entre 1443 y 1452 y las lleva a la ejecución en muchas de sus obras arquitectónicas, en las cuales siempre apeló a la armonía de las proporciones y la integración de diversos estilos.

Los Papas fueron conscientes de este cambio de época y dictaron sucesivas normas sobre la protección de los monumentos y ruinas de la antigüedad clásica, llegando incluso a encargar a varios artistas obras religiosas en las cuales las nuevas expresiones eran patentes, y designando a uno de ellos, el famoso pintor y escultor Rafael (1483-1520), como encargado de proteger los monumentos de Roma (Jokilehto, J. 2002:26-33; Choay, F. 2007: 25-83).

El Renacimiento, que se origina principalmente en Italia, se expande a varios puntos de Europa, y permite generar un nuevo tipo de interés por el pasado, que se expresa en la concepción de una renovada historicidad, una cierta nostalgia por el pasado grandioso de la antigüedad clásica greco-romana, el deseo de aprender y descubrir, constituyendo un movimiento centrado en el ser humano y crítico de la visión teocéntrica. De manera complementaria, los viajes de exploración iniciados el siglo XV y continuados en el XVI, abren nuevas fronteras en África, América y Asia para los europeos, expandiendo su concepción y visión del mundo. Estos nuevos conocimientos e ideas, junto con el avance de la ciencia y su aplicación

técnica, sientan las bases de la industrialización moderna del siglo XVIII, además de cambios radicales de la sociedad y de su organización política.

Durante los siglos XVI y XVII Europa se ve convulsionada por la Reforma y Contrarreforma, que la llevan a una serie de guerras religiosas que alteran el mapa político, y que van conformando nuevos estados o reestructurando los antiguos, enmarcados todos en torno a monarquías y dinastías, cuya rivalidad por motivos religiosos, políticos o económicos, era permanente. En este contexto, desde el Renacimiento, la valoración del pasado llevó a algunas monarquías a inventariar las colecciones de la antigüedad que tenían, pero también volcarse a investigar las propias, a estudiar sus propias ruinas, las que existían en sus territorios. Es así que Inglaterra dicta en 1560 algunos edictos reales de protección al respecto, producto de la destrucción de varias iglesias y conventos, debido a su separación de la Iglesia Católica (Choay, F. 2007:60). Un siglo después, en 1666, se dicta la primera ley de protección de los monumentos antiguos (Damell et al, 1994:154), iniciativa que fue replicada poco a poco en Europa e incluso en América, estando en algunos casos muy relacionada a las antigüedades que se consideraban “*nacionales*”.

Varios monarcas adoptaron o continuaron con la moda de acumular antigüedades y obras de artes en sus palacios, como Francisco I de Francia y Carlos I de España, tarea que continuó su hijo Felipe, quien llegó a habilitar en la Cámara del Tesoro una sección “*de las maravillas*” que contenía objetos raros y científicos de distintas procedencias. Pero fue Felipe II quien acondicionó en El Escorial un lugar en la Biblioteca para atesorar todo tipo de antigüedades, obras de artes y objetos de interés científico (Ballart, J. et al 2001:39-40).

En el siglo XVIII tiene lugar un renovado interés por el saber, por la ciencia, por la filosofía, junto con una crítica creciente al orden monárquico absoluto y la férrea estructura de clases existentes. En este contexto tiene lugar el movimiento que llamamos “Ilustración”, el cual encarna algunos ideales de la modernidad, la fe en la razón y en el progreso permanente. Surge un nuevo tipo de intelectual, deseoso de conocer el mundo, de viajar a los lugares que fueron claves en la antigüedad, de coleccionar objetos del pasado. No obstante, algunos de estos filósofos, provenientes tanto de la aristocracia como de la burguesía, la nueva clase social que adquiriría importancia creciente en las ciudades, comienzan a plantear ideas que buscan cambiar el orden de las cosas y la organización tradicional del poder.

Las colecciones reales seguían incrementándose gracias a las exploraciones y viajes científicos y se crean los primeros museos que tenían un sentido enciclopedista, estableciéndose incluso sociedades de anticuarios como la de Londres, fundada en 1718. El espíritu científico primaba en varios intelectuales. Uno de ellos fue Antonio de Ulloa, quien pasó largos años en América en una



misión científica, quien llegó a proponer la instalación de monumentos, como veremos en un próximo capítulo, escribiendo en 1772:

*“Las memorias de la antigüedad son las demostraciones verídicas de lo que fueron las gentes en los tiempos a que se refieren; por ellas vienen a averiguarse lo que alcanzaron, el modo cómo se manejaron, su gobierno y economía...Sin los monumentos, que a pesar de la ruina de los tiempos se conservan en alguna parte, no habría documentos formales de donde inferirlo.”(Ballart, J. et al 2001:20)*

Durante el siglo XVIII se realizan también varias excavaciones arqueológicas en Europa, siendo las más famosas las iniciadas en Pompeya y Herculano, pero también se realizan en América desde finales del siglo XVII, como las iniciadas por Carlos de Sigüenza y Góngora en la Pirámide del Sol en Teotihuacán, México; y las realizadas en época de Carlos III en Palenque, también en México. Estas actividades motivaron al Virrey de Nueva España José Iturrigaray a crear en 1808 una Oficina de Antigüedades. También debemos mencionar la influencia de José Ortiz y Sanz, un arqueólogo español del siglo XVIII, traductor de Vitrubio e impulsor del patrimonio histórico español, quien viaja a Roma, recorre sus ruinas y desarrolla una preocupación por el conocimiento de la antigüedad (Ballart, J. et al 2001: 40).



Museo Nacional de Antropología de México

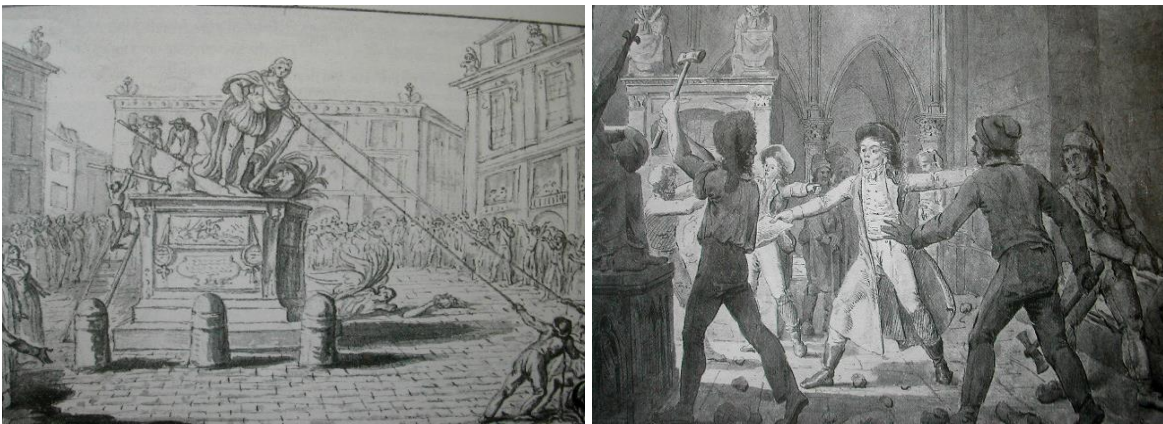


Pirámide del Sol, Teotihuacán. Fotos A. Cabeza

En el siglo XVIII tienen lugar procesos y cambios fundamentales: los inicios de la Revolución Industrial en algunas áreas de Europa, el crecimiento de las ciudades, las demandas de una burguesía que aumentaba su influencia, los conflictos por la mejor apropiación de las riquezas y productos de las colonias, el impacto que causó la independencia de los Estados Unidos de América, cuya causa rebelde se inspiró en los principios de libertad, democracia, autodeterminación, igualdad, fraternidad, separación de los poderes del Estado, ideales planteados

principalmente por Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre otros intelectuales, los cuales después se expresaron plenamente en la Revolución Francesa. Todo lo anterior provoca progresivamente cambios radicales en Europa, los cuales después también se expanden al resto de América.

La Revolución Francesa de 1789 llevó a la práctica varias de las ideas políticas gestadas en las décadas anteriores, provocando la abolición de la monarquía y la creación de la primera República Francesa. La revolución desató la violencia contra todo aquello que representaba el antiguo orden monárquico y quienes detentaban el poder total de la aristocracia y la iglesia. Además del asesinato y ajusticiamiento sumario de miles de personas, la violencia revolucionaria se ensañó, en sus primeros momentos de descontrol social, en contra de las estatuas, monumentos y tumbas reales, destruyendo y saqueando además iglesias, conventos, mansiones y castillos.



Grabados de la época de la Revolución Francesa que muestran la destrucción de monumentos

No obstante, ya en 1790, surgen voces que clamaron por la defensa de las obras de arte, reliquias de la antigüedad y edificios que estaban siendo arrasados, saqueados y destruidos. Entre tales voces sobresale la del anticuario y naturalista Aubin-Louis Millin, quien presenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, el 11 de diciembre de 1790, su obra sobre las antigüedades nacionales, clamando por su protección y usando, quizás por vez primera, los conceptos de monumento histórico y de monumento nacional (Choay F. 2007).

Debido a ello y al problema de cómo administrar los bienes sustraídos a la monarquía, la aristocracia y al clero, las sucesivas asambleas nacionales designan varios encargados de dicho patrimonio, quienes asumían el rol de inventariar y custodiar a nombre de la nación aquellos bienes de valor artístico o histórico que estaban siendo expropiados. Por cierto, la destrucción continuó, especialmente con aquellos bienes que representaban o eran símbolos del orden antiguo y continuó con las obras de arte cuyas materias primas podían ser utilizadas con otros fines, como el oro, la plata y el bronce.

La expropiación de tales bienes muebles e inmuebles se argumentó diciendo que su legítimo dueño era el pueblo de Francia, el cual había sido explotado durante siglos por la monarquía, la iglesia y la aristocracia. De esta manera se apela al concepto de herencia colectiva y que el conjunto de tales bienes constituían el “*patrimonio*” común del pueblo francés, integrado por ciudadanos cuyos derechos y deberes debían estar establecidos en una constitución política. Para tales efectos, mediante una propuesta del Conde de Mirabeau y de Charles-Maurice de Talleyrand, la Asamblea Nacional crea una primera comisión de monumentos en 1790, cuya tarea principal era inventariar y custodiar dichos bienes. Posteriormente varios de ellos son destinados a edificios que son llamados museos nacionales, siguiendo la lógica del enciclopedismo que primaba entonces, pero los cuales quedaban abiertos a todo el público, siendo su propietario el Estado, en representación de la nación toda, inaugurándose incluso una colección especial en 1796 bajo el nombre de Museo de los Monumentos Franceses (Choay, F. 2007:86-90).

En relación al patrimonio, debemos destacar que la Revolución Francesa sentó las bases de una nueva forma de valorar los bienes heredados del pasado desde una perspectiva nacional y desde una óptica colectiva, rescatando su importancia histórica y artística, además de su función educativa en la formación de una identidad nacional, sea seleccionando del pasado aquellos bienes que servían a sus fines o construyendo nuevos símbolos que recordar. La visión del coleccionista o del anticuario va quedando atrás. Por cierto, persiste, incluso con renovados bríos, el concepto de monumento conmemorativo, pero se abre paso la idea del patrimonio colectivo nacional integrado por objetos, lugares y construcciones que son importantes de conservar para disfrute de las generaciones presentes y futuras, siendo esta una responsabilidad del Estado. Tales ideas logran su momento culmine cuando, en 1830, el Ministro de Interior de Francia Francois Guizot, quien además era un notable historiador de antigüedades y un defensor de la idea de que la conservación de los monumentos servía a sentimiento de la unidad nacional de Francia, logra crear el cargo de Inspector General de Monumentos (Choay, F. 2007:115-116).

En los años siguientes, distintos países europeos proceden a copiar el modelo francés, creando instituciones y leyes para el resguardo del patrimonio histórico y artístico. En algunos el rol del Estado es central, en otros, como Inglaterra, tal rol es compartido o ejercido principalmente por el sector privado, formándose asociaciones para su protección y administración. Lo propio ocurre en los países americanos que logran su independencia de España a partir de 1810, quienes adoptan el modelo republicano, inspirado tanto en la Revolución Norteamericana como en la Revolución Francesa, pero que durante todo el siglo XIX se concentran básicamente en la construcción de sus estados nacionales, para solo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, iniciar un proceso de creación de instituciones y leyes de protección de su patrimonio, las cuales siguen fundamentalmente el modelo francés.

No obstante hay que destacar que durante todo el siglo XIX y comienzos del XX hay una fase importante de instalación y construcción de monumentos conmemorativos que estaban destinados a crear y consolidar la idea de nación de cada una de las nacientes repúblicas.

Por su parte en España se crean en 1844 Comisiones Provinciales de Monumentos con la misión de inventariar los bienes patrimoniales públicos, custodiar los bienes del patrimonio en peligro de destrucción y crear una red estatal de museos provinciales encargados de la conservación del patrimonio histórico español, siendo los monasterios medievales, las iglesias urbanas y las ruinas romanas objeto de atención de las autoridades (Ballart, J. et al 2001:47).

Aceptada ya la idea del patrimonio en Europa como conjunto de bienes del pasado que eran heredados por una comunidad, los cuales podían representar y fundamentar el concepto moderno de nación, fue necesario abordar la tarea de su conservación y restauración, especialmente de aquellos inmuebles considerados más valiosos desde el punto de vista histórico y artístico.

Los conceptos de restauración y conservación son usados a veces indistintamente, pero tienen connotaciones diferentes según el idioma y contexto profesional en que se aplican. En el Reino Unido y Estados Unidos se usa frecuentemente el concepto de conservación, que tiene un sentido más amplio, y que incluye la preservación, restauración, consolidación, estabilización. En la práctica, todas las actividades desde la protección al manejo integral del patrimonio. En cambio, el concepto de restauración, más utilizado en Europa continental, tiene un sentido más estricto, asociado a la idea de reparar, de reintegrar las partes ausentes, de recuperar parte del estado original de un bien patrimonial (Berducou, M. 1990:254-255). En América Latina se usan ambos conceptos, dependiendo de la formación académica de los profesionales. Por lo general, los arquitectos utilizan el concepto de restauración, en parte a la gran influencia que ha tenido la arquitectura francesa; en cambio, los arqueólogos utilizan más bien el concepto de conservación debido a la influencia norteamericana.

En un comienzo, la mayor atención a la conservación y/o restauración del patrimonio estuvo centrada en las obras de arte, discutiéndose el nivel de intervención respecto de los valores estéticos e históricos de tales bienes, en cómo preservar el original y los límites de la restauración. Pero rápidamente la discusión se instaló en relación a cómo salvar de la destrucción los bienes patrimoniales y cómo intervenir en la protección del patrimonio arquitectónico. Es notorio el ejemplo de Víctor Hugo respecto del Monasterio de Cluny, el cual fue saqueado primero durante la Revolución Francesa y demolido hacia 1820, quien escribe sobre este caso en 1825 ideas que siguen siendo de actualidad:

*“Por más derechos de propiedad que se reconozcan, la destrucción de un edificio histórico y monumental no ha de permitirse a los especuladores, a quienes ciega y deshonra el interés...Hay dos cosas a valorar en un edificio: el uso y la belleza. El uso pertenece al propietario; la belleza nos pertenece a todos.” (Ballart, J. 2001:44)*

Entre 1830 y 1870 se desarrolla en Francia una escuela de restauración arquitectónica que promueve la *“unidad de estilo”*, en la cual la restauración es un proceso de re-creación que permite remodelaciones, adiciones e incluso alteraciones. El autor más conocido de esta escuela fue el historiador y teórico francés Eugene-Emanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), quien estuvo vinculado con la Comisión de Monumentos Históricos de Francia. Viollet-le-Duc tuvo a su cargo muchas intervenciones de edificios históricos en las cuales llevó a la práctica la unidad de estilo, planteando en sus escritos que se debía tener respeto por el estilo original de cada construcción, que se debía conocer cada obra en su particularidad, que no se podían seguir principios absolutos en la restauración, que en las intervenciones se debían usar métodos y materiales de mejor calidad y que el fin último de la restauración era mantener el edificio *“vivo”*. Si bien Viollet-le-Duc dio forma a esta escuela de restauración, fueron sus seguidores quienes extremaron sus ideas al llevarlas a la práctica, siendo él más bien pragmático en sus intervenciones (Viollet-le-Duc, E. 1854). En estas décadas también cobra fuerza en Europa la restauración inspirada en dar una unidad de estilo influenciada por las tendencias al neoclásico y al neogótico, siendo muchos edificios patrimoniales restaurados siguiendo esos estilos, borrándose en algunos casos toda huella de estilos anteriores.

A mediados del siglo XIX, el movimiento romántico influye también en la restauración, especialmente en Inglaterra, donde cobra fuerza el concepto de conservación y se plantea el respeto al estado en que se encuentran los monumentos, considerando algunos de sus exponentes que no deben ser tocados, solo preservados, ya que toda intervención sería un sacrilegio. John Ruskin (1819-1900) es uno de los principales exponentes de esta tendencia. Dos de sus libros son claves para expresar dicho movimiento: *“Las siete lámparas de la arquitectura”* (1849) y *“Las piedras de Venecia”* (1851). Esta escuela impulsa esencialmente la idea de la conservación de las ruinas y critica toda alteración de ellas y abre las puertas, décadas después, a la restauración historicista, que procuraba respetar cada estilo en su originalidad. Importa destacar algunos de los conceptos y principios que animaban a Ruskin, especialmente los relativos al patrimonio arquitectónico:

*“La arquitectura es como el hogar y la protección de esta influencia sagrada, y a título de ello debemos consagrarle nuestras mas graves meditaciones. Podemos vivir sin ella, pero no podemos sin ella recordar. ¡Cuán fría es la historia y cuán falta de alma toda imagen comparada a la*

*que escribe una nación llena de vida sobre la pureza del mármol!....No hay más que dos grandes conquistadores del olvido de los hombres: la poesía y la arquitectura. Esta última....es en realidad más potente. Es preciso poseer, no solo lo que los hombres han pensado y sentido, sino lo que sus manos han manejado, lo que su fuerza ha ejecutado, lo que sus ojos han contemplado todos los días de su vida.” (Ruskin, J. 1944:230)*

Interesa mencionar también que para Ruskin era importante proteger y cuidar las viviendas y el patrimonio que hoy denominamos vernáculo, siendo quizás uno de los primeros en hacerlo, refiriéndose a ello como al patrimonio del hogar de la familia, el cual debe ser respetado, protegido, recordado (Ruskin, J. 1944:235). Este autor destacó la memoria como una idea central de los monumentos y de los edificios del ayer, los cuales simbolizaban la trascendencia y la fuerza del pasado en el presente, teniendo cada uno de ellos algo que comunicar y heredar a las futuras generaciones. Expresó también con vehemencia que el pasado estaba allí para inspirar, para aprender, que en las construcciones de la antigüedad había muchas voces y que se debía tener la capacidad de interpretarlas a través de sus vestigios. También escribió que en el caso de los edificios públicos que se construyeran, la intención histórica debía ser más definida, y que:

*“La minucia y la multiplicidad de sus decorados esculturales permiten expresar, simbólica o literalmente, lo que es digno de ser conocido de los sentimientos o de los grandes hechos nacionales.” (Ruskin, J. 1944:236)*

Ruskin también fue de los primeros teóricos en rescatar la importancia de la pátina de los edificios como la huella de los tiempos, señalando que:

*“En la pátina dorada de los años es donde hemos de buscar la verdadera luz, el color y el mérito de la arquitectura....cuando sus muros han sido testigos de nuestros sufrimientos y sus pilares han surgido de la sombra de la muerte, su existencia, más duradera que los objetos naturales del mundo que les rodea, se ve por completo dotada de lenguaje y de vida.” (Ruskin, J. 1944:241)*

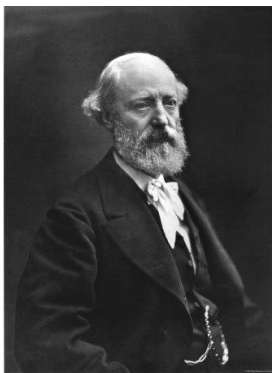
Finalmente expresa en su libro *“Las Siete Lámparas de la Arquitectura”*, su crítica respecto del tipo de restauración que se estaba llevando en Europa escribiendo que:

*“El verdadero sentido de la palabra restauración no lo comprende el público ni los que tienen el cuidado de velar por nuestros monumentos públicos. Significa la destrucción más completa que pueda sufrir un edificio, destrucción de la que no podrá salvarse...destrucción acompañada de una falsa descripción del monumento destruido....es imposible, tan imposible*

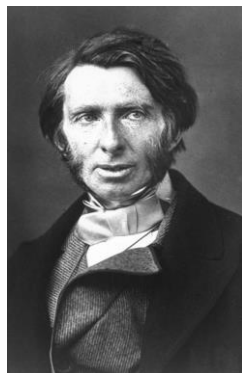


*como resucitar a los muertos, restaurar lo que fue grande o bello en la arquitectura...Pues tened cuidado de vuestros monumentos y no tendréis luego la necesidad de repararlos...la conservación de los monumentos del pasado no es una simple cuestión de conveniencia o de sentimiento. No tenemos el derecho de tocarlos. No nos pertenecen. Pertenecen en parte a los que los construyeron, y en parte a las generaciones que han de venir detrás. Los muertos tienen aún derecho sobre ellos...” (Ruskin, J. 1944:250-253)*

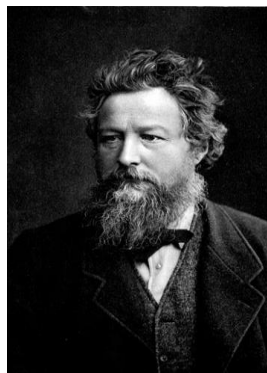
Estas ideas tuvieron su eco en Inglaterra, creándose la *Sociedad para la Protección de los Edificios Antiguos*, entidad privada que abogó por la conservación del patrimonio. Uno de sus fundadores fue William Morris, quien escribió el manifiesto de la sociedad en 1877, en donde explicitó sus principios y llamó a respetar todas las épocas de un edificio, que la historia de cada construcción debía ser mantenida y señalando que estaban en contra de las restauraciones que buscan que un edificio regrese a su “*supuesto*” estado original (Morris, W. 1877,1878).



Eugene Viollet-le-Duc  
Fotos Wikipedia



John Ruskin



William Morris



Camilo Boito

Por cierto surgen otras tendencias en respuesta a las exageraciones de estas dos escuelas, siendo una de ellas la que promueve el italiano Camilo Boito (1836-1914), quien es considerado el fundador de la conservación moderna e impulsa la idea de una restauración basada en cuatro principios: (1) Los monumentos poseen un valor no solo arquitectónico sino también como testimonios de la historia y se les debe respetar en su integridad; (2) Es recomendable consolidar los monumentos antes que repararlos, repararlos antes que restaurarlos y se deben evitar las adiciones; (3) Si las adiciones son indispensables, estas deben ejecutarse con diferentes materiales y características, aunque manteniendo la apariencia del edificio; (4) Las adiciones realizadas en diferentes épocas deben considerarse como parte del monumento y por lo tanto mantenerse, salvo que constituyan alteraciones (Boito, C. 1884; Waisberg, M. 1979:15-19). Un estudio

más detallado de todas estas escuelas y tendencias del siglo XIX las encontramos en los trabajos de compilación de diversos autores y análisis que realizan N. Price, M. Talley y A. Vaccaro, A. (1996) y el brillante estudio sobre la historia de la conservación y restauración arquitectónica de J. Jokilehto (2002).

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los países europeos que no lo habían hecho ya, dictan legislaciones y crean instituciones dedicadas a la protección del patrimonio cultural o actualizan las que tenían. Es así como Francia actualiza su legislación en 1887 y nuevamente la perfecciona en 1913. En Inglaterra se dicta una ley en 1882 sobre los monumentos antiguos y, en España, se aprueba una ley en 1911 que regula las excavaciones arqueológicas y otra en 1915, relativa a la protección de los monumentos históricos y artísticos.<sup>5</sup>

En América es México el primer país en dictar una ley de monumentos en 1896, mediante la cual se protege el patrimonio arqueológico e histórico. Después, en 1906, el Congreso de los Estados Unidos de América aprueba su *Ley de Antigüedades* y en 1916 crea el Servicio de Parques Nacionales, entidad que tendrá hasta el presente como uno de sus principales objetivos la custodia del patrimonio histórico y arqueológico de dicho país. En el caso de Chile, como veremos en detalle en otro capítulo, se intenta crear la primera Ley de Monumentos Nacionales en 1910, pero esta no es dictada hasta 1925.

La creación de estas leyes y de instituciones a cargo de los monumentos impulsaron las restauraciones de los bienes patrimoniales más apreciados por cada país. Los profesionales dedicados a estas tareas siguieron en sus intervenciones las tendencias de los ámbitos académicos de los cuales provenían, pero varios de ellos siguieron los principios señalados por Boito, los cuales, en general, fueron adoptados después por la *Carta de Atenas de 1931*, que comienza a guiar el accionar de los arquitectos en la restauración en todo el mundo.

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y su secuela de destrucciones masivas, demostraron que la aplicación estricta de tales principios no era posible de cumplir, lo cual motivó que en Venecia, en 1964, en un congreso de arquitectos, se plantearan nuevos enfoques, que se concretaron en la llamada *Carta de Venecia*, los que principalmente se aplican hasta la actualidad. También, producto de dicho Congreso Internacional, se decide crear en 1965 el *Consejo Internacional*

---

<sup>5</sup> Posteriormente la Constitución Española de 1932, en uno de sus artículos, atribuye al Estado la responsabilidad pública por la protección del patrimonio histórico y artístico. En el marco de dicha Constitución se dicta en 1933 la Ley del Patrimonio Histórico Artístico Nacional, la cual tuvo vigencia hasta 1985, fecha en que se dicta la Ley del Patrimonio Histórico Español, que rige hasta la actualidad, en conjunto con las distintas legislaciones que han dictado las comunidades autónomas de España. Esta legislación establece los Bienes de Interés Cultural, como una categoría amplia de patrimonio que involucra la máxima protección del Estado. Un estudio detallado de estas legislaciones se encuentra en Álvarez, José Luis (1992).



de *Monumentos y Sitios* (ICOMOS), entidad que reúne a profesionales de diferentes disciplinas preocupados por el patrimonio, y que desde sus inicios colabora con UNESCO en el diseño de estrategias internacionales en favor del patrimonio. Trataremos aspectos de estas dos cartas más adelante en relación a su influencia en América Latina.

Este último organismo de las Naciones Unidas ha sido clave en la formulación de políticas patrimoniales en muchos países, en el desarrollo del concepto de patrimonio en las últimas décadas y en la elaboración de recomendaciones y convenciones internacionales al respecto. Unas páginas más adelante trataremos especialmente las influencias de estos documentos en América y particularmente en Chile.<sup>6</sup>

En el período que va entre las Cartas de Atenas y de Venecia, tuvo una especial influencia en el desarrollo teórico de la restauración, el historiador y crítico de arte italiano Cesare Brandi (1906-1988), quien planteó los principios de mínima intervención, de reversibilidad, de unidad del objeto, que la integración de las partes faltantes debe ser reconocible, que toda restauración debe facilitar las futuras intervenciones, que se debe recrear la unidad del objeto sin borrar las huellas del tiempo o de la intervención humana (Brandi, C. 1963).

Desde la creación de la UNESCO y la aplicación de las recomendaciones, convenciones y diversos tratados bilaterales para la protección del patrimonio cultural, el concepto del patrimonio ha experimentado un notable desarrollo, abarcando hoy todas las manifestaciones humanas, pasadas y presentes, tangibles e intangibles, que son representativas, singulares, significativas y trascendentes de una sociedad o comunidad, las cuales incluyen objetos, estructuras o construcciones, sitios o lugares, tradiciones, saberes, lenguas, etc..

Por otro lado, si bien el patrimonio natural siguió, en un comienzo, una línea de desarrollo independiente, estableciéndose incluso instituciones y legislaciones especiales para ello, siempre ha existido una relación directa con el patrimonio cultural, incorporando ambos la idea de conjunto, entorno, áreas y territorio, como marco integrador para su mejor conservación y gestión. En este enfoque, las especificidades del patrimonio cultural y natural, confluyen cada vez más, siendo un ejemplo de ello la protección integral de los bienes culturales y naturales en los parques nacionales y diversas áreas protegidas, como también la implementación de categorías de manejo como los paisajes protegidos y, más recientemente aún, los paisajes urbanos.

---

<sup>6</sup> El suscrito ha publicado y comentado las principales convenciones, recomendaciones, cartas y acuerdos internacionales sobre el patrimonio en el documento: *Convenciones Internacionales sobre Patrimonio Cultural*. Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales N° 20, 1997, Chile.

No obstante lo anterior, es interesante notar el avance conceptual que se ha tenido a nivel internacional en las definiciones de patrimonio y los bienes que este incluye a través de las Convenciones Internacionales sobre Patrimonio de la UNESCO, las cuales han influido en las definiciones legales que cada país ha adoptado.<sup>7</sup> Por ejemplo en la “*Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado*”, aprobada en la Conferencia Internacional de Estados convocada por la UNESCO en La Haya, el 14 de mayo de 1954, se definieron como objeto de protección los bienes culturales, sin importar su origen y propietario, como aquellos “*bienes muebles o inmuebles*” que tienen importancia para el patrimonio cultural de los pueblos; los “*edificios*” cuyo destino sea conservar o exponer los bienes culturales y los “*centros*” que comprendan un número considerable de bienes culturales, que se denominarán “*centros monumentales*”.

Por su lado, la “*Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales*”, aprobada en la decimosexta reunión de la Conferencia General de la UNESCO en París, el 14 de noviembre de 1970, definió los “*bienes culturales*” como aquellos objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido expresamente designados por cada Estado como de importancia para la arqueología, prehistoria, historia, literatura, arte o ciencia. Esta Convención avanzó en la clasificación de los bienes culturales estableciendo los siguientes: a) Colecciones y ejemplares de zoología, botánica, etc.; restos paleontológicos; b) Bienes relacionados con la historia en todas sus áreas, con la vida de intelectuales, artistas y dirigentes, y con acontecimientos importantes de la nación; c) Producto de excavaciones (clandestinas y autorizadas) y descubrimientos arqueológicos; d) Elementos procedentes de monumentos históricos y artísticos y de sitios arqueológicos; e) Antigüedades de más de cien años; f) Material etnológico; g) Obras de arte y objetos de interés artístico; h) Manuscritos raros, incunables, libros, documentos y publicaciones antiguas de interés; i) Sellos de correo; j) Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos; y k) Muebles de más de cien años e instrumentos antiguos.

Sin embargo, sin duda alguna, el instrumento internacional que mayor impacto ha tenido sobre el patrimonio ha sido la “*Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural*”, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su decimoséptima reunión en París, el 16 de noviembre de 1972. Esta convención ha sido ratificada casi por todos los Estados, siendo el reconocimiento de los bienes naturales y culturales como sitios del patrimonio Mundial, el principal interés en ello. Este documento divide tanto el patrimonio

---

<sup>7</sup> Las definiciones y clasificaciones que se entregan en los siguientes párrafos están tomados textualmente de las convenciones y recomendaciones internacionales de UNESCO y sólo se han resumido mínimamente para que calcen con la redacción de nuestro documento. Tales documentos se encuentran en el sitio web oficial de la UNESCO.

cultural como natural en monumentos, conjuntos y lugares, los cuales para ser reconocidos como patrimonio mundial deben tener un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia.

Respecto del patrimonio cultural esta convención incluye entre los “*monumentos*” las obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos; los “*conjuntos*” corresponden a grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional; y los “*lugares*” son las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

En relación al patrimonio natural, los “*monumentos naturales*” están constituidos por formaciones físicas y biológicas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico; las “*formaciones*” corresponden a formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que sean el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas y que tengan un valor universal excepcional; y los “*lugares o zonas naturales*” son áreas estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

La “*Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático*”, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su trigésimo primera reunión, París, el 2 de noviembre de 2001, incorporó un conjunto de bienes patrimoniales que estaban sin una protección internacional, especialmente aquellos que se encontraban en aguas internacionales. Varios países ya tenían legislaciones al respecto de sus territorios pero se suscitaban conflictos respecto de los que estaban fuera de sus aguas territoriales. Esta convención definía como “*patrimonio cultural subacuático*” todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante los últimos 100 años, tales como: a) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; b) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y c) los objetos de carácter prehistórico.

Otro instrumento que vino a incorporar una serie de manifestaciones culturales protegidas solo a nivel nacional hasta entonces fue la “*Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*”, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su trigésimo segunda reunión de París, el 17 de octubre de 2003. Esta convención definió el “*patrimonio cultural inmaterial*” como

los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los objetos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Esta herencia se transmite de generación en generación, es recreado constantemente en función del entorno y de la interacción con la naturaleza y la historia, e infunde un sentimiento de identidad y comunidad, promoviendo la diversidad cultural y la creatividad. Esta convención incluye entre las manifestaciones del patrimonio inmaterial las siguientes: a) las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y e) las técnicas artesanales tradicionales. Tales bienes pueden ser inscritos en la Lista Mundial de Patrimonio Inmaterial.

Además de estas convenciones, otros instrumentos de la UNESCO, como las recomendaciones internacionales, han sido importantes en el avance y adopción de nuevas categorías de patrimonio cultural y en la elaboración de las propias convenciones, como por ejemplo la *“Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes”*, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su duodécima reunión de París, el 11 de diciembre de 1962, en la cual se definen los paisajes naturales, rurales o urbanos como aquellos creados por la naturaleza o por la mano del hombre que ofrecen un interés cultural o estético o que constituyen medios naturales característicos.

También fue importante la *“Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea”*, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su decimonovena reunión de Nairobi, el 26 de noviembre de 1976, mediante la cual se definieron los *“conjunto históricos o tradicionales”* como todo grupo de construcciones y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano tanto en el medio urbano como en el rural, y cuya cohesión y valor son reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético o sociocultural; y también se definió el “entorno” de estos conjuntos como el marco natural o construido que influye en la percepción estética o dinámica de los conjuntos o se vincula a ellos de manera inmediata en el espacio o por lazos sociales, económicos o culturales.

Los anteriores documentos internacionales demuestran como el concepto de patrimonio ha ido abarcando cada vez más bienes, desde objetos a áreas, desde lo material a lo inmaterial. Incluso la distancia temporal, establecida como valor de antigüedad o de historia, quizás el valor más tradicional junto con el artístico, hoy se incorpora el valor de contemporaneidad, sin que deban existir necesariamente los anteriores, siendo cada vez más relevante los valores sociales y los deseos que manifiesten las poblaciones y habitantes de querer proteger lugares y tradiciones, aunque éstas sean recientes. Significativo de mencionar en este

contexto es la última Convención de Unesco de 2005, dedicada a la protección de la diversidad cultural, con lo cual, el concepto de patrimonio ingresa a nueva esfera de valores e interpretaciones sin dejar de lado las anteriores.

Después de la *Carta de Venecia* son varios los profesionales que han influenciado el desarrollo teórico de la conservación. Entre ellos se destaca el historiador del arte Paul Philippot, quien llegó a ser director del ICCROM. Philippot analizó el problema de cómo determinar lo genuino o lo auténtico en los bienes patrimoniales y la nostalgia romántica que siente la sociedad por el pasado. Este autor planteó que en toda restauración se debe tener en cuenta la totalidad del objeto, su contexto y su historia; que los objetos pierden parte esencial de sus valores cuando son privados de su contexto original; indagó sobre la tensión que existe entre lo nuevo y lo antiguo en toda restauración; insistió sobre la importancia de investigar los significados diversos y, a veces, contradictorios, de los bienes patrimoniales; la necesidad de tomar decisiones respecto de los valores estéticos e históricos y que la restauración debe llevarse a cabo de acuerdo a cada contexto social y cultural (Philippot, P. 1972).

En este proceso han sido tan importantes los profesionales dedicados al patrimonio como también los organismos internacionales, las asociaciones de vecinos o grupos de interés conscientes de su protección. Las fuerzas de unos y otros han llevado a la elaboración de documentos nacionales e internacionales de referencia, algunos de los cuales se han transformado en convenciones, animado la redacción de leyes o el diseño de políticas públicas. Entre ellos podemos mencionar como significativos para América Latina, además de los indicados anteriormente, los siguientes: *Normas de Quito, Ecuador (1974)*; *Convención de San Salvador (1976)*; *Carta de Burra Australia (1979-1981-1988-1999)*; *Carta de Washington, Estados Unidos (1987)*; *Recomendaciones de Santa Fe, Estados Unidos (1992)*; *Documento de Nara, Japón (1994)*; *Carta de Brasilia, Brasil (1995)*; *Declaración de San Antonio, Estados Unidos (1996)*; *Recomendaciones de Cajamarca, Perú (2003)*; *Declaración de Yamato, Japón (2004)*; *Declaración de Teemaneng, Sudáfrica (2007)*, etc. Volveremos a destacar algunas de estas cartas, documentos, recomendaciones y convenciones en relación a su aplicación en América Latina más adelante.

No puede dejarse de mencionar, al menos para lo que toca a América Latina, la importancia de la labor académica como institucional que han realizado personas y organismos, tanto nacionales como internacionales, los cuales han orientado el quehacer patrimonial durante muchas décadas como ICOMOS, ICOM, UICN, ICCROM, OEA, como también el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, Parques Canadá, INAH de México, IPHAN de Brasil, INC de Perú, Getty Conservation Institute de Estados Unidos, el Instituto del Patrimonio Histórico Andaluz, entre otras entidades, además del Banco Interamericano del Desarrollo

(BID) y el Banco Mundial (BM), estos dos últimos en el otorgamiento de préstamos financieros para la implementación de proyectos de puesta en valor del patrimonio.

## **Importancia, Significados y Tendencias del Patrimonio en la Actualidad**

Explicar la importancia y el significado que tienen los bienes patrimoniales para cada comunidad ha sido preocupación central de muchos profesionales que se han dedicado a este campo. Además de John Ruskin y sus colegas del siglo XIX, uno de los primeros teóricos del siglo XX en tratar este tema en profundidad fue el Alois Riegl, quien en 1903 publicó en Viena su libro *El Culto Moderno a los Monumentos*, en donde analiza los valores y significados que la sociedad otorga a los monumentos. Este autor plantea que entre los valores rememorativos están los de antigüedad, los históricos y los valores rememorativos intencionales; y que, entre los valores de contemporaneidad o del presente, están los instrumentales y los artísticos, distinguiendo en estos últimos, los valores de novedad y de relatividad.

En la primera parte de su trabajo rescata la definición más antigua de monumento indicando que es:

*“...una obra realizada por la mano humana y creada con el fin específico de mantener hazañas o destinos individuales (o un conjunto de estos) siempre vivos y presentes en la consciencia de las generaciones venideras.” (Riegl, A. 1987:23)*

Pero aclara que la:

*“...creación y conservación de estos monumentos “intencionados”, que se remonta a los primeros tiempos documentados de la cultura humana, no ha concluido hoy ni mucho menos, pero cuando hablamos del moderno culto y conservación de los monumentos, prácticamente no pensamos en estos monumentos “intencionados”, sino en los monumentos históricos y artísticos...” (Riegl, A. 1987:23)*

Lo novedoso del aporte inicial de Riegl tiene relación con la identificación y diferenciación entre los valores que asignamos a los monumentos conmemorativos, y los que otorgamos a los monumentos históricos y al patrimonio histórico en general. De igual modo es importante su distinción entre el valor de antigüedad y el valor histórico; su visión de que los monumentos históricos deben ser tratados como objetos sociales; que la sociedad es la que atribuye sentidos a los monumentos, los cuales pueden ser contradictorios; explicar los alcances del valor de la novedad en los monumentos históricos; y fundamentar una visión no

dogmática y relativa de la comprensión de los valores del patrimonio (Choay, F. 2007: 142-147).

Reigl presidió la Comisión de Monumentos Históricos de Austria, desde la cual se le encomendó proponer un proyecto de ley sobre su protección y conservación. Por esos mismos años varios países de Europa iniciaron un proceso formular nuevas legislaciones o actualizar las que tenían, lo cual también inspiró a adoptar normas similares en América Latina, como fue el caso de Chile, que veremos en detalle más adelante.

La *Carta de Atenas* de 1931, la creación de la UNESCO en 1945, la *Carta de Venecia* de 1964, la creación de ICOMOS en 1965, etc., fueron instrumentos e instituciones que pusieron cada vez más atención en los valores patrimoniales y en la elaboración de definiciones cada vez más amplias, que abarcaron desde lo material a lo inmaterial y desde el objeto, el conjunto y su entorno natural y cultural. Los valores más destacados de los bienes patrimoniales han sido los históricos y los artísticos, pero crecientemente fueron incorporados los científicos y los sociales. Hoy día, la mayoría de las legislaciones establecen como requisito para la declaración oficial de un bien como patrimonio, el establecer uno o más de estos valores, los cuales se aplican al patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico, artístico e inmaterial.

La *Carta de Burra*, elaborada por ICOMOS-Australia en 1979, ha sido clave en establecer un marco actualizado de los valores patrimoniales, que en dicho documento se denomina como la significación cultural del patrimonio, indicándose, sin orden de importancia, los valores estético, histórico, científico y social. En dicho documento, adoptado oficialmente por las autoridades patrimoniales australianas, también se definen claramente los conceptos de conservación en un sentido amplio, incluyendo este la mantención, preservación, restauración, reconstrucción, adaptación, entre otros, además de establecer una serie de principios que orientan la intervención en los bienes patrimoniales (Pearson, M. y Sullivan, S. 1995).

Más recientemente, el Instituto de Conservación Paul Getty de Los Ángeles, California, ha elaborado varios estudios y reuniones internacionales para analizar estos temas (De La torre, M. y Mason, R. 1999; Avrami, E., Mason, R. y De la Torre, M. 2.000; De la Torre, M. 2002). En uno de sus trabajos dirigido por Marta de la Torre, en el cual participaron diversos expertos como David Lowenthal, David Throsby, Lourdes Arizpe, Uffe Juul Jensen, Erik Cohen, Mona Serageldin, Susan M. Pearce y Daniel Bluestone, se analizaron cómo se entienden los valores patrimoniales, se aplican tales conceptos en la conservación y se administran en la gestión de los sitios patrimoniales de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Australia (De la Torre, M. el al 2005).

En tal trabajo se llegan a las siguientes conclusiones: a) que las decisiones sobre qué conservar, por qué conservar, a menudo se toman de manera independiente de quienes trabajan en la conservación del patrimonio y también al revés; b) que las futuras decisiones sobre la conservación del patrimonio no estarán centradas en los objetos y sitios sino más bien en los diversos contextos en los cuales la sociedad los inserta; c) que cualquier intervención sobre el patrimonio está condicionada respecto de cómo lo valoramos, el ambiente social, los recursos existentes, las prioridades locales, etc.; d) que la conservación del patrimonio está constantemente cambiando, donde lo local y lo global son factores gravitantes; e) que a medida que se intensifican los cambios sociales y culturales, aumentan las demandas por la conservación del patrimonio, sea para minimizar los efectos adversos de dichos cambios o para hacerlos más efectivos; f) que los bienes patrimoniales tienen frecuentemente valores contradictorios donde se enfrentan distintas visiones del pasado de cada sociedad, acentuándose las discusiones respecto de quiénes deben decidir sobre su gestión; g) que el patrimonio ha logrado un reconocimiento universal; h) que el patrimonio es modificado por cada generación de manera consciente e inconsciente, y que las sucesivas intervenciones de conservación lo recrean de una u otra manera de acuerdo a los valores imperantes; i) que los valores estéticos, históricos, religiosos, políticos, económicos, entre otros, son cada vez más reconocidos en la gestión del patrimonio; j) que las comunidades locales logran en forma creciente la imposición de sus valores, no obstante el conflicto existente con el turismo desmedido, las presiones inmobiliarias, etc.; y k) que la conservación moderna del patrimonio debe ser emprendida integralmente, tanto técnicamente como socialmente (De la Torre, M., et al 2005).

Sin embargo, el camino del reconocimiento del patrimonio, en toda su diversidad no ha sido fácil. Para el caso de los bienes arqueológicos, cuyo valor de antigüedad e histórico es ampliamente aceptado, el proceso ha sido más rápido, lo cual no significa que esto haya detenido su deterioro o destrucción en muchos casos. En cambio, para el patrimonio arquitectónico ha sido más complejo, particularmente cuando éste es más reciente, especialmente si está inserto en las áreas de mayor presión inmobiliaria, si es poco apreciado por la comunidad, no está protegido legalmente o no existen incentivos económicos para su mantención y restauración.

No obstante ello, a lo largo del siglo XX, tanto en las distintas legislaciones nacionales como acuerdos internacionales, se ha llegado al consenso de que el patrimonio cultural, en toda su diversidad, es importante de conservar a lo menos por las siguientes razones: a) por ser el producto de diferentes tradiciones culturales e históricas que expresan la diversidad de nuestra tierra y su gente; b) porque la diversidad cultural enriquece la visión de mundo, aumenta la creatividad y permite valorar mejor la realidad; c) porque proporciona bienes de valor artístico y simbólico; d) debido a que permite rescatar y potenciar las capacidades adaptativas de cada



sociedad; e) contribuye a mejorar la calidad de vida; f) facilita la identidad de la gente con su pasado y con un proyecto de futuro compartido; g) porque posee un valor económico que bien utilizado puede generar oportunidades y beneficios tanto privados como públicos.

Si bien existe acuerdo general sobre la importancia del patrimonio en las sociedades actuales, que la gama de bienes protegidos es más amplia, que el origen temporal de estos se acerca al presente más que nunca antes, siguen existiendo los mismos desafíos centrales que hace más de un siglo, como por ejemplo cómo se decide lo qué es patrimonial, quién lo decide, cómo se conserva, cómo la comunidad puede beneficiarse mejor de su protección, cómo superar las contradicciones latentes entre lo nuevo y lo antiguo, quién debe pagar por la conservación de los bienes patrimoniales públicos, etc. Temas que siempre acompañarán a la gestión integral del patrimonio en nuestras sociedades.

En este contexto los monumentos conmemorativos, identificándose como tales aquellos bienes instalados como hitos de la memoria política, social y cultural, tanto de ayer como de hoy, una vez ubicados en plazas, parques y avenidas, tienen más garantías de perpetuarse, salvo aquellos más recientes, instalados por regímenes dictatoriales, que la sociedad decide erradicar. Sin embargo, también los bienes culturales que se han ido catalogando como patrimoniales y que están protegidos por la legislación, están sujetos a una gran gama de problemas y amenazas para su conservación. Tales bienes patrimoniales han ido aumentando de manera impresionante y todo indica que dicho proceso continuará, en la medida que las comunidades sean más efectivas en los procedimientos de declaración patrimonial, que hasta el presente, son esencialmente actos de la autoridad administrativa o por ley.

Tradicionalmente quién decidía lo que era patrimonial se daba en un proceso que partía con el interés de ciertos profesionales y que la autoridad política decidía, sin que la opinión ciudadana participara activamente, salvo casos excepcionales. En cambio, en las últimas décadas, las comunidades se han involucrado cada vez más, reclamando primero la protección de los bienes patrimoniales, pero también exigiendo participar en cómo tales bienes tienen que ser protegidos, conservados y administrados. Esta situación ha llevado a conflictos entre las comunidades y los profesionales, entre las comunidades y las autoridades políticas, de las comunidades contra diversos intereses económicos, y muchas de estas situaciones con una autoridad política vacilante respecto de quien apoyar (Cabeza, A. 2009).

En este contexto, tal como indica David Lowenthal en una investigación dirigida por Marta de la Torre, es frecuente escuchar críticas comunes en contra del patrimonio de que es irrelevante frente a las urgentes necesidades del presente, que constituye más una carga que un beneficio, que es motivo de conflictos respecto de quien lo

posee, y entre los intereses públicos y privados que lo afectan, etc. (De la Torre, M. 2000:18-25).

Sin embargo, el patrimonio tiene hoy un prestigio nacional e internacional y es considerado como un valor universal. Su capacidad de vincularnos con el pasado es cada vez más apreciada en un mundo de cambios veloces y de pérdidas de identidades. El patrimonio posee la característica no solo de mostrar nuestros orígenes sino también el proceso de mestizaje permanente en la construcción de nuestras sociedades. La ampliación de los valores y significados que atribuimos a los bienes patrimoniales, la amplitud y escala de los objetos, estructuras y áreas sujetas a ser considerados como patrimonio, la participación cada vez más activa de las comunidades que demandan su protección y uso, la consciencia plena de las comunidades, respecto de que el patrimonio les proporciona sentidos de pertenencia e identidad, en un mundo de cambios veloces y de aumento de la incertidumbre, nos permiten plantear que el patrimonio y su conservación se han constituido en un tema central para todas las sociedades contemporáneas.



Día del Patrimonio, Palacio de La Moneda  
Fotos A. Cabeza



Día del Patrimonio, Intendencia de Santiago

En el desarrollo del concepto de patrimonio en la actualidad estamos tan lejos como cerca de las primeras actitudes que los seres humanos construyeron para comprender su relación con el pasado. Hoy podemos concluir que el patrimonio cultural está integrado por todas las manifestaciones o producciones humanas, tangibles o intangibles, las construcciones y los lugares que son representativos de una determinada sociedad o cultura, pretérita o actual, que posean una importancia arqueológica, histórica, etnográfica, científica, social, artística, étnica, simbólica, arquitectónica, ambiental o educativa.

Tal como señala la antropóloga Rosa Méndez (2002), en las últimas décadas el patrimonio ha adquirido nuevos significados, que sin alejarse de componente esencial que alude al pasado, lo han vinculado con fuerza a la esencia misma de

la cultura y a la identidad de las comunidades. Esta relación ha estado siempre presente en el referente de los monumentos conmemorativos pero no necesariamente en todos los bienes que heredamos del pasado.

Para que los bienes del pasado, incluso los más recientes, sean considerados como parte del patrimonio histórico y cultural de una comunidad o nación es necesario que tenga lugar un proceso simbólico de apropiación colectiva. Tal como indica Rosa Méndez:

*“...para que un objeto pueda convertirse en patrimonio es precisa la articulación y puesta en marcha de una serie de estrategias que conduzcan a una sanción social legitimadora; un proceso de patrimonialización en el que la sociedad participa sancionando aquella propuesta que un grupo -o un agente social concreto- lleva a cabo.” (Méndez, R. 2002)*

En este proceso de patrimonialización actúan tanto las instituciones públicas como las comunidades, para las cuales el patrimonio es un referente simbólico de los valores de identidad, aunque no sean compartidos por todos los estratos sociales, donde los bienes patrimoniales, sea objetos, construcciones, lugares o tradiciones, se convierten, tal como nos dice Rosa Méndez (2002), en *“hechos a conservar”*, a *“recuperar”* y hasta a *“inventar”*.

Otros autores, como Macarena Hernández y Esteban Ruíz (2008), en un trabajo de investigación patrimonial en diferentes comunidades de Andalucía, han señalado:

*“No nos ha interesado tanto qué sea patrimonio, sino cómo se hace el patrimonio. Desde esta perspectiva, es desde donde hemos considerado el patrimonio en todo momento fruto de una intervención social, de aquí la idoneidad de hablar de patrimonialización. Partimos de una conceptualización dinámica, que considera al patrimonio como algo construido dentro de un contexto complejo de carácter socio-técnico-político. La patrimonialización supone una intervención social que señala y remarca aquello que se entiende como valioso. (Hernández, M. y Ruíz, E. 2008:134)*

Estos investigadores expresan con claridad los resultados de su trabajo en donde se vinculan cultura-patrimonio-identidad, señalando que:

*“...la patrimonialización afecta tanto a la configuración cultural como a los cauces de reconocimiento colectivo que en ella tienen lugar, y desde los que se establece la participación en los mismos...la patrimonialización es un contexto estratégico de intervención social y participación sociopolítica. Esta circunstancia que tanta resistencia puede provocar en la academia o*

*entre los profesionales, parece ser perfectamente entendida entre los componentes de los sistemas de poder locales (alcaldes, colectivos ciudadanos, intelectuales locales...” (Hernández, M. y Ruíz, E. 2008:135-136)*

Hernández y Ruíz concluyen su estudio manifestando que han descubierto en su trabajo de terreno:

*“...modelos (de planteamientos y por supuesto de acción) de corte desarrollista-turístico junto a planteamientos más centrados en la identidad colectiva y la cohesión social a partir de la rehabilitación-reencuentro con el pasado. Son los modelos los que nos ayudan a identificar elementos, hasta el punto de que los elementos —en su carácter comunicativo-significante— pueden manifestar una clara polisemia en cuanto a distintos modelos de patrimonialización que funcionan simultáneamente en algunas de las comarcas estudiadas, y los que de manera evidente ponen rostros a los actores de la patrimonialización en cada una de las sociedades locales donde hemos analizado el proceso.” (Hernández, M. y E. Ruíz, 2008:137)*

Podemos tener diferentes apreciaciones sobre los aspectos políticos que lleva implícitos el proceso de patrimonialización en el presente, pero estos también los encontramos en el pasado distante y reciente. Al respecto son claros los ejemplos y análisis que presenta Llorenç Prats (2004). Hoy, al igual que ayer, podemos darle de manera consciente o inconsciente, una intencionalidad a los bienes que heredamos, sea individual o colectivamente. Tal como señala el sociólogo Carlos Fortuna (1998:70) los bienes patrimoniales y los monumentos son una invitación al pasado y, en algunos casos, del presente. En la relación que establecemos con el patrimonio hay seducción mutua. Tal como dicen Josep Ballart y Jordi Juan i Tresserras (2001) en esa relación está lo intelectual pero también lo emocional, las cuales, agrego yo, estimulan nuestros sentidos de la vida.

La importancia creciente del patrimonio en las sociedades modernas ha sido vinculada también al impacto del individualismo, a la pérdida de la seguridad grupal, a la necesidad de buscar y rescatar antiguos referentes identitarios y de crear otros nuevos. Tal como dice la historiadora y arqueóloga Almudena Hernando:

*“A diferencia del modo en que construyen la identidad los miembros de sociedades de menor complejidad socio-económica, los seres humanos de la Modernidad depositan en el “yo” la pretensión de autonomía e independencia frente a una realidad que es inabordable. Si dicha fantasía se puede sostener es porque paralelamente a su desarrollo fueron generándose mecanismos que, de forma inconsciente, potenciaban la idea de protección, pertenencia y vínculo. Es decir asumían la función que en las sociedades pre-modernas cumplían los mitos, para lo cual deben adoptar su misma estructura cognitiva:*

*representar a una instancia protectora cuya memoria se cuenta a través de referencias espaciales y no temporales. La noción de patrimonio cultural es uno de esos mecanismos, imprescindibles para la construcción de la Modernidad.” (Hernando, A. 2009:89)*

## **2.4 Las Cartas y Convenciones Internacionales y su aplicación en América Latina y Chile**

El proceso de reconocimiento y valoración del patrimonio durante el siglo XX en América Latina se ha debido a causas internas y externas, siendo estos factores de distinta intensidad según a cada país. En este contexto ¿cuál ha sido la influencia que han tenido las convenciones y cartas sobre el patrimonio en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles han sido sus impactos en las instituciones gubernamentales del patrimonio, en los profesionales, en las universidades, en los organismos internacionales y los no gubernamentales? ¿Cuál ha sido el aporte de la región al desarrollo de nuevas políticas internacionales y a la revisión y extensión de los conceptos tradicionales del patrimonio?

Las respuestas a estas preguntas serán variadas de acuerdo a la experiencia y posición de quien intente responderlas. Algunos serán críticos a la situación actual y pondrán acento en los errores, la falta de conciencia, la destrucción acelerada del patrimonio y de las formas de vida tradicionales. Otros navegarán en el sentido contrario, destacando tendencias positivas y una creciente demanda y participación ciudadana en pro del patrimonio. Desde mi perspectiva, la comprensión real se logra caso a caso, aunque es posible identificar algunas tendencias generales (Cabeza, A. y Simonetti, S. 1997; Cabeza, A. 2004).

Una primera consideración. En lo concerniente a la relación entre el patrimonio natural y cultural, la tendencia en América Latina y El Caribe ha sido tener instituciones nacionales separadas. Los primeros parques nacionales y reservas naturales se crean principalmente durante las dos primeras décadas del siglo XX -salvo el caso de México que es anterior- los cuales son creados preferentemente por los servicios forestales de cada país. Desde el punto de vista legal y de las políticas de manejo, la “*Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas de América*” de 1940, más bien conocida como la *Convención de Washington*, tuvo un tremendo impacto positivo en la creación de nuevas áreas protegidas y unificar criterios en las siguientes décadas, siguiéndose más o menos el modelo norteamericano, incluyendo en casos emblemáticos sitios arqueológicos relevantes que estaban insertos en áreas naturales.

En lo relativo a la protección del patrimonio cultural, sus inicios están muy marcados por el movimiento de la ilustración francesa del siglo XVIII, que adquiere gran relevancia en los procesos de emancipación de las colonias españolas,

cuyos líderes lucharon por la independencia política y por desprenderse de los símbolos del poder colonial, siendo fundamental para ello la formación de identidades nacionales creando, como parte del proceso, las primeras bibliotecas y museos nacionales. Sin embargo, en muchos países, se trató de borrar el legado español porque representaba el pasado y se intentó reemplazarlo por lo que se consideraba moderno, siendo la influencia francesa la predominante en el arte y la arquitectura. Este contexto cultural, político y económico, implicó la destrucción de importantes bienes patrimoniales arquitectónicos urbanos y rurales, hasta que a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se empezó a valorar nuevamente el legado histórico y arquitectónico colonial.

En la *V Conferencia de la Unión Panamericana*, celebrada en Santiago de Chile en 1923, se recomendó a todos los estados la protección de su patrimonio histórico, creando legislaciones e instituciones para ello. Es así como en los próximos años se dictan una serie de leyes de protección y se declaran como monumentos nacionales importantes ciudades prehispánicas y centros históricos, fortificaciones e iglesias coloniales. México, por cierto, había comenzado este proceso con anterioridad y su proceso revolucionario llevó a la expropiación de los bienes patrimoniales de la Iglesia católica, los cuales fueron destinados a usos públicos siendo varios de ellos transformados en museos.

Previamente, la celebración del centenario de la independencia de varios países americanos, fue también un impulso para este proceso de mayor conciencia de una identidad nacional, de conmemoración histórica y de protección del patrimonio, el cual se venía gestando varias décadas antes.

Sin embargo, podemos situar entre 1910 y 1940 un período en que las elites intelectuales logran instalar el concepto de patrimonio de manera legal e institucional, donde el patrimonio latinoamericano comienza a ser descubierto e intencionado como base de la identidad histórica de cada país, tanto en su origen preeuropeo como colonial, en algunos casos como fundamento para una ideología de identidad nacionalista que buscaba integrar lo mejor del pasado hispano e indígena y, en otros, del pasado esencialmente europeo o indígena, pero de manera excluyente, con las consecuentes contradicciones que ello implicaba en lo social, político y económico.

Identificado parte del patrimonio que debía ser protegido, surgió la pregunta de cómo mantenerlo y restaurarlo. En el caso de los sitios arqueológicos el tema principal fue el de las excavaciones y de la consolidación estructural; en el caso del patrimonio arquitectónico el tema principal fue como enfrentar la restauración. En ambos casos la tentación de las reconstrucciones hipotéticas estuvo presente, sea por exigencias políticas o por la creciente demanda turística que en algunos países comenzó.

Los profesionales interesados en este tema, principalmente historiadores, arquitectos y arqueólogos, estuvieron influenciados fundamentalmente por las corrientes teóricas europeas, en cuyas universidades se formaron algunos de ellos. Al concluir la Primera Guerra Mundial, con su secuela de millones de muertos y de destrucción, se creó en 1920 la *Sociedad de las Naciones* con el anhelo de evitar futuras guerras y mantener la paz. Como un mandato de esta entidad se funda el *Instituto Internacional de Cooperación Intelectual*, organismo antecesor de la UNESCO, con el espíritu de restablecer la comunicación y el reencuentro entre los intelectuales de todos los países, destacándose la importancia de la protección de los museos, bibliotecas, archivos y monumentos de las consecuencias de la guerra.

En este contexto tiene lugar la “*Carta de Atenas*” de 1931, que es uno de los primeros documentos internacionales que establece una serie de principios de conservación de los monumentos que orientaron a muchos profesionales latinoamericanos. Esta carta es el resultado del primer Congreso de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, en la cual se manifestó que la conservación del patrimonio artístico y arquitectónico interesa a todos los Estados y que debe ser un área de cooperación internacional; que se debe recurrir constantemente a labores de mantenimiento de los monumentos, a fin de no llegar a una situación que exija una restitución integral; que la restauración sólo procede en casos imprescindibles, y que cuando se realiza, se debe respetar la obra del pasado sin prescribir el estilo de ninguna época; se consagra el derecho de la colectividad frente al interés privado en la protección de los monumentos; que el Estado debe tener el poder y los recursos para tomar medidas de conservación en casos de urgencia y se enfatiza la importancia que tiene el uso de los monumentos -uso que debe respetar su carácter histórico y artístico- para mantener el carácter vital del patrimonio.

La *Carta de Atenas* incluye aspectos novedosos, como el respeto a las ruinas evitando las reconstrucciones hipotéticas, pero autorizando la anastilosis, recomienda el cuidado del entorno de los monumentos y el reentierro de los sitios arqueológicos después de las excavaciones. Importa destacar que también permite el uso cuidadoso de materiales nuevos en la restauración de edificios antiguos, recomendando el uso del cemento armado. Esta carta tuvo un especial impacto en varias generaciones de profesionales y guió la restauración de muchos monumentos en América. Por cierto uno de sus problemas fue el abuso del cemento en importantes sitios patrimoniales arqueológicos y coloniales en detrimento de los materiales originales como la piedra, la cal y el adobe.

La Segunda Guerra Mundial fue mucho más destructiva en vidas humanas y bienes materiales que la anterior. La pérdida de patrimonio fue incalculable y las campañas de reconstrucción de las ciudades fueron a gran escala, lo cual llevó a importantes discusiones sobre la restauración. En este ámbito el nacimiento de las

Naciones Unidas en 1945 y de la UNESCO en 1946 fueron un avance de gran importancia por el marco legal internacional y el debate de nuevas ideas sobre el patrimonio.

Un primer hito de UNESCO lo constituye la “*Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado*”, aprobada en La Haya en 1954, que es una clara reacción frente a la destrucción del patrimonio durante los conflictos armados, en particular la Segunda Guerra Mundial. Esta convención se basa en los primeros acuerdos internacionales que se realizaron sobre el tema, y que tuvieron lugar en la misma ciudad de La Haya en 1889 y 1907. El documento refleja la consolidación del principio que el patrimonio de cada nación importa a toda la humanidad. Además, este acuerdo asume que la protección del patrimonio pasa necesariamente por el establecimiento de normas internacionales.

Conceptualmente, la Convención de La Haya define los bienes culturales de un modo tradicional, asimilando el término al de “*monumentos*”, en particular los históricos y artísticos. La Convención pretende no sólo evitar la destrucción de los bienes culturales, sino también evitar la apropiación indebida de éstos en caso de guerra. El acuerdo instaura un “*Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial*”, y establece una serie de disposiciones que regulan el tratamiento de los bienes culturales en caso de guerra. Una buena parte de los países americanos la ha suscrito.

El segundo *Congreso de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos*, realizado en 1964, elaboró la “*Carta de Venecia*”, que reafirma todos los principios establecidos en la Carta de Atenas e incorpora otros nuevos, indicando la necesidad de preservar no sólo el monumento en particular, sino también el escenario en el cual éste está inserto, cuando aún se conserva; se establece el imperativo de no trasladar los monumentos, a menos que lo exijan razones de fuerza mayor; se recomienda que los elementos que están dentro de un monumento y que forman parte de éste, tales como esculturas o pinturas, sólo deben ser retirados del mismo cuando ello es un requisito para preservarlos; se indica que los trabajos de restauración deben estar precedidos de un estudio acucioso, de tipo arqueológico e histórico y que la restauración debe parar cuando empiezan las conjeturas; así también se deben respetar los materiales auténticos y los trabajos adicionales deben ser reconocibles como contemporáneos.

A diferencia de la *Carta de Atenas*, se indica que no se deben probar tecnologías modernas en la restauración, sino utilizar aquéllas cuya eficacia e idoneidad ha sido previamente comprobada. Por otra parte, la unidad de estilo no es el objetivo de la restauración, por lo que las contribuciones de todos los períodos y corrientes estilísticas del monumento deben ser respetadas.



Para el caso de los monumentos arqueológicos, la *Carta de Venecia* establece la necesidad de que las excavaciones arqueológicas se rijan por una recomendación específica formulada por la UNESCO en 1956. En los trabajos de reconstrucción de ruinas, sólo se debe permitir el reensamble de partes desmembradas, recomendando no introducir nuevos elementos, debiendo ser los materiales utilizados claramente reconocibles como contemporáneos.

La *Carta de Venecia* tuvo un impacto profundo en los profesionales de la época, especialmente los arquitectos, logrando la creación en 1965 del *Consejo Internacional de los Monumentos y de los Sitios* (ICOMOS), organización no gubernamental de carácter internacional. Esta entidad se constituyó en asesora de UNESCO sumándose a ICCROM, que había sido creada por UNESCO en 1958. La constitución de comités nacionales de ICOMOS en muchos países de América permitió que se difundiera el espíritu de la *Carta de Venecia* y que sus principios se apliquen en las restauraciones de monumentos hasta hoy en día.

El siguiente documento de importancia internacional impulsado por UNESCO es la “*Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales*”. Esta Convención fue aprobada en 1970, inaugurando una década que dio vida a muchas iniciativas en esta área, que son producto de un largo proceso de toma de conciencia sobre la necesidad de proteger el patrimonio. La Convención protege los bienes culturales expresamente designados por los Estados como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia. La Convención obliga a los Estados Parte a establecer servicios encargados de proteger el patrimonio cultural, a mantener un inventario de los bienes más importantes, a crear instituciones que los conserven, a regular su tratamiento y a educar con miras a su valorización. Se establece que las exportaciones de bienes culturales requerirán de un certificado emitido por cada Estado. Esta convención ha sido suscrita por casi todos los estados de América Latina y complementada con tratados o convenios bilaterales, pero países como Chile y Guyana aún no la ratifican, aunque se está en vías de lograrlo.

La “*Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural*” de la UNESCO de 1972 es, sin duda, la que mayor éxito ha tenido a nivel mundial y también en América Latina. Esta Convención implica un cambio cualitativo de gran importancia en la forma de abordar el patrimonio, pues tiene un enfoque integral del patrimonio natural y cultural. Frente al hecho de que no todos los países cuentan con instituciones adecuadas y recursos suficientes para proteger el patrimonio cultural y natural, y que el logro de tal ideal demandará mucho tiempo y esfuerzos, la Convención establece un sistema internacional de protección, que no reemplaza la acción del estado en cuestión pero que la complementa.

En lo referente a la organización de un sistema de asistencia internacional para la protección del patrimonio cultural y natural, se crea un Comité Intergubernamental de protección del patrimonio, con representantes de los Estados Partes, elegidos por la totalidad de ellos. Los Estados Parte deben presentar a este Comité un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio, en base a los cuales se elabora una “*Lista del Patrimonio Mundial*”, con los bienes que se consideran de valor universal de acuerdo a ciertos criterios.

Otro mecanismo establecido por la Convención es la “*Lista del Patrimonio Mundial en Peligro*”, que incluye los bienes patrimoniales que están en peligro y demandan grandes trabajos de conservación y asistencia internacional. El Comité decide cuándo procede la ayuda. Los recursos para ello provienen de un Fondo conformado por recursos provenientes de las contribuciones obligatorias y voluntarias de los Estados Parte, de legados o donaciones, de los intereses que el mismo Fondo produce y del producto de colectas o recaudaciones.

Esta convención ha sido suscrita por casi todos los países de América y ha tenido un impacto positivo en la conservación del patrimonio natural y cultural. Hasta el año 2015 se han declarado 2015 sitios del patrimonio mundial, de los cuales 802 son culturales, 197 naturales y 32 mixtos. En América es cifra bordea los 200 sitios, de los cuales poco más de 150 corresponden a la América Latina y el Caribe. No obstante esta cifra, que va aumentando cada año, existen desbalances regionales a nivel mundial y a nivel de cada región, ya que la mayoría de los sitios de patrimonio mundial se concentran en Europa y existen importantes vacíos relacionados a los bienes patrimoniales modernos, el patrimonio industrial y el natural. En nuestro continente, en cifras del 2015, por ejemplo México ha logrado la inscripción de 32 sitios, seguido de Estados Unidos con 21, Brasil con 19, Canadá con 16, Perú con 12, Cuba con 9, Argentina con 9, Colombia con 8, Bolivia con 7 y Chile con 6 (<http://www.portal.unesco.org>).

La *Convención del Patrimonio Mundial* ha sido fundamental para potenciar el trabajo de las instituciones nacionales del patrimonio y la sensibilidad ciudadana a favor de la conservación. Sin embargo, la falta de recursos humanos y financieros, no ha permitido avanzar de manera más coherente y rápida para evitar el deterioro o controlar mejor las presiones turísticas que el desarrollo de tales sitios implica. Si bien el turismo ha significado recursos importantes, solo una pequeña parte se destina a la conservación y al manejo adecuado de tales lugares.

La aplicación de la *Carta de Venecia* a la realidad latinoamericana llevó a ICOMOS a promover una reunión en Quito, Ecuador, cuyo resultado fue la redacción de un documento conocido como las “*Normas de Quito*” en 1974. Este documento constata la necesidad de asumir medidas de emergencia en relación al patrimonio cultural llamando la atención sobre el deterioro que sufren. Sin

embargo, el documento expresa optimismo y señala que los países están reconociendo y asumiendo que el patrimonio representa un valor económico fundamental para el desarrollo. Las Normas de Quito destacan el principio de que la protección de los monumentos debe incluir el contexto urbano en que se encuentran, el ámbito natural que lo enmarca y los bienes culturales que lo integran. Además, establece el principio de que una zona o sitio puede tener carácter monumental sin que ninguno de los elementos que lo constituyen, considerados aisladamente, merezcan esa designación.

Las *Normas de Quito* afirman la importancia de la declaración y registro oficiales de los bienes culturales para que se constituyan en monumentos nacionales, de tal manera que el Estado podrá hacer que su función social prevalezca y determinar la medida, según los casos, en que tal función social sea compatible con la propiedad privada o el interés de los particulares. En este documento se constata que, en el caso de los numerosos monumentos americanos amenazados de destrucción, lo que falta no son medidas de protección, que están vigentes, sino una política oficial que inyecte eficacia a estas medidas y que promueva una valoración de los bienes en cuestión. Por otra parte, se reconoce la necesidad de incluir el patrimonio monumental en los planes de regulación urbanística. En este contexto, las *Normas de Quito* han sido una guía de referencia especialmente para arquitectos y profesionales vinculados a ICOMOS, pero no ha sido lo suficientemente difundida a pesar de su importancia.

La OEA también ha sido parte de este proceso de mayor sensibilidad internacional a favor del patrimonio. Una importante contribución de dicha entidad es la llamada “*Convención de San Salvador*” de 1976, que se refiere a la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas. Su objetivo es identificar, registrar, proteger y vigilar los bienes patrimoniales, impidiendo la exportación e importación ilícita de éstos y promoviendo la cooperación entre los Estados americanos para su conocimiento y apreciación. Para evitar el comercio ilícito de bienes culturales, la Convención de San Salvador establece que cada país promoverá medidas como el registro de las colecciones y de los traspasos de bienes patrimoniales, y la prohibición de importar bienes culturales sin el certificado y la autorización correspondiente.

La “*Carta para la Conservación de los Lugares de Valor Cultural*” fue adoptada por el Comité australiano de ICOMOS a finales de la década de los 70, la cual ha tenido varias adiciones después. Este documento ha llegado en forma tardía a los profesionales de América Latina, pero cada vez es más conocido y valorado. El documento, llamado también “*Carta de Burra*”, entrega un conjunto de definiciones que clarifican los conceptos asociados al patrimonio cultural y a su tratamiento. Es así como define nociones tales como valor cultural, tejido histórico, conservación, preservación, restauración, uso compatible, entre otros. Este documento ha sido mejorado en diversas ocasiones e incluye tres guías

redactadas para contribuir a la aplicación de la *Carta de Burra*. Uno de sus principales aportes ha sido situar el concepto de la significación cultural y su variabilidad como eje de las políticas de conservación.

Otro esfuerzo valioso de ICOMOS fue la redacción de la “*Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas*”, llamada también “*Carta de Washington*”, que fue adoptada por la Asamblea General de ICOMOS en 1987. Este documento especifica qué elementos son los que deben ser atendidos cuando se trata de proteger o conservar un conjunto urbano; la relación entre los espacios y las edificaciones; la relación entre la ciudad y su entorno y las funciones que el conjunto urbano ha adquirido en el curso de su historia. La Carta establece la necesidad de contar con planes de conservación de las ciudades y barrios históricos, planes que deben estar precedidos por estudios multidisciplinarios y que deben definir las acciones a realizar en los ámbitos jurídico, administrativo y financiero. La Carta de Washington reconoce que la introducción de elementos contemporáneos que no perturben la armonía del conjunto puede contribuir a su enriquecimiento. Se considera imprescindible, sin embargo, que no se permita la penetración de vías de alto tráfico en ciudades o barrios históricos, y que se adopten en ellos medidas de seguridad especiales contra catástrofes naturales, contaminación y otros factores de riesgo.

El “*Documento Nara sobre Autenticidad*” fue adoptado en la Conferencia organizada por ICOMOS que se realizó en Nara, Japón, en 1994. Toma como referencia la *Convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural de la UNESCO* (1972) y la *Carta de Venecia* (1964). Este Documento parte con una serie de reflexiones que destacan la diversidad cultural como un valor en sí mismo, que debe ser promovido, sobre todo en un contexto de homogeneización y globalización como el que enfrentamos. Toda vez que los diversos valores culturales pueden entrar en conflicto entre sí, se establece la necesidad de reconocer que los valores culturales de todas las partes son legítimos.

En relación al tema de la autenticidad de los bienes culturales patrimoniales, el *Documento Nara* establece que las acciones de conservación tienen su razón de ser en virtud de los valores que se atribuyen a los bienes patrimoniales. Esta atribución de valores depende en gran medida de la calidad de las fuentes de información disponibles sobre ellos y de la capacidad de entenderlas. El concepto de autenticidad está asociado a la comprensión de estos valores y condiciona todas las acciones de conservación. El *Documento Nara* reconoce que los valores que se atribuyen al patrimonio cultural pueden variar entre las diferentes culturas y en una misma cultura a través del tiempo, lo que implica que no se debe establecer criterios fijos para basar los juicios de valor y autenticidad.

Entre el 2003 y el 2004 tres reuniones internacionales tuvieron lugar en México, Argentina y Perú para debatir precisamente estos temas. La primera en Querétaro,

en diciembre del 2003, que reunió a profesionales de las instituciones culturales y de ICOMOS de América y España. Esta reunión se centró en el análisis de la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO y de la aplicación de la Convención. En ella se discutieron la representatividad y autenticidad, la necesidad de diseñar estrategias para evitar la pérdida de credibilidad de la *Lista de Patrimonio Mundial* y los desequilibrios que actualmente existen entre Europa, el resto del mundo y particularmente América Latina. Allí se planteó la necesidad de apoyar a los países que tienen bienes de valor universal pero que no cuentan con las estructuras institucionales o recursos para elaborar los expedientes de cada sitio, como también potenciar las postulaciones que involucren a dos o mas países, como por ejemplo la postulación del Camino del Inca que están presentando seis países andinos.

La segunda reunión se realizó en marzo del 2004, en La Plata, Argentina, y trató el tema de la ausencia del patrimonio moderno entre los sitios del patrimonio mundial y particularmente las dificultades que tiene América Latina para inscribir tales sitios, como las que experimentó Valparaíso, Chile y las que actualmente tiene la ciudad de La Plata en Argentina, ya que generalmente la visión del patrimonio está todavía muy marcada por conceptos tradicionales, europeos y que no reconocen la propia historia y dinámica del patrimonio de nuestro continente dada la rápida expansión y cambio de nuestras ciudades.

La tercera reunión se realizó en mayo del 2004, en Lima, Perú, bajo el patrocinio de la de UNESCO y tuvo por objeto difundir los resultados de reuniones anteriores en las cuales se analizó la aplicación de la Carta de Venecia, la Carta de Burra, el Documento de Nara y la Convención de Patrimonio Mundial. El tema central fue el concepto de autenticidad y su aplicación. Si bien se reconoce todo el avance en lo teórico y práctico de la aplicación de estos documentos, se destacaron los problemas institucionales y financieros de la conservación del patrimonio. Podemos destacar dos tendencias respecto de cómo enfrentar la autenticidad. Por una parte hay quienes valoran y defienden el avance que ha significado el Documento de Nara para comprender que la significación del patrimonio debe estar acorde a la diversidad de valores de cada cultura y, por otra parte, quienes tratan de mantener los fundamentos de la *Carta de Venecia*, que es más restringida en ese ámbito.

Las convenciones de la UNESCO relativas a la "*Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial*" de 2003 y la de "*Diversidad Cultural*" de 2005, han profundizado y ampliado el concepto. De igual manera ICOMOS han lanzado nuevas recomendaciones y guías respecto del accionar profesional en la materia, como por ejemplo la "*Declaración de Xian*" de 2005, China, sobre los "*Entornos de los Sitios Patrimoniales*"; la "*Declaración de Teemaneng*" de 2007, Sudáfrica, sobre el "*Patrimonio Inmaterial y los Sitios Patrimoniales*"; y la "*Carta de Ename*" de 2008, sobre la "*Interpretación de los Sitios Patrimoniales*", entre otras.

Concluyendo al respecto se constata el avance en las discusiones realizadas en la última década en América Latina. Por cierto los problemas económicos están siempre limitando la conservación, pero podemos decir que la valoración del patrimonio ya es reconocida por la sociedad y que existe una creciente preocupación de los gobiernos, aunque los conflictos entre la conservación del patrimonio y el desarrollo son más frecuentes que nunca.

La UNESCO ha sido fundamental en generar este ambiente de mayor conciencia mundial, especialmente desde el ámbito legal internacional, pero también ha sido muy importante el rol de diversas entidades como ICOMOS e ICCROM, especialmente en la difusión y entrenamiento profesional. Instituciones privadas como el Instituto de Conservación Getty de Estados Unidos, o estatales como la Agencia de Cooperación Española, han sido también vitales en la formación de profesionales y en la generación de proyectos y en el fortalecimiento de las instituciones del patrimonio en América Latina.

El trabajo de todas estas instituciones y profesionales han permitido ampliar las definiciones del patrimonio cultural incluyendo aspectos insuficientemente tratados como el patrimonio intangible, indígena, popular, moderno y el subacuático por sólo mencionar algunos. Las convenciones, cartas, recomendaciones de las últimas décadas han sido valiosas y útiles. Sin embargo falta todavía darles mayor difusión, especialmente en las universidades, profesores, estudiantes y jóvenes profesionales. También es necesario potenciar el trabajo de UNESCO, de tal manera de que pueda seguir siendo un foro internacional para el patrimonio y una fuente de nuevas ideas y proyectos. De igual manera ICOMOS debe ampliar su número de participantes y abrirse a una mayor colaboración con las instituciones patrimoniales y los gobiernos de América Latina, particularmente con los profesionales jóvenes, como ya lo están haciendo algunos comités nacionales.

Finalmente podemos observar un marco positivo en América Latina para enfrentar la conservación de su patrimonio, donde su riqueza y diversidad serán cada vez más valoradas. Al respecto constatamos un excelente trabajo de compilación sobre los nuevos paradigmas y desafíos de la conservación del patrimonio cultural para la región que fue realizado por Francisco López Morales y Francisco Vidargas (2014). Por cierto no debemos desconocer los problemas, tanto de educación, como de falta de recursos y un deterioro creciente y destrucción en ciertos casos, pero hay un cambio de tendencia. Por cierto, cada país tiene su propia realidad y las estrategias de conservación del patrimonio deben ser diversas a nivel local. También se debe superar el elitismo de algunos grupos de profesionales del patrimonio y acercar la gestión a la participación de las comunidades y de otros grupos de profesionales. Comprender el patrimonio en toda su amplitud y diversidad será una tarea permanente, pero su conservación

sólo será posible si somos capaces de ser creativos en vincularlo a la gente, su calidad de vida y el desarrollo armónico de todos.

## **2.5 Hipótesis y método**

En las próximas páginas explicitamos la orientación conceptual que utilizaremos para nuestro trabajo y para abordar el tema central de esta investigación orientada a demostrar que la identidad oficial de Chile ha sido creada y mantenida desde el Estado y los grupos de poder que lo controlan desde su constitución como país independiente. El patrimonio cultural protegido legalmente ha sido un aspecto que ha ayudado en tal proceso relevando solo aquellos atributos que fortalecían la idea de un pueblo, que si bien tenía diversos orígenes, debía comprender una sola identidad nacional, la chilena. Otra estrategia vital en tal proceso fue la educación y una serie de instituciones y legislaciones creadas desde el Estado que fortalecieron tal identidad única que negó las que existían previamente y las que se fueron formando regionalmente durante la colonia. Esta situación se dio en varios países latinoamericanos con los cuales Chile tiene ciertas semejanzas durante el siglo XIX. A comienzos del siglo XX se producen cambios importantes en lo económico y social a nivel continental que tienen derivadas específicas en cada país de la región en las siguientes décadas, particularmente a finales de dicho siglo y comienzos del siglo XXI, en que la sociedad chilena reconoce su propia diversidad debido a los procesos de democratización y globalización.

En primer lugar nuestro procedimiento de investigación ha estado centrado en establecer los marcos conceptuales bajo los cuales podemos comprender las culturas, las identidades culturales y los procesos de construcción, valorización y cambio del patrimonio, con sus tendencias y significados diversos incorporando en dicho análisis las Cartas y Convenciones Internacionales y su aplicación en América Latina y Chile. En el mismo sentido nos hemos dedicado a discutir los conceptos de Estado y Nación recurriendo a distintos autores.

En segundo lugar hemos emprendido el desafío de describir la formación del Estado de Chile y la identidad nacional que se ha dado a través del tiempo, analizando para ello la diversidad natural y cultural del territorio que ocupa y ha acrecentado en su historia. Especial esfuerzo se ha dedicado a presentar los enfoques utilizados para comprender las identidades culturales de Chile, sus procesos y símbolos, destacando especialmente cómo la arquitectura ha sido un aspecto relevante y cómo la emergencia de las clases medias y populares han sido claves en la formación y reconocimiento de una identidad nacional más plural y diversa en el siglo XX y comienzos del siglo XXI. Para ello ha sido fundamental la lectura de diversos cronistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, arqueólogos, geógrafos y ensayistas desde la colonia hasta la actualidad.

En tercer lugar consideramos importante estudiar las primeras instituciones republicanas y las normas legales, políticas públicas y acciones vinculadas al patrimonio, como la Biblioteca Nacional, los primeros museos nacionales y exposiciones históricas, los primeros monumentos conmemorativos y las normas constitucionales relativas al patrimonio y la memoria nacional. En particular dimos especial atención a investigar los orígenes que llevaron a la creación de la primera legislación patrimonial de Chile de 1925, la institución que creaba y su posterior evolución.

En cuarto lugar analizamos la vinculación legal e institucional del patrimonio cultural con el patrimonio natural y realizamos un estudio legislativo comparativo del Patrimonio Cultural de Chile con otras realidades en América Latina y Europa y su influencia en Chile en la formación de una identidad cultural nacional más plural y diversa en el siglo XX y comienzos del siglo XXI.

La estrategia metodológica, además de la lectura de publicaciones y documentos, consideró diversos procesos técnicos de revisión, diseño y planificación del esquema de ordenamiento de datos y análisis de la información disponible a objeto de generar estadísticas que permitieran cuantificar y clasificar los bienes patrimoniales declarados en Chile en función de ciertos parámetros y atributos relacionados con diversas preguntas de investigación, que aportaran información relevante para el tema de estudio y permitieran visualizar de manera más precisa el tipo de bienes declarados, el alcance de este proceso, su evolución en el tiempo y su relación con ciertos factores del contexto político nacional.

En la primera etapa, se elaboró un inventario de monumentos nacionales declarados en Chile entre los años 1926 y 2008<sup>8</sup>, lo que arrojó como resultado un total de 1.010 registros organizados de acuerdo a un orden correlativo temporal a partir del cual se construyó una primera matriz de datos organizada en función de cinco campos o variables que se describen a continuación:

VARIABLES O CAMPOS	DESCRIPCIÓN
<b>Número de Monumento</b>	Número correlativo asignado a cada bien patrimonial al momento de ser declarado. En las colecciones se asigna un solo número al conjunto de objetos que la integran. Este sistema de registro numeral correlativo lo aplica el Consejo de Monumentos Nacionales

<sup>8</sup> Por cierto se han declarado más monumentos desde 2008 a la fecha pero creemos que los adicionales no cambian lo central de nuestro análisis cuando se fijó ese corte temporal en base a los datos disponibles entonces.



	desde el año 1926 hasta la actualidad y aporta una cuantificación general de los bienes patrimoniales declarados y protegidos por el Estado.
<b>Nombre del Monumento</b>	Nombre oficial registrado en el decreto o ley de creación, aporta una descripción general del bien patrimonial declarado.
<b>Número Decreto o Ley</b>	Especifica el número de decreto o Ley que determina legalmente que el bien patrimonial está protegido por el Estado.
<b>Año de declaración</b>	Indica el año de declaración del bien patrimonial, permite establecer periodizaciones, clasificar u ordenar los datos en función de otras categorías de análisis.
<b>Categoría del Monumento</b>	Son las tres categorías declaradas mediante decreto: Monumento Histórico, Zona Típica y Santuario de la Naturaleza.

La segunda etapa consideró el diseño del plan de ordenamiento de información y configuración de una base de datos en el sistema SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)<sup>9</sup> y diversos procesos técnicos vinculados con la selección, definición y codificación de nuevas variables a objeto de organizar y generar estadísticas en función de ciertas categorías que permitieran extraer conclusiones y observaciones respecto al proceso de declaración y protección de bienes patrimoniales y su relación con factores socioculturales e históricos del contexto nacional. Para ello, se incluyeron en la base de datos las variables consideradas en el catastro inicial y otros campos o variables que se detallan a continuación, las cuales son ejemplificadas más adelante:

VARIABLES O CAMPOS	DESCRIPCIÓN
<b>Región</b>	Ordenar y cuantificar los datos según su ubicación territorial de acuerdo a la división política administrativa actualmente vigente a

<sup>9</sup> El sistema Statistical Package for the Social Sciences -SPSS- es un software informático utilizado en el ámbito de las ciencias sociales para la generación de estadísticas y obtención de resultados cuantitativos. Posee la capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una diversidad de variables y por tanto, constituye una herramienta importante dentro del proceso de ordenamiento y generación de información para su posterior análisis.

	nivel nacional a objeto de analizar tendencias vinculadas con la distribución regional de los Monumentos declarados.
<b>Declaración individual o múltiple</b>	Permite identificar si bajo un mismo decreto o ley se declaró un bien patrimonial o un conjunto de bienes simultáneamente.
<b>Condición de vigencia del decreto</b>	Permite analizar si el proceso de declaratoria de monumentos nacionales se mantiene vigente a través del tiempo o fue desafectado.
<b>Característica patrimonial prioritaria</b>	Clasifica los monumentos declarados de acuerdo a su característica patrimonial prioritaria en base a tres categorías: cultural, natural, ambos atributos y aporta elementos de análisis en base a nuevas desagregaciones.
<b>Período</b>	Clasifica los monumentos nacionales en función de su origen temporal, según cuatro cohortes: período precolombino, colonial, republicano siglo XIX y republicano siglo XX a la actualidad.
<b>Tipo de patrimonio</b>	Clasifica los bienes patrimoniales de acuerdo a una tipología que incluye veinte categorías a partir de las cuales se busca resaltar ciertos atributos o características de los monumentos declarados para aportar nuevas perspectivas de análisis vinculadas con el tema de estudio.
<b>Zona</b>	Clasifica los bienes patrimoniales en función de su ubicación actual urbana o rural
<b>Vínculo con la independencia nacional</b>	A través de esta variable se busca establecer si el bien declarado se vincula con el proceso de Independencia Nacional o no existe tal relación.
<b>Vínculo con Presidente de la República</b>	A través de esta variable se busca establecer si el bien declarado se vincula con la vida de algún Presidente de la República o no existe tal relación.
<b>Contexto político</b>	Clasifica los monumentos nacionales en función de seis cohortes vinculados con el sello u orientación política de los gobiernos, lo cual conlleva asociado el establecimiento de periodizaciones no estratificadas dentro del horizonte temporal que aborda el estudio: gobiernos conservadores y populistas (1926-1938); gobiernos de coalición encabezados por el partido radical (1930-1952); gobiernos

	conservadores (1953-1964); gobiernos de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular (1965-1973); Gobierno militar (1974-1989); Gobiernos de Concertación Democrática (1990-2008).
--	---

La definición y codificación de variables, involucró diversos procedimientos técnicos y analíticos, especialmente en aquellos campos donde se busca obtener un mayor nivel de desagregación de la información y donde fue necesario construir matrices para el ingreso de datos codificados, las cuales se anexan a continuación:

A) **Categoría del Monumento:** Corresponde a las tres categorías que se declaran expresamente mediante decreto por la Ley 17.288 (Monumento Histórico, Zona Típica y Santuario de la Naturaleza). Si bien la Ley contempla dos categorías más, Monumento Arqueológico y Monumento Público, estas lo son por el solo ministerio de la Ley y no requieren declaración por decreto, excepto los monumentos públicos a los grandes servidores de la nación que requieren de una ley especial de acuerdo a la Constitución de la República.

CATEGORÍA DE MONUMENTO: MATRIZ DE CODIFICACIÓN DE VARIABLE	
Categoría de Monumento	Descripción
(1) Monumentos históricos (MH)	Esta categoría incluye todo tipo de bienes patrimoniales muebles o inmuebles, de cualquier antigüedad, pueden constituir más de una unidad, no existiendo límite en cuanto a extensión o superficie. Su característica principal es que reúnen mayores valores patrimoniales y la ley contempla una normativa más precisa para su intervención.
(2) Zonas típicas (ZT)	Corresponde a conjuntos de inmuebles o zonas destinadas a mantener el carácter ambiental de un lugar, involucra áreas más extensas urbanas o rurales y generalmente, incluyen uno o más monumentos históricos o monumentos arqueológicos. Las normas de intervención son más flexibles.

(3) Santuarios de la naturaleza (SN)	Involucra áreas extensas, ubicadas en áreas rurales, que incorporan parte de un ecosistema o varios ambientes, tanto naturales como intervenidos. Su principal característica es la conservación y como lugares para la investigación científica.
--------------------------------------	---

B) **Período:** Corresponde a unidades temporales utilizadas para identificar el origen temporal del bien declarado. Si bien, se trata de periodizaciones con un fuerte sesgo historicista, para efectos de este análisis se optó por la utilización de categorías ampliamente utilizadas en Chile para comprender las distintas etapas y procesos vinculados con la historia nacional.

PERIODO: MATRIZ DE CODIFICACIÓN DE VARIABLE	
Período	Descripción
(1) Prehispánico	Bienes patrimoniales cuyo origen se sitúa en el período anterior y hasta 1535
(2) Colonial	Bienes patrimoniales cuyo origen se sitúa entre 1536 a 1810
(3) Republicano siglo XIX	Bienes patrimoniales cuyo origen se sitúa entre 1811 A 1900
(4) Republicano siglo XX a la actualidad	Bienes patrimoniales cuyo origen se sitúa entre 1901 a la actualidad
(5) Todas las anteriores	Bienes patrimoniales que corresponden a colecciones conservadas en los museos de la DIBAM y el patrimonio subacuático cuya data de origen es muy diversa.

C) **Tipo de patrimonio:** Clasifica los bienes patrimoniales de acuerdo a una tipología que busca resaltar un atributo o característica particular del bien declarado y establecer categorías que aporten nuevas perspectivas de análisis para el tema de estudio.

TIPO DE PATRIMONIO: MATRIZ DE CODIFICACIÓN DE VARIABLE	
Tipo de patrimonio	Descripción
(1)Sitio	Todos los bienes patrimoniales prehispánicos, sean

<b>Arqueológico (SA)</b>	estructuras superficiales o enterradas, de cualquier magnitud, pueden incluir restos humanos y su contexto ambiental. También, los sitios arqueológicos indígenas coloniales o republicanos enterrados, abandonados e incluso desconocidos por los actuales pueblos indígenas, tales como asentamientos, cementerios y otro tipo de sitios.
<b>(2)Arquitectura Civil Privada (ACPR)</b>	Casas, edificios o conjuntos arquitectónicos construidos por particulares, con fines privados, sean de residencia, comerciales o de servicios.
<b>(3)Arquitectura Civil Pública (ACPU)</b>	Corresponden a edificaciones construidas por el Estado, con fines de uso público o vinculadas a las actividades administrativas de gobierno en su sentido más amplio tales como edificaciones de administración del Estado en todos sus niveles territoriales administrativos y de servicios, edificaciones educacionales y de salud, entre otras.
<b>(4)Arquitectura Militar (AM)</b>	Todas las construcciones o edificaciones que tienen un objetivo militar defensivo u ofensivo o de servicios para tales fines, como fuertes, arsenales, cuarteles o bases de las fuerzas armadas de tierra, mar o aire.
<b>(5) Arquitectura Religiosa (AR)</b>	Catedrales, iglesias, conventos, monasterios, capillas y toda construcción dedicada o de servicio a las distintas creencias religiosas.
<b>(6) Arquitectura Industrial (AI)</b>	Todas las edificaciones, construcciones o instalaciones destinadas a la extracción o producción vinculadas con la actividad extractiva como fabril y la asociada a ellas, incluso las de servicio o residencia de obreros y empleados, tales como fábricas, minas y asentamientos mineros, fundiciones, entre otras..
<b>(7)Infraestructura</b>	Corresponde a construcciones tales como puentes, viaductos, vías férreas.
<b>(8) Plazas y Parques (PP)</b>	Áreas verdes de ciudades y pueblos que tienen un uso de esparcimiento y recreación y que han sido diseñadas y construidas para tales fines. También los parques o jardines de edificaciones urbanas o rurales cuando ese ha sido el único objeto de la declaración.
<b>(9)Cementerios y Mausoleos (CM)</b>	Cementerios y mausoleos destinados a sepulturas colectivas o individuales localizados en áreas urbanas o rurales
<b>(10)Sitios Sagrados Indígenas (SSI)</b>	Lugares que actualmente las poblaciones indígenas consideran sagradas por sus atributos y como espacio para la realización de ceremonias y rituales religiosos propios de su cultura. Estos sitios pueden tener

	estructuras permanentes o efímeras.
<b>(11)Sitio Paleontológico (SP)</b>	Área donde existen fósiles o evidencias de la naturaleza de hace miles y millones de años atrás.
<b>(12) Ecosistema (E)</b>	Lugares esencialmente naturales o parcialmente intervenidos por los seres humanos que pueden comprender parte de un ecosistema o varios.
<b>(13)Objeto y/o Colección (OC)</b>	Corresponde a todo tipo de objetos muebles patrimoniales que individualmente o de manera agrupada forman parte de colecciones públicas o privadas, generalmente conservadas en museos, bibliotecas y archivos.
<b>(14)Patrimonio Marítimo (PM)</b>	Se incluyen aquí construcciones, barcos y todo tipo de embarcación y restos de ella, en servicio o hundida, y otras vinculadas a la navegación como faros y muelles e instalaciones en tierra directamente conectadas a ríos, lagos y mares.
<b>(15)Medios transporte terrestre (MT)</b>	Bienes muebles de transporte de personas o carga, con motor o de arrastre terrestre tales como locomotoras, carros de ferrocarril, buses, ascensores, autos, vehículos de bomberos y similares.
<b>(16)Estaciones de ferrocarril (EF)</b>	Todo tipo de instalaciones o construcciones ferroviarias, sea de transporte o de servicios tales como estaciones de todo tipo, su arquitectura asociada, casas de máquinas, etc.
<b>(17)Casas Patronales (CP)</b>	Viviendas de propietarios o administradores de haciendas y estancias, ubicadas principalmente en zonas rurales y/o urbanas debido a la expansión actual de las ciudades, que pueden incluir capillas, bodegas, jardines, parques y otras instalaciones asociadas.
<b>(18)Medios de transportes aéreos (MTA)</b>	Aviones de pasajeros o carga, civiles o militares.
<b>(19) Sitio Histórico (SH)</b>	Lugares de carácter histórico generalmente, sin construcción alguna, salvo hitos o monumentos conmemorativos donde ocurrieron acontecimientos memorables, tales como campos de batalla, fundaciones, firmas de documentos históricos, entre otros..
<b>(20) Sitio asociado a derechos humanos</b>	Lugares, sitios o construcciones de diverso tipo y origen, utilizados como centros de reclusión, tortura o enterramiento asociados a la vulneración de derechos humanos.

**D) Contexto político:** Clasifica los monumentos nacionales en función de seis cohortes vinculados con el sello u orientación política de los gobiernos, lo cual conlleva asociado el establecimiento de periodizaciones no estratificadas dentro del horizonte temporal que aborda el estudio.

CONTEXTO POLÍTICO: MATRIZ DE CODIFICACIÓN DE VARIABLE		
Periodo	Sello político	Presidentes
(1) 1926 - 1938	Gobiernos conservadores y populistas	Emiliano Figueroa (1925-1927) Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) Juan Esteban Montero (1931-1932) Arturo Alessandri Palma (1932-1938)
(2) 1939 - 1952	Gobiernos de coalición encabezados por el Partido Radical	Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) Juan Antonio Ríos (1942 - 1946) Gabriel González Videla (1946-1952)
(3) 1953 - 1964	Gobiernos Conservadores	Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) Jorge Alessandri (1958-1964)
(4) 1965 - 1973	Gobiernos de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular	Eduardo Frei Montalva (1964-1970) Salvador Allende (1970-1973)
(5) 1974 - 1989	Gobierno Militar	Augusto Pinochet (1973-1990)
(6) 1990 - 2008	Gobiernos de la Concertación democrática	Patricio Aylwin (1990-1994) Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) Ricardo Lagos (2000-2006) Michelle Bachelet (2006-2010)

### **3. FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO DE CHILE Y DE LA IDENTIDAD NACIONAL**

#### **3.1 La Diversidad Ambiental y Cultural del Territorio de Chile<sup>10</sup>**

El territorio que hoy llamamos Chile y que principalmente está ubicado en la vertiente occidental de la Cordillera de Los Andes, al sur del continente americano, se formó geológicamente hace unos 70 millones de años debido al choque entre las placas de Nazca y Sudamericana, proceso que sigue presente y cuya principal manifestación son los terremotos y volcanismo. El cambio climático ha sido otro factor de gran importancia en la modelación de las formas geográficas, alternándose períodos húmedos, fríos y secos, siendo las sucesivas glaciaciones las que han tenido un efecto más intenso, con el avance y retroceso de los hielos. A lo largo de millones de años estos procesos han formado una de las cordilleras más altas del planeta, esculpido montañas, creando masas de hielo gigantescas, volcanes activos, desiertos extremos, extensas tierras altas y la fragmentación del territorio austral en miles islas.

El Chile actual abarca longitudinalmente unos 5.000 kilómetros, entre los paralelos 18 y 56 del hemisferio sur, sin considerar la Antártida. Esta situación, unida a la tremenda diferencia de altitud entre los 6.000 metros y el nivel del mar en un promedio de 200 kilómetros, unido a los efectos de la corriente marina fría austral y una pluviosidad que aumenta progresivamente hacia el sur, ha generado múltiples climas y ambientes, donde la vida se ha adaptado a tales condiciones con especies endémicas, debido al aislamiento de parte del territorio confinado por barreras naturales.

El continente americano es el último en ser descubierto y poblado por los seres humanos, siendo además este territorio austral el más alejado del origen de nuestra especie, llegando los primeros grupos de cazadores recolectores hace unos 14.000 años al extremo norte y 12.000 años a Tierra del Fuego. Sucesivas oleadas migratorias provenientes del norte, sea por las tierras altas, por la costa o

---

<sup>10</sup> Para este capítulo se han usado diversas fuentes generales pero especialmente: Benoit Contesse, Iván (2005); CONAMA (1994); Errázuriz K., Ana (1987); Sánchez, A. y Morales, R. (2004); Hidalgo, J. et al (2000); Hidalgo, J. et al (1996). Importa agregar además que el suscrito trabajó por más de una década en el Servicio Forestal de Chile (CONAF) en el área de Parques Nacionales en los temas de recursos culturales y educación ambiental, lo que permitió conocer la mayor parte de los parques nacionales y otras áreas protegidas del país.



cruzando desde el este por la Cordillera de Los Andes, fueron poblando las costas, valles, oasis del desierto, islas y montañas.

El nomadismo extensivo de los cazadores predominó por miles de años, quienes debieron adecuarse a los cambios climáticos que impusieron las últimas glaciaciones, hasta que algunos de estos grupos lograron adaptarse a ciertos ambientes, especializándose sea en la caza y recolección terrestre o en la caza, pesca y recolección marina. Esta forma de vida permitió crear culturas que permanecieron por miles de años en enclaves territoriales donde el desarrollo de la agricultura no era posible, tal como ocurrió en las regiones más australes como la Patagonia, donde tehuelches, onas, kaweshkar, yámanas y otros grupos existieron hasta finales del siglo XIX.

Hacia el norte, dependiendo del clima y de la diversidad de los recursos naturales, fue posible que algunos de estos grupos transitaran hacia una recolección intensiva e incluso ensayar una agricultura y ganadería incipiente, sea por propia iniciativa o influenciada por nuevos grupos o conocimientos que llegaban desde el norte o allende Los Andes, lográndose un sedentarismo con pequeñas aldeas en los oasis del desierto de Atacama alrededor de 2.000 años atrás. Hacia el sur la agricultura fue ganando terreno, manteniendo la caza y la recolección terrestre y marina su importancia, aunque decreciendo en la medida que las cosechas eran más abundantes, no obstante el patrón de asentamiento se mantuvo disperso sin llegar a constituir aldeas.

A pesar de la especialización en la obtención de recursos en determinados ambientes y la formación de diferentes grupos culturales por miles de años que fueron constituyendo el panorama étnico diverso que existió hasta el siglo XVI, la movilidad territorial y la comunicación entre estos grupos, no obstante las distancias y barreras naturales, fueron frecuentes y variadas, tanto entre el norte y el sur, como entre ambas vertientes de la cordillera (Hidalgo, J. et al (2000); Hidalgo, J. et al (1996).

Es importante tener presente esta constatación de que el territorio chileno, no obstante los deslindes que acordemos en sus distintas fases históricas, no tuvo como precedente una sola unidad geográfica sino siempre, hasta hoy, una multiplicidad de ambientes ecológicos, donde diferentes grupos humanos se asentaron, convivieron y también se mezclaron, dando origen a nuevos grupos.

Teniendo claro lo anterior, podemos dar a conocer las particularidades del territorio respecto de sus principales ecosistemas, en los cuales distintas culturas se fueron formando, generando tradiciones y formas de comprender y habitar el espacio que nos condicionan hasta el presente. Entre estas macro zonas bio-geográficas mencionamos:

## El Altiplano

La zona altiplánica se extiende esencialmente sobre los 3.500 metros de altitud, siendo coronada por cumbres que superan los 6.000 metros, como los Payachatas, Guallatire, Socompa y Llullaillaco. El gran altiplano, compartido con Bolivia, Perú y Argentina, comienza en Chile en Visviri, alcanzando por el sur hasta cerca de la latitud de Copiapó, donde la Cordillera de los Andes, si bien mantiene su altitud, ya no presenta una gran planicie de altura.

El altiplano se origina en parte por el relleno volcánico causado por grandes erupciones y posee suelos arenosos y pedregosos donde el clima, principalmente seco y frío, con una marcada diferencia de temperatura durante el día y lluvias estivales que fluctúan entre los 50 y 350 mm, conforma un ambiente en que numerosas especies de flora y fauna han logrado adaptarse y evolucionar.



Altiplano chileno, Salar de Surire



Altiplano chileno, Lago Chungará. Fotos A. Cabeza

La acumulación de agua en ciertas depresiones permite la existencia de bofedales o vegas pantanosas, en que pequeñas plantas como la llareta, crecen en forma de cojines. Sin embargo predomina la pradera andina, constituida por gramíneas entre las cuales se destaca la paja brava. Aves y mamíferos, especialmente adaptados a la rigurosidad de este ambiente, han logrado sobrevivir y multiplicarse. A pesar de lo extremo del clima 150 especies de aves han sido descritas para este ambiente, destacándose entre ellas tres variedades de flamencos.

Entre los mamíferos grandes debemos mencionar la taruca o huemul del norte, siendo los camélidos quienes más identifican esta altiplanicie. Hasta en la actualidad guanacos y vicuñas recorren libremente la pradera andina, mientras que las llamas y alpacas, domesticadas hace milenios por los seres humanos, pastan dócilmente en los bofedales.

Durante milenios cazadores y recolectores nómadas recorrieron y se adaptaron a este medio, el cual alternó períodos más secos y lluviosos que el actual. Con el tiempo estos grupos se transformaron en pastores y agricultores especializados en las tierras altas con cultivos sobre los 4.000 metros de altitud, siendo la papa y la quínoa parte esencial de su dieta y lo camélidos fuente no solo de carne sino de lana y un medio de transporte de carga que posibilitó su traslado a grandes distancias.

En las tierras altas, más al Norte y Este del Chile actual, se lograron formar confederaciones y estados imperiales como los de Tiahuanaco y los Incas, los cuales a fines del primer milenio de la era cristiana y poco antes de la llegada de los españoles a América, lograron extender sus dominios e influencias culturales hacia el Sur, en ambas vertientes de la Cordillera de Los Andes, llegando incluso los últimos hasta Chile Central. Los actuales aymaras, quechuas y atacameños fueron entonces e incluso hasta el presente los principales habitantes de tales tierras.



Estatuilla Inka, Cerro El Plomo  
Fotos A. Cabeza



Aymara de Isluga



Niñas de San Pedro de Atacama

## Los Desiertos

Desde Arica hasta Copiapó y de la costa a los contrafuertes cordilleranos, ascendiendo hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar, se extiende un ambiente de casi total aridez, salvo en fondos de quebradas y escasos oasis, donde la influencia del mar y la altitud inciden sobre la disponibilidad de agua y

vida, siendo la situación más extrema en el desierto de Atacama, quizás el más árido del mundo.



El Valle de la Luna, San Pedro de Atacama



Desierto costero de Caldera. Fotos A. Cabeza

Por su parte el desierto costero ocupa una estrecha faja, limitada y discontinuada por farellones y quebradas, donde la camanchaca o neblina costera, contribuye a disminuir los efectos de la insolación permanente, no existiendo una estación fría extrema, conformando un ambiente más benigno, pero carente de agua, salvo en algunos lugares donde la flora, la fauna y luego grupos de pescadores y cazadores costeros de gran movilidad se asentaron.

Primero los chinchorros, hace más de cinco mil años, generaron una sorprendente cultura con momificación artificial en la desembocaduras de los valles y quebradas del extremo norte. En los últimos dos milenios, otro grupo humano pescador y cazador del litoral desértico, denominado por españoles como changos o camanchacos, se adaptaron a este ambiente y sus recursos, acumulando la escasa agua existente, creando un tipo de embarcación con pieles de lobos infladas con las cuales facilitaban las tareas de caza y pesca, intercambiando sus excedentes por otros que traían los grupos venidos del interior y el altiplano.





Valle del Río Loa, Antofagasta    Quebrada de Tarapacá, precordillera de Iquique. Foto A. Cabeza

El desierto de Atacama presenta una aridez casi total. Sin embargo entre Arica y El Loa el desierto está seccionado por angostos valles y pequeños cursos de agua, de los cuales pocos llegan al mar. Dichos valles conforman verdaderos oasis en algunos sectores. De todos estos valles, el de Azapa, es el que posee la mayor variedad de flora nativa y al mismo tiempo la ocupación humana más antigua. En este valle y en los de Camarones, Camiña, Tarapacá, Loa y otros más, las comunidades prehispánicas lograron asentarse y vivir de la agricultura, dando forma a culturas cuyos vestigios hoy día asombran por su belleza plasmada en su cerámica, textiles, metales y maderas labradas. La importancia de sus cultivos y su cercanía con la costa, motivó su vinculación constante con el altiplano y el intercambio de sus productos, integrando así la diversidad del mundo andino.

### **Los Valles Transversales del Norte Chico**

El incremento de las precipitaciones hacia el sur, que alcanzan un promedio de 80 mm anuales, permite el desarrollo de distintas especies de arbustos bajos, conformando una zona particular entre los ríos Copiapó y Choapa, en cuyos valles el agua es más abundante, especialmente en los deshielos, llegando frecuentemente hasta el mar. En valle del río Elqui es ya posible encontrar arbustos y árboles de hojas duras, como el algarrobo, litre, espino, colliguay y chequén. No obstante el paisaje entre valle y valle sigue siendo desértico en gran medida, salvo lugares de reducida extensión en los acantilados y cerros de la costa donde se encuentran bosquetes de olivillo y otras especies arbóreas que son propias del Sur de Chile, debido a la constante humedad que ofrece la camanchaca.



Valle del río Copiapó



Valle del río Elquí. Fotos A. Cabeza

La fauna aumenta en esta zona, existiendo el guanaco, dos especies de zorro, varias especies de roedores, destacando el cururo y el degú. La chinchilla, otrora numerosa, está en peligro, al igual que el guanaco. Igual cosa ocurre con la vegetación autóctona, que ha sido explotada irracionalmente a favor de la minería, y los suelos erosionados en los últimos siglos por la acción intensiva del ganado caprino. Todo esto ha modificado las características naturales del Norte Chico, a lo cual se agrega una agricultura intensiva en todos sus valles, sin embargo esta actividad, junto a la minería, han sido las actividades económicas predominantes creando un paisaje cultural propio.

Las características ambientales más favorables para el asentamiento humano permitieron la formación en el último milenio de sociedades organizadas en base a la agricultura en los valles, complementada con la pesca, la recolección y la caza. La cerámica y la metalurgia, al igual que en los grupos del norte, fue desarrollada, existiendo comunicación con estos, al igual que con otras comunidades situadas al oriente de la cordillera. Estos valles transversales fueron la cuna del pueblo diaguita que encontraron los españoles en el siglo XVI.

## **Los Valles y el Litoral de Chile Central**

Desde el valle del Aconcagua hasta el Bío-Bío encontramos ecosistemas de clima mediterráneo con veranos secos y calurosos e inviernos lluviosos y fríos. Las precipitaciones aumentan hacia el Sur lo que incide directamente en la vegetación, fluctuando entre los 300 y 1.000 mm anuales. La topografía configura situaciones específicas para la vegetación según la altitud y la exposición solar de las laderas de cerros, estando formada principalmente por el bosque esclerófilo, constituido

por especies como el quillay, litre, boldo, maitén y espino, asociándose según las condiciones otras especies como el peumo, el canelo, el lingue y el roble blanco.



Depresión intermedia en el valle del río Cachapoal. Foto A. Cabeza

La fauna nativa ha sufrido el impacto humano, subsistiendo solo aquellas especies que pudieron refugiarse en lugares alejados de los centros poblados, siendo en las aves donde encontramos una mayor variedad: picaflor gigante, tenca, yal, pitio, choroy, trichahue, perdiz, cometocino, águila, tucúquere y muchas especies más.

Chile Central es hoy día un escenario natural domesticado por una intensa actividad humana en los valles y en la costa: la agricultura, la ganadería y la urbe modificaron el espacio permitiendo la productividad necesaria para sostener una gran población. Si bien este proceso se intensificó hace casi cinco siglos con la invasión española, estos valles han sostenido la presencia humana desde hace unos 11.000 años por lo menos. Sus restos arqueológicos, asociados a fauna del período del pleistoceno, como el mastodonte, han sido encontrados aquí al igual que en el Norte Chico.

En los milenios siguientes estos cazadores recolectores y otros recién llegados lograron conocer la variedad y riqueza de su ambiente, especializándose en la recolección e iniciando un asentamiento más permanente en algunas localidades favorables por su cercanía a diferentes fuentes de recursos naturales. De esta manera, fuera por aportes externos o por desarrollo local, la agricultura pudo ya ser efectiva hace unos 2.000 años: maíz, porotos, zapallo, quínoa fueron los cultivos principales.





Zapallar, Región de Valparaíso



Buchupureo, Región del Bío-Bío. Fotos A. Cabeza

A comienzos del siglo XVI el imperio Inca, que unas décadas antes se había expandido hacia el Sur de Los Andes, incorpora los valles de Aconcagua, Mapocho y Maipo a su estructura estatal, trasladando incluso colonos y estableciendo ciertas fortificaciones en su frontera austral, pero sin alterar de manera profunda la forma de vida de los habitantes locales, como sí ocurrió con la conquista española a partir de 1541. Los indígenas de esta zona vivían de la agricultura, la cual era complementada con otros recursos provenientes de la recolección, la caza y la pesca. Su patrón de asentamiento era disperso, pero estaban organizados en comunidades que respondían a la jefatura de caciques o lonkos, los cuales aceptaban el liderazgo de un cacique mayor de acuerdo al sector del valle en que vivían. La lengua que hablaban estos indígenas a la llegada de los españoles era el mapudungun, siendo por tanto parte del pueblo mapuche. La conquista y posterior colonización hispana de este territorio, significó la paulatina asimilación y desaparición de estos mapuches del norte.

### **Montañas de Los Andes de Chile Central**

La gran extensión, altura y prolongación de la Cordillera de los Andes, convierten a este cordón montañoso, en el rasgo geográfico fundamental del sector occidental de América del Sur y en la columna vertebral de la topografía del continente. Su gran altitud, con cumbres que bordean los 7.000 metros, profundas quebradas y un clima polar de altura, con diferencias considerables de temperatura entre el día y la noche y con abundantes nevadas en invierno que limitan las posibilidades de vida, constituyen sus características fundamentales. Sin embargo, la cordillera posee diversos ambientes de Norte a Sur, en atención a su altitud y latitud, donde la flora y la fauna, a pesar de lo agreste de la topografía, la rudeza del frío y la altura, han podido adaptarse. En las pequeñas planicies y cajones cordilleranos de Los Andes de Chile Central y Sur existieron el guanaco y el huemul. Hoy día están casi extinguidos y solo unos cuantos ejemplares sobreviven protegidos por la inmensidad de la montaña. Igualmente el puma ha sido acosado y perseguido, prácticamente desapareciendo de los Andes de Chile



Central. A pesar de todos estos cambios, los cóndores siguen coronando las albas cumbres y quebradas de los valles interiores.



Cajón del río Colorado, Andes de Santiago  
Fotos A. Cabeza



Cordillera de Los Andes desde el cerro El Plomo

Una vez que los hielos de la última glaciación se retiraron y la vegetación se estableció permitiendo que grandes manadas de guanacos y cérvidos aprovecharan sus pastos, distintos grupos de cazadores fueron en su persecución transitando en ambas vertientes de la cordillera. Algunos de estos grupos se acostumbraron a esta forma de vida por milenios, trasladándose por las pampas trasandinas hasta la Patagonia. Otros grupos se asentaron en los valles de la precordillera, utilizando la variedad de recursos que proporcionaban los diferentes pisos ecológicos, intercambiando sus excedentes con otras comunidades de los valles de la depresión intermedia, las cuales fueron cada vez más sedentarias, recibiendo la llegada de nuevos pobladores. Por cierto algunos grupos mantuvieron su movilidad en los cajones andinos de ambas vertientes de la cordillera hasta el siglo XVIII, siendo eje de sus desplazamientos las pampas. Otros más al Sur, en condiciones ambientales más favorables, y emparentados con los mapuches, como los pehuenches, han permanecido hasta la actualidad.

La zona andina de Chile Central maravilla a todo espectador por su belleza y grandiosidad. Los cajones cordilleranos de Aconcagua, Maipo, Cachapoal y los de más al sur, se internan por profundos valles y quebradas hasta las cimas de las montañas, donde glaciares milenarios alimentan, junto a las nieves invernales, los ríos que fluyen cada vez más caudalosos desde el Maule. Las laderas de las montañas, en la medida que aumenta la pluviosidad, se van poblando de robles, cipreses y raulíes, donde zorros, pumas, huemules y guanacos antes fueron numerosos. Las cumbres andinas también fueron consideradas sagradas por los indígenas y algunas de ellas, como es el caso del cerro El Plomo de 5.430 metros de altura, en la cordillera andina de Santiago de Chile, fue un santuario de los Incas, donde se realizaron ceremonias, se construyó un adoratorio, se depositaron

ofrendas e incluso se sacrificó un niño, cuyo cuerpo congelado fue descubierto en 1954 (Cabeza, A. 1986)<sup>11</sup>.



Adoratorio a 5.200 msnm del Santuario de Altura Inca cerro El Plomo. Foto A. Cabeza

## Los Bosques de Araucarias

Los bosques de araucarias se extienden por la zona andina desde las nacientes del río Bio-Bio hasta la Araucanía, ocupando también sectores de la Cordillera de la Costa en Nahuelbuta, al Sur de Concepción, teniendo una distribución promedio entre los 700 y 1.600 metros de altitud. La araucaria (*Araucaria araucana*) o pehuén es un árbol endémico de Chile y Argentina, y puede alcanzar alturas de 50 metros y un diámetro de 2 metros, teniendo una vida que puede superar los 2.000 años. En la cordillera andina predomina la asociación de la araucaria con la lenga y ocasionalmente con el coigue y el ñirre. La fauna representativa de este tipo de bosque la componen el puma y el zorro, resaltando entre las aves el chucao, la bandurria y la cachaña o choroye.

---

<sup>11</sup> El suscrito realizó su tesis de grado en arqueología en dicho tema realizando las primeras excavaciones arqueológicas en dicho sitio arqueológico ya que previamente sólo había sido excavado por arrieros y andinistas. En las últimas décadas se han realizado varias investigaciones sobre los santuarios de altura incas en las cumbres andinas (Schobinger, J. 2001).



Araucarias del sector de Lonquimay  
Fotos A. Cabeza



Mapuches-pehuenches durante un ngillatún

Los bosques de araucaria fueron parte del sostén de los pueblos mapuche y pehuenche. Su fruto, el piñón, era recolectado y almacenado celebrándose su cosecha con rituales especiales. Ambos pueblos indígenas vieron en dicho árbol la fertilidad de la naturaleza y una fuente importante de sustento, protegiéndolo y venerándolo. Hoy día las comunidades indígenas que tienen acceso a tales bosques han continuado la recolección en varios sectores montañosos y manteniendo sus tradiciones, luchando por conservar sus bosques y su significado cultural.

### **La Araucanía, los Lagos del Sur y los Bosques Siempre Verdes**

Al sur del río Bio-Bio, tanto por la Cordillera de Los Andes como por la Cordillera de la Costa e incluso hasta los archipiélagos australes se extiende una profusa selva fría aumentando, especialmente en las tierras bajas, cuya pluviosidad fluctúa entre 2.000 y 5.000 mm. La topografía del paisaje es variada debido a los procesos del volcanismo y glaciación que han modelado el escenario geográfico, constituyendo un conjunto de lagos y ríos que otorgan a la zona una singular belleza. Entre los árboles más representativos de estos bosques destacamos el coigüe, mañío, tepa, ulmo, tineo, lingue, olivillo, laurel, el arrayán el milenar alerce, que es aún más longevo que la araucaria, pudiendo alcanzar una edad de 4.000 años, una altura que bordea los 50 metros y un tronco de 4 a 5 metros de diámetro.

La depresión intermedia, entre ambas cordilleras, hasta el seno de Reloncaví y la Isla Grande de Chiloé, también fueron territorios boscosos pero al mismo tiempo el espacio donde los pueblos mapuche y huilliche se asentaron modificando parcialmente su entorno. Sin embargo, es a partir del siglo XIX, producto de la

colonización, la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, cuando estos territorios cambian radicalmente su paisaje hasta su configuración actual.

Esta tierra verde y frondosa del Sur de Chile, está unida a la historia de los pueblos indígenas: mapuche y huilliche. Cazadores y recolectores primero, horticultores, ganaderos y agricultores después, fueron y son el grupo indígena más numeroso de Chile.

En el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles se adentraron en los bosques del Sur de Chile, encontraron un pueblo numeroso. Sus hermanos del norte, los picunches, no pudieron resistir el embate, pero los mapuches, estaban protegidos por sus bosques casi impenetrables y por una bravura y apego a su libertad que no pudieron vencer los españoles.

Casi todo el primer esfuerzo colonizador español, que incluyó la fundación de varias ciudades en esta zona, fue destruido a finales del siglo XVI, salvo los asentamientos hispanos que lograron prosperar lentamente en la Isla Grande de Chiloé, donde los indígenas huilliche ofrecieron una menor resistencia. Durante casi dos siglos solo un enclave cerca de la costa, Valdivia, fue repoblado y defendido por una serie de fortificaciones, al cual se unió la refundación de la ciudad de Osorno a finales del siglo XVIII.

Sólo en la segunda mitad del siglo XIX, 60 años después de la independencia de Chile de España, dicho territorio pudo ser efectivamente integrado y el pueblo mapuche incorporado por la fuerza a la república.



Lago Puyehue, Osorno



Estero de Reloncaví, Puerto Montt





Caciques huilliches en Pucatrihue, Osorno



Machi mapuche en Villarrica. Fotos A. Cabeza

## Los Bosques de la Patagonia Occidental

Al Sur de la Isla Grande de Chiloé, en el borde continental y en los archipiélagos de Aysén y Magallanes, se presentan características climáticas bien específicas, que han condicionado la existencia de una vegetación y una fauna peculiar. Existen de 5 a 7 meses con promedios de temperaturas inferiores a 10° C, una pluviosidad que supera los 2.000 mm., aumentando considerablemente en la zona de los canales, con frecuentes nevadas invernales. En general se constata la presencia de los bosques siempre verdes. En el archipiélago de Las Guaytecas, se destacan los bosques de cipreses, los cuales, además, aparecen en los contrafuertes andinos asociados a bosques de coigüe. Otra especie característica de esta zona es la lenga y más al sur, el coigüe de Magallanes se asocia al canelo. Entre los mamíferos se debe mencionar el huemul, el cual corre peligro de extinción. Entre las aves que se pueden avistar están el aguilucho de cola rojiza, el carpintero negro, el pitío, la cachaña. Los valles de Aysén tuvieron densos bosques, los cuales fueron arrasados para ser habilitados para la ganadería durante la primera mitad del siglo XX.



Río Baker, Región de Aysén  
Fotos A. Cabeza

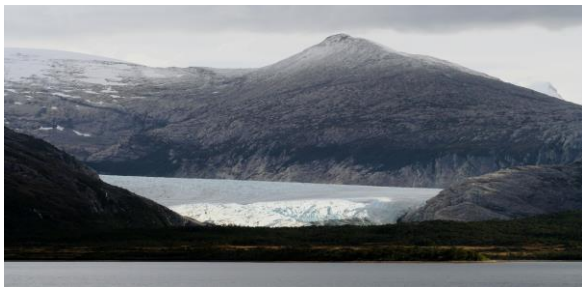


Valle del cerro Castillo, Región de Aysén

Esta ha sido siempre una zona de difícil acceso para el ser humano, de geografía abrupta, cerrada por densos bosques, campos de hielo, ventisqueros y fragmentada en múltiples canales e islas. Muy pocos grupos indígenas penetraron en estos bosques, entre los cuales debemos mencionar a los tehuelches en las tierras altas y penetrando desde las pampas patagónicas, quienes marcaron su presencia milenaria en el arte rupestre de Aisén. Solo a comienzos de siglo el hombre blanco comenzó a asentarse permanentemente en la zona.

## Los Canales Australes

El extremo austral de América está constituido básicamente por dos ambientes, separados longitudinalmente por la cordillera de los Andes. En la vertiente oriental se desliza la pampa hasta la costa atlántica, sometida a un clima frío, seco y de fuertes vientos. Por la vertiente occidental, la montaña se hunde abruptamente en el Océano Pacífico creando un mosaico de canales y archipiélagos cuyo clima es lluvioso y frío, lo cual ha dotado a esta zona de una exuberante vegetación. La isla grande de Chiloé es la entrada a este paisaje de múltiples canales e islas. Más de 5.500 islas e islotes componen este mosaico austral, que incluye ventisqueros que caen al mar. En las montañas imponentes glaciares y campos de hielo dominan la altura andina patagónica.



Glaciares Tierra del Fuego, Canal del Beagle



Tortel, Región de Aysén. Fotos A. Cabeza

No obstante las condiciones adversas para un desarrollo óptimo de la vegetación, como los fuertes vientos, el mal drenaje de los suelos y las constantes precipitaciones durante todo el año, que llegan incluso a los 5.000 milímetros, la flora es exuberante aunque disminuye paulatinamente hacia el sur. Debido a estas condiciones, los bosques son de troncos retorcidos y muy ramificados, destacando el coigüe de Magallanes, el tepú y el canelo, pero también predominan los terrenos pantanosos o turbas que conforman una gran variedad de arbustos, hierbas y musgos. La fauna terrestre es pobre en especies y cantidad de ejemplares, pero los mamíferos acuáticos y aves son más abundantes, destacándose entre los primeros el huillín o nutria de río y el chungungo o nutria de mar, los lobos marinos, el elefante marino y el leopardo de mar. Entre las aves

sobresale el pato vapor y la caranca, un ganso silvestre que se alimenta de algas marinas.

Los indígenas americanos, no obstante las características ambientales extremas de este territorio, lograron adaptarse y constituir diversos grupos étnicos. En el extremo Norte de los canales, en el archipiélago de las Guaytecas los indígenas chonos tuvieron su hábitat. Hacia el Sur, hasta el estrecho de Magallanes, otro pueblo nómada marino, los alacalufes o kaweshkar, recorrieron los canales habitando en sus embarcaciones y playas. Finalmente, al Sur de Tierra del Fuego, en el Canal de Beagle y las islas adyacentes hasta el Cabo de Hornos, habitaron los yaghanes o yámanas, el pueblo más austral del mundo.



Kaweshkar en sus canoas, inicios siglo XX  
Fotos Archivo Museo Histórico Nacional



Yámanas del Canal del Beagle, inicios siglo XX

Todos estos indígenas eran nómadas marinos. Cazaban, pescaban y recolectaban en los canales, pasando gran parte de su vida en las playas y sobre sus canoas, donde el fuego siempre estaba encendido. El hombre cazaba los mamíferos y la mujer recolectaba y buceaba en los helados canales. Divididos en grupos familiares recorrían los canales, juntándose para las actividades rituales y para compartir un universo religioso que hoy día sorprende por su riqueza y complejidad. Sin embargo estos pueblos no lograron sobrevivir el embate de los colonos que se asentaron o recorrieron los canales, siendo a finales del siglo XIX y principios del XX aniquilados por enfermedades que desconocían y otros asesinados, lo que provocó su casi total desaparición y la destrucción de su forma de vida.



## La Estepa Patagónica

Al oriente de la Cordillera de los Andes las montañas se deslizan hacia la pampa o estepa patagónica hasta encontrarse con el océano Atlántico. Algunas quebradas o cañadones cortan la planicie golpeada siempre por fuertes vientos y un frío glacial en invierno. El territorio chileno actual ocupa una franja de esta vertiente oriental desde Aisén hasta el Estrecho de Magallanes, prolongándose este paisaje en el norte de la Isla de Tierra del Fuego, la cual comparten Chile y Argentina.



Huemules en el Lago Grey, Parque Nacional Torres del Paine, Patagonia. Foto A. Cabeza

La estepa patagónica ha sido una zona intensamente modelada por la acción de los glaciares que llegaron a ocupar gran parte del territorio en épocas remotas, como también por el volcanismo cuyas erupciones depositaron lava y ceniza a grandes distancias, las cuales incluso existen en el presente. Sus suelos son pobres, pero en algunos valles de reducida extensión, se han desarrollado bosques de ñirre, coigue y lenga. Sin embargo en la estepa predominan los arbustos bajos y pastos duros, destacándose entre ellos los coirones, el calafate, el michay y otras especies que resisten temporadas secas prolongadas, la nieve del invierno, heladas durante todo el año y un viento constante.

Tal situación climática ha determinado también la existencia de una vegetación y fauna características. Entre las aves más representativas están el ñandú o avestruz de Magallanes, la avutarda y el caiquén, pero muchas más pueden



encontrarse en los ríos y lagunas. Entre los mamíferos que recorren la estepa se destacan el guanaco, la vizcachita austral, el tuco-tuco y el chingue patagónico.



Patagonia, sector Pali Aike. Foto A. Cabeza  
Foto Archivo Museo Histórico Nacional



Selknam de Tierra del Fuego, inicios siglo XX.

Los primeros grupos humanos llegaron a esta zona hace unos 12.000 años. Los vestigios de estos cazadores y recolectores se han encontrado en las cuevas y aleros rocosos, como en Fell y Pali Aike al norte del Estrecho de Magallanes y en Marassi, en Tierra del Fuego. Los primeros en llegar convivieron con la fauna pleistocénica hoy extinta como el milodón y el caballo americano. En los milenios siguientes los guanacos fueron su sustento principal. En el siglo XVI la estepa patagónica, dividida por el estrecho de Magallanes, era habitada por dos grupos de indígenas diferentes, aunque compartían un modo de vida similar centrado en la caza y la recolección. En el continente se encontraban los tehuelches y en Tierra del Fuego los onas o selknam.



Grabado de los Tehuelches, D'Orbigny 1835



Tierra del Fuego, Bahía Inútil. Foto A. Cabeza

La dureza del clima y su aislamiento dificultó la incorporación de la región al proceso de colonización europea. Un primer intento, llevado a cabo por la corona española a finales del siglo XVI fracasó, muriendo la casi totalidad de los colonos de Rey Don Felipe y Nombre de Jesús. Siglos después el gobierno chileno funda el fuerte Bulnes en 1843 y posteriormente Punta Arenas en 1849, en la costa norte del Estrecho de Magallanes, iniciándose la colonización efectiva de Patagonia. Con ella llegó el ocaso de Tehuelches, Onas de Tierra del Fuego y otras etnias. De 4.000 Onas que habitaban Tierra del Fuego en 1880, solo 100 sobrevivían en 1929, un verdadero etnocidio que solo las contradicciones de nuestra civilización puede explicar. Una ideología impregnada de superioridad racial y cultural, apoyada por una tecnología moderna y la ocupación extensiva del territorio, determinaron la desaparición de estos pueblos.

### **Las Islas Oceánicas: el archipiélago de Juan Fernández y la Isla de Pascua**

El Archipiélago Juan Fernández se encuentra a 680 kilómetros del continente frente al puerto de San Antonio, incluyendo tres islas: Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkirk; las dos primeras separadas por solo 500 metros y la última ubicada a 170 kilómetros hacia el Oeste. Estas islas estaban deshabitadas y fueron descubiertas en 1574 por el marino español Juan Fernández. Desde entonces, esporádicamente, se detenían algunos barcos en búsqueda de agua y madera. En el siglo XVIII el gobierno colonial español estableció en la isla un fuerte y un presidio por su importancia estratégica.

Pero el archipiélago no solo es famoso por su historia, sino también por su importancia ecológica. Existen allí más de un centenar de especies vegetales exclusivas o endémicas, otras tantas tienen relación con especies de flora de lugares tan distantes como Hawái (10.000 km.), la cordillera de los Andes (800 km.) y Nueva Zelanda (11.000 km.). Entre las especies arbóreas se puede destacar la palma chonta, naranjillo, luma y gran cantidad de arbustos y helechos únicos en el mundo. Entre los mamíferos marinos hay que destacar el lobo de Juan Fernández. Perseguido por su piel fue casi extinguido durante el siglo XIX, lográndose cazar en solo 14 años alrededor de 3,5 millones de ejemplares. Producto de tal masacre, en 1900 solo se pudo contar menos de medio centenar. Las aves son también parte del tesoro natural del archipiélago, sobresaliendo especies únicas como el picaflor de Juan Fernández y las fardelas.

A unos 3.700 kilómetros del continente, frente al puerto de Caldera, se sitúa la legendaria Rapa Nui. Una de las islas más aisladas del mundo. Fue poblada por navegantes polinésicos a mediados del primer milenio de la era cristiana. El navegante holandés Jacobo Roggenveen la descubre para los europeos en 1722. Su origen es volcánico y su vegetación principalmente herbácea, siendo su única especie arbórea nativa el toromiro, que se extinguió a comienzos del siglo XX. De

igual manera la fauna terrestre es mínima, siendo los peces y las aves acuáticas más numerosas. El aislamiento extremo de la isla, el clima y la pobreza de sus suelos explica la poca diversidad de las especies y su ecología más simple en relación a las demás exuberantes islas polinésicas.



Ahu Tongariki en Isla de Pascua. Foto A. Cabeza

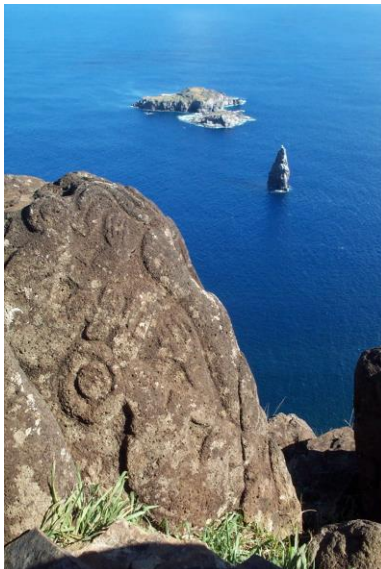
Sin embargo, hay otro aspecto que ilumina Isla de Pascua y la cubre con un velo misterioso y atractivo: su riqueza arqueológica y su población nativa. Las estatuas monumentales de piedra llamadas “moais”, han sido y son el símbolo de la isla. Alrededor de 1.000 moais son testigos y actores mudos de la historia. Están distribuidos principalmente cerca de la costa, tallados en piedra volcánica con alturas que fluctúan entre los 4 y 20 metros, los cuales estaban destinados para ser instalados en plataformas ceremoniales en las aldeas. Además de estas estatuas colosales la isla posee miles de sitios arqueológicos destacándose también el arte rupestre.

Su población originaria también sufrió los avatares del contacto con la civilización occidental, la cual estuvo a punto de desaparecer en el siglo XIX. El gobierno de Chile se anexa la isla en 1888 considerando para ello su ubicación estratégica en el Pacífico. Actualmente unas 4.000 personas habitan Isla de Pascua, entre isleños y continentales, formando una sociedad compleja, donde dos culturas, dos conceptos de la realidad y su propia sangre se contactan y se funden en sus propias contradicciones (Hidalgo, J. et al 1996; Cabeza, A. 1997; Hidalgo, J. et al 2000).

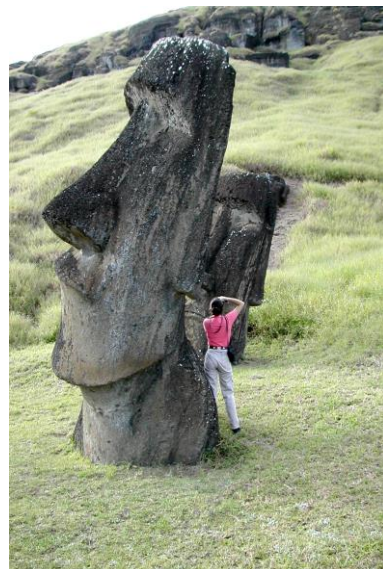




Artesana rapanui  
Fotos A. Cabeza



Centro Ceremonial Orongo



Cantera de Rano Raraku

### 3.2 La Formación de la Nacionalidad e Identidades Culturales de Chile

El territorio que hoy administra el Estado de Chile constituye una gran diversidad de ambientes, donde diferentes grupos humanos construyeron a lo largo de milenios, formas de vida especialmente adaptadas a su entorno, en función de la tecnología que habían desarrollado. Algunos mantuvieron la caza y la recolección por cientos de generaciones, otros transitaron hacia la ganadería, agricultura y asentamientos más permanentes. A lo largo de los milenios otros pueblos indígenas llegaron con nuevos conocimientos y también prosperaron, se formaron asentamientos, siendo parte de estos pueblos incorporados a imperios como el Inca, hasta conformar el mosaico cultural que encontraron los primeros europeos a comienzos del siglo XVI.

Por cierto, las fronteras culturales y políticas de cada uno de estos grupos, en distintos períodos de su historia, ha variado, como también el concepto de ocupación del territorio y su control. Algunos de estos grupos humanos tuvieron gran movilidad, otros menos. También sus fronteras fueron difusas, existiendo permanentes contactos e intercambios de bienes y personas, siendo los límites de sus ocupaciones territoriales acotadas a regiones dentro del Chile actual o incluso controlando territorios que hoy día no son parte de la República de Chile, quedando algunos de estos pueblos indígenas, que lograron sobrevivir a la conquista española y expansión territorial del estado republicano chileno, divididos por las fronteras y acuerdos limítrofes de los siglos XIX y XX.

La conquista española significó el fin de parte de estas culturas indígenas y de su organización social, económica y religiosa. Algunos de estos pueblos lograron sobrevivir y defender su independencia hasta el siglo XIX, como fue el caso de los mapuches del Sur de Chile, parte de cuya población, especialmente la ubicada al norte del río Bio-Bio, se mezcló con los colonos españoles, constituyendo una nueva sociedad que si bien en su base popular era mestiza en lo racial y cultural, estaba bajo la hegemonía hispánica, la que impuso sus formas culturales, economía y un nuevo orden político.

El gobierno colonial español no desconoció esta diversidad como también el mestizaje que imponía la realidad, reconociendo las diferencias y estableciendo una organización social de castas de acuerdo al origen: indígenas, mestizos, negros, mulatos y zambos tenían su lugar en una sociedad muy estratificada y cuyos beneficios económicos principales estaban orientados hacia los colonos españoles y la metrópoli.

La independencia de la metrópoli, lograda por diferentes causas a comienzos del siglo XIX, establece un nuevo escenario político, económico y también social, donde el nuevo Estado republicano lucha desde el comienzo por imponer la idea de una nueva nacionalidad que integre la diversidad existente del territorio que heredaba y comenzaba a administrar.

Como veremos en los próximos párrafos y capítulos, la génesis de este proceso cultural viene desde el siglo XVI, pero la existencia de un gobierno autónomo precipita y fortalece la necesidad de construir el ideario de una nueva comunidad nacional, que si bien niega en un comienzo su pasado español e idealiza algunos aspectos de su pasado indígena, se funda en el mestizaje y en sus contradicciones, negando con el tiempo la diversidad existente y ejerciendo todo el peso del Estado para construir la República de Chile y lograr la lealtad de todos los habitantes del territorio que reclamaba como propio.



Palacio de La Moneda, Presidencia de la República, Santiago de Chile. Foto A. Cabeza

## Los Enfoques utilizados para comprender la Identidad Cultural de Chile

Durante el siglo XIX y XX y, especialmente, en los períodos de crisis o cambios económicos, políticos y sociales de mayor tensión, se ha acentuado la discusión sobre la identidad cultural del país, como también ocurrió en los demás países del continente americano. Desde la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica en 1776, y de las colonias españolas a partir de 1810, numerosos autores se han dedicado al tema, pero es especialmente en el siglo XX y, particularmente, desde la década de los sesenta, que la discusión es recurrente en todas las ciencias sociales de los países americanos (Rosenblitt, J. 2013). No obstante, en documentos coloniales, tanto de cronistas como de viajeros, encontramos referencias al tema de la identidad cultural.

En 1856 el chileno Francisco Bilbao, en una conferencia en París, comienza a hablar del concepto “*América Latina*”, inaugurando una discusión respecto a la separación cultural con lo que entonces era la América anglosajona, aludiendo a los países que originalmente habían sido colonias de España o Portugal<sup>12</sup>, concepto que después se extendió a las regiones que habían sido colonizadas por

---

<sup>12</sup>ES interesante tener presente al respecto el artículo publicado por Luiz Alberto Moniz Bandeira “¿América latina o Sudamérica?”, en el diario Clarín de Buenos Aires, el 16 de mayo de 2005. Tales ideas se desarrollan en la compilación de todos los documentos escritos por Bilbao en el libro de José Alberto Bravo de Goyeneche (2007). *Francisco Bilbao 1823-1865: el autor y la obra*. Editorial Cuarto Propio, Santiago, Chile.

Francia, o incluso, de manera más reciente y novedosa, la inclusión de áreas donde la población de habla hispana es importante en Estados Unidos<sup>13</sup>.

La conquista y colonización del continente americano por los europeos, como también la llegada de esclavos africanos, significó la gestación de nuevas identidades, las cuales se nutrieron de una u otra forma de las originarias, muchas de las cuales siguieron existiendo, sucumbiendo otras ante el impacto de las nuevas enfermedades, la guerra y la dominación. Esta situación generó un drama humano de proporciones, el cual sigue activo en diversas regiones mediante otros medios. En este contexto se debe destacar que los procesos de formación de identidades son tan activos hoy como ayer, especialmente debido a las migraciones, combinándose los aspectos de carácter local, étnico, nacional y de áreas culturales.

Como hemos descrito anteriormente, la forma de explicar estos procesos por diferentes estudiosos es esencialista, constructivista, histórica, estructural e incluso postmodernista, existiendo variantes en cada una de ellas. La identidad cultural nacional de cada uno de los estados latinoamericanos ha sido definida de diferentes maneras, siendo adscritas la mayoría de ellas a lo menos a cinco corrientes de pensamiento por J. Larraín, autor con quien el suscrito concuerda: hispanismo, indigenismo, mestizaje cultural, mestizaje religioso y la búsqueda de la identidad (Larraín, J. 2001:53).

La corriente hispanista que destaca y valora las tradiciones, modos de vida, cultura y la lengua castellana, ha estado presente desde la Independencia, pero cobra mayor fuerza a comienzos del siglo XX con los escritos de Rodó (1967), Blanco Fombona (1911) y Vasconcelos (Acosta Rico, F. 2004). En lo general estos autores escriben contra el imperialismo norteamericano de la época, pero su hispanismo era moderado con un sentimiento americanista y valorando el mestizaje, aunque también están presentes los que rechazan y desprecian lo indígena. En Perú el hispanismo extremo se encuentra en José de la Riva Agüero (1952) y Raúl Porras (2010), quienes no obstante valoran la importancia del imperio incaico y el mestizaje, consideran superior la cultura española. En Chile esta corriente es difundida por el historiador Jaime Eyzaguirre (1957), quien destaca que la raíz de la cultura hispanoamericana se encuentra en la tradición católica y medieval española, la cual era superior a las culturas indígenas americanas, denunciando además que las élites de cada país traicionaron su verdadera identidad al aceptar las influencias de las culturas inglesa y francesa. Estos y otros autores hispanistas subvaloran la importancia que tuvo y tiene el

---

<sup>13</sup> Sobre el tema de la identidad cultural en Estados Unidos ver el excelente y polémico libro de Samuel P. Huntington (2004). *¿Quiénes somos?: Los desafíos a la identidad nacional estadounidense*, Editorial Paidós, Barcelona, en donde este autor analiza la evolución del concepto de nación y nacionalismo en su país, desarrollando para ello un estudio detallado de fuentes históricas y actuales.

mestizaje racial y cultural en América, como también los aportes que realizaron los grupos de esclavos negros como también los inmigrantes de otras regiones de Europa y Asia.

La corriente indigenista destaca el aporte de los diversos pueblos aborígenes, pero tampoco es homogénea en sus planteamientos, existiendo autores como el peruano Luis Eduardo Valcárcel (1972) que vio el mestizaje como un problema para el mundo indígena y que a través de sus escritos combatió la imagen negativa que de su cultura existía en Perú. Como también hay otros investigadores más recientes, como el mexicano Guillermo Bonfil Batalla (1990) que destacan la continuidad de las culturas indígenas y quienes, como el uruguayo Eduardo Galeano (1971) y el peruano Luis Lumbreras (2005) que resaltan el carácter comunitario de los pueblos indígenas y su relación con el medio ambiente.

Otros autores, como el chileno Pedro Morandé (1984), señalan que la identidad de los pueblos latinoamericanos se origina fundamentalmente por la introducción del catolicismo en el siglo XVI y cuya mayor fuerza se encuentra en la religiosidad popular hasta el presente. Otra corriente de pensamiento radica la identidad latinoamericana en el mestizaje, en un proceso no acabado, de permanente búsqueda, de ausencia de pertenencia tanto a lo indígena como a lo hispano, siendo el mexicano Octavio Paz (1959) uno de sus mejores exponentes.

Para el caso chileno se distinguen varias corrientes de pensamiento para definir la identidad nacional, teniendo la mayor parte de ellas visiones esencialistas al ver la identidad cultural chilena como algo acabado, cuyos valores compartidos se establecieron en el pasado y no cambian en su esencia, desconociendo o subvalorando que la identidad se va construyendo a través del tiempo. El sociólogo Jorge Larraín (2001) distingue las siguientes corrientes de interpretación: (1) militar-racial; (2) hispanista; (3) psicosocial; (4) religiosa-católica; (5) cultura popular y (6) empresarial-postmoderna. Cada una de estas corrientes de pensamiento, si bien se originan en determinadas épocas, tienen adeptos hasta el presente.

En la visión militar se combina lo racial, lo religioso y la importancia del estado. En esta corriente es central el papel que la guerra ha tenido en la constitución de la identidad chilena, primero en la Colonia con los mapuches, después en la guerra de la Independencia venciendo a los españoles, después venciendo a Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, conflictos que generaron un nacionalismo. Se destaca aquí el rol del ejército en la construcción de la identidad nacional, cuya institución se considera anterior a la formación del estado republicano, nacida al fragor de la guerra de conquista, la cual habría tenido una función integradora, centralista, civilizadora, argumentando que varios gobernadores coloniales y presidentes de la República han sido presidentes de Chile.



Pero también se apela en esta corriente que desataca lo militar, aunque parezca contradictorio, al mestizaje entre los mapuches guerreros y los conquistadores españoles, cuyos descendientes habrían heredado tales virtudes militares. En esta línea, autores como Nicolás Palacios aludieron al concepto de la “raza chilena”, representada por un personaje típico del pueblo, conocido como el “roto chileno” que nace al alero de la guerra<sup>14</sup>. Pero para Palacios, el español que se une al mapuche y que da forma a la raza chilena, es el español de origen godo. Esta versión es considerada hoy día como machista, patriarcal y sexista, pero hay que señalar que este autor buscaba resaltar los valores del pueblo chileno frente a un clima de opinión de la elite que denigraba lo popular por considerarlo bárbaro. Roberto Hernández, escribiendo en 1929, también destaca al roto chileno como lo esencial del pueblo chileno, destacando la pérdida de los valores tradicionales oponiéndose a reemplazar al roto chileno por visiones populistas que los veían como proletarios y caracteriza al roto chileno como valeroso, patriota, bebedor, derrochador, libre, astuto, inteligente, generoso, pícaro y poeta. Para este autor es en el pueblo donde se encuentra lo más genuino de la identidad nacional.

También historiadores más recientes como Ricardo Krebs (2008) señalan el papel principal que tuvo la guerra en la formación de la identidad histórica chilena por lo menos hasta fines del siglo XIX. Por su lado, el historiador Carlos Cousiño (1985) integra en lo militar la influencia de lo religioso, señalando que la identidad chilena se comprende mejor a través del rol que tuvo la hacienda o gran propiedad rural junto con el ejército, incorporando este último la religiosidad popular, especialmente la mariana, como parte integrante de sus ritos, particularmente al proclamar a la Virgen del Carmen como patrona del ejército.

Estas visiones militaristas, con sus matices, han sido por décadas las más comunes en los textos de enseñanza de la historia de Chile, los cuales destacan tres hitos decisivos en la formación de la identidad chilena: la Guerra de Arauco, la Guerra contra la confederación peruana- boliviana y la Guerra del Pacífico, las cuales formaron la forma de ser y la nacionalidad chilena. Larraín critica esta visión como esencialista ya que reduce la identidad a solo algunos aspectos, considerándola sesgada, excluyente y unilateral (Larraín, J. 2001).

Por su lado la corriente de pensamiento hispanista es la más trabajada y posee numerosos seguidores, especialmente entre las décadas 30 y 40 del siglo XX. Su mejor exponente es el historiador Jaime Eyzaguirre (1969), quien indica que en la raíz cultural hispánica están los fundamentos de la identidad chilena y sostiene

---

<sup>14</sup> Para algunos el origen del concepto del roto chileno se remonta a los expedicionarios de la hueste de Diego de Almagro en 1536 que regresaron al Perú de su primer viaje a Chile pobres y con sus ropas “rotas”. Sin embargo el concepto se populariza en el siglo XIX, principalmente al alero de las guerras contra el Perú, teniendo un sentido contradictorio, tanto de admiración por su esfuerzo frente a la adversidad pero también despectivo.

que cada pueblo tiene su propia esencia. Explica que con la Independencia se rompe con la propia tradición y comienza una búsqueda de lo foráneo, traicionado su autenticidad pero al mismo tiempo fracasando en sus intentos de copiar lo extranjero; aunque también es optimista señalando que en la juventud chilena hay una búsqueda para revalorizar el patrimonio cultural que permitirá avanzar hacia una verdadera independencia.

Mario Góngora (2003) es otro connotado historiador que plantea el carácter hispanista de la cultura chilena, destacando el rol del Estado en la formación de la identidad nacional. Por su parte el historiador Osvaldo Lira (Universidad Adolfo Ibáñez 1994) también plantea, que si bien las naciones hispanoamericanas son mestizas, su esencia cultural proviene de la cultura hispánica, pero no valora el aporte indígena debido a la superioridad de la cultura española. Al respecto Jorge Larraín (2001) considera que la corriente hispanista, en sus distintas versiones, es exclusivista y esencialista y que no tiene hoy mucha fuerza en Chile.

Otra corriente de opinión es la que otorga mayor importancia al carácter sicosocial de la chilenidad. Su exponente más conocido es el historiador Francisco Antonio Encina (1912; 1952), quien incluso llega a considerar los rasgos psicológicos como si fueran una herencia genética. Al respecto el sociólogo Hernán Godoy (1977) define varios rasgos psicológicos de la chilenidad debido a las características geográficas del país, las guerras y el mestizaje de hombres españoles con mujeres mapuches. Godoy define que existen tres aspectos que unen al pueblo con la elite al final de la Colonia: acatamiento a la autoridad civil y religiosa; paternalismo agrario y la identificación con el país, destacando rasgos positivos como la sobriedad, el espíritu democrático y el afecto; señalando como rasgo negativo la falta de imaginación. Esta corriente psicológica considera que los rasgos principales del carácter del ser chileno se originan en la colonia y se consolidan en la república, destacando en general la inclinación hacia el orden establecido, la sociabilidad, la dependencia de la opinión ajena, la inseguridad, la moderación, el conservadurismo y la cautela.

Por su parte, la corriente que explica la formación de la identidad chilena en base a la religiosidad católica, tiene su mejor exponente en el sociólogo Pedro Morandé (1984) quien destaca el catolicismo introducido en la colonia. Esta versión tiene según J. Larraín (1996) ocho ideas principales: 1.- El sincretismo religioso formado en los valores cristianos e indígenas, con un marcado énfasis ritual en el sacrificio, el cual se constituyó en los siglos XVI y XVII; 2.- Que la modernidad ilustrada no forma parte de la cultura latinoamericana, la cual tendría un modelo barroco simbólico-dramático; 3.- Que la identidad latinoamericana es moderna-barroca; 4.- Que la cultura barroca es más oral que escrita y da más importancia al rito y a la transmisión oral; 5.- Que la cultura latinoamericana favorece la intuición, el corazón, el conocimiento; 6.- Que la identidad católica no ha sido reconocida por las elites intelectuales latinoamericanas por lo que existe una alienación y una contradicción

entre la modernidad ilustrada y la modernidad barroca; 7.- Que la identidad latinoamericana muestra su mejor expresión en la religiosidad popular; 8.- Que la modernidad ilustrada con su lógica racionalista está acabada y agotada. Para Morandé América Latina sufre desde la Independencia una ruptura cultural porque sus elites no reconocen su identidad católica que cruza todas las épocas y las dimensiones social, económica y cultural, privilegiando las elites la razón instrumental y despreciando la cultura popular que se identifica en lo festivo y en lo carnavalesco (Morandé, P. 1984).

Jorge Larraín critica esta versión por esencialista y por darla como algo acabado, formado e inmutable, que tiene una síntesis original, única y auténtica basada en el catolicismo. Si bien Larraín no desconoce la importancia del catolicismo, este rasgo no es el único y ha dejado de ser el centro de nuestra identidad, donde ha existido y existe la pluralidad (Larraín, J. 1996:178; Larraín, J. 2001:199).

Otra corriente de pensamiento es la que resalta el rol de la cultura popular en la formación de la identidad chilena. Los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto (1986; 1999), además de Maximiliano Salinas (2005) son tres de los principales exponentes de este planteamiento, quienes sostienen que lo más auténtico de la identidad chilena se encuentra en la cultura popular, que es allí donde hay más imaginación creativa y autonomía, y cuya cultura se opone a la que trata de imponer la oligarquía, teniendo esta última por lo general un carácter imitativo de lo exterior. Si bien estos autores manifiestan que la cultura popular tiene tensiones e incoherencias destacan su originalidad e inventiva. Esto explicaría por qué el *“roto chileno”* ha sido considerado como el personaje típico de Chile, siendo el bajo pueblo el principal heredero de la tradición colonial española, pero también de las tradiciones mapuches y de otras culturas indígenas, siendo ambas bloqueadas y reprimidas por las elites oligarcas en el poder. Destacan estos autores también las oposiciones entre la cultura de la élite oligarca y la cultura popular, siendo la primera formal, grave y severa y la segunda alegre, jovial y vital. Para Larraín (2001) la imaginación y la capacidad de creación son aspectos claves de la formación de una identidad y de su reproducción. Sin embargo este autor critica esta visión por su carácter esencialista e idealista al reducir la construcción de la identidad chilena a un solo actor principal: el pueblo.

Finalmente tenemos la visión de una identidad cultural chilena de carácter empresarial y postmoderna. Esta corriente surge a comienzos de los 80 sosteniendo que Chile es una nación emprendedora, diferente, ganadora, moderna. Esta tesis es levantada por los líderes del neoliberalismo encontrando mucho eco en la prensa y líderes políticos de distintas tendencias (Lavín, J. 1987). Larraín (2001) critica esta visión por centrarse fundamentalmente en lo económico y en los ideales de ganancia, consumo y del individualismo, como también el discurso postmodernista que tienen algunos de los que la defienden, quienes avalan el relativismo y la desconfianza en los absolutos y en las ideologías

tradicionales. Autores como Tomás Moulián (1997) y Bernardo Subercaseaux (1997) han analizado extensamente esta corriente criticando sus postulados.

### **3.3 La Formación de la Identidad Nacional Chilena: Procesos, Símbolos y Arquitectura**

Como hemos descrito, el territorio actual de Chile, debido a su extensión y diversidad geográfica, ha sido escenario del desarrollo de distintas culturas desde hace miles de años, coexistiendo a principios del siglo XVI una amplia gama de culturas indígenas, algunas de las cuales mantenían una forma de vida cazadora y recolectora, mientras que otras eran sedentarias con distintos grados de práctica de la agricultura, ganadería, caza y recolección. Además, los pueblos indígenas ubicados en el Norte del país tuvieron contacto con los grandes imperios andinos, primero Tiwanaku y después los Incas, logrando incorporar estos últimos a su dominio las comunidades indígenas tanto del Norte como parte de Chile Central.

Para comprender la formación de la identidad cultural nacional de Chile, debemos describir ciertos procesos, que a veces tienen largos períodos de gestación, pero en los cuales se pueden identificar momentos de síntesis, que generan cambios más o menos radicales en lo económico, social y cultural. Cada uno de ellos tiene causas externas e internas, como también de las circunstancias propias de cada síntesis. A continuación describimos algunos de estos períodos que fueron claves en el desarrollo y construcción de la identidad nacional actual de Chile, sin que ello signifique desconocer la formación continua de otras identidades de carácter regional y la persistencia de la identidad cultural mapuche en parte de la población y de otros pueblos indígenas que hoy viven en Chile.

Estas descripciones se realizan resumiendo los principales períodos históricos y símbolos que las representan, como también mencionando algunos aspectos centrales relacionados con la arquitectura, los modos productivos y de ocupar el territorio, todos referentes que expresan y representan la formación de tales identidades. Nuestra preocupación será destacar los procesos más relevantes. En el capítulo siguiente nos dedicaremos con mayor profundidad a develar el desarrollo de los conceptos de patrimonio y monumentos con datos y ejemplos a través de los cuales se va construyendo desde el Estado una identidad nacional, sin dejar de existir focos de resistencia regionales. Los períodos y síntesis que hemos identificado como principales son: la Conquista y la Colonia; la Independencia y la formación del Estado Republicano; la consolidación del Estado Nacional del siglo XIX; La crisis de la oligarquía y la formación de un Estado más pluralista en la primera mitad del siglo XX; la crisis de los años sesenta y setenta y la instauración del neoliberalismo en los 80.

## La Conquista y la Colonia en Chile

El descubrimiento de América en 1492 es uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. La invasión y conquista iniciada por pequeñas oleadas de andaluces, castellanos y extremeños, provenientes de una España recientemente unificada, victoriosa y heredera de luchas centenarias contra los reinos moros asentados en la península ibérica, provocó a lo largo de los años, la destrucción de todos los imperios y estados que los pueblos indígenas americanos habían construido y la dominación de toda su población, salvo aquellos pueblos que lograron resistir a tal embate o que quedaron aislados en regiones donde no hubo atractivos para la colonización.

Al inicio existió una imagen exótica y paternalista sobre el mundo indígena, la cual expresa Colón en sus escritos, describiéndolos como salvajes que debían ser convertidos al cristianismo (Colón, C. 1985). Desde un comienzo se proclamó la apropiación del territorio, de sus recursos y de su gente para la corona. El interés por el oro, la intolerancia religiosa, la violencia y el trabajo forzado, fueron regla general del proceso de conquista, a pesar de algunas disposiciones reales de protección para los indígenas y la actitud compasiva de algunas autoridades coloniales y religiosos. No obstante la resistencia que opusieron varios pueblos indígenas, estos fueron derrotados sucesivamente. La superioridad española en armas, su visión distinta del mundo, su organización y rápida comprensión de las divisiones étnicas y sus propias contradicciones, llevó en pocos decenios a los conquistadores españoles a dominar parte importante del continente, no obstante su escaso número.

Tal como indican algunos investigadores la derrota fue posible porque los españoles entendieron mucho mejor al mundo indígena que éstos a los españoles. La capacidad por comprender al otro y sus debilidades fue vital en la conquista, existiendo en los primeros contactos varios ejemplos de esta incomprensión mutua, aunque los europeos tuvieron mayor claridad de las diferencias y cómo utilizarlas en su provecho para instalar un sistema de dominación (Todorov, T.1989).

La conquista significó un holocausto cultural y demográfico para la América indígena. Según cifras estimativas en 1500 había entre 50 y 80 millones de habitantes y ya en 1580 solo quedaban unos 10 millones en todo el continente. En Chile se calcula que al comienzo de la conquista los indígenas sumaban un millón y que al final de la época colonial solo existían unos 400.000 (Mellafe, R. 1986: 119; Larraín, J. 1996:135).

La conquista y colonización de América, seguida después por Portugal en el Brasil, fue creando relaciones esclavistas y serviles en todas partes, reflejadas estas en las encomiendas de indígenas y en la constitución de haciendas y

estancias. La minería del oro fue el primer foco de atención de la economía colonial, seguida después por la producción agrícola, ganadera y artesanal, en la medida de las necesidades de los mercados internos y de la metrópoli. Otras potencias europeas como Inglaterra, Francia y Holanda también lograron ocupar porciones de tierras americanas y crearon sus propios modos de ocupación, colonización, desplazamiento o aniquilación de la población indígena y de dominación de los territorios y sus recursos donde se asentaron.

En la América colonial hispana fue la encomienda la que generó el primer sistema de relaciones de dominación, apropiación del trabajo indígena y del mestizaje (De Ramón, A. 2003; Jara, A. 1971). La disminución de la población indígena en distintas regiones motivó desde temprano la importación de esclavos negros en un número creciente, especialmente cuando se constituyó el sistema de haciendas y se calcula que durante el período colonial unos 10 millones de esclavos negros africanos fueron traídos a América (Larraín, 1997:140).

La religión católica se impuso en todas las regiones conquistadas y colonizadas por españoles y portugueses, las más de las veces con violencia, destruyendo los cultos locales, no obstante se produjo en forma creciente un sincretismo religioso que tuvo que ser tolerado por la Iglesia Católica. Por su parte, el mestizaje fue intenso y fue construyendo una sociedad claramente estratificada por el color de la piel y el origen étnico. Por otro lado, la organización del territorio por la corona, en cabildos, corregimientos, capitanías, audiencias y virreinos, fue conformando poco a poco, a lo largo de casi tres siglos del período colonial, administraciones de carácter territorial y político, las cuales fueron creando identidades regionales que constituyeron el embrión de las futuras unidades políticas nacionales surgidas después de la Independencia. El historiador chileno Jaime Eyzaguirre escribió al respecto, al presentar el libro sobre arquitectura colonial de Alfredo Benavides:

*“Por eso llevaron hasta América una fe religiosa, un idioma, un derecho, una estética nuevos. Sin perder su raíz, estas formas del espíritu debieron, más de una vez, adaptarse a las condiciones del medio diverso y hasta lograron absorber, a menudo, elementos propios de la realidad americana. Fue así como se produjo un mestizaje cultural y nació una nueva dimensión creadora...” (Benavides Rodríguez, Alfredo 1961: IX)*

En el sur del continente americano, una vez conquistado el Imperio Inca, una parte de los conquistadores se dirigieron a regiones aún más australes en búsqueda de nuevas riquezas. La primera expedición española es organizada por Diego de Almagro en 1536, quien partiendo desde el Cuzco, llega hasta la zona central de Chile guiado por los incas, después de un viaje penoso por la Cordillera de Los Andes. Convencido de la ausencia de riquezas comparables a las del Perú, Almagro regresa al Cuzco, donde sus diferencias con Francisco Pizarro conducen a un conflicto por el control de la ciudad, en el cual Almagro es derrotado y muerto.



La siguiente expedición a Chile es la de Pedro de Valdivia en 1540 quien, con poco más de un centenar de españoles, logra asentarse en el valle del Mapocho y funda Santiago de Chile un 12 de febrero de 1541.



Expedición de Diego de Almagro a Chile, salida desde el Cusco (3 de julio de 1535). Óleo de Fray Pedro Subercaseaux (1880-1956). Foto Archivo Museo Histórico Nacional



Llegada al Valle de Copiapó y primera misa realizada allí. Óleo de Fray Pedro Subercaseaux  
Fotos Archivo Museo Histórico Nacional



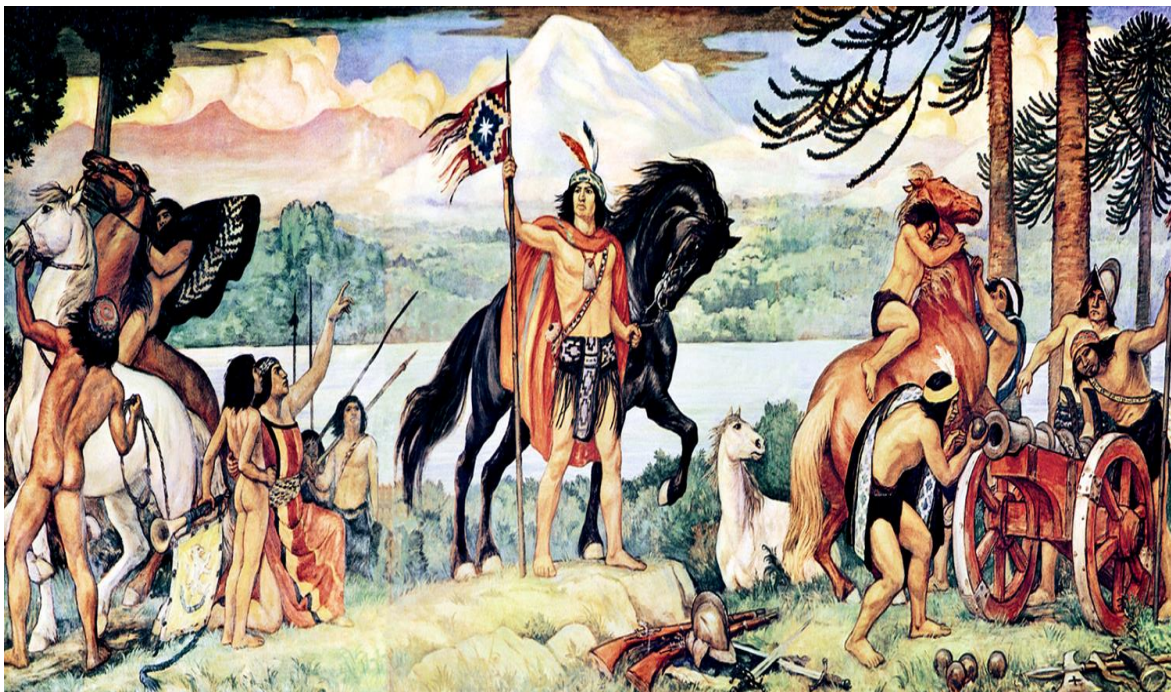
Fundación de Santiago de Chile. Óleo de Pedro Lira. Foto Archivo Museo Histórico Nacional

El 11 de septiembre de 1541 los indígenas se rebelan y asaltan el asentamiento español de Santiago, el cual es incendiado, aunque los sitiados logran sobrevivir. Llegan nuevos refuerzos enviados desde el Perú y la conquista se traslada hacia el sur, hacia el río Bío-Bío y el corazón de la Araucanía, donde la población indígena mapuche resiste, no obstante lo cual Valdivia decide fundar varias ciudades e inicia el reparto de indígenas en encomiendas a los principales conquistadores. Sin embargo los mapuche se alzan contra los invasores y Pedro de Valdivia muere en uno de los enfrentamientos en 1553, avanzando los indígenas hacia Santiago guiados por su líder Lautaro. La llegada de nuevos refuerzos y el apoyo auxiliar de indígenas aliados a los españoles logra contener la rebelión siendo muerto Lautaro (Vivar, G.1987; Calderón, A. 1987).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> La crónica de Vivar, cuyo manuscrito fue concluido en 1558, es de gran valor porque su autor fue testigo presencial de muchos de los hechos que relata. El nombre del autor Jerónimo Vivar o Bibar es ficticio, siendo lo más probable que sea el seudónimo de Juan de Cardaña, el secretario privado de Pedro Valdivia. Esta crónica fue mencionada por otros autores pero estuvo perdida hasta la Guerra Civil Española, período en que fue llevada a Estados Unidos, donde se realizó una primera copia del original manuscrito, siendo editada después varias veces. Otras crónicas de dicho período son las de Alonso Góngora de Marmolejo, la de Pedro Mariño de Lobera y los poemas épicos de Alonso de Ercilla y de Pedro de Oña.





Lautaro, líder mapuche que desde el sur de Chile opone resistencia al avance de los conquistadores españoles. Óleo de fray Pedro Subercaseaux. Foto Archivo Museo Histórico Nacional.

En las siguientes décadas el conflicto y la resistencia indígena es latente y nuevos alzamientos generales se producen, pero se logran poblar varias ciudades. Sin embargo, en 1598 hay un nuevo alzamiento general de indígenas mapuches muriendo, en uno de los enfrentamientos, el propio Gobernador de Chile Martín García Oñez de Loyola. Esta vez, todas las ciudades al sur de Concepción caen poco a poco o son despobladas, decidiéndose establecer una frontera en el río Bío-Bío con una serie de fortines.

Durante todo el siglo XVII y XVIII, salvo el repoblamiento de los enclaves de Valdivia, Osorno y los asentamientos en la Isla Grande de Chiloé, todo ese territorio volvió al control de los mapuches, negociando las autoridades españolas tratados para asegurar las fronteras y cierto comercio, para lo cual tuvo que formarse un ejército permanente con sede en la frontera (Concepción, Chillán, Los Ángeles), con oficiales y soldados profesionales pagados directamente con fondos del Virreinato del Perú, sin dejar de existir por ello enfrentamientos frecuentes (Jara, A. 1971; Villalobos, S. 1977).



Parlamento del Presidente Ambrosio O'Higgins con los mapuches, Negrete, 4 mayo 1793. Claudio Gay, 1854.

Al norte del río Bío-Bío la población indígena fue sometida, repartida en encomiendas, destinadas al trabajo en la minería, la ganadería y la agricultura. La repartición de tierras y la constitución de estancias y después de grandes haciendas, junto con las pocas ciudades fundadas, fueron los lugares donde se inició un proceso de mestizaje continuo e intenso, incluso con la llegada de esclavos negros, cuando la mano de obra indígena fue escasa, existiendo además la esclavitud en varios períodos, para los indígenas capturados en guerra, además de otros que eran capturados y trasladados al norte. La economía agrícola española del siglo XVI fue difícil por la falta de mercados, siendo esencialmente de subsistencia, no teniendo la tierra un valor importante, ya que el interés económico estaba en la apropiación del trabajo indígena que era destinado a la minería en los lavaderos de oro y secundariamente a otras actividades.

Pero en los siglos siguientes la economía de la colonia se fue especializando en proveer diversos productos al ejército de la frontera y exportando carnes ahumadas, cueros, cordobanes, sebos, jarcias, cereales, frutas secas y vinos al Perú y Alto Perú. Durante todo el siglo XVII y XVIII se fue conformando una sociedad minera y agraria en múltiples asentamientos rurales, existiendo solo tres centros poblados con características citadinas: Santiago, Concepción y La Serena, además de los fuertes de frontera, cuyos territorios conformaron la Capitanía

General de Chile, la cual incluía la región de Cuyo allende la Cordillera de Los Andes y los enclaves existentes en Valdivia y Chiloé (Mellafe, R. 1986: 90).

Los descendientes de los primeros conquistadores y los colonos llegados sucesivamente, continuaron el mestizaje con los indígenas y fueron constituyendo la base de la población, en la cual la existencia de un ejército de frontera permanente, fue clave en la seguridad de la colonia. Es así cómo se formó una sociedad rural organizada en estancias y haciendas, y otra de características urbanas, ambas muy estratificadas, siendo los principales hacendados, junto a los representantes del monarca y algunos sacerdotes, los personajes más importantes de la sociedad colonial, gestándose una organización social señorial y aristocrática, donde el carácter guerrero y militar tuvo más fuerza que en otros lugares de América. Se generó así una sociedad principalmente agraria y en algunos sectores minera, donde la tierra y la posesión de indígenas encomendados y esclavos fueron adquiriendo valor y prestigio social. El historiador Rolando Mellafe escribe:

*“Fue este el primer triunfo completo del latifundismo. El dominio no se ejerció solamente en un sentido demográfico y económico general, sino también se extendió al aspecto de la distribución espacial, de la estructura social y de la psicología y valores del campesino...El hacendado quitó y puso personas a cada familia, hizo y deshizo matrimonios, protegió, expulsó, vendió o conchavó peones en sus tierras. Pero en cierto sentido se sintió mucho más comprometido en la defensa de sus peones...” (Mellafe, R. 1986:96)*

Sin embargo para la Corona española el dominio de Chile generó más gastos que lo que producía el país, pero su defensa era vital por la situación geográfica y estratégica de dicho territorio, evitando así que otras potencias europeas se instalaran en el sur del continente americano. A pesar de ello, la existencia de un ejército de línea, obligaba a su mantención y los hacendados de Chile Central aumentaron sus ingresos, iniciándose incluso la exportación creciente de productos hacia el Perú como trigo, cueros y sebo, lo cual enriqueció a algunos hacendados.

A mediados del siglo XVIII la monarquía de los Borbones cambia el modelo de administración de las colonias. El comercio es ampliado, mejor organizado y se produce un crecimiento económico, que en el caso de Chile significaron una mayor riqueza para la elite latifundista y comercial. El aumento de la producción de trigo durante el siglo XVIII para su exportación al Perú, también causaron cambios en algunas economías locales, una mayor preocupación por mejores vías de comunicación hacia la costa y la necesidad de mano de obra estacional. En este nuevo contexto de crecimiento de las colonias, la población flotante rural era una preocupación para el orden y control que quería mantener la administración, y por



ello se acordó crear más ciudades y villas donde asentar a los habitantes. En el caso de Chile, algunos hacendados apoyaron en un comienzo tales medidas, pero otros se resistieron porque debilitaba su poder rural. Los hacendados que ayudaron a fundar las nuevas ciudades se hicieron cargo de la administración de los cabildos aunque no vivieran en las ciudades, limitando el acceso al poder local de los artesanos y comerciantes que si vivían en ellas. A finales del siglo XVIII los latifundistas controlaban gran parte del sector rural y de las ciudades, quedando solo fuera de su accionar el gobierno central y los representantes de estos (Mellafe, R. 1986: 99-110).

Esta aristocracia terrateniente, que también logró progresivamente el control del comercio y las exportaciones, comienza a tener consciencia de grupo especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, la cual, no obstante su poder local, no deja de resentir que los cargos más altos de la administración colonial fueran asignados a españoles peninsulares. No obstante ello, se sienten parte de una comunidad de españoles americanos, aunque su creciente identidad regional se dejar entrever en diferentes escritos y documentos coloniales. El extremo aislamiento del país es un elemento clave en ello, siendo sus mayores contactos con Lima y Buenos Aires, además de Cádiz, ciudades con las cuales había comercio y las familias más pudientes enviaban su hijos a estudiar, particularmente a la primera y última de ellas (De Ramón, A. 2004).

En la segunda mitad del siglo XVIII ya pueden identificarse algunos signos de identidad regional que se expresan a través de textos elaborados por militares, religiosos, científicos, exploradores y poetas, continuando con una tradición de documentos sobre Chile, que habían comenzado a escribirse a mediados del siglo XVI, como por ejemplo “La Araucana” del soldado poeta Alonso de Ercilla y Zúñiga, quien relata los inicios de la de la Guerra de Arauco y destaca el valor de los mapuches en la defensa de su tierra y libertad, la cual fue ya leída en Chile a pocos años de su primera edición<sup>16</sup>; las crónicas e historias de la conquista y los primeros asentamientos españoles, siendo algunos ejemplos de ellas las de Diego de Rosales<sup>17</sup> y Alonso de Ovalle<sup>18</sup> del siglo XVII; y los relatos de viajeros y científicos como Antonio de Ulloa, Jorge Juan y el Abate Molina, además de los escritos de navegantes y científicos extranjeros del siglo XVIII, que van entregando datos de la historia, geografía y de las gentes que habitaban el

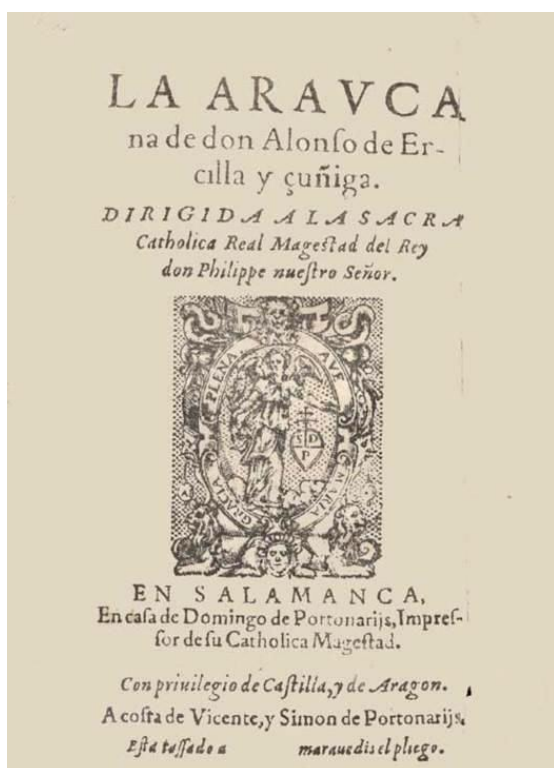
---

<sup>16</sup> Este poema épico, escrito entre etapas (1569, 1578 y 1589) ha sido publicado numerosas veces hasta la actualidad. El texto se encuentra en [www.memoriachilena.cl](http://www.memoriachilena.cl) en versión digital.

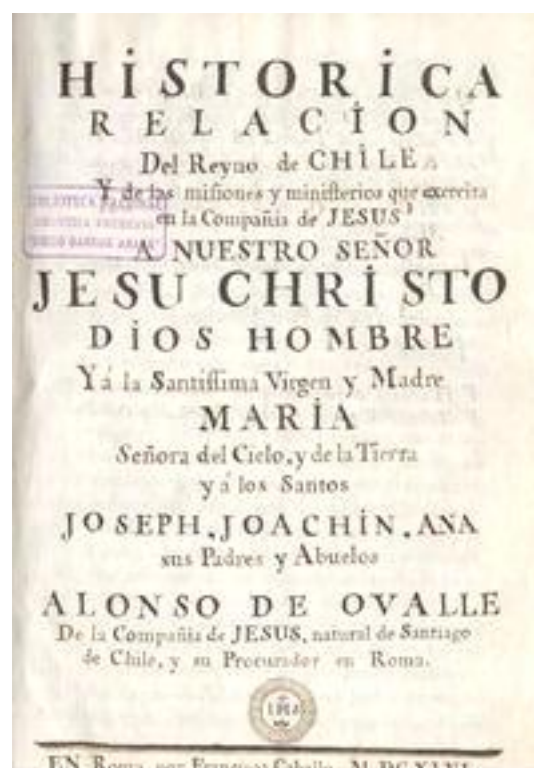
<sup>17</sup> Diego de Rosales fue un sacerdote jesuita y escribió su obra a mediados del siglo XVII, la cual tituló *Historia General del Reyno de Chile: Flandes Indiano*, la cual solo fue publicada por vez primera en 1878. Copia digital se encuentra en [www.memoriachilena.cl](http://www.memoriachilena.cl).

<sup>18</sup> Alonso de Ovalle (1646). *Histórica relación del Reyno de Chile i de las Mifiones i Miniftterios que exercita la Compañía de Jesús*. Esta obra fue impresa en castellano e italiano en 1646, en Roma. Se encuentra versión digital en [www.memoriachilena.cl](http://www.memoriachilena.cl).

territorio chileno<sup>19</sup>. Si bien la mayor parte de estos autores son españoles de la península, ya en la segunda mitad del siglo XVIII varios de ellos son nacidos en Chile (Calderón, A. 1987: 51-86).



La Araucana, edición de 1574



Historia de Alonso de Ovalle, edición de 1646

La Guerra de Arauco y el aislamiento del territorio fue creando una identidad regional, si bien la lealtad está hacia España y la monarquía, siendo los hijos y descendientes de los españoles clasificados como españoles americanos, los cuales eran diferenciados de los mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas. Es interesante notar que en algunas de las crónicas coloniales, pero también en los documentos escritos por viajeros que visitan el territorio de la Capitanía General de Chile, se denomina a los indígenas como “chilenos” para diferenciarlos de los españoles o europeos.

<sup>19</sup> Varios viajeros que visitan el país o que recorren sus costas y puertos nos han dejado importantes descripciones que han sido posteriormente impresas o traducidas al español, como los viajes realizados entre 1615 y 1814 de Jacobo Le Maire y Guillermo C. Schouten, Henry Brouwer y Elías Herckmans, Antonio María Farrelli, Manuel Brizuela, Juan Francisco Sobrecasas y Samuel Johnston. Como también los viajes realizados entre 1817 y 1822 por John F. Coffin, Richard Longeville Vowell, E.H. Appleton y Gilbert Farquhar Mathison. Todas publicadas en *Viajes Relativos a Chile*, tomos I y II por el Fondo Bibliográfico José Toribio Medina, de la Biblioteca Nacional en 1962.

Otro aspecto a destacar es el simbolismo que acompañaba a cada fundación de ciudad o toma de posesión, siendo cada ceremonia registrada y cuidadosamente celebrada. Tales actos generaban un antes y después para cada región conquistada, estableciendo un lazo de pertenencia, el cual era recordado como fundacional, señalándose en el caso de las ciudades, que no eran más que campamentos militares, los lugares donde se ubicarían las construcciones de la iglesia, del cabildo, de las autoridades (Alegría, L. y Mellado, L. 2004:135-143).

Las festividades religiosas y civiles permitieron la identificación cultural de la población con España y la monarquía, pero fueron gestándose diferencias en cada región de América, de acuerdo a la composición indígena o de esclavos africanos y mulatos predominantes, donde el sincretismo fue creando formas rituales particulares. En este contexto las festividades más importantes eran las de los santos patrones y las juras reales, en las cuales los rituales eran pomposos teniendo la comida una relevancia especial, en donde se expresaban las tradiciones culinarias españolas pero se introducían también los productos locales (Cruz de Amenábar, I. 2003:87-93). En Santiago de Chile las fiestas coloniales más importantes fueron la de San Juan, Santiago, la Pascua y el carnaval. Entre las fiestas y ceremonias civiles más importantes estaba el Paseo del Estandarte de la ciudad y las celebraciones de recepción de los gobernadores. En la plaza de armas tenían también lugar los ejercicios ecuestres de los militares como también las corridas de toros (Plath, O. 1994: 164).

En una primera etapa, muchas ciudades de la América hispana estaban amuralladas, pero en el caso de Chile durante toda la colonia, especialmente en la frontera y en los enclaves militares de defensa, la mayoría de las construcciones eran fortificaciones o poblados fortificados con empalizadas; incluso la recién fundada ciudad de Santiago, después de ser incendiada el 11 de septiembre de 1541, fue rodeada por un muro de adobe en su perímetro central como baluarte de defensa<sup>20</sup>.

Por lo tanto fuertes e iglesias fueron las construcciones recurrentes, salvo en las incipientes ciudades de Santiago, Concepción y La Serena en donde hubo construcciones civiles oficiales y de vivienda para los conquistadores. En el siglo XVIII hubo nuevas fundaciones de ciudades, construyendo casas de adobe, con techos de paja y después de tejas, siguiendo el patrón español tradicional, el cual se fue adaptando a las condiciones climáticas, pero siempre teniendo en mente la idea de defensa, especialmente en las ciudades del sur de Chile. Las iglesias, debido a los frecuentes terremotos de Chile, fueron reforzadas en sus estructuras,

---

<sup>20</sup> Pedro de Valdivia inició la construcción de una muralla de adobes en 1541 después del ataque indígena del 11 de Septiembre de ese año. Se emplearon en la muralla 200.000 adobes, de una vara de largo por un palmo de ancho (Benavides, A. 1961:198).

engrosándose sus muros y construyéndose contrafuertes, eliminándose las torres o siendo éstas de poca altura. La plaza fuerte o plaza de armas era el lugar central de cada poblado y sede del poder político y religioso, emplazando también allí o en sus alrededores, las casas de los vecinos principales, instalándose en la periferia los ranchos de los indígenas, de los mestizos y el resto de la población de servicio (De Ramón, A. 2003).

En el campo, el núcleo de asentamiento era la hacienda, la cual se constituyó en el centro del poder rural, pero también del mestizaje, siendo una preocupación constante de las autoridades coloniales, especialmente en el siglo XVIII, la fundación de nuevas ciudades, exigiendo que los dueños de las haciendas tuvieran sus casas principales en ellas, con el objeto así de mejor controlar la población y el creciente poder de los hacendados. Las órdenes religiosas fueron también fundamentales en la apropiación del territorio, teniendo algunas de ellas, especialmente los jesuitas, extensas propiedades rurales y urbanas, que conformaron unidades productivas importantes, siendo su labor misional clave en el adoctrinamiento religioso de los indígenas y como factor de aculturación al modo de vida colonial, incluso en las tierras indígenas tras la frontera establecida en el río Bío-Bío (De Ramón, A. 2004; Jocelyn-Holt, A. 2008: 92).

En el siglo XVII la preocupación central de las autoridades coloniales fue la construcción de fuertes en toda la línea de la frontera y tras ella (Guarda, G. 1990). En Santiago se construyen varias iglesias y conventos, siendo una preocupación especial del Cabildo la habilitación de canales o acueductos para traer agua de buena calidad hasta la plaza de armas, como también la construcción de los primeros tajamares para evitar los desbordes del río Mapocho, el cual varias veces había inundado la ciudad, además de la construcción de un nuevo edificio para el cabildo y de un puente sobre el río Mapocho (León Echaíz, R. 1975). Los frecuentes terremotos llevaron varias veces a la destrucción de las obras construidas, siendo el más famoso de ellos el de 1647, el cual casi no dejó edificio en pie en toda la ciudad<sup>21</sup>.

En el siglo XVIII y primera década del siglo XIX, continúan las construcciones de varias obras públicas, iglesias y edificios administrativos que van formando una identidad urbana especialmente en Santiago, Concepción y La Serena. Entre las principales construcciones, podemos nombrar para Santiago: la casa de los gobernadores, el empedrado de varias calles, la ampliación del hospital San Juan de Dios, la Real Audiencia, la aduana, inicio del canal San Carlos para llevar las aguas del río Maipo hasta el río Mapocho e irrigar una vasta zona entre los dos

---

<sup>21</sup> La importancia y consecuencias de los desastres naturales en la historia de Chile han sido un aspecto clave en la formación de la identidad cultural. Mellafe da cuenta que entre 1520 y 1906 hubo 282 desastres: 100 terremotos, 46 grandes inundaciones, 50 años de sequía absoluta, 82 años de epidemias generalizadas (Mellafe, R. 1986:284). Esto sin considerar los que han existido después hasta el gran terremoto y maremoto del 2010.



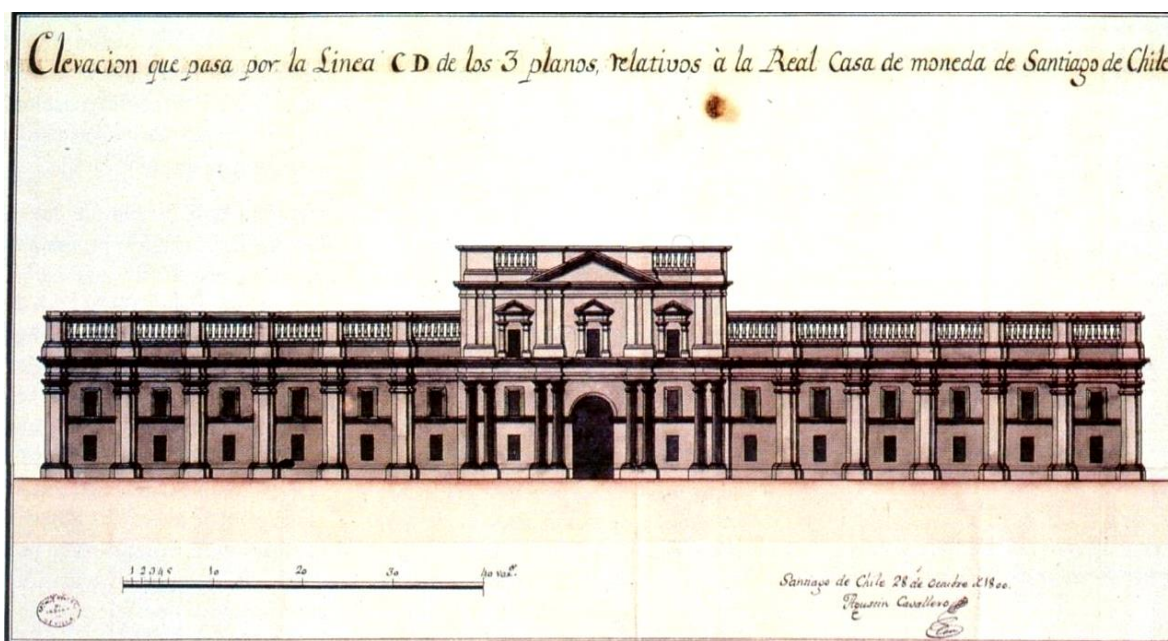
valles y aumentar notablemente la productividad agrícola, la fundación de la Universidad Real de San Felipe, la Casa de Moneda, la cárcel, el Hospicio de Santiago, los nuevos tajamares y paseos urbanos, el camino a Mendoza por Uspallata y los refugios para el servicio de correos y viajeros, el camino a Valparaíso, el edificio del Consulado y el puente de Cal y Canto. Fuera de la capital se mejoraron las defensas de Valparaíso, Valdivia, Talcahuano, continuando la construcción de iglesias, capillas y conventos (Benavides, A. 1961:198-208; Peralta, S. y Baeza, F.1979).



Puente de Cal y Canto sobre el río Mapocho, dibujo de Edmond Bigot, 1820. Foto archivo Museo Histórico Nacional

Si bien en los siglos XVI y XVII no hay arquitectos o ingenieros radicados en Santiago, llegan a Chile misioneros que tenían conocimientos en construcción, siendo los más importantes los jesuitas, quienes acrecentaron su presencia con misioneros bávaros a mediados del siglo XVIII que dejaron una importante obra. A estos hay que agregar los ingenieros militares que vinieron a planificar y construir las fortalezas del sur de Chile. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XVIII vienen a la colonia los primeros arquitectos, ingenieros militares, agrimensores y constructores, todos enviados por la Corona, entre los cuales destacan Joaquín Toesca, Juan Garland, José Antonio Birt, Leandro Badarán, Pedro Rico, Agustín Cavallero y Manuel María de Areto, quienes además de participar en el diseño y construcción de las obras civiles y edificios administrativos también colaboraron, en algunos casos, en la construcción de edificios religiosos, siendo no pocos de ellos construidos por maestros constructores que pertenecían a algunas de las órdenes religiosas asentadas en Chile, teniendo una influencia importante, como hemos mencionado más arriba, los constructores jesuitas, varios

de ellos venidos especialmente de Baviera y otras regiones de Europa (Benavides, A. 1961; Guzmán, F. 2004; León Echaíz, R. 1975).



Casa de Moneda de Santiago de Chile según plano de Agustín Cavallero, 1800. Archivo Nacional

Las principales construcciones urbanas: iglesias, conventos y edificios públicos replicaron los modelos arquitectónicos empleados en España y en el Perú, pero de una manera más modesta. En el siglo XVII y parte del XVIII, se expresa en Chile el barroco, tanto en su carácter sincrético andino como también europeo, particularmente en ciertas edificaciones religiosas, siendo los jesuitas sus principales impulsores. En la segunda mitad del siglo XVIII, las nuevas construcciones públicas expresan la tendencia hacia el neoclasicismo, que traían directamente de España e Italia, los arquitectos contratados por la Corona española, cuyos proyectos enfatizaban armonía, fortaleza, seguridad, sobriedad y unidad, cuya tendencia continuó en las primeras décadas del siglo XIX (Benavides, A. 1961; Benavides, A. 1988; Binda, E. y Trebbi, R. 1996; Jocelyn-Holt, A. 2008).<sup>22</sup>

Por tanto, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la Capitanía General de Chile, dependiente del Virreinato del Perú, en los territorios efectivamente controlados por el gobierno colonial, posee ya una identidad regional básica

<sup>22</sup> El arquitecto Alfredo Benavides (1961) realizó las primeras clasificaciones de los estilos arquitectónicos empleados en Chile durante la colonia a través de distintos períodos, los cuales estuvieron siempre influenciados por lo que ocurría en el Virreinato del Perú, aunque menciona que existió en Chile un cierto regionalismo.

conformada a lo largo de los casi tres siglos de colonialismo hispano, con una formación histórica marcada simbólicamente por la Guerra de Arauco (Góngora, M. 2003:63), adscribiéndose la elite como perteneciente a una identidad española americana, expresando algunos miembros de ella cierto regionalismo que la distingue de otras divisiones administrativas coloniales, pero de manera leve.



Iglesia y convento de San Francisco de Santiago de Chile, cuya construcción inicial es de finales del siglo XVI, fotografía de Alfredo Benavides en la primera mitad del siglo XX

Siguiendo a algunos autores nacidos en Chile en la segunda mitad del siglo XVIII, como el abate Juan Ignacio Molina<sup>23</sup>, se observa el desarrollo de un sentimiento

---

<sup>23</sup> Juan Ignacio Molina nació cerca de Talca en 1740 y murió en Italia en 1829. Fue un jesuita dedicado al estudio del mundo natural. Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767 se radicó en Bolonia, donde escribió varios libros sobre Chile, tales como: *Compendio della storia geográfica, naturale, e civili del regno del Cile* (1776); *Ensayo sobre la historia natural de Chile* (1782); *Ensayo sobre la historia civil de Chile* (1787).

criollo regional sin una dimensión política manifiesta (Kirsi, B. 2003:12; Cid, G. y San Francisco, A. 2009: xiv). En la obra del abate Molina, escrita en italiano en 1776 e impresa al español en 1782, describe todo el territorio y sus indígenas, atento a sus diferencias, pero que define como chilenos, para diferenciarlos de los españoles, podemos leer:

*“...la del Reyno de Chile depende totalmente de sus cordilleras; estando tan íntimamente persuadidos de esta verdad aquellos habitantes, que siempre que quieren dar la razón de algún fenómeno concerniente a su atmósfera o a sus tierras, recurren a los influxos de aquella montaña como su agente mas principal y mas inmediato.” (Molina, J. 1782: iv-v)*

Distinta era la situación de las comunidades rurales, donde el regionalismo era aún más marcado y las identidades y lealtades culturales son de carácter local, observándose en Chile la formación de identidades regionales para el Norte Chico (La Serena, Copiapó), Chile Central (de los Valles de Aconcagua al Maule), de La Frontera (Concepción y los enclaves fronterizos), de Chiloé y de Cuyo, con las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis, allende la Cordillera de Los Andes, por lo menos hasta su separación de la Capitanía de Chile y su administración por parte del Virreinato del Plata hacía fines de la década de 1770, la cual no obstante siguió manteniendo sus lazos con Chile. Si bien hay tránsito y migración entre estas regiones, sus especificidades geográficas y culturales subsisten en el siglo XIX, debiendo el Estado republicano imponer su poder desde la hegemonía política de Santiago.

Durante el período colonial tuvo lugar la formación de una cultura hispanoamericana donde se impuso la lengua castellana y las instituciones españolas, las cuales se adecuaron a la nueva realidad en un contexto de intenso mestizaje racial y cultural, especialmente en los sectores más populares.

En una primera etapa, este mestizaje también fue muy importante en la elite de los conquistadores, quienes se emparejaron o casaron con las hijas de los caciques indígenas locales, o practicaron la violencia sexual contra las demás, siendo la mayor parte de los descendientes de los primeros españoles en asentarse en Chile mestizos. En una escala menor, también hubo otro mestizaje forzado, debido a la captura de varias mujeres españolas por parte de los mapuches, particularmente en el Sur de Chile, desde fines del siglo XVI, y durante los siglos XVII, XVIII y en la primera mitad del siglo XIX (Cruz de Amenábar, I. 2004: 101-113).





Capturas de mujeres criollas por los indígenas en la primera mitad del siglo XIX, C. Gay 1854

Las poblaciones indígenas que sobrevivieron debieron someterse al nuevo orden, experimentando también cambios profundos en sus diversas culturas. Algunos pueblos indígenas, como es el caso de los mapuches del Sur de Chile (Bengoa, J. 1999, 2000) lograron mantener cierta autonomía en parte de sus territorios ancestrales, aunque su organización económica debió adecuarse a los nuevos cambios, como la introducción del caballo y de nuevos cultivos, creándose en la frontera del Bío-Bío una realidad social y cultural de características especiales, donde la guerra esporádica y las relaciones transfronterizas fueron fundamentales en la configuración de la identidad de los colonos españoles y mestizos, siendo la Guerra de Arauco un aspecto esencial de su constitución, aunque la intensidad de la guerra fue esporádica con largos períodos de paz e intercambio (Villalobos, S. 1995).

No puede dejarse de mencionar también la llegada a Chile de esclavos negros y mulatos, venidos tanto desde el Perú como de Buenos Aires, los cuales reemplazaron en parte, como fuerza laboral, a la población indígena. Si bien su número fue escaso en relación a la población de origen español, mestiza e indígena, en algunos corregimientos de Chile Central superó el 10% de los habitantes en la segunda mitad del siglo XVIII. Su importancia en el mestizaje y

formación de la diversidad cultural de la sociedad chilena ha sido minimizada y poco estudiada en Chile, pero sus huellas no pueden ser negadas.<sup>24</sup>

De acuerdo a Ricardo Krebs (2009:9) a finales del siglo XVIII, los personajes más ilustrados de la elite criolla de Chile, como por ejemplo Juan Egaña, quien fue uno de los intelectuales más importantes del período de la Independencia, atribuyeron gran importancia al medio geográfico en la formación de la identidad criolla, siendo para Egaña fundamentales tres factores: el clima, la extensión del territorio y su aislamiento.

Concluyendo sobre el período colonial, podemos decir que los 270 años de administración y colonización española del territorio controlado efectivamente por estos en Chile, fue conformando una sociedad estratificada cuya elite se definía culturalmente como españoles americanos, pero que a finales del siglo XVIII experimentaba ya ciertas diferencias regionales respecto de otros territorios americanos, como los del Perú y del Plata, debido a una creciente conciencia de una historia común. La diversidad de ambientes naturales, como también las actividades económicas preponderantes y la realidad local, estaban generando identidades regionales dentro del propio territorio administrado por la Capitanía General de Chile, siendo posible identificar diferencias entre la Zona Norte, donde la actividad minera era la más importante; la Zona Central, donde la actividad agrícola y ganadera dominaba el escenario rural a través de grandes haciendas; y la Zona Sur, que tenía una sociedad de frontera militarizada, con focos de colonización y defensa aislados en Valdivia, Osorno y Chiloé.

Por tanto, en los albores del siglo XIX, existían en Chile distintas sociedades y pueblos cuyas organizaciones sociales e identidades culturales tenían grados de diferenciación, pero en constante relación y tensión. Por una parte, una sociedad mayoritaria, cuya identidad cultural era hispanoamericana y adscrita a la autoridad estatal monárquica española en el territorio que administraba, donde existían ciertas diferencias regionales que la distinguían del Virreinato del Perú y del Virreinato del Plata, con una población que compartía un sentimiento de origen e historia común, formada en un intenso mestizaje racial y cultural. Por otra parte, una variedad de sociedades indígenas, siendo mayoritaria la del pueblo mapuche, que vivía libre y de acuerdo a sus costumbres, en los territorios no controlados por la administración española en el Sur de Chile; además de otros pueblos indígenas, principalmente cazadores y recolectores, que vivían en sus territorios ancestrales australes de la Patagonia y en algunos enclaves a lo largo de toda la Cordillera de Los Andes.

---

<sup>24</sup> Por ejemplo en un censo de población realizado para el Obispado de Santiago en 1777-1778 se identificaron 120.646 españoles, 16.619 mestizos, 18.301 indios, 2.912 negros y 19.149 mulatos (Cabeza, A. y Jaime, M. 1986). Otros autores que han escrito libros sobre el tema son (Peri, R. 1999) y (Mellafe, R. 1959).

Estos dos contextos culturales gravitantes de la población de todo el territorio tenían formas sociales, materiales e ideológicas opuestas, mediatizadas por el mestizaje y las relaciones fronterizas. Cada cual nutría su formación y cambio de identidades de acuerdo al proceso histórico de interacciones, donde la presión por la dominación de unos y la resistencia de otros, fue configurando realidades identitarias diferentes a las que existían en el siglo XVI, aunque algunos elementos ancestrales persistieron en ambos contextos. No obstante esto, es importante destacar, que si bien la conquista y colonización española fue profunda e impuso por la fuerza y la costumbre sus formas de ser, siendo su lengua, religión e institucionalidad, las que imperaron en los territorios realmente dominados, las autoridades españolas debieron establecer, dada la correlación de fuerzas y un pragmatismo político, una serie de tratados de paz con el pueblo mapuche, que aseguraran cierta tranquilidad en la zona de frontera del río Bío-Bío, reconociendo la corona española la autonomía de ciertos territorios indígenas. Como veremos después, esta resistencia y lucha ancestral por la libertad del pueblo mapuche, potenció simbólicamente la lucha por la independencia y la formación del estado republicano, el cual se volcó después a continuar la guerra para dominar a tales pueblos que persistían en mantener su autonomía cultural y territorial (Bengoa, J. 2000).

Las ciudades fundadas que no fueron destruidas por los indígenas a finales del siglo XVI prosperaron, tales como La Serena, Santiago y Concepción. En el siglo XVII casi no se fundaron nuevas ciudades, pero si en el siglo XVIII, aunque sus habitantes no pasaban de unos cuantos miles, teniendo más bien el carácter de villas. A comienzos del siglo XIX las más importantes son de Norte a Sur: Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Los Ángeles, Concepción, Valdivia, Osorno, Ancud y Castro, siendo Santiago y Concepción las más importantes, teniendo la primera unos 20.000 habitantes y la segunda unos 6.000, ya que la distribución de la población era principalmente rural y concentrada en las haciendas y otros asentamientos mineros y militares, esencialmente concentrados en los valles y en la frontera del sur (De Ramón, A. 2003).

La arquitectura urbana y rural era de viviendas cuyo núcleo era el patio central con muros de adobe con techos de paja, teniendo las construcciones y edificios más elaborados con techos de tejas y pórticos de piedra, siguiendo casi todas en su estructura de calles y manzanas el clásico damero impuesto por las Ordenanzas de Indias (Benavides, A. 1961, 1998; De Ramón, A. 2003; Martínez, R. 2011; Riquelme, F. 1996; Sechi, E. 1952). En el sur las fortificaciones eran los inmuebles mejor edificados además de los fortines de madera. En Concepción se logró construir la catedral y el palacio del arzobispo, el cabildo y el palacio del intendente. En Valparaíso la iglesia de la Matriz, el edificio de la gobernación y los castillos de los fuertes para defender el puerto.



En Santiago las iglesias, conventos y edificios públicos eran las construcciones más relevantes, que reflejan la influencia del barroco americano andino, especialmente en los retablos, el cual fue desplazado por el neoclasicismo español de influencia italiana a partir de mediados del siglo XVIII. Los edificios de la Casa de Moneda, la Real Audiencia, el Tribunal de la Aduana, la Catedral, el puente de Cal y Canto sobre el río Mapocho, la iglesia y convento de San Francisco, la iglesia y convento de los mercedarios, la iglesia y convento de los dominicos junto a las edificaciones religiosas de los jesuitas que estos debieron abandonar después de su expulsión en 1767, entre otras construcciones notables que habían sobrevivido a los terremotos de los siglos anteriores, como es el caso de la iglesia y convento de San Francisco (Pereira, E. 1953; Buschiazzo, M. 2014), marcaban el carácter español americano de la ciudad, aunque siempre sobrio y austero, en relación a otras ciudades americanas importantes.

#### **3.4. La Independencia de Chile de la Corona Española, la Formación del Estado Republicano y de la Identidad Nacional del siglo XIX y comienzos del siglo XX**

Rescatar el sentido del proceso de independencia de Chile, con todas sus contradicciones y resultados en la formación del Estado republicano y de la nacionalidad chilena se enmarca, por una parte, en un proceso continental, derivado de los conflictos sociales y políticos internos, la ideología de ilustración, las revoluciones norteamericana y francesa y las guerras europeas de comienzos del siglo XIX, pero también, en procesos que se venían gestando desde el siglo XVIII y antes en América.

La Independencia de las colonias americanas de España, fue un hecho político de tremendas consecuencias, causado por varios factores no bien evaluados o conocidos y a veces distorsionados por la historiografía tradicional y la propaganda nacionalista de cada país. Más que una guerra contra España en sus inicios, fue una revolución de tipo político por el control del poder, en la que se enfrentaron realistas y patriotas, unos que defendieron las ideas del absolutismo monárquico y otros que propiciaron los principios libertarios y republicanos inspirados por la Ilustración y la Revolución Francesa, como también por el ejemplo dado por la colonias inglesas de Norteamérica, que lograron construir un estado federado independiente de Gran Bretaña (Calderón, A. 1987; Eyzaguirre, J. 1957; Jocelyn-Holt, A. 2008).

La mayor parte de los líderes primigenios del movimiento independentista inicial compartieron un ideario de libertad y unión de las colonias. Soñaron, lucharon y murieron por ello. Los ideólogos de la emancipación fueron revolucionarios y sus planteamientos significaron un quiebre total con el orden de dominación vigente con la metrópoli, pero no un cambio radical de las estructuras económicas y

sociales existentes, salvo promover la liberación de los esclavos y la apertura del comercio internacional. La invasión napoleónica de España precipitó los acontecimientos y las colonias, imitando acciones similares de diversas ciudades españolas, crearon Juntas de Gobierno. Líderes, como José Miguel Carrera en Chile, las extremaron creando gobiernos de facto independientes. Tales ideas eran de una subversión total del orden establecido y fueron resistidas por muchos hasta que la intransigencia y el absolutismo de Fernando VII, ya reinstalado en la corona de España, hicieron inevitable la independencia y el triunfo de los patriotas. Las reformas borbónicas del siglo XVIII, contradictoriamente, cimentaron parte de este proceso, ya que no obstante, si bien fueron exitosas en reorganizar el imperio español en América, mejorar las rentas, liberar en parte el comercio con la metrópoli, fundar nuevas ciudades, profesionalizar la administración, etc., también tuvieron por objetivo centralizar el poder y neutralizar el creciente poderío que tenían las élites de terratenientes, mineros y comerciantes de las colonias americanas.

En el caso de Chile, las reformas borbónicas y la paz lograda en la frontera sur con el mundo indígena trajeron prosperidad en la segunda mitad del siglo XVIII, estando ambas unidas con una eficiente administración de los gobernadores españoles y una mayor autonomía respecto del Virreinato del Perú, lo que favoreció la economía regional. La mayoría de los puestos oficiales y militares fueron ocupados por criollos y la élite terrateniente conformaba un grupo poderoso y de alto prestigio, que si bien no estaba en contra de la monarquía, aspiraba a tener cuotas de poder y dirección más importantes en la colonia, resintiendo que los cargos más altos de la administración colonial estuvieran reservados a españoles nacidos en España y nombrados por la metrópoli. La corona española estuvo consciente de estos desencuentros, comunes también en otras partes de América, y algunos de sus ministros de Estado presentaron proyectos más radicales de creación de una confederación o de nombrar representantes de las colonias en las cortes españolas para afianzar la unidad imperial, los cuales no tuvieron éxito, salvo medidas menores, como la de facilitar que los criollos accedieran a ciertos puestos administrativos o incorporar a miembros de la elite en el ejército o la marina de la península (Jocelyn-Holt, A. 2008:65-83;172).

La invasión napoleónica de España precipitó estas contradicciones y generó un vacío de poder que fue rápidamente aprovechado por las élites americanas de cada colonia, la cual ya estaba influenciada por los ideales revolucionarios que tuvieron lugar en Estados Unidos y Francia. Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardo O'Higgins, junto a otros líderes americanos, fueron partícipes de esta epopeya y compartieron los ideales de la unión e integración de las nacientes repúblicas, teniendo como sólida imagen el ejemplo exitoso de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo fue más fuerte la reacción de las elites y los intereses locales por el control del gobierno y la economía regionales, lo que finalmente llevó a la anarquía y a la derrota del ideario de una confederación de

estados americanos, siendo el último esfuerzo el Congreso de Panamá de 1826 inspirado por Bolívar. La Revolución de la Independencia terminó así por consumir a los mismos libertadores, quienes debieron exiliarse, y su sueño de integración diluirse en el tiempo sin que se olvidara. Bolívar desilusionado exclamó en su famoso mensaje al Congreso Constituyente de la República de Colombia el 20 de enero de 1830 que la Independencia era el único bien que habían logrado a costa de todo lo demás.

Pero los estados nacientes no tenían una identidad nacional y esa fue la gran tarea a la que se abocaron cada uno de ellos durante el siglo XIX, tratando de unificar sus territorios y dotándolos de una idea de nación y un nacionalismo que contradecía en parte la diversidad cultural existente y que por muchos años se construyó negando la herencia indígena, la herencia africana y la herencia española de las cuales todos eran herederos. Al respecto estamos de acuerdo con lo planteado por los historiadores chilenos Gabriel Cid y Alejandro San Francisco quienes consideran:

*“...un error de interpretación analizar el conflicto de la independencia como el resultado natural de una “conciencia nacional” o “protonacional”...a través de una lucha entre “chilenos” y “españoles”, entendidos en forma anacrónica como “nacionalidades” opuestas...Antes que causas, las naciones deben considerarse como consecuencias de la Independencia. Así, hacia 1810 la nación no es un problema resuelto, sino que, por el contrario, está por construirse a través de un complejo proceso político, social, simbólico, cultural y aún semántico...” (Cid, G. y San Francisco, A. 2009: xv).*

El significado de la independencia es una de las claves que deben analizarse y discutirse de la manera más amplia siendo la mejor forma de rendir tributo a quienes se levantaron en nombre de la libertad y la autodeterminación de las futuras naciones de América. Recordar su ideario puede dar nuevas luces que guíen los destinos de los países que ayudaron a crear y resolver las contradicciones que todavía agobian a Hispanoamérica.

La noticia de los acontecimientos de España como la abdicación del Rey Carlos IV, el motín de Aranjuez, la subida al trono de Fernando VII, la detención de este último y la familia real por Napoleón y la posterior invasión francesa en 1808 e imposición de su hermano José como rey de España, provocaron una crisis política que llevaron a la constitución de juntas de gobierno y del Consejo de Regencia, iniciándose un levantamiento armado en varias provincias españolas. La situación de España motivó respuestas similares en las colonias americanas en contra de la ocupación francesa. Estas primeras juntas de gobierno americanas creadas entre 1808 y 1810, como las de México, Montevideo, La Paz, Quito,

Caracas, Buenos Aires y Santiago de Chile, no tuvieron un sentido separatista inicial, pero prepararon el camino para la independencia.

La Capitanía General de Chile recibió las noticias de España y reaccionó igual que otras colonias, convocando en 1810 a una primera Junta Nacional de Gobierno que fue presidida por Mateo de Toro y Zambrano, quien ocupaba el cargo de Presidente-Gobernador y Capitán General de Chile, debido a la dimisión pocos meses antes del último Gobernador español Francisco Antonio García Carrasco. El llamado a esta Primera Junta Nacional de Gobierno tuvo cierta resistencia de las autoridades reales, pero igual se realizó debido a la insistencia de la elite política criolla. Interesa al respecto recordar parte del acta de esa primera reunión de los notables de Santiago, la cual fue redactada por el procurador del Cabildo de Santiago José Miguel Infante, el 18 de septiembre de 1810, señalando:

*“...que se instalase una junta de gobierno a nombre del señor don Fernando VII...propuso al muy ilustre señor presidente que citara a cuatro vecinos respetables y a los jefes de las corporaciones para que decidieran si debía, o no, consultarse la voluntad del pueblo. Todos convinieron que éste era el partido que debía adoptarse....La nación española, luego que supo el cautiverio de su monarca, estableció la Suprema Junta de Sevilla, después la Central y últimamente el Supremo Consejo de Regencia...No necesito haceros ver los motivos por qué la ley adopta esta clase de gobierno en un caso como el presente, porque a nadie puede ocultarse que la confianza pública reposa mejor en un gobierno compuesto de algunos individuos que cuando uno solo lo obtiene.” (Irrarrázabal, G. y Piñera, M. 1996:10).*

Las noticias provenientes de España y de otras regiones de América motivaron que se llamara a un primer Congreso Nacional, pero en la fecha acordada para las elecciones de los congresistas, tuvo lugar un motín inspirado por los realistas que encabezó el teniente coronel Tomás de Figueroa, el cual fue reprimido por fuerzas militares que obedecían a la Junta de Gobierno, siendo fusilado Figueroa. Finalmente el Congreso se inauguró el 4 de Julio de 1811 y su objetivo principal era decidir el tipo de gobierno que debía darse el país mientras durara el cautiverio del Rey Fernando VII. Las facciones moderadas y radicales entraron en conflicto. Uno de los líderes más radicales y perteneciente a una de las principales familias criollas, José Miguel Carrera, quien había combatido en España contra las tropas francesas, estaba decidido por la independencia total, quien apoyado por los más radicales, da un golpe de Estado y toma el poder el 2 de diciembre de 1811.

Desde entonces hasta octubre de 1814, Carrera organizó el gobierno patriota, promovió la primera constitución, creó el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional y estableció la primera bandera y escudo nacional e impuso el uso obligatorio de una escarapela patriota (Silva, B. 2003: 60-67; Zaldívar, T y Sánchez, M. 2009: 73-

115). Todas estas acciones, como la creación de instituciones y de símbolos patrios, estaban encaminadas a la total separación de Chile respecto del Gobierno español, aunque las circunstancias y la necesidad de unir a todos los patriotas no le permitieron a Carrera declarar la independencia, fuera por prudencia, la atención preferente a la guerra, la participación de delegados chilenos ante la Junta de Cádiz que estaba elaborando la Constitución Española de 1812, o por el poco tiempo en que estuvo en el poder. No obstante ello, mientras estuvo Carrera en el Gobierno, se dictó en 1812 el primer *“Reglamento Constitucional Provisorio”* de Chile. Cierta influencia en este período tuvo el primer cónsul nombrado por Estados Unidos Joel Poinsett, quien participó activamente en el ánimo revolucionario, no obstante la neutralidad oficial de su país en el conflicto. Es de destacar un hecho poco conocido en Chile, que la primera vez que se izó la bandera nacional creada en el gobierno de José Miguel Carrera, tuvo lugar en la legación norteamericana el 4 de julio de 1812, fecha de la independencia de ese país.

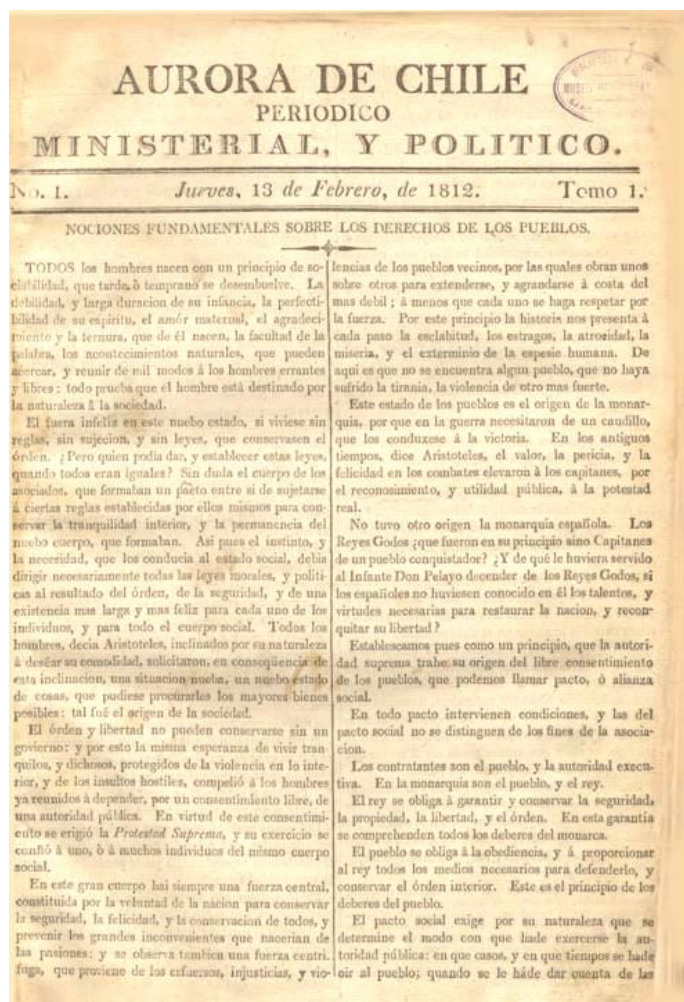
Los radicales, que comienzan a denominarse patriotas<sup>25</sup>, impulsan un programa republicano cuyos principales líderes intelectuales, tales como Fray Camilo Henríquez, inspirados por Rousseau y la Ilustración francesa, comienzan a hablar y escribir sobre *“la majestad del pueblo chileno”*. De igual forma Antonio José Irisarri, escribió en la prensa patriota que *“el único rey que tenemos es el pueblo soberano”*. Una buena parte de las proclamas y llamados a la independencia fueron escritos por estos dos revolucionarios y publicados en las ediciones del primer periódico llamado “La Aurora de Chile” que circuló entre 1812 y 1813.

Por su parte el propio José Miguel Carrera escribió entonces:

*“Los momentos son los más urgentes y oportunos...necesitamos hallarnos constituidos en cuerpos políticos organizados por una ley emanada de la voluntad libre y general que nos de la representación y dignidad suficientes para hablar y ser oídos de las demás naciones.” (Carrera, J. 1913:152; Kirsi, B. 2003:14)*

---

<sup>25</sup> El concepto de patriotas, si bien se generaliza en esta época para representar a los rebeldes, era ya utilizado desde antes para nombrar a los nacidos en el país o cualquier región de América, profesando bajo el concepto de Patria, el cariño hacia el lugar de nacimiento. Un análisis más exhaustivo de los conceptos de patria, nación y estado en relación a América y Chile lo encontramos en Gabriel Cid e Isabel Torres (2009:23-51).



Periódico La Aurora de Chile, 13 de Febrero de 1812. Biblioteca Nacional de Chile

También en este período se comienza a crear las bases de un nacionalismo incipiente, al invocar el pasado guerrero de los araucanos o mapuches como un elemento diferenciador del pueblo chileno, cuya gesta heroica de resistencia por varios siglos al poder español, es utilizado por los patriotas como ejemplo emancipador, con arengas publicadas en los periódicos de la época, como la que fue publicada en la Ilustración Araucana el 16 de septiembre de 1813:

*“¡Ah patriotas! ...recobrad vuestros derechos, imitando en la unión y la constancia a vuestros ascendientes araucanos, cuyas cenizas reposan en la urna de la causa sagrada de la libertad ... revive entre nosotros Colocolo, Caupolicán y el inmortal Lautaro ... que con su patriotismo y valor sirve y servirá de honor y espanto a los tiranos.”*

Frente a los acontecimientos de Buenos Aires, en que el Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros había sido depuesto cuando se instauró la Primera Junta Nacional de Gobierno el 25 de mayo de 1810, y los que tenía lugar en Chile en 1811, el Virrey del Perú José Fernando de Abascal, decidió enviar una fuerza expedicionaria militar que tomara el control de Chile en 1812. Finalmente las tropas realistas, cuya oficialidad venía del Perú y estaba reforzada principalmente por oficiales, milicianos y soldados acantonados en el Sur de Chile, especialmente de Valdivia y Chiloé, logran derrotar a los patriotas liderados por Bernardo O'Higgins en la Batalla de Rancagua el 2 de octubre de 1814. Santiago cae en manos realistas y los líderes patriotas, entre ellos O'Higgins y Carrera, logran huir hacia Mendoza, tras una penosa travesía por la cordillera de Los Andes. Concluye así este período, denominado por la historiografía como Patria Vieja, e instaurándose un nuevo gobierno español, que en 1815 quedó bajo el mando del Gobernador español Marcó del Pont (Calderón, A. 1987; De Ramón, A. 2004; Jocely-Holt, A. 2008).

En la Patria Vieja la guerra de independencia fue vista en un comienzo por el pueblo como una disputa por el poder entre las clases dominantes (Huerta, V. 2008). Tal como señala el historiador Luis León:

*"En realidad, frente a los acontecimientos que se desataron con tanta fuerza y violencia a partir de 1810, los sectores populares permanecieron indiferentes...En efecto, la persistencia en la memoria colectiva del descalabro económico, social y moral que vivió el país desde el inicio de la revolución en septiembre de 1810 llevó al general realista Mariano Osorio a escribir al momento de asumir el mando en Santiago: "Cuatro años, diecisiete días ha llorado Chile una revolución, que principió con injusticias, continuó con tiranías y terminó con crueldad".*

*Por su parte, los plebeyos siguieron las banderas que levantaron las autoridades, sin importarles demasiado si eran republicanas o monarquistas...Militarmente, sin embargo, su participación en uno u otro ejército, fue decisiva. Juan Mackenna, el prestigiado militar irlandés que prestó servicios en el ejército patriota durante esta época, escribió con crudeza cuando se refirió al exitoso avance de los españoles comandados por Gaínza en 1813: "Verificose la invasión, y se vio con asombro e indignación un puñado de chilotes y valdivianos apoderarse, sin cuasi tirar un tiro, de todo el reino hasta la orilla del Maule". (León, L. 2002:251-297).*

Sin embargo, otro proceso se desencadenó con la victoria realista en el desastre de Rancagua que obligó la retirada de los patriotas a Mendoza, y que potenció el nacionalismo emergente, que si bien antes era de un sector de la elite patriota, especialmente la más intelectual, incluirá progresivamente a sectores populares. La reconquista realista española fue seguida de represalias en contra de los



patriotas, algunos de los cuales fueron fusilados y otros enviados a presidios. Si bien parte de la población y algunas familias de la élite seguían siendo realistas, la represión no hizo más que aumentar el ánimo emancipador, siendo éste un aspecto que mermó el apoyo ideológico al partido realista. Además hay que tener presente que muchas familias de la elite cuyos padres eran realistas o moderados tenían hijos decididos partidarios de la emancipación.

Las causas de la revolución, que eran fundamentalmente políticas, adquirieron un carácter social creciente, generándose un odio hacia lo español, debido a las muertes y prisión de familiares, que no estaban tan marcadas al inicio del proceso revolucionario, en el cual no pocos españoles peninsulares radicados en Chile compartían el mismo ideal emancipador.



Desastre de Rancagua de 1814, óleo de Fray Pedro Subercaseaux. Foto Archivo Museo Histórico Nacional



Bernardo O'Higgins Riquelme. Cuadro de José Gil de Castro. José Miguel Carrera Verdugo. Cuadro del pintor Miguel Venegas. Fotos Archivo del Museo Histórico Nacional

Los patriotas que junto a O'Higgins lograron cruzar la Cordillera de Los Andes y refugiarse en Mendoza recibieron el apoyo del General José de San Martín, quien era comandante militar de la región de Cuyo, dependiente de las Provincias Unidas de la Plata. José Miguel Carrera en cambio no consiguió el apoyo del gobierno de Buenos Aires y viajó a Estados Unidos en busca de apoyo. San Martín y Bernardo O'Higgins, ambos miembros de la logia Lautaro, una logia masónica, que unía desde sus orígenes en Londres y Cádiz a varios líderes patriotas americanos, se dieron a la tarea de organizar un ejército para invadir Chile y derrotar al gobierno realista. A comienzos de 1817, dicho ejército patriota cruzó la Cordillera de Los Andes y enfrentó a las tropas realistas en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero, derrotándolas y tomando el control de Santiago.

El Cabildo de Santiago acordó entregarle el mando del país a San Martín, pero este declinó el ofrecimiento asumiendo como Director Supremo Bernardo O'Higgins. El gobernador español Marcó del Pont, en su huida a la costa fue capturado, pero las tropas realistas se replegaron hacia el sur recibiendo nuevos refuerzos desde el Perú y avanzaron hacia Santiago el año siguiente, siendo derrotadas finalmente en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818 (Frías Valenzuela, F. 2006).





Proclamación Independencia de Chile en Santiago, 1818. Oleo de fray Pedro Subercaseaux.  
Foto Archivo Museo Histórico Nacional

Previo a dicho acontecimiento, el Acta de Independencia fue escrita en Concepción el 1 de enero de 1818, mientras aún continuaban las acciones de guerra y el ejército patriota sitiaba a las fuerzas realistas que se encontraban en Talcahuano. Posteriormente fue firmada por Bernardo O'Higgins y sus ministros de Estado. Parte de su texto ampliamente difundido es el siguiente:

*“La fuerza ha sido la razón suprema que por más de trescientos años ha mantenido al Nuevo Mundo en la necesidad de venerar como un dogma la usurpación de sus derechos y de buscar en ella misma el origen de sus más grandes deberes. Era preciso que algún día llegase el término de esta violenta sumisión; ...La revolución del 18 de septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos destinos a que lo llamaba el tiempo y la naturaleza; ... hemos tenido a bien, en ejercicio del poder extraordinario con que para este caso particular nos han autorizado los pueblos, declarar solemnemente, a nombre de ellos, en presencia del Altísimo, y hacer saber a la gran confederación del género humano, que el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes, forman de hecho y por derecho, un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para siempre separados de la Monarquía de España... se deposite la Acta Original en el Archivo de la Municipalidad de Santiago, y se circule a todos los pueblos, ejércitos y corporaciones, para que inmediatamente se jure y quede sellada*

*para siempre la emancipación de Chile. Dada en el Palacio Directorial de Concepción a 1° de enero de 1818”.*

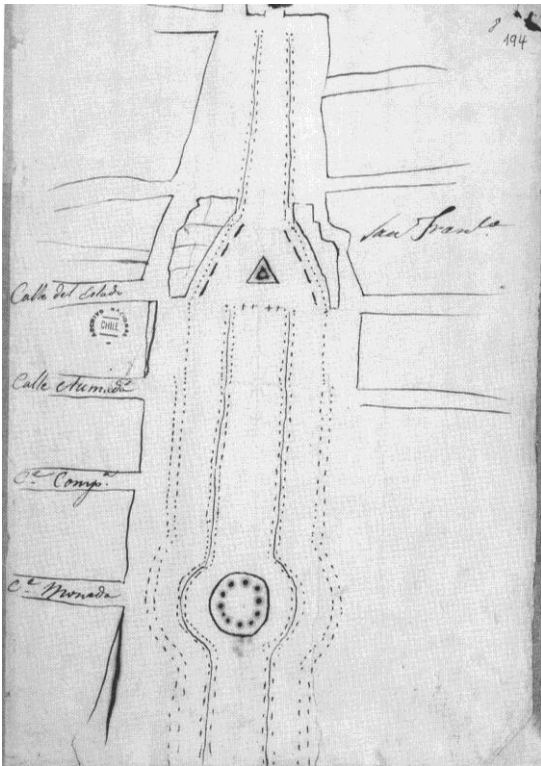
En los años siguientes fueron derrotadas todas las fuerzas realistas del continente salvo Cuba y Puerto Rico, creándose gobiernos independientes. La Ilustración francesa del siglo XVIII, el liberalismo y el positivismo fueron los marcos ideológicos de este proceso histórico. Su influencia llevó a que la mayoría de las nuevas repúblicas eliminaran la esclavitud de los hijos de los esclavos recién nacidos, establecieran la libertad de comercio, educación y ciertos derechos ciudadanos. Una parte importante de las clases dirigentes adoptaron que los nuevos criterios de la ciencia y la razón eran los únicos posibles para traer orden y progreso, iniciándose con los años un rechazo al pasado colonial español y la adopción de nuevos paradigmas de progreso cuyo referente cultural estaba en Francia (Larraín, J. 1996:145).

Concluida la Independencia de Chile en 1818, O'Higgins se dio a la tarea de organizar el nuevo estado republicano, para lo cual no logró tener todo el respaldo de la elite patriota, la cual estaba dividida entre los grupos o corrientes políticas denominadas posteriormente pipiolos y pelucones, antecesores respectivamente de los liberales y conservadores, integrándose a esta última facción quienes había participado del bando realista. O'Higgins, no obstante ser hijo natural Ambrosio O'Higgins, quien fue Gobernador de Chile y después Virrey del Perú, no era considerado parte de las antiguas familias terratenientes y aristocráticas. Su decisión de imponer varias reformas de carácter republicano, que afectaban el poder tradicional de la elite, fue resistida y debió renunciar al poder en 1823, exiliándose en el Perú.

Sin embargo en su gobierno se fortaleció el ideal republicano, no obstante que muchos consideraron el mandato de O'Higgins como dictatorial, y se creó una nueva bandera, escudo, y otros símbolos nacionales. También se volvieron a celebrar y establecieron festividades de carácter nacional, como la celebración de ciertas efemérides que recordaban los momentos claves de la emancipación como el 18 de septiembre de 1810, día de la primera Junta Nacional de Gobierno; el 12 de febrero de 1817, día de la batalla de Chacabuco; y el 5 de abril de 1818, día de la batalla de Maipú<sup>26</sup>. O'Higgins se preocupó también de crear el Cementerio General de Santiago, además de proponer el nuevo diseño de la Alameda de las Delicias, antes llamada la Cañada de San Francisco, que es hoy la actual Alameda Bernardo O'Higgins, la principal avenida de la capital (Salinas, B. 2003; Peralta, P. 2007; Pedemonte, R. 2009).

---

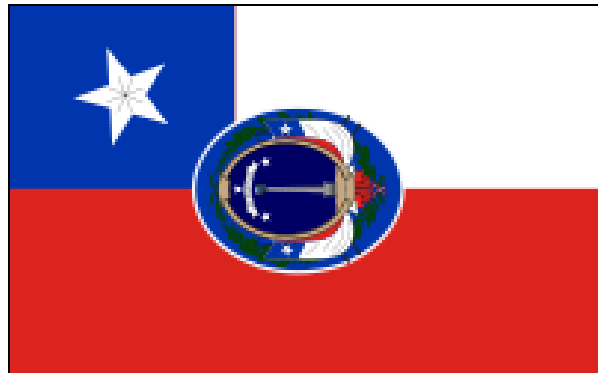
<sup>26</sup> El 18 de septiembre, celebrado desde la Patria Vieja, se constituyó con los años en la principal fiesta cívica nacional hasta la actualidad. Las celebraciones del 12 de febrero y del 5 de abril perdieron con el tiempo su importancia social e histórica, siendo reemplazadas a finales del siglo XX por el 21 de mayo de 1879, día que hasta el presente se conmemora el combate naval de Iquique.



Croquis de B. O'Higgins de la Alameda. Archivo Nacional de Chile. Bandera de Chile de 1812-1814



Bandera de Chile 1817-1818



Bandera de Chile 1818

Otra medida que impuso el Gobierno de O'Higgins fue abolir el uso de títulos nobiliarios, lo que le causó la enemistad de parte de elite que ostentaba tales títulos. También se estableció la libertad de comercio y se decretó el 3 de junio de 1818 que todos los nacidos en Chile serían chilenos:

*"Después de la gloriosa proclamación de nuestra Independencia, sostenida con la sangre de sus defensores, sería vergonzoso permitir el uso de fórmulas inventadas por el sistema colonial. Una de ellas es denominar*

*españoles a los que por su calidad no están mezclados con otras razas, que antiguamente se llamaban malas. Supuesto que ya no dependemos de España, no debemos llamarnos españoles, sino chilenos. En consecuencia, mando que en toda clase de informaciones judiciales, sean por vía de pruebas en causas criminales, de limpieza de sangre, en proclama de casamientos, en las partidas de bautismo, confirmaciones, matrimonios y entierros, en lugar de la cláusula: Español natural de tal parte que hasta hoy se ha usado, se sustituya por la de chileno natural de tal parte; observándose en los demás la formula que distingue las clases: entendiéndose que respecto de los indios no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos, según lo prevenido arriba...*<sup>27</sup>

La independencia de las colonias americanas transformó las estructuras e instituciones y territorios coloniales en entidades políticas autónomas, generalmente de inspiración republicana, en las cuales se abolieron las diferencias de origen y se establecieron derechos y deberes ciudadanos, aunque en lo esencial las estructuras sociales y económicas siguieron siendo las mismas y Chile no fue la excepción, manteniéndose las tradicionales diferencias sociales que venían desde la Colonia.

Bolívar y otros líderes patriotas trataron de crear una gran confederación sudamericana pero fracasaron en su intento. En los albores de la Independencia varios países crearon símbolos de unidad y diferenciación regional como banderas y escudos nacionales. En varios de ellos la imagen de los indígenas y su lucha por la libertad estuvo presente frente a un pasado español y colonial que quería ser negado y que representaba la opresión y el atraso. Sin embargo, ya lograda la emancipación, el indígena volvió a ser el problema permanente para la sociedad criolla y un conflicto latente para la nueva imagen de civilización que se quería instaurar. Varias décadas después de la independencia, los pocos territorios indígenas autónomos que quedaban fueron ocupados, y sus habitantes reducidos a reservaciones, donde se les impuso una política forzada de integración y sumisión al nuevo concepto de nación que se construyó desde el Estado (Bengoa, J. 2000).

Tal como señala la historiadora italiana María Rosaria Stabili, la Independencia de Chile de España, que tuvo como inspiración mítica la Revolución de Estados Unidos y La Revolución Francesa, no tuvo el carácter de una revolución social ni significó fracturas en el orden de las clases sociales existentes, siendo la elite criolla la que dirigió y obtuvo después los mayores beneficios de la autonomía que

---

<sup>27</sup> Hay que recordar que previamente se dictó bajo el gobierno de Carrera el “Decreto sobre ciudadanía chilena” el 2 de julio de 1813, por el cual se acordó no conceder carta de ciudadanía a ningún extranjero que no demostrara su adhesión al nuevo régimen (Jocelyn-Holt A. 2008:248).

se precipitó por los sucesos ocurridos en España. La ideología de la Ilustración dio un marco a este proceso, pero ésta se desarrolló en Chile en el contexto cultural de raíz hispana que se había formado a través de los siglos, desde la Conquista y la Colonia, y que los criollos reconocían como propia, aunque la violencia y la necesidad de simbolizar la separación del pasado colonial, estableció por varias décadas un sentimiento anti español:

*“La misma elección semántica de la palabra Emancipación, para definir el movimiento independentista, no sólo marcó una toma de distancia respecto del concepto “revolución” (que en cambio fue enarbolado con orgullo, tanto por los norteamericanos como por los franceses), sino la persistencia de un vínculo permanente con el mundo y la cultura ibérica.” (Stabili, M. 2003:121)*

Las tradiciones y costumbres coloniales hispanoamericanas que no iban en contra del poder y símbolos republicanos siguieron presentes en las siguientes décadas, especialmente a nivel popular y en el campo, cambiando lentamente y adoptando formas nacionales y regionales. En algunos países como Ecuador y Perú esta tendencia fue más persistente, y en Chile y Argentina más flexible y permeable a las influencias externas. Por ejemplo para el caso de Ecuador:

*“Por mucho tiempo políticos e intelectuales reclamaron la presencia fuerte de una cultura colonial inalterada...Pensemos en que durante el siglo XIX se siguieron utilizando técnicas constructivas, planos y ornamentación para la arquitectura civil y eclesiástica que parecían guardar estrecho vínculo con sus antecesores coloniales; no se diga en la escultura devocional cuyas figuras emblemáticas y sus formas de representación y consumo casi no sufrieron alteraciones debido a la demanda de millares de fieles que parecían mantener aún una práctica religiosa acorde con aquella piedad barroca que se había consolidado durante el siglo XVIII.” (Kennedy, A. 2004:51)*

Después de O’Higgins, el general Ramón Freire asume como Director Supremo de Chile, cuyo gobierno logra finalmente incorporar en 1826 la Isla de Chiloé, que todavía estaba en manos de un gobernador español. Sin embargo al año siguiente Freire debe renunciar al mando y se suceden varios gobiernos, donde se enfrentan las fuerzas más conservadoras y liberales de la elite que disputaban el poder, hasta que finalmente el general José Joaquín Prieto derrota en 1829 a los últimos y es elegido en 1831 como Presidente de Chile por dos períodos consecutivos hasta 1841. La década de 1820 es considerada en la historiografía chilena como inestable, anárquica y de ensayos constitucionales de la naciente república, en donde las disputas por el poder se dan al interior de la élite, con ciertos matices regionalistas, por diferencias entre los grupos y elites dominantes de Santiago y Concepción, respaldados unos y otros por los militares que habían luchado en la guerra de la independencia.



Algunos historiadores como A. Jocelyn-Holt (2008: 322-353), plantean que la crisis política de 1829 amenazó la unidad de la elite, tensionándola incluso más que en el proceso de la independencia. Sin embargo los líderes de ambas tendencias, que compartían algunas posiciones y diferían en otras, debieron consensuar el tránsito hacia la construcción de un estado republicano de características liberales en lo político y en ciertas esferas ideológicas, pero fue conservador en mantener los privilegios ancestrales de la élite, estando en contradicción creciente las visiones modernistas y tradicionales de la sociedad, aunque ambas posiciones se encontraban unidas en la necesidad de construir un nuevo orden político, que fue el desafío principal de las próximas décadas.

El ministro más influyente del General Prieto fue Diego Portales, quien se dio a la tarea de dictar una nueva constitución y crear un nuevo orden político que diera estabilidad y ordenara el país. En tal tarea debió disciplinar al ejército, a la oligarquía y organizar el naciente estado republicano, además de enfrentar la creciente hegemonía que estaba adquiriendo la reciente creación de la Confederación del Perú y Bolivia ideada por el Mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz, que Portales pensaba afectaría los intereses económicos y comerciales de Chile en el Pacífico, iniciándose en 1836 un conflicto armado en el cual Chile, junto al Ejército Restaurador del Perú, que era contrario a su unificación con Bolivia, derrotaron a las fuerzas de la Confederación en la batalla de Yungay, Perú, en 1839. En tal contexto, al inicio del conflicto, un grupo de militares se amotinó capturando al Ministro Portales, el cual fue asesinado en 1837 (Frías Valenzuela, F. 2006; Encina, F. 1951).

El principal éxito de Portales fue sin duda la dictación de la Constitución de 1833, la cual estableció un sistema presidencialista y un Estado centralista y nacional, donde el presidente de la república tenía amplios poderes. Esto permitió cierta estabilidad y la consolidación de las instituciones estatales republicanas, donde el poder estaba radicado en la elite de origen terrateniente y crecientemente minera y comercial, siendo el Estado, la cultura y el fortalecimiento de la nacionalidad su principal instrumento de articulación, dominación y construcción de la nación. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial fueron el espacio institucional donde sus diferencias se discutían y resolvían. A diferencia de otros países latinoamericanos que tuvieron décadas de inestabilidad, guerras internas y anarquía, Chile se presentaba entonces como ejemplo de estabilidad política, aunque algunos historiadores como A. Jocelyn-Holt (1997) plantean que el nuevo orden ocultaba importantes fragilidades.

Diego Portales había expresado ya en 1822 su ideario político en su carta a Camilo Cea fechada en marzo de 1822:

*“La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República. La Monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y ¿qué ganamos? La República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe como yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes”. (Krebs, R. 2009:17)*

Si la década de 1830 fue de organización del Estado, la de 1840 fue de consolidación del nuevo orden, siendo presidente de Chile por dos períodos el general Manuel Bulnes (1841-1851), quien fue hijo de un capitán español del ejército realista, no obstante lo cual, siendo muy joven se enroló en las tropas patriotas, destacándose en varias batallas de 1817 y 1818, combatiendo a las guerrillas realistas que resistían después de la independencia en el sur de Chile y luchando posteriormente en la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana de 1836 – 1839, siendo recibido en Chile como un héroe por su participación en la batalla de Yungay en Perú (Encina, F. 1951).

En el gobierno de Bulnes el Estado chileno ocupó efectivamente el Estrecho de Magallanes, creó la Universidad de Chile, bajo cuyo alero se abrieron varias escuelas públicas, se crearon varias instituciones estatales, se dictó la ley de colonización para impulsar la venida de colonos europeos que poblaran las regiones del sur<sup>28</sup> y tuvo lugar un movimiento cultural, conocido en Chile como la generación del 42, en el cual participaron José Victorino Lastarria, el venezolano Andrés Bello<sup>29</sup>, Antonio Varas, Francisco Bilbao entre muchos más, además de extranjeros exiliados en Chile como los argentinos Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Varios de los miembros de este movimiento fueron escritores, historiadores, políticos, periodistas, abogados, quienes, desde distintos ámbitos, tanto liberales como conservadores, se dieron a la tarea de crear una cultura nacional que rompiera definitivamente con el pasado español, inspirando

---

<sup>28</sup> En los próximos años, especialmente durante la administración del Presidente Manuel Montt, el gobierno organizó una inmigración de colonos europeos, especialmente de alemanes, franceses y suizos para colonizar las provincias del Sur, a los cuales se les pagaba el pasaje, la mantención a su llegada al país, se les entregaban tierra de colonización, animales y herramientas. El principal encargado de llevar política de Estado fue Vicente Pérez Rosales, quien fue nombrado cónsul en Europa para agilizar la inmigración, quien incluso imprimió un libro en francés y después en castellano para promover el país en el extranjero, en el cual describía el territorio, sus bondades, productos, economía, gentes, etc. (Pérez Rosales, V. 1857, 1859).

<sup>29</sup> El abogado venezolano Andrés Bello fue el primer rector de la Universidad de Chile, teniendo una gran influencia en la sociedad chilena siendo el redactor del Código Civil chileno de 1855, contribuyendo de manera fundamental en varias materias legales de conformación y consolidación del Estado en el ámbito civil, penal y político.

para ello, por cierto en los modelos europeos considerados exitosos y ejemplos de progreso entonces. Al respecto la historiadora Gertrude M. Yaeger escribe:

*“...el hispanoamericano del siglo XIX consideraba la tradición política española como una desafortunada combinación de autoritarismo, despotismo y monopolio restrictivo, en tanto que las sociedades que ellos proponían construir estaban basadas en la soberanía popular, la libertad y la igualdad. La incapacidad para reconciliar sus objetivos con el pasado los condujo, en un principio, a rechazarlo por completo.” (Yaeger, G. 2009:118)*

En el mismo sentido Gabriela Ossenbach Sauter manifiesta:

*“Más pronto y de forma más radical que en otros estados de América Latina, la inteligencia chilena dio la espalda, deliberadamente a España, rompiendo por lo menos durante un siglo los lazos culturales y afectivos con sus referentes ibéricos. Los ideólogos nacionales habían considerado a la antigua metrópoli como la única responsable de los males acumulados durante las guerras de la independencia, renegando así de su propia memoria.”(Ossenbach, G. 1993:95)*

El Estado fue promotor de esta naciente cultura nacional, para lo cual desde finales de la década de 1820 y en las décadas siguientes comenzó a contratar profesores y científicos extranjeros para que se hicieran cargo de la educación e investigaran el territorio. Uno de ellos fue el francés Claudio Gay, quien recorrió el territorio, describió sus recursos naturales, estudió la historia, recopiló documentos, entrevistó a los personajes de la independencia, produciendo una obra de 30 tomos llamada Historia física y política de Chile, que fue impresa entre 1844 y 1871 (Mizón, L. 2001:62-63).

Otros intelectuales más se incorporaron a la misma tarea en las ciencias naturales, quienes se radicaron en Chile, como el polaco Ignacio Domeiko, el alemán Rodolfo Philippi, además de arquitectos e ingenieros venidos de distintas partes de Europa. La mayoría de estos científicos, académicos y profesionales fueron vitales en la educación de la elite y en la creación de las primeras escuelas, instituciones científicas, universitarias y en la fundación de los primeros museos, tema que trataremos en el próximo capítulo.



Una chingana o ramada popular según Claudio Gay, 1854

Tales profesionales extranjeros y los que siguieron llegando contratados por el Estado fueron claves en la construcción de los programas educativos de las escuelas chilenas públicas donde se inculcaron los valores del trabajo, el orden, la nacionalidad chilena, la conciencia cívica y el progreso. Tal como señala Ricardo Iglesias para el caso de Chile:

*“La construcción de la nación no es una tarea en abstracto, sino que se materializa en la fundación del sujeto nacional. Este se identifica y adquiere conciencia de su relación con el mundo a partir de la vinculación que realiza el Estado por medio de la educación...Es la escuela la que juega un papel fundamental en la trasmisión a la sociedad de valores colectivos, normas, rituales, difusión de símbolos y sentimientos de pertenencia a una comunidad diferenciada por tradiciones, etnias, lenguaje u otros factores de integración...Convencidos del valor del saber y la enseñanza, el Estado veía en la educación uno de los medios más eficaces a través del cual la naciente república en construcción podía alcanzar el horizonte de la “civilización”, el “progreso” y la integración nacional.” (Iglesias, R. 2009:53)*





Un baile en la casa de Gobierno según Claudio Gay, 1854

No obstante el espíritu liberal, de progreso y cambio social que encarnaron estos primeros científicos, profesores y profesionales en sus trabajos científicos, históricos, programas de educación e incluso en su participación en la vida política del país, en las décadas siguientes, siguió primando en Chile lo que muy bien denominó Portales como el “peso de la noche”<sup>30</sup>, lo que a juicio de algunos, como el propio Portales, justificaba la necesidad de un autoritarismo que garantizara el orden que se requería para construir la república, pero que según Jocelyn-Holt representaba:

*“...la sumisión social de las clases populares, el orden señorial y jerárquico que verdaderamente presidía y gobernaba al país...Por consiguiente, el perfil del país durante toda la centuria fue la persistencia del orden social y con ello el predominio de la elite tradicional. Es más, en la medida que los poseedores del poder estatal provenían enteramente de esta misma elite, es razonable hablar de un orden político oligárquico que se mantiene constante”. (Jocelyn-Holt, A. 1997:27)*

<sup>30</sup> La cita viene de un carta de Portales: “...el orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y consquillosos: la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a oscuras y sin poder contener a los díscolos más que con medidas dictadas por la razón, o que la experiencia ha enseñado ser útiles.” (Jocelyn-Holt, A. 1997:37)

Los primeros gobiernos republicanos ocuparon las dependencias de las antiguas autoridades españolas, instalándose en la Casa del Gobernador y en la Real Audiencia, frente a la Plaza de Armas de Santiago. Bernardo O'Higgins, ya como Director Supremo, quiso dar una señal de cambio en la ciudad y personalmente diseñó un nuevo paseo urbano al proyectar la Alameda de las Delicias en la antigua cañada de San Francisco, la actual Alameda Bernardo O'Higgins, que estaba ubicada en el límite Sur de Santiago, en cuyo centro estaría una elipse, en la cual se plantaría el árbol de la libertad, con lo cual O'Higgins trataba de simbolizar el cambio de dirección del desarrollo urbano de su eje fundacional, que estuvo por siglos ubicado en la Plaza de Armas, en la ribera sur del río Mapocho y próximo al puente de Cal y Canto que lo cruzaba, en donde estaba el paseo de los Tajamares, principales espacios de recreación de la élite.

En las próximas décadas ninguna innovación urbana pudo llevarse a cabo por falta de recursos y la atención que tuvo que poner el gobierno en otros temas más urgentes, salvo la conclusión del canal San Carlos, que trajo las aguas del río Maipo al valle del Mapocho, trabajos iniciados por la administración colonial y que concluyeron con el concurso de recursos privados, los que ampliaron las tierras cultivables y proporcionaron una mejor provisión de agua para la ciudad de Santiago. Por otra parte, mediante Ley del 2 de septiembre de 1835, se autoriza al ejecutivo construir nuevos caminos y puentes que se necesitaban para conectar al país y al año siguiente se crea el cargo de Director de Caminos. Siguiendo en esta senda, en el año 1837 se dicta otra ley que encarga al Ministerio del Interior el cuidado de los monumentos públicos, los edificios nacionales, los caminos y puentes, creándose para ello el cargo de Director de Obras Públicas.



Grabado de la Plaza de Armas de Santiago de Chile hacia 1830, según Claudio Gay





Palacio de La Moneda según Claudio Gay, 1854



Edificios públicos de la Plaza de Armas de Santiago construidos durante la Colonia, circa 1870.  
Foto Archivo Museo Histórico Nacional



En el mandato del Presidente Manuel Bulnes (1841-1851) se dispuso el traslado de la sede del gobierno al Palacio de la Moneda, próximo a la Alameda de las Delicias, argumentándose el poco espacio existente en las antiguas dependencias de la Real Audiencia. También, poco años antes, se había decidido el crecimiento de la ciudad hacia el sector poniente y sur, áreas en que las construcciones expresaron las nuevas tendencias. En este período ya se nota una mayor preocupación por destinar recursos fiscales a nuevas construcciones (Martínez, R. 2011): se hacen los planos de la fachada de la catedral de Santiago (1840); se confeccionan los planos de la iglesia Matriz de Talca (1840); se inicia la construcción de la Penitenciaría de Santiago (1843) y del Instituto Nacional de Santiago (1843); la construcción de los almacenes de la Aduana y el muelle de Valparaíso (1846).



Palacio de La Moneda hacia finales del siglo XIX. Foto Archivo Museo Histórico Nacional

También importa destacar que en 1844 se dicta la primera Ordenanza de Construcciones y el traslado, por cuenta del Estado, del joven chileno Manuel Aldunate a París con el objeto de estudiar arquitectura. La falta de profesionales en el área de la arquitectura y la construcción lleva al gobierno a contratar extranjeros, concretándose en París la venida del famoso arquitecto Claude Brunet De Baines, quien arriba a Chile en 1848, nombrándolo arquitecto de gobierno. A este arquitecto francés se le encargan varias construcciones y la formación de la primera escuela de arquitectura, en la recién creada Universidad

de Chile, siguiendo el modelo de la Ecole des Beaux Arts de París, que inicia sus cursos en 1850. En 1853 De Baines publica un libro con el plan de la carrera y las materias de los cursos que se dictaban. De esta manera, se fueron educando los primeros profesionales, siendo el primero de ellos el chileno Fermín Vivaceta, aunque continuó el envío de becados chilenos por parte del gobierno a Europa y contratándose otros arquitectos e ingenieros extranjeros (Peralta, S. y Baeza, F. 1979:20-23).

Las obras de Claude Brunet De Baines se enmarcan en el estilo neoclásico, influenciado por sus viajes por Italia y Grecia, mandando traer desde Europa reproducciones en yeso de columnas, chapiteles y frisos tanto antiguos como modernos. Se le encargan varias obras en Santiago que se caracterizan por su sobriedad, tales como el Teatro Municipal, el Portal MacClure y la residencia del general Manuel Bulnes.



Teatro Municipal de Santiago, segunda mitad del siglo XIX, fotografía del álbum de Paulino Alfonso. Archivo Nacional

El sucesor de De Baines como arquitecto de gobierno y profesor de la Escuela de Arquitectura es Lucién Ambroise Henault, también francés, quien en 1857 trabajaba en concluir el Teatro Municipal y años después el edificio del Congreso Nacional que había proyectado De Baines siguiendo líneas grecorromanas.

Henault, si bien se inspira en el estilo neoclásico, incorpora en sus obras algunos aspectos del neo románico y el neogótico, como por ejemplo en la iglesia de los Sagrados Corazones de Valparaíso, la iglesia de la Gratitude Nacional en Santiago y en la ermita y capilla del cerro Santa Lucía de la capital. Sin embargo, sus obras más representativas son la Casa Central de la Universidad de Chile y la mansión de Luis Pereira (Riquelme, F. 1996:10-12).



Universidad de Chile, segunda mitad del siglo XIX, fotografía del álbum de Paulino Alfonso. Archivo Nacional

No solo el desarrollo de la arquitectura interesaba al gobierno nacional, sino también impulsar la pintura. Para ello se contrató al pintor italiano Alejandro Cicarelli para crear la Academia de Pintura en 1849, cuyo objetivo era formar a los jóvenes artistas chilenos y colocar el arte académico al servicio del Estado y la nación, resaltando las hazañas de la Independencia. El propio Cicarelli, en el discurso inaugural de la Academia de Pintura el 7 de marzo de 1849 manifestó:

*“Cuando examino, Señores, el bello cielo de Chile, su posición topográfica, la serenidad de su atmósfera, cuando veo tantas analogías con la Grecia y con la Italia, me inclino a profetizar, que este hermoso país será un día la Atenas de América del Sur... Si los hijos de la Patria derramaron su sangre en los campos de batalla para asegurar su independencia y grandeza, las bellas artes tienen la misión de fecundizar esta semilla de virtud y*



*patriotismo, ilustrando por medio del arte las hazañas de estos valientes.”  
(Anales de la Universidad de Chile, 1849: 113-116)*

En esta misma línea se publica en 1854 una “Colección de Biografías i Retratos de Hombres Célebres de Chile”, cuyos retratos fueron realizados por el artista francés Narciso Desmadryl, en la cual aparecen Mateo de Toro Zambrano, Bernardo O’Higgins, José Miguel Carrera, Camilo Henríquez, Juan Martínez de Rozas, José Ignacio Zenteno y otros próceres de la Independencia y de los primeros años de la República.



Otro arquitecto europeo que llega a Chile a mediados del siglo XIX es el italiano Eusebio Chelli, quien es contratado por la Orden Dominicana para construir la Recoleta Domínica en el barrio de la Chimba en Santiago, quien manifiesta en sus obras su aprecio por Palladio. Chelli se dedica a construir varias iglesias en Santiago y en regiones. Entre sus obras privadas para la elite de Santiago merece destacarse la mansión que diseñó para Maximiliano Errázuriz en la Alameda, sede de la actual embajada de Brasil en la capital.

Otros arquitectos italianos también llegaron al país, como Eduardo Provosoli, que había sido alumno de Camilo Boito y estaba influenciado también por Eugene Viollet-le-Duc, imprimiendo en sus obras, especialmente iglesias, un estilo neo renacentista y neo románico. Uno de sus proyectos más importantes fue la Iglesia de San Francisco de Castro en Chiloé (Riquelme, F. 1996:37-38).



Iglesia de San Francisco de Castro, Isla Grande de Chiloé, Sur de Chile. Fotos A. Cabeza

Durante la segunda mitad del siglo XIX Santiago cambió su fisonomía colonial, no solo por su crecimiento, ocupando áreas entonces rurales, sino porque todas las nuevas construcciones de las familias ricas debían expresar las nuevas tendencias arquitectónicas que demostraran la afinidad, especialmente hacia el modelo de tipo de ciudad que inspiraban París y otras ciudades europeas, como también su estilo de vida, creándose nuevos parques, avenidas, edificios, plazas, museos, monumentos, esculturas, alumbrado y otros adelantos de la época que reflejaran el progreso y el deseo de transformación urbana, proceso en el cual también estaban ciudades americanas como Río de Janeiro y Buenos Aires (Martínez, R. 2011).

Sin duda la década de 1870 es clave para la transformación de Santiago y expresar este cambio de sentido y de orden moderno que se quería imponer. En 1871 asume el Presidente Federico Errázuriz Zañartu, gracias a una alianza entre liberales y conservadores, quien estaba decidido a impulsar los nuevos ideales de progreso, favorecido para ello por las riquezas que años antes había producido para las elites y el fisco el mineral de plata de Chañarcillo, la creciente exportación de trigo y la que entonces producía el mineral de plata de Caracoles. Para ello el Presidente Errázuriz nombró como Intendente de Santiago a Benjamín Vicuña Mackenna, un liberal impregnado de romanticismo que había viajado a Estados

Unidos y Europa.<sup>31</sup> Vicuña Mackenna sería el primer político e intelectual en proponer y producir culturalmente una síntesis entre la modernidad que quería la elite y el pasado que habían renegado las anteriores generaciones, todo dentro del espíritu nacional que se estaba creando. Para tal desafío rescató parcialmente el pasado español como origen de la sociedad chilena, superando la visión de rechazo que estaba impuesta desde hacía décadas, y lo incorporó como parte de la identidad chilena, sin que fuera un peso negativo, pero siempre mirando al futuro y a la modernidad que representaban las naciones más desarrolladas.

Vicuña Mackenna propuso un plan a la Municipalidad, al Gobierno y al Congreso que tituló *“La Transformación de Santiago”* que incluía 20 proyectos, entre los cuales estaba: la canalización del río Mapocho, la transformación de los barrios del sur de la ciudad, la creación de nuevas plazas, la terminación del Mercado Central, la construcción de nuevas recovas, la apertura de las calles tapadas, el abovedamiento de varios canales, la pavimentación de aceras y ochavamiento de las construcciones de esquina y la conclusión de las avenidas Ejército Libertador y del Cementerio. Pero sin duda el principal proyecto que impulso y por el cual es más recordado es la creación del Paseo del Cerro Santa Lucía, el cual hasta entonces era un peñón rocoso y una pequeña fortificación denominada el castillo Hidalgo, pero que tenía un fuerte simbolismo ya que a los pies de Cerro Santa Lucía se había fundado la ciudad en 1541.

Las obras se iniciaron en 1872 y para coordinar los trabajos el intendente creó una comisión que integraban políticos, científicos y connotados profesionales de la arquitectura, ingeniería y el paisajismo. En 1874 las obras estaban parcialmente concluidas publicando Vicuña Mackenna un álbum que daba cuenta cabal del proyecto y todas sus construcciones, señalando en la introducción los valores históricos, sociales, urbanos y naturales de dicho cerro que motivaban su intervención y transformación en un parque urbano:

*“Era una verdadera maravilla natural por su extraordinaria formación jeológica, evidentemente volcánica i que presenta los mas raros i complicados fenómenos de la ciencia i de la naturaleza...era una maravilla histórica porque a su pié se plantó la primera bandera castellana, se dibujó la plata de la primera ciudad europea en el país i en su cima i ásperas faldas se libró el primer combate entre los conquistadores y los conquistados. Fue el orijen, la cuna i el baluarte de Santiago. Era una maravilla religiosa porque en realidad el Santa Lucía es por su forma un verdadero altar, digno de ser ofrecido a Dios, como lo imaginaron los jentiles ....i lo reiteraron los cristianos erigiendo en su cima la primera ermita i la*

---

<sup>31</sup> Respecto de su nombramiento como Intendente de Santiago, Vicuña Mackenna lo explicaba en razón de: “...a que yo estaba recién llegado de Europa, esto es, empapado en todas las ideas prácticas de la cultura moderna en relación a la edilidad de las ciudades y el gobierno doméstico de los Pueblos.” (Martínez, R. 2011: 13; Donoso, R. 1925).



*primera cruz de la conquista...era...una verdadera maravilla urbana, porque en ciudad alguna del mundo se encuéntrase un peñón mas atrevido...Por consiguiente, la idea de apropiar un sitio tan grandioso a los usos de una gran ciudad cristiana y civilizada...” (Vicuña Mackenna, B. 1874; Pérez de Arce, R., Astaburuaga, R. y Rodríguez, H. 1993)*



El cerro San Lucía de Santiago desde la Alameda con sus primeras construcciones, 1874. Foto del libro de Vicuña Mackenna, B. (1874)

Benjamín Vicuña Mackenna logró cumplir en parte su plan de transformación urbana, siendo el más importante del siglo XIX, el cual tuvo como antecedente directo los proyectos realizados en París durante Napoleón III, encargados al prefecto de París Barón Haussman. Sin embargo, a diferencia de lo realizado en dicha ciudad, Vicuña Mackenna no se empeñó en abrir grandes avenidas diagonales en Santiago, valorando el trazado damero original de la ciudad. Su plan de transformación fue respetuoso, buscando embellecer la capital, darle salubridad, construir nuevas viviendas para el sector obrero, darle mejor conectividad vial al construir un camino que bordeara el perímetro de la ciudad y modernizar la administración municipal (Martínez, R. 1996: 11; Martínez, R. 2011:13).

Vicuña Mackenna supo armonizar tradición y modernidad, demostrando que el futuro era posible sin destruir y negar el pasado. Su principal obra fue la

transformación del cerro Santa Lucía en el principal parque y paseo de la capital, instalando en él además un museo, cafeterías, etc., por la cual su gestor fue considerado un héroe ciudadano reconocido por todos hasta el presente. En el próximo capítulo, dedicado al desarrollo del patrimonio, trataremos nuevamente este tema y la importancia que tuvo Vicuña Mackenna al realizar la primera exposición histórica sobre la época colonial, crear un museo histórico, además de su notable producción historiográfica.



El Intendente Benjamín Vicuña Mackenna en el cerro Santa Lucía, 1874. Foto del libro de Vicuña Mackenna, B. (1874)

En este mismo contexto se realizó en Chile la Exposición Internacional de Santiago de 1875, motivo por el cual el gobierno mandó construir un gran edificio de líneas neoclásicas que encargó al arquitecto francés Paul Lathoud, edificación que después de concluida la exposición, ha sido la sede hasta la actualidad del Museo Nacional de Historia Natural. Lathoud también participaría después en otras obras y en las reparaciones de edificios públicos (Peralta, S. y Baeza, F. 1979:46).



El Museo Nacional de Historia Natural de la Quinta Normal en 1905. Foto Archivo Museo Histórico Nacional

En ese mismo año llega al país el paisajista francés Guillermo Renner, quien asume la Dirección de Jardines de Santiago y recibe el encargo de crear un parque urbano en lo que fuera La Pampilla, lugar donde tradicionalmente se celebraban las fiestas patrias y se realizaban ejercicios militares en Santiago, siendo estos trabajos financiados privadamente por el magnate del carbón Luis Cousiño (Fonseca, M. 1999), razón por la cual el parque llevó su nombre hasta 1972, fecha en la cual pasó a denominarse O'Higgins. Renner participó también en la construcción del Parque Forestal de Santiago junto a Jorge Dubois y fue contratado por los terratenientes para diseñar los jardines de sus casas patronales en las haciendas de Santiago y Chile Central, como por ejemplo la Viña Concha y Toro de Pirque, Cousiño Macul de Quilín, Santa Rita de Alto Jahuel, todo lo cual significó la ampliación hacia el ámbito rural de las transformaciones al estilo francés que estaba viviendo la capital. Si bien se construyeron en el campo nuevas mansiones de estilo europeo, siguieron predominando las casas patronales de adobe y tejas con amplios corredores y extensos tapias de las antiguas haciendas de estilo colonial, a las cuales se añadieron estos jardines y parques con especies exóticas, conviviendo el tradicionalismo del mundo rural con tales influencias, que por cierto no alteraron en nada la estructura social, económica y cultural de ese Chile profundo y campesino (Boza, C. 1984; Díaz, A. 1997).



Calle de Santiago de Chile con el cerro Santa Lucía al fondo, 1874. Foto del libro de Vicuña Mackenna, B. (1874)

Las ciudades chilenas y su arquitectura siguieron manteniendo su tradicional característica hispana criolla hasta mediados del siglo XIX, teniendo Santiago edificios públicos con un predominio del estilo neoclásico, cuya impronta la habían dado las construcciones de las últimas décadas coloniales. Sin embargo, el nuevo marco cultural que se estaba gestando en la élite dirigente, buscaba alejarse del pasado colonial español, que consideraba atrasado y aspiraba a copiar los modelos arquitectónicos imperantes especialmente en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, aunque la atención preferente estaba en París, tal como nos señala el historiador Javier González:

*“Las manifestaciones de la cultura francesa en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX no solo abarcaron el ámbito intelectual. También el diario vivir, con sus costumbres, modas, construcciones, formas de sociabilidad, etc., fue cántaro donde se depositó el influjo que venía del país europeo. Y por lo mismo que en los estilos de vida se tiende a la imitación, este influjo francés en lo cotidiano no solo afectó a la clase alta nacional, sino que, además, en distinta medida y de diversas maneras, también abarcó a una clase media urbana y a las elites regionales. Por esta razón, no es extraño que tanto para nacionales como para extranjeros, la sociedad criolla, en su vida de relaciones sociales como en la intimidad de la familia, presentase muchas formas que la acercaban a lo que en aquella época se denominaba “vida a la francesa”. Y en la medida en que se ascendía en la*



*escala social, esas formas pasaban a ser, si no un retrato, al menos una copia - elegante o burda - de ese vivir de la alta sociedad parisina.*<sup>32</sup>

En la misma línea el arquitecto René Martínez (2011:71) nos relata, con una serie de antecedentes de la época, la fuerza de esta ideología de la elite chilena de Santiago de copiar o representar en Chile lo francés en todos sus ámbitos:

*“¡París en Santiago! Para que la ilusión sea perfecta, las avenidas conducentes al Parque Cousiño, pasan a constituir el sector residencial de alta categoría. El Palacio Cousiño, el Palacio Astoreca, para no nombrar sino a los sobrevivientes, son testigos del paseo de la tarde que se encausaba por la Avenida del Dieciocho de Septiembre, pavimentada con adoquines traídos de Cherburgo, Francia, hasta que a alguien se les ocurrió hacerlos en Conchalí...”*<sup>33</sup>



Congreso Nacional en Santiago  
Fotos A. Cabeza



Museo Nacional de Bellas Artes

También en esta época hay un aumento de jóvenes de la elite becados a Europa para estudiar arquitectura, arte y otras disciplinas, cuyo impacto fue importante una vez que regresaron a Chile, organizándose exposiciones y una

<sup>32</sup> González Echeñique, J. “La influencia francesa en la vida social de Chile de la segunda mitad del siglo XIX”. En: <http://www.docstoc.com/docs/44926975/LA-INFLUENCIA-FRANCESA-EN-LA-VIDA-SOCIAL-DE-CHILE>.

<sup>33</sup> Martínez pasa revista a una serie de cronistas de la época que relatan los gustos de alta sociedad santiaguina de entonces y como se plasman en la arquitectura, en el lenguaje, las costumbres, los símbolos y en el propio diseño y construcción de la ciudad en el capítulo “Santiago en 1919, París en América”, en el volumen 2 de su libro *Santiago: Historia, Arquitectura y Urbanismo en la ciudad*. Universidad Central de Chile, 2011.

Comisión de Bellas Artes que llevaron, como veremos en el próximo capítulo, a la incorporación de los conceptos de monumentos y patrimonio que se estaban discutiendo en el viejo continente. Paralelamente el gobierno sigue contratando profesionales en el extranjero, los cuales eran necesarios debido a la construcción de escuelas, puentes, ferrocarriles, caminos, puertos y otras obras para el desarrollo del país, particularmente en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. En atención a este aumento de las obras que construía el Estado, se crea en 1887 el Ministerio de Industrias y Obras Públicas, en el cual se concentran los profesionales dedicados a la arquitectura e ingeniería que antes estaban en el Ministerio del Interior (Peralta, S. y Baeza, F. 1979:56; Couyoumdjiam, J. 2000).

En 1889 se llevó a efecto la Feria Internacional de París en la cual Chile participó como expositor, discutiendo el gobierno qué tipo de inmueble construir para exhibir los productos chilenos y la imagen del país que se quería proyectar. Otros países latinoamericanos, como México, por ejemplo, se esmeraron en presentar pabellones que representaran su identidad arquitectónica prehispánica. Otros, como Chile y Argentina quisieron proyectar una imagen de modernidad con edificios metálicos desmontables. El pabellón chileno se hizo en base a hierro, zinc y acero, siendo producto de un concurso en París que fue ganado por el arquitecto francés Henri Picq, el cual después de concluida la exposición fue trasladado a Santiago y que actualmente es sede de un museo. El pabellón exhibió el cuadro de la “Fundación de Santiago” del pintor Pedro Lira. El director general de la muestra chilena fue Carlos Antúnez quien, en alusión al pabellón que se había decidió construir señaló su visión:

*“No somos ni México ni Perú, con patrimonio azteca o incaico<sup>34</sup>, fuentes de posible inspiración, ni es tampoco reproducible, en 500 metros cuadrados una casa solariega de tres patios, con el central convertido en un jardín, que tanto impresionan al extranjero. No queda, por consiguiente otro recurso, a mi juicio, que construir un elegante pabellón adecuado a los fines que más adelante detallaré”. (Basáez, P. y Amadori, A. 1989:57)*

La enseñanza de la arquitectura también fue preocupación del gobierno, para lo cual se contrataron en 1889 nuevos profesores extranjeros, siendo uno de ellos el catalán José Forteza Ubach, que tendrá un rol educador importante tanto en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, como en la recién creada Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Forteza también se dedicó a la construcción de las mansiones de la elite en Santiago, donde imprime un estilo goticista incluyendo formas del Art Nouveau, con influencias del

---

<sup>34</sup> Es interesante destacar el uso del concepto de patrimonio azteca o incaico que señala Antúnez, lo que demuestra que la noción de patrimonio ya se estaba instalando en Chile, esencialmente debido al uso del término en Europa.



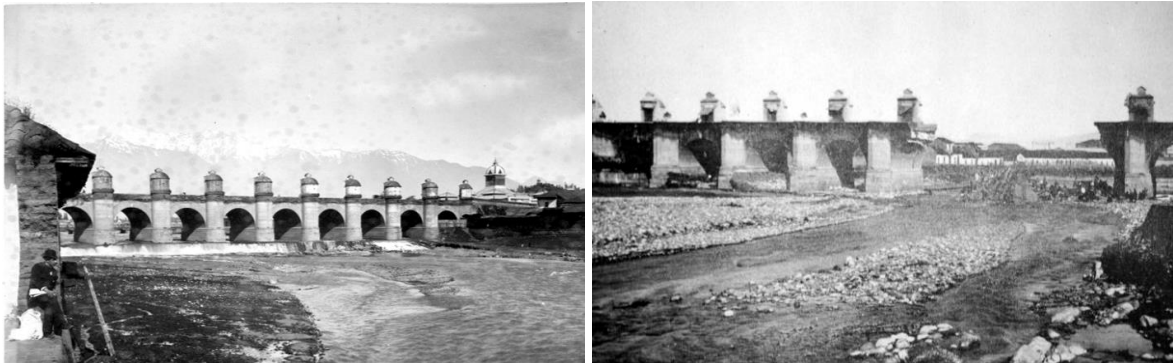
modernismo catalán de Barcelona. En el mismo año llega contratado a Chile el arquitecto e ingeniero francés Eugenio Joannon, quien le correspondió ejecutar importantes obras en las próximas décadas. Tal como indica el arquitecto Fernando Riquelme, respecto de la arquitectura de fines del siglo XIX y comienzos del XX:

*“El historicismo había penetrado en el gusto dominante de arquitectos y clientes...El neo románico, el neo bizantino y el neo gótico fueron los estilos obligados de la iglesia, salvo muy raras excepciones. En la arquitectura civil la gama de posibilidades de inspiración histórica no tenía prácticamente límites. No siempre los resultados eran felices, un porcentaje importante fueron obras eclécticas de absoluta falta de armonía o de desconocimiento de los cánones estilísticos. Hubo, sin embargo, un momento en que la ciudad logró un aspecto de unidad que provenía de este lenguaje común del pasado histórico que nos llegaba del viejo mundo o, más bien, que íbamos a buscar allá.” (Riquelme, F. 1996:40)*

No obstante la preocupación que tuvo Benjamín Vicuña Mackenna por valorar la historia colonial, en 1888 tuvo lugar un hecho desastroso para el patrimonio nacional que implicó la destrucción del antiguo puente colonial de Cal y Canto sobre el río Mapocho, construido por José Antonio Birt en 1767 bajo la administración del Corregidor de Santiago Luis Manuel Zañartu. Dicho puente fue considerado la mayor obra civil de la colonia siendo un hito de la ciudad y cargado de leyendas, el cual conectaba ambas orillas del río Mapocho y fue testigo de la historia de Santiago por más de 100 años. Tal como escribimos hace varios años:

*“Todo esto no fue tenido en cuenta cuando se planificaron las obras de mejoramiento urbano. En enero de 1888 se promulgó la Ley que autorizaba al Ejecutivo a invertir determinada suma en la canalización del río Mapocho, misión que se encomendó al ingeniero Valentín Martínez. El proyecto comprendía la demolición del puente colonial y la edificación de uno nuevo... Durante junio y julio de ese lluvioso año, con dinamita, se destruyó el emplentillado del Cal y Canto, dejando sin defensa sus machones. De esta manera, se avanzaba en la proyectada demolición, no obstante no había comenzado a construirse el puente nuevo. El 5 de agosto comenzó a llover; fue una lluvia torrencial que se mantuvo por varios días. El 10 de agosto una gran multitud se había agolpado en el puente a observar el espectáculo que ofrecía el embravecido río. A las 2.00 PM la autoridad dispuso la evacuación del puente y la paralización del tráfico. Media hora más tarde, para asombro y perplejidad de los testigos, la corriente derribó con enorme estruendo el machón que mediaba entre el segundo y tercer arco de la parte norte del Puente de Cal y Canto. A las 5 de la tarde, otros dos pilares se habían desplomado, junto con la sección del puente que sostenían...Dos días más tarde salió el sol, y la población acudió con gran*

*pesar a contemplar las ruinas. De inmediato arreciaron las críticas al ingeniero Martínez y al gobierno en general. "(Cabeza, A. y Simonetti, S. 1998)*



Puente de Cal y Canto en la segunda mitad del siglo XIX y su destrucción en 1888. Fotos Archivo Museo Histórico Nacional

En lo político, las siguientes décadas después del decenio del Presidente Manuel Bulnes (1841-1851), la oligarquía supo imponer presidentes civiles, no sin diferencias al interior de ella, entre las tendencias liberales y conservadoras, además de ciertas tensiones regionales entre las provincias del norte y del sur, que llevaron a breves conflictos armados en 1851 y 1859. En lo religioso también hubo conflictos en la elite entre quienes eran católicos conservadores y quienes manifestaban la libertad de credos y el carácter no confesional que debía tener el Estado, aunque el pueblo siguió siendo católico y practicando una religiosidad popular sincrética y secular. (Vial, G. 1981, tomo I: 57-132)

En el plano exterior Chile enfrentó tres conflictos armados, el primero contra la confederación Perú-boliviana (1836-1839), que si bien tuvo lugar en tierras peruanas, la movilización del ejército y la marina provocó al final de la guerra un fervor nacionalista y un sentimiento de unidad nacional que antes era todavía tibio; el segundo conflicto fue la guerra naval contra España (1864-1866), en la cual la flota española bombardeó Valparaíso, lo que incentivó otra vez más el nacionalismo y potenció la imagen negativa del pasado colonial que se había cultivado en las décadas anteriores; y el tercer conflicto bélico fue la Guerra del Pacífico o del Salitre (1879-1883) contra Perú y Bolivia, debido al cual Chile logró conquistar e incorporar al territorio nacional las provincias peruanas de Arica y Tarapacá, y la provincia boliviana de Antofagasta, guerra que sintetizó la idea nacionalista de Chile como país guerrero y victorioso; y finalmente los continuos enfrentamientos con los mapuches de la Araucanía, que concluyen con la ocupación militar de ese territorio en la década de 1880.

Si bien el pueblo mapuche y su lucha centenaria contra el dominio español alimentó simbólicamente la construcción de la nación chilena en los primeros años

de la República, rápidamente pasó a ser el problema no resuelto de la unidad nacional que se buscaba, elaborando el Estado una política sistemática de ocupación de sus territorios al sur del río Bío- Bío, que concluyó militarmente en la década de 1880, con la fundación de la ciudad de Temuco y la radicación de las comunidades mapuches, a las cuales se les asignaron tierras, quedando el resto en propiedad del Estado que pasó a distribuir las entre colonos nacionales y extranjeros. Sobre lo anterior importa recordar que el historiador Jorge Pinto (2003) ha estudiado en profundidad esta situación de inclusión inicial y posterior exclusión simbólica del pueblo mapuche en la construcción de la nacionalidad chilena.

Tal como señala Mario Góngora, si consideramos la guerra de la Independencia, cada generación de chilenos del siglo XIX vivió o participó en un conflicto armado (Góngora, M. 2003:66-67). Si a esto agregamos la guerra civil de 1891 que enfrentó al Presidente de la República con el Congreso, respaldado este último por parte del ejército y la marina y que fue el conflicto más sangriento del siglo, hay razones de sobra para sostener que la guerra fue, en la formación de la identidad nacional de Chile, un aspecto importante en el siglo XIX.

La Guerra del Pacífico permitió a Chile el control de toda la riqueza del salitre del Norte Grande lo que significó al Estado disponer de crecientes recursos, debido a los impuestos de exportación que cobraba. Si bien las oficinas salitreras quedaron mayoritariamente en poder de sociedades británicas, no fue menor la participación de empresarios chilenos, los cuales desde antes de la guerra tenían importantes intereses en dicha industria, además que la mayoría de los trabajadores provenían de Chile, aspectos todos que gatillaron el conflicto cuando las autoridades bolivianas expropiaron las empresas chilenas, lo que motivó la ocupación del puerto de Antofagasta por tropas chilenas y la posterior declaración de guerra por Bolivia y Perú, quienes tenían un tratado de defensa mutua.



Oficinas salitreras de Tarapacá y trabajadores, fotografía de 1889 del libro Boudat y Cía. (2000)

La guerra concluyó con la ocupación de Lima por ejército chileno. El gobierno de la época se preocupó de rendir todo tipo de honores a los soldados y marinos que lideraron la contienda y a los que murieron en combate. La acción guerrera que tuvo mayor impacto psicológico y social en el país fue el Combate Naval de Iquique del 21 de mayo de 1879, ocasión en que la corbeta chilena Esmeralda fue hundida por el monitor peruano Huáscar, muriendo su comandante, el capitán Arturo Prat y parte de su tripulación, en dicho combate. Tal fecha se constituyó en la segunda efeméride nacional más importante después del 18 de septiembre, siendo conmemorada hasta el presente, construyéndose una cripta monumento en Valparaíso, en 1886, y bustos del prócer en todas las ciudades del país, siendo el 21 de mayo un día feriado nacional, que se conmemora con desfiles de las fuerzas armadas, de los escolares y la sociedad civil, siendo tal gesta enseñada como ejemplo de valor y de dar la vida por la patria en todos los textos escolares de historia de Chile (Sater, W. 2005). Este caso, continuaba con la tradición de erección de estatuas y monumentos a los padres de la patria y líderes de la guerra de la Independencia, que el Estado venía patrocinando desde la década de 1840, como parte de su política conmemorativa y formadora de la identidad nacional unitaria que trataremos extensamente en el próximo capítulo.



Combate Naval de Iquique, 21 de mayo de 1879, entre la Esmeralda y el Huáscar según Tomas Somercales. Foto Archivo Museo Histórico Nacional

La Guerra del Pacífico, al igual que la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana, fueron acontecimientos que potenciaron la identidad nacional chilena, que se estaba construyendo desde el Estado, dirigido por la elite a partir de la Independencia. Al respecto M. Góngora ha sido enfático en este aspecto, no sin dejar de mencionar el regionalismo local criollo que existía desde la colonia:

*“La nacionalidad chilena ha sido formada por un Estado que ha antecedido a ella, a semejanza, en esto, de la Argentina; y a diferencia de México y del Perú, donde grandes culturas autóctonas prefiguraron los Virreinos y las Repúblicas. Durante la Colonia se desarrolla un sentimiento regional criollo, un amor a la patria en su sentido de tierra natal...” (Góngora, M. 2003:71).*

*“Evidentemente que, junto a los acontecimientos bélicos, la nacionalidad se ha ido formando por otros medios puestos por el Estado: los símbolos patrióticos (banderas, Canción Nacional, fiestas nacionales, etc.), la unidad administrativa, la educación de la juventud, todas las instituciones. Pero son las guerras defensivas u ofensivas las que a mi juicio han constituido el motor principal. Chile ha sido, pues, primero un Estado que sucede, por unos acontecimientos azarosos, a la unidad administrativa española, la Gobernación, y ha provocado, a lo largo del siglo XIX, el salto cualitativo del regionalismo a la conciencia nacional.” (Góngora, M. 2003:73)*

A finales del siglo XIX la oligarquía no solo controlaba el Estado sino también las principales riquezas del país. La participación de la sociedad en las elecciones políticas estaba marginada sólo a los ciudadanos hombres que sabían leer y escribir y que podían demostrar una renta. Por ejemplo en la elección presidencial de 1876 sólo podía sufragar el 2.8 % de la población y de esta cantidad efectivamente votó solo el 36.5% (Jocelyn-Holt, A. 1997:61). Los partidos gobernantes eran el liberal y el conservador, siendo los candidatos esencialmente terratenientes, aumentando con los años quienes habían hecho fortuna en las minas y en la banca. Los electores, esencialmente en el sector rural, donde vivía la mayor parte de la población, seguían la orientación de los líderes regionales, cuestión que se hizo más profunda cuando se amplió el electorado a todos los ciudadanos, siendo en las ciudades y en el norte minero, los lugares en que se gestaron los futuros cambios políticos y se formó una sociedad civil más plural con identidades culturales de orientación obrera y mesocrática.

Sin embargo, otra crisis política se comenzó a gestar a finales de la década de 1880, cuando el gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda, de cuño liberal y que también pertenecía a la elite, trato de impulsar una política nacionalista en relación al salitre, los ferrocarriles y otras riquezas del país, defendiendo para ello las prerrogativas que tenía el régimen presidencialista, enfrentándose por ello a parte de la oligarquía que dominaba el Congreso y estaba aliada a la banca y al capital extranjero, lo que provocó la Guerra Civil de 1891, la derrota de las fuerzas del ejecutivo y el suicidio del presidente, cuando este terminó su mandato constitucional y estaba refugiado en la embajada de argentina (Vial, G. 1981, Tomo I).



El senador Adolfo Ibáñez, en una sesión del senado del 10 de mayo de 1891, previo a la caída del ejecutivo, fue certero al referirse al papel que tuvo la oligarquía bancaria en la caída del presidente Balmaceda y de las futuras crisis económicas que tendría el país:

*“Estas instituciones han abierto de par en par las puertas del agio, de las especulaciones aventuradas, del juego de bolsa y demás especulaciones aleatorias en cuya meta se encuentran muchas veces las desgracias de las familias y la deshonra de los individuos... Tal vez no sería temerario afirmar que entre nosotros el nivel moral de las especulaciones ha descendido muchos grados. Por otra parte, si mucho debemos a los bancos, estos también han obtenido pingues recompensas... Por lo demás, estas instituciones bancarias en el enorme desarrollo que han llegado, no hacen sino cambiar la corriente natural de nuestros capitales, que en vez de dedicarse a fomentar la industria nacional en sus múltiples manifestaciones, siguen por el sendero de la usura y de las especulaciones de poco o ningún trabajo.”*(Góngora. M. 2003:87)

La Constitución de 1833 ya no respondía a las expectativas de la oligarquía y después de 1891 se eligieron hasta 1920, gobiernos donde el poder radicaba esencialmente en el Congreso, debiendo el presidente elegir sus ministros entre la mayoría parlamentaria. En este período, tal como escribe A. Jocelyn-Holt (1997:51-52): *“...la política se vuelve impudicamente oligárquica. El gobierno de la elite se ha convertido finalmente en mero elitismo enraizado en un profundo sentido de clase.”* Si bien las rentas del país han aumentado gracias al salitre y las clases dominantes disfrutaban de tal riqueza, esta no es compartida con el resto de la población. Miguel de Unamuno, refiriéndose a esta situación, escribió a un admirador chileno diciendo que Chile era: *“...un país de cartagineses, organizado para el botín de guerra, y al cual el salitre ha corrompido...”* (Góngora, M. 2003:67).

A finales del siglo XIX el positivismo y las ideas de la ilustración llegaron a su cenit, las cuales rechazaban tanto el legado español, salvo algunas excepciones, como también el indígena, como causas del retraso, construyendo proyectos para el desarrollo nacional basados en los modelos europeos y norteamericanos. Durante todo el siglo XIX las clases dirigentes y la intelectualidad plantearon que América Latina tenía que ser civilizada erradicando la barbarie que provenía del mundo indígena y del dominio colonial. Entre los principales autores y políticos de esta tendencia mayoritaria encontramos a intelectuales y políticos latinoamericanos destacados como Sarmiento, Alberdi, Prado e Ingenieros. No debe extrañarse que tales ideas influyeran notablemente en algunos respecto de la necesidad de mejorar la “raza” facilitando la inmigración europea e impulsando también la educación masiva, como una manera de minimizar las desventajas de las que consideraban las razas inferiores y del propio mestizaje existente en todos



los países. Sobre este asunto el propio Sarmiento escribió que la única forma lograr el progreso era a través de la “...instrucción, educación difundida en la masa de los habitantes...para nivelarse; y lo está ya haciendo con otras razas europeas, compensando la sangre india con ideas modernas, terminando con la Edad Media.” (Martínez Estrada, E. 1968: 140). Al respecto es clarificadora la frase de Alberdi muchas veces repetida: “En América todo lo que no es europeo es bárbaro” (Larraín, J. 1996: 147-150).

No obstante esta idea ilustrada o moderna de lo que debería ser la imagen oficial de cada país americano, se fue manifestando, de manera opuesta, tipos nacionales y bailes que diferenciaban y representaban a cada país en el imaginario popular. En el caso de Chile cobra fuerza la imagen del huaso y de la cueca. El primero representaba al personaje típico a caballo del campo chileno, dedicado tanto a la actividad ganadera como agrícola, cuya vestimenta integraba y fusionaba elementos indígenas y españoles. Por otra parte, se popularizaba la zamacueca o cueca como baile nacional, la cual unía también diversas tradiciones de raíces culturales tan diversas y mestizas como lo hispano, lo afroamericano y lo peruano. Ambas manifestaciones mostraban el Chile profundo, particularmente de la zona central del país, las cuales se oponían a la imagen refinada y europea que la elite quería como representación del país. No obstante ello y de manera contradictoria, la elite terrateniente que en la ciudad quería asemejarse a la cultura europea, en el campo asumía plenamente, participaba y reproducía estas formas tradicionales, que con el tiempo, especialmente en el siglo XX, terminaron por representar la imagen identitaria del Chile oficial, al cual debemos agregar su correlato urbano y popular: el roto chileno (Claro, S. y Peña, C. 1994; Vergara, J. 2009; Cid, G. 2009).



Huaso y lavandera de M. Rugendas.  
Fotos Archivo Museo Nacional de Bellas Artes



La cueca de Manuel Antonio Caro

En este contexto, los sucesivos gobiernos chilenos se preocuparon de mantener un control de las regiones extremas del país, que en las décadas pasadas habían sido incorporadas al territorio nacional, como las provincias nortinas de Antofagasta y Tarapacá conquistadas a Bolivia y Perú respectivamente, y del territorio de Magallanes y Tierra del Fuego en la Patagonia Austral, en todas las cuales debían definirse las fronteras, existiendo poblaciones originarias indígenas y de los países vecinos, además de una activa colonización extranjera, cuya fidelidad a la república debía ser asegurada. Para ello el Estado estableció una férrea administración con funcionarios trasladados desde el gobierno central, estableciendo unidades militares, la creación de escuelas fiscales y programas de educación escolar que socializaran a los niños con los símbolos patrios y la chilenidad (González, S. 2002, 2009; Martinic, M. 1971, 1973, 1980). Por tanto el Estado experimentó un fuerte crecimiento, gracias a los impuestos de exportación del salitre, pasando de tener en 1880 unos 3.000 funcionarios a 13.000 en 1900 y 27.000 en 1919 (Correa, S. et al 2001:24).

Si bien la Guerra del Pacífico de 1879 y la Revolución Civil de 1891 truncaron todo proyecto adicional de transformación de Santiago, poco después se plantearon nuevos proyectos. Es así que en 1894, el Director de Obras Municipales de Santiago Manuel Concha, propuso la apertura de cuatro diagonales que unían La Estación Mapocho, la Estación Central, el Parque Cousiño y el Cerro Santa Lucía, proyecto que no se concretó. En 1912 se propusieron dos nuevos proyectos de diagonales que tampoco se llevaron a la práctica. Lo mismo ocurrió con otras dos iniciativas en 1913. Para darle sustento a estos proyectos se dictó en 1909 la “Ley de Transformación de la ciudad de Santiago” (Martínez, R. 2011:33,41-51).



Propuesta de diagonales de Santiago en 1894 (Martínez, R. 2011)

De haberse ejecutado tales planes, el trazado damero colonial de la ciudad y su patrimonio arquitectónico, habrían recibido un tremendo impacto negativo, derivado del intento de copiar lo realizado en París décadas atrás y como estaban llevando adelante otras ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, a las cuales también Santiago trataba de imitar. Fuere la falta de recursos o la situación política, se impuso otra realidad más austera y acorde a la ciudad.

Sin embargo, a finales del siglo XIX, Santiago había cambiado su fisonomía, presentando una imagen que a juicio de dos viajeros franceses era la siguiente:

*“A menudo nos hemos preguntado a que estilo pertenecen las mansiones elegantes, las residencias señoriales de Santiago y no hemos podido encontrar respuesta. Lo que existe son fachadas y decoraciones que varían al infinito, mostrando ya una techumbre renacentista sostenida por columnas dóricas, ya un cuerpo central florentino...Sobre el ladrillo o el revestimiento de murallas, sobre el yeso, el estuco o la madera aparecen los colores que, a la luz de la tarde, representan mármoles y granitos, pórfidos y jades.” (Wiener, C. 1888:12-13)*

*“Lo poco que existe de notable en la arquitectura de Santiago, está invariablemente construido en estilo renacimiento o sus derivados. En arquitectura se imita aquí tanto lo bueno como lo malo. En Chile la única fuente de inspiración es la imitación. Tal ausencia de originalidad es la marca de un gran número de residencias particulares construidas a precio de oro por la riqueza o la vanidad...una mansión pompeyana...un falso tudor...una villa turco-siamesa con cúpulas doradas y un minarete sobre el techo”. (Child, T. 1891:118-119; Martínez R. 2011:69)*

La celebración del primer centenario de la Independencia Nacional en 1910 fue ocasión de renovar el espíritu nacional por parte del Estado. Tal año fue complejo debido al fallecimiento del Presidente Pedro Montt y de quien lo reemplazó, debiendo asumir los festejos un tercer mandatario hasta la realización de las elecciones presidenciales de fines de ese año. No obstante ello, la elite se esmeró en presentar su poder y riqueza, invitando a dignatarios extranjeros, realizando grandes festejos, levantando monumentos e iniciando un programa de construcciones de edificios que conmemoraran tal hecho, como lo fue el Museo Nacional de Bellas<sup>35</sup>, la Estación Mapocho<sup>36</sup>, los Tribunales de Justicia<sup>37</sup>, el

---

<sup>35</sup>Proyecto del arquitecto Emilio Jecquier que se inició en 1905 y se inauguró en 1910. Jecquier era hijo de un ingeniero francés y estudió arquitectura en París y después se radicó definitivamente en Chile.

<sup>36</sup>Proyecto de Emilio Jecquier iniciado en 1905 y concluido en 1912.



Parque Forestal<sup>38</sup> y la nueva Biblioteca Nacional<sup>39</sup>, cuya construcción se inició poco después, que junto a otras edificaciones, buscaban reafirmar la orientación europea de la elite y el orgullo por el progreso alcanzado en los últimos cien años<sup>40</sup>.



Antiguo convento de las monjas clarisas de Alameda en Santiago que fue destruido para construir la Biblioteca Nacional, fotografía de alrededor de 1910. Fotografía del archivo del Museo Histórico Nacional



Construcción Biblioteca Nacional.  
Fotos Archivo Biblioteca Nacional



Biblioteca Nacional en la actualidad

<sup>37</sup> Proyecto del arquitecto francés Emilio Doyere iniciado en 1905 y concluida su primera etapa en 1911 y la segunda en 1928. Este proyecto significó la demolición del edificio colonial del Tribunal del Consulado, lugar en que se realizó la Primera Junta Nacional de Gobierno.

<sup>38</sup> Proyecto del paisajista francés Georges Dubois construido en el borde del río Mapocho, gracias el proyecto de canalización del río iniciado 30 años antes e inaugurado en 1910.

<sup>39</sup> Proyecto del arquitecto chileno Gustavo García de Postigo iniciado en 1913 y concluida su primera etapa en 1925.

<sup>40</sup> Un buen análisis y registro arquitectónico de esta época la vemos en la Guía de la Arquitectura de Santiago de Chile (2000), que fue realizada gracias a la Junta de Andalucía.



Tribunales de Justicia de Santiago alrededor de 1928. Foto Archivo Fotográfico de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de Chile.

Como parte de los festejos del Centenario también se realizó una exposición de objetos considerados patrimoniales y relevantes de la historia de Chile, similar a la que Benjamín Vicuña Mackenna realizara en la década de 1870. Sin embargo, lo novedoso de esta ocasión fue que se adoptó una visión más amplia, incorporando la prehistoria, la conquista, la colonia y la época republicana, la cual tenía por objetivo:

*“...no sólo reunir i clasificar los objetos fabricados en el país o fuera de él que hayan prestado algún servicio desde la época prehistórica, sino también coleccionar todo aquello que signifique un recuerdo de los tiempos pasados; como ser obras de arte, cuadros, esculturas, impresos, manuscritos, útiles de caza, armas, muebles instrumentos de música, etc. Que sirvieron a nuestros antepasados durante la época prehistórica, descubrimiento i conquista de Chile; i los que se usaron durante la colonia, independencia, etc.”<sup>41</sup>*

---

<sup>41</sup> Cita aparecida en la “Circular de la Exposición Histórica del Centenario a sus delegados” en 1910. Citada en Alegría, L. y Paz, G. (2007): “Patrimonio y modernización en Chile (1910): La Exposición Histórica del Centenario”. Revista Atenea N° 495- I Semestre, p. 69-81, Concepción, Chile.

Sobre esta exposición los investigadores L. Alegría y G. Paz analizaron la idea de patrimonio que se estaba construyendo en Chile, especialmente en lo institucional, concluyendo:

*“...que la coyuntura del Centenario y de la Exposición Histórica representaron un momento crucial en la constitución posterior del campo patrimonial de Chile. Es en el marco del Centenario desde donde se comenzará a instalar un polo cultural moderno, con la autonomización de lo patrimonial, al constituirse en un campo específico dentro del campo cultural, pues, de ella surgirá la idea de conformar el Museo Histórico Nacional (2 de mayo de 1911), lo cual hacia el futuro significará la revisión de las funciones y atribuciones del Museo Nacional, en la actualidad Museo Nacional de Historia Natural, nombre que ya no se justificaba tanto por la formación del Museo Histórico Nacional, como por la instalación definitiva en un nuevo edificio del Museo Nacional de Bellas Artes.” (Alegría, L. y Paz, G. 2007:81).*

Una compilación detallada de artículos por diversos especialistas americanos sobre las celebraciones del centenario en América la encontramos en la Revista Apuntes de Colombia de 2006 en su Vol. 19, N° 2. No deja de ser interesante mencionar aquí los proyectos arquitectónicos realizados por los países americanos en la Feria Internacional de Sevilla de 1929 en donde hay varios ejemplos de inmuebles que reflejan las influencias del neocolonial y del neoindígena (Rodríguez Barberán, F. 2006:284-299).<sup>42</sup>



Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago inaugurado en 1910. Foto Archivo Fotográfico de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

---

<sup>42</sup> Más adelante nos dedicaremos especialmente a esta Feria Internacional de Sevilla y cómo el Pabellón chileno sigue un diseño alternativo al de otros países americanos.



La celebración del Centenario de la Independencia Nacional tuvo un cariz eminentemente aristocrático, siendo las masas populares meras espectadoras. Sin embargo, diferentes líderes de las clases medias y populares, e incluso de la elite, tales como Nicolás Palacios, Alejandro Venegas, Guillermo Subercaseaux, Francisco Antonio Encina, Enrique Mac-Iver y Manuel Recabarren, dan cuenta en diversos documentos, del desgaste de la clase dirigente, de su culto por la ostentación, lo que agravaba aún más el resentimiento del resto de población que estaba sumida en la pobreza, anunciando así el fin del antiguo orden elitista, oligárquico y autoritario que debía ser reemplazado por uno nuevo (Gazmuri, C. 2001; Alegría, L. y Paz, G. 2007).



Población urbana pobre de Santiago en 1915. Foto Archivo Museo Histórico Nacional

Por tanto el Centenario fue expresión de dos miradas opuestas del país. Por una parte la élite expresó su orgullo por haber consolidado el Estado y la nación durante todo el siglo XIX y triunfado en las guerras exteriores contra Perú y Bolivia. Por otra permitió que se levantaran voces críticas contra el modelo de sociedad imperante que denunciaban las desigualdades y tareas pendientes para lograr una sociedad más justa (Correa, S. et al 2001:42-72).

Por cierto, a comienzos del siglo XX, la masa de campesinos seguía sujeta a la estructura hacendal que venía desde la colonia. Los obreros, tanto del salitre como los que trabajaban en las ciudades, vivían en situación paupérrima, cuestión que suscitó varias huelgas que fueron reprimidas con violencia (Grez Toso, S.

1997; Salazar, G. 2000). De igual manera, particularmente en las ciudades, se estaba formando un grupo cada vez mayor de empleados, comerciantes, artesanos y profesionales que fueron constituyendo una clase media que en las dos primeras décadas del siglo XX lucharon por su participación política y acceso al poder. Esta situación, unida al desgaste de la clase oligarca, cuyos síntomas de debilidad para administrar el Estado eran patentes en la literatura política de comienzos de siglo, permite que uno de los líderes de origen liberal, como Arturo Alessandri, logre el apoyo de las masas populares y de la clase media, siendo elegido como presidente de la república en 1920.

### **La Emergencia de las Clases Medias y Populares en la Formación y Reconocimiento de una Identidad Nacional más Plural y Diversa en el siglo XX y comienzos del siglo XXI**

Existen diversas apreciaciones en la historiografía chilena en relación a cuando termina el siglo XIX y comienza el siglo XX en cuanto a procesos políticos y sociales se refiere. Para algunos historiadores el siglo XX chileno comienza con la Guerra Civil de 1891. Para otros en la década de los años 20 del siglo siguiente. Mi apreciación en base al estudio de este período me inclinó a hacer el corte en estos últimos años, en razón de que la Guerra Civil de 1891 sólo reafirmó en el poder a la oligarquía bajo nuevas formas, y que los cambios más radicales en lo social, político y cultural se dieron a partir de 1920.

En las dos primeras décadas del siglo XX se precipitan una serie de procesos que llevan al fin de la dominación oligárquica en el Estado chileno que ejerció todo el poder sin contrapeso del resto de la sociedad durante todo el siglo XIX. El desgaste de la clase terrateniente, minera y financiera, cuyas principales familias ya estaban emparentadas fue total. Esta situación, unida a lo que ocurría en el concierto internacional, además de las nuevas ideas que se venían gestando desde décadas atrás en Chile y en América Latina, tanto en intelectuales y líderes de la propia elite y de las clases medias, llevaron a la creación de movimientos culturales y políticos, los cuales gatillaron finalmente el colapso de la oligarquía en 1920 y la apertura a la participación de los sectores emergentes, que reclamaban mejores condiciones de vida y un acceso al poder.

En forma paralela a lo que ocurría políticamente al interior de cada país latinoamericano, a finales del XIX y comienzos del XX, varios intelectuales elevaron sus voces en contra de los imperialismos, especialmente el norteamericano, por su vocación hegemónica hacia América Latina. Entre estos tenemos a José Martí de Cuba, Rubén Darío de Nicaragua, José de Vasconcelos en México, Manuel Ugarte de Argentina y José Rodó de Uruguay. Todos ellos manifiestan un descubrimiento de América Latina y sus características positivas en oposición a un Estados Unidos materialista y dominador. Vasconcelos incluso

resalta el valor del mestizaje latinoamericano, contrariando la ideología de la superioridad racial blanca dominante hasta entonces. La mayoría de estos autores ven el legado español como elemento fundacional de la cultura Latinoamérica. Pero al mismo tiempo cobra fuerza una mirada positiva hacia los pueblos indígenas y se va articulando un discurso indigenista en oposición al legado europeo, el cual tuvo más importancia en México y Perú (Gutiérrez, R. 1995: 18; Larraín, J. 1996:150 -151; Yaeger, G. 2009:136).

En todo el continente, y Chile no era la excepción, se había forjado una identidad cultural nacional desde arriba, desde el Estado dominado por elites que impusieron discursos nacionalistas y modernistas, que negaban y desvalorizaban las culturas y tradiciones populares, fueran mestizas, criollas o indígenas. La crítica al modelo imperante que se estaba gestando entonces no era solamente política y económica, sino también social y cultural. Esto se aprecia en Chile en las nuevas tendencias literarias y artísticas que estaban apareciendo, siendo parte de sus primeros promotores, los propios miembros de la elite, como es el caso del “*Grupo de los Diez*”, movimiento ideado por el arquitecto y escritor Pedro Prado, que en la segunda década del siglo XX, logra reunir a diversos intelectuales, artistas, poetas, músicos y profesionales como Armando Donoso, Eduardo Barrios, Augusto D’Halmar, Julio Bertand, Manuel Magallanes, Ernesto Guzmán, Alfonso Leng, Acario Cotapos y Juan Francisco González entre otros, quienes motivaron reflexiones y la búsqueda de nuevas tendencias de creación cultural. Si bien el grupo era esencialmente aristocrático<sup>43</sup>, estuvo abierto a las clases medias. Este ambiente cultural menos exclusivo y crítico, permitió que surgieran nuevas tendencias como el “criollismo” en la literatura y en la pintura, cuyos seguidores proclamaron una nueva estética, acorde con lo que ocurría en otros países latinoamericanos, que buscaban rescatar los ambientes, personajes y costumbres propias del país, pero también vincularse a los movimientos más vanguardistas que estaban apareciendo en Europa (Correa, S. et al 2001:76-77).

En este ambiente nuevo los intelectuales que más influyeron en las siguientes décadas fueron los poetas Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro y los escritores Mariano Latorre y María Luisa Bombal. Los dos primeros, galardonados con el Premio Nobel de literatura, provenían de familias modestas. En cambio Vicente Huidobro provenía de la elite, a la cual criticó duramente, escribiendo en 1925:

---

<sup>43</sup> En lo general hemos evitado el uso del concepto “aristocrático” y preferido el de “elite” en nuestro trabajo, pero varios historiadores lo usan indistintamente para referirse a las familias que provienen de la Colonia y que eran poseedoras de grandes haciendas y propiedades rurales, algunas de las cuales incursionaron después en la banca y en la industria en Chile y cuyos apellidos son ampliamente reconocidos en nuestro país. En las últimas décadas ha dejado de usarse el concepto, pero no totalmente.

*“Frente a la antigua oligarquía chilena, que cometió muchos errores, pero que no se vendía, se levanta hoy una nueva aristocracia de la banca, sin patriotismo, que todo lo cotiza en pesos y para la cual la política vale tanto cuanto sonante pueda sacarse de ella. Ni la una ni la otra de estas dos aristocracias ha producido grandes hombres, pero la primera, la de los apellidos vinosos, no llegó nunca a la impudicia de esta obra de los apellidos bancosos...una nación no es una tienda, ni un presupuesto...De la mera comunión de vientres no resulta una patria, resulta una piara. Socios no es lo mismo que ciudadanos. Al hablar de Italia decimos: la Italia de Dante, la Italia de Garibaldi, no la Italia de Castagneto, y es que el espíritu cuenta y cuenta sobre todas las cosas, pues sólo el espíritu eleva el nivel de una nación y de sus compatriotas...”*

*“Se dice la Francia de Voltaire, de Luis XIV, de Víctor Hugo, la Francia de Pasteur; nadie dice la patria de Citroën...Nadie dice la España de Pinillos, sino la España de Cervantes...En Chile necesitamos un alma, necesitamos un hombre en cuya garganta vengan a condensarse los clamores de tres millones y medio de hombres, en cuyo brazo vengan a condensarse las energías de todo un pueblo...y que este hombre sepa defendernos del extranjero y de nosotros mismos...”*

*“El país no tiene más confianza en los viejos, no queremos nada con ellos. Entre ellos, el que no se ha vendido, está esperando que lo compren...Todo lo grande que se ha hecho en América y sobre todo en Chile, lo han hecho los jóvenes. Así es que pueden reírse de la juventud. Bolívar actuó a los 29 años. Carrera, a los 22. O’Higgins a los 34, y Portales a los 36. Que se vayan los viejos y que venga la juventud limpia y fuerte, con los ojos iluminados de entusiasmo y esperanza.” (Huidobro, V. 1925; Góngora, M. 2003: 309).*

Otro miembro de la élite, Alberto Edwards, un político y escritor de cuño conservador, que en 1915 había fundado el Partido Nacionalista, escribió un famoso ensayo en 1928 titulado *“La Fronda Aristocrática en Chile”* en el cual señaló que:

*“...en el complejo problema político de la época, la clase media rebelde no veía sino la dominación de una oligarquía específicamente incapaz, desnacionalizada, sin moralidad ni patriotismo...la aristocracia política, por su parte, no pretendía disimular su desprecio por esos advenedizos, vencidos en las luchas de la vida económica y social, que intentaban suplantarla en la dirección del país. Esos hombres destituidos de experiencia y capacidad directiva, sin lastre histórico ni aptitudes hereditarias, en el concepto de sus émulos, solo conseguirían derribar el*

*majestuoso edificio de la República, levantado trabajosamente durante varias generaciones.” (Edwards, A. 1928: 234-235)*

Queda claro que el país no sólo expresaba una crisis política sino también de identidad y confianza en un contexto donde los intelectuales comienzan a rebelarse contra la influencia francesa, británica y norteamericana y mayoritariamente se vuelcan hacia Latinoamérica, a redescubrir y valorar sus propias raíces, a construir nuevos paradigmas. Algunos de ellos vieron que el problema central de la identidad latinoamericana era su olvido consciente de la matriz hispana que la generó. Es así que cobra fuerza a comienzos del siglo XX, especialmente entre los historiadores y ciertos políticos, un movimiento hispanoamericano que valoró el mestizaje, que se expresa con mayor claridad en los trabajos del uruguayo José Rodó, del venezolano Rufino Blanco Fombona y del mejicano José Vasconcelos, aunque algunos seguidores de esta corriente, como el peruano José de la Riva Agüero, eran críticos del mestizaje y de los movimientos indigenistas (Larraín, J. 1996:158-160). Otros, como el chileno Nicolás Palacios, fueron más lejos en su ideología nacionalista, planteando incluso la existencia de una raza chilena, producto del mestizaje entre los conquistadores “godos” venidos de España y el pueblo mapuche, los cuales formaron la chilenidad (Palacios, N. 1918).

Frente a tales cambios, la educación de las nuevas generaciones de la sociedad, fue por la mayoría considerada como un instrumento fundamental de socialización en los nuevos valores y necesidades que reclamaba el desarrollo del país, siendo la principal preocupación del Estado *que “...la educación debía obrar como un agente fundamental en el afianzamiento e integración de la nación....”* (Correa, S. et al 2001:40). Es así, que si en 1895 había 150.000 niños que atendía a las escuelas en Chile, este número sube a 500.000 en 1925, gracias a la aprobación en 1920 de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, la cual tuvo una discusión parlamentaria de casi 20 años, en atención a que se oponían los sectores más conservadores apoyados por la Iglesia Católica, quienes veían con recelo los programas educativos liberales que el Estado quería imponer (Correa, S. et al 2001: 21-41).

Este nuevo marco ideológico se estaba dando en toda América con énfasis diversos. El arquitecto argentino Ramón Gutiérrez destaca el Centenario de la Independencia en Argentina señalando que marca: *“...el reencuentro con la madre patria, madurado en muchos países por los cientos de miles de emigrantes españoles arribados a América desde la segunda mitad del siglo XIX”* (Gutiérrez, R. 1995:18). Este autor señala acertadamente que las primeras tres décadas del siglo XX son de profundos cambios sociales y políticos en América: revolución en México, ascenso de las capas medias que buscan compartir el poder político y mejores condiciones de vida, alta migración hacia las ciudades, invasiones de Estados Unidos a varios países americanos, surgimiento de movimientos

indigenistas, empoderamiento de los partidos populares y sindicatos, un mejor acceso a la educación, etc., todo lo cual genera un ambiente cultural y político diferente al de décadas anteriores.

Según Gutiérrez en este contexto se desarrollará en Argentina un movimiento arquitectónico neocolonial, cuyos principales expositores son Ángel Guido, Hugo Pellet Lastra, Héctor Greslebin y Carlos Ancell. La confrontación del siglo XIX entre Civilización o Barbarie, tan aludida sea por conservadores o liberales según fuera su interés, llegaba a su fin. Había que construir una nueva mirada hacia lo propio. Pero cada país tendrá al respecto su dinámica. De tal manera se inició un proceso de destacar lo nacional frente a una saturación de imágenes europeas o norteamericanas. Sin embargo esta crítica era sólo de una vanguardia, sostenida o no parcialmente por los sucesivos gobiernos, aunque la élite seguía en su mayoría siendo fiel a los modelos europeos, pero ya se nota en ella un desplazamiento hacia el progreso que anunciaba Estados Unidos frente a la declinación que experimentaba Europa.

En este contexto de nuevos enfoques en la arquitectura tuvo importancia la influencia del arquitecto argentino Martín Noel, tanto en su patria como en los países vecinos, con cuyos profesionales tuvo un permanente contacto. Si bien, como tantos otros arquitectos de la época, Noel estudió en París, aprovechó su estadía en Francia para recorrer España, país de donde venían sus ancestros, escribiendo el mismo al respecto tiempo después:

*“...consumado mis estudios de arquitecto en la Escuela de Paris...comencé a discernir, que era más bien en la tierra andaluza, donde se habían hermanado por singular y extravagante maridaje, los estilos venidos de la península, llegando a crear un arquetipo perfectamente definido y que era casualmente aquel el emigrado hasta nosotros.” (Gutiérrez, R. 1995:19)*



Martín Noel



Obra de Noel en Santiago



Obra de Noel en Potosí

Fotografías tomadas de Gutiérrez, R. et al (1995)



Martín Noel aspiraba a un renacimiento hispanoamericano, pero no lo entendía solo como la renovación de la vertiente española, sino también la propiamente americana y la indígena, para lo cual leyó a los arqueólogos e historiadores americanos de entonces y viajó al interior del continente para empaparse de la arquitectura rural y de las ruinas de las antiguas ciudades prehispánicas. Noel sustentaba que la tradición era la memoria colectiva del pueblo y la veía como fuente de inspiración y de creación, sin embargo no veía en ello la búsqueda de un nacionalismo argentino sino de una arquitectura regionalista continental. En este contexto los arquitectos de distintos países americanos plantearon una búsqueda de lo hispanoamericano, sin embargo otros se resistían a ello. La influencia del movimiento arquitectónico neocolonial fue más notoria en Argentina y Perú, más atenuada en Bolivia, Chile y Uruguay y poco significativa en Colombia y Venezuela. Brasil también tuvo su movimiento similar e incluso en California se creó lo que se llamó el estilo misional y el californiano.

Gutiérrez describe tres vertientes del movimiento neocolonial: (1) los neocoloniales hispanos donde lo peninsular era lo central; (2) el indigenista que tuvo fuerza en Perú, México y Bolivia; y (3) el neocolonial americano que busca una síntesis. Certeramente concluye este autor respecto de este movimiento en la arquitectura americana de la primera mitad del siglo XX:

*“...que no hay una única modernidad, la del racionalismo, sino varias contemporaneidades. El neocolonial no se siente ni pasatista ni historicista sino en la búsqueda de conformar una identidad para el futuro...el arte que rompe con el sentido de la tradición nacional y en nuestro caso continental, pierde su carácter y el dinamismo de su esencia creadora...Quizás el aporte más sustancial de la generación americanista que impulsó el neocolonial fue el de la revalorización del patrimonio arquitectónico y artístico del continente...el neocolonialismo americano dejó, más allá de sus aciertos y errores, su mejores aportes a la conformación de una conciencia de los valores de la cultura americana. Entendieron, pioneramente, que un hombre culto no era, como se pensaba hasta entonces, el que conocía de muchas otras culturas, sino el que entendía profundamente su propia cultura. Noel contribuyó paradigmáticamente a ello.” (Gutiérrez, R. 1995:31-39)*

Sin embargo, no debemos ver este movimiento como originado exclusivamente en América, sino más bien como parte de una reflexión y búsqueda más amplia por lo propio y en contradicción con los modelos impuestos por otros, que seguramente estaba teniendo lugar en distintas regiones del mundo y se estaba gestando desde el siglo XIX. Tal como indica el arquitecto e historiador Javier Rodríguez Barberán para el caso de España, el dominio de la arquitectura neoclásica en las primeras décadas del siglo XIX es casi total pero pierde fuerza posteriormente, existiendo diferencias de énfasis en los reinados de Fernando VII e Isabel II, penetrando en

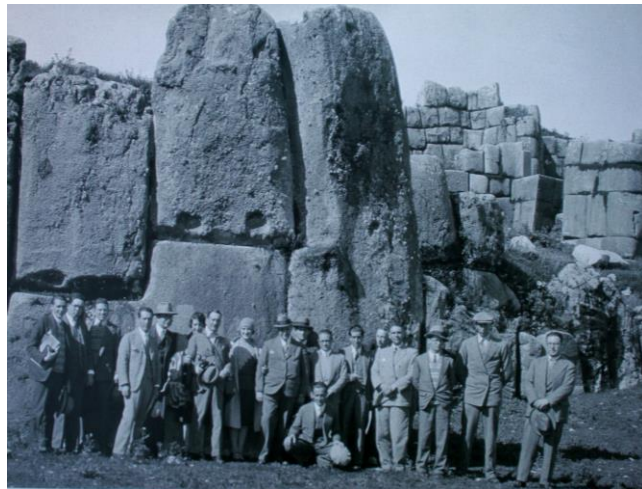
este último período el romanticismo, dando cuenta de un movimiento que tiene lugar en toda Europa que busca construir obras que reflejen la identidad o identidades de cada país, citando por ejemplo a José Amador de los Ríos, quien propone al mudéjar como el modelo representativo del alma española. Se inicia un período en que se restauran, reconstruyen, se incorporan adiciones o se reinventan obras, donde se experimenta el eclecticismo y el historicismo, cuyos ejemplos vemos en las catedrales de León, Barcelona y Sevilla, pero también ocurre en los monasterios y otros edificios emblemáticos españoles, concluyendo que: *“Es indudable que una de las preocupaciones esenciales de la arquitectura europea decimonónica es la búsqueda de un estilo nacional”* (Rodríguez, J. 1995:101-109).

En Chile esta tendencia tuvo eco en algunos arquitectos como Alfredo Benavides y Roberto Dávila quienes se volcaron a estudiar la arquitectura colonial y conocer la arquitectura vernácula, realizando, especialmente Benavides, varias obras eruditas sobre la arquitectura virreinal, emprendiendo numerosos viajes a las provincias y a las regiones andinas de Perú y Bolivia. Dávila, continuó sus estudios en Europa, donde se familiarizó con la arquitectura moderna, planteando además en sus escritos:

*“...una búsqueda constante, amplia, valiente, de una arquitectura actual... que no sólo tome en cuenta los factores económicos y sociales, sino también la Idiosincrasia de cada país o región, su raza, sus materiales, su clima, su pasado. Sólo así se logrará algún día obtener un Arquitectura propiamente chilena y moderna.”* (Dávila, R. 1991:3)



Alfredo Benavides R.



A. Benavides con profesores y alumnos en el Cusco

Fotografías publicadas en la Revista de Arquitectura 2. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Septiembre 1991, pp. 2-5. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Ambos arquitectos fueron profesores de arquitectura en Chile, dejando una profunda huella en sus estudiantes al transmitir el aprecio por el patrimonio arquitectónico, siendo pioneros en tales temas. No sabemos si Roberto Dávila conoció personalmente a Martín Noel, pero si tenemos certeza que el arquitecto trasandino fue amigo de Alfredo Benavides<sup>44</sup>, quienes se conocieron en los viajes del primero a Santiago, realizando Noel varios proyectos en esta ciudad. Sobre este tema es necesario tener presente también los estudios realizados por el arquitecto Claudio Ferrari (1994). En este contexto de búsqueda por lo propio, pero también de expresar nuevos referentes, encontramos la obra del arquitecto Juan Martínez, quien gana el concurso para diseñar el pabellón de Chile en la Feria Iberoamericana de Sevilla de 1929.

No obstante, el estilo neocolonial no fue el único que se desarrolló a partir de los años 20, siendo crecientemente influyentes las corrientes que se inspiraban en el modernismo en sus distintas expresiones, llegando en los próximos años tales modas de manera simultánea como veremos más adelante. En esos mismos años, se abre paso el Art Nouveau, con obras realizadas por el arquitecto chileno Luciano Kulczewsky, o el Art Decó americano, con proyectos como los realizados por el arquitecto Ricardo González Cortés quien usa decoraciones mapuches para darle el sentido nacional a su arquitectura (Eliash, H. y Moreno, M. 1996:46).

En 1920, después de una agitada y disputada elección, es elegido Presidente de Chile Arturo Alessandri Palma, quien lideró una coalición de los partidos liberal, radical y democrático, derrotando al candidato Luis Barros Borgoño, que representaba a la alianza conservadora, que tenía mayoría en el Congreso. Los primeros eran numerosos en las ciudades, en los centros industriales, entre la juventud intelectual, la clase media y en los obreros organizados. Alessandri logró movilizar estas fuerzas contra sus adversarios que representaban la oligarquía y el viejo orden, junto con sectores rurales tradicionalistas, donde los campesinos e inquilinos, que podían votar, lo hacían generalmente por el hacendado local de mayor poder.

Alessandri comprendió la crisis del país y propuso un programa con innovaciones sociales y políticas (legislación social, fortalecer el poder del ejecutivo, código del trabajo, impuesto a la renta, etc.) que logró atraer a mucha gente molesta con el sistema parlamentario y por la administración del poder que tenía la elite terrateniente, minera y financiera. Todas estas reformas eran consideradas por la oligarquía, que había gobernado el país sin contrapeso desde el siglo XIX, como una amenaza al orden tradicional. Los detractores de Alessandri lo acusaron de incitar a la lucha de clases, debiéndose contextualizar este momento en la situación internacional, con la reciente Revolución Rusa y otros movimientos similares en el mundo. Las elecciones se realizaron el 25 de junio de 1920 en un

---

<sup>44</sup> Comunicación personal del arquitecto Juan Benavides Courtois, hijo de Alfredo Benavides.

ambiente de convulsión ciudadana. Ninguno de los candidatos tuvo mayoría absoluta y el Congreso debió dirimir. Si bien el Congreso estaba dominado por los conservadores, la oficialidad del Ejército era mayoritariamente alessandrista o estaba por los cambios. Finalmente el Congreso acordó declarar como ganador a Arturo Alessandri Palma (Maltés, J. y Gorti, L. 2003).

De acuerdo al sistema político de la época, el Presidente debía escoger a sus ministros entre la mayoría parlamentaria. Al tener solo una mayoría relativa entre los diputados y una férrea oposición entre los senadores, su gobierno tuvo una gran rotativa de ministros. Esta situación impidió que el mandatario llevara adelante todas sus reformas que debían ser votadas en el Congreso. La situación económica también era delicada con la crisis del salitre que aumentó la cesantía.

Los conservadores buscaron entonces derrocar al gobierno, alentando a algunos jefes militares, pero estos también estaban molestos con la situación política y económica. Entonces, la oficialidad joven, que provenía fundamentalmente de los estratos medios de la sociedad, realizó un pronunciamiento militar el 5 de septiembre de 1924, cuyo movimiento logró que el Congreso aprobara una serie de proyectos de ley, entre ellos el de los sueldos de los militares y los de la agenda social propuestos por el Gobierno. Alessandri creyó que los militares volverían a sus cuarteles, pero estos solicitaron la disolución del Congreso, ante lo cual el Presidente se refugió en la embajada de Estados Unidos y renunció a la presidencia, la cual le fue rechazada por el Congreso, dándole éste un permiso para abandonar el país por seis meses. Los militares entonces formaron una Junta de Gobierno que tomó el control del país el 11 de septiembre de 1924, disolviendo el Congreso.

El 23 de enero de 1925 hay un nuevo pronunciamiento militar que derroca a la anterior Junta de Gobierno y que llama a elecciones parlamentarias para el 10 de mayo de 1925, solicitándose que el Presidente Alessandri volviera al país, quien terminaría su mandato el 23 de diciembre de 1925. La nueva Junta de Gobierno fue presidida por un civil, el político Emilio Bello Codesido, quien gobernó dos meses mediante decretos-leyes, hasta la llegada de Alessandri a Chile el 20 de marzo de 1925. Con el apoyo popular y de las fuerzas armadas, Alessandri se dedicó a diseñar una nueva Constitución Política del Estado, la cual fue aprobada por un plebiscito nacional en agosto de 1925. Esta Constitución restableció en Chile un régimen presidencial concluyendo así con el régimen parlamentario y estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, la elección del presidente de manera directa, la creación de un tribunal calificador de elecciones, entre otras medidas que fortalecieron al poder ejecutivo frente al que antes tenía el Congreso.

No obstante, la agitación política se mantenía debido a las próximas elecciones, siendo uno de los candidatos el coronel Carlos Ibáñez del Campo, a la sazón Ministro de Guerra, quien se negó a renunciar, debido a lo cual Alessandri

renunció a la Presidencia, nombrando como Ministro del Interior a Luis Barros Borgoño, quien asumió como vicepresidente de Chile el 1 de octubre de 1925 y estuvo en el poder hasta que finalizó el mandato constitucional del anterior Presidente, en diciembre del mismo año. Previamente se realizaron las elecciones presidenciales el 24 de octubre de 1925, siendo elegido Presidente Emiliano Figueroa Larraín, quien representó a las fuerzas políticas unidas de los conservadores, liberales, demócratas y radicales, en contra del candidato de los militares y las fuerzas populares, el médico militar José Santos Salas.

El Presidente Emiliano Figueroa solo pudo mantenerse en el poder hasta 1927, pero bajo la tutela militar, debiendo mantener como Ministro de Guerra al Coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien asumió el cargo de Ministro del Interior en 1927, siendo éste quien realmente gobernaba el país, lo que llevó a Figueroa a renunciar a la presidencia, asumiendo Ibáñez la vicepresidencia del país. Ibáñez convocó a elecciones sin competidor, siendo elegido presidente y ejerciendo el mando de la nación hasta el 27 de julio de 1931, cuando renuncia debido a la crisis política y económica en la cual el país seguía sumido.

Con el Congreso controlado y sin oposición, Ibáñez logró impulsar una serie de reformas sociales, económicas, educacionales y la reorganización de las instituciones del Estado, muchas de las cuales estaban planteadas desde hace años pero eran rechazadas o no tramitadas por el Congreso, siendo una de ellas la que creaba el Consejo de Monumentos Nacionales, cuya primera iniciativa se había planteado en 1910 y que veremos en detalle en el siguiente capítulo. Tanto Alessandri como Ibáñez fueron caudillos políticos, uno civil, el otro militar, los cuales tuvieron amplio respaldo popular, aunque no de toda la clase política tradicional, salvo aquellos que vieron en ellos la autoridad y el orden que requería el país para salir de la crisis.

Durante 1931 y 1932 hubo varios gobiernos y pronunciamientos militares hasta que se llamó a elecciones, siendo elegido nuevamente como presidente de Chile Alessandri (1932-1938), y también después Ibáñez (1952-1958), existiendo en el país una normalidad democrática en los gobiernos que sucedieron a Alessandri: Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Juan Antonio Ríos (1942-1946), Gabriel González Videla (1946-1952), Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973), cuando en 1973 las fuerzas armadas dan un golpe de Estado iniciando una dictadura militar encabezada por el General Augusto Pinochet hasta 1990 (Vial, G. 1981; De Ramón, A. 2003; Frías Valenzuela, F. 2006; Góngora, M. 2003).

La década de los años 30 y 40 es compleja en el escenario internacional y Chile no es ajeno a las influencias e ideologías políticas que promovían el socialismo y el fascismo. Alessandri controló con violencia, quizás innecesaria, situaciones de

conflicto en ambos sentidos, como la rebelión campesina de Ranquil en el sur de Chile y la de estudiantes universitarios nacional-socialistas en la Matanza del Seguro Obrero en Santiago. No obstante ello, logró levantar al país de la crisis económica que arrastraba desde la década de los años 20, generando una transición del modelo económico tradicional de Chile de exportador de materias primas, por un modelo de desarrollo productivo nacional hacia dentro, buscando reemplazar ciertas importaciones y ampliando la base industrial del país. El regreso de grandes grupos de obreros del salitre desde el norte, como también el aumento constante de la migración del campo a los centros urbanos implicó un aumento de la población en las ciudades, lo que a su vez creó nuevos problemas de vivienda, salubridad y trabajo.

A finales del años 30 las aspiraciones de cambios más profundos se hicieron presentes creándose un Frente Popular que llevó al poder al Presidente Pedro Aguirre Cerda del Partido Radical en una coalición con socialistas, comunistas y movimientos obreros. En su gobierno se impulsa fuertemente la educación pública y la industrialización del país, creándose la Corporación de Fomento Productivo, la cual por décadas tendría un rol decisivo en la industria del acero, del petróleo, de la minería, etc. Sin embargo en 1939 la ciudad de Chillán y localidades aledañas sufrieron un terremoto devastador que dejó miles de muertos destruyendo casas, edificios públicos y toda la infraestructura productiva de la zona, situación a la cual el gobierno debió derivar todos sus recursos. Ese mismo año también llegaron a Chile poco más de 2.000 refugiados de la Guerra Civil Española en una operación dirigida por Pablo Neruda desde Francia, los que fueron muy bien recibidos por la población y el Gobierno de Chile.

El Presidente Pedro Aguirre Cerda fallece antes de concluir su mandato y es elegido como nuevo mandatario Juan Antonio Ríos, otro militante del Partido Radical, quien continuó el proceso de industrialización que el país había iniciado, fortaleciendo aún más a la CORFO. Sin embargo, su gobierno debió enfrentar la crisis internacional ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. Si bien se trató de mantener una neutralidad en el conflicto, la presión de Estados Unidos obligó primero a romper relaciones diplomáticas con Alemania e Italia y después declarar la guerra a Japón. Ríos tampoco logra concluir su mandato presidencial falleciendo debido a una enfermedad. Realizadas las elecciones presidenciales asume como nuevo mandatario Gabriel González Videla en 1945, también del Partido Radical, quien fue apoyado por una alianza de partidos que incluía al Partido Comunista. Sin embargo, las consecuencias de la Guerra Fría se hicieron notar en la política interna presionada por Estados Unidos, alejándose González Videla de sus aliados comunistas y dictando el Congreso una ley en 1948 que proscribía al Partido Comunista de la vida pública, persiguiendo y encarcelando a sus militantes, debiendo huir el propio Pablo Neruda, que era senador, hacia el extranjero. No obstante este acto en contra de la democracia y la participación ciudadana, en 1949 se dicta otra ley que otorga derecho de voto a las mujeres



para las elecciones parlamentarias y presidenciales, duplicándose así el padrón electoral nacional.

La composición de la sociedad chilena experimenta algunos cambios acelerados en estas décadas existiendo un mejor acceso a puestos de poder de las clases medias gracias a su mejor educación, expansión del Estado y los movimientos sociales y políticos que fueron su correlato. Sin embargo las elites tradicionales, después de su debacle en los años 20 y comienzos de los 30 se adaptaron a los cambios comprendiendo que su accionar y mantención de sus privilegios debía incorporar nuevas estrategias, en las cuales de manera consciente o inconsciente, estuvo la inclusión de algunos de los líderes sociales o políticos en su grupo social, sea por alianzas matrimoniales o por su participación en los nuevos negocios empresariales que surgían. Estrategia que se venía repitiendo desde el siglo XIX con los extranjeros exitosos en Chile, siendo la propia familia Alessandri un ejemplo de ello. Sin embargo, al respecto señala la historiadora Sofía Correa y otros autores que:

*“...en lo tocante a las alianzas matrimoniales, conviene precisar que la antigua clase dirigente demostró ser más cauta y cerrada, si tomamos en comparación lo observado en el mundo de los negocios.” (Correa, S. et al 2001:159)*

No obstante ello, la oligarquía tradicional se renovaba bajo nuevas formas, pero seguía manteniendo su espíritu original de elite destinada a guiar el país. El historiador conservador Tomás Thayer Ojeda (1927), en plena crisis de la segunda mitad de los años 20 escribía en una revista de amplia circulación nacional:

*“...La oligarquía, en su verdadera acepción, ha existido felizmente en Chile, su acción ha sido benéfica y la hubo porque debe existir siempre en un país bien organizado: sólo unos pocos concibieron y realizaron la idea de la Independencia y en nuestra vida nacional los grandes acontecimientos políticos se han desarrollado en torno de un pequeño núcleo de personalidades que los han impulsado...sólo con el gobierno de esos pocos es dable alcanzar mayor eficiencia y acierto.”*

*“...Con frecuencia se habla de la oligarquía para significar el predominio de ciertas familias en nuestra vida nacional, como uno de los males legados por la aristocracia colonial, doble error que conviene salvar: ni eso es oligarquía, ni es tal el origen de la preeminencia de esas familias...lo que ha triunfado y prevalecido es el verdadero mérito de los miembros de esas familias: el dinero y las vinculaciones sociales les habrán allanado a unos el camino, pero otros han surgido y ganado prestigio por el talento y el esfuerzo personal...por sus virtudes, por su saber,...es lógico que ...hayan*

*influido más en el gobierno de la República por su mérito propio, sin huellas de nepotismo...”*<sup>45</sup>

Unida a la corriente modernizadora, seguía manteniéndose en la identidad cultural más profunda de la élite, ese atributo que muy bien llamó María Rosario Stabili (2003) como el “sentimiento aristocrático”, que la caracteriza incluso hasta la actualidad, aunque reinventada y adaptada a la nuevas posibilidades que la realidad política y social exigía. Esta elite nacional, principalmente localizada en Santiago, se ha debatido siempre entre la libertad y el orden, privilegiando siempre el orden y la autoridad, existiendo periódicamente conflictos al interior de ella entre los grupos liberales y modernizadores en oposición con los grupos más conservadores y tradicionalistas.

Sin embargo, la elite nacional se reconocía entonces y hasta la actualidad, por ser un grupo autorreferente identificado por ciertos apellidos, originalmente vinculados al dominio de latifundios, la administración del poder político y posteriormente por el control de la banca y las grandes empresas, además de poseer un orgullo de origen y un sentimiento de jerarquía superior frente al resto de la población. La riqueza ha sido importante, pero no suficiente para ser parte y beneficiario de sus privilegios dentro de la elite, siendo el prestigio de los apellidos tanto o más relevante para garantizar el acceso a ellos.

En tal ámbito es previsible la tendencia a la endogamia, residiendo en las mujeres del grupo una importante función social de socialización y de incorporación de los nuevos miembros, que por sus méritos o fortuna, querían o debían ser miembros de la elite para mantener o acrecentar su poder. El rol de la mujer ha sido también estudiado por Stabili, señalando su mayor importancia en la estructura social chilena en relación a otras realidades históricas de América Latina, siendo argumentada esta situación por diversos autores en atención al proceso formativo en la Conquista y en la Colonia, donde las mujeres eran quienes dirigían las propiedades y la familia debido a la larga ausencia de los hombres que cumplían funciones militares en la frontera por largos períodos. Esta mayor relevancia de la mujer también ha sido destacada por cronistas y viajeros de tales épocas (Stabili, M. 2003:245-253). Por otro lado las investigadoras X. Valdés, L. Rebolledo y A. Willson (1995) se introducen en las relaciones de género que tienen lugar en la hacienda chilena durante el siglo XX, donde analizan estos procesos.

El desgaste de la élite orientada hacia modelos europeos, particularmente el francés, como también la búsqueda de modelos más propios de América, permite

---

<sup>45</sup> Aparecido en la Revista ZIG-Zag del 2 de julio de 1927, p. 61. Citado con mayor extensión por Stabili, María Rosario (2003:94-95). Es curioso que el historiador Tomás Thayer desconozca el nepotismo existente en toda la historia de Chile hasta entonces, donde los apellidos de ciertas familias se repiten en el acceso al poder político y el parentesco era ampliamente conocido (Jocelyn-Holt, A. 1997:59; 2009:97).

que en Chile se desarrolló una corriente hispanista en las décadas de los años 30 y 40, que según J. Larraín adopta dos formas, una histórica, cuya mejor expresión es el historiador Jaime Eyzaguirre, y otra filosófica, cuyo mejor exponente es el filósofo y sacerdote Osvaldo Lira, siendo los intelectuales que adscribieron a esta corriente muy influenciados por el español Ramiro de Maetzu, uno de los exponentes de la Generación del 98, que había escrito el libro “Defensa de la Hispanidad” en 1934.

Sin embargo, casi dos décadas antes, Leopoldo Torres Balbás generaba otra corriente o interpretación que, en relación a la arquitectura, no aceptaba la existencia de un estilo español, escribiendo en 1918:

*“¿Refiérense al estilo mudéjar, al arte del renacimiento, a la arquitectura herreriana, al barroquismo? Únicamente la audaz ignorancia puede emplear ese término, creyendo tal vez que en transcurso de nuestra historia no ha existido más que una sola evolución artística y que esta ha sido uniforme en todas las comarcas españolas..La ignorancia también impedía ver a algunos casticistas que casi todos los movimientos desarrollados en la historia arquitectónica de España, lo fueron en virtud de influencias exteriores...condicionadas luego por un fuerte acento con el que se las va asimilando...Propaguemos este sano casticismo abierto a todas las influencias, estudiemos la arquitectura de nuestro país, recorriendo sus ciudades, pueblos y campos, analizando, midiendo, dibujando los viejos edificios de todos los tiempos, no solo los monumentales y más ricos, sino también, y tal vez con preferencia, los modestísimos que constituyen esa arquitectura cotidiana, popular y anónima, en cuyas formas se va perpetuando una secular tradición, y en la que podemos percibir mejor el espíritu constructivo de nuestra raza...Todo edificio forma un conjunto inseparable con la atmósfera que le rodea en el tiempo y en el espacio: luz, construcciones inmediatas, historia, perspectiva, juicios que ha merecido, etc....no cultivemos un arte de recuerdos, frío, sin alma, tratando de dar vida a un pasado irremediabilmente muerto en nombre de un falso casticismo. Seamos de nuestro tiempo; no cerremos el espíritu a ninguna manifestación del arte, por exótica que sea; tal vez pueda fecundar de nuevo, a pesar de su exotismo, la tradición...tratemos de expresar la vida plena y totalmente, la vida formada por los sedimentos del pasado y las nuevas aportaciones de un presente en constante transformación.” (Torres Balbás, L. 1996:19-21)*

No sabemos si los escritos y trabajos de Torres Balbás fueron conocidos en Chile por los arquitectos Roberto Dávila y Alfredo Benavides y sus seguidores, pero seguramente influyeron en Noel y otros arquitectos, enriqueciendo una nueva mirada del patrimonio y las restauraciones que se estaban iniciando y, por cierto,

en las obras nuevas inspiradas en el neocolonial o estilo virreinal que estaba ganando terreno en Latinoamérica e incluso en California.

En el ámbito historiográfico de los años 30 y 40 del siglo XX, el revisionismo de la historia nacional escrita en el siglo XIX avanzaba de la mano de varios intelectuales, que se inclinaban en sus escritos entre el hispanismo, el indigenismo, el mestizaje, siendo el tema de la identidad de creciente importancia. Para el historiador nacionalista chileno Jaime Eyzaguirre el sentido profundo de la identidad de Latinoamérica radicaba en su raíz hispánica:

*“...lo español no es sólo un elemento más en el conglomerado étnico. Es el factor decisivo, el único que supo atarlos a todos...Por eso lo que se haga por echar en olvido el nombre español en estas tierras y querer oponer a él una revalorización hiperbólica de lo indígena irá en derechura a atentar contra el nervio vital que ata a nuestros pueblos.” (Iribarren, J. 1996:58)*

Eyzaguirre planteaba que lo dramático para la identidad chilena y latinoamericana era el rechazo del alma colectiva antigua y fundacional, siendo la búsqueda afanosa de lo exótico, de la imitación de los modelos sociales foráneos la causa de muchos de sus males. No obstante era optimista del futuro destacando como signo positivo de ello la revalorización del patrimonio cultural (Eyzaguirre, J. 1947,1957).

En cambio el sacerdote chileno Osvaldo Lira proponía una posición más filosófica y consideraba que las naciones hispanoamericanas compartían una unidad cultural con España. Planteaba que cada nación tenía una sustancia propia que explicaba su unidad. Reconocía el mestizaje pero la unidad estaba dada por la cultura hispánica minimizando el aporte indígena, el cual no tuvo fuerza y fue pasivo (Lira, O. 1952, 1985).

La corriente hispanista se oponía a la indigenista que ganaba adeptos en diversos países latinoamericanos, continuando y abriendo una vez más la búsqueda permanente de la identidad de cada país que nos persigue hasta la actualidad. Para los indigenistas la respuesta estaba en las tradiciones indígenas eclipsadas y negadas; para los hispanistas estaba en los valores hispanos olvidados desde la Independencia. Ambas posiciones esencialistas proponían buscar en el pasado la raíz perdida. En cambio, para otros intelectuales, la verdadera búsqueda estaba en el mestizaje latinoamericano. Para Larraín tales corrientes de pensamiento nunca han sido dominantes pero siguen siendo tan importantes hoy como ayer y todas ellas, junto a otras, fundamentales en la conformación de la nacionalidad chilena y su proyección nacionalista (Larraín, J. 1996:159-162). Tal como escribe B. Subercaseaux:

*“El nacionalismo cultural opera, a nivel de imaginario, como una rearticulación que busca integrar en la imagen o autoconciencia del país a los nuevos sectores sociales que emergen en el período. Cumple por lo tanto una función de argamasa para una sociedad en crisis y en proceso de transformación. A su vez, la vanguardia, ante la modernización y los cambios, se sitúa en una postura que impugna la tradición y propugna una estética y una espiritualidad nueva, acorde con el ritmo de los tiempos. Vale decir, tanto el nacionalismo como fuerza cultural dominante, como la vanguardia que levanta una bandera que se le opone, tienen una articulación oblicua con el proceso de modernización y con las transformaciones de la sociedad en el período. Articulación oblicua que se expresa en oposición y conflictos, pero también en cruces y coincidencias, todo lo cual pone de relieve la complejidad de la cultura como campo de disputa”. (Subercaseaux, B: 2007:14)*

La sociedad chilena también experimentaba cambios en su composición tanto por su concentración creciente en las ciudades debido a la migración rural, como por una pequeña pero constante inmigración extranjera. Respecto de lo primero Santiago en 1940 ya tenía 952.075 habitantes, cifra que aumenta a 1.907.378 en 1960, extendiéndose la ciudad de 6.500 ha en 1930 a 20.900 ha en 1960. En relación a lo segundo, el Estado no tuvo una política de inmigración en el siglo XX al estilo de la implementada en Argentina o Brasil salvo iniciativas muy puntuales, siendo más bien este proceso gradual y motivado por los acontecimientos europeos derivados de las guerras europeas y del rebalse de la migración hacia Argentina. En este contexto la mayor parte de los inmigrantes eran españoles, que eran aproximadamente el 33% de los extranjeros, seguidos de los italianos, pero también llegaron importantes grupos de croatas, sirios, libaneses y palestinos de religión cristiana. Todos ellos se incorporaron crecientemente a los estratos medios urbanos, pero algunos hicieron fortuna, sea por los negocios o por sus profesiones y sus descendientes se incluyeron a la clase alta (Correa, S. et al 2001:165).

En este marco político y cultural tiene lugar uno de los planes urbanísticos y arquitectónicos más ambicioso de mediados del siglo XX, el cual tuvo lugar en la ciudad de La Serena y que impulso el entonces Presidente de la República Gabriel González Videla. Esta iniciativa gubernamental era parte del *“Plan de Fomento y Urbanización para las Provincias de Chile”* y cuyo plan piloto se llevó a cabo en la ciudad de La Serena, entre 1948 y 1952, de la cual el presidente era originario. El denominado *“Plan Serena”* no solo involucraba a la ciudad sino también a toda la provincia con proyectos de agricultura, minería, turismo, educación, colonización, infraestructura, energía y servicios, siendo el Estado su principal promotor y financista. En el ámbito arquitectónico tuvo un sello que en la época denominaron como “renacimiento colonial” que con los años ha sido conocido en la literatura especializada chilena como estilo “serenense” o “clásico serenense”. El plan

general consideraba una planificación territorial y urbana, donde la arquitectura era un aspecto clave para otorgar una unidad a las nuevas intervenciones que buscaban reinterpretar la arquitectura colonial y republicana de la ciudad, pero de manera monumental (Torrent, H. 2004:93-99).

Dentro del Plan Serena se contemplaba construir de nuevo los edificios de la Intendencia, la Compañía de Teléfonos de Chile, la Estación de Ferrocarriles, la Caja de Crédito Prendario, la Jefatura Zonal del Servicio Nacional de Salud, la Empresa Nacional de Minería, la Dirección de Vialidad y la Secretaría Regional Ministerial de Educación. También se reconstruirían centros educacionales como el Liceo de Niñas Gabriela Mistral, el Liceo de Hombres Gregorio Cordovez, la Escuela Agrícola, la Escuela Técnica Femenina, y la sede regional de la Universidad Técnica del Estado, la actual Universidad de La Serena. El plan incluía nuevas plazas y parques como el Parque Gabriel Coll Dalmau, el Parque Pedro de Valdivia y el Museo al Aire Libre ubicado en la Avenida Francisco de Aguirre, incorporando este último réplicas de esculturas griegas clásicas adquiridas en Italia y esculturas originales de artistas chilenos como Virginio Arias, Raúl de Vargas, Lily Garafulic, entre otros.

Para poder ejecutar tal proyecto dentro de su período presidencial el propio Gabriel González Videla se puso a la cabeza de todo el equipo de autoridades y profesionales, entre los cuales estaban el Director Nacional de Obras Públicas Oscar Tenham, el arquitecto urbanista Guillermo Ulriksen, el arquitecto paisajista Oscar Prager, entre otros profesionales arquitectos e ingenieros. Incluso el gobierno español apoyó la iniciativa enviando a Chile al arquitecto José Manuel González Valcárcel. El plan no estuvo exento de dificultades y ciertas oposiciones de los vecinos cuyas propiedades fueron expropiadas para dar paso a las nuevas construcciones pero el Presidente logró imponer su parecer.

Gabriel González Videla, escribió en sus memorias un largo y detallado capítulo especial sobre el Plan Serena, en el cual detalla sus motivaciones originales, en las cuales se articulan tanto su experiencia en Europa como embajador en Francia, como el amor por su tierra natal:

“Amo a París, porque fue la Maestra que me enseñara, en medio de los días aciagos de la guerra, a comprender la belleza y el encanto de sus perspectivas, la sobria elegancia y líneas simétricas de sus clásicos y señoriales edificios, sus maravillosos parques y jardines que disfrutaban los monumentos evocadores de la gloriosa historia de Francia.”

“París me enseñó que el urbanismo, más que una nueva ciencia, era un Arte, que había nacido para redimir a la ciudad y sus contornos de la miserable, insalubre e inhóspita aglomeración humana en los suburbios, y era el antídoto a la fealdad y ofensa a la estética, al confort y ordenamiento



de las aldeas, villas, pueblos y metrópolis...y asesorado por el prestigioso urbanista, mi recordado amigo Manuel Marchant, hizo germinar en mi mente que un día podría poner en práctica en mi Patria tan instructiva como promisorio enseñanza...”

“Soy serenense. Aquí he aprendido a querer una plaza y una calle: son de aquí los primeros árboles que me dieron cariño, la primera casa ocre que me sirvió de referencia. Fue aquí donde encontré, por primera vez, el sabor amable de un rincón y una esquina.”

“Por eso al dar a La Serena el estilo arquitectónico de una raza que es la nuestra, no sólo se rendía homenaje a la Madre Patria, sino que se daba a aquélla una personalidad, un colorido y una belleza plástica que ninguna otra ciudad de Chile puede exhibir.” (González Videla, G. 1975: 1133-1148)



Presidente González Videla visitando las nuevas construcciones de La Serena, 1952. Fotografías que aparecen en González Videla, G. (1975)

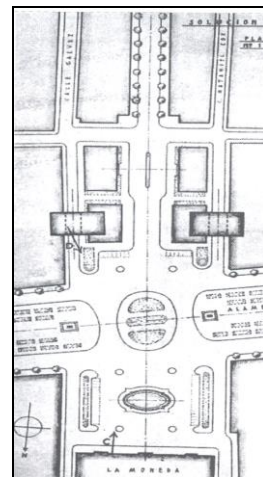
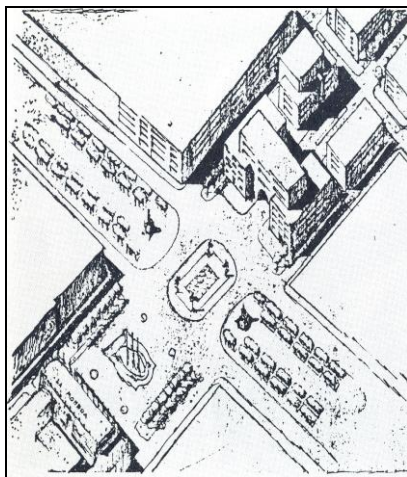
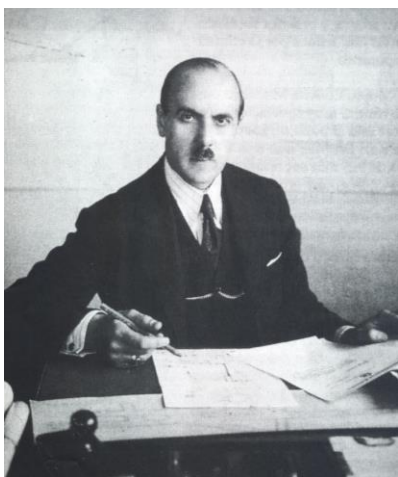
Actualmente la ciudad de La Serena posee cierta unidad arquitectónica propia, lo que la caracteriza frente a las demás ciudades del país. El centro histórico, que incorpora muchas de las construcciones realizadas en dicha época, está protegido por la ley de monumentos nacionales, contando además con numerosos monumentos históricos. Sin embargo sufre la presión inmobiliaria y de intervenciones poco felices que han atentado su homogeneidad. A pesar de que la población local se ha identificado mayoritariamente con su arquitectura, la cual es ya parte de su identidad, algunos arquitectos de ayer y contemporáneos expresan su incomodidad de tener que adecuar sus proyectos al estilo local y no poder expresar su creatividad con nuevas formas, proporciones y materialidades.

En la década de los 30 y 40, e incluso un poco antes, se estaba abriendo paso el modernismo en la arquitectura, la cual una vez más venía de la mano con arquitectos chilenos inspirados en sus viajes por Europa y Estados Unidos, como también de aquellos formados en las escuelas de arquitectura de las universidades de Chile y Católica. El arquitecto Sergio Larraín García Moreno escribía en 1937:

*“A un período de injerto, de decoración arqueológica en la antigua casa chilena, operado por aficionados, sucedió la época en que vivimos y que podemos llamarla de los arquitectos. Ya no es la ornamentación lo que se importa de Europa o USA, es el plano, es la estructura, es el material, es la voluntad artística. El edificio guarda unidad con sí mismo; su plano y estructura corresponden a su aspecto, pero no guarda relación con nuestro suelo, ni clima, ni carácter, sólo le interesa estar de acuerdo con lo último que se hace de revolucionario o reaccionario en Europa o USA...Somos repetidores; si nuestros antepasados imitaban los estucos, nosotros lo imitamos todo. Solo tenemos más ciencia que ellos y eso nos hace más responsables.” (Eliash, H. 1996:44)*

Previamente habían llegado también las influencias del urbanismo moderno que se estaban expresando en los nuevos planes de renovación urbana de Santiago, especialmente del Barrio Cívico, donde se quería concentrar los principales edificios públicos del gobierno central, para lo cual se había contratado al urbanista austriaco Karl Brunner a finales de los años 20, quien inició los primeros cursos sobre urbanismo en la Universidad de Chile, en un contexto de reforma de la enseñanza de la arquitectura que buscaba adecuarse a los nuevos paradigmas.

El modernismo llegó primero a Santiago asociado a los nuevos materiales, principalmente el acero y el hormigón, pero las nuevas expresiones arquitectónicas sólo se abren paso especialmente a partir de los años 40, salvo algunas obras pioneras previas, período en que todavía las clases más acomodadas preferían los estilos tradicionales y muchos arquitectos eran vacilantes. Por ejemplo H. Eliash nos explica este momento de transición relatando que el arquitecto Roberto Dávila se presentó al concurso del edificio del Cap Ducal de Viña del Mar en 1936 con cinco propuestas que iban desde el estilo Tudor al estilo español, pasando al estilo “Buque” o “Stream Line”, que resultó ganador (Eliash, H. 1996:46).



Urbanista austriaco Karl Brunner y sus propuestas para el Barrio Cívico de Santiago. Imágenes del archivo de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerios de Obras Públicas.

En este período de transición que abarca varias décadas coexisten diversos estilos como el Art Nouveau, Art Decó, neocolonial y el neoclásico. La transición hacia la arquitectura moderna se manifiesta en un cierto racionalismo que elimina o simplifica la ornamentación pero mantiene lo clásico, siendo las “casas buque” un ejemplo de esa búsqueda alternativa, cuya expresión más coherente llegó con la influencia de los proyectos de Le Corbusier y la Bauhaus. Un ejemplo más de este proceso de indefinición, se nota en los trabajos de los arquitectos Eduardo Costabal y Andrés Garafulic quienes elaboraron proyectos de diversos estilos junto con obras modernas racionalistas (Eliash, H. 1996:46-49).



Barrio Cívico de Santiago en la década de 1930 antes de que se ejecutara la remodelación. Fotografía del archivo de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas

Eliash (1996) como también Aguirre (2011), señalan que tanto los terremotos de Valparaíso de 1906, Talca de 1928 y de Chillán de 1939, fueron estímulos para el desarrollo de la arquitectura moderna en Chile. Potenciaron también este proceso de cambio los congresos internacionales de Arquitectura que se estaban realizando en distintas ciudades de América, los congresos panamericanos, la edición de las primeras revistas de arquitectura y el trabajo pionero de diversos arquitectos formados en Europa, Estados Unidos o que viajaron a esos lugares.

Sin embargo, todo ello era parte de un proceso más profundo de transformación económico, social y cultural, que estaba ocurriendo a nivel mundial, derivado de la industrialización, la migración del campo a la ciudad y la existencia de nuevos materiales de construcción. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el predominio de Estados Unidos en el escenario mundial profundizaron estos procesos. En el caso chileno, le cupo al Estado un rol preponderante en la aceptación y difusión de la arquitectura moderna financiando obras públicas de significación urbana, como también su participación creciente en proyectos de construcción de viviendas populares, donde la racionalidad económica imponía diseños y obras de bajo costo de carácter masivo.

En la transición del cambio de paradigma entre los arquitectos hay una cierta tensión entre modernidad y tradición, que se observa en avances y retrocesos en los diseños propuestos. Los nuevos materiales ofrecían nuevas posibilidades pero los gustos privilegiaban los estilos antiguos que eran los que daban un prestigio validado socialmente por las clases altas, restringiendo la libertad creativa de las nuevas propuestas. Un ejemplo más de este proceso lo encontramos en el proyecto y construcción de la Iglesia de los Sacramentinos de Santiago, obra ejecutada por el arquitecto Ricardo Larraín Bravo, donde el historicismo, que replica el estilo del *Sacre Cour de Montmartre* de París, incorpora los nuevos materiales disponibles.

Esta búsqueda de una nueva arquitectura, de exploración de formas y ornamentos que reflejaran lo propio, motivó en algunos arquitectos su atención hacia el arte moderno pero también del arte de las culturas nativas americanas y de Chile en especial. Como muy bien señala Max Aguirre:

*“El arte moderno había llamado la atención sobre el arte de las culturas primitivas y exóticas, algunos artistas encontraron en esas obras referentes que alimentaron su imaginación y dieron apoyo a un mayor alejamiento figurativo de las fuentes clásicas del arte. Por esa vía las expresiones de arte primitivo, autóctono o de culturas aborígenes, se transformaron en signo de modernización de las formas...De esta manera lo moderno se asoció a cierto nacionalismo inspirado en las formas autóctonas. Ser moderno fue reconocer las raíces de la nación y eso se expresó en la búsqueda de una arquitectura nacional...Ideológicamente se estableció un*



*vínculo entre modernidad, identidad cultural, nación y las formas artísticas de los pueblos aborígenes.” (Aguirre, M. 2011:261-262)*

No sólo el Estado encargó nuevos proyectos de hospitales, escuelas, estadios y otras obras públicas, sino también el sector privado para nuevas fábricas e instalaciones comerciales. En este último aspecto no puede dejarse de mencionar la incursión inicial del modernismo industrial con proyectos ejecutados ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX, en las oficinas salitreras del norte, y en los campamentos de obreros e instalaciones productivas para la explotación del cobre y del carbón, en otras regiones del país.



Ciudad minera de Sewell emplazada en la Cordillera de Los Andes. Fotos Archivo del Consejo de Monumentos Nacionales

A finales de década de los 40 y durante los años 50, salvo el caso de La Serena y su remodelación neocolonial, la arquitectura moderna logra imponerse debido a la desaparición de la generación de arquitectos de los años 20, de los cambios en los programas de formación de los nuevos arquitectos, siendo todo ello parte del proceso global de los cambios que la modernidad impuso, cuyas características para el caso chileno enuncia M. Aguirre fueron las siguientes: nuevos materiales y tecnologías, búsqueda de una arquitectura nacional, el sentido del destino del inmueble, la adecuación al paisaje, la necesidad de viviendas económicas y la estandarización (Aguirre, M. 2001:275).

De acuerdo a Eliash a finales de la década de los 50 la arquitectura moderna ya está institucionalizada en Chile en razón de los procesos arriba explicados, siendo adoptado por la mayoría de los arquitectos el movimiento moderno que se acerca a su espíritu racionalista original, cuyos modelos son Mies van der Roer, Gropius y Le Corbusier:

*“Sólo en este contexto se entiende el cambio, en menos de una década, desde las casas Tudor de S. Eyzaguirre, francesas de A. Cruz y Munizaga y Georgian de A. Cruz, a los nuevos conceptos en vivienda de Jaime Sanfuentes, Ismael Echeverría, Eduardo Cuevas, Abraham Schapira, por*

*citar algunos arquitectos de la década del 50. Se produce el momento de la opción, ya no se dan diferentes respuestas formales frente a la arquitectura. Ya no es factible que en un mismo tablero se diseñen simultáneamente y sin conflictos éticos una clínica moderna, un edificio clásico y una casa Tudor.” (Eliash, H. 1996:49)*

De esta manera logran desarrollarse a fines del 50 y durante los 60 varios proyectos modernos que van de la mano con las nuevas leyes de fomento de la vivienda y la creación de grandes empresas constructoras cuyas obras son financiadas desde el Estado, tales como: la Universidad Técnica del Estado, la Villa Portales, la Villa Olímpica, la iglesia de los Benedictinos, la Villa Frei y la CEPAL en la ciudad de Santiago, como también otros edificios y conjuntos habitacionales en regiones, como por ejemplo el edificio de la Cooperativa Eléctrica de Chillán. De esta manera, el movimiento moderno se convierte en una experiencia cultural afirmada por la mayoría de los arquitectos y por el propio Estado, el cual, ya décadas antes, había dado señales potentes con la transformación del Barrio Cívico de Santiago gracias a la intervención del urbanista austriaco Karl Brunner, como también la influencia de la Bauhaus, confirmando una vez la influencia europea. No obstante en los años 60 comienza a notarse ya el predominio de los modelos arquitectónicos norteamericanos en los arquitectos más jóvenes (Eliash, H. 1997:51).



Villa Olímpica, comuna de Nuñoa, Santiago  
Fotografías tomadas de Wikipedia.



Villa Portales, comuna Estación Central, Santiago.

Como hemos visto, el desarrollo de la arquitectura moderna recibe desde el Estado un importante apoyo, coincidiendo a la vez con procesos políticos orientados hacia el populismo con vastos programas de obras públicas. El segundo gobierno del General Carlos Ibañez del Campo (1952-1958), que como militar retirado llegó al poder gracias a una alianza de partidos que incluía al Partido Femenino de Chile. Ibañez continuó con el proceso de industrialización iniciado años antes e instauró un gobierno populista más independiente de los partidos políticos en la mediación con las masas, imitando ciertas prácticas y también proyectos que se impulsaban en la Argentina nacionalista del Presidente Juan Domingo Perón. El siguiente gobierno fue presidido por el empresario Jorge Alessandri (1958-1964), hijo de Arturo Alessandri, quien apoyado por los sectores



de derecha, trata de impulsar una administración más técnica cuyo objetivo era transformar la economía del país dando una mayor autonomía a las empresas privadas y disminuir la acción del Estado en dicho campo. Su gobierno se inserta en una serie de acontecimientos internacionales y el desarrollo de procesos nacionales que cambian radicalmente el carácter de la sociedad chilena de entonces los cuales se precipitan en los próximos años.

Por otro lado la Revolución Cubana de 1959 generó amplias expectativas de cambios sociales, políticos y económicos en todo el continente y también en Chile, donde amplios sectores aspiraban a reformas más profundas de la sociedad, donde una parte importante de la población vivía situaciones de pobreza extrema tanto en el campo como en la ciudad, en estas últimas producto del hacinamiento y falta de trabajo. En tal contexto nace el Partido de la Democracia Cristiana que incluyó a masivamente a los jóvenes y diversos grupos sociales, el cual tuvo un apoyo importante de la Iglesia Católica, la cual se distanció de los partidos conservadores y se comprometió con las reformas progresistas, especialmente en el área rural, donde se discutía ya la urgente necesidad de una reforma agraria que llevara la modernidad al campo.

El gobierno de Alessandri y parte de la derecha, con el apoyo de Estados Unidos que lanzaba a comienzos de los sesenta su iniciativa continental “Alianza para el Progreso”, comprendieron que debían avanzar hacia reformas estructurales en el campo, la educación y en la recaudación de mayores tributos o enfrentar el peligro de una revolución. Ante tal disyuntiva la iglesia católica chilena decidió dar el ejemplo y entregar parte de sus propiedades rurales a los campesinos que trabajaban en ellas a comienzos de los años 60. Es importante destacar que la demanda por una reforma agraria provenía principalmente de sectores urbanos ilustrados, subsistiendo en el mundo rural todavía una estructura social y productiva ancestral caracterizada por un paternalismo autoritario en cierta manera consentido por la costumbre, donde además el electorado rural era fuertemente influenciado por los terratenientes cuyo conservadurismo no era bien visto por los empresarios industriales y por el propio gobierno que quería impulsar la modernización productiva del país. En atención a ello el gobierno logró la aprobación del Congreso de una primera Ley de Reforma Agraria, la cual fue considerada insuficiente (Correa, S. et al 2001:215-217).

La aspiración por cambios mayores tuvo un contexto favorable en la década de los sesenta que se vieron favorecidos por una creciente rebeldía e inconformismo social que tenía además referentes internacionales por lo que ocurría en Europa, Estados Unidos y otros países americanos. Parte de la juventud de entonces copiaba las modas imperantes en el mundo desarrollado, pero otros se dieron a la búsqueda de modelos propios nacionales o latinoamericanos, siendo la música, el modo de vestir, los cortes de pelo un ejemplo de tales modas. La necesidad de una nueva identidad cultural es patente en este proceso donde se experimenta

todo aquello que signifique un cambio de los patrones tradicionales. Aquellos que se inclinaron por lo propio, se identificaron más bien por una postura latinoamericana alejada de todo chauvinismo nacionalista. Otros en cambio suscribieron la cultura Pop. Pero todos renegaron lo local en aras de valores más universales.

Es en esta década de contradicciones que nace la *“Nueva Canción Chilena”* cuya precursora es Violeta Parra, que encarna un movimiento que une el folclore de tradición popular, un sentimiento latinoamericano unitario y la protesta social, fenómeno que también se dio en otros países americanos, el cual se identifica con los movimientos políticos de izquierda emergentes. Exponentes en Chile de esta tendencia son Víctor Jara, Ángel Parra, Isabel Parra y Patricio Manns. Por su parte el muralismo comprometido con las causas sociales cobró vigor en el espacio público. Igualmente se notó un auge en la producción editorial de todo tipo de libros y temas, que incluyó la edición de obras tradicionales y de nuevas creaciones literarias, siendo las ediciones de libros de bolsillo las más populares. Mayor impacto aún tuvieron las reformas universitarias las cuales lograron modificar las estructuras de organización de los planteles como también los programas de estudios. En este ámbito, las estaciones de radio permitieron difundir los cambios de gustos a nivel nacional, incorporándose poco a poco las emisiones de televisión nacidas al alero de las universidades y después del propio Estado teniendo ambas un fuerte carácter educativo y público (Correa, S. et al 2001: 232-234).

Frente a tales procesos en marcha tuvo lugar la elección presidencial de 1964 resultando vencedor Eduardo Frei Montalva de la Democracia Cristiana alcanzando el respaldo del 56% del electorado, con un proyecto político, social y económico centrado en la modernización del país y el desarrollo planificado desde el Estado, que buscaba una ruptura con el orden anterior, con una visión política propia e independiente del capitalismo y del socialismo marxista cuyo lema era la *“Revolución en Libertad”*. En el contexto internacional de la Guerra Fría y frente al ejemplo de la Revolución Cubana, Estados Unidos apoyó con importantes recursos la campaña presidencial de Frei, quien competía con Salvador Allende, al abanderado de los partidos de izquierda.

Frei supo ganarse a los jóvenes, las clases medias y el campesinado aludiendo a la esperanza del cambio que residía en las fuerzas populares que identificó con los grandes momentos de la historia nacional. En uno de sus más famosos discursos, ante una multitud de más de 300.000 personas en su campaña presidencial de 1964 manifestó:

*“...como en las antiguas gestas del descubrimiento de Chile, hemos tomado posesión de la Patria. (Uds. son) los mismos, lo de 1810, los de 1879, los*

*de 1891. ¡Son la Patria! Si, amigos míos, Uds. son eso. Son la Patria, gracias a Dios". (Correa, S. et al 2001:243)*

Era primera vez que un gobernante llegaba al poder con el respaldo de un solo Partido Político con amplia participación juvenil. Con tal apoyo ciudadano, incluso de la Iglesia Católica y de parte de la derecha, Frei logró el respaldo del Congreso Nacional para la chilenización de la gran minería del cobre que estaba en manos de capitales extranjeros, promoviendo un modelo mixto de propiedad, impulsó una reforma agraria que expropiaba el latifundio, entregando tales tierras a los campesinos organizados en "asentamientos" o comunidades de propietarios, llevando a la práctica otras reformas en la educación y otros sectores. No obstante los logros de este gobierno, la población aspiraba a cambios aún más profundos, levantándose una sensación de frustración en algunos sectores populares urbanos y rurales que reclamaban más viviendas sociales, mejor atención hospitalaria, una cobertura mayor de la educación y más calidad de vida, cambios que los sectores de izquierda planteaban no podían darse en el sistema capitalista sin reformas más radicales (Correa, S. et al 2001:239-252). Es importante destacar que en el gobierno de Frei el ejecutivo presenta al Congreso el proyecto de ley de monumentos nacionales, el cual se aprueba en 1970 y sobre el cual nos referiremos en detalle en el próximo capítulo.



Presidente E. Frei M. (1964-1970) Campaña de Eduardo Frei Montalva, 1964. Fotos Archivo Museo Histórico Nacional

A finales de los años sesenta la identidad cultural nacional de Chile es radicalmente diferente de la existente algunas décadas atrás. En el discurso oficialista la identidad es más diversa, es más inclusiva de lo popular, pero no renuncia a la unidad nacional. No obstante en los sectores más jóvenes de la sociedad hay una apertura y predisposición a aceptar e incluir como propios conceptos, costumbres y discursos identitarios globales cuyos orígenes estaban

tanto en los cambios profundos que estaban teniendo lugar en Europa y Estados Unidos, pero también en Latinoamérica y en Chile mismo. Son momentos de exploración identitaria en los cuales unos se centran más en los modelos externos como referencias a seguir en la modernidad y otros, sin renunciar a la perspectiva internacional, buscan en lo popular nacional y regional los nuevos discursos que los identifiquen.

Estas contradicciones son recurrentes en los procesos históricos y culturales de América Latina (Galeano, E. 1971, 1986). Procesos en que la modernización adquiere características particulares en la segunda mitad del siglo XX, las cuales están condicionadas según el antropólogo argentino Néstor García Canclini por el crecimiento de la industria y mayor consumo de bienes, la expansión urbana, la masificación de la educación y del mercado cultural asociado, la multiplicación de los medios de comunicación, el surgimiento de movimientos políticos que buscaban reformas radicales. Procesos todos donde el mestizaje cultural lucha por sus propias formas y contenidos y resiste los modelos foráneos que se le imponen una y otra vez (García Canclini, N.1990).

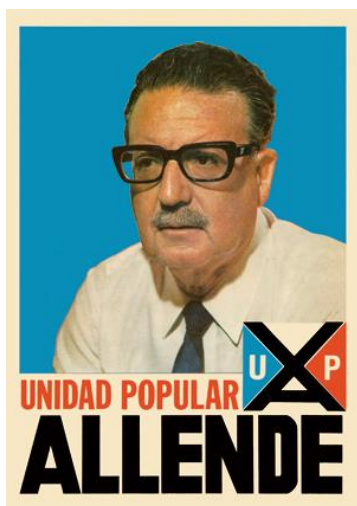
En este contexto la arquitectura y el urbanismo fueron también expresiones de los cambios sociales en toda América donde lo vernáculo y lo tradicional se oponía a las visiones modernizadoras de las ciudades. En Chile, el Gobierno de Eduardo Frei M. creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 1965, siendo una de sus instituciones la CORMU (Corporación de Mejoramiento Urbano). El objetivo principal de esta entidad era mejorar y recuperar áreas deterioradas de las ciudades mediante programas integrales de desarrollo urbano, para lo cual tenía facultades y recursos para adquirir predios para la construcción de edificios y viviendas para uso público y social. Tal como nos indica Vicente Gómez al analizar su historia y logros, sus programas tenían:

*“...visiones más integradoras, holísticas, entre pasado y presente, el espacio urbano y la naturaleza, etc. Además, en esta época hay una mayor preocupación por las ciudades “interiores”, aún cuando se mantienen las condiciones de expansión urbana en la periferia de las ciudades”. (Gómez, V.2006:11)*

La CORMU realizó varios proyectos siendo quizás el más emblemático la “Remodelación San Borja” próxima al cerro Santa Lucía de Santiago, cuya construcción se inició en 1969 y que consideró la construcción de 20 edificios de altura, parques, plazoletas y cierta autonomía dentro de la ciudad. En este proyecto se incluyó en 1971, ya en el gobierno del Presidente Allende, la

construcción del gran edificio que sirvió de sede de la UNCTAD y después fue el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral<sup>46</sup>.

Por su parte, el país avanzaba hacia una polarización de opciones políticas, contexto en el cual tienen lugar las elecciones presidenciales de 1970, presentándose los sectores de derecha, centro e izquierda cada uno con su candidato respectivo Jorge Alessandri, Radomiro Tomic y Salvador Allende, resultando este último ganador con el 36.3% de los votos, pero sin obtener la mayoría absoluta, debiendo resolver el Congreso Nacional entre las dos primeras mayorías. La decisión del Congreso se dio en un ámbito de gran tensión nacional, en la cual incluso un grupo armado de extrema derecha asesinó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A pesar de ello el Congreso, con los votos de la Democracia Cristiana, apoyó el nombramiento de Allende como presidente, siendo proclamado como tal el 24 de octubre de 1970 (Correa, S. 2001:257-265).



Presidente S. Allende (1970-1973) Campaña de Salvador Allende con Pablo Neruda, 1964. Fotografías Archivo Museo Histórico Nacional

El Presidente Salvador Allende llegó al poder gracias a una coalición de partidos de izquierda denominada Unidad Popular, integrada por el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), el Partido de Izquierda Radical y la Acción Popular Independiente. Si bien existió una unidad programática existían diferencias de criterios respecto de la forma, profundidad y velocidad de los cambios que querían realizar para llevar a cabo la vía chilena al socialismo, siendo los principales la estatización de la gran

<sup>46</sup> Posterior al Golpe de Estado de 1973 este edificio fue ocupado por la Junta Militar de Gobierno que pasó a llamarlo Edificio Diego Portales, lugar que además fue ocupado por diversas reparticiones del Ministerio de Defensa. Recién durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet el edificio fue remodelado y volvió a cumplir su función original de centro cultural recuperando su nombre inicial.

minería del cobre, ampliar la base productiva a través de empresas estatales o controladas mayoritariamente por el Estado con participación de los obreros y empleados, y profundizar la reforma agraria. Si bien tales cambios se proponían hacer respetando la Constitución y las leyes, algunos de ellos encontraron una férrea oposición de los partidos de la derecha y también de parte de la Democracia Cristiana. Las posiciones de unos y otros se fueron extremando llevando al país a una tensión política creciente donde campesinos, obreros, estudiantes y algunos de los partidos y movimientos de izquierda reclamaban una acción más decidida y profunda en los cambios, mientras que los partidos opositores y asociaciones de empresarios y gremios afines a la derecha los rechazaban, siendo estos apoyados financieramente por Estados Unidos, los que fueron promoviendo en sectores de la alta oficialidad de las fuerzas armadas la idea de un golpe de Estado (De Ramón, A. 2003:188-19; Correa, S. et al 2001:265-270).

No obstante la polarización ideológica del país, el gobierno impulsó medidas que profundizaron los procesos sociales y culturales que venían gestándose desde los años sesenta, donde las expresiones populares, tanto tradicionales derivadas del folclor nacional, como las nuevas que promovían la integración cultural latinoamericana, lograron plena expresión en el arte, la música, la pintura, el teatro, como también en formas de sociabilidad comunitaria. Uno de los proyectos más exitosos fue sin duda la creación de la Editorial Quimantú, producto de la compra por parte del Estado de la antigua empresa editorial Zig-Zag, la cual imprimió millones de libros de bajo costo, que incluían obras nacionales y extranjeras de todo tipo que masificaron la lectura como nunca antes. Por otra parte el Estado reconoció y valoró la diversidad cultural, dignificando las expresiones tradicionales y las nuevas creaciones culturales, especialmente de los sectores campesinos, obreros e indígenas.

Otro aspecto que tuvo importancia en el Gobierno del Presidente Allende fue avanzar en las soluciones de viviendas sociales para los miles de chilenos que vivían en campamentos o poblaciones “callampas”<sup>47</sup>, como también continuar con las remodelaciones urbanas comenzadas en el gobierno anterior. Al respecto la CORMU tuvo también un rol relevante en tales proyectos urbanos que buscaban la inclusión social a la vez que resolver los problemas de vivienda. El arquitecto Miguel Lawner, fue el director ejecutivo de dicha entidad entre 1970 y 1973, quien nos relata sus principales preocupaciones de entonces y su crítica frente a las políticas de urbanismo seguidas posteriormente hasta la actualidad:

---

<sup>47</sup> Se denominaban poblaciones “callampas” a aquellas que eran producto construcciones rápidas con materiales livianos como maderas, cartones, latas y techos de fonolitas que eran habilitadas por familias de escasos recursos en terrenos generalmente productos de tomas u ocupaciones de terrenos eriazos. Callampa es la palabra utilizada en Chile para los hongos, de allí su nombre por su rápido crecimiento.



*“En el primer año de Allende, la CORMU adquirió 2.000 predios, cantidad cinco veces superior al promedio anual registrado en la anterior administración. Siempre nos ceñimos a la legislación vigente, que autorizaba a fijar los precios conforme al valor del avalúo fiscal, y no al valor comercial, y a tomar posesión del predio aun cuando prosiguiera el juicio en los tribunales... Sin embargo, en la gran mayoría de los casos se obvió la acción judicial llegando a un común acuerdo con los propietarios... Los especuladores urbanos recibieron un golpe mortal, produciéndose una notable caída en las expectativas de precio... Esto permitió la realización de ambiciosos proyectos habitacionales, no en la periferia sino que poniendo el acento en las áreas centrales... o cuya baja densidad aconsejaba su densificación. Los proyectos cubrieron todo el país, y se ejecutaron en el marco de planos seccionales cuidando su necesaria integración con la trama urbana adyacente... Todas las obras se destinaron preferentemente a los sectores de bajos ingresos, pero ejecutadas con alto nivel de calidad constructiva y de diseño arquitectónico, por lo cual no generaron impacto negativo alguno en su entorno próximo... En definitiva, opino que para planificar con la voluntad de velar por el interés de la comunidad y no por los intereses del inversionista, el Estado debe tener las atribuciones para fijar una política respecto al suelo urbano, haciendo accesible este bien a todos sus ciudadanos. Mutilarse las manos en este campo, admitiendo un mero rol subsidiario del Estado ha llevado a nuestras ciudades a un peligroso nivel de segregación social.” (Lawner, M. 2008)*

En las elecciones parlamentarias de 1973 el gobierno obtuvo un amplio respaldo, sin embargo había claras señales de que el conflicto político se agravaría. Cuando el Presidente Allende se disponía a anunciar un plebiscito para que la ciudadanía decidiera el futuro de su gobierno se produjo el 11 de septiembre de 1973 un levantamiento de las fuerzas armadas, quienes forman una Junta Militar de Gobierno encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército General Augusto Pinochet. Los militares toman el control de las ciudades, dan un ultimátum al Presidente Allende que resistía en el Palacio de La Moneda y frente a su negativa de rendirse, la Fuerza Aérea bombardea ese edificio y otros puntos de la ciudad, aunque previamente el Presidente logra transmitir su último discurso:

*“Tienen la fuerza. Podrán avasallarnos. Pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos... Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigán ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá*

*una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.”*  
(Correa, S. et al 2001: 275).



La Moneda, 11 de septiembre de 1973  
Archivo Museo Histórico Nacional



La Moneda después del bombardeo. Fotografías

El suicidio del Presidente Allende, el bombardeo del Palacio de Gobierno, las detenciones masivas, torturas, fusilamientos sumarios y desapariciones de personas, seguidas del exilio de miles de chilenos, causaron impacto mundial y la protesta internacional de muchos países y organizaciones internacionales por la gravedad de los crímenes cometidos sin respeto alguno a los derechos humanos. Tal como escriben algunos historiadores chilenos:

*“En ocasiones anteriores, el país había asistido a excesos y abusos provenientes de diversos sectores, pero no conocía nada parecido al terrorismo de Estado sostenido en el tiempo, practicado con tales grados de violencia y crueldad”. (Correa, S. et al 2001:276)*

Existen análisis y visiones opuestas y diferentes de las causas que motivaron el alzamiento militar y el derrocamiento del Presidente Salvador Allende (Arriagada, G. 1974; Huneeus, C. 2000; Corvalán, L. 2003). Sin embargo, hay un consenso amplio hoy día en la sociedad chilena en reconocer los gravísimos atropellos contra los derechos humanos cometidos sistemáticamente por el Gobierno del General Pinochet. Tales actos significaron prisión, torturas, violaciones, asesinatos, exilio y persecución para miles de compatriotas durante casi dos décadas. Las cifras reconocidas por informes oficiales posteriores son tajantes: alrededor de 3.000 muertos y desaparecidos, 80.000 presos políticos sujetos a vejámenes y torturas, 30.000 exiliados solamente entre 1973 y 1974, a los cuales se agregaron cientos de miles más posteriormente por razones políticas y económicas (Ahumada, E. et al 1989; Verdugo, P. y Orrego, C. 1980). Los crímenes cometidos en lo que respecta a derechos humanos han tenido una profunda reprobación tanto nacional como internacional, dejando una huella profunda en el alma nacional. Lugares emblemáticos destinados como campos de

concentración de prisioneros políticos como el Estadio Nacional de Santiago o la Isla Dawson en el Estrecho de Magallanes están en el imaginario social permanente de muchos chilenos cuando se recuerda el Golpe de Estado de 1973 (Bustamante, J. 2009).

No obstante lo anterior el Golpe Militar fue aprobado por parte importante de la población contraria al Gobierno del Presidente Allende, incluso por varios personeros del Partido Demócrata Cristiano, quienes pensaban entonces que la Junta Militar llamaría a elecciones brevemente. Sin embargo cuando constataron lo contrario y los graves delitos contra los derechos humanos tomaron una posición oficial de oposición al gobierno militar. En cambio la Iglesia Católica tomó desde el comienzo una clara oposición a la Dictadura velando por la defensa de los prisioneros y ayudando a los perseguidos, siendo incluso algunos sacerdotes detenidos y otros asesinados.

La Junta Militar entregó una “*Declaración de Principios del Gobierno de Chile*” el 11 de marzo de 1974, en la cual manifestaban el programa político, económico y cultural que querían imponer al país cuyas máximas eran: proteger la civilización del país que estaba en peligro, que Chile debía volver a su tradición cristiana e hispánica, rescatar la voluntad nacionalista, que el rol del Estado era de carácter subsidiario, destacar el rol preponderante del sector privado en el desarrollo, respetar las tradiciones, promover la unidad nacional, recobrar la historia patria y la existencia de una historia única nacional (Góngora, M. 2003:293-296; Correa, S. et al 2001:284-285).



Junta Militar de Gobierno presidida por el General Augusto Pinochet en 1973. Foto Archivo del Museo Histórico Nacional

En la práctica se establecía la necesidad de tener un gobierno autoritario y presidencialista que recobrara el modelo que había promovido Diego Portales en el siglo XIX, que luchara contra la anarquía y que concebía la patria como algo homogéneo en lo cultural. Para ello se basaron en las historias conservadoras de Chile elaboradas por Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina y Jaime Eyzaguirre, cuyos textos, especialmente los dos últimos, pasaron a ser obligatorios en las escuelas. La revisión del sistema educativo fue de especial preocupación desde el comienzo, siendo los escolares formados antes de entrar a clases, debiendo cantar la canción nacional a la cual se le agregó una segunda estrofa, que destacaba el rol de las fuerzas armadas en la construcción de la nacionalidad, mientras se izaba la bandera chilena, estableciéndose además el día 11 de septiembre como feriado nacional, además se exigió el corte de pelo a los varones, el uso de faldas en las mujeres, siendo eliminada toda lectura de libros considerados contrarios a la ideología del régimen militar. La reforma educacional incluyó el traspaso de las escuelas a las municipalidades y a partir de 1980 se permitió la creación de nuevas universidades privadas, todo avalado por una nueva Constitución Política del Estado elaborada por el régimen militar. Tal visión se vio reflejada como veremos más adelante en realzar los símbolos nacionales de unidad, en la erección de monumentos como la Llama de la Libertad, el Altar de la Patria y otros más, unido lo anterior con un aumento sostenido de declaratorias de monumentos nacionales.

En el mismo sentido se impuso una agenda de valores y de conductas conservadoras, interviniéndose también la formación universitaria, instalándose en todas las universidades rectores y delegados militares, suprimiéndose carreras consideradas conflictivas y revisándose todos los programas cuyos contenidos fueran considerados marxistas o de izquierda. Demás está decir que se ejerció un férreo control político de censura a todos los medios de comunicación. La implantación de tales modelos y estructuras educativas durante casi 20 años tuvo un gran impacto en las generaciones jóvenes y su visión de la política y la generación de un individualismo competitivo y nacionalista.

En otra área donde hubo un cambio profundo fue en la economía. Si bien en un comienzo los militares trataron de mantener al respecto una política proteccionista de la industria nacional, rápidamente se impuso un modelo económico neoliberal donde el Estado abandonaba progresivamente el rol de planificador y productor que había tenido por décadas. Esto implicó un proceso de traspaso de las empresas públicas al sector privado, se eliminaron progresivamente las barreras arancelarias permitiendo la libre importación de productos y servicios, se frenó la reforma agraria, devolviendo los predios rurales ilegalmente expropiados, disolviendo los asentamientos y entregándose títulos de dominio individuales. Sin embargo hubo áreas de la economía que los militares no aceptaron su privatización total como la gran minería del cobre, porque se consideró que eran claves para la seguridad nacional, asegurándose las fuerzas armadas que un

10% de las ventas del cobre se destinaran anualmente a su presupuesto y la compra de armamento, aunque se abrió el escenario minero a nuevas explotaciones en manos de empresas transnacionales (De Ramón, A. 2003:264-267).

El historiador Mario Góngora, escribiendo en 1981, se refería de esta manera en relación al modelo económico, político y cultural neoliberal que se estaba imponiendo al país y su desazón por las políticas que implementaba el gobierno militar:

*“Si los resultados de la política económica han sido, hasta ahora, positivos, sobre todo al reducir la inmensa inflación heredada...se muestran ya los aspectos negativos que tiene que tener el planificar todo un Estado y una sociedad con criterios cuantitativos de costo y beneficio. Los ideales tradicionalistas y nacionalistas de la primera hora...han quedado relegados al olvido ante el materialismo económico ambiente, por lo demás común a todo el mundo de masas. La planificación ha partido de cero, contrariando o prescindiendo de toda tradición, lo que siempre trae consigo revanchas culturales. El neoliberalismo no es...un fruto propio de nuestra sociedad...sino una “revolución desde arriba”, paradójicamente antiestatal, en una nación formada por el Estado.” (Góngora, M. 2003:301)*

Por cierto gran parte del sector empresarial tradicional nacional no se vio favorecido por tales medidas, llevando a la quiebra a muchas industrias que no podían enfrentar la competencia de la llegada masiva de productos extranjeros y la liberación de los precios de tales bienes, lo que aumentó la cesantía debiendo el Estado crear programas de empleo mientras la economía se ajustaba al nuevo modelo neoliberal, el cual se impuso por la fuerza. En tal contexto se inició la privatización de la salud y el sistema de pensiones, se promulgó un nuevo código de aguas permitiendo su traspaso a empresas privadas y particulares, acelerándose hacia finales del gobierno militar la venta de las empresas públicas, especialmente del sector energético, puertos y de comunicaciones (Correa, S. et al 2001:292-293).

En relación a la arquitectura y la ciudad podemos decir que se abandonaron progresivamente la planificación estatal entregándose la ciudad a las reglas del mercado del suelo. Tal como nos relata Juan Eduardo Munizaga en su estudio sobre el arquitecto Escipión Munizaga:

*“Casi como una paradoja, desde 1975 a 1985, la arquitectura se fue haciendo, como el país, más diversa o más ecléctica. Vuelven lentamente los estilos formalistas en una reacción conservadora y surge el modelo mercantilista importado. Se refuerzan el relativismo cultural sin límites, la copia de lo internacional en la arquitectura corporativa y residencial de las*

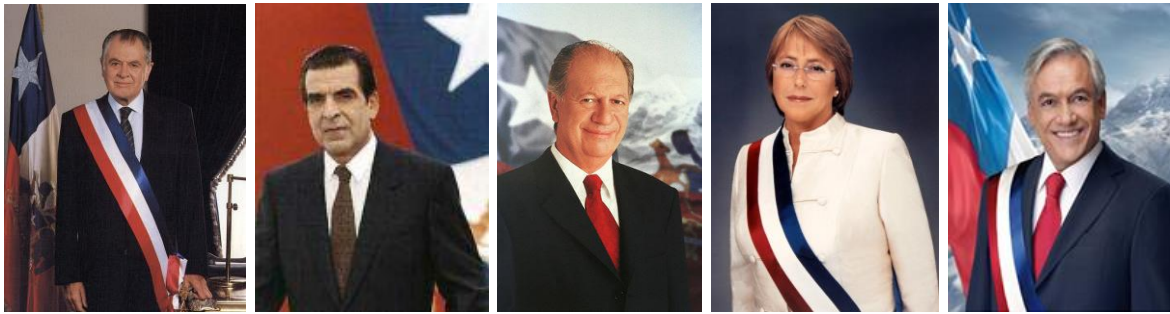
*comunas altas (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea)...Así se radicalizó la pérdida de funciones claves de los arquitectos en las municipalidades y sobre todo el rol activo y generador del Ministerio de Vivienda y Urbanismo...Esta nueva utopía conservadora y posmoderna, como se la llamó, ¿Es modernidad o retrovanguardia? ¿Puede ser progreso el zoológico de edificios y estilos de cristal combinados, o también segregados, en una ciudad trizada y sin orden? ¿De qué manera la arquitectura cívica va perdiendo su sentido originario para tornarse en clichés de estilos y sobre todo en representación e imagen de lo efímero? A pesar de ser conservador, esto sorprendió mucho a Munizaga, que vio demolidos o reciclados varios buenos edificios, entre ellos los suyos...". (Munizaga, J. 2008:61)*

La presión política de amplios sectores de la población chilena que, no obstante la violenta represión, se manifestó crecientemente en la década de los 80, además del aislamiento internacional del gobierno militar, convenció a estos últimos de que debían lograr una transición pactada hacia un régimen democrático. Para ello concordaron con los líderes políticos de la oposición un plebiscito en 1988, en el cual, no obstante las restricciones, la ciudadanía votó mayoritariamente por concluir el régimen militar, quienes reconocieron la voluntad popular y llamaron a elecciones presidenciales y parlamentarias para fines de 1989. La derecha se presentó a tales elecciones con dos candidatos, el economista Hernán Buchi y el empresario Francisco Javier Errázuriz; la oposición formó una alianza de partidos de izquierda y centro que denominó Concertación de Partidos por la Democracia, la cual fue liderada por el político de la Democracia Cristiana Patricio Aylwin, quien resultó vencedor. Antes de las elecciones el general Pinochet impuso una serie de acuerdos políticos, entre ellos la mantención de la Constitución de 1980, que él seguiría siendo el Comandante en Jefe del Ejército y que no se investigarían o invalidarían los traspasos al sector privado de las empresas públicas realizadas previamente (De Ramón, A. 2003:285-290). La Concertación, no sin diferencias, aceptó tales reglas en aras de lograr una transición hacia la democracia. Esta "transición consensuada" (Correa, S. et al 2001:339) explica muchas de las contradicciones del proceso político chileno, en relación a las transiciones hacia la democracia realizadas en otros países latinoamericanos que sufrieron dictaduras militares como Argentina y Uruguay.

Con este cambio se inicia una nueva etapa en la historia de Chile, cuya transición hacia una plena democracia no concluye aún para importantes sectores de la población, que consideran que mientras no se redacte y se plebiscite una nueva Constitución Política del Estado, la legitimidad de la voluntad ciudadana está en entredicho. Los gobiernos concertacionistas de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010) avalaron en lo central el modelo económico neoliberal aunque pusieron acento en minimizar sus impactos adversos en los sectores sociales más



desprotegidos, en investigar los crímenes contra los derechos humanos cometidos por la Dictadura y compensar en parte a las víctimas de tales atropellos y a los familiares de los asesinados y de los detenidos desaparecidos. Si bien la ciudadanía compartió inicialmente que los costos de la transición y el tutelaje militar de la democracia no permitían medidas más profundas, con el correr de los años se gestó una insatisfacción creciente que llevó a la derrota de la Concertación en las elecciones presidenciales de 2009, siendo elegido el candidato de la derecha Sebastián Piñera.



Patricio Aylwin      Eduardo Frei      Ricardo Lagos      Michelle Bachelet      Sebastián Piñera.  
Fotos oficiales de los Presidentes. Archivo Comunicaciones Palacio de la Moneda

Las causas de la derrota de la Concertación son varias, pero en lo central podemos destacar que ella misma fue desmovilizando a la ciudadanía, concentrando la política en lo cupular y con un fuerte sentido profesional y técnico sin bases sociales, con lo cual los partidos políticos fueron perdiendo legitimidad en la conducción, siendo considerados por vastos sectores como funcionales al poder y al modelo económico imperante, desapareciendo incluso en este proceso la mayoría de los medios de comunicación más progresistas o contestatarios, siendo incluso muchos intelectuales críticos de la transición y sus consecuencias acallados:

*“...el trasfondo de esta censura focalizada obedece a que los sectores más críticos de la intelectualidad chilena han ido coincidiendo y alineándose con un sentir creciente de malestar entre tanto cinismo político...fomentado desde las estructuras fácticas del poder apegadas al consensualismo.”  
(Correa, S. et al 2001:342)*

No obstante la Concertación incluyó en su programa modernizador aspectos que el gobierno militar había ignorado o eran emergentes como el medio ambiente, los pueblos indígenas y la lucha contra la pobreza, estos fueron abordados como parte de la profundización del modelo económico, social y cultural que tenía sus fundamentos en el neoliberalismo. La implementación de políticas en tal sentido, si bien tuvieron resultados positivos macroeconómicos y algunos sectores de la población se vieron favorecidos con el aumento de sus ingresos producto de la expansión de la economía y su inserción en el contexto internacional, no tuvieron

su corolario en las reformas políticas que otros reclamaban, aumentando el descrédito y desgaste de los cuadros políticos en el gobierno y sus respectivos partidos políticos. Por su parte la derecha política y empresarial se fortalecía, alejándose de la dictadura militar y reconociendo sus excesos contra los derechos humanos, manifestando su voluntad democrática frente a una ciudadanía cada vez más despolitizada e individualista.

En pocas palabras, la Concertación quedó atrapada en sus planteamientos políticos y el modelo económico que administraba, perdiendo la credibilidad de la ciudadanía. El proyecto de modernidad que abrazaba, si bien encandiló a parte de la población con sus logros, no resolvía la deuda con el pasado y menos se afianzaba en las demandas sociales emergentes. Tal como titula Alfredo Jocelyn-Holt uno de sus libros había un *“Chile Perplejo”*, que había pasado del *“Avanzar sin transar al transar sin parar”* (Jocelyn-Holt, A. 1998). Aún más, desde el Estado algunos de sus funcionarios trataban de imponer una visión identitaria del país acorde al neoliberalismo y rompiendo con el pasado. Un buen ejemplo de ello fue la imagen de Chile que se quiso proyectar en la Exposición Universal de Sevilla de 1992, al enviar un fragmento de témpano para representar al país, con el cual se quería simbolizar los cambios y las diferencias que teníamos con otros países latinoamericanos. Tal imagen que quería reflejarse en la nueva identidad cultural moderna de Chile fue muy bien explicada por un editorial del Mercurio de la época:

*“Chile, empresa de ideas: basado en una característica innata de los chilenos, su aptitud para el ingenio y las soluciones no tradicionales...Chile funciona...país de riqueza generosa...gente sólida...la formalidad y sobriedad, el apego a la ley, la cultura política y económica y la gran homogeneidad nacional, constituyen características notables que dan consistencia a las ofertas que Chile propone al mundo...”* (Correa, S. et al 2001:353)

El sociólogo Bernardo Subercaseaux se refirió también a este proyecto publicitario de llevar un témpano a Sevilla como un propósito ideológico que pretendía refundar nuestra identidad en la diferencia con el resto de las naciones latinoamericanas y con nuestro propio pasado (Subercaseaux, B. 1997). Sin embargo, paralelo a estos proyectos identitarios también se planteaba desde el Estado, por otros sectores políticos y sociales, la necesidad de buscar lo propio, de recobrar la memoria y de rescatar el patrimonio nacional en toda su diversidad y contradicciones, lo cual se expresó en muchas publicaciones y seminarios (Celedón, P. 1997; Cabeza, A. et al 1997; Joignant, A. 1998; Illanes, M. 2002). Un análisis completo del tema cultural y patrimonial bajo el gobierno del Presidente Ricardo Lagos fue realizado por el abogado y escritor Agustín Squella, quien fue nombrado asesor presidencial con la tarea de impulsar la nueva institucionalidad cultural, campo en el cual se debatió con energía el rol que le cabía a la cultura en

la democracia y el papel que le correspondía al Estado en su desarrollo, donde las tendencias neoliberales, estatistas y de mayor participación de la sociedad civil se enfrentaron (Squella, A. 2005).

En este contexto la sociedad chilena estaba cambiando sus hábitos tradicionales de consumo incorporándose de manera vertiginosa la computación y las comunicaciones vía internet. La cantidad de jóvenes que accedieron a la educación superior se multiplicó y la sociedad civil se comenzó a congregarse en grupos de interés por temas precisos alejándose de los patrones políticos tradicionales. El gobierno de la Presidenta Bachelet, el último de la Concertación, renovó ciertas esperanzas gracias al carisma popular de la presidenta, la cual supo manejar muy bien su condición de ser la primera mujer presidenta de Chile y llevar a la práctica una serie de medidas sociales, sin embargo el modelo económico siguió profundizándose. En este ámbito fue sorpresiva para muchos la protesta estudiantil que se levantó en su gobierno reclamando contra el abandono de la educación pública, cuestión que fue enfrentada por el Estado otorgando mayores recursos pero no cambiando el modelo que la inspiraba. Dicha generación, mayoritariamente de estudiantes secundarios, se levantaría una vez más años después, durante el gobierno de derecha del Presidente Sebastián Piñera, con las mismas banderas de lucha pero ya contra el modelo social que la creaba, uniéndose con más fuerza aún a gran parte del estudiantado secundario y universitario, al cual se han unido otros sectores sociales.

El Chile real se distancia del Chile oficial que encarna lo que muchos llaman hoy día *“la clase política”*, con cierto sentido de crítica y de lejanía de la ciudadanía, situación que ya estaba ocurriendo en los gobiernos de la Concertación, pero que se ha manifestado con mayor claridad en la administración de Piñera, la cual se planteó como un gobierno que privilegiaba la excelencia y la presencia de ejecutivos de empresas en cargos públicos, cuya eficiencia real ha sido puesta en duda por la ciudadanía, por su vinculación con conflictos de intereses en varias áreas de la economía, que han vulnerado incluso la imagen del propio presidente de la república, lo que se demuestra en la escasa popularidad que alcanza en las encuestas de todos los sectores políticos e instituciones especializadas en la materia.

A pesar de lo anterior, sin apartarse en lo esencial del modelo neoliberal que los anteriores gobiernos habían administrado u que incluso busca profundizar, la administración del Presidente Piñera ha sido pragmática en varias de sus políticas públicas con el objeto de no perder el respaldo popular que había conseguido en las elecciones, no obstante que al final de su gobierno disminuyó considerablemente. En lo cultural fue sagaz en demostrar una mayor preocupación por el patrimonio, continuando con programas anteriores emprendidos desde el Estado y destinando nuevos recursos públicos en proyectos que se venían demandando desde hace años.

Por otra parte, a este gobierno le tocó presidir los actos del bicentenario de la independencia nacional, efeméride en la cual se destacó el nacionalismo unitario con un acto simbólico que implicó la construcción de una asta metálica y el izamiento de una bandera chilena de proporciones gigantes, frente al Palacio de Gobierno, en la alameda Bernardo O'Higgins, y el traslado de la estatua del prócer de la Independencia José Miguel Carrera, que fue instalada al lado de la de O'Higgins, en un gesto histórico que reconocía el rol que también le cupo a Carrera en iniciar el proceso de emancipación a comienzos del siglo XIX.

Es importante destacar que no obstante el esfuerzo programático del gobierno de presentar una imagen unitaria del país, en cuyo acto oficial fueron invitados todos los ex presidentes, la festividad no tuvo la resonancia deseada, fuera por el devastador terremoto de febrero del 2010 o por el cambio de gobierno que ocurrió en marzo del mismo año, lo que significó un cambio importante de autoridades y funcionarios públicos. En relación a la celebración del primer centenario, cuyas autoridades estatales y la oligarquía pudo construir un conjunto de obras arquitectónicas señeras de la ideología que las animaba, además de representar en el imaginario colectivo una idea de nación unitaria culturalmente, aunque no lo fuera, en la actual conmemoración no hubo una continuidad de enfoques entre las administraciones entrantes y salientes, no obstante ambas coincidieron en colocar el sello bicentenario a gran parte de las obras públicas que se estaban ejecutando y que inauguraban en torno a esa fecha y después. Por otro lado, el Estado debió asumir también otra realidad respecto del proyecto de la identidad cultural oficial de Chile, en la cual la nacionalidad se presentaba ahora más diversa, incluyendo a los pueblos indígenas, los cuales tenían ciertos derechos culturales garantizados por la ley.

Este aspecto pluricultural de la sociedad chilena reconocido por el Estado, aunque ello no significa autonomía territorial para los pueblos indígenas, es una diferencia central respecto de lo ocurrido en 1910, donde las autoridades y gran parte de la sociedad chilena veían a los indígenas de maneras contradictorias e incluso extraños a la nacionalidad chilena, siendo partícipe el Estado de varios atropellos e incluso del etnocidio de los pueblos indígenas australes de la Patagonia. A pesar de todas las políticas realizadas en el siglo XX por asimilar a los pueblos indígenas, salvo algunas excepciones, estos seguían resistiendo, siendo los mapuches la principal preocupación del Estado. Al respecto, los gobiernos de la Concertación iniciaron varios programas en favor de su desarrollo y una política de adquisición de tierras, los cuales no han sido suficientes y varias comunidades mapuches han reclamado por su autonomía cultural y política del Estado chileno de manera cada vez más persistente.

Los pueblos indígenas y especialmente el pueblo mapuche, constituyen un referente clave en la formación de la nacionalidad chilena, sea por oposición, sea

por el profundo mestizaje racial y cultural a lo largo de casi cinco siglos. En la historia de Chile lo mapuche pasa por ciclos de aceptación y de negación. La sociedad chilena se debate entre reconocer la especificidad propia de dicho pueblo como nación y su deseo de integrarla a la nacionalidad chilena. Lo mismo ocurre entre los mapuches, sin embargo crece en dicho pueblo un sentimiento de autorreconocimiento como nación independiente, lo que tensiona al Estado chileno en su aspiración unitaria desde sus orígenes, lo cual tendrá que afrontar cambiando su constitución política, reconociendo que el Estado de Chile es plurinacional. Tal como indica el historiador Jorge Pinto:

*“La historia de la Araucanía es una historia construida desde las heridas no cicatrizadas que provocaron los hombres que, sin reparar en los medios. Agredieron al mapuche cuando el Estado decidió instalarse en la región...En muchos sentidos el Estado fracasó en la Araucanía...la memoria en la Frontera se fue construyendo desde el resentimiento provocado por sucesivas invasiones que culminaron en el siglo XIX cuando el Estado trasladó a la región a un ejército para someter al mapuche. Es una memoria anclada en la violencia y usurpación que derivó en dignidades humilladas, temores frente al extraño y mucha desconfianza.” (Pinto, J. 2009:201-202)*

Durante el siglo XX la sociedad chilena fue haciéndose más compleja, demostrando el Estado ser el mejor instrumento de su unidad política, cuya administración ha sido disputada tanto por la oligarquía como por los estratos medios y populares emergentes. A comienzos del siglo XX las clases altas debieron admitir el ascenso de las capas medias de la sociedad y compartir el poder político, perdiendo el control total que disfrutaron durante todo el siglo XIX. Los sectores políticos de diverso signo se alternaron en la administración del Estado, propiciando modelos de desarrollo centrados primero en la industrialización y modernización de país, con políticas proteccionistas, donde el Estado era el principal protagonista y regulador del bien común, que incluso fueron extremadas en los gobiernos de los frentes populares de la primera mitad del siglo XX, y en los gobiernos de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular en la segunda mitad de dicho siglo. Para pasar después a una reacción de los sectores más conservadores, que por la fuerza lograron imponer un modelo neoliberal centrado en la competencia y la total apertura a los mercados internacionales, donde la concentración de capitales nacionales y extranjeros actualmente administran y son dueños de las principales riquezas del país. La elite actual que detenta el poder económico es diferente de la que existía a principios del siglo XX, pero la oligarquía tradicional se ha renovado incluyendo progresivamente a los miembros más exitosos en lo económico y político en su esfera de prestigio compartiendo el poder, no obstante seguir existiendo tendencias distintas respecto de los valores más conservadores o liberales que deben guiar la sociedad.

La modernización de la sociedad durante el siglo XX ha sido profunda en determinados aspectos. Hoy día más de un 80% de la población vive en ciudades, cifra que era inversa a comienzos del siglo XX. Por otra parte el Estado y los grupos mayoritarios de la sociedad han debido reconocer la diversidad cultural originaria y regional que el país tiene, cuyas comunidades exigen mayores cuotas de poder de decisión local e incluso autonomía, cuestión no imaginada hace cien años atrás. Por otra parte los sectores políticos más progresistas demandan crecientemente que el país debe consensuar una nueva constitución política, que reconozca la actual realidad del país y que deje las ataduras autoritarias heredadas de la dictadura militar. Paralelamente la sociedad civil, muy activa políticamente en los años sesenta, comienzos de los setenta y en las movilizaciones sociales que permitieron lograr la vuelta a la democracia en los ochenta, para entrar después en un cierto letargo, comienza a organizarse a finales de la primera década del siglo XXI en referentes diferentes a los tradicionales, después de una larga apatía, patrocinada consciente e inconscientemente, durante los gobiernos de la Concertación.

En la actualidad los sectores políticos que detentan el poder se encuentran entre perplejos y ajenos a las principales demandas de la ciudadanía, especialmente de las generaciones más jóvenes, que explicitan públicamente su disconformidad con el modelo económico y social, a pesar del aumento de ingresos y la disminución del desempleo. En lo cultural la mayor parte de la sociedad es más abierta y permisiva a las diferencias que ayer, pero sectores minoritarios conservadores, amparados en leyes y costumbres anacrónicas, se han resistido a cambios más profundos. En este contexto la noción de patrimonio es radicalmente distinta de la existente hace 50 años, incorporando una mayor diversidad de bienes, con una comprensión más holística y vinculados a los modos de vida actuales y pretéritos que se ven amenazados por cambios no deseados, cuyas características veremos en el próximo capítulo.

En este contexto podemos decir que la identidad cultural de la sociedad chilena está, una vez más, en un punto de inflexión en su largo proceso de construcción histórica. Después de una larga apertura, experimentación e influencia de los modelos impuestos por la globalización, se manifiesta en los más jóvenes un malestar e incertidumbre, pero decidida a construir modos de vida que le permitan reencontrarse con su propia historia y diversidad. Las influencias externas han sido gravitantes en los modelos a seguir, pero el contrapunto ineludible para la identidad cultural chilena será su origen mestizo y su referente de dualidad opuesta, entre lo hispano y lo mapuche. Ambos referentes han tenido matices contradictorios, tanto positivos y negativos, en razón de sucesos y momentos históricos, odiados y respetados, reconocidos y negados. Si bien el referente hispano nutre esencialmente lo chileno y con el devenir su oposición se olvida, salvo en las efemérides de la Independencia y del Día de la Raza o del



Descubrimiento de América, lo mapuche sigue dos procesos diferentes. Por una parte se inserta en la identidad cultural chilena que debe admitir su origen mestizo, pero por otro lado permite rescatar, reconocer y valorar, no sin contradicciones, la resistencia heroica de las comunidades mapuches por mantener su propia identidad, la cual cobra cada vez más fuerza, reclamando su autonomía de la identidad chilena formada a través del tiempo.



Mapuches según Gay, 1854



Chilena según Boelen, 1835



Campesinos, D'Orbigny 1826.

Fotos Archivo Museo Histórico Nacional



Estudiantina y pareja de jóvenes en la fiesta del Roto Chileno del Barrio Yungay, Santiago.  
Fotografías A. Cabeza

## **4. DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS DE MONUMENTO Y PATRIMONIO EN CHILE Y SU EVOLUCIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL: EL PATRIMONIO AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LA IDENTIDAD CULTURAL OFICIAL**

### **4.1. Introducción**

La evolución del concepto de patrimonio en Chile tiene varias fuentes nacionales e internacionales, pero el impulso central se encuentra en las tradiciones intelectuales europeas y en los procesos políticos tanto internos como externos, que fueron perfilándose y difundiéndose en Europa desde el Renacimiento. Sin embargo es durante los siglos XVIII, XIX y XX, que la noción de patrimonio que hoy tenemos, adquiere su mayor relevancia y madurez.

El principal contexto histórico, cultural, económico y político para este proceso, en su sentido más amplio, se encuentra en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, desarrollado principalmente por Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot y D'Alembert, entre otros europeos. Tales ideas arriban a Chile directamente como a través de España, sea por los libros europeos que llegan clandestinamente al Chile colonial, sea traídos por los propios españoles, o mediante el contrabando que tenían los barcos franceses, ingleses y norteamericanos, o por los pocos criollos chilenos que viajan a España, Francia o Inglaterra por motivos de educación, negocios o vinculados a la administración colonial española. La independencia de las colonias inglesas de Norteamérica en 1776 y de gran parte de las colonias españolas americanas en la segunda década del siglo XIX, permiten que parte de ese ideario se lleve a la práctica en la formación de nuevos Estados.

Si bien durante el siglo XVIII hay una progresiva curiosidad intelectual por describir el territorio del llamado Reino de Chile en toda su diversidad, en la cual se notan las influencias de las reformas de los Borbones respecto del comercio, las ciencias y la educación, es más bien en las instituciones republicanas inspiradas en las revoluciones norteamericana y francesa, donde se encuentran las ideas fundamentales que inspiran la creación en la nascente República de Chile de una Biblioteca Nacional, de un Museo Nacional y de los primeros monumentos erigidos en honor a la libertad y a los próceres de la independencia.

En el presente capítulo veremos como la legislación y las primeras instituciones patrimoniales de Chile se van entrelazando producto de las ideas del momento, como también de varias iniciativas colectivas e individuales, que a lo largo del siglo XIX y en las primeras dos décadas del XX, logran sentar las bases de la legislación y la institucionalidad patrimonial del país. Tales ideas se van plasmando en las distintas constituciones del Estado de Chile, como también

mediante decretos y leyes, en la creación de comisiones de bellas artes e instituciones como bibliotecas, museos y archivos, en las cuales se identifica tanto una evolución propia como una influencia extranjera.

En este último aspecto hay que destacar la existencia de un contexto internacional incipiente que favorece a la conservación del patrimonio en su contexto de conmemoración y memoria del pasado, lo que se refleja, en su primera etapa, en el reconocimiento a los héroes de la independencia, en el rescate de las denominadas “antigüedades” arqueológicas, en la colección de los objetos históricos coloniales y, muy posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, en la valoración incipiente de la arquitectura colonial y republicana temprana.

Es importante destacar que nos encontramos frente a un doble proceso de construcción de la memoria histórica del siglo XIX, que es esencial en la formación de la noción de patrimonio y de identidad nacional en Chile. Por una parte, un esfuerzo oficial de seleccionar eventos y personajes que deben ser recordados como símbolos de la nueva nacionalidad, sea a través de las festividades oficiales o de los monumentos conmemorativos, para destacar hechos o personas y, por otra parte, como un proceso más lento, de rescatar el pasado colonial, que es un tema controversial, porque es un pasado que se interpreta negativamente y que se quiere olvidar y, de manera muy tangencial, con el pasado prehispánico, que da cuenta de los orígenes de los primeros pobladores indígenas y de cuya historia los patriotas chilenos pretendieron ser sus herederos espirituales en los primeros años de la gesta de la independencia e incluso simbólicamente, hasta el día de hoy, a través del mestizaje y de una sola identidad nacional.

Algunos aspectos de la evolución legal e institucional del patrimonio son más conocidos que otros. Producto de esta investigación se han logrado develar algunos vacíos de este proceso gracias al descubrimiento de archivos, documentos de gobierno, prensa y libros que no habían sido objeto de estudio en este ámbito y que son muy novedosos, particularmente en lo atinente a los antecedentes legales e institucionales de la creación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en 1925, uno de los servicios estatales claves en la gestión del patrimonio monumental hoy día, junto con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), que fue creada en 1929, integrando la Biblioteca Nacional y los museos nacionales que habían sido fundados desde la Independencia.

#### **4.2. Las Primeras Instituciones, Normativas Legales y Acciones Republicanas vinculadas al Patrimonio**

La Ilustración y las ideas republicanas que impulsaron la revolución de las colonias inglesas de Norteamérica en 1776 y de la Revolución Francesa de 1789 tenían como ideales la libertad, la democracia y la educación del pueblo en su sentido

más amplio. Por ello, junto con el establecimiento de congresos representativos de los ciudadanos, se fundaron nuevas bibliotecas y museos públicos, que previamente estaban al alero de la Iglesia, de las pocas universidades que existían y de la monarquía. Junto con ello, también las nuevas autoridades patriotas levantaron monumentos conmemorativos dedicados a la gesta de la Independencia y a sus principales próceres, continuando con una tradición de recordar ciertos hechos o dejar memoria de ellos para la posteridad a través de estatuas, hitos o placas, de los cuales hay algunos ejemplos al final de la Colonia en Chile como veremos más adelante.

### **La Biblioteca Nacional**

En el Chile colonial, las escasas bibliotecas estaban radicadas en casas de particulares o en las corporaciones o congregaciones religiosas como las que existían en Santiago en el Seminario Conciliar, el Convento de la Recoleta Dominica, el Convento de San Agustín y el Convento de los Franciscanos por ejemplo. Para el siglo XVII se mencionan bibliotecas privadas de las principales familias coloniales como las de Agueda Flores, Gonzalo Martínez de Vergara, Bartolomé de Astorga, Francisco Rodríguez de Ovalle, Alonso del Campo de Lantadilla, Francisco González de Elgueta, Nicolás Octavio y Francisco Escalante. Para el siglo XVIII se mencionan las del jesuita Alonso de Guzmán, Francisco Ruíz de Berecedo, José Valeriano de Ahumada, José Pérez García, José Antonio Errázuriz, Judas Tadeo Reyes, José Miguel Infante, Antonio Garfías, José Antonio Rojas, Manuel de Salas, José María Rozas, Manuel Antonio Talavera, Francisco Antonio Pinto, Ventura Blanco Encalada, Juan Enrique Rosales, Francisco Antonio Pérez, Juan Egaña, José Antonio de Ovalle, Agustín Díaz, José Gregorio Argomedo, y la de los Obispos Rodríguez Zorrilla, Elizondo, Martín de Villodres, entre otros (Martínez Baeza, S. 1982: 15).

Existieron además otras bibliotecas en instituciones como la Real Universidad de San Felipe, donde fueron depositados los libros y documentos de la Compañía de Jesús, expulsada de Chile en 1767, como también en la Real Audiencia, en el Real Tribunal del Consulado, en la Capitanía General, en el Hospital San Juan de Dios, en las Cajas Reales, en el Cabildo de Santiago, y en el Cabildo Eclesiástico (Martínez Baeza, S. 1982: 16).

Después de la Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810, el Senado de 1813 nombra una Junta de Gobierno presidida por José Miguel Carrera, que estaba integrada además por José Miguel Infante, el comandante del Cuerpo Cívico Agustín de Ezaguirre y el Subdecano del Tribunal de Apelaciones Francisco Antonio Pérez. Esta Junta de Gobierno, acogió la idea de Juan Egaña, Presidente de la Junta de Educación, que además estaba integrada por José Francisco Echaurren y Juan José Aldunate, de crear el 10 de agosto de 1813 un Instituto Nacional que debería incluir una librería, un museo, un jardín botánico, un instituto

de mineralogía, un gabinete de anatomía y otro de zoología, siguiendo de esta manera los ejemplos europeos de la ilustración como también de Estados Unidos. Pocos días después, el 19 de agosto de 1813, la Junta de Gobierno lanza una proclama creando la Biblioteca Nacional:

*“El Gobierno a los Pueblos. Ciudadanos de Chile: al presentarse un extranjero en el País que le es desconocido, forma la idea de su ilustración por las Bibliotecas, y demás institutos literarios que contiene; y el primer paso que dan los Pueblos para ser sabios, es proporcionarse grandes Bibliotecas. Por esto el Gobierno no omite gasto, ni recurso para la Biblioteca Nacional...” (Monitor Araucano, 19 de agosto de 1813).*

En la misma proclama se convoca a los ciudadanos a donar libros, cuya lista de benefactores aparece publicada en el periódico el Monitor Araucano del 30 de septiembre de 1813. Durante la Reconquista Española de 1814 a 1817, tales libros fueron depositados en la Real Universidad de San Felipe, hasta que las nuevas autoridades patriotas, mediante decreto del 5 de agosto de 1818, designaron a Manuel de Salas como primer bibliotecario y protector de la Biblioteca Nacional (Martínez Baeza, S. 1982: 18-20; Rodríguez, H. 1982:15).

La Biblioteca Nacional se nutrió así de los libros de los benefactores patriotas, de los libros y documentos de la antigua Compañía de Jesús y de los que tenía la propia Universidad Real de San Felipe en su primera etapa, estando su ubicación inicial en el edificio de la Aduana de Santiago, donde fue instalada mediante un decreto del 19 de julio de 1823. El sucesor de Manuel de Salas por pocos meses fue Manuel José Gandarillas y Guzmán, asumiendo posteriormente Francisco García-Huidobro Aldunate, quien ocupó el cargo desde 1825 a 1852, participando en la elaboración de la Ley de Imprentas, en la Ley de la Propiedad Intelectual, en la adquisición de bibliotecas particulares y en la instalación de la Biblioteca Nacional en otro edificio más amplio y apropiado, ubicado en la esquina de las calles Catedral y Bandera de Santiago. En 1852, mediante Decreto del Gobierno, la Biblioteca Nacional pasa a depender de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, creada en 1842, en base a la antigua Universidad Real de San Felipe, hasta que en 1879 se entregó su tuición al Consejo de Instrucción Pública del Ministerio de Instrucción de la época, actual Ministerio de Educación, que la administró hasta 1929. En este período ocuparon el cargo de Director de la Biblioteca Nacional importantes historiadores, políticos y escritores como Vicente Arlegui, Ramón Briceño, Luis Montt y Carlos Silva Cruz. En 1929, mediante el Decreto Supremo N° 5.200 del nuevo Ministerio de Educación Pública, se crea la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), la cual pasó a administrar la antigua Biblioteca Nacional, junto al Archivo Histórico Nacional creado en 1925, el Museo Histórico Nacional, El Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Bellas Artes y los Museos de Valparaíso, Concepción y Talca,



creados todos durante el siglo XIX y comienzos del XX, estableciendo así la columna vertebral de los servicios del patrimonio del Estado hasta la actualidad, en lo que corresponde a bibliotecas, archivos y museos (Martínez Baeza, S. 1982: 25-63).



Sede de la Biblioteca Nacional en 1910 en el centro de Santiago. Foto del Archivo del Museo Histórico Nacional

La Biblioteca Nacional se transformó a lo largo del siglo XIX en la institución que albergó la mayor y mejor colección bibliográfica del país, tanto de manuscritos como de impresos, impulsando una serie de iniciativas tendientes a registrar e imprimir todos los documentos más importantes de la historia nacional y la edición de revistas especializadas. En la Biblioteca Nacional fue donde los principales intelectuales e historiadores lograron parte de su formación, donando posteriormente algunos de ellos sus obras, documentos y legados bibliográficos a esta institución, como ocurrió con el historiador y bibliófilo José Toribio Medina (1852-1930), quien donó su biblioteca que incluía una de las colecciones bibliográficas y de documentos más importantes sobre la historia de América y Chile, con 22.000 volúmenes y 500 tomos manuscritos, a la cual se le han ido adicionando documentos ([www.dibam.cl/biblioteca\\_nacional/sala\\_medina.htm](http://www.dibam.cl/biblioteca_nacional/sala_medina.htm)).

Si bien la Biblioteca Nacional se centró en acrecentar su valioso patrimonio bibliográfico y ponerlo a disposición del público, siendo este su objetivo y propósito



central, esta institución representó, junto con los museos nacionales, el símbolo de la ilustración que buscaba el Estado republicano, que comenzó a formarse en 1810, y la imagen que quería proyectar la oligarquía y la elite intelectual, tanto hacia dentro como fuera del país, de que Chile era una nación civilizada y moderna, que estaba en la senda de los países como Francia, Inglaterra y Alemania, constituían su modelo a imitar por excelencia.



Biblioteca Nacional en la actualidad. Fotografía del Archivo de la Biblioteca Nacional

Es así como en el contexto del primer centenario de Chile como país independiente y con ocasión del primer centenario de la Biblioteca Nacional, que el Gobierno del Presidente Ramón Barros Luco propuso al Congreso Nacional una Ley para construir un nuevo edificio, a imagen y semejanza de las grandes bibliotecas de Europa. Este edificio comenzó a construirse en 1913, siendo emplazado en plena Alameda Bernardo O'Higgins, la principal vía de la capital y frente al Cerro Santa Lucía, en pleno centro de Santiago, en el lugar donde estaba el antiguo Monasterio de las Monjas Clarisas, el cual fue demolido para tal efecto, luego de ser adquirido por el Gobierno<sup>48</sup>. El proyecto fue encargado a la Inspección General de Arquitectura de la Dirección General de Obras Públicas,

<sup>48</sup> No se puede dejar mencionar el hecho de la demolición del monasterio, importante obra colonial y, según dejan ver las fotografías de la época, en buen estado de conservación, lo cual demuestra la fuerza de la ideología imperante de imponer la nueva obra arquitectónica y su significado republicano sobre la antigua que representaba el pasado colonial

entidad que tuvo que seleccionar entre tres proyectos de arquitectura: el del arquitecto francés residente en Chile Emile Doyere, el del arquitecto chileno de origen francés y formado en París Emile Jecquier y el del arquitecto chileno Gustavo García del Postigo, siendo el proyecto de este último el aprobado. El programa original del edificio proyectado no solo incluía a la Biblioteca Nacional, sino también al Museo Histórico Nacional y al Archivo Nacional, cuyas instalaciones se construyeron, en etapas sucesivas, en las siguientes décadas, aunque nunca se concluyó totalmente la obra original proyectada. El estilo de esta edificación se inspiró en los postulados de la Escuela de Bellas Artes de París (Martínez Baeza, S. 1982: 52-56; Montandón, R. y Pirotte, S. 1990).

## **El Primer Museo Nacional**

Hemos planteado anteriormente que la Junta de Gobierno de 1813 decretó crear junto con el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional un Museo Nacional, el cual tuvo como base una colección mineralógica, en cuya sala se realizó la ceremonia de apertura del Instituto Nacional (Monitor Araucano, 1813, N° 50). De dicho museo no hay más antecedentes hasta que el Director Supremo Bernardo O'Higgins nombró el 22 de mayo de 1822 al francés José Francisco Dauxion Labaysee como Director del Museo Nacional<sup>49</sup>.

En 1830 el Gobierno, a través del Ministro del Interior Diego Portales, firma un contrato con el naturalista francés Claudio Gay, quien había llegado a Chile en 1828, para que realice un viaje científico por todo el territorio, publique una obra con todas sus investigaciones, colecte especímenes de la flora y fauna nacional y tenga a su cargo el Museo Nacional. Para apoyar a Claudio Gay el Gobierno nombró una comisión integrada por Vicente Bustillos, José Bezanilla y Francisco García-Huidobro (Rodríguez, H. 1982:16). En esta época el Museo dependía de la antigua Universidad Real de San Felipe. Al concluir Claudio Gay su trabajo en Chile el Museo Nacional era dirigido por Francisco García-Huidobro, que a su vez era Director de la Biblioteca Nacional, estando este Museo en un edificio ubicado en la esquina de las calles Bandera y Catedral y aledaño a la Biblioteca Nacional.

Posteriormente el Museo Nacional fue dirigido por Andrés Antonio Gorbea, Francisco de Borja Solar y Filiberto Germain, ocupando estos tres últimos al mismo tiempo el decanato de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, de cuya Facultad dependía el Museo desde 1842, fecha en que se crea la Universidad de Chile. En 1853 es nombrado como Director del Museo Nacional el alemán Rodolfo Amando Philippi, quien era Doctor en Medicina

---

<sup>49</sup> Mayores antecedentes al respecto se encuentran en: "La Comisión de Educación a la Junta de Gobierno. Proyecto de un Museo de Ciencias." *Sesiones de los Cuerpos legislativos de la República de Chile*, Tomo I, Santiago Imprenta Cervantes, 1987.

de la Universidad de Berlín, y estuvo en el cargo hasta 1892. En este período se hicieron numerosas expediciones y se obtuvieron varias donaciones de colecciones, logrando finalmente instalarse el Museo, en enero de 1876, en el edificio construido en forma expresa para la Exposición Internacional de Santiago de 1875, el cual se emplazó en la Quinta Normal de Santiago y fue diseñado por el arquitecto francés Paul Lathaud, siguiendo un modelo ecléctico o académico en dicha obra (Mostny, G. y Niemeyer, H. 1983: 17-30; Rodríguez, H. 1982:16).



El Museo Nacional de Historia Natural en 1910. Fotografía Archivo Museo Histórico Nacional

El Museo Nacional, además de las colecciones de ciencias naturales y antropológicas, incluyó también colecciones históricas y una pinacoteca. A lo largo del siglo XIX se incorporaron como investigadores naturalistas alemanes, ingleses y franceses, destacándose entre ellos el taxidermista alemán Federico Albert, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, quien realizó importantes investigaciones y proyectos en el área forestal, en la instalación de pisciculturas y en el control de la erosión del territorio, ocupando diversos cargos técnicos en el Gobierno, siendo además uno de los principales impulsores de la legislación forestal de Chile (Cabeza, A. et al 1991).

Durante la segunda mitad del siglo XIX el Museo Nacional, que pasó a denominarse Museo Nacional de Historia Natural, logró tener una adecuada instalación física, pero siempre estuvo escaso de recursos y personal. No obstante su aporte a la ciencia nacional fue importante, desarrollándose allí un fecundo núcleo de investigación que irradió a las universidades, particularmente en las áreas de la botánica, mineralogía, paleontología, zoología, entomología y arqueología, teniendo además un importante rol en la exhibición de sus colecciones a la población escolar de todas las generaciones hasta el día de hoy.

Durante el siglo XX este Museo fue dirigido sucesivamente por Eduardo Moore (1910-1927), Ricardo E. Latcham (1928-1943), Enrique Gigoux (1943-1948), Humberto Fuenzalida (1949-1963), Grete Mostny (1964-1982) y Hans Niemeyer (1982-1990), quienes se preocuparon de incrementar sus colecciones, establecer contactos con otros museos del mundo y de publicar en diversas revistas especializadas, creadas por el propio museo, los resultados de las investigaciones realizadas por ellos y el equipo científico del Museo, además de invitar a participar a otros investigadores nacionales y extranjeros.<sup>50</sup>

El Museo Nacional de Historia Natural pasó desde 1929 a depender de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y ha ocupado hasta hoy un lugar especial en la formación de los estudiantes de Santiago y regiones, tanto por sus colecciones como por su emplazamiento al interior de la Quinta Normal, que constituye uno de los parques urbanos de la capital. Este Museo, además de conservar las mejores colecciones de historia natural, logró ser el centro de colecciones de objetos arqueológicos del país, siendo por tanto un lugar de formación complementaria de arqueólogos y, desde donde, particularmente por la obra de arqueólogos como Ricardo Latcham, Grete Mostny, Hans Niemeyer, Eliana Durán, Rubén Stehberg y otros especialistas, se lanzaron continuas voces para la conservación y protección del patrimonio arqueológico nacional.

### **Las Primeras Exposiciones Históricas, Museos Históricos y la Formación del Museo Histórico Nacional**

Si bien el Museo Histórico Nacional tiene varios antecedentes en museos, colecciones y exposiciones históricas durante el siglo XIX y comienzos del XX, esta institución es creada oficialmente por el Gobierno en 1911, teniendo como objetivos centrales conservar las principales colecciones históricas del país y darlas a conocer a todos los chilenos. Entre sus principales impulsores debemos mencionar a los historiadores y políticos Benjamín Vicuña Mackenna, Miguel Luis Amunátegui y Luis Montt, quienes respectivamente, fueron los ideólogos de la Exposición del Coloniaje y del Museo Histórico del Cerro Santa Lucía en la década de 1870; de la Galería Histórica del Museo Nacional en 1876; y de la Exposición Histórica del Centenario de la Independencia en 1910 (Rodríguez, H. 1982: 15).

Las anteriores iniciativas tuvieron sus precursores y un ambiente favorable en el movimiento intelectual que tuvo lugar en la década de 1840 a 1850, bajo el Gobierno del Presidente Manuel Bulnes, donde personajes como Andrés Bello,

---

<sup>50</sup> Las publicaciones del Museo Nacional de Historia Natural han tenido una larga continuidad, siendo su aporte científico muy valorado. Entre ellas debemos mencionar los Anales del Museo Nacional de Santiago, cuyo primer tomo fue publicado en 1891, el Boletín del Museo y el Noticiario Mensual, entre otras publicaciones ocasionales.

Mariano Egaña, Manuel Montt, José Gandarillas, Pedro Palazuelos y Miguel de la Barra, comprendieron y promovieron el rol del Estado en la creación y difusión del saber, a través de la ciencia, la historia y el arte. Inspirado en estos ideales, Miguel Luis Amunátegui escribió en 1849 un artículo sobre las bellas artes en Chile, donde resaltó la importancia de los objetos del pasado como bienes que tenían que conservarse. Veinte años después, en 1869, el arquitecto Daniel Barros Grez, escribió un artículo en el cual propuso crear una Galería de las Bellas Artes y un Museo de Costumbres Nacionales donde: *“...las generaciones venideras aprenderían de él la manera de ser de sus progenitores, y allí verían la historia de los adelantos del país”* (Rodríguez, H. 1982:17).

Pero fue Benjamín Vicuña Mackenna, quien como Intendente de Santiago en 1872, planteó directamente la idea de crear un Museo Histórico para Santiago, para lo cual estaba inspirado en los museos y exposiciones que observó en Francia, España, Inglaterra e Italia previamente. La primera de estas exposiciones, dedicada a las bellas artes nacionales, fue inaugurada por Vicuña Mackenna en Mercado Central de Santiago, con ocasión de las fiestas patrias de septiembre de 1872. El Intendente de Santiago había iniciado diversas obras públicas para otorgarle a la capital un carácter más moderno y semejante a las ciudades europeas de la época, tales como paseos, parques, nuevas edificaciones y otras obras públicas. Animado con los resultados de su primera exposición de arte, ideó otra de carácter histórico para las festividades patrias de 1873, nombrando para su organización una comisión integrada por Monseñor Ignacio José Víctor Eyzaguirre, Juan Vicente de Mira, Marcos Maturana, Juan Nepomuceno Iñiguez, Maximiniano Errázuriz, Francisco de Paula Figueroa, entre otros personajes, cuya tarea era coleccionar y realizar una exhibición de objetos desde la Conquista Española hasta 1841. El decreto de creación de la comisión señalaba que:

*“El agrupamiento inteligente de todos estos objetos y su acertada clasificación por épocas puede constituir una especie de historia viva de nuestra existencia nacional y marcar por sus propios contrastes el grado admirable de bienestar y producción, de holganza y de riqueza que la República ha alcanzado en poco más de medio siglo de libertad y vida propia.”*(Rodríguez, H. 1982:17).

Es interesante destacar el pensamiento de Vicuña Mackenna sobre esta exposición expresado en una carta dirigida a Monseñor Ignacio José Víctor Eyzaguirre, presidente de la comisión organizadora de la Exposición del Coloniaje de 1873, quien escribió el 1 de marzo de ese año:

*“Bien sabe UD. por poseer algunas, cuántas preciosas reliquias de arte nos ha dejado el coloniaje y cuán a prisa se dispersan a los cuatro vientos de la incuria y el desdén, los pocos objetos de uso que la indiferencia habitual de nuestra raza y el desapego por lo antiguo que han producido en nuestros*

*hábitos lo súbito de las mudanzas políticas y sociales, encargadas en el espacio de medio siglo corrido desde 1820 de poner un pueblo nuevo donde antes había existido otro completamente diverso*<sup>51</sup>. Agrupar estos tesoros mal conocidos, clasificar esos utensilios humildes pero significativos, reorganizar en una palabra la vida exterior del coloniaje con sus propios ropajes, y prestarle, mediante la investigación y el método, una vida pasajera para exhibirla a los ojos de un pueblo inteligente pero demasiado olvidadizo, he aquí la mira filosófica de este propósito...”(Rodríguez, H. 1982: 17).

En dicha exposición se exhibieron alrededor de 600 objetos: retratos de familia, muebles, carruajes, trajes, tapices, objetos religiosos, utensilios, joyas, condecoraciones, monedas, armas y manuscritos, a las cuales se agregaron colecciones arqueológicas del Museo Nacional y otras colecciones históricas que conservaban diferentes instituciones públicas y religiosas, además de objetos proporcionados por diversos personajes.<sup>52</sup> Si bien inicialmente la exposición estaba programada para ser exhibida en el Teatro Municipal de Santiago, la cantidad de objetos reunidos llevó a los organizadores a instalarla en el antiguo Palacio de los Gobernadores, aledaño a la Intendencia, en la Plaza de Armas, el cual fue reparado para la ocasión. La exposición fue inaugurada el 17 de septiembre de 1873 con la asistencia del Presidente de la República Federico Errázuriz, ministros, numerosas autoridades y público, recibiendo elogios y buenos comentarios en la prensa y publicaciones de la época<sup>53</sup>. Vicuña Mackenna aprovechó la oportunidad de la buena acogida de la exposición para solicitar a todos los que contribuyeron con objetos su donación para crear un museo histórico, accediendo muchos de ellos a la petición del Intendente (Rodríguez, H. 1982:18).

La ubicación elegida por Benjamín Vicuña Mackenna para instalar dicho museo histórico fue el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía, antigua edificación colonial,

---

<sup>51</sup> El destacado es del suscrito.

<sup>52</sup> Un listado de los principales contribuyentes a la exposición aparece en las siguientes publicaciones: Vicuña Mackenna, B. (1873). *Exposición del Coloniaje*. Imprenta de la Librería del Mercurio, Santiago; y Vicuña Mackenna, B. (1873). *Catálogo razonado de la Exposición del Coloniaje celebrada en Santiago de Chile en septiembre de 1873, por uno de los miembros de su comisión directiva*. Imprenta de Sud América, Santiago.

<sup>53</sup> Por ejemplo Artemón Frías escribió: “¿La Exposición del Coloniaje será de una importancia transitoria, bastante solo para satisfacer la vanidad y curiosidad del momento, dejando para el provenir solamente el recuerdo, que es tan fácil de olvidar al día siguiente, o ella ha de producir resultados que perpetúen su memoria y la de su promotor por un hecho latente vivo, que puedan admirar las generaciones venideras? ¿Tantos objetos de mérito histórico que se exhiben y cuya conservación peligran en la bruma del indiferentismo de muchos por lo que son las glorias nacionales, servirán de fundamento para un Museo de Antigüedades?” (Frías, A. “La Exposición del Coloniaje, resultado que debe producir”. En *Revista Las Bellas Artes*, N° 8, Santiago, septiembre 1873).



que durante la Reconquista Española había sido utilizada como prisión y cuartel militar. El Castillo Hidalgo fue transformado y habilitado para recibir las colecciones, siendo inaugurado el Museo Histórico por el propio intendente en septiembre de 1874. De esta manera Vicuña Mackenna logró no solo llamar la atención de las autoridades y de la elite de Santiago sobre la importancia de conservar parte del pasado y de exhibirlo para educación de todos, sino también darle un sentido nacional y de continuidad histórica al presente de entonces con el período colonial hispano, que durante décadas había sido visto e interpretado políticamente como un pasado oscuro y de dominación, en oposición a la nueva nación que se construía a partir de la gesta de la Independencia (Vicuña Mackenna, B. 1874; 1875).

Esta iniciativa, proveniente de un político e intelectual liberal de la elite santiaguina, unida a los demás proyectos modernizadores de la capital que llevó adelante, tuvo repercusiones en determinados grupos ilustrados y de jóvenes con mayor sensibilidad por el arte y la historia, que años más tarde ocuparían cargos de poder en el Gobierno. Sin embargo, no pudo contrarrestar la fuerza de las corrientes modernistas de entonces, que todavía consideraban el pasado colonial como una carga, que debía ser ideológicamente y materialmente reemplazado, por los modelos europeos considerados superiores y dignos de imitar. Lamentablemente, al morir Vicuña Mackenna en 1886, ninguna autoridad veló por el museo que había creado y sus colecciones se dispersaron, transformándose el Castillo Hidalgo, a comienzos del siglo XX, en una bodega municipal (Rodríguez, H. 1982:23).



Museo Histórico del Cerro Santa Lucía, 1874      Sala de exposición del Museo Histórico, 1874.  
Fotografías del libro de Vicuña Mackenna, B. (1874)

En 1876 el Ministro de Instrucción Pública Miguel Luis Amunátegui, que años atrás había publicado artículos sobre la importancia de las bellas artes<sup>54</sup>, creó mediante

<sup>54</sup> Lo que ocurre en Chile al respecto en las siguientes décadas tiene también su correlato en procesos similares que tienen lugar en otros países americanos que tienen su inspiración en Europa y especialmente en Francia. Al respecto es importante la obra de Gutiérrez, Ramón y Gutiérrez, Rodrigo (1997).

decreto una Galería Histórica en el Museo Nacional, encargando tal tarea a una comisión en la cual participaron entre otros Francisco de Paula Figueroa y el coronel Marcos Maturana, quienes ya habían participado en la organización de la Exposición del Coloniaje, y cuyo objetivo era reunir retratos de personajes notables de la historia de Chile, que existían tanto en oficinas públicas y en casas de particulares, y la recolección de diversos objetos históricos como las banderas españolas obtenidas en la Guerra de la Independencia. Además se encargó a diversos artistas la confección de retratos de personajes o de eventos que debían ser recordados. Esta iniciativa buscaba dar reconocimiento y rendir honores a los servidores públicos que habían contribuido a la Independencia y a la formación del Estado republicano, pero incorporando también a los personajes más destacados de la Conquista y la Colonia, incluso de los líderes indígenas que lucharon en contra de los españoles por preservar su libertad, como por ejemplo Caupolicán (Amunátegui, M. 1876). Lamentablemente también parte de esta colección fue dispersada, aunque una buena parte de ella fue a parar al Museo Nacional de Bellas Artes creado en 1880. La Guerra del Pacífico de 1879, que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia, dio motivo también para crear una colección de objetos históricos que fueron considerados trofeos de guerra, desde el primer año de la contienda. Es así como el Ministro de Guerra General Basilio Urrutia ordenó el 1 de julio la creación de un Museo de Armas Antiguas en el Cuartel de Artillería de Santiago, instruyéndose a las autoridades civiles y militares que recolectaran las banderas, estandartes, armas y objetos que se capturaran del bando enemigo, los que debían ser depositados en un museo que guardara la memoria de dicha gesta (Rodríguez, H. 1982:23).

Por otra parte, la cercanía de la celebración del Centenario de la Independencia en 1910, creó un ambiente muy favorable para rescatar e impulsar las iniciativas precursoras que promovieron los primeros museos, galerías y exposiciones. En este contexto, un personaje clave en la primera década del siglo XX fue Luis Montt, hermano del Presidente de la República Pedro Montt, quien desde su cargo como director de la Biblioteca Nacional, convocó a varios historiadores, intelectuales y políticos para organizar en el contexto de las celebraciones del Centenario de 1910<sup>55</sup> una exposición histórica (Molinare, N. 1910). Esta exposición fue financiada mediante una ley<sup>56</sup> y posteriormente sus colecciones pasaron a ser la base del Museo Histórico Nacional, creado mediante decreto del Presidente Ramón Barros Luco, el 2 de mayo de 1911. La comisión organizadora de la exposición histórica fue presidida por Joaquín Figueroa e inaugurada en las

---

<sup>55</sup> La Ley 2.335 del 25 de julio de 1910, autorizó al Presidente de la República para invertir \$ 3.500.000 pesos en los festejos del Centenario y \$ 500.000 pesos para levantar monumentos. Un detalle de la discusión de estas leyes y otras relativas a monumentos conmemorativos aparecen en el *Boletín de las Sesiones Extraordinarias de la Cámara de Diputados* de 1910.

<sup>56</sup> Ley N° 2.274 de 1910, que otorga \$ 50.000 pesos para la celebración de una exposición histórica nacional en el mes de septiembre de 1910, la cual es discutida en el Consejo de Estado, en su sesión del 5 de marzo de 1910. Archivo del Consejo de Estado, 1910, Archivo Nacional, Santiago.

fiestas del Centenario por su hermano Emiliano Figueroa, que ocupaba el cargo de Vicepresidente de la República, en los salones del palacio de José Tomás Urmeneta, en pleno centro de Santiago, que fue arrendado para tal objeto por el Gobierno (Rodríguez, H. 1982: 24-26).

El éxito de la exposición y el contexto de las celebraciones del Centenario permitieron la creación del Museo Histórico Nacional, el cual se instaló en las dependencias del edificio recién construido para albergar al Museo Nacional de Bellas Artes. Los objetos reunidos, más otros donados por particulares, fueron la base de la colección del citado museo, a la cual se añadieron las colecciones del Museo Militar, las que aún existían del Museo del Cerro Santa Lucía y las que había en la Galería Histórica del Museo Nacional. A dicho museo se anexó también, como una sección del mismo, el Museo de Etnología y Arqueología recientemente creado y que funcionaba en un local aledaño a la Biblioteca Nacional. Una vez construido el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, el citado Museo Histórico Nacional pasaría ocupar uno de sus pabellones, hasta que en la década de 1980 fue trasladado al restaurado edificio colonial de la Real Audiencia emplazado en la Plaza de Armas de la capital.

El Museo Histórico Nacional, creado por las elites políticas e intelectuales de principios del siglo XX, incorporó el pasado prehispánico, colonial y republicano, pero su exhibición estuvo orientada durante todo el siglo XX a contar principalmente una visión elitista y heroica de la formación de la nacionalidad chilena, especialmente a través de los personajes de la clase gobernante, de las principales familias, de la gesta de la Independencia y de las guerras en que Chile participó en el siglo XIX.

En tal sentido, el museo tuvo un rol educativo fundamental en la noción de la nacionalidad chilena, que tanto el Estado como las elites gobernantes, tenían en ese entonces. Sólo a finales del siglo XX y dentro de un contexto democrático, los nuevos directores del Museo Histórico Nacional elaboraron un guión y una nueva exhibición que diera cuenta de un proceso mucho más complejo y diverso de la historia nacional, en la cual no solo eran actores los grupos dirigentes, sino también la sociedad en todo su conjunto, incorporando procesos sociales y diferentes visiones de la historia nacional. No obstante lo anterior, los directores de dicho museo a lo largo del siglo XX: Aureliano Oyarzún, Fernando Figueroa, Leopoldo Pizarro, Carlos Larraín, Arturo Sepúlveda, Hernán Rodríguez, Sofía Correa y Bárbara de Vos, lograron atraer y vincular al museo importantes intelectuales y científicos, nacionales y extranjeros, que acrecentaron sus colecciones y contribuyeron a la conservación del patrimonio histórico nacional.



Museo Histórico Nacional de Santiago  
Fotos de A. Cabeza



Exhibición del Museo Histórico Nacional.

### **Los Primeros Monumentos Conmemorativos y las Normas Constitucionales relativas al Patrimonio**

Como hemos visto anteriormente el concepto de monumento, en su sentido conmemorativo, proviene de la antigüedad clásica occidental, aunque también está presente en el período prehispánico americano, aunque muy ligado a la religión y al poder político. Durante el período colonial chileno tenemos escasos antecedentes de monumentos conmemorativos. Quizás el primero de ellos fue la pirámide que el Gobernador Domingo Ortiz de Rozas (1745-1755) mandó colocar al reconstruir los tajamares del río Mapocho en 1749. Este hito conmemorativo habría estado situado en el sector de la actual Plaza Baquedano de Santiago y tenía inscripciones con los nombres del Rey Fernando VI, del Gobernador de Chile y del constructor, más la fecha de inicio y conclusión de los trabajos. Dicho obelisco o pirámide, aparentemente, dio el nombre al primer paseo por el borde de los tajamares conocido como Paseo de la Pirámide que mencionan algunos investigadores, pero no tenemos mayores evidencias o la fecha de su destrucción (Voionmaa, L. 2004:26-27).

La construcción de monolitos u obeliscos con fines conmemorativos de ciertas obras públicas no era algo extraño en la América española<sup>57</sup>. Es importante destacar aquí que en este mismo período se construyeron dos monumentos cerca de Quito para conmemorar la misión geodésica franco-española al Ecuador de 1737-1746, que buscaba medir la longitud del arco de un grado de meridiano para comprender la forma y magnitud de la Tierra, cuyos datos, unidos a la expedición similar realizada en el norte de Europa, lograron demostrar la teoría de Newton de

<sup>57</sup> Como antecedentes tanto para Iberoamérica como España importa tener presente los trabajos realizados por Gutiérrez, R. (2004) y Reyero, C. (1999) respectivamente.

que nuestro planeta no era una esfera perfecta y que estaba achatado en los polos.

Para celebrar este hecho, los miembros franceses de la expedición, lograron la autorización de la Audiencia de Quito para construir dos pirámides en el lugar exacto de la última medición en 1741, colocando en ellas una placa con una inscripción que resaltaba el papel de los franceses por sobre el de los españoles que participaron en ella, los célebres oficiales de marina Jorge Juan y Antonio Ulloa. Debido a ello, los marinos españoles iniciaron un pleito judicial de varios años que solo fue resuelto en 1746, cuando la Audiencia de Quito ordenó agregar en la inscripción el emblema de la corona española junto a las flores de lis, además de los nombres de los dos oficiales españoles. Sin embargo este pleito no terminó allí, ordenando finalmente la corona española, a través del Marqués de Ensenada en 1746, que las dos pirámides debían ser destruidas y construirse otras, en las cuales se resaltó a la corona española mencionando el nombre del rey Felipe V y destacando el trabajo de los dos científicos españoles. Posteriormente, al celebrarse el centenario de la expedición, el presidente del Ecuador ordenó en 1837 levantar de nuevo los dos monumentos que estaban en ruinas. Finalmente en 1936, al conmemorarse el bicentenario de tal expedición, el Ecuador construyó el monumento equinoccial (Soler, E. 2002:207-213; Juan, J. y Ulloa, A. 2011). Por cierto este hecho no debió pasar desapercibido por las demás autoridades coloniales españolas.

Al respecto también se debe mencionar el monolito que se construyó por orden del Gobernador de Chile Ambrosio O'Higgins, en un lugar aledaño a las nuevas obras de los Tajamares del río Mapocho, que se construyeron a finales del siglo XVIII, en la actual comuna de Providencia de Santiago ((Voionmaa, L. 2004). Tal monumento fue destruido entre 1927 y 1937 y después se construyó una réplica en 1950, la que todavía existe. El monolito original tuvo una placa que logramos ubicar en el Museo Histórico Nacional, que tiene la siguiente inscripción:

*“D.O.M.  
Reinando Carlos IV  
Gobernando este Reino  
Don Ambrosio O'Higgins Vallenar  
Mandó hacer estos tajamares. Año 1792”.*





Monolito Tajamares 1910    Reconstrucción Monolito    Placa original del Monolito  
Fotografía Archivo Museo Histórico Nacional. Las dos siguientes de A. Cabeza



Los Tajamares del río Mapocho y monolito. Cuadro del pintor italiano Giovatto Mollinelli, 1860

El Gobernador Ambrosio O'Higgins también mandó instalar otro monolito o pirámide para dejar memoria de la construcción del camino de Santiago a Valparaíso que se realizó a finales del siglo XVIII. Este monolito, que en 1929 estaba emplazado en la esquina de las calles Brasil y San Pablo de Santiago, tenía la siguiente inscripción:

*“El Excelentísimo Señor Don Ambrosio O'Higgins, Conde de Vallenar, mandó construir este camino, Año 1795.” (Muñoz, J. 1929: 329-346)*





Monolito del camino a Valparaíso. Foto de A. Cabeza

Hoy día, este monolito se encuentra en la esquina de las calles San Pablo y Almirante Barroso, a donde fue trasladado de su posición original por el municipio de Santiago y constituye el monumento conmemorativo más antiguo de Santiago y Chile.

El Gobernador de Chile Ambrosio O'Higgins también había mandado construir túmulos funerarios en Valparaíso y Santiago en julio 1789, con motivo de las exequias del Rey Carlos III.<sup>58</sup> Con el mismo sentido conmemorativo se instalaron placas en algunos de los edificios y obras civiles construidos por la administración colonial española, como el existente en el frontis del actual Museo Histórico Nacional, que originalmente fue la sede de la Real Audiencia en la Plaza de Armas de Santiago y que dice:

*“Reinando  
el S.D. Carlos IV  
Gobernando P.S.  
Este Reino  
D. Lvis Mvñoz de  
Gvzman  
Se hizo esta obra  
Año de 1807”*

---

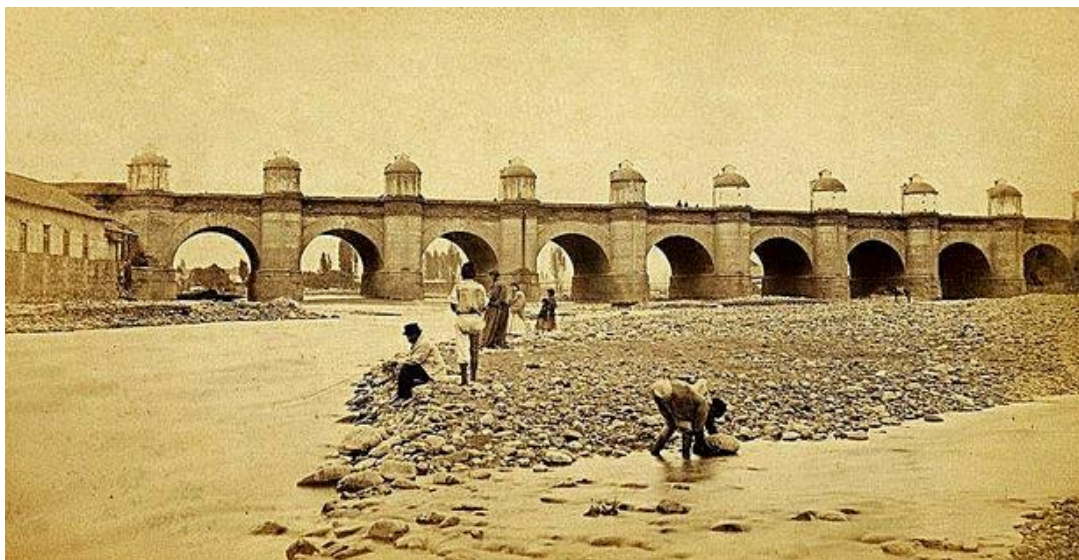
<sup>58</sup> Hemos encontrado este dato en el catálogo de archivos españoles cuyo diseño está registrado bajo el código MP-Perú\_Chile 117, en el sitio web <http://pares.mcu.es>.



Placa del frontis del Museo Histórico Nacional, Antigua Real Audiencia de Santiago. Fotos de A. Cabeza

Al respecto también podemos mencionar la placa conmemorativa de piedra que hizo poner el Corregidor de Santiago Luis Miguel Zañartu en el puente de Cal y Canto sobre el río Mapocho al terminar su construcción en 1782, que estaba en su muralla oriental, a la altura de la baranda, y que tenía 90 cm de alto, 80 de ancho y 29 de espesor, con la siguiente inscripción:

*“D.O.M. D. Luis Manuel de Zañartu entre muchos servicios hizo este puente año de MDCCLXXXII”. (Simonetti, S. y Cabeza, A. 1998)*



El Puente de Cal y Canto sobre el río Mapocho de la ciudad de Santiago en 1879. Foto del Archivo del Museo Histórico Nacional

Es importante destacar que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el concepto de monumento ya estaba siendo tratado no solo desde el punto de vista conmemorativo, sino también como bienes del pasado cuya existencia debía ser registrada, conservada y cautelada por la autoridad. Al respecto debemos mencionar para España la Real Cédula de 6 de julio de 1803, cuyo objeto era la conservación del patrimonio arqueológico y monumental del reino, la cual define el concepto de monumento de una manera muy amplia, incluyendo todo tipo de bienes culturales muebles e inmuebles de la antigüedad, encargando a la Real Academia de la Historia de España la tarea de su inspección, replicando de esta manera disposiciones similares de otros países europeos, como hemos visto anteriormente, y cuyos antecedentes encontramos en disposiciones papales del siglo XVI.<sup>59</sup>

La Independencia de Chile y la influencia que tuvieron la Revolución Francesa y previamente la Revolución de la Independencia de Estados Unidos, dieron el marco preciso para que las nuevas autoridades patriotas tomaran esta antigua tradición para recordar acontecimientos, ideas y personas a través de monumentos conmemorativos. Como veremos más adelante, la prerrogativa de autorizar su erección fue desde un comienzo considerado como un acto oficial del Gobierno, sea del poder ejecutivo en un comienzo y después del poder legislativo, lo cual fue avalado por las sucesivas normas constitucionales, desde la Constitución Política del Estado de Chile de 1823, y las de 1828, 1833, 1925, hasta la actual de 1980<sup>60</sup>.

Efectivamente, la Constitución de 1823, dictada bajo el Gobierno de Ramón Freire, establece como una de las atribuciones del Senado, en su Artículo 38, N° 6: *“Calificar el mérito, llevando un registro de los servicios y virtudes de cada ciudadano, para presentarlos y recomendarlos al Directorio, y proponerlos como beneméritos a la Cámara Nacional”*; indicando también en su Artículo 39 N° 9 que el Senado debe sancionar: *“El ceremonial, objetos, premios y honores de las fiestas nacionales”*; y en su N° 15 del mismo artículo: *“Para que premie y honre a los ciudadanos beneméritos”*. Mas adelante, la citada Constitución de 1823 crea

---

<sup>59</sup> En el anexo 1 reproducimos el texto de la Real Cédula de 1803 debido a su importancia histórica que rescató y analizó Jorge Maier Allende en el artículo: “El centenario de la Real Cédula de 1803. La Real Academia de la Historia y el inicio de la legislación sobre el Patrimonio Arqueológico Monumental en España”, aparecido en el *Boletín de la Real Academia de la Historia*, Volumen 200, Cuaderno 3, 2003, pp. 439-473.

<sup>60</sup> Hemos revisado los tres primeros textos constitucionales de Chile: El Reglamento para el arreglo de la autoridad ejecutiva provisoria de Chile de 1811, el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 y la Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818, sin encontrar norma alguna relativa a los monumentos conmemorativos o el otorgamiento de honores a los ciudadanos que se hayan destacado en el servicio a la nación. Una reseña de todas las constituciones y reglamentos constitucionales del Estado de Chile pueden consultarse en: [www.camara.cl/historia/archivo/resena.pdf](http://www.camara.cl/historia/archivo/resena.pdf) y [www.bcn.cl/lc/cpolitica/index.html](http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/index.html).

en su Artículo 251 un fondo para financiar estos premios a los ciudadanos, señalando en su Artículo 253 que: *“La sabiduría y los talentos literarios útiles a la Patria, serán premiados de este fondo, pero con la precisa y notoria calidad de probidad de costumbres y moralidad de opiniones...”*, indicando también en su Artículo 258 que:

*“Se establecerán cuatro fiestas cívicas en el año, decoradas de toda la pompa exterior e incentivos heroicos posibles; en cuyos días serán también honrados y premiados los que se hayan distinguido en las virtudes análogas a aquella fiesta. Ellas se dedicarán: 1.- A la beneficencia pública y prosperidad nacional. 2.- A la justicia, al amor y respeto filial, y a la sumisión a los magistrados. 3.- A la agricultura y artes. 4.- **A la gratitud nacional y memoria de los beneméritos en grado heroico, y defensores de la Patria.**”<sup>61</sup>*

Por su lado, la Constitución de 1828 en su Artículo 46, N° 12 indica que es prerrogativa del Congreso: *“Crear o suprimir empleos públicos, determinar o modificar sus atribuciones, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones o retiros; dar pensiones o recompensas pecuniarias o de otra clase, **y decretar honores públicos a los grandes servicios**”<sup>62</sup>.*

La Constitución de 1833 rescata la misma norma, estableciendo en su Artículo 37, N° 10 que solo mediante una Ley se puede: *“Crear o suprimir empleos públicos; determinar o modificar sus atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones; dar pensiones, **i decretar honores públicos a los grandes servicios.**”<sup>63</sup>* Esta Constitución estuvo en vigencia con algunas modificaciones durante todo el siglo XIX y comienzos del XX, hasta que se dicta la Constitución de 1925, que vuelve a repetir exactamente en su Artículo 44, N° 5 que solo en virtud de una Ley se puede: *“Crear o suprimir empleos públicos; determinar o modificar sus atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones; dar pensiones, **y decretar honores públicos a los grandes servidores**”<sup>64</sup>.*

Ninguna de estas constituciones indica norma alguna sobre la conservación del patrimonio natural o cultural como obligación del Estado o como una garantía constitucional de los ciudadanos, salvo señalar la Constitución de 1925 la libertad de enseñanza.

---

<sup>61</sup> El texto completo de la Constitución de 1823 puede consultarse en la Biblioteca del Congreso de Chile: [www.bcn.cl/lc/cpolitica/1823.pdf](http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1823.pdf). El destacado en negrillas es del suscrito.

<sup>62</sup> El texto completo de la Constitución de 1828 puede consultarse en la Biblioteca del Congreso de Chile: [www.bcn.cl/lc/cpolitica/1828.pdf](http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1828.pdf). El destacado en negrillas es del suscrito.

<sup>63</sup> El texto completo de la Constitución de 1833 puede consultarse en la Biblioteca del Congreso de Chile: [www.cecch.cl/htm/materiales/1833.pdf](http://www.cecch.cl/htm/materiales/1833.pdf). El destacado en negrillas es del suscrito.

<sup>64</sup> El texto completo de la Constitución de 1925 puede consultarse en la Biblioteca del Congreso de Chile: [www.cecch.cl/htm/materiales/1925.pdf](http://www.cecch.cl/htm/materiales/1925.pdf). El destacado en negrillas es del suscrito.

Esta situación cambia con la Constitución de 1980, que fue ideada por el Gobierno del General Augusto Pinochet y aprobada mediante un plebiscito, la que después ha tenido varias enmiendas, tanto durante el Gobierno Militar, como en los gobiernos democráticos después de 1990, siendo la última modificación el 2005.

Esta Constitución, en su Capítulo III, relativo a los derechos y deberes constitucionales, establece en su Artículo 19, N° 10, sobre el derecho a la educación que:

*“Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.”*<sup>65</sup>

Así también, en el mismo capítulo de los derechos y deberes constitucionales, en su Artículo 19, N° 8, se refiere al patrimonio natural:

*“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;”*

De esta manera, aparecen por vez primera como garantías constitucionales, normas sobre el patrimonio cultural y natural, aunque como veremos, previamente se dictaron varias leyes al respecto, tanto específicas como generales, especialmente a partir de la Constitución de 1925.

La norma constitucional para decretar honores públicos a los grandes servidores de la nación, que aparece en las constituciones a partir de 1823, como también la reglamentación de las festividades nacionales, que se dictó en la propia Constitución de 1823, fueron la base para que se promulgaran una serie de leyes y decretos que permitieron la instalación de monumentos conmemorativos, tanto a personas que se destacaron en el servicio a la Patria, como a los principales eventos o sucesos ocurridos a lo largo de la historia nacional.

Durante los primeros gobiernos patriotas de José Miguel Carrera y de Bernardo O'Higgins hubo la intención de construir monolitos o pirámides para simbolizar la Independencia Nacional, pero nunca fueron realizados. De igual manera, en el Gobierno de Ramón Freire se propuso construir un arco del triunfo, pero tampoco

---

<sup>65</sup> El texto completo de la Constitución de 1980 puede consultarse en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: [www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/242302.pdf](http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/242302.pdf).



se concretó. Seguramente en todas estas iniciativas, las circunstancias políticas y militares, la falta de recursos y lo breve de estos gobiernos, fueron la causa principal que impidió su realización. No obstante es digno de destacar la situación que ocurre con la creación del Cementerio General de Santiago en 1821, lugar en el cual se construyeron durante las siguientes décadas monolitos y monumentos para realzar los mausoleos y tumbas de los próceres de la patria y principales vecinos de la ciudad.

Sin embargo otro proyecto tuvo éxito, el del diplomático chileno en Europa Francisco Javier Rosales Larraín, gran admirador de la cultura francesa y que estaba radicado en París. Este diplomático encargó en 1827 al escultor italiano Francesco Orsolino, un monumento dedicado a la libertad americana. Dicho monumento, también conocido como la *“Pila de Rosales”*, ya que también cumplió la función de ser una fuente de agua, fue comprado por la Municipalidad de Santiago en 1829 y finalmente instalado en la Plaza de Armas de la capital en 1836. El monumento fue confeccionado en mármol y en su parte superior tiene una figura femenina vestida al estilo de la antigua Grecia, que sostiene una vara en su mano derecha y a cuyos pies hay una indígena arrodillada con sus cadenas rotas, hay otro indígena más y en cada una de las esquinas superiores del pedestal un caimán, teniendo cada uno de sus costados relieves relativos a la independencia, representando uno de ellos a Simón Bolívar.<sup>66</sup>



La Pila de Rosales o Monumento a la Independencia Americana en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Fotos de A. Cabeza

<sup>66</sup> Hay versiones diferentes de cuál era el destino original de este monumento y también de la interpretación de sus relieves y de las modificaciones y adiciones que ha tenido en su historia. Mayores antecedentes se encuentran en José Muñoz Hermosilla: “Monumentos Nacionales”. *Revista Chilena de Historia y Geografía*, N° 65 pp. 329-346, Santiago de Chile, 1929; También en Luisa Flora Voiomaa (2004: 82-87) y en [www.nuestro.cl/opinion/columnas/rosales\\_laborde1.htm](http://www.nuestro.cl/opinion/columnas/rosales_laborde1.htm).



Es importante señalar que existe una controversia respecto del destino original de este monumento, el cual parece, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por Carlos Vicuña Mackenna en 1915, que fue encargado previamente por alguna autoridad peruana con la cual finalmente el negocio no pudo concluirse, siendo Rosales quien la compró y después vendió al Municipio de Santiago, no sin cierta demora en los pagos, y haciéndose algunos cambios al proyecto original para chilenizar el monumento. También es interesante de mencionar, en relación a este caso, que el Periódico “El Verdadero Liberal” de Santiago, en su edición del 17 de abril de 1827, con la bajada de título “**Monumento Nacional**”<sup>67</sup>, ya menciona esta iniciativa, siendo la primera vez que se usan las dos palabras juntas en Chile en la prensa escrita hasta donde sabemos.<sup>68</sup>

Paralela a la iniciativa de Rosales, tenemos noticia de que en 1826 el general patriota Juan O’Brien habría erigido a su costo un monolito, conocido como la “Pirámide del Salto”, en honor de Manuel de Salas Corbalán, en el sitio que éste le regaló para construir su casa en las afueras de Santiago, en la cual estuvo José de San Martín (Muñoz, J. 1929:340). Este primer monumento conmemorativo republicano, aunque desconocido y no valorado por la mayoría de los chilenos, existe hasta el día de hoy en ese sector de Santiago conocido como La Pirámide y sobre el cual hoy día existe una autopista.

Durante las dos primeras décadas de la Independencia, las heridas de la guerra y los conflictos políticos por la administración del poder entre los patriotas, además de que parte de los principales actores estaban vivos, explican que las primeras iniciativas de monumentos conmemorativos fueran más bien representativos de la gesta de la Independencia, buscando celebrar el triunfo y las victorias en los campos de batalla, más que en determinadas personas, las cuales todavía estaban actuando en política, estaban exiliadas, habían muerto en la guerra o producto de la violencia política.

Sin embargo en la década de 1830 comienza en Chile un período de cierta estabilidad relativa que permite organizar el Estado Nacional, concluir con la anarquía de los años anteriores y establecer la Constitución de 1833, que regirá con algunas modificaciones hasta 1925. Como hemos visto, uno de los personajes claves de este proceso fue Diego Portales Palazuelos, quien fue ministro en varias oportunidades, logrando disciplinar a los militares, dando de baja a un gran número de ellos, y reorganizar las tareas principales del Gobierno del Presidente Joaquín Prieto. Portales llamó además la atención sobre las pretensiones de la Confederación Perú-Boliviana, con la cual Chile entró en guerra en 1837. Su

---

<sup>67</sup> Negrillas del suscrito.

<sup>68</sup> Un estudio sobre este primer monumento público y la reproducción de la nota aparecida en el Periódico “El Verdadero Liberal” de 1827 está en: Vicuña, C. (1915). *Revista Chilena de Historia y Geografía*, Tomo 18, Santiago de Chile, pp. 453-466.

actuación en política le acarreó muchos enemigos y a comienzos de junio de 1837 fue fusilado por un grupo de militares rebeldes. Su muerte causó gran impacto y el Gobierno logró que el 8 de Agosto de 1837 se dictara una Ley para erigirle un monumento conmemorativo, el cual sólo pudo ser inaugurado el 16 de septiembre de 1860 (Muñoz, J. 1929:368).<sup>69</sup>

Declarada la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, el triunfo del Ejército chileno, junto a las tropas peruanas contrarias a la Confederación, en la batalla de Yungay, Perú, el 20 de Enero de 1839 - donde es derrotado el Mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz - motivan a que el Gobierno dicte un Decreto el 5 de abril de 1839, para que se levante un monumento conmemorativo por el triunfo de las armas chilenas, el cual tampoco tenemos constancia de que se haya erigido entonces.

Estas situaciones son acontecimientos que han tenido una gran importancia en la constitución de la memoria histórica y de la identidad nacional de Chile, siendo Diego Portales recordado por la historiografía oficial como el político que organizó el Estado republicano unitario, centralista y presidencialista, denominado "Portaliano" y, Yungay, como la Batalla en que Chile logró asegurar su independencia frente a la amenaza de anexión que pretendía la Confederación Perú-Boliviana. Estos hechos y sus consecuencias serán repetidos en todos los textos escolares, junto con la Guerra del Pacífico de 1879, como hemos visto en el capítulo anterior.

En la década de 1840 se da una mayor distancia temporal con el proceso de la Independencia. La muerte de varios de los precursores de dicha gesta permite que se inicie el proceso de convertirlos en los Padres de la Patria y de erigir en su nombre varios monumentos. Es así como mediante la Ley del 13 de julio de 1844 se ordena la erección de una estatua en honor de Bernardo O'Higgins, quien había fallecido durante su destierro en el Perú en 1842, cuando se disponía a regresar Chile. Sin embargo dicho monumento no fue levantado sino recién en 1872. En este mismo contexto, mediante Decreto del 2 de agosto de 1849, el Gobierno manda erigir un monumento conmemorativo a la Independencia de Chile, el cual tampoco se convierte en realidad.<sup>70</sup>

No obstante los intentos anteriores de erigir monumentos a Portales y a O'Higgins, el primer monumento en ser levantado en honor a un personaje de la historia de la

---

<sup>69</sup>Sobre la vida de Diego Portales y su muerte pueden ser consultadas las obras de Sotomayor Valdés, R. (1954). *El Ministro Portales*. Ministerio de Educación, 102 pp. Santiago; Necochea, Eugenio (1874). *Memoria sobre el asesinato del Ministro Portales*. Imprenta el Ferrocarril. Santiago; y Jocelyn-Holt, A. (1999). *El Peso de la Noche: Nuestra frágil fortaleza histórica*. Santiago.

<sup>70</sup> Los decretos mencionados en esta página se encuentran publicados en el *Boletín de las Leyes*, Archivo Nacional, Santiago, 1910.

Independencia de Chile fue el del General Ramón Freire, quien fue Director Supremo entre 1823 y 1826 y Presidente de la República en 1827. El monumento fue una iniciativa del General Juan O'Brien, compañero de armas de Freire, quien encargó una estatua de bronce al escultor inglés Josuah Mason en Inglaterra, siendo ésta emplazada en la Alameda de Santiago e inaugurada el 21 de septiembre de 1856 (Muñoz, J. 1929:358; Voionmaa, L. 2004).

La siguiente estatua en ser erigida fue en recuerdo del Abate Juan Ignacio Molina, jesuita que fue expulsado de Chile junto con la Orden de la Compañía de Jesús en 1768, radicándose en Bolonia, Italia, de cuya universidad fue profesor durante largos años. El Abate Molina, debido a sus investigaciones y escritos sobre Chile, es considerado el primer naturalista chileno. Su monumento fue inaugurado en la Alameda de Santiago, el 16 de septiembre de 1861, siendo trasladado a Talca en 1927, que era su provincia natal (Muñoz, J. 1929:360).

En los años siguientes logran llevarse a cabo varias iniciativas de monumentos para memorar a los próceres de la Independencia, tanto civiles como militares. El primero de ellos correspondió al General José de San Martín, que se debió a un proyecto de Benjamín Vicuña Mackenna, para lo cual organizó una comisión chileno-argentina-peruana en 1856, y cuya estatua ecuestre de bronce fue encargada al escultor francés Louis-Josep Daumas. Esta estatua se emplazó en la Alameda de Santiago y se inauguró el 5 de Abril de 1863. Poco después, el 26 de mayo de 1863 se levanta en Til-Til, pocos kilómetros al Norte de Santiago, un monumento al guerrillero de la Independencia Manuel Rodríguez, próximo al lugar en que fuera asesinado en 1818. Al año siguiente, y por iniciativa del Gobierno, se inaugura un monumento al General José Miguel Carrera en la Alameda, el cual es inaugurado el 17 de septiembre de 1864 y cuya estatua fue encargada al escultor francés A. de Dumont (Muñoz, J.1929:355-357).



Monumento O'Higgins, 1872 Monumento San Martín, 1869. Fotos del libro de Muñoz, J.(1929)

El siguiente monumento instalado correspondió a Bernardo O'Higgins. Por ley se ordenó traer sus cenizas a Chile que estaban sepultadas en el cementerio de Lima. El Gobierno envió en 1868 al vice-almirante Manuel Blanco Encalada y una comitiva con tres barcos de guerra al Perú con tal misión. Las cenizas llegaron a Santiago el 12 de enero de 1869 y se depositaron en el Cementerio General en un lugar destinado para los presidentes de Chile. En Agosto de 1869, el Intendente de Santiago Francisco Echaurren creó una comisión para levantarle un monumento ecuestre de bronce, realizándose un concurso entre artistas europeos, seleccionándose al escultor francés Albert-Ernest Carrier-Belleuse. La estatua ecuestre representa a O'Higgins en el desastre de Rancagua cuando logra evadir a las tropas realistas que lo tenían rodeado. Se incorporaron al monumento relieves con los principales eventos históricos de su vida.

El monumento se inauguró el 19 de mayo de 1872, en la Alameda de las Delicias, cuando era Intendente de Santiago Benjamín Vicuña Mackenna, en una ceremonia de gran solemnidad registrada por la prensa de la época, que contó con la presencia del Presidente de la República, ministros y demás autoridades, con la participación del ejército, salvas de artillería, desfiles de niños escolares, discursos y fuegos artificiales (Muñoz, J. 1929:354-355; Voionmaa, F. 2004).

Al año siguiente, en 1873, se instalan dos monumentos en Santiago dedicados a los próceres civiles de la Independencia. El primero de ellos denominado Pirámide de los Escritores de la Independencia en honor a Manuel de Salas, Camilo Henríquez, Manuel José Gandarillas y José Miguel Infante, inaugurado el 4 de mayo de 1873; y el segundo, denominado el Obelisco de los Historiadores de la Independencia, en recuerdo de Diego José Benavente, Antonio García Reyes, Manuel Antonio Tocornal y Salvador Sanfuentes (Muñoz, J. 1929: 359-360).

Pero no solamente en Santiago se procede a levantar monumentos, sino también en las principales ciudades de Chile. Es así como en Valparaíso se inaugura un monumento a Lord Cochrane el 20 de febrero de 1873, un marino inglés que colaboró en las luchas de Independencia; como también el primer monumento a Cristóbal Colón el 23 de septiembre de 1877. Estos monumentos, junto con el primero a Pedro de Valdivia, levantado en el Cerro Santa Lucía e inaugurado el 12 de febrero de 1875, fecha en que se celebra la fundación de Santiago por dicho conquistador español en 1541, junto con el erigido en honor de Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile, el 30 de noviembre de 1881, son exponentes de una visión más amplia y cosmopolita de los homenajes, aunque siempre vinculados a la Independencia y a la formación de la nacionalidad chilena (Muñoz, J. 1929; Voionmaa, F. 2004).

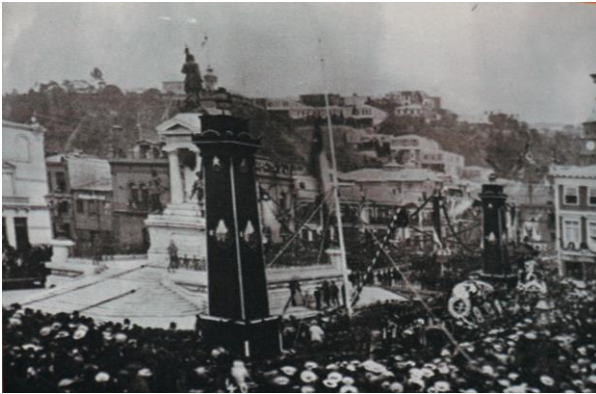


Monumento a Pedro de Valdivia



Monumento a Andrés Bello. Fotos A. Cabeza

La Guerra del Pacífico contra Bolivia y el Perú, entre 1879 y 1883, fue también fundamento para rendir homenaje a los caídos en combate durante las próximas décadas y un argumento tan importante como las luchas de la Independencia, para potenciar la nacionalidad chilena durante el siglo XIX, donde se destacaron el espíritu de lucha, la abnegación y el dar la vida por la Patria, como ejemplos supremos a imitar. Es así como el Gobierno ordena levantar un monumento a la Marina, en honor a las glorias navales, simbolizadas en el Combate Naval de Iquique, en el cual el Capitán Arturo Prat y parte de la tripulación de la corbeta Esmeralda mueren, al ser hundida su nave al enfrentarse en un combate desigual con el Monitor Huáscar del Perú, en la rada de Iquique el 21 de mayo de 1879, fecha que se transformó años después en una efeméride nacional, que se recuerda en un día festivo, con desfiles y todo tipo de ceremonias cívicas y militares cada año hasta el día de hoy. Dicho monumento, que se levanta en Valparaíso el 21 de mayo de 1886, fue obra del arquitecto francés Maillart y del escultor Puech, de la misma nacionalidad, siendo concebido como un mausoleo, donde se sepultaron los restos de los marinos caídos en el Combate Naval de Iquique y hasta dónde fueron trasladados los restos del Capitán Arturo Prat en 1888. Para tal ocasión, mediante Decreto del Gobierno del 15 de mayo de 1888, se ordenó que todas las oficinas públicas y establecimientos nacionales permanezcan cerrados en el día de la inhumación de los restos de Prat, Serrano y Aldea en el Monumento a la Marina (Muñoz, J. 1929; Voionmaa, F. 2004).



Inauguración Monumento Glorias Navales, 1888  
Foto Archivo Museo Histórico Nacional



Monumento en la actualidad, Valparaíso

A comienzos de la siguiente década se agudiza el conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, lo que provoca la Guerra Civil de 1891, que se resuelve por las armas a favor del Congreso y que concluye con el suicidio del Presidente José Manuel Balmaceda. Debido a esta situación, la erección de nuevos monumentos sólo vuelve a ser más frecuente a partir de 1900 y particularmente antes y después de 1910, en el contexto de la celebración del Centenario de la Independencia Nacional, en la cual se conmemora principalmente a los héroes de la Independencia y a los personajes que se destacaron en la formación del Estado Nacional y de la Guerra del Pacífico, como también los eventos fundamentales de dicho proceso.

En este contexto, el Congreso dicta una serie de leyes para levantar monumentos conmemorativos que tienen su origen en iniciativas emanadas principalmente por los parlamentarios. Entre ellas podemos mencionar los monumentos al Presidente Manuel Bulnes (1904), al Presidente Manuel Montt y su Ministro Antonio Varas (1904), a los hermanos Miguel y Luis Amunátegui (1904), a Manuel Antonio Matta (1904), al Presidente Manuel Blanco Encalada (1907), a Manuel Barros Borgoño (1908), al Presidente Manuel Montt (1908), a Bernardo O'Higgins (1910), a José Francisco Vergara (1910), a Manuel Rodríguez (1910), al General Las Heras (1910), a Luis Cruz (1911), a José Bunster (1912), a Ignacio Serrano (1912) y a la Batalla de Chacabuco (1910) (Boletín de las Leyes, Archivo Nacional, 1910). La mayor parte de estos monumentos son instalados en Santiago, pero algunos de ellos fueron erigidos en otras ciudades del país como Copiapó, Valparaíso, Los Andes, Talca y Chillán.

El año del Centenario -1910- fue muy propicio en iniciativas parlamentarias para erigir monumentos. Al respecto es interesante destacar las discusiones en el Congreso de algunos de estos proyectos, como por ejemplo el que propuso instalar un monumento a Bernardo O'Higgins en la ciudad de Rancagua, en el sitio mismo donde ocurrió uno de los hechos más memorables de la lucha armada en la Independencia, donde las tropas patriotas fueron rodeadas por las realistas y



O'Higgins logra romper el cerco y emprender la retirada hacia Mendoza en 1814, concluyendo así la denominada Patria Vieja y quedando afianzada la reconquista española, hasta la invasión del Ejército Patriota de Los Andes, al mando de San Martín en 1817.

La iniciativa de este proyecto de ley correspondió al Diputado por Cachapoal Jorge Huneeus, que previamente había ocupado el Ministerio de Instrucción Pública. El informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados avaló dicho proyecto y destacó los siguientes argumentos en su favor:

*“...Los monumentos están llamados a desempeñar un papel educativo, que mira el futuro más bien que al pasado. La gran difusión de los conocimientos característica de los tiempos presentes, permite a los pueblos tener siempre grabados en su espíritu los esfuerzos de sus benefactores, sin necesidad de que las proclamen obras materiales a la manera de los heraldos perpetuos.*

*En cambio, toda obra del hombre que importe la conmemoración de los grandes hechos, es un faro encendido para iluminar el camino de las generaciones nuevas, para herir la imaginación del niño y estimular la voluntad del adolescente con ejemplos dignos de ser imitados. En este sentido, la erección de los monumentos se convierte en una verdadera necesidad pública, como la de abrir escuelas, lo que no tiene más límites que los recursos del pueblo que los ha de costear, la oportunidad del momento y la buena elección del sitio en que se ha de erijir.*

*Todas estas condiciones favorecen a la idea de levantar un monumento a la memoria de don Bernardo O'Higgins, en el Centenario de la Independencia que fue su obra y en la plaza de Rancagua que él, con su heroísmo, convirtió en pedestal de su gloria. La Comisión, en consecuencia, considera oportuna i plausible la moción del señor Diputado don Jorge Huneeus i tiene el honor de recomendarla a la aprobación de la Cámara.” (Sala de la Comisión, 5 de julio de 1910, Sesión del 18 de julio de 1910, Boletín de Leyes, Cámara de Diputados, p. 760-761).*

El proyecto de Ley de levantar un monumento a Bernardo O'Higgins en Rancagua tenía un solo artículo y autorizaba al Presidente de la República para invertir la cantidad de 60.000 pesos en la obra y la transformación de la plaza, siendo aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados.



Monumento a Bernardo O'Higgins Riquelme en Rancagua. Fotos de A. Cabeza

Pero no todos los proyectos para levantar monumentos eran de fácil despacho. Como ejemplo mencionamos lo que ocurrió con otro monumento a O'Higgins en Chillán, donde los diputados no estaban de acuerdo en el lugar preciso de su instalación, señalando el Diputado Maira, en la discusión en la Cámara, lo siguiente: *"Pienso, Señor Presidente, que en el deseo de elevar estatuas a los que iniciaron el movimiento revolucionario que nos dio independencia se está yendo demasiado lejos."* En un sentido similar el Diputado Sr. Concha también se opuso diciendo: *"¿Cómo es posible que vamos a erijir una estatua en cada pueblo al general O'Higgins? Sería mucho más conveniente que se destinaran fondos para construir un establecimiento de instrucción en lugar de un monumento, i votáramos con ese objeto hasta cien mil pesos"*. Al no existir unanimidad, el proyecto fue puesto en votación resultando aprobado por 27 votos a favor contra 8, siendo promulgada con este objeto la Ley N° 2.337 del 3 de agosto de 1910.

Igual discusión tuvo lugar cuando se presentó la moción del Diputado por San Felipe Sr. Rivas, para levantar un monumento a la Batalla de Chacabuco, en la ciudad de Los Andes, señalando en la sesión el Diputado Sr. Délano, de manera irónica, lo siguiente: *"Señor Presidente, principia alarmarme un poco al ver que hemos descubierto en la Cámara una veta mui rica en monumentos."* Frente a esto el Diputado Sr. Rivas dio una serie de argumentos, señalando fundamentalmente que era necesario instalar ese monumento en Los Andes, por donde tenía que cruzar la delegación oficial argentina que era escoltada por tropas de dicho país, que venían a rendir honores en las festividades del Centenario. Otro comentario lo realizó el Diputado Sr. Subercaseaux, quien señaló:

*"...Pero yo querría llamar la atención de la Cámara hacia la conveniencia de que se procure que estos monumentos sean artísticos i no resulten un*

*mamarracho. Por eso propongo para encargar todos estos monumentos se proceda de acuerdo con el Consejo de Bellas Artes.” (Sesión del 18 de julio de 1910, Boletín de Leyes, Cámara de Diputados, p. 762-767).*

Si bien esta indicación no fue aceptada para todos los monumentos, si fue incluida en la del monumento a la Batalla de Chacabuco, el cual fue aprobado finalmente por 30 votos a favor y dos en contra (Sesión del 18 de julio de 1910, Boletín de Leyes, Cámara de Diputados, p. 762-767).

La actividad legislativa del Congreso en atención al Centenario fue intensa, aunque llama la atención lo tardío de algunas iniciativas, particularmente en lo atinente al financiamiento de las festividades, ya que recién el 25 de julio de 1910, dos meses antes del Centenario, el Congreso aprobó la Ley N° 2.335 que autorizó al Presidente de la República el gasto de 3.500.000 pesos en los festejos del Centenario y 500.000 pesos para la erección de monumentos (Boletín de las Leyes, 1910, Archivo Nacional). No obstante, es importante destacar, como hemos visto en el capítulo anterior, que en 1910 Chile tuvo tres presidentes, los dos primeros, Pedro Montt y Elías Fernández Albano, fallecidos por enfermedad, siendo el tercero de ellos, Emiliano Figueroa, quien encabezó las festividades, hasta que a fin de año se realizaron las elecciones presidenciales, asumiendo el Gobierno de la Nación el Presidente Ramón Barros Luco. No deja de ser una curiosidad mencionar que el Presidente Emiliano Figueroa era el nieto del comandante realista que en 1911 se rebeló en contra del naciente gobierno patriota en 1811, quien fue fusilado después de un juicio sumario, en un episodio que ha sido denominado en la historia de Chile como el Motín de Figueroa.

Los monumentos conmemorativos alusivos a la Independencia se propusieron incluso después de 1910, como fue el caso del Monumento a las Heroínas de la Independencia, que se tramitó desde 1912 y, con el cual, se pretendía: “...*reparar el olvido en que se había mantenido hasta ahora la memoria de tantas mujeres chilenas que cooperaron entusiasta y eficazmente al lado de los Padres de la Patria...*” (Memoria del Ministerio de Instrucción Pública 1912-1915, p. 8, Santiago, 1916). Para dicho efecto y mediante Decreto N° 4.161 del 26 de Octubre de 1912, el Ministerio de Instrucción Pública debía contratar como escultor del monumento al chileno Nicanor Plaza, quien debía esculpir la obra en Italia, en mármol de Carrara, debiendo esta incluir las figuras de cuerpo entero de cinco heroínas. El contrato se estableció bajo la supervisión de la Comisión de Bellas Artes, que presidía el propio Ministro de Instrucción Pública. Desafortunadamente, por causas que desconocemos, dicho monumento nunca fue concluido.

A comienzos de la década de 1920 surge la iniciativa de varios diputados, reunidos en el Club Presidente Balmaceda, para levantar un monumento en honor a dicho Presidente. Para ello presentaron un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados el 7 de junio de 1923, sin embargo, debido seguramente a los conflictos

políticos de esta década, el monumento sólo comenzó a ser construido el 19 de septiembre de 1935, en cuya ceremonia de inicio de los trabajos participó el Presidente de la República Arturo Alessandri. Para este monumento se nombró una comisión que presidió el político Emilio Bello Codecido, la cual publicó un folleto y realizó una colecta nacional para reunir fondos, el cual finalmente se instaló en la comuna de Providencia en Santiago (Archivo Emilio Bello Codecido, Vol. 18, p. 38-44).



Monumento al Presidente José Manuel Balmaceda en Providencia, Santiago. Fotos A. Cabeza

En las siguientes décadas el Congreso siguió aprobando leyes sobre monumentos conmemorativos, las que tenían su fundamento jurídico tanto en la Constitución de 1925, como posteriormente en la de 1980, en las cuales los honores a los servidores públicos sólo podían establecerse mediante una ley especial. Sin embargo, poco a poco estas iniciativas de levantar monumentos son vinculadas al Decreto Ley N° 651 sobre Monumentos Nacionales de 1925 y a la Ley de Monumentos Nacionales de 1970. Pero en la mayor parte de los casos ambas normativas legales no son mencionadas, siendo esto diferente a partir de 1990, en que el Consejo de Monumentos Nacionales es mencionado en los propios proyectos de ley de monumentos conmemorativos, para formar parte de la comisión que debe seleccionar la obra y analizar los aspectos más técnicos de la misma, como su emplazamiento preciso, cuestión que si aparece normada en la Ley de Monumentos Nacionales de 1970 como veremos más adelante.

## **El Consejo Superior de Letras y Bellas Artes y el Primer Intento de establecer una Legislación para la Conservación del Patrimonio en Chile de 1910**

Si bien a lo largo del siglo XIX se crearon una serie de instituciones culturales como bibliotecas y museos, las cuales, siguiendo el modelo europeo, fueron destinadas a coleccionar y conservar bienes muebles que se consideraban importantes para la ciencia, la historia y la cultura del país, no se dictaron normas legales o se crearon instituciones especiales para la protección y conservación de edificios y lugares históricos, como tampoco de sitios arqueológicos. La política seguida por los directores de estas instituciones fue más bien la de acrecentar sus colecciones, exhibirlas al público y promover la investigación científica, particularmente esta última en el Museo Nacional, hoy llamado Museo Nacional de Historia Natural.

Por cierto existió entre los historiadores y algunos políticos una preocupación por resguardar la memoria y algunos objetos del pasado, la cual no solo se reflejó en la creación de la Biblioteca Nacional, y en los primeros museos y exposiciones históricas, sino también en la erección de monumentos conmemorativos, fundamentalmente destinados a recordar los principales personajes y episodios de la gesta de la Independencia y de las guerras del siglo XIX.

Si bien todo lo anterior fue creando un ambiente favorable al patrimonio, que se nutrió con los viajes de la elite intelectual a Europa y particularmente a Francia, existe otra fuente de iniciativas e ideas que lograron, en la primera década del siglo XX, dar las bases para la actual institucionalidad y legislación específicamente patrimonial de Chile, la cual se dio en el ámbito de quienes estaban interesados o dedicados a las bellas artes en su sentido más amplio, desde la escultura hasta la arquitectura. Al respecto, hubo una especial atención del Estado en la enseñanza de las artes y en becar jóvenes desde mediados del siglo XIX, quienes fueron llamados “pensionistas”, para que estudiaran arte en Europa, los que trajeron al país las ideas y modas que allí imperaban.

En este contexto, se crea mediante Decreto del Gobierno, con fecha 4 de enero de 1849 la Academia de Pintura, siendo contratado para su dirección el pintor italiano Alejandro Cicarelli. Así también, mediante Decreto del 17 de noviembre de 1849, se crea la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, siendo su primer director y profesor el arquitecto francés Claude Brunet De Baines, quien a su muerte en 1856, es reemplazado por el arquitecto francés Luciano Hénault, confirmando de esta manera la predisposición hacia la influencia europea y particularmente francesa de la época, como hemos visto en el capítulo anterior. En los años siguientes el Gobierno sigue contratando artistas y arquitectos europeos, tanto como profesores como encargados de construir obras públicas, los que juntos a los jóvenes profesionales chilenos que estudiaron en Europa, van

transformado la antigua ciudad colonial de Santiago en una urbe con fuerte presencia de estilos arquitectónicos europeos.

De esta forma se dan las bases para la organización de las primeras exposiciones de arte, como el “*Salón de Francia*”, que se iniciaron en 1861 con obras de los jóvenes artistas chilenos Pedro Lira y Luis Dávila Larraín, ambos alumnos de la Academia de Pintura, que fundan la primera Sociedad Artística, que es integrada por otros alumnos, aficionados y coleccionistas. En los años siguientes se repitieron estas exposiciones, siendo la más conocida de ellas la que se organizó en 1872 con el apoyo de Benjamín Vicuña Mackenna, con motivo de la inauguración del recién construido Mercado Central de Santiago, en la cual pintores y escultores chilenos se dan a conocer junto a los artistas antes mencionados y Nicanor Plaza (Huneeus, J. 1910:803-807). Al respecto Jorge Huneeus nos da su impresión de lo que esta Exposición significó para esos años escribiendo:

*“El éxito de este torneo memorable instituyó ya el hábito del arte entre nosotros. Las discusiones estéticas se hicieron frecuentes y brillantes en la prensa y en revistas especiales artísticas, después del ruidoso debate sobre la moralidad del desnudo en el arte, provocado por la intransigencia de cierta prensa religiosa que atacó rudamente, como ofensa al pudor social, la exhibición que se hizo en la Exposición del Mercado de la admirable Susana de (Nicanor) Plaza, llamada también la Venus del Baño, premiada en el Salón de París en 1870 y adquirida como trofeo nacional por don Luis Cousiño.” (Huneeus, J. 1910:806-807)*

Estas exposiciones continuaron realizándose, organizándose una de carácter internacional en 1875, como otras dedicadas al arte extranjero y al arte nacional en 1878 que tuvieron respaldo del Gobierno. En 1885 la “*Sociedad Artística*” se transforma en la “*Unión Artística*”, creándose con aportes de particulares, el primer museo de obras extranjeras y el primer palacio de exhibiciones permanentes, edificio construido en la Quinta Normal de Santiago, que reproduce a pequeña escala el Partenón. Tal como señala Jorge Huneeus:

*“El éxito de la Unión Artística fue tan grande, que nuestro Gobierno, rompiendo la frialdad con que de ordinario ha mirado el progreso artístico, se consideró obligado á cooperar al desenvolvimiento del Salón, adquiriendo el Salón y su Museo y dotándolo de recursos sólidos para ensancharlo, aumentar sus adquisiciones y dotarlo de servicios permanentes.” (Huneeus, J. 1910:808)*

Debido a lo anterior, el Gobierno crea en 1887 la “*Comisión Permanente de Bellas Artes*”, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, siendo uno de sus primeros miembros el pintor chileno Pedro Lira (Memoria del Ministerio de



Instrucción Pública, 1910). Esta comisión tuvo a su cargo el “Salón Anual de Pinturas”, incrementar la colección del “Museo de Obras Extranjeras”, estimular el arte nacional, otorgar las becas de los pensionados artísticos en Europa, dar los premios de honor del Gobierno y publicar la *Revista de Bellas Artes*<sup>71</sup>.

En 1903, mediante Decreto del 20 de noviembre, la Comisión es reformulada, teniendo en todo el período que va desde 1887 hasta 1909 un favorable impacto en el ambiente artístico nacional, señalando Jorge Huneeus en 1910 que:

*“La Comisión de Bellas Artes, de cuyos trabajos han sido alma inteligente y constante Vicente Grez, Enrique De-Puttrón y Manuel Rodríguez Mendoza – para no nombrar sino á los que ya el viento de la muerte dispersó, - ha desarrollado con tino y altura el gusto público pro el Arte; ha sabido obtener el mantenimiento de los pensionados artísticos, al través de las veleidades políticas y financieras del presupuesto de la nación; y ha sabido, sobre todo, vencer las dificultades naturales que presenta el espíritu generalmente celoso y apasionado de los artistas á toda organización colectiva imparcial y ha logrado mantener el prestigio, la seguridad y la concurrencia de exponentes dignos á los Salones de cada año, aún á despecho de las divisiones y rivalidades de bandería artística, que llegaron alguna vez hasta producir el escándalo, poderoso signo de vitalidad artística de un gran Salón Libre Anual, á imitación del de París.” (Huneeus, J. 1910: 808-809).*

Entre el 22 de enero y 15 de junio de 1909 el Diputado Jorge Huneeus Gana<sup>72</sup> asume como Ministro de Justicia y de Instrucción Pública, quien debido a su especial interés en las artes le da nuevas atribuciones a esta comisión, indicando como fundamento lo siguiente:

---

<sup>71</sup> Hemos revisado los 11 números de la *Revista de Bellas Artes* que existen en la Biblioteca Nacional de Santiago entre los años 1889 y 1890. Todos ellos están dedicados a los salones y exposiciones artísticas nacionales realizadas en Santiago, con referencias a los que se hacían en Francia y otros países europeos. También se publican los catálogos de las exposiciones. Esencialmente es una revista de crítica de arte, que demuestra la influencia francesa de la época. En ella colaboraban artistas como Onofre Jarpa, Juan de Dios Vargas, Juan Mochi, Enrique De-Puttrón, entre otros.

<sup>72</sup> Jorge Huneeus Gana nace en Santiago el 10 de abril de 1866. Estudió derecho en la Universidad de Chile y se titula de abogado en 1888. Siempre tuvo un particular interés por las artes en su sentido más amplio destacándose como un gran coleccionista durante toda su vida. Militó en el Partido Radical y fue diputado por sucesivos períodos entre 1897 y 1909. En el año 1891 fue redactor en Iquique del Boletín Oficial de la Junta de Gobierno que derrocó al Presidente José Manuel Balmaceda y trabajó en los ministerios de Interior y Guerra. En 1909, siendo Diputado y de acuerdo a la Constitución de entonces, asume los Ministerios de Justicia e Instrucción Pública. Entre 1912 y 1918 es enviado como embajador de Chile ante Bélgica y Holanda. Fallece en Santiago en 1926. También se destacó como periodista, escritor y mecenas de las artes en Chile. Ver: [http://biografias.bcn.cl/pags/biografias/detalle\\_par.php?id=3386](http://biografias.bcn.cl/pags/biografias/detalle_par.php?id=3386).

*“La extraordinaria vitalidad de esta producción no ha cabido ya en los moldes antiguos que gobernaban la primitiva Comisión de Bellas Artes y, á la pujanza de las nuevas generaciones de artistas que abogan con la elocuencia de su brillante producción anual por la mejora de las condiciones de la enseñanza artística y por la garantía de más atención al arte en la acción del Estado, ha contestado al fin del Gobierno de la República creando recientemente un nuevo organismo directivo artístico que, con el nombre de Consejo Superior de Letras y Bellas Artes está llamado á satisfacer y desarrollar las notables y crecientes exigencias del arte nacional, en sus tres secciones de Bellas Letras, Artes Gráficas (Pintura, Escultura y Arquitectura) y Música y Declamación.” (Huneeus, J. 1910: 810).*

El Consejo Superior de Letras y Bellas Artes fue creado mediante Decreto N° 1.909 del 31 de mayo de 1909 del Ministerio de Instrucción Pública, constituyendo la base del proyecto de ley sobre conservación de monumentos históricos de 1910 y el precedente legal de la creación del Consejo de Monumentos Nacionales de 1925, cuestión que hasta hace poco era desconocida en la historia de dicha institución, ya que se creía que éste organismo había tenido su impulso inicial sólo en las resoluciones del V Congreso Panamericano realizado en Santiago en 1923, situación que demostraremos en las siguientes páginas.

Debido a la importancia de este Decreto, lo reproducimos de manera íntegra en el Anexo N° 2, pero veamos aquí algunos de los principales aspectos que nos interesan del mismo.

El Consejo Superior de Letras y Bellas Artes se constituye como un organismo del Ministerio de Instrucción Pública que es presidido por el Ministro y organizado en tres secciones: Letras y Arte Dramático, Artes Gráficas (Dibujo, Pintura, Escultura, Arquitectura, **Monumentos**<sup>73</sup>, Paseos Públicos y Arte aplicado a las Industrias) y Música. En lo que respecta a la Sección de Artes Gráficas, indica que estará integrada por: a) tres profesionales de Artes Gráficas que hayan obtenido distinciones en Exposiciones Nacionales o Extranjeras; b) por nueve personas de reconocida competencia en Artes Gráficas; y c) por el Primer Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Cada una de estas secciones trabajaría por separado pudiendo reunirse todas cuando lo estimen pertinente, eligiendo cada una de ellas un presidente y un secretario.

Entre las diversas funciones de este Consejo se establece en el Artículo 7 que es tarea del Consejo: *“La conservación y el fomento del buen gusto general en las construcciones y monumentos públicos, y en la disposición y ornamentos de las*

---

<sup>73</sup> El destacado es nuestro.

ciudades.” Sobre este particular indica en el Artículo 10 que son también atribuciones del Consejo:

*“1º. Vigilar y fomentar los Museos Artísticos, Monumentos, Edificios y Paseos Públicos, haciendo las representaciones del caso á las autoridades respectivas; 2º. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes que se relacionan con la ornamentación de las ciudades y el fomento del buen gusto estético, y velar por la conservación, aumento ó mejora de las plantaciones y jardines en plazas y vías públicas, haciendo las representaciones del caso á las autoridades correspondientes.”*

Al respecto, es de suma importancia destacar que el Artículo 11 del Decreto N° 1.909 señala que: *“A fin de dar sanción legal efectiva á lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno someterá al Congreso Nacional, para su aprobación, el respectivo proyecto de Ley.”* Dicho proyecto es elaborado por el Ministerio de Instrucción Pública y enviado en 1909 o durante 1910 al Consejo de Estado para su estudio como veremos enseguida.

En este mismo período tiene lugar en Santiago el Cuarto Congreso Científico Interamericano, también conocido como el Primer Congreso Científico Panamericano, el cual se realiza entre el 25 de diciembre de 1908 y el 5 de enero de 1909. Estos congresos científicos, junto con los congresos panamericanos que tenían un énfasis más político y que fueron organizados por los Estados americanos, y que se venían realizando desde 1889, son también otra fuente que inspira la legislación sobre la conservación del patrimonio, pero sus influencias se hicieron sentir con más fuerza en la promulgación de la legislación de monumentos nacionales de Chile de 1925, como quedará aclarado más adelante.

Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto N° 1.909, el Ministerio de Instrucción Pública elabora un proyecto de ley *“Sobre Conservación de Monumentos Históricos”*, el cual seguramente fue redactado por la motivación del Ministro de Instrucción Pública Jorge Huneeus Gana, pero continuado y tramitado por sus sucesores en el cargo durante 1909 y 1910, los Ministros Domingo Amunátegui Solar y Emiliano Figueroa Larraín, quienes se mantuvieron pocos meses en los cargos debido a las frecuentes crisis de gabinete<sup>74</sup> y a los cambios políticos que

---

<sup>74</sup> Sobre este asunto y que explica los permanentes cambios de ministros, quienes además eran parlamentarios y de acuerdo a la Constitución de entonces, el Presidente de la República debía nombrarlos entre la mayoría parlamentaria, es interesante destacar las palabras del Diputado Alberto Edwards en la sesión del 13 de diciembre de 1910 de la Cámara de Diputados, quien dice: “Sin embargo, en Chile, la tendencia de los parlamentarios parece ser la de invadir, cada vez más, el terreno propiamente administrativo. Se considera por muchos, a los gabinetes, como simples comités ejecutivos, sin iniciativa alguna, instrumentos ciegos, pero responsables, de un poder omnisciente, si se quiere, pero irresponsable.” *Boletín de las Sesiones extraordinarias de 1910*. Cámara de Diputados, 1910, p. 838.

motivaron el fallecimiento del Presidente Pedro Montt en 1910 debido a una prolongada enfermedad y la repentina muerte, pocos meses después, del Presidente Elías Fernández Albano. Esta situación puede explicar por qué el citado proyecto de ley, reproducido en extenso en el Anexo N° 3, si bien fue puesto a discusión ante el Consejo de Estado, previo análisis y aprobación del Ministerio de Hacienda, no fuera despachado al Congreso. Al respecto hemos revisado las actas de las sesiones del Congreso de los años siguientes no encontrando en discusión el citado proyecto, pero creemos que debe hacerse una investigación más profunda abarcando los años entre 1915 y 1924 para aclarar totalmente esta situación.

Lo primero que debemos notar de dicho proyecto es su nombre: “*Conservación de Monumentos Históricos*”, lo cual nos lleva a concluir que quienes lo redactaron se informaron y buscaron antecedentes en otras legislaciones similares, como se demuestra en el apéndice que se anexó al citado proyecto. En dicho apéndice el Ministerio de Instrucción Pública revisó los textos legales y antecedentes históricos de similares legislaciones de Francia, Inglaterra, Dinamarca, Hungría, Italia, Grecia, Rumania, Prusia, Noruega, España y del Estado de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Con respecto al primer país mencionado, Francia, señaló que contaba ya desde 1837 con una Comisión de Monumentos Históricos y que dictó una ley al respecto el 30 de Marzo de 1887, que fue complementada con un Reglamento el 3 de marzo de 1889. Esta Comisión estaba bajo la tutela de la Dirección de Bellas Artes y su misión era la de establecer la lista de monumentos y objetos históricos y artísticos, señalar lo que conviene restaurar, examinar los proyectos de restauración y proponer al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes la distribución de los fondos destinados a la conservación de los monumentos clasificados. Se indicaba además que en dicha legislación los monumentos clasificados, aquellos incluidos en la lista oficial, no podían ser destruidos ni ser sujetos de intervención sin aprobación del ministerio y que los objetos que pertenecen al Estado son inalienables e imprescriptibles. Dicha Comisión de Monumentos Históricos estaba integrada por funcionarios de la Dirección de Bellas Artes, junto a arquitectos, pintores, arqueólogos y otros especialistas competentes, siendo presidida por el Ministro de Instrucción Pública y en su ausencia, por su vice-presidente el Director de Bellas Artes.

Sobre Inglaterra señaló que dicho país dictó una ley similar el 18 de agosto de 1882. En relación a Dinamarca indicó que existía una Comisión Real para conservación de antigüedades cuya última ley era del 17 de noviembre de 1907. Respecto de Hungría destacó que su ley del 28 de mayo de 1881 establecía que los propietarios de los monumentos históricos debían notificar a la autoridad su descubrimiento y conservarlos intactos hasta que la autoridad resolviera su conservación. Sobre Italia mencionó que tenía una legislación sobre conservación

de monumentos desde 1462 y que el Papado había tomado las primeras medidas al respecto, y que a principios del siglo XIX había publicado los Edictos de Pacca de 1820, los que daban una protección a los documentos históricos, monumentos y objetos de arte, resaltando que sus decretos más recientes eran los del 27 de junio y 14 de julio de 1907.

Así también señala que Rumania tenía una legislación inspirada en la francesa, relativa a la conservación de los monumentos públicos y sobre los monumentos y objetos de la antigüedad, destacándose por su severidad en materia de sanciones monetarias y de cárcel respecto de quienes la violen. Al referirse a la legislación de Prusia, llama la atención que su ley del 15 de julio de 1907, establece normas en que la autoridad puede rechazar la modificación de los monumentos o las construcciones nuevas que alteren el conjunto arquitectónico de ciertas calles y plazas, destacando que se conserva no solo el monumento histórico sino también sus alrededores. De Noruega menciona la ley del 19 de mayo de 1904, que prohíbe la exportación de antigüedades sin previa autorización, castigando con duras penas pecuniarias a quienes no respeten tales normas. Finalmente analiza la experiencia de España, destacando que ya en la Ley 3, título XX, Libro VIII, de la Novísima Recopilación, señalaba la conservación de las antigüedades que se descubrieran en el Reino y que, desde el 24 de noviembre de 1865, existían las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos<sup>75</sup>, destacando además que por Reales Órdenes se declaraba el carácter histórico y artístico nacional de los monumentos y edificios, existiendo también otra norma legal del 30 de septiembre de 1887, destinada a la conservación de los edificios y monumentos históricos.

El referido proyecto de ley, con su mensaje presidencial y su apéndice, fue publicado en un documento que aparece editado por el Ministerio de Instrucción Pública de 1910, Imprenta y Litografía La Unión, Santiago de Chile. También el mismo documento aparece en manuscrito en las Actas del Consejo de Estado de 1910, conservadas en el Archivo Nacional de Santiago que fueron consultadas por el suscrito.

Hasta aquí es necesario destacar que quienes redactaron el proyecto realizaron una amplia investigación legislativa en Europa y tangencialmente en Estados Unidos, no mencionando caso alguno de América Latina. Queda claro entonces la influencia europea y particularmente francesa en relación a los conceptos utilizados como monumentos históricos, conservación, restauración y también, el tipo de institución y normas, cuya imagen y semejanza se quería replicar en la legislación chilena. Esta primera iniciativa del Gobierno por cierto llama la atención por ser uno de los primeros intentos de legislación sobre la materia en América

---

<sup>75</sup> Al respecto interesa tener presente el trabajo de López Rodríguez, R. (2011) sobre la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Sevilla.

Latina. Sin duda, esto demuestra el impacto que tuvo en Chile el envío de becados a Francia, fundamentalmente a estudiar bellas artes, durante toda la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX.

El texto del proyecto de ley comienza con el mensaje presidencial destinado al Congreso, el cual en su primer párrafo ya señala sin duda el propósito y el modelo en el cual el proyecto se inspiraba:

*“Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados:*

*En muchas naciones europeas la necesidad de conservar en su estilo propio i en buen estado todos los edificios que tienen un carácter artístico o histórico, ha traído como consecuencia la creación de una Comisión de Monumentos, que tiene a su cargo los trabajos de ésta índole.*

*En Francia se instituyó el año 1837 i llevó a cabo bastas restauraciones en todo el territorio francés, provocando de ese modo una saludable emulación en las comunas i en los particulares, para la conservación de los monumentos, dejados, hasta entonces, en completo abandono.” (Proyecto de ley sobre conservación de Monumentos Históricos de 1910, p. 3).*

Más adelante, en dicho mensaje, al referirse a Chile, para fundamentar la necesidad de contar con una comisión de monumentos históricos, señala:

*“En Chile se encuentran edificios que tienen carácter artístico i monumentos históricos de diferentes jéneros, algunos de los cuales cuentan varios siglos de existencia. Esos edificios i monumentos están expuestos a sufrir graves deterioros, como ha ocurrido a los fuertes contruidos, bajo la dominación española, en diversos puntos de la frontera i principalmente en la bahía de Corral, i con tantos otros que es innecesario recordar. Se impone la necesidad de dictar una lei que proteja los edificios i monumentos históricos i que conserve a las jeneraciones futuras el **patrimonio**<sup>76</sup> dejado por las que nos han precedido.” (Proyecto de Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos de 1910, p. 3-4).*

En los artículos del proyecto de ley se establece en primer lugar que los monumentos históricos quedan bajo la salvaguardia del Estado y que quienes los deterioren o destruyan estarán sujetos a las sanciones que establece el Código Penal en sus artículos 485 y 486, señalando que si los daños fueren cometidos

---

<sup>76</sup> El destacado es nuestro. Es de suma importancia resaltar el concepto de patrimonio aquí mencionado, ya que es primera vez que aparece en un texto legal chileno, con el sentido de conjuntos de bienes del pasado que socialmente hereda la generación presente de las anteriores.



por funcionarios públicos, la sanción se aplicará en su grado máximo. Es interesante destacar que estas sanciones aparecen mencionadas en las siguientes normas jurídicas de 1925 y 1970, siendo cambiadas recién en la primera década del 2000.

Posteriormente establece que la Comisión de Monumentos Históricos, que lleva el mismo nombre que las entidades creada en Francia y otros países europeos, dependerá del Ministerio de Instrucción Pública y que será presidida por el Ministro e integrada por un miembro de la Cámara de Senadores, por un miembro de la Cámara de Diputados, por dos arquitectos, por un pintor o escultor, por dos personas nombradas por el Presidente de la República y por un profesor de historia nacional nombrado por la Universidad de Chile. Esto es una comisión con nueve miembros.

Dicha Comisión de Monumentos Históricos tendría las siguientes funciones de acuerdo a su Artículo 4: establecer la lista de monumentos históricos, debiendo tener cada uno de ellos sus antecedentes históricos, artísticos y un plano; “clasificar”<sup>77</sup> los monumentos; indicar al Gobierno las medidas de conservación necesarias; solicitar al Gobierno los fondos necesarios; perseguir la responsabilidad civil y criminal para quienes atenten contra los monumentos y proponer al Gobierno la expropiación de los edificios particulares de importancia histórica que convenga al Estado adquirir.

El proyecto de ley establecía en su artículo 6 que cada monumento histórico debía ser declarado mediante un decreto supremo y que las “*reparaciones i la conservación de los monumentos históricos, fiscales o particulares, serán de cargo del Estado*”. También en su artículo 8 se indica el procedimiento para la declaración de monumento histórico y establece que: “*En los casos en que la aplicación de estas medidas irroque grave perjuicio a particulares, se deberá proceder a la expropiación del monumento*”. Esta última medida es de suma importancia porque enfrenta y daba una solución meridiana al problema del conflicto entre la propiedad privada y la pública en relación al patrimonio, que será recurrente a lo largo de todo el siglo XX y hasta la actualidad.

Este proyecto de ley con sus ocho artículos, elaborado entre 1909 y 1910, es el primer intento legislativo de normar la conservación del patrimonio histórico y cultural de Chile. Creemos que debe su inspiración al trabajo del Ministro de Instrucción Pública Jorge Huneeus y sus colaboradores, continuado en 1910 por quienes los sucedieron en el cargo, los ministros Domingo Amunátegui Solar y Emiliano Figueroa. El citado proyecto siguió su trámite al interior del Gobierno en

---

<sup>77</sup> La clasificación es una clara referencia a la legislación francesa y es el origen de lo que en Chile se entendió como la catalogación o la adscripción de los monumentos a diferentes tipos, categorías o clases de bienes culturales.

el año 1910, en cuyos meses no sólo se conmemoraba el primer centenario de la Independencia Nacional, sino también en un año en que hubo tres presidentes de la República (dos de ellos fallecieron en el ejercicio de su cargo) y los consiguientes cambios de ministerios que hemos relatado, además de la elección presidencial de fin de año. No obstante lo anterior, el proyecto, que contaba con la aprobación del Ministro de Hacienda Carlos Balmaceda, fue puesto en tabla para su discusión por parte del Consejo de Estado en su sesión del 24 de octubre de 1910, en la cual asistieron el Vicepresidente de la República Emiliano Figueroa y los consejeros Sres. Aguirre, Vargas, Alemany, Bannen, Bello, Blazer, Figueroa, Mac Iver, Urrutia y Varas. En dicha sesión se aprobaron varios proyectos pero se indica en el acta de la sesión del 24 de Octubre de 1910 del Consejo de Estado que:

*“...se acordaron dejar pendientes los proyectos que modifican la división territorial i crear nuevos departamentos i el que designa una comisión dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, encargada de la conservación de monumentos históricos.” (Archivo de Actas del Consejo de Estado de 1910, p. 704-705)*

La siguiente sesión del Consejo de Estado fue el 28 de octubre de 1910 y el proyecto que nos interesa no fue tratado y tampoco en las siguientes sesiones. Las elecciones presidenciales de fin de año, el cambio de administración y las prioridades del nuevo Gobierno seguramente dejaron en el olvido el citado proyecto, aunque no totalmente, ya que aspectos esenciales del mismo e incluso frases claves y textuales serán repetidas en el Decreto Supremo N° 3.500 de 1925, que antecede al Decreto ley N° 651 de 1925, que crea el Consejo de Monumentos Nacionales y cuya legislación estará vigente hasta 1970.

### **La Influencia de los Congresos Científicos y Conferencias Internacionales en la Gestación de la Primera Legislación Patrimonial Chilena de 1925**

Hemos visto que la incorporación de la temática de la conservación del patrimonio en Chile tiene una fuerte influencia externa y particularmente de origen europeo, lo cual lleva a plantear el primer proyecto de ley sobre conservación de monumentos históricos de 1910, el que lamentablemente no se materializó. Sin embargo, unido al proceso que llevó en 1925 a la primera legislación patrimonial del país, debemos destacar la influencia del contexto internacional, fundamentalmente americano, que se cristalizó en dicha legislación, la cual retomó el esfuerzo inicial de 1910. Al respecto debemos mencionar las conferencias panamericanas, los congresos científicos interamericanos y los congresos de arquitectos que se realizaron a finales del siglo XIX y en las primeras dos décadas del siglo XX.

Las Conferencias Panamericanas constituyen el origen de la actual OEA (Organización de Estados Americanos). La primera de ellas se realizó en Washington, entre el 20 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890, por iniciativa del gobierno norteamericano y congregó a la mayoría de las naciones americanas. A esta le siguieron otras similares en México (22 de octubre de 1901 al 31 de enero de 1902), Río de Janeiro (23 de julio de 1906 al 27 de agosto de 1906), Buenos Aires (12 de julio de 1910 al 30 de agosto de 1910), Santiago de Chile (25 de marzo de 1923 al 3 de mayo de 1923), La Habana (16 de enero de 1928 al 20 de febrero de 1928) y Montevideo (del 3 al 26 de diciembre de 1933).

Si bien estas conferencias tenían una agenda fundamentalmente política, estableciendo convenios y acuerdos de interés americano en temas diplomáticos, de transporte, de salud y de comercio, también abordaron desde un comienzo temas sociales y culturales, que se enmarcaban en el espíritu americanista de unión continental que las inspiraba, a pesar de los conflictos internacionales existentes, teniendo Estados Unidos, pero también los demás países más grandes de la región, una clara visión de que estas conferencias les daban un espacio para consolidar sus propios intereses hegemónicos.

De la Primera Conferencia Panamericana de 1889-1890, celebrada en Washington, debemos destacar el acuerdo para crear una Biblioteca Americana de cuya discusión se fueron desprendiendo en las conferencias siguientes resoluciones y convenciones sobre los derechos de propiedad intelectual y la protección de las obras literarias y artísticas<sup>78</sup>. De esta manera, en la Segunda Conferencia Panamericana de 1901-1902, realizada en la ciudad de México, se acordó el 29 de enero de 1902, una recomendación para crear una Comisión Arqueológica Internacional Americana, cuyo objetivo era estimular la investigación de los sitios arqueológicos, el intercambio de información y la formación de museos para conservar tales bienes. Cada gobierno debía nombrar uno o más representantes para dicha comisión por un período de cinco años, acordándose que ésta se reuniría una vez al año y que se formarían subcomisiones.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Esta convención se aprobó en la Segunda Conferencia Panamericana realizada en México (1901-1902) y se suscribió el 27 de enero de 1902.

<sup>79</sup> La delegación chilena que participó en la conferencia de México estuvo integrada por Emilio Bello Codecido, Joaquín Walker Martínez, Augusto Matte y Alberto Blest Gana. Es importante mencionar al primero de ellos porque estará presente años después en la reunión del Consejo de Estado de 1910 en que se debía tratar el proyecto de ley sobre conservación de monumentos históricos y que posteriormente será parte de la delegación chilena a la Quinta Conferencia Panamericana de 1923 en Santiago. Por lo tanto la discusión y las tendencias internacionales al respecto no le eran ajenas. En nuestra investigación empleamos varios días en la lectura de los documentos del *Archivo Emilio Bello Codecido* que se conserva en el Archivo Nacional de Santiago porque creíamos que este político y diplomático había sido el mentor de la idea del proyecto antes mencionado, lo que no era correcto.

Seguramente, la realización de esta conferencia en México fue el mejor lugar para esta recomendación, pero es necesario decir que había un ambiente favorable entre las delegaciones, tanto por razones políticas, como debido al proceso de construcción de los estados nacionales durante el siglo XIX. Es así como la mexicana María del Rosario Peludo Gómez (2001:70-71), al analizar esta resolución comenta:

*“En todo caso, debe quedar claro que fue sobretodo desde los propios gobiernos, de donde surgió un interés especial por recuperar el pasado como medio para crear una identidad nacional común, encauzándola hacia una lectura adecuada y dirigida sin posibilidades de equívocos. La arqueología, que era el signo evidente de este interés, debía formar parte de la explicación histórica de la patria, recordar una secuencia temporal de la nación que se entendía como preexistente a la Independencia, que arraigaba sus raíces en la antigüedad, en un origen lejano que debía dar consistencia y legitimidad a un país nuevo.”*

En la Tercera Conferencia Panamericana de Río de Janeiro de 1906 no encontramos resoluciones referentes al tema que nos preocupa. Sin embargo, en el contexto de este americanismo, tienen lugar una serie de congresos científicos que se van relacionando con la iniciativa de las conferencias panamericanas. Es así como entre el 25 de diciembre de 1908 y el 5 de enero de 1909 tiene lugar en Santiago de Chile, el Cuarto Congreso Científico Latinoamericano, que pasa a denominarse Primer Congreso Científico Panamericano. En este congreso se reunieron 2.238 científicos de todas las disciplinas, acordando la sección de ciencias naturales, antropológicas y etnológicas:

*“Manifestar a los Gobiernos de las Repúblicas Americanas la conveniencia de multiplicar los museos etnológicos por zonas geográficas, con el fin de acrecentar el material arqueológico existente y facilitar las investigaciones...”*

*“Pedir a los mismos gobiernos la ejecución del acuerdo tomado por el Congreso Científico de Montevideo sobre que se declaren de propiedad nacional los objetos de valor etnológico que no hubieren sido aún extraídos de los enterratorios, depósitos de litorales, etc.”*

*“Que reglamenten los pormenores relativos a excavaciones, en el sentido de que solo puedan ser practicadas por personas competentes...”*

*“El Congreso recomienda también a los Gobiernos americanos facilitar y fomentar las publicaciones folklóricas, como un medio de estudiar el alma nacional americana.”* (Poirier, Eduardo. 1915:184)



Cuarto Congreso Científico Latinoamericano realizado en Santiago de Chile entre 1908 y 1909. Fotografía Archivo Museo Histórico Nacional

Este congreso científico tuvo gran atención del Gobierno chileno, quien lo financió en parte. Los asistentes al congreso participaron también en la inauguración del monumento al Dr. Manuel Barros Borgoño en los jardines de la Escuela de Medicina, siendo algunos de ellos invitados al Sur del país, donde conocieron las ruinas de las fortificaciones coloniales españolas de Corral, lugar en el que observaron:

*“...los trabajos de demolición de esta obra histórica del tiempo de los españoles – demolición que había sido paralizada cuando el Presidente de la República, Exmo. Sr. Montt hizo su viaje a Valdivia...” (Poirier, Eduardo. 1915:164).<sup>80</sup>*

El citado congreso no solo pretendía integrar a los países americanos a través de la ciencia sino más aún, ya que en el texto antes referido se señalaba: *“Nuestras nacionalidades podrían, en sentido análogo al religioso, extender el concepto de la unidad social americana mas allá de las fronteras, mas allá de la nación...”* (Poirier, Eduardo. 1915:82).

En la Cuarta Conferencia Panamericana de Buenos Aires, realizada en 1910, tampoco hay menciones al tema patrimonial, salvo en lo relacionado a las celebraciones que varias naciones americanas tenían planificadas para conmemorar el primer centenario de su independencia nacional. En los años

<sup>80</sup> Mencionamos el hecho, aunque anecdótico, de lo que estaba ocurriendo con este patrimonio, que años después pasaría a ser uno de los primeros monumentos históricos en ser declarados y que estuvo a punto de ser destruido.

siguientes no se organizó una nueva conferencia, seguramente debido a la Primera Guerra Mundial, siendo la próxima realizada en Santiago de Chile en 1923. Sin embargo si se pudo llevar a cabo, antes de que Estados Unidos ingresara al conflicto en Europa, el Segundo Congreso Científico Panamericano, que tuvo lugar en Washington entre el 27 de diciembre de 1915 y el 8 de enero de 1916. En dicho congreso se propuso crear la Unión Arqueológica Panamericana, cuyo objetivo era la protección del patrimonio arqueológico del continente, moción que fue presentada por los gobiernos de Chile, Brasil y Argentina el 2 de enero de 1916 (<http://www.ugr.es/~amenende/publicaciones/Hispania%206.pdf>).

En el contexto de la organización de este Congreso Científico Panamericano, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en su sesión de la Sección de Antropología, Arqueología y Etnografía del 21 de agosto de 1915, que fue presidida por Max Uhle, recibió una consulta para opinar sobre la necesidad de que los gobiernos dictaran normas legales de protección de los bienes y sitios arqueológicos:

*“El presidente anunció que el objeto de la sesión era poner en discusión el tema propuesto a la Sociedad por el Comité del Segundo Congreso Científico Panamericano, que se reunirá en Washington a fines del año en curso: Conveniencia de dictar una ley uniforme para todos los países americanos con el objeto de proteger y estimular el estudio y recolección del material antropológico y arqueológico. Con el objeto de aclarar las dificultades que rodean el tema, el señor Uhle leyó un trabajo que había preparado en que se refería a los diferentes ensayos hechos en algunos de los países americanos para legislar en este sentido y que hasta ahora habían dado resultados negativos. Dio cuenta de las acciones hechas al efecto en el Perú, en que tomó parte.” (Revista Chilena de Historia y Geografía, Santiago de Chile, Tomo 15, p. 479)*

Posteriormente, en la Sesión del 4 de septiembre de 1915, se trató nuevamente el tema donde el Dr. Alejandro Ayala da a conocer una ley boliviana y un decreto para la protección de los monumentos de Tiahuanaco y las islas del Lago Titicaca y el Sr. Uhle:

*“...leyó un proyecto de ley para el mismo propósito y que fue puesto en discusión. El señor Sanfuentes hizo ver que alguna de sus cláusulas no estaban redactadas en conformidad con la legislación vigente y que presentarían dificultades por cuanto no respetaban los derechos de propiedad ya adquiridos. Propuso una nueva fórmula que en tesis fue aceptada por los concurrentes y quedó de llevarla redactada a la próxima sesión.” (Revista Chilena de Historia y Geografía, Santiago de Chile, Tomo 15, p. 480)*



Con estas citas vemos que el tema estaba ya incorporado en la discusión de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, donde participaban los más destacados historiadores y antropólogos de la época, además de políticos que tenían un especial interés intelectual y que ocuparon cargos tanto en el Gobierno como en el Congreso. Posteriormente, su experiencia en el tema, será la razón principal para que sea una de las primeras instituciones privadas en ser incorporada al primer Consejo de Monumentos Nacionales que se crea en 1925, aunque no hemos encontrado más referencias específicas en las actas de dicha sociedad que hemos revisado entre 1915 y 1926. No obstante lo anterior, en atención a los integrantes de dicha sociedad, entre los cuales destacaban Roberto Huneus, Vicente Zeggars, Miguel Luis Amunátegui, Alberto Edwards, Carlos Vicuña Mackenna, Tomás Thayer Ojeda, Emilio Vaisse, Ricardo Latcham, Max Uhle, Aureliano Oyarzún, entre otros intelectuales y a la vez políticos, podemos pensar que tuvieron cierta influencia en la promulgación de la primera legislación patrimonial de Chile.<sup>81</sup>

Si bien en las conferencias panamericanas y en los congresos científicos panamericanos, la protección del patrimonio arqueológico es un tema considerado a partir desde comienzos del siglo XX, se realizan también varios congresos de arquitectos en los cuales el patrimonio es considerado de una manera más amplia. Es así como en el Primer Congreso Panamericano de Arquitectos, realizado en Montevideo, entre el 1 y 7 de marzo de 1920, uno de los temas tratados es el *“embellecimiento de la ciudad típica americana”*. El mismo tema, pero con mayor profundidad, es abordado en el Segundo Congreso Panamericano de Arquitectos, que tuvo lugar en Santiago de Chile, entre el 10 y 20 de septiembre de 1922, donde se discutió sobre la *“...modernización y embellecimiento de las ciudades americanas...”* y sobre la *“...conservación de los monumentos de valor histórico, arquitectónico o arqueológico...”* y sobre la *“...importancia de los museos de materiales de construcción.”*<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> La Sociedad Chilena de Historia y Geografía dedicará algunos de sus artículos y sesiones de socios a discutir también temas particulares sobre la situación de algunos monumentos públicos y como cautelar la información y promover su restauración. Por ejemplo, en la Sesión del 14 de junio de 1915, el Sr. Carlos Vicuña Mackenna propone que se nombre una comisión para estudiar y conservar las inscripciones de los monumentos coloniales de la ciudad, del Cementerio General, de los conventos, de las cuales habría que sacar una copia, lo que es aceptado por la sociedad, nombrando para tal efecto al propio Vicuña. También se discute en esta sesión la situación del monumento a los escritores de la independencia que había sido deteriorado por una manifestación política el 22 de octubre de 1905. Acta de la sesión del 14 de junio de 1915. *Revista de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía*. Santiago de Chile. Tomo 15, pp. 479.

<sup>82</sup> Referencias sobre estos dos congresos aparecen en la página 224 del documento Conferencias internacionales americanas. Primer Suplemento. Publicado en la Biblioteca Digital Daniel Cosío. [http://biblio2.colmex.mx/coinam/coinam\\_1\\_suplemento\\_1938\\_1942/base2.htm](http://biblio2.colmex.mx/coinam/coinam_1_suplemento_1938_1942/base2.htm).

De esta manera vemos como, en el contexto internacional, existía un ambiente intelectual en el cual los temas patrimoniales ya estaban instalados, restando solo un último impulso para dotar a Chile de una legislación al respecto, que retomara el primer esfuerzo realizado en 1910, que estuvo a punto de ser materializado en una ley. Este último impulso lo daría la realización en Santiago de Chile de la Quinta Conferencia Panamericana, que tuvo lugar entre el 25 de marzo al 3 de mayo de 1923. La conferencia fue presidida por el chileno Agustín Edwards y la delegación chilena estuvo integrada por Carlos Aldunate Solar, Luis Barros Borgoño, Emilio Bello Codecido, Alcibíades Roldán, Antonio Huneeus, Alejandro del Río, Manuel Rivas Vicuña y Guillermo Subercaseaux.<sup>83</sup>

Esta conferencia aprobó el 13 de abril de 1923 una resolución sobre *la "Protección de los Documentos Arqueológicos"*, la cual fue utilizada como uno de los argumentos para que dos años después se dictara la primera legislación de protección del patrimonio en Chile. Esta resolución, que se incluye en extenso en el Anexo N° 4, recomendaba una serie de medidas sobre el patrimonio arqueológico, arquitectónico e histórico, además de solicitar que los gobiernos de los países americanos dictaran leyes al respecto. Entre las medidas acordadas estaban<sup>84</sup>:

*"1º Recomendar a los Gobiernos de América la asignación en los presupuestos anuales de una suma conveniente para las excavaciones y estudios de los restos arqueológicos, para la expropiación de los que sea necesario, como también de los documentos históricos que convengan y para el fomento de los museos y bibliotecas en que han de conservarse para ser utilizados. "*

*"4º Insinuar a los mismos Gobiernos la conveniencia de que se legisle en el sentido de obligar a quienes descubran restos arqueológicos, a denunciar a la autoridad administrativa, sin que puedan ser removidos antes de un plazo prudencial para su examen."*

---

<sup>83</sup> Es importante tener presente algunos de estos nombres. Por ejemplo Luis Barros Borgoño, que ocupará brevemente el cargo de Presidente de la República en 1925, será quien firme el Decreto Ley N° 651 que crea el Consejo de Monumentos Nacionales; así también Antonio Huneeus Gana es el hermano de Jorge Huneeus Gana, el Ministro de Instrucción Pública que impulsó el primer proyecto de ley de monumentos nacionales en 1910; también Emilio Bello Codecido conocía de primera fuente la iniciativa legislativa sobre conservación de monumentos, por participar en la sesión del Consejo de Estado de 1910 donde se trató, estando presente además en varias de las conferencias panamericanas anteriores. Una foto de todos los integrantes de la delegación chilena fue publicada en el Diario La Nación de 1923, cuyo recorte está en el Archivo Emilio Bello Codecido, Volumen 4, N° 14.

<sup>84</sup> Citado en las páginas 241 y 242 del documento *Conferencias Internacionales Americanas, Primer Suplemento*, que publica la Biblioteca Digital Daniel Cosío Villegas del Colegio de México en: [http://biblio2.colmex.mx/coinam/coinam\\_1\\_suplemento\\_1938\\_1942/base2.htm](http://biblio2.colmex.mx/coinam/coinam_1_suplemento_1938_1942/base2.htm).

*“5º Igualmente que se dicten leyes que faculden a los Gobiernos para expropiar, por causa de utilidad pública, los restos arqueológicos, los documentos, las construcciones y objetos muebles de interés histórico, cuya exportación debe ser prohibida en todo caso.”*

*“6º Recomendar a los Gobiernos aludidos la designación de expertos que dictaminen sobre la procedencia de las exportaciones; sobre la preservación de tales restos, documentos, construcciones y objetos muebles de interés histórico; y que supervigilen, además, la restauración de los edificios y construcciones a los cuales se les haya asignado ese carácter, a fin de conservárselo.”*

Es interesante mencionar algunos detalles sobre esta resolución que encontramos en el Archivo Emilio Bello Codecido, conservado en el Archivo Nacional de Chile, en donde están los documentos originales de parte de las actas de la delegación chilena a la conferencia. El encargado de la delegación chilena de analizar el tema de la “Protección de los Documentos Arqueológicos” fue Alcibiades Roldán. Este tema fue el número XVII de la Conferencia, cuyo título era: *“Estudio de un plan por medio del cual y con la aprobación de los eruditos e investigadores de los diversos países se puedan llegar a establecer por los Gobiernos de las Américas un sistema, mas o menos uniforme, para la protección de los documentos arqueológicos y otros necesarios para la formación de una buena historia americana”* (Archivo Emilio Bello Codecido, Vol. 25:243). Al respecto, en el acta de la cuarta sesión de la delegación chilena, se indica:

*“El Sr. Roldán...se acuerda que durante uno de los congresos científicos, celebrado en Washington, los presidentes de las delegaciones de Chile, Brasil y Argentina, presentaron un proyecto de Unión Arqueológica Panamericana, que tenía por objeto proteger los documentos existentes en los países americanos...explica que ha omitido la idea de prohibir la exportación, que figura en todas las leyes americanas sobre la materia, porque Chile carece de riquezas arqueológicas exportables, y parecería fuera de lugar si formulase una indicación en ese sentido...”<sup>85</sup>* (Archivo Emilio Bello Codecido, Vol. 25:260).

En el acta de la citada sesión se indica que el Sr. Roldán presenta un proyecto de redacción al respecto, el cual no aparece en el acta, pero ésta sí indica que Agustín Edwards, que presidía la delegación chilena, afirmó que: *“...considera muy oportuna la presentación del proyecto elaborado por el Sr. Roldán, porque en el*

---

<sup>85</sup> No podemos dejar de comentar esta aseveración, ya que demuestra el escaso valor que se le asignaba al patrimonio arqueológico de Chile entonces y/o el desconocimiento sobre la materia que tenían los delegados chilenos. Descartando Chile continental hay que recordar que Isla de Pascua, famosa a nivel mundial por su patrimonio arqueológico, ya formaba parte de Chile desde 1888.

propio manual de la Unión Panamericana, Chile aparece como si no hubiera tomado medida alguna para la protección de la arqueología...”(Archivo Emilio Bello Codecido, Vol. 25:260).

Finalmente queda registrada en el acta antes citada que:

“...la delegación acordó adoptar como suyo el proyecto del Señor Roldán sin perjuicio de apoyar cualquier otro de la misma índole que se presente a la conferencia. Acordó, también, dejar a otra delegación la iniciativa de incorporar en él un inciso prohibitivo de la exportación.”

La Quinta Conferencia Panamericana tuvo una amplia cobertura en la prensa chilena y el acuerdo sobre la protección del patrimonio arqueológico e histórico determinó que el Gobierno de Arturo Alessandri elaborara un proyecto al respecto, que se materializó primero en el Decreto N° 3.500 del 19 de junio de 1925 y, poco después, en el Gobierno de Luis Barros Borgoño, mediante el Decreto Ley N° 651 del 17 de octubre de 1925.

En las próximas conferencias panamericanas continuará esta preocupación por el tema patrimonial. Es así como en la Conferencia Panamericana de Montevideo, celebrada en 1933, se acuerdan recomendaciones sobre las investigaciones arqueológicas, sobre los monumentos inmuebles y sobre los monumentos muebles. En los próximos años la Unión Panamericana se transforma en la OEA, entidad que continuará teniendo una fructífera labor en el campo de la cultura y también en el patrimonio.

#### **4.3. La Primera Legislación Patrimonial de Chile de 1925**

Como hemos descrito en el capítulo anterior, en la década de 1920 ocurrieron profundos cambios políticos en Chile, concluyendo el régimen parlamentario que se había instaurado después de la Revolución de 1891, dictándose una nueva Constitución en 1925. En esta década y comienzos de la siguiente, hubo varios golpes de Estado, asumiendo los militares el gobierno del país, quienes estaban interesados en impulsar cambios radicales en la organización del Estado y varias reformas sociales.

Es en este convulsionado contexto político que se dicta el Decreto N° 3.500 del 19 de junio de 1925 sobre monumentos históricos, mientras aún gobernaba el Presidente Alessandri y, poco después, el Decreto Ley N° 651 del 17 de octubre de 1925, que crea el Consejo de Monumentos Nacionales, cuando la presidencia de la República estaba a cargo de Luis Barros Borgoño.

El Decreto Nº 3.500 del 19 de junio de 1925, que nombra una comisión encargada de la vigilancia y conservación de los monumentos históricos nacionales, fue elaborado en el Ministerio de Instrucción Pública y lleva la firma del Ministro José Maza Fernández, quien ocupó el cargo entre el 29 de enero y el 30 de septiembre de 1925. José Maza era abogado y militaba en el Partido Liberal, siendo diputado, senador, embajador y ministro de Estado en varias oportunidades.

El Decreto Nº 3.500 (Donoso, R. 1937) es consecuencia directa de los acuerdos sobre la protección de los bienes arqueológicos e históricos, alcanzados en la V Conferencia Panamericana realizada en Santiago en 1923, durante el Gobierno del Presidente Alessandri, lo cual es indicado de forma expresa en los considerandos del decreto. No obstante, este documento repite, no sólo ideas y argumentos, sino también de manera textual varias frases del Proyecto de Ley de 1910 sobre Conservación de Monumentos Históricos, lo cual demuestra que la iniciativa no fue olvidada.

Los argumentos que anteceden al articulado del decreto son importantes de destacar, ya que mencionan la responsabilidad del Estado respecto de la conservación del patrimonio, su relación con los principales eventos de la historia del país y su significación para la identidad nacional. También se menciona una preocupación por la conservación de los monumentos arquitectónicos de la época colonial y por el patrimonio arqueológico, destacando particularmente los casos de las fortificaciones coloniales españolas del sur de Chile y la situación del patrimonio arqueológico de Isla de Pascua. Por ejemplo se indica:

*“Que una de las manifestaciones de cultura de un país es el empeño que demuestran sus autoridades en conservar, con su estilo propio y en buen estado, las construcciones o monumentos de carácter artístico o histórico donde se han desarrollado acontecimientos notables de la vida nacional;”*

*“Que en las naciones de mayor cultura se ejerce por el Estado una severa vigilancia y decidida protección sobre los citados monumentos, por medio de Comisiones Gubernativas que han llevado a cabo importantes restauraciones en edificios y monumentos que fueron levantados en épocas pasadas y gloriosas, y que habían quedado en completo abandono;”*

*“Que mediante los trabajos de esas comisiones se ha provocado una saludable y patriótica emulación entre la autoridades comunales y aún entre los particulares de las distintas regiones donde existen esos monumentos, para la conservación y la restauración de esas reliquias que recuerdan los esfuerzos que hicieron las generaciones pasadas por cimentar su nacionalidad;”*

*“Que la 5ª Conferencia Panamericana celebrada en Santiago el año 1923 tomó resoluciones concretas sobre la preservación y conservación de los restos históricos y arqueológicos que existen en los países americanos, recomendado a los Gobiernos la dictación de leyes que obliguen a los particulares a denunciar ante las autoridades los hallazgos arqueológicos y ruinas históricas e impidan la explotación con fines de lucro, de los objetos que de ellos se extraigan;”*

*“Que existen en Chile monumentos y construcciones de carácter artístico, histórico y arqueológico que están expuestos a sufrir graves deterioros, como ocurre con los fuertes, capillas, molinos, hornos de fundición, etc., construidos bajo la denominación española en diversos puntos de la frontera y región austral, principalmente en las bahías de Corral y Ancud; y lo mismo sucede con los monumentos de la isla de Pascua;”*

*“Que hay evidente necesidad y conveniencia en adoptar medidas eficaces para resguardar esos bienes fiscales mientras se dictan las leyes que el interés y el progreso de la ciencia del país reclaman y es deber del Estado proteger los mencionados edificios y monumentos y conservarlos en condiciones de que las generaciones presentes y futuras puedan apreciar debidamente los esfuerzos que hicieron las precedentes para fundamentar nuestra nacionalidad.”*

El decreto establece en su articulado que los edificios y monumentos históricos y arqueológicos quedan bajo la protección del Estado y que mientras se dicta una ley sobre esta materia, de acuerdo con las resoluciones de la 5ª Conferencia Panamericana, se creará una comisión gubernamental que estará encargada de la *“vigilancia, restauración y conservación de esos monumentos”*.

Esta Comisión de Monumentos Históricos estaba presidida por el Ministro de Instrucción Pública e integrada por 12 personas más, entre los que estaban: el Presidente de la Sociedad de Historia y Geografía, que era el vicepresidente de la comisión, el Director del Museo Histórico Natural, el Director del Museo de Antropología y Etnología; el Director del Museo de Bellas Artes, el Director del Archivo Histórico Nacional, un abogado del Consejo de Defensa Fiscal, el Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, dos escritores, de preferencia de los que se hayan dedicado a los estudios históricos, un artista pintor o dibujante, un escultor, y por un Jefe de Ejército del arma de ingenieros. La comisión debía nombrar a uno de sus integrantes como secretario encargado de hacer las actas y tramitar sus acuerdos.

Entre las atribuciones de la Comisión de Monumentos Históricos podemos mencionar las siguientes:



*“Formar un registro completo de los edificios y monumentos históricos y arqueológicos que existan en el territorio nacional, y clasificarlos según sus características;”*

*“Redactar para cada uno de ellos una relación artística e histórica; hacer una descripción detallada; levantar un plano y tomar los aspectos fotográficos.”*

*“Indicar al Gobierno los trabajos de restauración, reparación y conservación que sea necesario ejecutar en los edificios y monumentos históricos y arqueológicos para volverlos a su estilo y aspecto primitivo; dirigir y vigilar los trabajos que se ejecuten y fiscalizar la inversión de los fondos que el Estado, las Municipalidades y los particulares le concedan para efectuar estos trabajos;”*

*“Gestionar por los medios legales o por cualquiera otro, la reivindicación o cesión por el Estado de los terrenos donde estén ubicados los monumentos o edificios históricos o arqueológicos que figuren como de propiedad particular, como asimismo sus alrededores, a fin de dejarlos accesibles al público que vaya a visitarlos;”*

*“Perseguir la responsabilidad civil y criminal de las personas que deterioren o hayan destruido los referidos monumentos, o de los ocupantes que se encuentren en ellos, o los usen a título precario o sin título alguno;”*

*“Proponer al Gobierno la expropiación de los edificios de propiedad particular de carácter histórico que convenga adquirir o conservar;”*

*“Promover y fomentar la cooperación de los particulares a los trabajos de reparación y conservación de los monumentos históricos de la época colonial;”*

*“Reglamentar el acceso de los visitantes al recinto de los edificios y monumentos históricos y proponer al Gobierno la dictación de aquellas medidas que sean conducentes a la mejor vigilancia y conservación de los mismos;”*

La tarea principal encomendada a la Comisión de Monumentos Históricos era la de presentar al Gobierno un proyecto de legislación que indicara las normas a que debían sujetarse los monumentos en cuanto a su restauración y conservación; la protección y vigilancia de los monumentos, estatuas, columnas conmemorativas; la adquisición para el Estado de los elementos que deben conservarse en los museos nacionales y la regulación del comercio de los objetos que se extraigan de cualquiera excavación que se efectúe por cualquier motivo en el territorio nacional,

sean ellos piezas etnológicas, antropológicas, arqueológicas o simples objetos de folklore, como también su exportación.

Para que los monumentos históricos fueran considerados bajo protección oficial, se debía dictar un decreto supremo a solicitud de la Comisión de Monumentos Históricos. También se estableció que cualquiera autoridad o ciudadano podía denunciar la existencia de un monumento o edificio histórico ante el Gobernador Provincial respectivo donde este se encuentre o ante la Comisión de Monumentos Históricos. Esta Comisión debía designar a uno o varios de sus miembros para que presenten un informe que sirva de antecedente para su pronunciamiento.

También indicaba el decreto que una vez declarado un monumento histórico, el cual podía ser una construcción o un lugar, ninguna autoridad o repartición administrativa, fuera de la Comisión de Monumentos, podría intervenir en su conservación sino por un expreso mandato, y que los objetos que existan en el monumento no podían ser removidos ni trasladados de un sitio a otro sin acuerdo de la Comisión, ni podían ser exportados sin autorización legal.

Es interesante destacar en este decreto la disposición de que en las comunas donde existan monumentos debía funcionar un comité de vecinos integrado por el alcalde, el cual tendría por objeto cooperar con la Comisión de Monumentos Históricos y que ésta podía delegar en dicho comité parte de sus funciones, facultando a las municipalidades contribuir en los gastos de conservación, restauración y vigilancia de los monumentos.

A nivel nacional, la confrontación política entre el Presidente Alessandri y su Ministro de Guerra Carlos Ibáñez, quien realmente tenía el poder del país, obligó al primero a renunciar a comienzos de octubre de 1925, quedando al mando de la nación el vicepresidente Luis Barros Borgoño hasta que a fines de año se realizaran las elecciones presidenciales. No obstante lo anterior, se cumplió con lo dispuesto en el Decreto N° 3.500 y el Gobierno dictó el Decreto Ley N° 651 del 17 de octubre de 1925, que creaba el Consejo de Monumentos Nacionales y normaba la conservación y restauración de los monumentos, además de las excavaciones arqueológicas. No deja de ser curioso, que a pesar del contexto político de suma convulsión, esta norma legal pudiera ser aprobada por el Gobierno, aunque no fue discutida en el Congreso, ya que este había sido disuelto.



Monumento al Presidente Arturo Alessandri



Alessandri en su primer mandato. Foto de A. Cabeza y del Archivo del Museo Histórico nacional respectivamente

El Decreto Ley N° 651 del 17 de octubre de 1925, que reproducimos en el Anexo N° 6, lleva la firma de Luis Barros Borgoño, quien frente a la renuncia del Presidente Alessandri tenía el mando de la nación. Dicho decreto salió desde la Subsecretaría de Guerra del Ministerio de Defensa Nacional y también lleva la firma del Ministro Oscar Fenner. En sus artículos rescata la esencia del Decreto N° 3.500, definiendo desde el principio que los monumentos nacionales son aquellos bienes históricos, artísticos o arqueológicos cuya conservación interesa a la ciencia, a la historia y el arte, incorporando además todos los objetos de carácter conmemorativo que estén en lugares públicos, los cuales coloca bajo protección del Estado a través del Consejo de Monumentos Nacionales.

El Decreto Ley N° 651 define claramente en su artículo N° 1 los bienes que pueden ser considerados como monumentos históricos:

*“Los edificios o ruinas de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios de aborígenes; los objetos o piezas antro-po-arqueológicas o de formación natural que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional y cuya conservación interese a la ciencia, a la historia o al arte; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en jeneral, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo, quedan, como monumentos nacionales...”*

El Consejo de Monumentos Nacionales sería un organismo público que integrarían 15 personas siendo su presidente el Ministro de Instrucción Pública y su

vicepresidente el presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Además de su seno debía nombrarse un secretario. Entre sus integrantes estaban además el Director del Museo Histórico Nacional, el Director del Museo de Etnología y Antropología, el Director del Museo de Bellas Artes, el Director General de Obras Públicas, el Conservador del Archivo Histórico Nacional, el Presidente de la Asociación de Arquitectos de Chile, un Jefe del Ejército, del arma de ingenieros, en actividad o en retiro, un Jefe de la Armada, en actividad o en retiro, un abogado del Consejo de Defensa Fiscal, dos escritores, un artista, pintor o dibujante y un escultor.

Dicho organismo tendría las siguientes atribuciones: llevar el registro de los monumentos históricos y de los monumentos públicos, la restauración y conservación de los monumentos históricos, gestionar la cesión para el Estado de los monumentos históricos que sean de propiedad de particulares, reglamentar el acceso y proponer al Gobierno los reglamentos necesarios que requiera esta legislación.

Para que un bien fuera considerado como monumento histórico se debía dictar un Decreto Supremo a petición del Consejo de Monumentos Nacionales, estableciéndose que los monumentos de propiedad privada no podían ser alterados sin autorización de dicho organismo, estando sancionado con multas quienes no cumplieran esta disposición, quedando facultado este Consejo para pedir al Gobierno la expropiación de los monumentos. Además indicaba que en los municipios donde existieran monumentos sus autoridades tenían la obligación de cooperar con el Consejo en su protección y conservación.

La definición de monumento histórico fue muy precisa, pudiendo ser este un sitio, una construcción o un objeto:

*“Art. 7º Será considerado monumento histórico, para los efectos de esta ley, todo edificio, ruina, lugar o sitio, pieza u objeto antro-po-arqueológico, mueble o inmueble, de propiedad nacional, municipal o particular, que sea declarado tal por decreto supremo que se dicte a solicitud y por acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales, previos los trámites que fijará el Reglamento.”*

También define los monumentos públicos como aquellos:

*“... edificios y recintos, urbanos y rurales, que tengan carácter histórico o artístico, las estatuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en jeneral, todos los objetos que se hubieren colocado y se colocaren en campos, calles, plazas y paseos públicos, para perpetua memoria.”*

También el Decreto Ley estableció normas claras para prohibir y regular la exportación de los objetos patrimoniales:

*“Art. 10º Si el monumento declarado histórico, fuere un objeto mueble de propiedad particular, no podrá ser exportado, bajo pena de comiso y multa de un mil a cinco mil pesos, si se intentare hacerlo clandestinamente. Solo en virtud de autorización suprema, otorgada previo informe favorable del Consejo de Monumentos Nacionales, se permitirá la exportación de objetos antro-po-arqueológicos o de carácter histórico, y siempre que existan dos ejemplares, por lo menos, en museos nacionales. “*

Esta legislación por vez primera norma las excavaciones arqueológicas estableciendo que:

*“Art. 16º Ninguna persona o corporación podrá hacer, en el territorio nacional, excavaciones de carácter arqueológico, antropológico, paleontológico o paleoantropológico sin haber obtenido previamente la correspondiente autorización suprema, que solo se otorgará en virtud del informe favorable del Consejo de Monumento Nacionales, y una vez que hubieren llenado los requisitos que establezca el Reglamento. La infracción de esta disposición será penada con multa de un mil a cinco mil pesos y los objetos que se hubieren extraído pasarán a poder del Estado. La reincidencia será penada, además, con prisión de veinte a sesenta días.”*

Además indicaba en su artículo N° 19 que:

*“La autoridad, funcionario, contratista o persona natural o jurídica, que practicare excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, minas u otros análogos, está obligado a denunciar ante el Gobernador del departamento, el hallazgo o descubrimiento de cualquier objeto, pieza o ruina de carácter antro-po-arqueológico, o histórico que encontrare en las excavaciones que esté practicando, y será responsable de su vijilancia y conservación, hasta que la autoridad administrativa se haga cargo del hallazgo.”*

Por otra parte, esta legislación establecía sanciones y penas claras en los siguientes artículos:

*“Art. 23º Los particulares que destruyan u ocasionen perjuicios en los monumentos históricos o públicos, o en los objetos o piezas que se conserven en ellos o en los museos, sufrirán las penas que se establecen en los artículos 485 y 486 del Código Penal, sin perjuicio de perseguir la responsabilidad civil que les afecte, para obtener la reparación de los daños materiales que hubiere causado en los citados monumentos o piezas.”*

*“Art. 26. Toda infracción a las disposiciones de la presente lei, que no esté expresamente contemplada, será castigada con multa de cien a cinco mil pesos, sin perjuicio de la que corresponda según la lei común.”*

*“Art. 27. Se concede acción popular para denunciar toda infracción a la presente lei.”*

Finalmente el Decreto Ley trató el tema del financiamiento indicando expresamente:

*“Art. 28º El Consejo de Monumentos Nacionales tendrá una asignación anual no inferior a treinta mil pesos (\$ 30.000), para gastos de secretaría, impresiones, publicaciones, pago de trabajos técnicos, movilización, viajes, útiles de escritorio e imprevistos. Los gastos serán autorizados, en cada caso, por el Consejo.”*

*“Art. 29. Autorízase al Presidente de la República para invertir la cantidad de diez mil pesos (\$ 10.000), para organizar el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales. “*

Concluyendo, el citado Decreto Ley N° 651 estableció que, mientras se dictaba el Reglamento el Consejo de Monumentos Nacionales, este se regiría por las normas del Decreto N° 3.500 antes aludido. Lamentablemente dicho Reglamento no se dictó en los años siguientes, quizás debido a la agitación política que tuvo el país entre los años 1925 y 1932, olvidándose dicha disposición. Es más, el Consejo de Monumentos Nacionales, sólo habría comenzado a funcionar de manera más regular a partir de 1935, durante el segundo gobierno del Presidente Arturo Alessandri.

Como veremos más adelante se declaran varios monumentos después de 1925, pero no hemos encontrado las actas que nos indiquen claramente que el Consejo de Monumentos Nacionales sesionó durante estos primeros años. Avala esta suposición el acta del 18 de Junio de 1935 que tiene por título: “Acta de la sesión constitutiva del Consejo de Monumentos Nacionales celebrada en la sala de despacho del señor ministro de educación el martes 18 de Junio de 1935”.

En lo concreto, Chile tuvo con estos actos administrativos una legislación y una institucionalidad que complementaba la función de las bibliotecas, museos y archivos que el Estado había creado desde 1813. El Decreto N° 3.500 y el Decreto Ley N° 651 de 1925 estuvieron vigentes hasta 1970, en que una nueva legislación los reemplazó y que, con pequeños cambios, es la que rige hasta la actualidad.



Las medidas legales de 1925 estuvieron inspiradas en el primer proyecto de ley de 1910, iniciativa a la cual se adicionaron los avances que sobre la materia había en acuerdos internacionales, tanto producto de las reuniones de las Conferencias Panamericanas, como de los congresos científicos y de especialistas en el área de la arquitectura, la antropología y la arqueología. Por cierto, en el caso chileno, el espíritu de replicar el modelo francés en primer lugar, y europeo en general, está claramente demostrado para lo que se quiso hacer en 1910, proceso que se venía gestando desde hacía varias décadas.

No obstante, las funciones y normativas del Consejo de Monumentos Nacionales de 1925, estaban en sintonía con lo que se estaba haciendo al respecto a nivel internacional, aunque primó la terminología francesa de los monumentos nacionales y de los monumentos históricos, que en Francia y en Europa continental en general, se estaban utilizando desde el siglo XIX y antes inclusive.

Es interesante destacar que la normativa de 1925 tuvo que enfrentar uno de los problemas centrales del patrimonio, relativo a la propiedad privada de los monumentos, el cual sigue presente hasta el día de hoy. En el caso chileno, siguiendo el modelo internacional, se estableció que los bienes arqueológicos producto de excavaciones científicas o de hallazgos fortuitos pertenecían al Estado, y se reguló la exportación de aquellos que estaban en poder de particulares. También se estableció que toda excavación científica debía ser previamente autorizada, penalizando a aquellos que no cumplieran con esta norma o no dieran aviso del descubrimiento de sitios u objetos arqueológicos.

También es importante señalar que los bienes arquitectónicos de particulares que fueran declarados monumentos históricos se establecieron limitantes al uso y goce de la propiedad, ya que las intervenciones en ellos debían ser previamente autorizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales. Esta limitación no fue cuestionada en un comienzo, ya que la mayoría de los bienes declarados fueron de propiedad fiscal o municipal, pero en las décadas posteriores y, particularmente a partir de 1970, comenzó a ser cuestionada por ciertos propietarios que vieron en la declaración de monumento una carga, ya que les impedía demoler sus inmuebles o modificarlos a su antojo con objetivos inmobiliarios, como veremos más adelante.

La creación del Consejo de Monumentos Nacionales fue sin duda un gran avance institucional, aunque su funcionamiento fue débil en un comienzo, y debieron pasar varias décadas para que su operación fuera más visible, pero su financiamiento fue siempre paupérrimo por no decir insignificante.

Al respecto, podemos decir que el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, en esta primera etapa, fue más bien producto de las personas que lo integraron, más que de una política oficial del Gobierno. La trayectoria de esta

institución será tratada más adelante, junto con un análisis de los bienes declarados desde su fundación. Por ahora trataremos la evolución de esta institución en esta primera etapa, para después abordar la nueva legislación que se gestó en la segunda mitad de los años sesenta, la cual fue discutida por el Congreso Nacional en 1969 y que significó la promulgación de la Ley N° 17.288 de 1970.

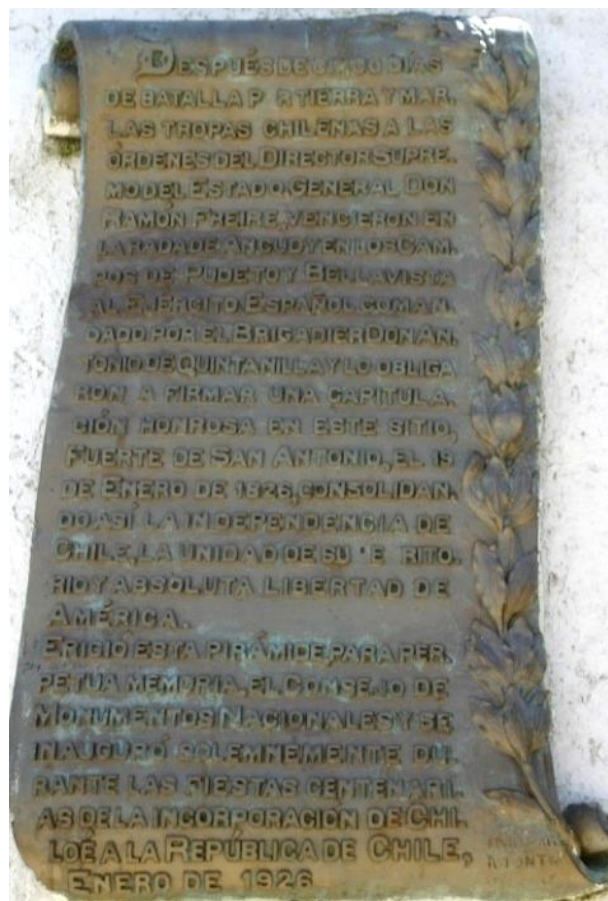
#### **4.4. La Evolución del Consejo de Monumentos Nacionales entre 1925 y 1970**

En los próximos párrafos relataremos la evolución del Consejo de Monumentos Nacionales hasta 1970, fecha en que se dicta la nueva ley que modifica su estructura y funciones. Para ello nos hemos basado fundamentalmente en las actas de sus sesiones que hemos encontrado en los archivos de la entidad y en las propias declaraciones de monumentos nacionales que impulsó. Integrando ambos tipos de datos, observamos que podemos distinguir las siguientes etapas de esta institución: la primera que va entre 1925 y 1927; la segunda entre 1935 y 1938; la tercera que va entre 1949 y 1954 y la cuarta entre 1961 y 1969. En las primeras tres etapas hemos seguido el proceso sesión a sesión, en atención a la poca información que existe y por ser la fundacional de la institución. En la cuarta etapa, nuestra descripción de las acciones del Consejo de Monumentos Nacionales es más resumida, debido a que las actas de las sesiones y las declaraciones de monumentos se hacen más frecuentes y extensas.

Al final de cada etapa se hace un breve análisis. Importa destacar aquí que entre cada etapa hay un silencio administrativo del Consejo de Monumentos Nacionales, tanto en su funcionamiento, como en la ausencia de declaratorias de monumentos, lo que indica que la institución no sesionó.

##### **El Consejo de Monumentos Nacionales entre 1925 y 1927**

Si bien el Consejo de Monumentos Nacionales fue creado por el Decreto Ley N° 651 de 1925, la situación política del país que hemos descrito anteriormente no permitió que la institución funcionara hasta 1935, cuando el Presidente Arturo Alessandri estaba en su segunda administración. No obstante entre 1926 y 1927 se declararon 10 monumentos, todos del Sur de Chile y todos fueron fortificaciones: El Fuerte Tauco (Chiloé), el Fuerte Puquillihue (Chiloé), el Fuerte Chaicura (Chiloé), El Fuerte Chacao (Chiloé), el Fuerte Pargua (en la ribera norte del Canal de Chacao), el Fuerte San José de Alcudia (Río Bueno), el Fuerte de Amargos (Corral, Valdivia), el Torreón Picarte (Valdivia), el Torreón de los Canelos (Valdivia), y el Fuerte de Lota (Concepción).



Primer Monumento Público y Placa conmemorativa instalada por el Consejo de Monumentos Nacionales en uno de los fuertes españoles de Castro, Chiloé en 1926. Fotos de A. Cabeza

Todas estas declaraciones de monumentos estuvieron dirigidas a las antiguas fortificaciones coloniales del sur de Chile, varias de ellas vinculadas también con hechos de armas de la lucha por la independencia. Ello demuestra el primer interés de estas declaratorias en rescatar una parte de la historia colonial y de la primera etapa de la vida republicana. Ello coincide también con una nueva visión de la historia de Chile donde el pasado hispano cobra importancia y es reconocido como fundamental en la formación de la nacionalidad, no teniendo ya esa carga tan negativa que tuvo durante el siglo XIX, producto de la Guerra de la Independencia y de la Guerra contra España de 1865.



Torreón Picarte, Valdivia



Torreón de Los Canelos, Valdivia. Fotos de A. Cabeza

Este período también coincide con la administración del Presidente Emiliano Figueroa (1925-1927). Después, durante la administración del Coronel Carlos Ibáñez y los sucesivos gobiernos militares hasta 1932 no hay declaratorias de monumentos y también todo indica que el Consejo de Monumentos Nacionales no funcionó. La situación política junto a la crisis económica de finales de los años 20 no lo permitió, y las personalidades que colaboraron con los Gobiernos de Alessandri y Figueroa no estaban en condiciones o no quisieron ser parte de las acciones de quienes estaban en el poder. Todo comienza a cambiar cuando Arturo Alessandri se presenta de nuevo como candidato a la presidencia de la República, ganando las elecciones e iniciando su segundo mandato entre 1932 y 1938.

### **El Consejo de Monumentos Nacionales entre 1935 y 1938**

Entre 1927 y 1935 hay un silencio administrativo que hemos explicado más arriba, el cual es roto el 18 de Junio de 1935, fecha en que se realiza la primera sesión constitutiva del Consejo de Monumentos Nacionales en las oficinas del Ministro de Educación Sr. Osvaldo Vial, ocasión en la cual, de acuerdo al acta original: “...se declaró instalado el Consejo de Monumentos Nacionales...” (Archivo del Consejo de Monumentos Nacionales).

Esta primera sesión es presidida por el Ministro de Educación Sr. Osvaldo Vial y participaron el Director del Museo Histórico Nacional Sr. Aureliano Oyarzún; el Director del Archivo Nacional Sr. Ricardo Donoso; el Director de Obras Públicas Sr. Teodoro Schmidt; el Presidente de la Asociación de Arquitectos Sr. Rodolfo Oyarzún; en representación de la Armada el Almirante en Retiro Sr. Javier Martín; en representación del Ejército el Coronel Manuel Campo Rencoret; el abogado del Consejo de Defensa del Estado Sr. Daniel Schweitzer; el Sr. Richon Brunet, la Sra. Ana Lagarrigue de Claro y el Sr. Aníbal Bascuñán. Se presentaron excusas

de la inasistencia de los Sres. Alberto Mackenna, Fernando Márquez de la Plata y Agustín Edwards.

En esta primera acta el Almirante Sr. Javier Martín, señaló que años atrás funcionó el Consejo de Monumentos Nacionales, que el fue uno de los integrantes y que su secretario fue Aurelio Díaz Mesa, época en que se hicieron algunos trabajos y se estudió un reglamento. Esto debió ocurrir entre 1926 y 1927, cuando se declararon algunos monumentos, pero al parecer no se hizo registro en actas o estas se perdieron. En la misma sesión, el Director del Museo Histórico Nacional Sr. Oyarzún, entregó al Ministro de Educación un proyecto de Ley de Protección confeccionado con anterioridad. También se menciona que el Consejo no había funcionado regularmente desde la dictación del Decreto Ley N° 651, considerándose que debía dictarse una ley, pero se llegó a la conclusión de que a pesar de los problemas orgánicos, debía darse forma al Consejo y posteriormente presentar un nuevo proyecto de Ley. De acuerdo al Decreto Ley N° 651 se nombró como secretario del organismo al Sr. Aníbal Bascuñán y se acordó sesionar en la sala de derecho público de la Universidad de Chile. También se manifestó la necesidad de contar con un presupuesto para su funcionamiento y se acordó imprimir el Decreto Ley N° 651 y preparar un plan de trabajo (Acta Sesión del 18 de junio de 1935).

La segunda sesión del Consejo de Monumentos Nacionales se realizó el 26 de junio de 1935, pocos días después de la primera, lo que demuestra el interés inicial. En dicha ocasión el acta consigna que se entregó un mapa de exploraciones arqueológicas de la Provincia de Concepción enviado por el Sr. Carlos Oliver Schneider, que se decidió formar el archivo del Consejo de Monumentos Nacionales y solicitar a diversas autoridades que informen a dicho organismo sobre los proyectos atinentes a los monumentos; también se estudió el presupuesto institucional que debía ser presentado al Ministerio de Educación, el cual comprendía \$ 30.000 pesos para funcionamiento y \$ 60.000 pesos para gastos de reparación y conservación de ciertos edificios públicos, particularmente el Museo de Bellas Artes. Finalmente, el Secretario de la entidad Sr. Aníbal Bascuñán, indicó que se debían proponer al Ejecutivo la creación de algunos “...sitios y objetos...” como monumentos históricos y propuso la Isla de Pascua como el más urgente (Acta de la sesión del 26 de junio de 1935).

En la sesión del 4 de julio de 1935, el Secretario Sr. Aníbal Bascuñán, procedió a solicitar la declaración de Isla de Pascua como Monumento Histórico, basándose en la opinión de investigadores y autoridades por el interés científico de dicha Isla, por la superposición de las culturas melanésica y polinésica y por las relaciones que existirían entre Asia y América. La solicitud fue aprobada por unanimidad. En dicha ocasión también se acordó iniciar el inventario de los bienes que ya son monumentos históricos y de aquellos que merecen tal distinción, creándose una comisión especial para tal tarea. También se acordó estudiar la forma de



sancionar a quienes cometan hurtos o daños en los monumentos y analizar la situación de los museos y dotarlos de mayores recursos económicos.

En la siguiente sesión de 18 de julio de 1935 se acordó insistir ante el Ministro de Educación el presupuesto solicitado y la necesidad de estudiar un reglamento de funcionamiento. En la reunión del 1 de agosto de 1935 el Consejo sesiona por vez primera en la Biblioteca Nacional, dándose a conocer el Decreto Supremo N° 4.536 del 24 de julio de 1935, que declara Isla de Pascua como Monumento Histórico.



Isla de Pascua es declarada como Monumento Histórico en 1935. Foto A. Cabeza

La sesión del 21 de agosto de 1935, realizada en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional, fue presidida por el Sr. Amunátegui Solar, de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. En esta ocasión se nombran por vez primera visitantes especiales de monumentos al Sr. Luis Thayer Ojeda, al Director del Museo de Concepción Sr. Carlos Oliver Schneider, para actuar como delegado del Consejo de Monumentos Nacionales en el Sur, y al Sr. Aureliano Oyarzún, para la Zona Norte, autorizándose a este último a realizar una expedición científica para incrementar la colección del Museo Histórico Nacional. También se acordó crear una comisión que estudie si el Consejo debía intervenir o no en las modificaciones que se estaban haciendo en la Alameda de Santiago, además de remitir una nota al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, para que se investiguen las colecciones chilenas que fueron llevadas a Francia y Bélgica por la reciente expedición franco-belga a Isla de Pascua.

En la sesión 4 de septiembre de 1935 se subvencionaron obras de reparación de los Fuertes de Valdivia y se presenta un informe de la Academia Chilena de la Historia que propone la declaración como monumentos históricos de varias iglesias y conventos, además de sus archivos, por sus valores históricos y artísticos. También se indica la conveniencia de declarar como monumentos



históricos La Moneda y otros edificios públicos, y se tratan otras materias como una solicitud de la Universidad de Cambridge para ir a Isla de Pascua, a lo cual se accedió siempre que fuera acompañada por uno o dos consejeros y por académicos de la Universidad de Chile.

En la sesión del 27 de noviembre de 1935 renuncia el Secretario del Consejo Sr. Aníbal Bascuñan Valdés, acordándose nombrar al Sr. Fernando Figueroa Arrieta, recientemente incorporado como miembro del organismo. Se reciben además varias solicitudes para declarar monumentos conmemorativos y cambios de ubicación de estos por parte de alcaldes, reclamando los consejeros que estos no cumplieran con la legislación vigente al respecto.

En el acta de la sesión del 8 de enero de 1936 se accede a la solicitud del Alcalde de Santiago para demoler la pirámide conmemorativa del camino colonial a Valparaíso y que la placa del monumento debe llevarse al Museo Histórico Nacional y después colocarse en el muro Sur-Oriente de la casa de la esquina de las calles Brasil y San Pablo que es donde estaba dicha pirámide o monolito<sup>86</sup>. También se informa que el comandante del Regimiento Caupolicán de Valdivia apoyará la restauración de los fuertes de dicha ciudad. También se acuerda estudiar la forma de colocar la placa conmemorativa del monumento a la construcción de los tajamares de Av. Providencia de Santiago, cuya pirámide fue demolida en el año 1931, debido a los trabajos realizados en los jardines y calzadas del sector, y cuya placa conmemorativa fue enviada al Museo Histórico Nacional.

En la sesión del 17 de marzo de 1936 se aprobó el retiro de la placa conmemorativa del monumento a O'Higgins de Chillán por su escaso valor artístico. Además se nombran dos consejeros para proponer los reglamentos del Consejo y se designan al representante de la Marina y al Director del Museo Histórico Nacional para estudiar los informes, recomendar acciones para la custodia de los monumentos de Isla de Pascua y estudiar el contrato de arrendamiento que el Gobierno de Chile estaba haciendo a una empresa inglesa de dicha Isla. También debemos destacar que se acordó viajar a Illapel para ubicar el sitio donde acampó Diego de Almagro y colocar una placa en algún peñón.

En la sesión del 18 de mayo de 1936 se da cuenta de una nota del Sr. Aníbal Bascuñan, secretario de la comisión de estudios sobre Isla de Pascua, que solicita se contemplen los intereses nacionales en cuanto al patrimonio monumental de la

---

<sup>86</sup> Es importante notar esta autorización que contraviene las discusiones que antes estaba llevando el Consejo en torno a la protección de estos monumentos conmemorativos. Afortunadamente, hasta donde sabemos, dicha demolición no se llevó a cabo, desplazándose el monumento décadas después a su ubicación actual en la esquina de las calles San Pablo y Almirante Barroso, en una pequeña plaza del lugar.

Isla, en atención a su arriendo a una firma extranjera; se informa también que el Ministro de Defensa le manifestó que tenía dudas sobre la validez del decreto que declara la Isla como Monumento Histórico, debido a que no se consultó a la autoridad naval. No obstante los consejeros consideraron suficiente para la protección del patrimonio lo estipulado en el contrato de arrendamiento antes aludido. En esta sesión también se acuerda enviar una nota al Ministro de Fomento para que se adquieran algunos terrenos boscosos de Contulmo, en el sur de Chile, para su conservación, debido a su belleza. Finalmente se informa que en secretaría está el informe de los objetos líticos de Isla de Pascua, confeccionado por la autoridad marítima de la Isla.

En la sesión del 12 de agosto de 1936 se comunica la renuncia del Secretario titular del Consejo Sr. Fernando Figueroa Arrieta, que la Municipalidad de Los Vilos pide apoyo para levantar un monumento a Diego de Almagro en la aldea de Caimanes y se denuncia que excavaciones en Quilpué están dañando sitios arqueológicos, comisionándose a dos consejeros que visiten el lugar e informen.

En la sesión del 22 de octubre de 1936, que fue presidida por el Sr. Domingo Amunátegui Solar, se comunica la carta recibida del Director General de la Unión Panamericana con un cuestionario relativo a la conservación de las regiones naturales y lugares históricos de las naciones americanas. Se acuerda remitir la información sobre parques nacionales y lugares históricos que tiene el Consejo. Además se designó como secretario provisorio del Consejo al Sr. Ricardo Donoso. Finalmente se comunica el interés del municipio de Valdivia por adquirir un torreón español, restaurarlo y agregarle nuevas construcciones para transformarlo en una atracción turística, frente a lo cual se acuerda estudiar los aspectos legales de este asunto.

En la sesión del 11 de diciembre de 1936 se informa que el Secretario Sr. Ricardo Donoso está facultado para girar los fondos dispuestos por el Ministerio de Educación. Al respecto importa señalar lo siguiente del acta:

*“El Secretario manifestó que había sido llamado por el Subsecretario del Ministerio, quien le había manifestado el deseo de saber si de los fondos para los gastos del Consejo iba a quedar un saldo, por cuanto el Gobierno deseaba darle una inversión a esa suma...”*

Al respecto se acordó informar que no se gastarían todos los recursos y que se pondrían a disposición del Gobierno. También se da cuenta en el acta de una autorización para exportar dos cuadros de pintores europeos para lo cual se pidió un informe. Se volvió a tratar también la situación del patrimonio arqueológico de Quilpué y la situación de las construcciones de la compañía Electro Siderúrgica en los terrenos del Fuerte de Corral en Valdivia, acordándose enviar el decreto de su declaración como monumento histórico y remitirlo al Intendente de Valdivia para

que informe. También se discutió la permuta de los terrenos donde se encuentra el torreón de Valdivia con otros terrenos fiscales. Finalmente se recibe una solicitud del municipio de Los Vilos respecto de erigir una columna conmemorativa en el lugar donde acampó Diego de Almagro, que tendría un costo de 2.500 pesos, lo cual se autoriza después de recibir el detalle del presupuesto. Es importante destacar que en esta sesión por vez primera se acuerda destinar 5.000 pesos de los fondos del Consejo para iniciar el inventario de los restos arqueológicos y monumentos históricos del país, los cuales estarían a cargo del Sr. Aureliano Oyarzún.

En la sesión del 31 de diciembre de 1936 sólo se trata el caso de la salida del país de dos pinturas, autorizándose la salida de una de ellas, esperándose para la siguiente analizar el informe pendiente.

La siguiente sesión del 2 de marzo de 1937 tiene lugar en el despacho del Ministro de Educación Sr. Garcés Gana. El ministro señala que quiere conocer las labores del Consejo y apoyar sus funciones que considera de importancia para el país. El Secretario Sr. Donoso le resumió las tareas realizadas, siendo la principal la realización de un inventario de los monumentos históricos. Agregó que debía dictarse el reglamento que la Ley indica y nombrar un secretario rentado. Posteriormente el Ministro planteó la solicitud de la sucesión Cruz Montt, para que el Consejo accediera a autorizar la salida del país de una colección de objetos de las culturas aborígenes americanas. El Sr. Ministro opinó que la ley sólo prohibía la salida de objetos declarados monumentos nacionales y que tal norma no se aplicaba en este caso. Al respecto el consejero Sr. Schweitzer manifestó que el espíritu de la Ley era proteger la riqueza artística, arqueológica y arquitectónica nacional. Por su parte el Sr. Donoso manifestó que en 1911 el Gobierno había enviado al Congreso un proyecto de Ley<sup>87</sup> que prohibía la exportación de todos los objetos relacionados con las culturas aborígenes y que el espíritu de la Ley del Consejo era proteger tal riqueza, que todos los países del mundo se esforzaban en fomentar las colecciones de sus museos, que era bochornoso para la cultura nacional que hubiera necesidad de ir a estudiar la cultura de los pueblos aborígenes del territorio nacional a los museos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Alemania. Finalmente se acordó que el ministerio no tomaría resolución alguna sin escuchar al Consejo de Monumentos Nacionales y que una comisión integrada por los Sres. Oyarzún, Latcham y Donoso prepararía un informe sobre el valor científico de dicha colección.

En la sesión del 2 de abril de 1937 se vuelve a tratar el asunto de la colección Cruz Montt y después de conocer el informe elaborado se acuerda por unanimidad

---

<sup>87</sup> Sin duda se refiere al Proyecto de Ley elaborado en 1910 que mencionamos en páginas anteriores. Aquí se asevera que se envió al Congreso en 1911. Nosotros hemos revisado las actas de ese año del Congreso y no lo encontramos. De todas maneras no deja de ser importante que 26 años después aún se recordaba este hecho. El destacado es del suscrito.

solicitar al Gobierno la adquisición de dicha colección para destinarla a los museos nacionales. También se acordó destinar 5.000 pesos para continuar los trabajos de inventario de los monumentos históricos de Coquimbo.

La sesión del 14 de mayo de 1937 se realiza con siete consejeros, que es el promedio de asistencia general hasta ahora. El alcalde de Los Vilos pide 4.000 pesos para la erección de la columna en recuerdo de Diego de Almagro la cual se aprueba. También se recibe una nota del Intendente de la Isla de Chiloé que solicita 40.000 pesos para los trabajos de conservación y restauración de los fuertes y sitios históricos, ante lo cual se acordó informarle que el Consejo carecía de tal suma, pero que apoyaría en la medida de sus recursos. En el mismo sentido se acordó solicitar el apoyo del personal del Servicio de Faros para la vigilancia de los fuertes de Ahui, Corona, Chaicura y Balcacura. Finalmente, después de tratar otras materias se aprueba el proyecto de reglamento, el cual se envía al Ministerio de Educación.

En la sesión del 10 de agosto de 1937 se recibe una solicitud para exportar una colección de dibujos y apuntes de autores del Renacimiento Italiano de la Sra. Luisa Morel de Aldunate, resolviéndose que un consejero elabore un informe. Por su parte, el municipio de Santiago solicita trasladar el monumento de Ramón Freire a otro emplazamiento, a lo cual se accede. Finalmente se acuerda enviar una nota al Gobierno solicitando la adquisición del Palacio Cousiño de la ciudad de Santiago, en atención a su valor arquitectónico y artístico para convertirlo en un museo.

El 18 de marzo de 1938 se realiza la última sesión de este período del Consejo de Monumentos Nacionales, la cual es presidida por el Sr. Domingo Amunátegui Solar, de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. No queda claro si hubo sesiones en los meses anteriores, pero no hemos encontrado registro alguno, siendo posible que tales actas estén perdidas. En esta sesión participaron los Sres. consejeros Donoso, Mackenna, Meza, Oyarzún, Schmidt, Schweitzer y Brunet. En el acta se registra la solicitud del Intendente de Chiloé para que se entregue la vigilancia de los fuertes de Chiloé a la Escuela Agrícola de Ancud, la cual es aceptada. También se aprueba la petición del municipio de Valparaíso para declarar el Fuerte Esmeralda como monumento histórico. Por otro lado se recibe la información de la creación de la Superintendencia de Museos y Lugares Históricos de Argentina, ante lo cual el Consejo acuerda informar al Ministerio de Educación:

*“...llamando la atención al hecho de que mientras en el país vecino se preocupan con el mayor interés de estos asuntos, en el nuestro el Consejo no encuentra ni la más insignificante cooperación de parte de las autoridades, llamadas no solo por la ley sino por el espíritu de ellas, a prestarles su apoyo mas decidido.”*

En dicha sesión se recibieron dos notas del Intendente de Valdivia respecto de un comité de vecinos que quiere erigir un monumento a Vicente Pérez Rosales, similar al de Camilo Henríquez, y piden se les contribuya con 5.000 pesos, lo cual se aprobó. También se accedió autorizar la salida del país de 150 dibujos antiguos de la Sra. Luisa Morel de Aldunate. Finalmente, entre otros asuntos, se informa que el Director de la Escuela de Minas de Copiapó ofreció su establecimiento para un Museo Arqueológico, Histórico y Artístico y que para ello necesitan 5.000 pesos, petición que se rechazó.

Concluyendo en esta segunda etapa, entre 1935 y 1938, durante la administración del Presidente Arturo Alessandri (1932-1938), se realizaron a lo menos 20 sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales y se declararon dos monumentos nacionales: Isla de Pascua en 1935 y el Fuerte Esmeralda de Valparaíso en 1938. En 1935 hubo 8 sesiones, en 1936 hubo siete sesiones, en 1937 cuatro sesiones y en 1938 una sesión, siendo este el último año del Gobierno de Alessandri, cuando se realizaron las elecciones presidenciales que dieron el triunfo al abanderado del Frente Popular Pedro Aguirre Cerda.

En esta etapa el Consejo de Monumentos Nacionales logra iniciar su funcionamiento y tener cierta regularidad en sus sesiones y lograr acuerdos, pero se va debilitando con el paso de los años, concluyendo su accionar en 1938 para solo volver a funcionar en 1949. En estos primeros años la vicepresidencia del Consejo está en manos de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, con el apoyo de los directores de los museos nacionales. Tuvo como secretarios a los Sres. Aníbal Bascuñán, Fernando Figueroa y Ricardo Donoso. Tras repetidas solicitudes al Ministerio de Educación obtuvo sus primeros presupuestos de operación y de ejecución en labores de conservación de monumentos y registro del patrimonio. También se propuso elaborar un nuevo proyecto de ley, lográndose redactar una propuesta que no prosperó, llegándose a la conclusión que se debía funcionar con el existente. Se advierte en las actas de las sesiones la crítica de los consejeros respecto del poco apoyo de las autoridades. Pero también se nota el esfuerzo que realizaron los consejeros por dar a conocer los objetivos del Consejo establecidos en la legislación y sus intentos por establecer su autoridad, incluso ante el propio Ministro de Educación, particularmente cuándo éste cita a una reunión del Consejo en su propio despacho, tratando de favorecer una autorización para que la colección Cruz Montt saliera del país, indicando los consejeros que no procedía por la importancia de la misma, llegando a solicitar que el Estado debía comprarla.

En cuanto al registro e investigación, estos primeros años demuestran una preocupación por hacer inventarios del patrimonio arqueológico, particularmente del Norte y Sur del país, además de Isla de Pascua, demostrando los consejeros una fuerte defensa del patrimonio, logrando incluso la declaración de Isla de

Pascua como Monumento Histórico en 1935, a pesar de la oposición de la Armada de Chile, en el mismo año que toda la Isla también es declarada como Parque Nacional.

También hubo preocupación por declarar iglesias y conventos, pero no se llegó a concluir ninguna protección legal de estos bienes. Sin embargo, en lo que respecta a las fortificaciones coloniales y republicanas, se mantuvo el interés original demostrado entre 1925 y 1927, declarándose como monumento histórico el Fuerte Esmeralda de Valparaíso en 1938, además de una activa preocupación por la conservación de los ya declarados, lográndose destinar algunos recursos, aunque escasos. También se nota el interés de participar en las decisiones urbanas, demostrando preocupación por las obras en la Alameda de Santiago que podían significar la destrucción de varios inmuebles históricos.

Otro aspecto recurrente fueron las solicitudes para la salida del país de colecciones de obras de arte, autorizándose algunas y rechazándose otras. Así también su preocupación por los monumentos conmemorativos, aunque no deja de llamar la atención su autorización para que se demoliera uno de los más antiguos, el monumento que a finales del período colonial el Gobernador Ambrosio O'Higgins levantara para conmemorar el término de los trabajos de las obras del camino de Santiago a Valparaíso, lo que afortunadamente no ocurrió, siendo trasladado a otro lugar cercano.

En conclusión fue una etapa productiva, aunque no se logró consolidar el funcionamiento permanente del Consejo de Monumentos Nacionales. Pero si se pudo poner en marcha la legislación y dar claras señales a la administración del Estado de su existencia. También quedó manifiesta su preocupación por el patrimonio histórico colonial, preferentemente el relacionado con las fortificaciones y el arqueológico monumental.

### **El Consejo de Monumentos Nacionales entre 1949 y 1954**

Entre 1939 y 1948 no hay registro de sesiones del Consejo y tampoco declaración alguna de monumentos por parte del Gobierno, aunque entre 1946, 1947 y 1948 se retoman algunas actividades. Esto coincide con las administraciones de los Presidentes Pedro Aguirre Cerda (1938–1941) y Juan Antonio Ríos (1942–1946), ambos del Partido Radical. Sin embargo, dos integrantes de la etapa anterior del Consejo de Monumentos Nacionales están presentes para retomar el funcionamiento de la entidad, el Sr. Ricardo Donoso, esta vez como Vicepresidente del Consejo, y el Sr. Aníbal Bascuñán como Secretario, lo cual ocurre durante el gobierno del Presidente Gabriel González Videla (1946 – 1952), también del Partido Radical.



Hay señales de actividad del Consejo desde 1946, pero la primera sesión que registramos de este período es la del 24 de marzo de 1949, en la cual el Ministro de Educación asiste como Presidente y participan el Vicepresidente Sr. Ricardo Donoso, el consejero secretario Sr. Aníbal Bascuñán y los consejeros Sres. Alberto Risopatrón, Coronel Rafael Vigar, el Capitán de Navío Enrique Cordovez, Daniel Schweitzer, Luis vargas, Samuel Román, Hernán Concha y el asesor técnico Sr. Roberto Montandón, estando ausentes Eugenio Pereira, Fernando Figueroa y Carlos Isamitt.

En el acta de dicha sesión, el Sr. Bascuñán da cuenta de las tareas realizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales durante el año 1948: instalación de la secretaría con sus muebles; confección del mapa arqueológico del desierto de Atacama realizado por la Dra. Grete Mostny; viaje del Sr. Roberto Montandón a Valdivia para informar sobre los fuertes coloniales y su trabajo para elaborar un anteproyecto de ley de monumentos nacionales y se da cuenta de los gastos del Consejo durante 1948, los cuales ascendieron a 23.517 pesos. Además se comunicó que se inició el registro de monumentos nacionales y que el presupuesto para 1949 era de 50.000 pesos.



El Pukará de Lasana en el valle del río Loa en el norte de Chile, 1950, fotografía de R. Montandón. Archivo Consejo de Monumentos Nacionales.

Importante destacar que en esta sesión el Sr. Bascuñán informa que se elaboró la propuesta de un impuesto sobre las ventas de objetos artísticos e históricos para aumentar el presupuesto del Consejo. Sobre este asunto el Consejo aprueba la idea y propone que se elabore un anteproyecto de ley separado de la reforma de la ley de monumentos nacionales. Al respecto el Secretario del Consejo reclama ante el Ministro de Educación de que se ha creado una comisión para estudiar la

modificación de la ley de monumentos nacionales sin su conocimiento. Sobre el particular el ministro indica que tal comisión se ha reunido una sola vez durante noviembre de 1948, acordándose que el proyecto de la comisión sea ratificado por el Consejo.

Por otra parte, la secretaría explica que se rechazó el decreto de varios edificios de Santiago como monumentos históricos sobre los cuales se acuerda insistir. Se informa que los edificios de Telégrafos del Estado (hoy Correo Central) y del ex Palacio de la Real Audiencia (hoy Museo Histórico Nacional) serán objeto de transformaciones, lo mismo ocurriría con la Casa Colorada y el antiguo Palacio de la Aduana (hoy sede del Museo Precolombino). Se indica que se pueden hacer reparaciones pero que éstas deben ser autorizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales para no desvirtuar el carácter histórico del edificio. Es interesante mencionar que en el acta ya se habla tanto de monumentos como de patrimonio.

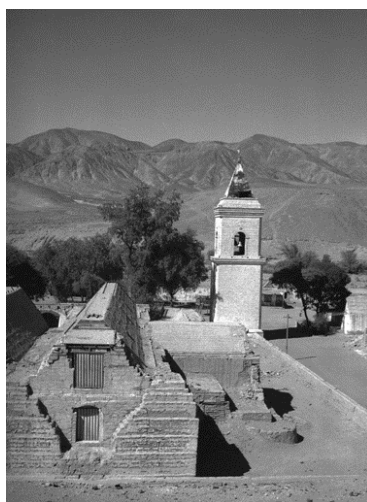
En dicha sesión el Sr. Bascuñan presenta un plan para el Consejo en 1949, que elaboró junto con el asesor Sr. Roberto Montandón, que tiene las siguientes áreas: jurídica, administrativa, técnica y científica, y divulgación. Entre las principales acciones están: anteproyecto de modificación de la Ley de Monumentos Nacionales; anteproyecto de impuesto a la venta de obras artísticas e históricas; declaratoria de monumentos históricos; dar a conocer la ley actual a los gobernadores, intendentes y alcaldes del país; solicitar los catálogos de los museos; continuar con el archivo e inventario de los monumentos; creación de juntas locales de monumentos; investigaciones arqueológicas en La Reina (Santiago), Arica, Atacama, Salamanca; estudio de conservación de los fuertes de Valdivia; realización de exposiciones fotográficas de difusión; abrir un concurso de monografías locales de historia y arqueología; y de colocar letreros en todos los lugares de importancia histórica y arqueológica. El plan se aprobó junto al presupuesto de 50.000 pesos.

También se acordó crear una comisión con el Director Nacional de Arquitectura para estudiar los fuertes de Valdivia e insistir en que se dicte el Decreto N° 6.537 de julio de 1946 que declara monumentos históricos los siguientes edificios de Santiago: Palacio de La Moneda; Iglesia Catedral de Santiago, Palacio de la Aduana, Palacio de la Real Audiencia, Iglesia y Convento de San Francisco, Iglesia de Santo Domingo y la Casa Colorada. El acta aparece firmada por el asesor Sr. Roberto Montandón y se nota un cambio importante en la redacción de las mismas, tanto en materias, como en decisiones y en el orden de éstas, lo cual se debe sin duda al trabajo de este profesional, que fue gravitante por largos años en el Consejo de Monumentos Nacionales.

La siguiente acta que encontramos es del 1 de diciembre de 1949, en la cual el Vicepresidente del Consejo Sr. Ricardo Donoso da cuenta de la renuncia del

secretario Manuel Bascuñan. Los consejeros lamentan la partida del Sr. Bascuñan y agradecen su labor fructífera y acordaron por unanimidad nombrar secretario al historiador Sr. Eugenio Pereira Salas. Por su parte el Sr. Montandón informa de los avances en las gestiones del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, en el cual se solicitaban 500.000 pesos para obras de restauración. También se informó de la solicitud del alcalde de Viña del Mar al Presidente de la República de trasladar un Moai de Isla de Pascua para el Museo Arqueológico de dicha ciudad. Entre otros acuerdos debe mencionarse la elaboración de un nuevo proyecto de ley de monumentos nacionales que se encarga al consejero Sr. Schweitzer.

En la sesión de 24 de abril de 1950 se comunica que el Ministerio de Obras Públicas destinó 500.000 para los fuertes de Valdivia, el pukara o aldea fortificada de Lasana, la Iglesia de Tarapacá y el campanil de Matilla. También se da cuenta de los viajes de Roberto Montandón a Chiloé e Isla de Pascua, quien expone su proyecto editorial de los Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales, acordándose publicar los trabajos de Lasana y de la Iglesia de Tarapacá. Finalmente se acordó la declaración como monumentos históricos de los fuertes coloniales de Niebla, Corral, Mancera y San Carlos. Se informó además que posteriormente se debían declarar la Iglesia y Campanario de Tarapacá, la Iglesia y Campanario de Matilla, la Capilla de la Mocha, la Iglesia de Chiu-Chiu, la Iglesia de San Pedro de Atacama, la Capilla de Toconao, la Capilla y Campanil de Caspana, la Capilla en ruinas de Peine y la Iglesia de Achao.



Campanario e Iglesia de Matilla Campanario e iglesia de Tarapacá, fotos de R. Montandón. Archivo Consejo de Monumentos Nacionales

La siguiente acta que ha llegado hasta nosotros es la del 6 de noviembre de 1950. En ella se da cuenta de la reimpresión de los Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales N° 1 y N° 2; el inicio de las obras de restauración del Pukara de Lasana; la solicitud de recursos para reparar el cenotafio de Dolores, lugar de la famosa batalla de la campaña de Tarapacá durante la Guerra del

Pacífico en 1879 y se estudia la declaración de varios monumentos históricos: la Iglesia de Tarapacá, la Capilla de Mocha, la Iglesia de Chiu-Chiu, la Capilla de Caspana, la Iglesia de San Pedro de Atacama, el Campanil de Toconao, las ruinas de la Capilla de Peine Viejo, el palacio de La Moneda, la Real Audiencia y el Palacio de Aduanas.

En la sesión del 7 mayo de 1951 se discute la declaratoria de varios edificios coloniales de Santiago, participando en la reunión el alcalde de Santiago Mario Valdés Morandé. Respecto del caso de la Real Audiencia el alcalde de Santiago planteó que se estudiaba su demolición al igual que el frontis de la Casa Colorada para ampliar la calle, materia que quedó en estudio. Finalmente el Consejo acordó solicitar la declaración como monumento histórico de los siguientes inmuebles de Santiago: la Iglesia San Francisco, el Palacio de La Moneda, la Catedral de Santiago, la Iglesia Santo Domingo y la Iglesia de Achao de Chiloé, quedando pendientes la declaración de la Real Audiencia y la Real Aduana.



Iglesia y convento de San Francisco, Santiago, 1940. Foto Archivo Museo Histórico Nacional

En la sesión del 3 de agosto de 1951, realizada bajo la presidencia del Ministro de Educación Sr. Bernardo Leighton, se discutió la ubicación del Monumento Público a Arturo Alessandri, acordándose su instalación frente a la fachada Sur de La Moneda, siendo éste el único tema tratado.

La sesión del 10 de octubre de 1951 es presidida nuevamente por el Ministro Leighton, quien propuso que el Ejército se hiciera cargo de la restauración de los fuertes de Valdivia, ante lo cual los consejeros se opusieron argumentando la falta de experiencia de dicha institución. Finalmente se acordó que el Ejército apoyara,

pero que la dirección de los trabajos estaría a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales y del Ministerio de Obras Públicas.

En la sesión del 21 de noviembre de 1951 se discutió la idea de colocar una placa donde estuvo la Sala de Consulado, edificio colonial donde se realizó la primera Junta Nacional de Gobierno y que fue demolido para construir los actuales Tribunales de Justicia y sede de la Corte Suprema a comienzos del siglo XX. También el Sr. Montandón propuso la protección de las oficinas salitreras del norte de Chile, planteando hacer un museo del salitre o museo industrial. Finalmente se acordó declarar como monumento histórico la locomotora de Copiapó, que fue la primera en funcionar en Chile.

En la sesión del 3 de enero 1952 se discutió la ubicación del Monumento al Presidente Pedro Aguirre Cerda, que tuvo que dirimirse por votación. En la sesión del 17 de enero de 1952 se acordó el traslado de un moai de Isla de Pascua a La Serena y en la del 6 de mayo de 1952 se acordaron como monumentos históricos las capillas de Huaviña, Usmagama y Sotoca del Norte de Chile. En la sesión del 4 de mayo 1953 se estudió la declaración de declaración como monumento histórico del Monitor Huáscar, un acorazado peruano que combatió contra la corbeta Esmeralda en el Combate Naval del 21 de mayo de 1879, ocasión en que esta última fue hundida, muriendo gran parte de la tripulación y su capitán Arturo Prat, héroe nacional de Chile. El monitor Huáscar fue capturado después en el Combate de Angamos, muriendo en dicho combate su capitán Miguel Grau, también héroe nacional del Perú. Todo esto ocurrió en la Guerra del Pacífico en la cual participaron Chile, Bolivia y el Perú. Al respecto el consejero Daniel Schweitzer señaló que por razones de prudencia el Consejo no debería acoger en esta forma a esta petición.

En la sesión 5 de noviembre de 1953 se acordó la declaración como monumento histórico del Fuerte de Nacimiento, se analizó la protección de la Palma Chilena, se manifestó la preocupación por la instalación de una fábrica cerca del Fuerte de Corral y se dio cuenta de los fondos para restauración entregados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas.

Las siguientes actas de las sesiones del 5 abril de 1954 y del 5 de agosto de 1954 son más detalladas entregándose recursos para la restauración de iglesias y fuertes proponiéndose como monumentos históricos la Iglesia de la Merced de Rancagua, el Morro de Arica y las oficinas salitreras de Santa Rosa de Huara.

La última acta que tenemos de esta etapa es del 21 de octubre de 1954. En ella el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que si bien no hay impedimento legal para declarar el Morro de Arica como monumento histórico, se considera que el Perú podría interpretarlo como un acto poco amistoso en atención a su relación con la Guerra del Pacífico. Al respecto se acuerda no declararlo pero solicitar su

protección para impedir las excavaciones arqueológicas e históricas ilegales. También se acordó declarar la Iglesia de la Merced de Rancagua como monumento histórico y se discutieron varios asuntos relacionados con monumentos públicos. Finalmente se analizó la conveniencia de declarar como monumento histórico el cerro Santa Lucía de Santiago, para evitar proyectos que alteren su significado histórico y proteger las obras allí realizadas en el siglo XIX, que lo convirtieron en un parque urbano.

Concluyendo respecto de esta etapa del Consejo de Monumentos Nacionales, podemos decir que hay una consolidación mayor de la institución, en la cual dos personas que venían de la fase anterior, los Sres. Ricardo Donoso y Aníbal Bascuñan, sirven de enlace, integrándose al Consejo el Sr. Roberto Montandón, quien será un profesional gravitante en el accionar de la entidad durante las próximas cuatro décadas. En esta etapa la secretaría del Consejo logra instalarse y tener mayor dinamismo, pudiendo elaborar un plan de acción que logra contar con un presupuesto fiscal proveniente del Ministerio de Educación y de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Por otra parte, las acciones de la institución se ven fortalecidas con la presencia de investigadores como la arqueóloga austriaca Sra. Grete Mostny y de otros profesionales, que dan inicio a una acción más sistemática sobre el patrimonio arqueológico y arquitectónico. Se fortalece el inventario de inmuebles y lugares que debían ser declarados monumentos nacionales y promueve la modificación de la legislación, siendo novedosa la propuesta de aplicar un impuesto a la venta de obras de arte y objetos históricos con el objeto de financiar las actividades del Consejo.

En cuanto a la declaración de monumentos, continúa el interés por aumentar la protección legal a varias fortificaciones del Sur de Chile, particularmente las ubicadas en el estuario del río Valdivia, pero además se incorporan a las declaratorias de monumentos las primeras iglesias, especialmente las ubicadas en las zonas desérticas del Norte de Chile que databan de la época colonial. También hay una atención especial a las edificaciones coloniales de Santiago, varias de las cuales estaban amenazadas por las obras de ampliación de calles y avenidas, siendo las más emblemáticas declaradas como monumentos históricos pero con cierta dificultad.

Por otro lado, el Consejo de Monumentos Nacionales logra mayor difusión de sus actividades publicando documentos y dándose a conocer entre las autoridades administrativas del país. Algunos intentos de declaraciones de monumentos como los del Monitor Huáscar y el Morro de Arica, vinculados a la Guerra del Pacífico, no prosperan por razones de política internacional en relación al Perú. Por otra parte, al igual que en la etapa anterior, la participación de los ministros de educación, que tenían la presidencia del Consejo, son marginales, estando presentes sólo cuando les interesaba un tema en particular. En resumen, es una etapa expansiva del Consejo de Monumentos Nacionales, pero que concluye en



1954 durante la presidencia del país de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), activándose otra vez en con el Presidente Jorge Alessandri (1958–1964).

### **El Consejo de Monumentos Nacionales entre 1961 y 1969**

Entre 1955 y 1960 no hemos encontrado actas del Consejo de Monumentos Nacionales y no hay declaratorias de monumentos, lo que demuestra la inactividad de la institución. Sin embargo ésta retoma su accionar a finales de 1960 volviendo a sesionar el 26 de enero de 1961. Para esta etapa hemos encontrado 24 actas de sesiones. La primera sesión tiene lugar en el Museo Histórico Nacional y el vicepresidente de la institución es el Sr. Manuel Montt, nombrándose como secretaria a la Sra. Carmen Castillo. Allí se informa la necesidad de actualizar la legislación y se acuerda tomar contacto con el Sr. Eugenio Pereira Salas para acceder a los archivos institucionales, analizándose la ubicación de la estatua de Pedro de Valdivia en la Plaza de Armas de Santiago y de otros monumentos conmemorativos.

En la sesión del 24 de marzo de 1961 se discute la instalación de monumentos conmemorativos y la declaración de nuevos monumentos históricos. Hay otra sesión el 29 de mayo de 1961 y una última el 12 de junio del mismo año y después el Consejo deja de sesionar hasta reunirse el 30 de julio de 1962, en que asume el Secretario Sr. Juan Eyzaguirre, entonces era el Director del Archivo Nacional.

A continuación las sesiones son más ordenadas analizándose temas de restauración de iglesias y fortificaciones, continuando la preocupación por la instalación de monumentos conmemorativos. También se reitera al Ministro de Educación y a la Dirección Nacional de Arquitectura la solicitud de financiamiento para las actividades del Consejo y se reactiva la solicitud de declaración de monumentos históricos otorgándose excavaciones arqueológicas al Museo Nacional de Historia Natural.

Entre las declaraciones de monumentos históricos continúa una preferencia por las fortificaciones. También se autorizan la instalación de varias placas conmemorativas en edificios históricos y son más frecuentes los proyectos para restaurar monumentos históricos, especialmente iglesias y fuertes. En la sesión del 8 de abril de 1964 se aprueba la declaración de la primera estación de ferrocarriles de Chile, la del puerto de Caldera, en el norte del país.

Por otro lado, se hace presente en la correspondencia la Sociedad Chilena de Arqueología, recientemente creada, la cual se ofrece como asesora del Consejo en materias de investigación y protección del patrimonio arqueológico. Desde entonces esta institución es consultada en relación a las futuras solicitudes de

excavaciones arqueológicas, participando en tales informes los Sres. Hans Niemeyer y Gonzalo Figueroa García-Huidobro, período que también coincide con la profesionalización de la arqueología en Chile. Al respecto importa destacar que en la sesión del 3 de agosto de 1964, el Consejo rechaza la solicitud de excavaciones arqueológicas en Isla de Pascua requerida por el ciudadano francés Francis Maziere y se ordena confiscar los objetos arqueológicos que éste hubiera obtenido durante su estadía en la Isla. Sin embargo se autorizan otras investigaciones de franceses en la zona austral de Chile, cuyos proponentes eran arqueólogos y venían patrocinados por universidades extranjeras y chilenas, como es el caso de Joseph Emperaire y Annette Laming-Emperaire.

En 1964 asume la presidencia de la República Eduardo Frei Montalva (1964–1970), del Partido Demócrata Cristiano, quien en su gobierno inicia varias reformas sociales, quien inicia la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales, acogiendo una demanda que desde hace varios años venía planteando el Consejo de Monumentos Nacionales. Es así como en la sesión de esta entidad de junio de 1965, en la que participó el Ministro de Educación Sr. Juan Gómez Millas, se solicitó a los Sres. Roberto Montandón y Luis Vargas, que redactaran un proyecto para una nueva organización del Consejo y sus atribuciones. Comienza de esta manera un proceso que culminaría con la redacción de un proyecto de que culmina en 1970, bajo la dirección del Ministro de Educación Sr. Máximo Pacheco.

En las próximas sesiones aumenta la actividad del Consejo de Monumentos Nacionales, participando el propio Ministro Sr. Juan Gómez Millas, quien antes había sido Rector de la Universidad de Chile. Es novedoso destacar que en la sesión del Consejo de Monumentos Nacionales del 8 de septiembre de 1965, la Cámara de Diputados solicita la declaración del pueblo de Yerbos Buenas como monumento histórico, la cual se acordó estudiar. Este es el primer caso de solicitud de declaración de un pueblo, por pequeño que fuera, como zona patrimonial. También en esa misma ocasión se rechaza una solicitud de la Cámara de Diputados para declarar como monumento histórico la casa donde nació el abate Molina en Villa Alegre por tener ésta muchas modificaciones.

En las siguientes sesiones se da cuenta de las legislaciones de monumentos que fueron solicitadas a diversas embajadas, mencionándose las de Perú, España y Francia. Por otra parte el Consejo sigue aprobando monumentos conmemorativos, restauración de fuertes, autorizando excavaciones arqueológicas, iniciándose también el canje de objetos arqueológicos con universidades de otros países. Se debe mencionar que en varias ocasiones se denuncian las excavaciones y el comercio ilegal de este patrimonio. También es novedoso el primer acuerdo para declarar como monumento histórico las huellas de dinosaurios de las Termas del Flaco en la sesión del 22 de octubre de 1966.

No hemos encontrado actas de las sesiones del Consejo en 1967 pero si constatamos la declaración de dos monumentos históricos: las huellas de dinosaurios de las Termas del Flaco y de los sitios arqueológicos y paleontológicos de Arica. En la sesión del 26 de octubre de 1968 el Consejo es presidido por el nuevo Ministro de Educación Sr. Máximo Pacheco, actuando como Secretario el Sr. Roberto Montandón. También es interesante notar la participación del Sr. Eduardo Foxley, secretario abogado de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), entidad que antes aparece más bien relacionada solo con los directores de los museos nacionales. En esa misma sesión se informó la propuesta de modificaciones a la ley de monumentos nacionales que se había encargado a los consejeros Sres. Manuel Montt, Roberto Montandón, Eduardo Foxley y la Sra. Grete Mostny. En lo referido a los recursos para financiar la ley se propone el estudio de dos fórmulas: gravar con un porcentaje los traspasos de jugadores de fútbol o el valor de los arriendos de los locales donde se venden boletos de lotería. En los meses sucesivos, el Ministro de Educación Sr. Máximo Pacheco logra enviar el proyecto de ley al Congreso Nacional iniciándose su discusión parlamentaria.

Entre 1963 y 1969 el Consejo de Monumentos Nacionales logra la declaración de 19 nuevos monumentos históricos, consolida aún más su presencia en el país, pero lo más importante es que después de décadas de insistencia, logra sensibilizar a las autoridades de gobierno para la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso Nacional.

#### **4.5. La Ley de Monumentos Nacionales de 1970 y su aplicación**

La década de 1960 fue profunda en cambios sociales en Chile, varios de los cuales se venían gestando como consecuencia de los acontecimientos políticos de la década de 1920. El más importante fue el cambio de modelo de desarrollo económico que adoptó el país priorizando la industrialización y la sustitución de las importaciones, lo que aumentó la población urbana y el crecimiento de la clase media. Esta situación provocó cambios sociales y políticos, que ya en los años 20 y 30 del siglo XX se anticiparon con el quiebre del modelo mercantilista y exportador de materias primas, que mantuvo a la oligarquía en el poder sin contrapeso alguno durante el siglo XIX y comienzos del XX, aunque éste modelo continuó con su lógica económica y social en el sector rural, lo que obligó a sucesivos Gobiernos a impulsar las reformas agrarias de las décadas de los años 60 y 70.

A finales de los años 30 se creó el Frente Popular que encabezó el Partido Radical, el cual representaba a los trabajadores urbanos organizados y a la clase media. Esta coalición política triunfó en las elecciones presidenciales de 1938 siendo elegido como Presidente Pedro Aguirre Cerda. La Segunda Guerra Mundial

y la guerra fría tuvo su impacto en la política nacional, pero no logró quebrar el orden democrático en lo esencial, llegando al Gobierno una coalición de derecha a finales de los 50 encabezada por Jorge Alessandri, hijo del ex Presidente Arturo Alessandri. En las elecciones presidenciales de 1964 triunfa Eduardo Frei Montalva de la Democracia Cristiana, cuyo gobierno impulsó la Reforma Agraria y la nacionalización del cobre con amplio respaldo ciudadano y político.

Es en este contexto y a finales del Gobierno del Presidente Eduardo Frei, que se presenta al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca modificar la norma legal de patrimonio que regía desde 1925, con el ánimo de actualizarla y darle un nuevo impulso al Consejo de Monumentos Nacionales. El trabajo inicial del proyecto estuvo radicado en el propio Ministerio de Educación durante 1968, con el apoyo del Consejo de Monumentos Nacionales, particularmente del consejero Roberto Montadón, quien desde los 50 venía colaborando con dicha entidad. El Ministro de Educación Sr. Máximo Pacheco tuvo a su cargo la dirección del proyecto de ley y su defensa ante el Congreso durante su tramitación en 1969.

Con el objeto de recabar mayores antecedentes el suscrito entrevistó al Sr. Máximo Pacheco en agosto de 2008, quien falleció en 2012, respecto de su participación en dicha legislación, quien nos relató lo siguiente:

*“Yo fui ministro de educación del Presidente Eduardo Frei entre los años 68 y 70. Yo era anteriormente embajador de Chile en la Unión Soviética...y me pareció que había algunas cosas muy importantes que todavía no se habían legislado suficientemente y entre ellas la de monumentos nacionales... Comencé a trabajar sobre ello con un equipo, creo que avanzamos bastante y después conversé con el Presidente Frei y le pareció la iniciativa muy buena...Su discusión en el parlamento fue positiva, fue una buena discusión, no hubo mayores conflictos de ninguna naturaleza y todos estuvieron muy de acuerdo en que había que legislar...los que podían opinar técnicamente se pronunciaron y los escuché en el ministerio y también a todos los partidos políticos, por eso fue una ley bastante consensuada y rápida, ...hubo un concierto de todos y yo estoy seguro, seguro, de que los parlamentarios consultaron a todos los intelectuales de su corriente y todos les dijeron, si fuimos consultados, si estamos de acuerdo. Entonces eso fue un acierto, no haberlo hecho al revés, como a veces se hace, resolviendo en problema político primero y después el técnico, yo lo hice al revés, primero resolví el problema técnico y después el político.”*



El Presidente Eduardo Frei Montalva y su Ministro de Educación Máximo Pacheco, 1968. Foto tomada a una fotografía de propiedad de Máximo Pacheco

El contexto político de entonces era muy complejo, particularmente después que Salvador Allende ganara las elecciones presidenciales de 1970 y Máximo Pacheco nos cuenta sus dificultades para defender el patrimonio entonces, especialmente después de aprobada la legislación de monumentos nacionales:

*“.....pero tuve algunos conflictos con los particulares, los que se oponían a que se declararan monumentos nacionales porque entonces se inmovilizaban los inmuebles, porque decían que no los podían reparar, que no los podían vender, etc. Ellos se oponían y nosotros, a su vez, por razones culturales, los queríamos proteger...con motivo del triunfo de Salvador Allende, comenzó un éxodo de objetos culturales y especialmente de pinturas hacia el exterior. Entonces la gente estaba asustada, creía que venía una nacionalización, que les iban a quitar sus bienes y comenzaron a sacar los bienes, entonces ahí hubo un conflicto incluso dentro del gobierno.”*

“Yo me opuse a eso y dicté un decreto por el cual no se podían sacar estos objetos culturales sin la autorización del director del Museo de Bellas Artes, que era Nemesio Antúñez, entonces nos pusimos de acuerdo y yo le dije tienes que ser muy firme en esto.... Y ahí hubo un conflicto con el Ministerio de Hacienda, porque toda esta gente que quería sacar bienes patrimoniales

le fueron a reclamar al Ministro de Hacienda, mire lo que está haciendo el Ministro de Educación, que está prohibiendo. Entonces nos citó el Presidente Frei al Ministro de Hacienda Andrés Zaldívar y a mí, entonces yo se lo expliqué y le dije mire Presidente esto es absolutamente necesario porque la gente está abusando, porque cree que viene una cosa horrible por el triunfo de Allende y si sacan estas cosas nos van a responsabilizar a nosotros porque va a ser dentro de su gobierno. Y Andrés Zaldívar dijo porque hay que darle la libertad a la gente y que puedan sacar lo que quieran. Se armó el conflicto pero Frei lo decidió a favor de la tesis de Educación, en el sentido de que se mantenía firme el decreto y continuaba el director del Museo de Bellas Artes dando la autorización...”

“Yo recuerdo esto porque fue una cosa muy conflictiva con las personas, porque obviamente, los que querían sacar los cuadros eran personas de muy buena situación, de mucha influencia, etc., que tenían cuadros buenos y querían salvarlos y llevárselos especialmente a Argentina y nosotros que nos oponíamos, y yo recuerdo que no solo recurrían a mí en el ministerio, sino que llamaban a mi casa, hacían varias influencias familiares. Fue un conflicto personal muy serio y recurrían a Andrés Zaldívar, y el me decía mira esta señora tiene este cuadro y yo le decía mira aunque sea ella, tu la conoces, yo también, pero no le vamos a dar autorización.”<sup>88</sup>

Uno de los principales colaboradores del Ministro de Educación Sr. Máximo Pacheco en la redacción del proyecto de ley fue Roberto Montandón<sup>89</sup>, quien fue uno de los principales impulsores de esta iniciativa. Como hemos visto en las actas de las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales y en las consultas que el suscrito realizó con el propio Sr. Montandón antes de que falleciera, esta institución había reanudado sus esfuerzos en la redacción de tal proyecto desde 1963, estando el Sr. Montandón a cargo, junto con el apoyo de una comisión de consejeros de la misma entidad. Su experiencia fue fundamental, siendo él uno de los profesionales que logró incorporar en la legislación los conceptos sobre patrimonio, que entonces se expresaban en los congresos científicos y en los

---

<sup>88</sup> Entrevista de Ángel Cabeza al señor Máximo Pacheco, ex Ministro de Educación del Presidente Eduardo Frei Montalva entre 1968 y 1970, realizada en su residencia de Santiago el 20 de Agosto de 2008.

<sup>89</sup> Roberto Montandón Paillard nació en Suiza en 1909. Llegó a Chile en 1928, regresando posteriormente a Europa, donde continuó sus estudios en Suiza y Francia en agronomía y antropología. En 1936 regresa a Chile para asentarse definitivamente en el país, trabajando tanto en la administración pública como en la Universidad de Chile, dedicándose al estudio del patrimonio cultural y a la conservación y restauración de varios monumentos, siendo quizás el primero en realizar dicha tarea de manera profesional desde 1949. Colaboró por varios períodos en el Consejo de Monumentos Nacionales y trabajó varias décadas en la Dirección Nacional de Arquitectura, entidad que financió varias de sus restauraciones. Su trabajo inspiró a muchos arquitectos en la senda de la restauración patrimonial y su experiencia y trabajo fueron fundamentales para lograr la legislación patrimonial de 1970. Falleció el 2004 en Santiago.



organismos internacionales. Tal como el propio Montandón escribe, la Carta de Venecia de 1964, la UNESCO, ICOMOS, la OEA, el Consejo de Europa y diversos congresos a los cuales el asistió, fueron las fuentes utilizadas por él para la actualización de la legislación que fue aprobada en 1970, además de su vasto conocimiento de la historia de la arquitectura y de las diferentes escuelas de conservación de los monumentos del siglo XIX y XX (Montandon, R. 1973; Roberto Montandón, comunicación personal 2000).



Roberto Montandón y Ángel Cabeza navegando en los canales australes en 1997

El concepto de patrimonio que animaba la nueva legislación se inspiraba en la comprensión de los valores y significados que determinados bienes culturales tienen, los cuales, de acuerdo a la Carta de Venecia, tenían un mensaje espiritual del pasado, representaban la unidad de los valores humanos, constituían un patrimonio común y una autenticidad que debía ser conservada por las generaciones. Al mencionar los bienes culturales se expande el concepto de monumentos que hasta entonces se tenía, siendo objeto de ser considerado como patrimonio todo tipo de bienes, sean materiales o inmateriales, como también el entorno natural y social en el que están insertos. Tal como Montandón señala en 1973:

*“...el ámbito de esa protección se ensancha. Ya no sólo interesa la conservación de los monumentos aislados; interviene su entorno, los conjuntos urbanos antiguos y los sitios. Se habla de patrimonio*

*arquitectónico histórico, de patrimonio histórico-cultural y finalmente de bienes culturales cuyo término cubre todo el abanico de las manifestaciones histórico-culturales y cuya suma pertenece en última instancia a la humanidad entera.” (Montandón, R. 1973: 151)*

Por otro lado, se insiste en la responsabilidad ética que tiene toda comunidad en la protección y conservación de los bienes patrimoniales, y en los principios y criterios que deben respetarse en las restauraciones de tales bienes, que han sido elaborados por los expertos y expresados en la Carta de Venecia, pero que *“...dejan a cada nación el cuidado de asegurar su aplicación en el marco de su propia cultura y su propia tradición...” (Montandon, R. 1973: 155).*

Así también Montandon destaca la necesidad de superar la visión del inmueble patrimonial aislado, y la urgencia de proteger y conservar los conjuntos históricos y el espacio histórico, tomando para ello la definición que estableció la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, reunida en Bruselas en 1969:

*“Los conjuntos históricos y artísticos son constituidos por un grupo de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad o integración presentan un carácter que justifica su protección y valorización.” (Montandón, R. 1973:155)*

A partir de dicho contexto la legislación chilena incorporó una nueva categoría de monumento nacional que no estaba en la legislación de 1925, que fue denominada como zona típica, la cual fue pensada para proteger áreas históricas de una ciudad o pueblo, un barrio determinado, una calle o parte de ella, una plaza o el entorno de un monumento histórico, estén situados estos en el ámbito rural o urbano, como veremos más adelante. Montandón también pretendió que la protección de estos conjuntos estuviera fundamentada en los valores históricos, artísticos, estéticos, humanos y ambientales que tiene dicho patrimonio y que la conservación de éstos, en todas sus fases, tenía por objeto: *“...devolver a esos conjuntos su dignidad y su interés...” (Montandón, R. 1973: 156).*

Varias de las propuestas Montandón fueron aceptadas e incorporadas en el proyecto de legislación incorporando los conceptos de patrimonio de entonces, incluyendo la protección de bienes que no habían sido objeto de atención antes, como fueron los asentamientos industriales de explotación del salitre en el Norte de Chile, los pueblos y asentamientos rurales, los centros históricos y barrios urbanos.

Volviendo a la tramitación de la ley, tanto el mensaje presidencial del proyecto, como las discusiones del mismo en las distintas comisiones del Congreso son importantes de reseñar, ya que reflejan las ideas y preocupaciones del momento. Por ejemplo en el texto del mensaje presidencial se señalaban los conceptos y por

qué era necesaria la actualización de la ley. Destacamos acá el nombre original de esta iniciativa del Gobierno: *“Proyecto de Ley que establece la Protección del Patrimonio Histórico Cultural del Estado”*. Sin embargo al ser aprobado finalmente el proyecto quedó como *“Ley de Monumentos Nacionales”*, lo cual dejó atada simbólicamente la legislación al pasado que buscaba superar con nuevos conceptos como los de patrimonio. No obstante su nombre, dicha legislación significó un gran paso para el reconocimiento del patrimonio, la necesidad de su protección y su relevancia para el país, tal como el mensaje presidencial planteaba:

*“La imagen de toda sociedad se refleja en el legado histórico-cultural que da tradición y carácter a la fisonomía de una nación. Este pasado que permite definir la individualidad de cada país y al cual estamos profundamente vinculados, exterioriza su presencia en ruinas y objetos arqueológicos, en manifestaciones arquitectónicas y artísticas, en los lugares donde se han desarrollado acontecimientos notables de la vida nacional y en las piezas que enriquecen los museos. Este conjunto de bienes tangibles que conforman y configuran la trayectoria histórica de una nación, constituye su patrimonio cultural...”* (Acta de la sesión N° 21 del 18 de marzo de 1969 del Congreso Nacional, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile).

Quedaba así definido el patrimonio cultural en dicha legislación, que si bien no excluía el patrimonio inmaterial, señalaba que su objeto principal era el patrimonio material, el cual reflejaba el pasado y representaba la identidad nacional. El texto del mensaje presidencial incorporaba el concepto de bienes culturales, que ya ganaba terreno a nivel internacional, aunque lamentablemente no lo incluyó expresamente en la ley:

*“La debida cautela de este patrimonio o bienes culturales es un deber ineludible del Estado. Su defensa representa un compromiso ético que cada Estado debe contraer como una forma de respeto hacia la cultura nacional, la cultura continental, la cultura universal.”*

El mensaje reconoce también la influencia internacional en esta materia para dicha legislación:

*“Hoy día, estas preocupaciones se han visto activadas y estimuladas por urgentes llamados de altos organismos internacionales a favor de la protección de los testimonios históricos y artísticos del pasado, por campañas mundiales pro monumentos y por un fenómeno económico nuevo que interesa particularmente a todas las naciones: el turismo internacional, atraído especialmente por las manifestaciones históricas y artísticas propias de cada pueblo.”*

Se señala también la responsabilidad de los gobiernos en la destrucción del patrimonio y la oportunidad que ofrecía el turismo para su conocimiento, protección y conservación:

*“En América, una parte apreciable de este patrimonio se ha perdido irreparablemente y muchos monumentos se hallan gravemente amenazados. Esta situación es imputable en no pequeña medida al desamparo oficial y a la falta de una conciencia pública capaz de movilizarse oportunamente en defensa de esos comunes intereses culturales de la nación y del continente. No obstante, en varios países americanos de ingente riqueza arqueológica y artística, los Gobiernos han comprendido la responsabilidad que les cabía en la protección y restauración de esos tesoros. Esta conciencia se ha ido configurando lentamente por presiones de diversa índole, tanto de carácter moral como de orden económico a través del análisis de la revertibilidad de las inversiones por el conducto del turismo nacional e internacional.”*

Así mismo el texto reconoce la influencia de las campañas internacionales en pro de la conservación de los monumentos en peligro, como también de los congresos de arquitectos y de historiadores. También se destaca la importancia de la OEA y un acuerdo sostenido por esta organización en Bogotá en 1963, donde los directores de cultura de los países concluyeron:

*“Que precisa dentro de un orden de urgencia nacional preservar, ante todo, el patrimonio artístico nacional....que, por considerarse medios indiscutibles de cultura, es urgente atender a la conservación y restauración de los monumentos históricos y artísticos que se encuentran en mal estado en todo el continente...”*

El proyecto de Ley también recuerda la V Conferencia Panamericana realizada en Santiago en 1923, gracias al cual se dictaron el Decreto N° 3.500 y el Decreto Ley N° 651 de 1925, cuyas disposiciones crearon el Consejo de Monumentos Nacionales. Si bien reconoce la importancia de estas normas para la época, señala que:

*“Es indudable que la ley vigente adolece de vacíos y que algunas de sus disposiciones requieren una urgente actualización. Además la ausencia en dicha ley de disposiciones definidas referentes a los recursos con que debería contar el Consejo de Monumentos Nacionales para su funcionamiento y para el cumplimiento de sus fines, que tampoco están claramente delineados, limita la esfera de acción de este organismo.”*

A continuación, el mensaje presidencial destaca que se incorporan nuevas responsabilidades al Consejo de Monumentos Nacionales sobre la protección del

patrimonio natural y científico, la conservación de las características ambientales en donde se encuentran los monumentos, actualizando las normas sobre las excavaciones arqueológicas *“...estableciendo con rigor los derechos, las limitaciones y la persecución de las responsabilidades...”*.

Posteriormente explica la composición del Consejo de Monumentos Nacionales, su carácter público señalando sus atribuciones. Después define las categorías de monumentos nacionales y las normas específicas que deben seguirse para cada uno de ellos: monumentos históricos, monumentos arqueológicos, zonas típicas, santuarios de la naturaleza y los monumentos públicos. También indica el mensaje las sanciones y penas para quienes no cumplan con la legislación y el mecanismo para el cobro de las infracciones.

Finalmente destaca la importancia para el país de la restauración de las fortificaciones coloniales españolas de Sur de Chile y la posible participación de España en tal acción:

*“...una completa e integrada restauración de los castillos españoles del estuario del río Valdivia que representan uno de los complejos defensivos más interesantes de la América española...la conveniencia de vincular a esta tarea a países extracontinentales, en especial a España, dada la participación histórica de la madre patria en la formación de nuestro patrimonio y en atención a la comunidad de valores culturales que la une a nuestro país.”*

Concluyendo, el mensaje reconoce la trascendencia económica de los bienes culturales y la necesidad de que su conservación esté incorporada a los planes de desarrollo del país, los cuales deben:

*“...salvaguardar y preservar para las futuras generaciones nuestras bellezas naturales y la herencia monumental y artística que nos legaron las culturas precedentes. Sería, además, un estímulo para las nuevas creaciones, ya que sus autores se sentirían inmersos en una tradición viva, a la cual entregarían sus propias obras con esperanza y confianza.”*

El proyecto de ley fue analizado en las diferentes comisiones legislativas. Es así como la Comisión de Educación Pública aprueba el proyecto destacando que:

*“Las obras monumentales de los pueblos quedan en la vida como testimonio de tradiciones seculares, cargadas del mensaje espiritual del pasado. La Humanidad, que adquiere cada día conciencia de la unidad de los valores humanos, las considera como patrimonio común y se reconoce solidariamente responsable de su conservación ante las generaciones futuras, a las que se ve obligada a transmitirles en toda su riqueza de*

*autenticidad.*” (Acta de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados del 15 de abril de 1969)

Por su parte la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto el 24 de abril de 1969. Posteriormente, en la Sesión N° 34 de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 1969, las distintas bancadas políticas analizaron el proyecto. En el caso del Partido Demócrata Cristiano, el Presidente de la bancada Diputado Sr. Koenig, anunció su voto favorable. En el caso del Partido Radical, el Presidente de la bancada Sr. Basso, también lo aprobó, pero aprovechó la presencia del Ministro de Educación para denunciar el abandono en que se encontraba el lugar donde nació Bernardo O’Higgins y solicitó que se dieran los recursos para concluir su monumento en Chillán. Así también el Diputado Sr. Montes, a nombre del Partido Comunista, respaldó al proyecto, pero observó algunos artículos, como por ejemplo el de los monumentos públicos, ya que consideraba excesiva la medida de que todo proyecto conmemorativo debía ser aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, y criticó el articulado relativo a las excavaciones científicas, considerando negativo que el producto de las excavaciones arqueológicas realizadas por expediciones científicas extranjeras fuera dividido en partes iguales entre el Estado y los extranjeros, como también se explicaran mejor algunas disposiciones sobre las zonas típicas.

Tales observaciones fueron aclaradas por el Ministro de Educación. En el caso de los monumentos públicos, señaló que sólo se trataba de aquellos que tenían un sentido conmemorativo histórico y no solamente conmemorativo. Sobre las misiones científicas extranjeras fundamentó su decisión en el sentido de estimular las misiones extranjeras, pero que esto no implicaba que pudieran sacarlas del país, ya que para ello debían solicitar una autorización del Presidente de la República, mediante la aplicación de la Ley N° 16.441, de acuerdo a su artículo 43. Respecto a las zonas típicas indicó que la norma propuesta buscaba que las nuevas construcciones debían tener un estilo similar a las construcciones existentes, para mantener la unidad del sector.

También fue motivo de discusión el conflicto de intereses entre lo público y lo privado en la conservación de los monumentos, ya que la ley propuesta obligaba a los particulares a mantenerlos debidamente, sobre lo cual el Ministro de Educación Sr. Máximo Pacheco explicó que se debía mantener el principio del interés público por sobre el interés individual. Finalmente, después de la discusión, se puso a votación el proyecto, siendo aprobado por unanimidad, acordándose agregar como integrante del Consejo de Monumentos Nacionales a un representante del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile.

Posteriormente el proyecto pasó a discusión del Senado donde, en la Comisión de Educación, el Senador Sr. Alberto Jerez de la Democracia Cristiana propuso



que toda construcción previa a 1900, fuera pública o privada, debería ser considerada como monumento histórico. Para ello argumentó el Senador en la Sesión N° 39 del 3 de septiembre de 1969 que:

*“...nuestro patrimonio cultural artístico e histórico es muy escaso: ha sido prácticamente descuidado. Celebro esta iniciativa porque permitirá poner término a una situación caótica y vergonzosa respecto de los que es la verdadera tradición de Chile, de lo que vale la pena conservar. Vemos, como ejemplo, Santiago se está remodelando: se destruyen edificios que son el último recuerdo de épocas arquitectónicas que a los chilenos no conviene perder en su totalidad. Estoy pensando en las casas antiguas de los fundos. Cualesquiera que sean la política agraria que se aplique y el destino social que debe darse a la tierra, debe tenerse el criterio sereno para entender que tales conceptos no se oponen a la conservación de las construcciones antiguas, que solo fueron patrimonio de los patrones, de los señores feudales, y que hoy día, a nuestro juicio, han de pasar a ser patrimonio nacional para ser gozadas por el pueblo, por la gente que tenga verdadero interés en contemplar dichas reliquias de nuestra tradición.”*

Frente a esta propuesta, el Ministro de Educación Sr. Máximo Pacheco explicó lo complejo de su aplicación, porque solo deberían tener el carácter de monumento aquellas construcciones de valor histórico y arquitectónico, considerando que el Consejo de Monumentos Nacionales debería hacer un catastro y seleccionar aquellas que tuvieran mérito para ser declaradas como monumentos históricos. Frente a esta explicación el Senador Jerez retiró su indicación.

Posteriormente, producto de la discusión, también se acordó incorporar al Consejo de Monumentos Nacionales un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología y de un miembro del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Sin embargo, no hubo acuerdo respecto de la distribución en partes iguales del producto de las excavaciones científicas entre las misiones científicas extranjeras y el Estado, lo cual fue criticado por el Senador Sr. Volodia Teitelboim del Partido Comunista, quien manifestó:

*“...en el proyecto de la Cámara se habla de repartir por iguales partes el material proveniente de excavaciones...reservando a un organismo nacional el derecho a la primera selección...Esta disposición coloca a Chile en la situación de un país que liquida en forma desaprensiva sus riquezas culturales, al permitir repartirlas, para mí de manera inaceptable, con misiones extranjeras. Por lo demás ello no es raro, pues Chile se ha caracterizado por su desdén casi inconsciente en torno del valor de los monumentos nacionales, de su tesoro arqueológico, de la riqueza creada por las civilizaciones que han vivido en nuestro territorio...La disposición me*

*parece casi increíble...A mi juicio, tal cesión es inconcebible, pues no debería cederse nada. Desde un punto de vista científico, la investigación arqueológica no se paga sobre la base de arrancar a un país los elementos propios de sus culturas prehistóricas, sino de las posibilidades de estudio de los tesoros arqueológicos que se descubren. Creo que el Presidente de la República debería vetar este artículo, que constituye un desprecio rayano en lo inverosímil hacia la defensa del patrimonio prehistórico chileno...”*

Frente a esta posición y otras observaciones, el Presidente de la República, mediante oficio N° 1, del 2 de enero de 1970, presentó varias indicaciones al proyecto, sustituyendo la norma que indicaba la división en partes iguales de los objetos arqueológicos excavados por misiones científicas extranjeras, por una que sólo se cedía hasta el 25% de los objetos encontrados, previa primera selección a favor del Estado, lo que fue aceptado por la Cámara de Diputados. Finalmente, en la Sesión N° 26 del miércoles 7 de enero de 1970 de la Cámara de Diputados, el proyecto es despachado nuevamente al Senado, ocasión en la cual el Diputado del Partido Socialista Sr. Palestro se manifestó sobre la incorporación en la ley de nuevos artículos en pro de la conservación de la casa y museo de la poetisa Gabriela Mistral, señalando:

*“Constantemente se demuelen casas antiguas que constituyeron también algún pilar de lo que es actualmente nuestra Patria. Nosotros, los socialistas, los marxistas, los revolucionarios, los hombres que estamos luchando y seguiremos luchando por un Chile distinto, moderno, progresista, también somos respetuosos de los hechos históricos, de los hechos que han ido marcando hitos en la historia de este país...”*

Concluyendo este proceso legislativo, en la Sesión N° 36 del 13 de enero de 1970 del Senado de la República, el *“Proyecto de Ley que establece normas sobre la protección del patrimonio histórico-cultural del país”* es aprobado, facultando al Presidente de la República para promulgar la Ley, siendo publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero de 1970.

### **El Consejo de Monumentos Nacionales, sus atribuciones y categorías de monumentos de acuerdo a la Ley N° 17.288 de 1970**

La legislación de monumentos nacionales de 1970 se ha mantenido en su esencia hasta la actualidad salvo pequeñas modificaciones, agregando o suprimiendo algunos artículos, siendo la última modificación la establecida en la Ley N° 20.021, publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2005, que incorporó cambios especialmente en lo relacionado con clarificar y aumentar las penas y sanciones a quienes dañen, trafiquen o destruyan los monumentos o bienes patrimoniales bajo protección oficial.

Según esta legislación, el Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo público dependiente del Ministerio de Educación encargado de la declaración, protección y tuición de los monumentos nacionales que gozan de protección oficial en virtud de la Ley. El Consejo está integrado por 20 personas<sup>90</sup> que representan a instituciones públicas y privadas, siendo presidido por el Ministro de Educación. A su vez el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos es el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo. También la ley establece que se debe nombrar un secretario quien está encargado de cumplir los acuerdos del Consejo y que es su ministro de fe.

La Ley define en su artículo N° 1 como monumento nacional los:

*“...lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico, los enterratorios o cementerios u otros restos aborígenes, las piezas u objetos antro-po-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia, los santuarios de la naturaleza, los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo”.*

Las atribuciones y deberes del Consejo de Monumentos Nacionales de acuerdo a la ley en su artículo N° 6 son:

- Pronunciarse sobre la conveniencia de declarar Monumentos Nacionales los lugares, ruinas, construcciones u objetos que tengan importancia histórica, científica o artística.
- Autorizar los trabajos de conservación, reparación o restauración de los monumentos nacionales.

---

<sup>90</sup> Los miembros del Consejo de Monumentos Nacionales son: el Ministro de Educación Pública, el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Conservador del Museo Histórico Nacional, el Conservador del Museo Nacional de Historia Natural, el Conservador del Museo Nacional de Bellas Artes, el Conservador del Archivo Nacional, el Director de Arquitectura de la Dirección General de Obras Públicas, un representante del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, un representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, un representante del Colegio de Arquitectos, un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Defensa Nacional, un abogado del Consejo de Defensa del Estado, un representante de la Sociedad de Escritores de Chile, un experto en conservación y restauración de monumentos, un escultor que represente a la Sociedad Nacional de Bellas Artes y a la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, un representante del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología, un miembro del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y un representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

- Autorizar la realización de actividades en santuarios de la naturaleza que puedan alterar su estado natural.
- Autorizar la instalación de monumentos públicos.
- Conceder los permisos para realizar las prospecciones y excavaciones de carácter arqueológico, antropológico o paleontológico.
- Gestionar la reivindicación, cesión o venta al Estado, o la adquisición a cualquier título por éste, de los monumentos que sean de propiedad particular.
- Formar el registro de Monumentos Nacionales y Museos.
- Elaborar los proyectos o normas de restauración, reparación, conservación, y señalización de los monumentos nacionales.
- Ejecutar por si solo, en conjunto con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, o por intermedio de otro organismo, trabajos de restauración, reparación, conservación o señalización de los monumentos nacionales.
- Reglamentar el acceso a los Monumentos Nacionales y proponer al Gobierno medidas administrativas que sean conducentes a la mejor vigilancia y conservación de los mismos.
- Proponer al Gobierno el o los reglamentos que deban dictarse para el cumplimiento de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.

La legislación de 1970 que está en el Anexo N° 7 incorpora también nuevas categorías de monumentos a las que ya existían previamente, estableciéndose en definitiva las siguientes:

- Monumentos Históricos: los lugares, ruinas, construcciones y objetos que tengan una significación histórica, artístico o por su antigüedad.
- Monumentos Públicos: las estatuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estuvieren colocados o se colocaren para perpetuar memoria en campos, calles, plazas y paseos o lugares públicos.
- Monumentos Arqueológicos: los lugares, ruinas, yacimientos y objetos antropológicos y arqueológicos que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. Se incluyen también en esta categoría los objetos paleontológicos y los lugares donde se encuentran. Para ambos casos se establece que su propiedad es del Estado.
- Zonas Típicas o Pintorescas: Las poblaciones o lugares donde existan ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos donde es necesario mantener su carácter ambiental y propio.
- Santuarios de la Naturaleza: los sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean

formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado.

Las categorías nuevas de monumentos que se incluyen en la ley son las zonas típicas y los santuarios de la naturaleza. La primera de ellas surge como necesidad de dar protección al entorno de los monumentos históricos y arqueológicos, como también incorporar áreas urbanas y rurales de mayor extensión. Por cierto esta es una categoría más flexible, en cuanto a que se permiten intervenciones, pero siempre teniendo presente que su función es mantener el carácter típico del lugar. Por su parte, los santuarios de la naturaleza, tienen el objetivo de proteger lugares terrestres o marinos, en donde pueden existir actividades de explotación agrícola, forestal o ganadera, pero cuyo principal interés es preservar sus ecosistemas y permitir la investigación científica.

Por otro lado, la nueva legislación mantuvo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales respecto del registro de las colecciones patrimoniales y de la inscripción de los museos públicos y privados, dejando claramente establecida que la salida del país de las colecciones o bienes patrimoniales debía ceñirse a lo indicado en el artículo 43 de la Ley N° 16.441.



Hacienda San José del Carmen del Huique. VI Región  
Fotos de A. Cabeza



Monumento Plaza Italia, Santiago.





Isla de Pascua



Capilla del Mármol, Lago General Carrera



Valparaíso. Las cinco categorías de monumentos nacionales de Chile de la ley de 1970: Monumento Histórico, Monumento Público, Monumento Arqueológico, Santuario de la Naturaleza y Zona Típica. Fotos A. Cabeza

Es importante destacar que con esta legislación hay un avance conceptual en la incorporación y protección patrimonial estatal de los bienes culturales y naturales. Así también el concepto de valor, significado e importancia de los bienes es más amplio que la sola referencia a la antigüedad y a la historia. Se evidencia aquí la influencia internacional a través de los profesionales de la época más conectados con los movimientos conservacionistas tanto europeos, como de Estados Unidos y América Latina. Se destaca la inclusión de los aspectos ambientales y de los bienes naturales, dando una primera señal de inclusión en una comprensión más diversa e integral del patrimonio. A pesar de ello, el peso institucional histórico de la división entre los servicios estatales dedicados al patrimonio cultural y natural persiste hasta el día de hoy.

La legislación de 1970 estableció que cualquier persona o institución, pública o privada, puede solicitar la declaración como monumento nacional de cualesquiera de los bienes indicados en la ley. El Consejo de Monumentos Nacionales procede a la evaluación de manera colegiada y si hay diferencias se procede a una votación. Si



es aprobada la solicitud se envían los antecedentes al Ministro de Educación, quien tiene la potestad de cursar o no el decreto oficial. Esto significa que la autoridad puede negarse a nombrar un monumento aunque exista aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales por mayoría. Sin embargo, para la derogación de su calidad de monumento de algún bien o conjunto de bienes, también se requiere de la aprobación por mayoría de los miembros del Consejo, no teniendo la facultad el Ministro de Educación o el propio Presidente de la República, de proceder a la desafectación, sin el acuerdo de dicho organismo.

Esta situación ha llevado a conflictos entre el Ministro de Educación y los consejeros miembros de la institución en algunos casos emblemáticos, donde los intereses públicos o privados se cruzan. No obstante, es importante señalar que más de la mitad de los miembros del Consejo son funcionarios públicos, varios de ellos de dependencia jerárquica directa del Ministro de Educación, quien a su vez, preside el Consejo de Monumentos Nacionales. Si bien para la mayoría de los casos tratados no ha existido una alineación de pareceres y votos, los consejeros representan a instituciones, las cuales tienen sus propios intereses y los consejeros en varias ocasiones han debido votar en contra de sus propias apreciaciones técnicas debido a instrucciones precisas de sus superiores.

El autor de esta tesis fue Secretario del Consejo de Monumentos Nacionales entre 1994 y 2006, y Vicepresidente Ejecutivo de dicha entidad desde el 2014 a la fecha, por lo que puede dar fe de algunas de estas situaciones, las cuales por cierto no quedan reflejadas en las actas oficiales de la institución.

Otro aspecto novedoso de esta legislación de 1970 es que mantuvo la visión de que la declaración de monumento se aplicaba a bienes públicos y privados sin distinción. Además estableció claramente que los bienes arqueológicos son de propiedad fiscal, rescatando la norma que venía desde la legislación de 1925. Permaneció así el espíritu de la preponderancia del interés público por sobre el interés privado, pero lamentablemente la legislación no estableció compensaciones ni medidas económicas o tributarias para los propietarios de los bienes protegidos. Quizás esto se debió a que en un comienzo la mayoría de los bienes declarados eran de propiedad fiscal, pero con las sucesivas declaraciones de bienes privados esto se transformó en un problema creciente, que en los últimos años sólo ha tenido soluciones parciales, permitiendo que aquellos bienes inmuebles privados que no produzcan renta, puedan estar exentos del pago de contribuciones.

Unido a otros factores, la ausencia de estos mecanismos financieros y económicos de apoyo a la conservación del patrimonio, ha significado el deterioro de muchos inmuebles declarados, ya que sus propietarios los consideran congelados para acceder al mercado inmobiliario y al creciente aumento del valor del suelo en ciudades en permanente expansión. Esto ha implicado que muchas propiedades antiguas no son mantenidas, esperando el propietario que los terremotos y los

incendios las destruyan, buscando posteriormente la derogación del decreto de protección.

Por otro lado, esta legislación estableció normas de intervención para cada una de las categorías de monumentos. Esto también fue visto por muchos propietarios como una traba a los proyectos de modificaciones de sus inmuebles, en atención a que no recibían ningún tipo de beneficio y sí una serie de obligaciones que cumplir. La legislación indicó que se deberían dictar una serie de reglamentos, pero desde 1970 a la fecha sólo se ha dictado el reglamento que norma las investigaciones, prospecciones y excavaciones arqueológicas mediante Decreto Supremo N° 484 de 1990, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial el 2 de abril de 1991.

Esta legislación determinó algunas sanciones civiles y penales para quienes atenten contra el patrimonio, pero la propia debilidad institucional muy poco pudo hacer en este sentido hasta mediados de los 90. Afortunadamente uno de los cambios recientes de la ley en el 2005 apuntó en esta dirección, tipificando los delitos y aumentando las penas, lo que, unido al fortalecimiento institucional, permitió emprender acciones legales, especialmente en el ámbito del tráfico ilegal del patrimonio arqueológico.

No obstante, el problema central de la nueva normativa legal y la institución era la falta de un presupuesto anual asignado al Consejo de Monumentos Nacionales. Es cierto que la Ley N° 17.288 establecía en uno de sus artículos que el presupuesto de la nación debía considerar anualmente su financiamiento, pero esto no fue una realidad hasta 1996, sea por desidia o desconocimiento de las autoridades que no lo solicitaron o por la propia entidad que no supo o no pudo presionar porque ello ocurriera. Por tanto la institucionalidad que creaba la ley quedó minimizada en su accionar, sin recursos para contratar personal, evaluar proyectos, difundir su trabajo y sin incentivos de todo tipo o recursos económicos para invertir en la protección y conservación de los monumentos que se declaraban.

Esta situación erosionó la credibilidad pública del Consejo de Monumentos Nacionales y lo que es peor, significó el deterioro y destrucción de muchos monumentos. De todas maneras, como veremos más adelante, esta legislación permitió en forma creciente la declaración como monumentos nacionales de muchos bienes del patrimonio, los cuales sin esta protección oficial hoy día no existirían.

Por otro lado, también se debe explorar como una explicación complementaria de la aparente debilidad del Consejo de Monumentos Nacionales la superposición y confusión de roles y atribuciones que comparte con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

La nueva legislación de 1970 estableció que la vicepresidencia ejecutiva del Consejo quedaba en manos del director de dicha entidad, pero al mismo tiempo indicaba que toda acción vinculada a los bienes patrimoniales que custodiaba, que estuvieran declarados monumentos nacionales, como también el registro de colecciones y de museos, era función del Consejo de Monumentos Nacionales. Esto significaba dejar en manos de un Consejo integrado por otras autoridades y representantes de otras instituciones, decisiones que históricamente se tomaban de manera unipersonal al interior de la institución. Esta tensión institucional siempre ha estado presente hasta la actualidad y solo se ha enfrentado de manera coordinada cuando los directores de la DIBAM han comprendido los roles y propósitos complementarios que tienen el Consejo de Monumentos Nacionales y la DIBAM.

### **El Consejo de Monumentos Nacionales durante 1970 y agosto de 1973**

No obstante lo anterior, gracias a la nueva legislación, promulgada a comienzos de 1970, el Consejo de Monumentos Nacionales logra un renovado impulso en su labor, asumiendo la vicepresidencia ejecutiva de la entidad el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). 1970 fue el último año del Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, teniendo el país elecciones presidenciales en septiembre, las cuales ganó el candidato de la Unidad Popular Salvador Allende. De dicho año sólo nos han llegado un total de 3 actas de las sesiones del Consejo y se registraron la declaración de 4 monumentos nacionales, aunque se aprobaron varios más cuyos decretos fueron firmados a comienzos de 1971.

Durante 1970 el Director de la DIBAM y Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales fue el escritor Roque Esteban Scarpa. Entre los consejeros se mantienen la arqueóloga y Directora del Museo Nacional de Historia Natural Grete Mostny y el arquitecto de la Universidad de Chile Fernando Riquelme. También aumenta la presencia de otros arqueólogos como Hans Niemeyer<sup>91</sup> y Gonzalo Figueroa García-Huidobro<sup>92</sup>, quienes prestarían importantes servicios al Consejo, el primero vinculándose a la arqueología del Norte del país y el segundo en lo relacionado con Isla de Pascua. Respecto a este último lugar es importante destacar que el Consejo en su sesión del 2 de marzo de 1970 acordó nominar a varias personas residentes en Isla de Pascua, particularmente de la

---

<sup>91</sup> Hans Niemeyer Fernández, si bien era ingeniero civil de profesión, se dedicó con pasión a la arqueología, tanto como investigador como docente en la Universidad de Chile. Fue consejero en varios períodos, representando primero a la Sociedad Chilena de Arqueología y después como Director del Museo Nacional de Historia Natural.

<sup>92</sup> Gonzalo Figueroa García-Huidobro asesoró al Consejo de Monumentos Nacionales en todas las materias relacionadas con Isla de Pascua durante varias décadas, siendo el único chileno que participó en la expedición de Thor Heyerdahl a Isla de Pascua y la Polinesia en 1954 y 1955. En la década siguiente inició las primeras restauraciones de los ahu (plataformas ceremoniales) y participó junto a otros arqueólogos en varias excavaciones arqueológicas.

etnia local rapa nui, como visitantes especiales de la entidad, con el objeto de aumentar la protección de su patrimonio arqueológico, ya que existían denuncias sobre su deterioro.

Por otra parte en la sesión del 28 de mayo de 1970 se deja constancia que se nombraron dos comisiones para redactar los reglamentos de la ley de monumentos nacionales, una para arqueología y otra para arquitectura. En la próxima sesión del 31 de agosto de 1970 se acuerda la declaración de la primera zona típica según la nueva legislación: el poblado del Santuario Religioso de La Tirana, en la actual Región de Tarapacá en el Norte de Chile.

Se observa en las actas de 1970 un progresivo accionar del Consejo en diversas materias como también su preocupación en declarar un rango más amplio de bienes patrimoniales: iglesias, oficinas salitreras, casas de hacienda, sitios geológicos y arqueológicos, edificaciones coloniales y republicanas del siglo XIX. También se mantiene el interés por los monumentos públicos, siendo de especial preocupación del Consejo el traslado momentáneo de estos debido a las obras del Metro en Santiago. Por otra parte, también se ve una mayor preocupación por resguardar el patrimonio arqueológico y un aumento en los préstamos de colecciones arqueológicas a museos y universidades del exterior.

No hemos encontrado las actas del Consejo entre septiembre de 1970 hasta junio de 1971. Tampoco entre estas fechas hay declaraciones de monumentos nacionales. Esto quizás se debió al cambio de gobierno y a la designación de nuevas autoridades. No obstante a partir de junio de 1972 hay una renovada actividad del Consejo, realizándose ese segundo semestre unas 7 sesiones, para continuar con 10 sesiones en 1972 y con 10 sesiones en 1973, a pesar del golpe militar del 11 de septiembre de ese año. Es interesante destacar que en 1970 sólo hay 4 declaratorias de monumentos nacionales, en 1971 en cambio estas aumentaron a 23, en 1972 estas bajaron a 13 y en 1975 fueron 15.

En la sesión del 7 de julio de 1971 se declararon como monumentos históricos dos importantes bienes culturales: el Morro de Arica y la casa patronal de la hacienda San José del Carmen del Huique. En dicha ocasión también se entregó para opinión de los consejeros el reglamento de la ley de monumentos nacionales que fue elaborado por los Sres. Hans Niemeyer y Roberto Montandón, lo que demuestra el interés por llevar adelante dicha legislación en sus aspectos normativos. También hay que destacar que persiste el interés en los monumentos públicos y al respecto hay que mencionar la participación del Consejo en la comisión para levantar un monumento público al General René Schneider, comandante en jefe del Ejército, quien había sido asesinado ese año, según consta en el acta de la sesión del 1 de septiembre de 1971. En las siguientes sesiones de 1971 se insiste en el reglamento del Consejo que estaba para revisión del abogado de la DIBAM y se critica la reciente destrucción del Tambo de

Zapahuira, importante sitio arqueológico incaico, debido a los trabajos realizados por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas debido a la construcción del camino de Arica a Putre.

Durante 1972 se continúa con las declaraciones de monumentos nacionales de fuertes, casas patronales, edificios públicos y otros bienes muebles. También se aprueban la salida del país de varias colecciones patrimoniales en préstamo, aumentan los permisos para excavaciones arqueológicas y las denuncias por destrucción de este tipo de patrimonio. Sobre el particular continúan los trabajos arqueológicos en Isla de Pascua realizados por los arqueólogos William Mulloy y Gonzalo Figueroa, presentando este último un plan para la protección e investigación del patrimonio arqueológico de dicha isla. En esta misma línea se analiza el proyecto de ley elaborado por ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional) para crear un Instituto de Estudios de Isla de Pascua. Los consejeros se oponen a dicho proyecto por considerar que duplica las funciones ya asignadas al Consejo.

En la sesión del 2 de agosto de 1972 el representante del Colegio de Arquitectos presenta un proyecto para oponerse a la ley que autorizaba el traslado de la Casa Colorada a otro lugar de Santiago y una solicitud para declarar como monumento histórico la Casa Comercial Edwards colindante a la Casa Colorada. El Consejo aprobó ambas propuestas. También en las siguientes sesiones se nota un mayor interés por la protección del entorno de los monumentos. Por otro lado es interesante destacar que se toma conocimiento de la destrucción de la casa donde vivió el héroe de la Guerra del Pacífico Carlos Condell en Quilpué, la cual el alcalde de dicha comuna había solicitado se declarara como monumento histórico. Es el primer caso que conocemos de destrucción intencionada de un inmueble histórico antes de su protección legal. En la sesión del 6 de diciembre de 1972 se comisiona a los Sres. Roberto Montandón y Fernando Riquelme para estudiar el presupuesto del Consejo para 1973. Durante 1972 sólo se declararon 13 monumentos.

El año 1973 es de gran convulsión política, social y económica en Chile. No obstante, a pesar de los hechos de septiembre de 1973 sorprende la regularidad del quehacer del Consejo. En la sesión del 8 de enero de 1973 se aprobó finalmente el proyecto de creación del Instituto de Estudios de Isla de Pascua elaborado por ODEPLAN, quedando establecidas las atribuciones legales del Consejo de Monumentos Nacionales. También en dicha sesión es importante destacar que se declara por vez primera un resto náutico como monumento histórico, correspondiendo esta designación a la corbeta Esmeralda hundida en la rada de Iquique el 21 de mayo de 1879, durante la Guerra del Pacífico, siendo este el primer caso de patrimonio subacuático protegido en Chile. También en dicha ocasión el Consejo acordó solicitar un presupuesto de operaciones al Ministerio de Educación por la suma de 1.879.590 escudos.

Por otro lado se debe destacar en la sesión del 4 de abril de 1973 el acuerdo para declarar dos santuarios de la naturaleza en la cordillera de Santiago: Los Nogales y Yerba Loca. Siguiendo esta senda de protección del patrimonio natural que establecía la ley de monumentos nacionales de 1970, el Consejo recibe un oficio de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), entidad encargada de la administración de los parques nacionales, para aunar esfuerzos en la conservación de tales áreas protegidas donde existían importantes sitios arqueológicos.

En la sesión del 1 de agosto de 1973 se da cuenta que en el presupuesto de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) se consultaron 1 millón de escudos para el funcionamiento del Consejo, cuestión digna de recordar porque es el primer presupuesto que se solicita para la entidad en virtud de la ley de 1970. Este dato es importante porque se ha sostenido por años que nunca el Consejo de Monumentos Nacionales tuvo presupuesto. Como hemos visto anteriormente tales presupuestos y asignaciones por parte del Estado existieron en las décadas anteriores. Sin embargo, respecto de esta última solicitud no hay datos de que dicho presupuesto se haya materializado.

En dicha sesión también se menciona que la Comisión de Protección del Patrimonio Arquitectónico del Colegio de Arquitectos estaba elaborando un proyecto de ley sobre patrimonio. Por otro lado se indica que se autoriza la salida del país de los objetos de dos tumbas arqueológicas de la Universidad del Norte para ser entregadas al Museo de la Habana, traslado que no se realizó por los acontecimientos de septiembre de 1973.

### **El Consejo de Monumentos Nacionales en el Gobierno Militar (1973–1989)**

En la madrugada del 11 de septiembre de 1973 las fuerzas armadas se rebelan contra el Gobierno de la Unidad Popular y toman el control político del país. Se producen violentos enfrentamientos, el Palacio de Gobierno es bombardeado por la Fuerza Aérea y atacado por fuerzas terrestres suicidándose el Presidente Salvador Allende, después de solicitar que todos sus adherentes abandonaran La Moneda. Los próximos días y meses fueron de persecución de los que participaron en el Gobierno de la Unidad Popular y sus simpatizantes. A los muertos en los enfrentamientos y fusilamientos se sumaron miles de detenidos y desaparecidos. Muchos más abandonaron el país que estaba preso de profundos odios y divisiones.

En este contexto llama la atención que poco más de un mes de ocurridos los hechos del 11 de septiembre, el Consejo de Monumentos Nacionales volviera a sesionar el 17 de octubre de 1973. En dicha ocasión asume la Vicepresidencia del



Consejo, en su calidad de nuevo Director de la DIBAM, el escritor Sr. Roque Esteban Scarpa, y continúa como secretario del Consejo el Sr. Juan Eyzaguirre. El acta señala que se ratificaron los acuerdos de declaración de monumentos de la sesión previa cuyos “...decretos no alcanzaron a dictarse en la administración anterior.” Además se acuerda solicitar a la Universidad de Chile, sede Antofagasta, que habilite un museo donde conservar adecuadamente sus colecciones arqueológicas y se decide avanzar en un futuro convenio entre la CONAF y el Consejo, se autorizan excavaciones arqueológicas al Instituto de la Patagonia, se solicitan varias declaraciones de monumentos históricos y se acordó también invitar al nuevo Ministro de Educación para que presida la próxima sesión del Consejo de Monumentos Nacionales. No hay ninguna referencia a los sucesos políticos ocurridos, pero es importante destacar que se comisiona al arquitecto Sr. Fernando Riquelme como representante del Consejo ante la Comisión de Restauración del Palacio de La Moneda. Nada más se dice en la sesión de los acontecimientos del Golpe de Estado y del bombardeo y destrucción de parte de la Moneda que era un monumento histórico.

En la sesión del 14 de noviembre de 1973 se destaca la temprana preocupación por restaurar La Moneda, tarea encomendada al Ministerio de Obras Públicas, con la participación del Consejo. Llama la atención, en el contexto político del momento, las siguientes observaciones respecto del poeta Pablo Neruda, que había fallecido poco después del Golpe Militar, y que el propio Gobierno Militar proponía levantarle un monumento conmemorativo:

*“Informar al Sr. Ministro de Obras Públicas y Transportes que a juicio del Consejo, el lugar más indicado para erección de un monumento a Pablo Neruda es la ciudad de Parral. Se acordó respecto a la sugerencia de declarar monumento histórico la casa de Pablo Neruda, existente en la localidad de El Quisco, contenida en el oficio N° 1067, de 25 de octubre de 1973, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que antes de un pronunciamiento, el señor Diego Barros consulte la opinión de la Sociedad de Escritores de Chile. Esta última resolución se adoptó después de un intercambio de ideas en que se consideró necesario actuar con cierta prudencia, para evitar posibles erradas interpretaciones ante una medida en tal sentido considerando los acontecimientos políticos ocurridos. Sobre el particular el señor Barros expuso que el señor Neruda le había manifestado que todas sus cosas pasarían, después de sus días, al Partido Comunista, por lo que él estimaba conveniente conocer la opinión de la viuda y de la Sociedad de Escritores de Chile. El señor Gómez manifestó que se había sondeado el parecer de la familia del extinto y que ésta estaría dispuesta a aceptar la idea propuesta por el Gobierno.”*

En la sesión del 4 de diciembre de 1973 aparecen nuevos consejeros, seguramente los representantes de los servicios públicos. Se vuelve a tratar el

caso de la declaración de la casa de Pablo Neruda como monumento histórico señalándose:

*“...que el Consejo estima prudente que el acuerdo que este organismo adopte se base sólo en la proposición de la citada Sociedad de Escritores de Chile y no en la petición en igual sentido formulada por el señor Ministro de Obras Públicas.....pues considera que una resolución favorable a la propuesta del Gobierno puede prestarse a falsas o erradas interpretaciones de carácter político, dados los últimos acontecimientos.”*

También el vicepresidente ejecutivo da cuenta de que recibió del Ministerio de Educación el proyecto de reglamento de la entidad. Uno de los consejeros indicó que previamente debía modificarse la ley de monumentos nacionales en varios aspectos, entre ellos, la dependencia del Consejo ante el Ministerio de Educación. Al respecto se acordó sacar copias para conocimiento de los nuevos consejeros y que el Sr. Fernando Riquelme redacte un informe. Por otra parte en la sesión del 17 de diciembre de 1973 se acordó agradecer a la Dirección de Arquitectura el destino de 300 millones de escudos para la mantención, reparación y conservación de los monumentos históricos en 1974.

Durante 1974 se debe destacar la búsqueda de antecedentes del Palacio de la Moneda en España para su restauración, la aprobación del reglamento del Consejo y su envío al Ministerio de Educación, la discusión de una nueva ley orgánica para los monumentos nacionales, la insistencia en la necesidad de contar con un presupuesto directo para la entidad y la restauración de varios edificios. Las declaraciones de monumentos nacionales continúan en sus diversas categorías, lográndose la declaración de 18 monumentos.

Mención especial merece el conflicto entre el Consejo de Monumentos Nacionales y el Metro por las obras de construcción de éste, que se trató en la sesión del 14 de octubre de 1974, en la cual ya se aprecia la presencia en el Consejo de varios consejeros de alta graduación militar. Por otra parte, en cada una de las sesiones se tratan asuntos relativos a los monumentos conmemorativos, como por ejemplo el destinado a la Fuerza Aérea.

En 1975 se realizan sólo 8 sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales y se aprecian ciertos conflictos con el Ministerio de Educación. Por ejemplo en la sesión del 5 de marzo de 1975 el Ministro de Educación devuelve el reglamento del Consejo con reparos. Así mismo el ministro pide se revoquen dos acuerdos respecto de declarar como monumentos históricos el Palacio Pereira y la Nunciatura de Santiago por encontrarse ambos en mal estado. Los consejeros se oponen y se acuerda visitar de nuevo los inmuebles. La Nunciatura fue demolida finalmente pero no el Palacio Pereira, edificio que ha sido fruto de un continuado litigio en los tribunales de justicia hasta la actualidad y que solo en el 2012 fue

finalmente adquirido por el Estado para ser sede de la institucionalidad patrimonial y que actualmente está siendo restaurado.

En este año también se firma un convenio entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Consejo. En el mismo sentido se estudia un proyecto de convenio entre el Consejo y la Dirección Nacional de Arquitectura. También se envía finalmente el reglamento del Consejo al Asesor Cultural de la Junta de Gobierno, Sr. Enrique Campos Menéndez, para su estudio. Interesante es destacar que en la sesión del 18 de junio de 1975 se aprueba una solicitud de la Subsecretaría de Marina, en orden a declarar como monumentos históricos todas las naves hundidas del litoral chileno que hayan tenido “...*participación directa o indirecta en la historia nacional.*” Pero el Consejo pide un listado de ellas, lo que entrapa dicha declaración.

Por otra parte un nuevo conflicto se suscita entre el Consejo y el Ministerio de Educación por desafectar el Ministro un monumento histórico – la Divina Providencia de Santiago – sin consultar al Consejo. Se indica en el acta de la sesión de 1 de octubre de 1975 que: “...*el Sr. Ministro de Educación Pública debe respetar los acuerdos del Consejo y no puede derogar lo resuelto sin conocimiento de éste.*” Al respecto se acordó llevar el caso a la Contraloría General de la República.

En dicha sesión se menciona que la comisión legislativa de la Junta de Gobierno estaba estudiando una nueva ley sobre monumentos, que el consejo no formaba parte de las consultas y que quienes estaban trabajando en ella no habían sido parte del consejo o no tenían experiencia al respecto. Además se insiste en que no hay presupuesto para el consejo. Sobre este último aspecto, en la sesión del 3 de diciembre de 1975, se indica que el Ministerio de Educación devolvió el proyecto de presupuesto del Consejo. Por otra parte también se nota un aumento de las denuncias por destrucción de sitios arqueológicos y el tráfico ilegal de tales bienes.

En 1976, debido a la instalación de monumentos conmemorativos sin autorización del Consejo, el Ministerio del Interior envía un oficio con los monumentos autorizados por ley en los últimos 25 años. También se discute ese año la conmemoración de la anexión de la isla de Chiloé a la república, por cumplirse 150 años de tal suceso. Este año se aprecia entre los consejeros una mayor presencia de militares. Al respecto es importante señalar que todavía primaban en la declaración de monumento los valores arquitectónicos e históricos estando marginados los aspectos sociales y locales, persistiendo ese año las declaratorias de iglesias y conventos, pero también se declaran inmuebles de valor simbólico nacional como la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, la Intendencia de Santiago, el Mercado Central, el Correo Central y la Municipalidad de Santiago.

En la sesión del 6 de enero de 1977 se menciona que han aumentado los documentos que ingresan al Consejo. En esta ocasión, el consejero Roberto Montandón solicita nombrar a los directores provinciales de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas como visitadores especiales del Consejo. Lo mismo se propone para los arqueólogos de la Sociedad Chilena de Arqueología que esta designe, aprobándose ambas solicitudes. También se acuerda declarar varios monumentos en Iquique y de la calle Baquedano de dicha ciudad, ejemplo de la arquitectura salitrera.

En la sesión del 5 de abril de 1978 se autoriza a la Fundación del Pacífico, vinculada a ODEPLAN, para realizar excavaciones en Isla de Pascua. También se analiza la solicitud de Alberto Collados Baines para declarar como monumento histórico al poblado minero de Sewell. Al respecto se acuerda enviar la solicitud a la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO): *“...manifestándole que el Consejo ha estudiado con interés lo pedido y vería con agrado se busque una solución para conservar, por lo menos, parte de esa localidad para ser destinada a la instalación de entidades de esparcimiento.”*

En dicha ocasión se autorizan excavaciones arqueológicas y se encarga al Intendente de Santiago la protección de los sitios arqueológicos de Farellones que estarían amenazados por obras mineras, y se rechaza la solicitud del alcalde de Villa Alemana para proteger el Teatro Pompeya y sus alrededores, sugiriéndose por vez primera, que dicho inmueble sea declarado inmueble de conservación histórica por el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, argumentándose que la declaración de zona típica no procedía, porque no existían monumentos históricos en su alrededor.

En la sesión del 2 de agosto de 1978 se da a conocer al Consejo un recurso de protección en su contra por no autorizar una reforestación en el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, cerca de Concepción. El Consejo accede finalmente a autorizar la reforestación, pero se condiciona a respetar las quebradas con vegetación autóctona y el borde costero, que era refugio de aves marinas.

En la sesión del 4 de julio de 1979 se analiza la declaración de la oficina salitrera de Victoria, que estaba próxima a cerrar, queriéndose evitar su destrucción. Se indica que la oficina es de propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y que *“...el propio Presidente de la República está interesado en perpetuar el recuerdo del período salitrero.”* Así también, el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Enrique Campos Menéndez, propone pagarle un sueldo al secretario del Consejo, lo que se aprueba. En esta misma sesión se analiza el monumento al ex alcalde de Santiago Patricio Mekis. El monumento sería financiado de manera particular. El alcalde de Santiago Patricio Guzmán presentó el expediente y propuso su instalación en la plaza frente al

Teatro Municipal. El Ministro del Interior mandó un oficio en que respaldaba la iniciativa, creándose finalmente una comisión para estudiar este caso.

Es interesante destacar la sesión del 4 de junio de 1980, ya que en ella participa el Ministro de Educación Sr. Alfredo Prieto. Al tratar el tema de la declaración de la casa del ex Presidente de la República Manuel Montt, se plantea una discusión sobre los valores para declarar los monumentos, que pueden ser tanto históricos, como arquitectónicos, estéticos y urbanísticos, pero no se destacan todavía los valores sociales. En la misma sesión, el Ministro planteó las dificultades de declarar el Mercado Central de Santiago por la oposición del municipio de la ciudad, porque lo quería remodelar, aclarándose a la autoridad que la declaración no impedía las obras de restauración y de hermoseamiento del entorno. Aprovechando la asistencia del Ministro, los consejeros consultaron por el estado de avance de la nueva ley de monumentos nacionales. En el acta se manifestó el problema de lograr una indemnización para los propietarios que se vean afectados por la declaración de monumentos, que sería el gran problema para el avance de esta legislación y también el desconocimiento entre las autoridades de la ley de monumentos.

A partir de 1980 se observa una mayor actividad del Consejo de Monumentos Nacionales en lo relativo a solicitudes de declaratorias y de autorizaciones para intervenciones en los monumentos. Es importante notar también una mayor variedad de temas tratados, como por ejemplo las primeras normas y actividades de mitigación por obras en santuarios de la naturaleza, como las aplicadas en Hualpén producto de la autorización para una reforestación, y la solicitud de la compañía minera La Disputada de Las Condes, para construir un ducto subterráneo de relave que cruzaría un santuario de la naturaleza en el Santiago cordillerano, estableciéndose una serie de medidas ambientales como condición para su construcción.

Respecto de las modificaciones legales a la ley de monumentos, que se venían estudiando 1982 es un año especial. En la sesión del 29 de abril de 1982 se informa a los consejeros de la reestructuración del Ministerio de Educación y que el Consejo de Monumentos Nacionales pasaría a ser un organismo asesor del Director del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural y que la DIBAM sería la base de esta nueva institución. Se indicó también que debía continuarse el estudio para modificar la ley de monumentos nacionales, especialmente en las siguientes materias: establecer un impuesto o derecho que perciban las municipalidades a favor de los monumentos, incorporando un sistema de compensaciones a los municipios más pobres; que las donaciones que reciban las municipalidades se destinen a los monumentos declarados; que los monumentos declarados sean inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de manera gratuita; que los municipios también podrán incluir los bienes patrimoniales de interés local; que las restauraciones o intervenciones en los monumentos podrán ser autorizadas por

las direcciones de obras municipales previa revisión del Consejo; que se elaboren planes seccionales que incluyan a los monumentos estableciendo normas de altura y otras consideraciones arquitectónicas y urbanas que permitan una adecuada conservación de los monumentos y su entorno; que exista la liberación del pago de contribuciones para los monumentos, entre otras medidas.

Durante el mes de mayo de 1982 hay seis sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales para discutir el articulado del proyecto de ley que cambiaría disposiciones de la legislación, incorporando varias materias. Las actas son muy detalladas. En ellas se destaca el espíritu de la Constitución de 1980, que privilegia la propiedad privada, y se acuerda que el derecho de indemnización es una garantía de los propietarios de monumentos nacionales por daños “realmente causados”. También se habla de los inmuebles de valor cultural y que los particulares podrían demandar al municipio si se consideran afectados por la declaración, y que los municipios podrían suscribir convenios con los particulares para conservar los valores culturales de los inmuebles, previa autorización del Consejo. También se proponen penas para quienes destruyan los monumentos nacionales y que los municipios podrán contribuir a los gastos de conservación de los monumentos nacionales.

En esta iniciativa discutida en el acta de la sesión del 13 de mayo de 1982 se especifican los conceptos de conservación, reparación y restauración. Además se acuerda incluir en el seno del Consejo de Monumentos Nacionales un experto en ecología, dos expertos en restauración, uno de la Universidad de Chile y otro de la Universidad Católica, un representante del Servicio Nacional de Turismo y un representante del departamento de municipalidades del Ministerio del Interior. También se propone tener una secretaría técnica para el Consejo cuyo encargado sea ministro de fe y coordinador interno y externo de la institución.

No obstante el deseo de esta administración de modificar la ley de monumentos nacionales esto no fue posible. En el acta del 4 de agosto de 1982 se plantea por vez primera la necesidad de elaborar un “...*proyecto de ordenanza para el Santuario de la Naturaleza San Enrique*...” en la Cordillera de Santiago, cuyo informe sería preparado por la arquitecta y consejera del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo Sra. Loreto Torres, siendo este uno de los primeros casos en que se plantea la importancia de tener un plan de manejo para un área protegida.

En 1983 se nota un aumento de las solicitudes y proyectos, planteando la DIBAM la creación de varios museos regionales, una mayor vinculación con los municipios y también la disposición del Consejo de declarar nuevas zonas típicas, además de denunciar el Colegio de Arquitectos las destrucciones que sufría el campamento minero de Sewell. En 1984 hay un incremento en la instalación de monumentos públicos y se aborda el problema de la conservación de la “momia” del Cerro El Plomo, descubierta tres décadas atrás en la alta cordillera de Santiago.



En el año 1985 se nota un aumento progresivo de las solicitudes de excavaciones arqueológicas. En el acta de la sesión del 8 de enero de 1986 se trata un caso emblemático hasta el día de hoy, en pleno centro de Santiago, la protección del edificio del Diario El Mercurio, el cual fue lamentablemente demolido antes de lograr su declaración como monumento histórico, aunque ello motivó la protección de otros edificios históricos del centro de la capital, además de la declaración de zona típica de la plaza de armas y varias manzanas a su alrededor. En cuanto a la organización del Consejo se debe destacar que ya funcionan una comisión de arquitectos y una de arqueólogos entre los consejeros según da cuenta de ello el acta de la sesión de 14 de enero de 1987. En 1988 vuelve a ser tema de discusión legal la relación entre patrimonio y propiedad privada, señalándose que se estaba estudiando la ley de monumentos en el contexto de la nueva Constitución de la República aprobada en 1980, ya que dicha legislación vulneraría los derechos de los particulares.

1989 es el último año del Gobierno Militar. El Consejo de Monumentos Nacionales sigue en su accionar normal. Hay varias denuncias de saqueos en sitios arqueológicos, también se nota una mayor preocupación por el patrimonio ferroviario y aumentan los permisos de préstamos de colecciones al extranjero. El 8 de marzo de 1990, antes del cambio de gobierno, tiene lugar la última sesión del Consejo, que preside el director saliente de la DIBAM y vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales, el Sr. Mario Arnello Romo.

Durante el Gobierno Militar, desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990, se declararon por decreto supremo a lo menos 309 monumentos nacionales y el Consejo de Monumentos Nacionales tuvo un promedio de 10 sesiones anuales. Podemos decir que la legislación de monumentos nacionales aprobada en 1970 logró en dicho período consolidar a lo menos cuatro aspectos fundamentales: constituirse en una institución validada por el Estado en sus aspectos formales, pudiendo sesionar regularmente con la participación de los representantes de instituciones públicas y privadas que indicaba la ley; declarar bienes culturales y naturales como monumentos nacionales en las diversas categorías patrimoniales, con un promedio de 18 decretos anuales; aplicar la legislación de manera creciente, otorgar permisos de excavaciones arqueológicas y aprobar proyectos de restauración, de instalación monumentos públicos y de préstamos de colecciones patrimoniales; alcanzar una vinculación real y jerárquica bajo la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos a través de sus directores, que tenían la vicepresidencia ejecutiva de la entidad, quienes impulsaron varios convenios con instituciones del Estado que facilitaron y contribuyeron a su quehacer, particularmente la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Nacional Forestal.

No obstante el Consejo de Monumentos Nacionales continuó con falencias y debilidades estructurales que comprometieron su trabajo y credibilidad a lo menos en tres aspectos esenciales: el presupuesto de la nación no consideró recursos directos para el funcionamiento de la entidad, frente a lo cual sus decisiones quedaban al arbitrio, voluntad y recursos de otras instituciones, como también no pudo concretar medidas económicas en favor de la conservación de los monumentos; así también no logró que se dictaran los reglamentos de la ley de monumentos nacionales de 1970, que a lo menos establecía 5 reglamentos, salvo avanzar y lograr la aprobación del Reglamento de Excavaciones Arqueológicas, pero cuyo decreto fue firmado por la nueva autoridad a comienzos de 1990, durante el Gobierno del Presidente Aylwin; y finalmente no pudo ejercer su accionar normativo real en las regiones del país, salvo cuando existía una predisposición positiva de la autoridad gubernamental, debido esto a la falta de recursos, lo que implicaba también un desconocimiento general de la sociedad y las instituciones públicas y privadas respecto de su quehacer y, por ende, una baja valoración de la ciudadanía sobre el patrimonio del país.

### **El Consejo de Monumentos Nacionales durante el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin (1990-1994)**

En marzo de 1990 comienza la administración de los Gobiernos de la Concertación, después de casi dos décadas de gobierno militar. La Dirección de la DIBAM y del Consejo de Monumentos Nacionales es asumida por el historiador Sergio Villalobos. Algunos consejeros continúan en sus cargos, como los arquitectos Loreto Torres y Fernando Riquelme, junto a Roberto Montandon y al arqueólogo Carlos Aldunate del Solar. En 1991 se plantea a la nueva administración que la falta de presupuesto dificulta la gestión de la entidad y se insiste que el Estado debe participar en la conservación de los monumentos de los particulares, ya que estos no reciben compensación alguna, siendo este es el gran problema de la gestión de los monumentos, según se señala en el acta de la sesión del 4 de octubre de 1991.

En el acta de la sesión del 30 de octubre de 1991 se da cuenta de una reunión especial del Consejo de Monumentos Nacionales, dirigida por Sergio Villalobos, a la cual asiste como invitado especial el alcalde de Santiago Jaime Ravinet, quien manifiesta que el objetivo de la reunión era:

*“...fijar una política sobre la valorización del área céntrica de Santiago, pues quedan poquísimos ejemplos de monumentos históricos auténticos...que es de opinión que hay que preservar los valores arquitectónicos del pasado, lo que no se consigue sólo con medidas puramente prohibitivas, que paralizan o quedan condenadas a su destrucción y abandono. La preservación de los bienes del pasado implica*

*no solo medidas restrictivas sino que medidas imaginativas y atractivas. Además que es conveniente el otorgamiento a las municipalidades de facultades y recursos para que los monumentos históricos y zonas típicas sean renovados en su prestancia y dignidad original.”*

Algunos consejeros rechazaron las palabras del alcalde de Santiago. Otros buscaron una postura intermedia, uno se mostró totalmente de acuerdo con el alcalde argumentando que la ley de monumentos debía considerar el progreso de la ciudad y que se debe autorizar el reciclaje de las propiedades patrimoniales. Otros consejeros indicaron que la ley de monumentos nacionales debía modificarse. El alcalde insistió en que los particulares debían estar de acuerdo con la declaración de monumento de sus propiedades. Es interesante destacar la parte final de acta redactada por el Secretario del Consejo de Monumentos Nacionales Juan Eyzaguirre, quien señala: “Sin acuerdos se levantó la reunión.”

En los próximos meses se nota una disminución en la asistencia de los consejeros a las sesiones de la entidad, estando presentes no más de 8 consejeros. Entre los temas más frecuentes están los relativos a Isla de Pascua por conflictos entre investigadores. También es importante resaltar que en la sesión del 4 de marzo de 1992, se da lectura a un oficio del 11 de diciembre de 1992 de la Empresa Portuaria de Chile, en el cual se comunica al Consejo de Monumentos Nacionales que dicha empresa vendió como chatarra los restos del antiguo muelle de pasajeros de Valparaíso, que había sido descubierto en 1988. Se deploró el hecho pero solo pidió explicaciones a la empresa.

En 1993 Sergio Villalobos renuncia a la dirección de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y en su reemplazo es designada por el Presidente Patricio Aylwin la filósofa Sra. Marta Cruz-Coke Madrid, quien asumió con ímpetu su gestión preocupándose por el patrimonio en su más amplio sentido, abriendo también una nueva fase en el Consejo de Monumentos Nacionales, que en los primeros años del Gobierno de la Concertación había disminuido su accionar. La Sra. Marta Cruz-Coke ha relatado en varias ocasiones que la situación del Consejo de Monumentos Nacionales durante 1993 era deplorable, con una baja asistencia de consejeros, algunos de los cuales le habían planteado que por falta de apoyo del Gobierno no había otra alternativa que suspender las actividades de la entidad (Marta Cruz-Coke, comunicación personal 2009).

Durante 1993, el autor de esta tesis, quien trabajaba en la Corporación Nacional Forestal a cargo de los recursos culturales de las áreas silvestres protegidas (parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales), conoció a la Sra. Marta Cruz-Coke en reuniones ministeriales sobre Isla de Pascua y pasó a representar a dicha entidad en el Consejo de Monumentos Nacionales. Posteriormente, en la sesión del Consejo de Monumentos Nacionales del 2 de marzo de 1994, la Directora de la DIBAM y Vicepresidenta Ejecutiva del Consejo

de Monumentos Nacionales informa que el arqueólogo Ángel Cabeza Monteiro se incorpora como asesor técnico a la institución, continuando el historiador Juan Eyzaguirre en sus funciones como secretario, cargo que ejercía desde la década de los 60.

El Gobierno de Aylwin estuvo abocado esencialmente a los temas políticos de la transición, particularmente los asociados a los derechos humanos y las relaciones cívico-militares, no existiendo una especial preocupación o tiempo para los temas relativos al patrimonio cultural, aunque es en este período en que se manifiestan por parte de diversos grupos de la sociedad civil y también por parte de las nuevas autoridades que asumían determinados servicios públicos, la urgencia de renovar las políticas e instituciones culturales, cuestión que tomaría mayor fuerza en los gobiernos siguientes.

### **El Consejo de Monumentos Nacionales durante los Gobiernos de los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos (1994 - 2006)**

Hemos unido estos dos períodos presidenciales respecto del accionar del Consejo de Monumentos Nacionales en atención a que corresponden a una misma etapa de gestión de la secretaría ejecutiva de dicha entidad que encabezaba el suscrito y debido a la continuidad de las políticas públicas sobre el área. En la administración del Presidente Frei el Consejo de Monumentos Nacionales pudo retomar e impulsar su quehacer gracias al apoyo político y financiero inicial de dicho gobierno. En la administración del Presidente Lagos este apoyo creció y se consolidó junto con el respaldo que este gobierno dio a la cultura en general. En la primera administración fueron claves la entonces Directora de la DIBAM, la Sra. Marta Cruz-Coke, junto a los Ministros de Educación Sres. Sergio Molina y Juan Pablo Arellano, que respaldaron las iniciativas de la secretaría del Consejo. En la segunda administración se obtuvo un respaldo especial del Presidente Lagos a través de su asesor cultural el Sr. Agustín Squella. A comienzos de 1994 el arqueólogo Ángel Cabeza es nombrado como asesor técnico del Consejo de Monumentos Nacionales y en mayo de 1994 como su coordinador según consta en el acta de la sesión del 3 de mayo de dicho año.

En estos años el Congreso aprueba dos leyes que venían discutiéndose desde los inicios de los 90: la de Pueblos Indígenas y la de Medio Ambiente, las cuales incidieron en el patrimonio y especialmente en la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales. Es el caso de la Ley N° 19.253, de 1993, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), a la cual asignó promover la protección del patrimonio indígena histórico, arqueológico, arquitectónico y cultural en general. Con dicha entidad el Consejo suscribió un convenio de cooperación e inició en conjunto un Programa de Patrimonio Cultural

Indígena que significó la declaración de varios sitios ceremoniales indígenas como monumentos históricos por vez primera a nivel nacional.

Pero la legislación de mayor incidencia en lo patrimonial fue sin duda la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300 de 1994. Con ella se establece el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, normado por su Reglamento, que sitúa al Consejo de Monumentos Nacionales como *“órgano de la administración del Estado con competencia ambiental”*. Según esta legislación deben realizar Estudios de Impacto Ambiental los titulares de proyectos o actividades que generan *“alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural”* y que las Declaraciones de Impacto Ambiental deben presentar los antecedentes que avalen que los respectivos proyectos no alterarán los monumentos y el patrimonio en general. La condición del Consejo como órgano competente en materia ambiental implicó la revisión de gran cantidad de Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental, la formulación de actividades de protección del patrimonio, la mitigación del impacto o su compensación ante pérdidas inevitables, así como de la fiscalización de los acuerdos alcanzados.

Como hemos dicho durante 1994 el Consejo de Monumentos Nacionales dio un salto cualitativo en su gestión. En 1993 se había discutido una nueva legislación, cuyo trabajo continuó en 1994, aunque sin resultados positivos. Esto se debió a que el Gobierno dio preferencia al diseño de una nueva legislación sobre la cultura en general y la creación de una nueva institucionalidad cultural, tarea que fue continuada en la administración del Presidente Lagos. Esto significó dejar pendiente el tema de la institucionalidad patrimonial para la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, lo cual tampoco fue posible debido a las diferencias existentes entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Si bien en los primeros años de la vuelta a la democracia, el Gobierno se dedicó más bien a las tareas políticas urgentes que el momento imponía, se comenzó a vivir un ambiente más propicio para la cultura y el patrimonio, lo que combinado con el reforzamiento institucional del Consejo de Monumentos Nacionales, produjo de manera creciente un cambio sustancial en la gestión del patrimonio cultural.

En 1994 la Secretaría del Consejo fue reforzada con personal aportado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, asumiendo el suscrito una tarea de asesor y coordinador de las tareas de la secretaría del Consejo, la cual todavía estaba en manos del Sr. Juan Eyzaguirre, que a la fecha tenía más de 80 años de edad y con quien el suscrito compartió el quehacer del Consejo hasta su fallecimiento en 1996. Gracias a la asignación de un presupuesto fiscal desde 1996, se incorporó más personal como arqueólogos, arquitectos, historiadores, abogados y administradores, cubriendo los diversos ámbitos de la institución.



La comisión de patrimonio arquitectónico del Consejo a finales de los años 90, de izquierda a derecha sentados: Loreto Torres, Roberto Montandon, Silvia Pirotte, Fernando Riquelme, Hernán Montecinos. Arriba: Christian Matzner, Marta Vega y Ángel Cabeza. Foto Archivo Consejo de Monumentos Nacionales

Esta asignación presupuestaria experimentó un crecimiento sostenido en los años siguientes. A pesar de que los montos son aún hoy bastante exiguos en relación a la envergadura de la misión institucional, podemos decir que contar con un presupuesto directo, después de 70 años de la carencia de recursos, salvo aportes eventuales, fue uno de los factores del despegue de la entidad, junto a otros de carácter político, social y cultural. La siguiente tabla muestra la evolución del presupuesto del Consejo de Monumentos Nacionales desde 1996 hasta el 2009. En la actualidad el presupuesto fiscal de dicha entidad es de alrededor de 2.450 millones de pesos.

<b>AÑO</b>	<b>Asignado por Presupuesto de la Nación (pesos chilenos)</b>
1996	20.000.000
1997	24.668.000
1998	66.902.000
1999	100.865.000
2000	103.000.000
2001	136.154.000
2002	243.475.000



2003	263.914.000
2004	343.511.000
2005	373.558.000
2006	403.076.000
2007	622.491.000
2008	1.013.336.000
2009	1.076.163.000

El aumento sostenido de recursos ha sido importante, pero de todas maneras hay que señalar que el monto real para cubrir las necesidades operativas es bajo, si pensamos que se trata de dineros que se asignan anualmente a un servicio del Estado cuya gestión se desarrolla a nivel nacional. Tampoco se debe pensar que estos recursos, que para el año 2012 ascendieron a 1.500 millones de pesos chilenos, poco más de 2.4 millones de euros, son los únicos destinados por el Estado para el patrimonio cultural del país. A estas cifras debemos agregar, para el mismo año 2012, unos 49 millones de euros destinados a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y unos 36 millones de euros al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Además, si consideramos el presupuesto de otros ministerios y servicios públicos, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas, la Corporación Nacional Forestal, La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, etc., veremos que el gasto e inversión en conservación y gestión del patrimonio cultural y natural ha aumentado notoriamente en las últimas décadas.

A partir de 1996 se comenzó también a extender la presencia institucional del Consejo de Monumentos Nacionales en el territorio nacional. Ello a través de la creación paulatina de consejos asesores, a imagen del Consejo Nacional, de nivel comunal, provincial o regional, así como en el aumento de los visitantes especiales, manteniéndose el carácter ad honorem de todos los consejeros y visitantes que integraban la estructura institucional. Este crecimiento hacia las regiones fue paulatino, dependiendo tanto del interés de las propias regiones y sus autoridades, como también de las políticas y proyectos específicos en regiones. Hoy día el Consejo está presente en todas las regiones, aunque la figura de Consejos de Monumentos Regionales o Provinciales fue cambiada en el año 2006 por la de Coordinaciones Regionales Asesoras de Monumentos Nacionales, las cuales están a cargo de un coordinador regional.

En un comienzo hubo resistencia a este proceso de ciertos consejeros a nivel nacional, en atención al temor que significaba dejar ciertos asuntos a las autoridades locales, sea por su falta de experiencia en materias patrimoniales o porque los intereses en contra del patrimonio podían tener un mejor acceso a dichas autoridades. Si bien tales problemas son reales, con el transcurso del tiempo podemos asegurar que tal descentralización progresiva le otorgó mayor

poder al Consejo de Monumentos nacionales, entidad que en último término debía sancionar tales acuerdos tomados en regiones. Pero lo más importante fue el hecho real de acercar la gestión del patrimonio a la gente y sus autoridades locales, lo que motivó una mayor preocupación por identificar y conservar sus propios bienes culturales. En definitiva esta política significó una expansión y profundización del patrimonio donde la autoridad nacional estaba ausente y alejada de las sensibilidades locales.<sup>93</sup>



La comisión de patrimonio arqueológico a finales de los 90. De izquierda a derecha Ángel Cabeza, Victoria Castro, Diego Carabias, Eliana Durán, Luis Cornejo y Teresa Planella

La incorporación plena del patrimonio cultural, y del componente monumental en particular, como una de las variables a evaluar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, fue un logro extremadamente positivo, que marca un “antes” y “después” en la conservación patrimonial en Chile. Este hito implicó una nueva línea de trabajo para el Consejo de Monumentos Nacionales, que impuso a la institución una fuerte demanda y la colocó en medio de muchos conflictos ambientales, lo cual le dio una mayor visibilidad nacional y política.

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Consejo tuvo la posibilidad efectiva de velar por la conservación del patrimonio monumental en el contexto de la realización de grandes obras de infraestructura o de proyectos de gran envergadura. Es el caso, por ejemplo, de la protección y conservación del patrimonio arqueológico en el marco de la construcción de las nuevas líneas o

---

<sup>93</sup> Debe tenerse en cuenta que muchas de las observaciones anteriores reflejan la propia experiencia del autor de esta tesis en la administración de dicha entidad. Por cierto algunos podrán sostener que hay una opinión muy institucionalizada u oficialista. Otras investigaciones futuras deberán consultar a diversos actores individuales o institucionales, tanto públicos como privados, como también diferentes fuentes escritas, siendo importantes la prensa escrita como también los documentos que pueden encontrarse en las instituciones que forman parte del Consejo de Monumentos Nacionales.

extensiones del Metro en Santiago, de la instalación y operación de faenas mineras de gran envergadura, de obras viales, etc. Hubo casos en que los titulares de los proyectos solicitaron la ayuda del Consejo para salvaguardar el patrimonio afectado en el marco de su ejecución, debiendo realizar el Consejo las labores de salvataje o rescate arqueológico, a pesar de su escasez de recursos humanos para tal fin. Es el caso de proyectos de viviendas sociales o de colegios, con fuertes restricciones presupuestarias y alto impacto social.

Desde 1995 el Consejo debió participar como organismo con competencia ambiental. Durante ese año los proyectos evaluados a través de Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental fueron 12, en cambio en 2004 aumentaron a 237. A este total de se deben agregar además las respectivas addenda, informes de calificación ambiental y resoluciones de calificación ambiental, todos los cuales debían ser igualmente visados formalmente por el Consejo, lo que aumentó notablemente la carga de trabajo.

En cuanto a las declaraciones de monumentos nacionales, el trabajo previo se perfeccionó, incorporando a la comunidad, la opinión y participación del propietario, la consideración de aspectos de manejo, la mejor preparación de los antecedentes técnicos, entre otros. Naturalmente se mantuvo la conflictividad de muchas de estas declaraciones. Esto debido a que se ha mantenido el esquema de la carencia de apoyos e incentivos para la conservación de los monumentos, problemática estructural que está en el fondo del déficit que afecta a nuestro país en materia patrimonial y que es parte esencial de la deuda histórica que mantenemos con nuestro patrimonio protegido legalmente, aunque en los últimos años han aumentado los recursos disponibles para la restauración. No obstante ello, la protección y conservación patrimonial ha requerido de complejos procesos de negociación y de la búsqueda de fórmulas de armonización de los intereses en conflicto.

Un aspecto que debe destacarse en este período es la consulta previa a los propietarios de bienes patrimoniales antes de proceder a su declaración por decreto oficial. Si bien la legislación no obliga a la consulta ni menos a la aprobación por parte del dueño de un bien cultural respecto de la declaración, el Ministerio de Educación procedió a exigir la consulta debido a que en ciertos casos los afectados acudieron a los tribunales de justicia para impugnar la declaración oficial, porque afectaba su derecho a la propiedad y porque consideraban que la protección oficial afectaba el precio de mercado de sus propiedades.

Al respecto merecen destacarse dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia. La primera de comienzos de los 80 con motivo de la declaración de monumento histórico Bolsa de Comercio en Santiago. Es esa oportunidad el máximo tribunal estableció que la declaración de monumento sólo implicaba limitaciones al

ejercicio del derecho de propiedad basado en la función social de la propiedad por lo que no contrariaba el texto constitucional. El segundo fallo de la Corte Suprema, fue dictado el 2004 a raíz del monumento histórico Palacio Pereira, el cual cambió el criterio anterior, estableciendo que las restricciones establecidas por la Ley 17.288 implican una privación de los atributos esenciales del dominio por lo que serían contrarias a la Constitución (Ropert, R. 2006).

Los consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales no aceptaron fácilmente esta obligación ministerial, pero sin la opinión del propietario, fuera positiva o negativa, el Ministro de Educación no cursaba el decreto correspondiente, aunque este hubiera sido aprobado por unanimidad en el Consejo. En consecuencia, la secretaría de la institución se abocó al proceso de contacto a los propietarios afectados, fueran entidades públicas o privadas, y al proceso de convencimiento de los propietarios que se oponían o tenían dudas sobre los alcances de la legislación patrimonial.

En términos generales el proceso fue exitoso en la mayoría de los casos, lográndose un mayor compromiso por parte de los afectados. Con el tiempo el proceso se invirtió, siendo los propios propietarios quienes solicitaron crecientemente la declaración de monumento nacional, sea porque la valoraban en si y consideraban un honor gozar de tal distinción, o por los beneficios económicos comerciales que ella implicaba, esto último muy vinculado al uso turístico de tales bienes, o porque sentían que la declaración era la mejor herramienta legal de que disponían para proteger sus propiedades, apetecidas por las empresas inmobiliarias que buscaban la densificación urbana de los barrios históricos. El suscrito en un artículo titulado “La Rebelión de los Barrios” se expone con más detalles este proceso por el cual distintas comunidades locales se han opuesto a la densificación de sus barrios o al cambio de uso del suelo para actividades comerciales que consideran nocivas para su calidad de vida tradicional (Cabeza, A. 2009).

Grandes esfuerzos se realizaron en dicho período en materia de elaboración de pautas, guías o normativas, que faciliten la conservación de los monumentos nacionales por parte de sus propietarios y de terceros, a través del establecimiento de lineamientos claros sobre el carácter de las intervenciones adecuadas a realizar en ellas. La primera prioridad fueron los conjuntos urbanos protegidos como zonas típicas, poniéndose énfasis en la elaboración de Instructivos de Intervención para ellas, idea que se venía gestando algunos años atrás. Poco tiempo después se elaboraron las “*Normas sobre Zonas Típicas o Pintorescas*” (2001), de modo de orientar tanto la formulación de las solicitudes de declaración como la elaboración de los Instructivos, tarea que puede realizar tanto el Consejo como las Municipalidades, o ambos en conjunto, como es el caso de los que se realizaron en la comuna de Santiago.

Después, se acometió la tarea de elaborar Planes de Manejo para determinados sitios patrimoniales, emitiéndose el documento *“Pautas para elaborar Planes de Manejo de los Santuarios de la Naturaleza”* (2003). Posteriormente el Consejo abordó directamente o en colaboración con otras entidades, la realización de planes de manejo para los monumentos, en particular para los que postulaban ser parte de la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. El primero realizado fue la *“Guía de Manejo de las Oficinas Salitreras Humberstone y Santa Laura”* (2004), y posteriormente el del Campamento Sewell. En otras áreas, se normó también lo relativo a procedimientos asociados al Registro de los Museos y Colecciones y a la autorización de los préstamos de colecciones protegidas, tanto dentro del país como al extranjero: *“Pauta para el Registro de los Museos de Chile”* del 2002 y *“Pauta sobre los préstamos de colecciones en el marco de la Ley de Monumentos Nacionales”* de 2003.

Paulatinamente tuvo lugar una ampliación de los ámbitos de actividad de la institución en atribuciones que estaban establecidas en la ley, pero que antes no habían podido ser abordadas. Es el caso, por ejemplo, del catastro de los monumentos públicos, del registro de los museos de Chile, como también de las acciones para minimizar el tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural, área muy deficitaria en nuestro país, que se enfrentó gracias al trabajo bilateral con los países vecinos, en coordinación con las instituciones nacionales con injerencia en el tema como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio de Aduanas de Chile y que, posteriormente, motivó una modificación de la Ley de Monumentos Nacionales en lo relativo a sanciones y a lo penal en el 2005.

Al mismo tiempo, el Consejo realizó una permanente labor de reflexión sobre la institucionalidad del patrimonio monumental, formulando diversas propuestas para su mejoramiento. Ya a fines de la década de 1970 y en la década de 1980 se habían formado comisiones que formularon propuestas para el perfeccionamiento de la Ley de Monumentos Nacionales. Esta labor continuó en la década de 1990 en un nuevo contexto. Tras un largo proceso, que incorporó consultas y reuniones con expertos nacionales y extranjeros del área, se elaboró un *“Anteproyecto de Ley sobre la Protección y Fomento del Patrimonio Cultural de la Nación”* (1997). Este anteproyecto, si bien fue entregado al Gobierno, no prosperó porque la autoridad le dio preferencia a la formulación del proyecto que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, dejando la discusión sobre la institucionalidad patrimonial para después.

Por otra parte, en 1998, y luego de más de un año de trabajo interinstitucional, se formuló una *“Propuesta de Política Nacional de Protección, Conservación y Desarrollo del Patrimonio Cultural”*. También ese mismo año el Consejo publicó un estudio sobre los aspectos financieros de la legislación sobre monumentos nacionales en Chile en la cual se analizó la situación de la aplicación de

incentivos a la conservación del patrimonio y se recomendaron algunas proposiciones de financiamiento directo e indirecto (Stark, C. 1998).

En este mismo sentido, el Consejo también apoyó diversas iniciativas orientadas a materializar beneficios dirigidos al sector privado, de manera de promover su aporte a la conservación de los monumentos nacionales. Es el caso del estudio y las gestiones realizadas para aclarar la cuestión concerniente a la exención del impuesto territorial para los monumentos históricos. En la misma línea se realizó un estudio junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tendiente a establecer un sistema de certificados de constructibilidad para compensar la pérdida de potencial constructivo en los inmuebles protegidos oficialmente. Lo propio cabe señalar de la reforma a la *“Ley de Donaciones con Fines Culturales”* que permitió allegar importantes recursos a la conservación y difusión del patrimonio.

En 1997 la secretaría del Consejo propuso una estrategia para motivar y lograr un compromiso social y político más amplio que hiciera posible realizar un esfuerzo sostenido, participativo, interinstitucional y profundo para la conservación de nuestros monumentos nacionales más preciados. Esta estrategia tuvo como base la *“Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”*, aprobada por la UNESCO en 1972, y que había sido ratificada por nuestro país en 1980. Este instrumento internacional, junto con comprometer a los Estados a proteger, conservar y difundir su patrimonio cultural y natural, establece la Lista del Patrimonio Mundial, que puede ser integrada por aquellos bienes que tienen un valor universal excepcional. Hasta ese año Chile tenía un solo sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, el Parque Nacional Rapa Nui, que fue incorporado en 1995, gracias a la gestión de la Corporación Nacional Forestal. La elaboración de este expediente estuvo coordinada por el arqueólogo Ángel Cabeza y el ingeniero forestal Carlos Weber.



Iglesia del norte de Chile: Chiu-Chiu



Iglesia del Altiplano: Isluga. Fotos de A. Cabeza





San Pedro de Atacama



Terrazas de Ayquina y Caspana



Oficina Salitrera de Santa Laura



Oficina Salitrera de Humberstone



Valparaíso  
Fotos A. Cabeza



Santuario Inca de Altura Cerro El Plomo



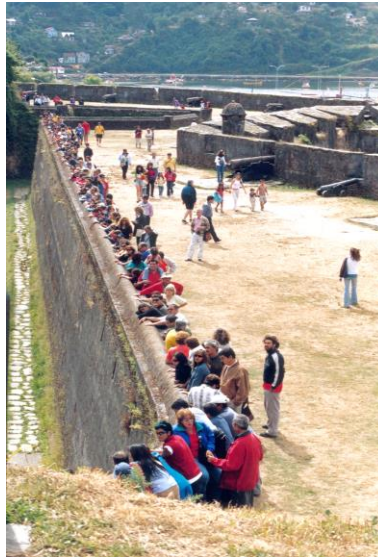
Red vial incaica



Ciudad minera de Sewell



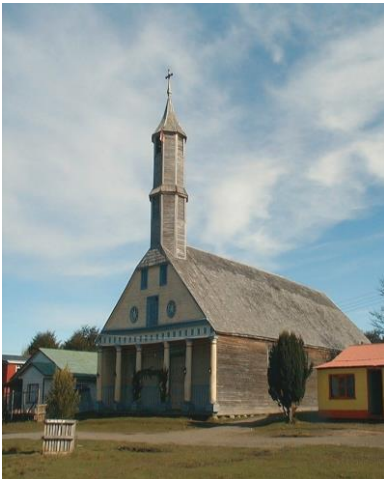
Viaducto del Malleco



Fortificaciones de Valdivia



Cuevas de Palli Aike y Fell



Iglesias de Chiloé. Fotos Archivo Consejo de Monumentos Nacionales





Anakena, Parque Nacional Rapa Nui de Isla de Pascua. Foto A. Cabeza

El Consejo se trazó un programa del patrimonio mundial en Chile, cuyos hitos fueron la inscripción de la lista tentativa de los bienes culturales nacionales a postular en UNESCO en 1998, la inscripción de las Iglesias de Chiloé, objetivo alcanzado el año 2000, la de un sector del Área Histórica de Valparaíso en 2003, las Oficinas Salitreras Humberstone y Santa Laura en 2005 y el Campamento Sewell en 2006. Los resultados de este programa superaron las expectativas iniciales, por cuanto, efectivamente, la postulación y la declaración de varios monumentos nacionales como Sitios del Patrimonio Mundial resultaron ser alicientes poderosos para su protección, conservación y puesta en valor (Consejo de Monumentos Nacionales, 2000).

Vinculado a lo anterior, el 2002 el Gobierno de Chile decidió presentar la candidatura de Chile para ser parte del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, entidad encargada de la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, que está integrada por 21 países elegidos por grupos regionales. La elección de nuestro país se hizo efectiva el año 2003, siendo el suscrito el representante técnico de Chile ante dicho organismo, adquiriendo el país una responsabilidad en este ámbito que nunca antes tuvo. El Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos debieron asumir entonces una labor considerable para responder a ese compromiso en las reuniones anuales de dicho organismo por el período por el cual fue elegido.

Otro aliciente muy poderoso para la promoción y difusión de nuestra herencia cultural lo ha constituido el *“Día del Patrimonio Cultural”*. Este evento anual fue Instituido en 1999, gracias al apoyo del gobierno del Presidente Frei, pero cobró su relieve y su carácter actual a partir del 2000, a instancias del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos. A lo largo de los años esta celebración ha adquirido un carácter de tradición nacional, fuertemente posicionada en la comunidad, participando en ella no solo las grandes ciudades del país, sino también localidades pequeñas de manera creciente. Esta actividad es fruto de un trabajo

que congrega tanto instituciones públicas como privadas, universidades y todo tipo de comunidades, correspondiendo al Consejo de Monumentos Nacionales la coordinación de la celebración. Es importante recordar aquí que esta idea replicó la existente en otros países y fue adaptada a la realidad chilena, teniendo en cuenta la experiencia de la ciudad de Montevideo.



Día del Patrimonio: Palacio de La Moneda  
Fotos A. Cabeza



Día del Patrimonio: Palacio de La Moneda.

El Día del Patrimonio Cultural tiene una amplia aceptación ciudadana, que es notable en la cantidad de gente que visita los monumentos, participando personas de todas las edades y grupos sociales. Durante los últimos años se ha hecho además un esfuerzo especial para que participen los grupos más postergados: ancianos, niños en riesgo social y, más recientemente, discapacitados. La celebración, que se realiza el último domingo de cada mes de mayo, contempla diversas actividades en todo el país; enarbolando la bandera nacional en los edificios y sitios patrimoniales; ceremonias oficiales de nivel nacional, regional, provincial y comunal; otorgamiento de los premios de conservación del patrimonio, que empezaron a entregarse como parte de la celebración; actividades especiales de promoción y difusión en bibliotecas, archivos y museos, así como en centros culturales de diverso tipo; reforzamiento de los contenidos de patrimonio cultural en la educación; un programa de apertura de edificios patrimoniales, estén o no declarados como monumentos nacionales, tanto en Santiago como en otras ciudades del país, junto con actividades de extensión cultural y artística en el espacio público. Si en un comienzo de esta festividad se logró la participación de unas 40.000 personas, en los años siguientes el número aumentó, llegando a la cifra de 500.000 personas en el 2015.

Otra iniciativa relacionada con el Día del Patrimonio fue la organización de los “*Voluntarios por el Patrimonio*”, programa que responde al llamado realizado por UNESCO a través del Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, denominado *Nuestra Diversidad Creativa*. Se trata de un grupo organizado de

estudiantes, con un perfil determinado, que recibe capacitación y que es coordinado por la Secretaría del Consejo de Monumentos Nacionales.

Dentro del ámbito de la difusión y de la promoción, es de destacar que desde 1997 el Consejo de Monumentos Nacionales cuenta con su propia página web ([www.monumentos.cl](http://www.monumentos.cl)), instrumento de consulta que ha resultado de gran utilidad, tanto para el público escolar como para especialistas, consultores, profesionales del sector público y privado e interesados del mundo de la cultura en general. Por otra parte, desde 1996 el Consejo ha publicado documentos de trabajo y libros. Cabe señalar que si antes de ese año el Consejo sólo había publicado tres impresos, desde entonces se han publicado más de 90 números de la serie *“Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales”*, unos 15 libros y gran cantidad de material de difusión tales como afiches, postales y folletos.

Un complemento importante en el área de difusión fueron las exposiciones, realizadas periódicamente en dos espacios: el Aeropuerto Internacional de Santiago y en la sala de exhibiciones del Metro Estación Plaza de Armas de Santiago. También se realizaron exposiciones en regiones y en el extranjero, como las de Italia, España y Francia dedicadas a la cultura Rapa Nui, en Panamá sobre el patrimonio de Chile y otra en el Museo del Cairo, dedicada a la Cultura Chinchorro y sus momias de más de 5.000 años de antigüedad.

Por otra parte, la organización y realización de seminarios, como una forma de difundir los valores del patrimonio cultural y generar conciencia, ha sido una actividad creciente en el Consejo. Entre ellos debemos destacar: *“Encuentro del Patrimonio Cultural del Mercosur, Chiloé, 13-18 de noviembre de 1998”*; *“Seminario Internacional Conservación y Revitalización de la ciudad - puerto de Valparaíso – Chile, Valparaíso, 7 - 11 de octubre 2002”*; *“Seminario Internacional sobre Patrimonio Mundial, Valparaíso y Santiago, agosto de 2003”*; *“Seminario Turismo: Sitios Patrimoniales, Santiago, 13 y 14 de octubre 2003”*; *“Seminario-Taller para la Conservación y Manejo de las Oficinas Salitreras Humberstone y Santa Laura como Sitio del Patrimonio Mundial, Iquique, 2 - 4 de diciembre 2003”*; *“Seminario Conservación del Campamento Sewell, Campamento Sewell, 9 de diciembre 2003”*; *Seminario Turismo: Rutas Patrimoniales, Santiago, 14 y 15 de octubre de 2004”*; *“Seminario de Patrimonio Cultural Indígena, Santiago, 29 de noviembre de 2004”*; *“Cuarta Reunión de Expertos del proceso de nominación del Qhapaq Ñan como Sitio del Patrimonio Mundial ante la UNESCO, Santiago, 6 - 10 de noviembre de 2004”*; *“Seminario Internacional Paisajes Culturales en Chile: un tema pendiente, Santiago, noviembre de 2004”*; *“Reunión Internacional Las Fortificaciones Americanas del Pacífico: proyecto de nominación transnacional a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Valdivia, 19 - 21 de enero de 2005”*, entre otras reuniones realizadas en los últimos años.

Hasta entonces el Consejo de Monumentos Nacionales nunca había tenido una sede propia para sus oficinas, funcionando por décadas en la Biblioteca Nacional. El crecimiento en personal de la entidad determinó la búsqueda de un inmueble propio. En el 2000, el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de una permuta, adquirió el inmueble denominado “*Casa de las Gárgolas*”, de gran valor patrimonial, ubicado en Av. Vicuña Mackenna 84, Providencia, Santiago, que entregó al Ministerio de Educación para sede del Consejo. Durante los años siguientes se realizaron los trabajos de restauración y habilitación de tal inmueble.

Es necesario resaltar en este período, la atención dada a la protección de bienes patrimoniales que por distintas razones no habían sido motivo de protección o habían sido escasamente abordados en los años anteriores. Tal es el caso del patrimonio indígena, particularmente el vinculado a los sitios sagrados, los lugares de ceremonias y los cementerios históricos y actuales de dichos pueblos. Previamente los temas patrimoniales indígenas habían sido tratados fundamentalmente desde el punto de vista arqueológico. Al respecto se logró firmar un convenio de cooperación con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y desarrollar varios proyectos conjuntos, que motivaron la declaración de los primeros sitios sagrados indígenas como monumentos históricos en Chile. Esto implicó generar acuerdos con las comunidades indígenas, algunas de las cuales eran reticentes a participar en tales procesos de protección patrimonial, porque veían en las declaraciones de monumentos nacionales una nueva forma de expropiación de sus bienes por parte del Estado y la sociedad nacional. Con el tiempo, varias de estas comunidades observaron los beneficios de esta protección legal frente a las empresas privadas o del propio Estado. Por cierto hubo situaciones complejas, como la construcción de represas, pero incluso en estos casos, la legislación logró imponer ciertas mitigaciones y compensaciones relacionadas al patrimonio que años antes habrían sido imposibles de lograr.

En el mismo sentido se continuó con la protección del patrimonio industrial iniciado años atrás con las oficinas salitreras del norte de Chile, incorporándose como monumentos nacionales fábricas, bodegas, frigoríficos y campamentos mineros. Lo propio se realizó con el patrimonio ferroviario incluyendo estaciones, casas de máquinas, maestranzas, locomotoras, vagones y variado material rodante. En cuanto al patrimonio arquitectónico, si bien se continuó protegiendo edificios aislados, se privilegió los conjuntos urbanos y rurales en la categoría de zonas típicas, ampliándose además las existentes, teniendo en la mayoría de los casos y de manera creciente, el apoyo de los vecinos residentes de tales áreas.

Por otra parte se inició un programa de protección de los sitios patrimoniales asociados a los derechos humanos, en relación a los hechos ocurridos durante el Gobierno Militar, en especial los lugares donde fueron asesinados y torturados quienes fueron perseguidos por dicho régimen. Afortunadamente se logró avanzar



en la protección de los Hornos de Lonquén (1996) como monumento histórico en 1996, continuando con otras declaraciones de sitios similares como: Sitio Histórico ubicado en Av. José Domingo Cañas N° 1367 en el 2002; el Estadio Nacional en el 2003; el Parque por la Paz Villa Grimaldi en el 2004; el sitio Nido 20 en el 2005; el inmueble de Londres 38 de 2005 y el Patio 29 del Cementerio General en el 2006; y más recientemente, el 2010, el campo de concentración de prisioneros políticos de la Isla Dawson, en el Estrecho de Magallanes (Consejo de Monumentos Nacionales, 2003; Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, 2005).



Hornos de Lonquén



Estadio Nacional de Santiago.

Fotos Archivo Consejo de Monumentos Nacionales

También se dio especial atención al patrimonio subacuático, lográndose la declaración de todos los bienes situados en aguas territoriales que tuvieran una antigüedad superior a los cincuenta años antes del presente, evitando así la declaración caso a caso, ya que se desconocía la ubicación exacta de la mayoría de los restos náuticos, siendo muchos de éstos objeto de pillaje y un comercio internacional ilegal. De igual manera aumentó la protección del patrimonio arqueológico, continuando con un trabajo iniciado décadas atrás.

Por otra parte comenzó a ser un tema de permanente interés la situación del patrimonio inmaterial o intangible, el cual de manera explícita no estaba tratado en la legislación patrimonial chilena hasta la promulgación de la ley que creaba el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Al respecto, el Consejo de Monumentos Nacionales sólo podía declarar como monumentos nacionales el soporte físico de tales manifestaciones culturales. A pesar de la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional de la Convención Mundial de UNESCO sobre el Patrimonio Inmaterial, queda pendiente la figura de una categoría precisa de monumento inmaterial, aunque existe en el Congreso Nacional una propuesta al respecto.

En la cooperación internacional es importante destacar el apoyo de varias instituciones como UNESCO, Getty Conservation Institute y de varios países como Japón, España, Francia, Italia y Estados Unidos, los que aportaron recursos para proyectos específicos de intervención en monumentos o en la capacitación del personal profesional.

Como hemos visto, en este período tuvo lugar una rápida ampliación de los ámbitos de acción del Consejo, pero también un crecimiento exponencial de los requerimientos a la institución por parte de la sociedad, para poder prestar un mejor servicio, el cual está constreñido por su permanente déficit en personal y recursos. Por otra parte, el aumento de la conciencia sobre el valor del patrimonio, incidió en un crecimiento de las demandas sociales para otorgar protección oficial a diversos bienes culturales y sitios patrimoniales. El aumento del número de monumentos declarados y la mayor comprensión de la protección oficial de que gozan los monumentos que tienen tal condición por el solo ministerio de la ley, incidió en un crecimiento del número de solicitudes de declaración, de autorización para su intervención, así como de las denuncias por daños a tales bienes.

Las iniciativas que vinculaban al Consejo de Monumentos Nacionales con la comunidad e instituciones públicas y privadas de diverso orden, en proyectos de protección, conservación o promoción de bienes patrimoniales también aumentaron considerablemente. El establecimiento de alianzas institucionales y la relación directa con la comunidad, no sólo hicieron posible acometer proyectos que el Consejo no podría abordar de manera individual por falta de recursos humanos y financieros, sino además fueron la manera correcta de sustentar estas iniciativas en el largo plazo y darles su pleno sentido social.

Concluyendo al respecto, podemos decir que este período permitió consolidar al Consejo de Monumentos Nacionales como un servicio público del patrimonio monumental en Chile, se logró conformar una secretaría ejecutiva con un grupo de profesionales especializados en el patrimonio, disponer de un presupuesto fiscal que aumentó cada año, aunque siempre insuficiente a las tareas del organismo, y tener una presencia territorial que nunca antes tuvo.

En este período hubo alrededor de 350 declaraciones de monumentos nacionales en las diversas categorías, dándosele mayor énfasis a aquellas que abarcaban mayor superficie y número de inmuebles. Al mismo tiempo se logró posicionar al patrimonio de Chile a nivel mundial al poder inscribir cinco nuevos sitios en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así también se avanzó en los aspectos normativos y de gestión, diseñándose instructivos de intervención para las zonas típicas y la realización de los primeros planes maestros o de manejo de algunos monumentos emblemáticos. La gestión vinculada a los monumentos conmemorativos siguió siendo importante, especialmente en lo relacionado al

emplazamiento de éstos, siendo relevantes los casos de los monumentos a los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, y del senador Jaime Guzmán, situaciones en que el poder ejecutivo y el poder legislativo participaron activamente, demostrando una vez el interés principal del Estado en estas materias. No obstante lo anterior, no se logró avanzar en el perfeccionamiento de la legislación, salvo modificaciones parciales a la ley de monumentos nacionales, quedando pendiente obtener medidas económicas y financieras en favor de la conservación del patrimonio protegido en manos de particulares, situación que ha sido una demanda permanente por parte de los particulares.

En lo institucional, el esfuerzo dado en este período se centró en crear una institucionalidad cultural más poderosa que la existente, lográndose crear por ley el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, después de una prolongada tarea de la Comisión Presidencial de Cultura creada por el Presidente Ricardo Lagos, quedando pendiente la relacionada con el patrimonio, para la administración de la Presidenta Bachelet, en cuyo gobierno tampoco se pudo avanzar al respecto, siendo este tema uno de los compromisos adoptados por el Presidente Sebastián Piñera, quien presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional. En estos dos períodos presidenciales los secretarios ejecutivos del Consejo de Monumentos Nacionales fueron los Sres. Oscar Acuña y Emilio de la Cerda, respectivamente. La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) estuvo a cargo de la Sra. Clara Budnik entre el 2000 y 2006, Nívea Palma entre el 2006 y 2010, y Magdalena Krebs entre el 2010 hasta el 2014.

#### **4.6. La Legislación de Vivienda y Urbanismo y su vinculación con el Patrimonio**

La legislación sobre construcciones en Chile tiene su origen en las disposiciones coloniales que establecieron las Leyes de Indias y los cabildos, en cada caso a través de los permisos de construcción que otorgaban. Estas facultades administrativas fueron heredadas por los municipios republicanos. Como una ley específica nacional la norma más antigua es el Decreto con Fuerza de Ley N° 345 de 1931. Este decreto es consecuencia directa del terremoto que asoló la ciudad de Talca en 1928 y de la urgencia de regular las futuras construcciones. Estas normas fueron complementadas después con el Decreto con Fuerza de Ley N° 224 de 1953 sobre construcciones. La memoria de los terremotos en el Chile colonial y republicano está marcada con dolor en la historia nacional y, por cierto, influyeron en el diseño de reglas más estrictas para minimizar el impacto de tales desastres en vidas humanas y destrucción material. Esta realidad también condicionó la formación de arquitectos, constructores y la visión de las autoridades en tales materias, siendo los antecedentes de la actual legislación sobre construcciones, que se dictó mediante Decreto Supremo N° 458 de 1976, y que es

conocida como la “*Ley General de Urbanismo y Construcciones*”, la cual fue reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 47 de 1992.

La primera observación que debemos sobre estas normas es que siempre han sido iniciativas del poder ejecutivo y no de un trabajo legislativo a través del Congreso Nacional, salvo la actual legislación que al respecto se está estudiando. Por otra parte, el tratamiento del patrimonio en esta legislación ha sido marginal, salvo aclaraciones y definiciones establecidas en las disposiciones de su reglamento de 1992 y posteriormente.

La única referencia que hace la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto del patrimonio construido, en su sentido cultural y de conservación patrimonial, está en su artículo 60, inciso 2, que expresa:

*“Igualmente, el Plan Regulador Comunal señalará los inmuebles o zonas de conservación histórica, en cuyo caso edificios existentes no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente.”*

Esta norma permite que los municipios, a través de los planes reguladores, identifiquen zonas de conservación histórica o inmuebles de conservación históricos, cuyas intervenciones quedan sujetas a la autorización previa del Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo que corresponda a cada región administrativa del país. De acuerdo al texto legal, la autorización sólo se requiere para obras de demolición y refacción del inmueble y no, por ejemplo, en caso que se ejecute una obra nueva en una zona de conservación histórica.

En este punto, creemos preciso señalar que la protección del patrimonio cultural a través de los planes reguladores, por la vía de declarar estas dos categorías de protección, sólo se ha desarrollado en Chile a partir de la década de los 90. Explica lo anterior el largo proceso de elaboración y modificación de los planes reguladores y la ausencia de especialistas en patrimonio en la mayoría de las municipalidades. También es relevante mencionar el hecho que esta legislación de 1976 omitió cualquier referencia a la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales de 1970, creando ciertas confusiones y conflictos institucionales entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Consejo de Monumentos Nacionales y los propios municipios, cuestión que se ha ido resolviendo a través del tiempo y a través de la última modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Sin embargo subsisten los conflictos de poder entre las instituciones respecto de quien tiene la última palabra.

Los principales aspectos patrimoniales de estas normas dicen relación con la incorporación de diversas definiciones de relevancia patrimonial en el artículo 1.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en la precisión

de los contenidos de los instrumentos de planificación territorial, en los certificados de informaciones previas que deben identificar los inmuebles declarados monumento nacional, y en la clarificación de los procedimientos para obtener los permisos de restauración, remodelación y demolición de inmuebles declarados monumentos nacionales y en los inmuebles de conservación histórica que estén ubicados en zonas de conservación histórica. Así por ejemplo se logró la definición operativa de los siguientes conceptos en tal ordenanza:

- *“Inmueble de Conservación Histórica: el individualizado como tal en un instrumento de Planificación Territorial dadas sus características arquitectónicas, históricas o de valor cultural, que no cuenta con declaratoria de Monumento Nacional.”*
- *“Zona de Conservación Histórica: área o sector individualizado como tal en un Instrumento de Planificación Territorial, conformado por uno o más conjuntos de inmuebles de valor urbanístico o cultural cuya asociación genera condiciones que se quieren preservar”.*
- *“Monumento Nacional: edificio, conjunto o área declarada como tal conforme a la Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales, mediante decreto del Ministerio de Educación.”*
- *“Fachada: cualquiera de los parámetros exteriores de un edificio.”*
- *“Rehabilitación de un inmueble: recuperación o puesta en valor de una construcción, mediante obras y modificaciones que, sin desvirtuar sus condiciones originales, mejoran sus cualidades funcionales, estéticas, estructurales, de habitabilidad o de confort.”*
- *“Remodelación de un inmueble: modificación interior o exterior de una construcción para adecuarla a nuevas condiciones de uso mediante transformación, sustracción o adición de elementos constructivos o estructurales, conservando los aspectos sustanciales o las fachadas del inmueble original.”*
- *“Reparación: renovación de cualquier parte de una obra que comprenda un elemento importante para dejarla en condiciones iguales o mejores que las primitivas, como la sustitución de cimientos, de un muro soportante, de un pilar, cambio de la techumbre.”*
- *“Restauración de un Inmueble: trabajo destinado a restituir o devolver una edificación, generalmente de carácter patrimonial cultural, a su estado original, o a la conformación que tenía en una época determinada.”*

La primera conclusión de las definiciones citadas, se refiere a que la normativa trató de no superponer las diversas categorías de protección establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que en los planes reguladores no se debieran definir inmuebles de conservación histórica si ya cuentan con la

declaración de monumento nacional. Esta materia está tratada expresamente en la Circular N° 485/07 (DDU N° 186) que señala:

*“...siendo la Ley de Monumentos Nacionales una legislación específica, tiene primacía sobre la legislación general. Por ello los inmuebles que a la fecha de promulgarse un Plan Regulador Comunal o sus modificaciones, se encuentren emplazados en la zona a normar y tengan la condición de Monumentos Nacionales, no deben declararse a su vez como Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica, puesto que ello llevaría a aumentar innecesariamente una protección que ya se encuentra sancionada oficialmente.”*

Resulta relevante destacar que la circular citada, interpretando el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, establece que el Plan Regulador Comunal señalará las zonas de conservación histórica y los inmuebles históricos y reconocerá las categorías definidas en la Ley 17.288, no correspondiendo otras denominaciones, toda vez que sólo se encuentran legalmente protegidos los que expresamente se señalan en los cuerpos legales citados.

Una cuestión siempre compleja de resolver es qué bienes deben ser protegidos como monumento nacional y cuáles como inmuebles o zonas de conservación histórica. En este sentido parece primar la idea de que las categorías de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, deben circunscribirse a aquellos bienes de alcance nacional y de gran relevancia cultural, y las categorías de la Ley General de Urbanismo y Construcciones a los entornos de éstos últimos y a los bienes de relevancia local. De todas formas, muchas veces los límites de unos y otros son muy difusos lo que fomenta superposiciones y, eventualmente contradicciones entre las normas y quienes las aplican.

Por otra parte, a pesar que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene en su seno un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha existido en diversos momentos un celo institucional en ambas entidades para disminuir o desconocer el rol que cada una tiene en estas materias. Incluso durante la década de los 90 algunos plantearon que la Ley General de Urbanismo y Construcciones había derogado de manera tácita, algunas normas de la Ley de Monumentos Nacionales de 1970, lo que fue resuelto mediante el Dictamen N° 8.293 del 30 de marzo de año 2.000 de la Contraloría General de la República que indicó:

*“La interpretación armónica de ambos cuerpos legales permite sostener que entre las normas derogadas, de un modo general, y no especial, por el artículo 169 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no están incluidas las reglas contenidas en la Ley N° 17.288, que atribuyen una*



*competencia especial al Consejo de Monumentos Nacionales.” (Ropert, R. 2006:126).*

Esta resolución de la Contraloría General de la República resolvió este conflicto manteniendo la premisa jurídica de que prima lo específico por sobre lo general. Sin embargo, con el tiempo, otros frentes de conflictos se abrieron entre ambas legislaciones y sus respectivas instituciones, como por ejemplo cuando se aprobó la posibilidad de otorgar cierto tipo de incentivos a los bienes declarados como inmuebles de conservación, lo que generó una desventaja para aquellos que se declaraban por la Ley de Monumentos Nacionales. Afortunadamente esta desigualdad fue resuelta por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo entregando las mismas ventajas a las zonas típicas, por lo menos para las áreas en que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregaba ciertos beneficios.

Podemos plantear que estos conflictos más bien tenían su origen en qué autoridad política conseguía los recursos y entregaba los beneficios o subsidios a los propietarios, lo cual por cierto significaba una mayor visibilidad política y aceptación ciudadana a la institución que los entregaba y a sus respectivas autoridades. Pero también se debe reconocer que estos instrumentos de planificación urbana y conservación patrimonial deben ser aplicados en conjunto y de manera coordinada por el Estado en sus distintos niveles, evitando la competencia cuando instituciones diferentes tienen propósitos similares, cuestión que nuestra legislación no ha resuelto de manera coherente y a favor del patrimonio, quedando la solución de estos problemas a las autoridades de turno de cada institución y del Gobierno. Esta situación se ha vuelto más compleja cuando han existido mayores recursos económicos destinados a la conservación y restauración mediante créditos internacionales, los cuales han sido ejecutados por otros ministerios, como es el caso del Crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de Puesta en Valor del Patrimonio, administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

No obstante lo anterior, el ordenamiento territorial urbano y rural en el cual se reconozcan todos los valores patrimoniales, tanto naturales como culturales, es la clave para abordar este problema. En este sentido la planificación urbana es definida por el artículo 27 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones como *“... el proceso necesario para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de las políticas nacionales, regionales y comunales de desarrollo socio-económico.”*

En dicha legislación se puede apreciar la voluntad de proporcionar mayor autonomía a las comunas para la toma de sus decisiones territoriales. Este enfoque descentralizado se ha plasmado también en otros cuerpos legales atingentes, tales como la Ley Orgánica de Municipalidades y de Gobierno y

Administración Regional, a través de las cuales se establece que las regiones y comunas a través de la normativa urbana deben propender a un crecimiento sustentable.

Este proceso de planificación urbana tiene tres niveles de acción: regional, intercomunal y comunal. Para cada uno de estos niveles se establecen diversos instrumentos: el Plan Regional de Desarrollo Urbano que tiene por objeto fijar los roles de los centros urbanos, sus áreas de influencia recíproca, relaciones gravitacionales, metas de crecimiento, etc.; el Plan Regulador Intercomunal o Plan Regulador Metropolitano, que es un instrumento normativo y tiene por objeto orientar y regular el desarrollo urbano de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana; y el Plan Regulador Comunal, que es un instrumento regulatorio sobre las construcciones, el uso del suelo, la zonificación del territorio, la subdivisión predial, la densidad habitacional, las alturas, los trazados viales y la protección de inmuebles o los lugares, que por su naturaleza y ubicación, no sean edificables, y con el cual se pretende promover el desarrollo armónico del territorio comunal. Adicionalmente, esta legislación establece la posibilidad de elaborar Planes Seccionales, para los casos en que la aplicación del Plan Regulador Comunal requiera estudios más detallados, por ejemplo, para fijar con exactitud los trazados y anchos de calle, la zonificación y el uso de suelo<sup>94</sup>.

#### **4.7. La Legislación del Patrimonio Natural y de las Áreas Silvestres Protegidas y su vinculación con el Patrimonio Cultural**

Como hemos señalado antes, tanto en Chile como en la mayoría de los países, salvo algunas excepciones, existe una separación legal e institucional en el tratamiento del patrimonio natural y cultural. No obstante ello, la realidad del patrimonio en determinados contextos territoriales no puede dividirse de manera tan arbitraria, y esta situación se da particularmente en los ambientes naturales o poco intervenidos por los seres humanos, algunos de los cuales han sido protegidos por legislaciones especiales, creándose categorías de manejo como los parques nacionales y otras áreas protegidas.

La protección y conservación de los recursos naturales tienen una larga historia en el país. Los ambientes naturales de diversos lugares de Chile han sufrido una dilatada explotación desde hace siglos, incluso antes de la conquista española. Tal

---

<sup>94</sup> Un buen resumen de la evolución de las políticas públicas en torno a los temas de urbanismo, vivienda, arquitectura y ciudad se encuentra en la Política Nacional de Desarrollo Urbano elaborada el 2014 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Mayor información en: <http://cndu.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/L4-Politica-Nacional-Urbana.pdf>. Una visión más crítica de estos procesos la encontramos en los diversos artículos de la Revista del Colegio de Arquitectos de Chile.

depredación no ha pasado inadvertida y en cada período varios profesionales visionarios clamaron por contener el uso abusivo de tales recursos, señalando el grave daño que se provocaba a las generaciones venideras, como lo hicieron en Chile el francés Claudio Gay a mediados del siglo XIX y por el alemán Federico Albert a finales del siglo XIX y comienzos del XX, ambos naturalistas contratados por el Gobierno de Chile que dejaron una positiva huella con sus estudios y trabajos.

Hoy día, cada vez cobra mayor importancia en el país los temas relacionados con conservación de la diversidad biológica, controlar la contaminación y la necesidad urgente de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Sin embargo tal discusión no es reciente. Desde el siglo XIX, e incluso durante la Colonia, la cuestión fue debatida, quedando algunas iniciativas de regulación y protección plasmadas en leyes y decretos. Al estudiar dichas legislaciones se pueden analizar los conceptos utilizados, las prioridades que tenía la sociedad y los conflictos de cada época. Es así como salta a la vista la larga disputa entre quienes se dedicaban a la minería y quienes trabajaban en la agricultura, como también entre el Estado y los propietarios de las haciendas. Lo anterior explica el largo y difícil proceso para lograr legislaciones que protejan los recursos naturales y el medio ambiente que Chile se ha dado desde el siglo XIX (Cabeza, A. 1988).

Cuando los conquistadores españoles se asentaron en Chile durante el siglo XVI, encontraron un país cuyos recursos naturales parecían inagotables. La población indígena, distribuida principalmente en el Valle Central y Sur del país, no alteró sustancialmente los ambientes en los cuales estaba emplazada, debido principalmente por su distribución, cantidad y tipo de actividad económica, donde la agricultura era una práctica incipiente. La llegada de los españoles provocó una ruptura de la relación que los pueblos indígenas tenían con su entorno. La nueva orientación económica, dirigida primero a la explotación del oro y después al despeje de los terrenos boscosos para la explotación ganadera y agrícola, además del uso de la madera para la construcción y las fortificaciones, provocó cambios radicales en determinados lugares, especialmente en los alrededores de las primeras ciudades, fuertes y cerca de las faenas mineras.

De esta manera se ejerció una fuerte presión extractiva de los bosques de Chile Central, del Norte Chico y posteriormente del Sur de Chile, especialmente durante los siglos XVIII, XIX y las primeras décadas del siglo XX. No obstante la deforestación de los bosques nativos durante la colonia, existían normas de protección de los bosques en la legislación española aplicable a América, residiendo su tuición y vigilancia en los cabildos de las ciudades fundadas. Ejemplo de esto son las numerosas solicitudes y permisos otorgados para cortar árboles que fueron dados por el Cabildo de Santiago durante el siglo XVI:

*“...Este día presento una petición Bartolomé Flores, en que pedía licencia para cortar quinientos palos en el monte, para hacer un cuarto de casa. E los dichos señores dijeron que le daban licencia para que cortara la dicha madera, con tanto que de ella e de la que tiene cortada no pueda vender ninguna, publica ni secretamente, so pena de pagar el valor de la madera que vendiere e mas de mil pesos de pena...” (Acta del Cabildo de Santiago del 12 de agosto de 1558)*

Varias de estas disposiciones legales estaban enunciadas en las Leyes de Indias, pero siempre dándole prioridad al fomento de la minería, que era la base de la economía colonial americana. Este interés primordial sobre las demás actividades económicas permitió legalmente a los mineros disponer prioritariamente de los bosques cercanos a sus yacimientos, aunque estuvieran ubicados en terrenos ya entregados a otros colonos, con el objeto de mejor explotar sus yacimientos. Tal derecho de los mineros fue conocido como “*denuncio de bosques*”, el cual consistía en un permiso que se concedía para disponer de la madera necesaria para la faena de la explotación minera. Dicha norma jurídica, continuada en la época republicana, significó la tala indiscriminada de los bosques en los asentamientos mineros, la que solo fue modificada en la década de los setenta del siglo XIX en Chile.

Durante el siglo XIX fueron muchos los hacendados que protestaron contra esta norma, salvo aquellos que también se dedicaban a la actividad minera o lograban acuerdos comerciales con los mineros para evitar los pleitos judiciales. Otras personalidades también protestaron, aunque estaban motivados por una temprana conciencia ambiental, convencidos de que tal práctica implicaba la disminución de los bosques, la disminución de la madera para construir y la destrucción de los suelos, todo ello con notable daño para la agricultura y la ganadería. Entre los primeros que dieron esta voz de alarma debemos mencionar al naturalista francés contratado por el gobierno chileno Claudio Gay, quien en 1838, en carta pública dirigida al Ministro del Interior y publicada en la prensa de la época, escribió respecto de lo que ocurría en la provincia de Coquimbo:

*“...la localidad no debe pues ser acusada de ingrata, con respecto a la aridez de esta provincia, sino el hombre, i en el hombre solo es donde se ha de buscar la causa: esta existe en la penuria de nuestras leyes sobre el arreglo de bosques i plantíos, i en el vicio de las Ordenanzas de Minería, que autorizan a los mineros para arrancar y destruirlo todo... ¿Cómo no ha llamado la atención de nuestro Gobierno la gran rigidez de las leyes sobre bosques de la vieja Europa?...” (Periódico El Araucano N°399 de abril de 1838)*

Desafortunadamente la opinión de Claudio Gay no fue atendida en su momento, pero con los años, unida a otras voces de denuncia, dio su fruto. Al revisar la

prensa de la época se observa que el debate fue creciendo. Por su parte muchos agricultores y terratenientes veían en la actividad minera graves consecuencias para el tipo de economía que sostenían. Por otro lado los mineros se oponían a cualquier intento de modificar las ordenanzas mineras que los favorecían, siendo apoyados por ciertos sectores del Gobierno que solo miraban los impuestos que se recaudaban por esta vía. Estos debates pueden seguirse en “El Agricultor”, órgano de expresión de la Sociedad Nacional de Agricultura, como también en los periódicos de las ciudades de La Serena, Copiapó y Santiago del siglo XIX (Cabeza, A. 1988).

No obstante el poder de la Sociedad Nacional de Agricultura, que estaba integrada por los principales hacendados del país, los intereses económicos ligados a la minería demoraron la discusión de una legislación al respecto. De esta manera, recién el 2 de Julio de 1859, el Gobierno dictó un primer Decreto Supremo sobre Bosques que buscó regular la explotación del alerce de Chiloé y Llanquihue, el cual permitió normar esta actividad en el resto del país doce años después, cuando el 15 de Julio de 1871, durante el gobierno del Presidente José Joaquín Pérez, se dictó la Ley que derogó los denuncios de bosques que establecían las Ordenanzas de Minas aún vigentes desde la Colonia.

El breve texto de esta Ley decía:

*“Santiago, 15 de julio de 1871. Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al siguiente proyecto de lei: Artículo único. Se derogan las Ordenanzas de Minas en cuanto autorizan los denuncios de bosques. I por cuanto, oído el Consejo de Estado, lo he aprobado i sancionado, por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto como lei de la República.- José Joaquín Pérez – José A. Gandarillas”. (Boletín de Leyes, 1871, Libro 39, p. 280).*

Obviamente, tal medida legislativa no fue acogida favorablemente por el sector minero y fue resistida, particularmente en la Zona Norte del país, donde esta actividad era la base de la economía regional. Esta situación llevó al gobierno del Presidente Federico Errázuriz a dictar una nueva ley el 13 de julio de 1872, conocida como “*Ley sobre Corta de Bosques*”, la cual moderó los alcances de la ley de 1871, permitiendo que los permisos otorgados antes de esta ley continuaran por tres años más, pero limitando sus atribuciones (Boletín de Leyes, 1872, Libro 40, p. 438). No obstante, es importante señalar que esta legislación sentó las bases para una inicial protección de las cuencas, los bosques y el suelo en general.

Cumpliendo con el texto de dicha ley, el 3 de mayo de 1873, se dictó el “*Reglamento sobre la corta de Bosques*”, que establecía normas de protección sobre los bosques fiscales y particulares, la corta de los bosques, la roza de

bosques por medio del fuego, el nombramiento de un inspector general de bosques, de guarda bosques y la formación de una estadística de los bosques del país. De esta manera se puso límites a la actividad minera y a sus prerrogativas seculares.

El 16 de enero de 1879 se promulgó un decreto sobre la “*Reserva de Bosques Fiscales*”, que de haberse llevado a cabo habría sido de gran importancia en la creación de los primeros parques nacionales de Chile. La razón de su olvido y no aplicación se debe a varios factores: la Guerra del Pacífico que comenzó en ese año, y a la Pacificación de la Araucanía, aspectos centrales en la vida nacional de entonces, que configuraron una nueva situación en la política nacional y reorientaron los esfuerzos del Estado en otros sentidos, tales como la ocupación del Norte Grande, que previamente perteneció a Bolivia y Perú, a la explotación salitrera y a la urgente necesidad de colonizar los territorios del Sur de Chile. Si bien tal decreto no se hizo efectivo, tal medida fue un antecedente legal para la creación de las primeras reservas forestales 25 años más tarde. Dicho decreto señalaba que en la venta de los terrenos de los terrenos fiscales ubicados entre Malleco y Reloncaví, el Estado se reservaba una faja de 10 km. de ancho en la Cordillera de Los Andes, y otra faja similar de 1 km. de ancho en la Cordillera de la Costa, con el objeto de que únicamente el fisco podía hacer uso de dichos bosques (Boletín de Leyes, 1879, libro 47, p. 124-126).

Posteriormente en 1891, con la promulgación de la Ley de la Comuna Autónoma, se entregó la tuición de los bosques a los gobiernos locales o municipalidades, incorporando otras atribuciones sobre la agricultura, la pesca y la caza. Esta legislación no fue positiva para los bosques fiscales, ya que era casi imposible para las comunas asumir las tareas de protección y fomento que establecía, máxime si quienes administraban tales comunas eran, por lo general, los propios terratenientes interesados en la explotación de los bosques (Saelzer, F. 1973:14).

El 30 de septiembre de 1907 se emitió a través del Ministerio del Interior el Decreto Supremo N° 1.540, mediante el cual se creó la Reserva Forestal de Malleco, la primera área protegida de Chile que existe hasta la actualidad. Al parecer la base legal para este decreto está en la Ley N° 1.768 de 1905 que facultaba al Presidente de la República para destinar 80.000 hectáreas de los bosques fiscales para su explotación por parte de los particulares. Los hechos demuestran que hubo un interés inicial bastante decidido entre 1907 y 1913 en la creación de 8 reservas forestales que tuvieron una superficie de 600.000 hectáreas que estuvieron ubicadas entre Concepción y Puerto Montt. Al parecer, el interés comercial por la explotación de los bosques y su disminución en beneficio de la agricultura y la ganadería, además de la campaña dirigida por Federico Albert desde comienzos del siglo XX, generaron una corriente de opinión pública que permitió darle una importancia mayor a la protección del sector forestal (Cabeza, A. 1988).



Federico Albert llegó a Chile en 1889 y promovió la conservación y el buen uso de los recursos naturales a través de toda su vida, ocupó varios puestos públicos y publicó en revistas y documentos sus observaciones y críticas, especialmente en el *“Boletín de Bosques, Pesca y Caza”* que el fundó, donde destacó la falta de previsión con que se explotaban los bosques señalando enfáticamente que las naciones nuevas han sido destructoras de bosques a medida que invadían nuevos territorios para establecerse. En la mayoría de sus artículos Albert difundió la necesidad de controlar la explotación de los bosques, dando a conocer antes que otros el concepto de *“conservación”*, que entonces se entendía como el manejo y uso racional de los recursos naturales. Lo novedoso en su planteamiento entonces era denunciar que los recursos se agotaban, y que su mal uso y destrucción afectaban no solo a la naturaleza, sino a todas las actividades productivas y al desarrollo integral del país (Cabeza, A. et al 1991).

Estas observaciones tuvieron cierto eco y el Gobierno creó la *“Inspección de Bosques, Pesca y Caza”*, de la cual Albert fue nombrado director. Esta institución elaboró un proyecto de ley que fue presentado al Ministerio de Industrias y al Consejo de Estado, instancias que la aprobaron, enviándose para su trámite legislativo al Congreso Nacional en 1912 entidad que no lo aprobó. Sólo en 1925 se concretó la existencia de un código legal sobre el sector forestal. Es bueno recordar aquí que igual situación ocurrió con la primera legislación de monumentos nacionales en 1910, la cual sólo pudo ser promulgada en 1925. En ambas situaciones, similares causas impidieron su aprobación: los intereses que se afectaban, el régimen parlamentario con su rotativa de ministros y la convulsión política que terminó expresándose en 1925 a nivel nacional.

De esta manera, el 17 de octubre de 1925 se dictó el Decreto Ley N° 656 sobre bosques y poco después, el 22 de diciembre de 1925, se dictó el Decreto Ley N° 710, que complementaba el anterior, al entregar el Reglamento de la Ley de Bosques. Así, después de tantos años de tramitación y discusiones, se venía a disponer de una ley que regulaba, en parte, las actividades del sector forestal y ofrecía algunas soluciones para resolver la grave situación de los bosques chilenos. Es importante señalar que ese mismo día 17 de octubre de 1925 se firmó el Decreto Ley N° 651 sobre monumentos nacionales, lo cual demuestra la similitud de situaciones que ambos proyectos experimentaron, ya que, como hemos tratado anteriormente, el primer proyecto de monumentos nacionales se presentó en 1910.

El reglamento del Decreto Ley N° 710 de 1925 estableció diferentes categorías de terrenos forestales, la repoblación de hoyas hidrográficas, el fomento y primas a las plantaciones forestales, las plantaciones urbanas, normas para la explotación de los bosques fiscales, la roza por fuego, la guardería forestal y la creación de parques nacionales y reservas forestales. Sobre este último punto, el título V del

Reglamento de 1925 se refería a “*Las Reservas de Bosques y Parques Nacionales*”, recordando el primer concepto ya utilizado en 1879. Dicho texto señalaba la conveniencia de establecer reservas forestales y parques nacionales para conservar algunas especies arbóreas en vías de extinción y prohibía expresamente la caza y la modificación del entorno. Sin embargo, permitía la posibilidad de utilizar tales terrenos para aclimatar plantas exóticas y otras actividades reguladas, señalando la posibilidad de explotar los bosques protegidos del fisco, incluso los existentes en los parques nacionales y en las reservas forestales bajo determinadas condiciones (Artículos 71 al 87 del Decreto Ley N°710 sobre Reglamentos de Bosques de 1925).

A pesar de la enorme importancia de esta legislación, su contenido tenía algunos errores técnicos para su aplicación, por lo cual, seis años más tarde, se modificó en parte el texto original, a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 265 de 1931. Esta norma legal innovaba en la conservación al establecer diez tipos de bosques protegidos, mediante los cuales se buscaba cautelar diferentes intereses públicos, como las fuentes de los recursos hídricos, los caminos y obras públicas, los sectores pantanosos, la erosión de los suelos, la protección de la flora y fauna en peligro de extinción, entre otros. Por otro lado, dicho decreto definía claramente los suelos forestales como aquellos no aptos para mantener económicamente un cultivo agrícola permanente.

La necesidad de unificar ambos decretos, el de 1925 como el de 1931, llevó a que se dictara el Decreto Supremo N° 4.363 del 30 de Junio de 1931, constituyendo así la base de la legislación forestal chilena durante todo el siglo XX, aunque con el transcurrir de los años tuvo varias modificaciones y adiciones (Cerdeña, B. 1978; Gallardo, E. 1983; Montecinos, M. 1983).

A partir de 1925 se fueron creando paulatinamente varias áreas protegidas, siendo el primero de ellos el Parque Nacional Benjamín Vicuña Mackenna en 1925. Este parque nacional fue creado mediante Decreto N° 378 del 21 de julio de 1925 a través del recién creado Ministerio de Tierras y Colonización y tiene la firma del Presidente Arturo Alessandri. El texto del decreto argumentaba que la creación de esta área protegida buscaba evitar la desaparición y la destrucción de las bellezas naturales, fomentar el turismo, que tales tierras no fueran de utilidad agrícola y que no afectaran los planes de colonización del Gobierno. Esta área protegida tuvo una superficie de 71.600 hectáreas, siendo creada en los terrenos de la Reserva Forestal Villarrica constituida en 1913. El Parque Nacional Benjamín Vicuña Mackenna tuvo una corta existencia, ya que en 1929 fue desafectado integrándose su superficie a la antigua Reserva Forestal Villarrica, la cual en las décadas siguientes fue modificada en sus deslindes, entregándose una buena parte de sus terrenos a colonización y otros a la creación del Parque Nacional Villarrica en 1940 y el Parque Nacional Huerquehue en 1967, ocupando este

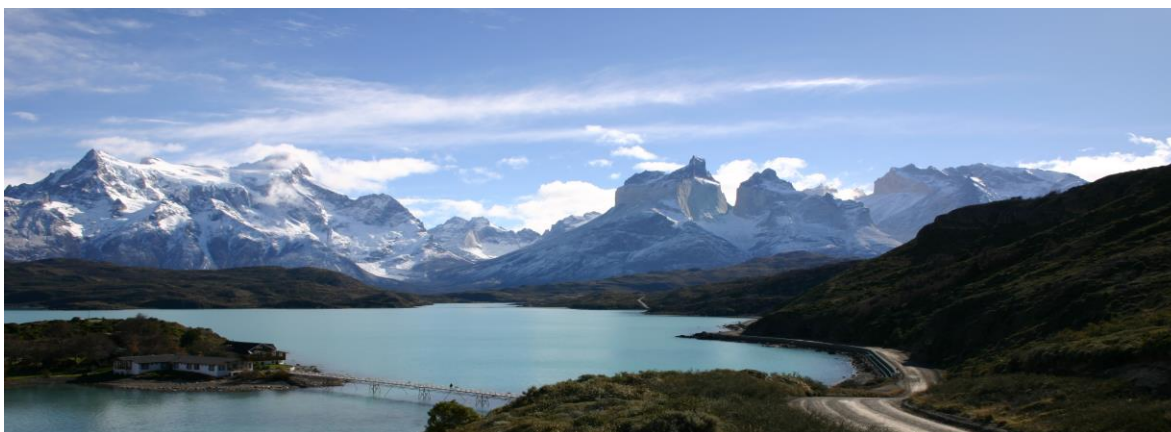
último parte de los terrenos que originalmente tenía el Parque Nacional Benjamín Vicuña Mackenna (Cabeza, A. 1988: 38-54).

El siguiente parque nacional se creó en 1926 y llevó el nombre de Vicente Pérez Rosales. Es interesante destacar los nombres elegidos para estos dos parques nacionales: Benjamín Vicuña Mackenna y Vicente Pérez Rosales, ambas figuras prominentes de la historia nacional del siglo XIX, el primero como político e historiador y el segundo como organizador de la colonización del sur, político y escritor. Está clara la connotación nacional que se le quiso dar a ambas áreas protegidas ya que no se utilizaron los topónimos locales, situación que ha sido la más frecuente en estos casos.

Posteriormente se crearon el Parque Nacional Isla de Pascua en 1935 y otras reservas forestales, lo que demuestra una creciente preocupación estatal. Con el correr de los años la superficie protegida aumentó, especialmente a partir de la década de los sesenta, aunque principalmente concentrada en las zonas Sur y Austral y posteriormente en el norte, aunque principalmente en zonas cordilleranas poco pobladas. De igual manera, la institucionalidad forestal, primero vinculada al Ministerio de Industrias, pasó al Ministerio de Agricultura, particularmente al Servicio Agrícola Ganadero, para después crearse la Corporación Nacional Forestal (CONAF), institución que fiscaliza y promueve la actividad forestal, además de administrar los parques nacionales y otras áreas protegidas de Chile.

Durante el Gobierno Militar (1973–1990) hubo un renovado interés en la protección forestal y de áreas protegidas, con algunas limitaciones y conflictos, pero el proceso llevó a que CONAF propusiera la Ley N° 18.362 del 8 de octubre de 1984, la cual nunca pudo aplicarse totalmente. Esta legislación estableció el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) el cual está integrado por parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. Hoy día este sistema cuenta con más de cien áreas protegidas que cubren alrededor del 20% de la superficie del territorio continental de Chile.

No obstante este notable crecimiento de la superficie protegida del país, algunos parques y reservas nacionales han sido desafectados, modificados sus deslindes o fusionados en áreas de mayor superficie. Algunas de estas situaciones se dieron por la presión de los colonos, empresas forestales, intereses geopolíticos del Estado, o debido a razones técnicas para lograr un mejor manejo y protección. En la actualidad se discuten los aspectos reglamentarios de una nueva legislación sobre áreas protegidas y conservación de la biodiversidad que establece nuevas categorías de manejo y una nueva institucionalidad.



Parque Nacional Torres del Paine. Foto A. Cabeza

#### **4.8. Resumen de la Legislación y la Organización Institucional sobre el Patrimonio en Chile**

Chile posee un conjunto de normas legales y reglamentarias, de distinto rango y alcance, que protegen y regulan los bienes del patrimonio cultural. Sin embargo, dicha legislación comprende leyes de antigua data y otras más recientes, las cuales responden a una variedad de enfoques y políticas, lo que hace de dicho marco legal un conjunto insuficiente y urgente de actualizar y armonizar.

En primer lugar, identificamos un conjunto de cuerpos legales cuyo objeto propio es la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. En ese contexto, la norma legal vigente más importante es la señalada en la Constitución Política de la República, que señala la obligación del Estado de proteger e incrementar el patrimonio cultural de la Nación, que establece en su Artículo 19 N° 10:

“...corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación”.

Junto a dicha norma constitucional, se identifican tres cuerpos legales principales que norman el patrimonio cultural. El primero de ellos dice relación con las disposiciones que fijan normas sobre bibliotecas, archivos y museos y que crea la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) como un organismo dependiente del Ministerio de Educación según la Ley N° 4.659 del 17 de septiembre de 1929. En segundo lugar, se identifican las normas constitutivas sobre Monumentos Nacionales como el Decreto Ley N° 651 del 17 de octubre de 1925 y la Ley N° 17.288 de 1970 sobre Monumentos Nacionales, que establecen las siguientes categorías de los mismos: monumentos históricos, monumentos

arqueológicos, zonas típicas, santuarios de la naturaleza y monumentos públicos. En tercer lugar las normas legales forestales como la Ley de Bosques de 1931 y la Ley que crea el sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado de 1984.

Estas normativas han permitido al Estado y la sociedad chilena contar instrumentos para declarar oficialmente la protección de su patrimonio nacional, especialmente su patrimonio histórico inmueble y arqueológico y el patrimonio natural. Sin embargo, se requiere mejorar y modernizar sus disposiciones, potenciar la descentralización de su aplicación y que las instituciones a cargo de ejercer las funciones que dichas leyes les asignan cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para operar. Al respecto debemos mencionar la Ley N° 19.891 de 2003 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entidad que actualmente está elaborando un proyecto de ley que busca crear el Ministerio de las Culturas, las artes y el patrimonio.

Un segundo ámbito de cuerpos legales corresponde a aquellas leyes que, sin tener como objeto específico el patrimonio, establecen una serie de normas sobre el mismo. En este marco, se encuentra la Ley General de Urbanismo y Construcciones que, en su Capítulo IV, Artículo 60°, establece en forma amplia la protección de inmuebles y conjuntos de valor patrimonial. Esta norma ha sido de gran utilidad para la conservación del patrimonio arquitectónico, al incorporar inmuebles y zonas de conservación histórica, cuya presencia urbana es de interés social y ambiental, en los Planos Reguladores Comunes y Regionales, y que posteriormente pueden ser declarados monumentos históricos o zonas típicas bajo la ley 17.288 sobre monumentos nacionales.

Además, en este ámbito de normas coadyuvantes en la gestión del patrimonio cultural, identificamos las disposiciones de la Ley N° 16.441 de 1966 sobre la Isla de Pascua, que regula y norma la salida del país de bienes históricos, artísticos, arqueológicos y otros de interés nacional; la Ley N° 17.236 de 1969 sobre las normas fiscales, aduaneras y financieras para la ornamentación artística de edificios públicos; la Ley N° 18.745 de 1988 que regula los préstamos de colecciones o piezas museológicas entre museos de la DIBAM y museos del Ministerio de Educación; la Ley N° 19.253 de 1993 sobre Pueblos Indígenas, que establece normas para la conservación del patrimonio cultural intangible de raíz indígena; y la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que norma y define lo que se entiende como *“patrimonio ambiental de la nación”*.

En un tercer ámbito de disposiciones legales están aquellas que indirectamente regulan aspectos culturales, de comunicación y difusión del patrimonio cultural. En ese contexto, encontramos la Ley N° 19.166 de 1992 sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor y otros derechos conexos, que establece que en Chile dichos derechos privados se extinguen a los 50 años y las obras artísticas y

culturales expresamente declaradas pasan ser patrimonio común de la sociedad; las disposiciones atinentes a la difusión del patrimonio cultural establecidas en la Ley N° 19.131 de 1992 de Televisión y en la Ley N° 19.132 de 1992 de Televisión Nacional de Chile; y las diversas disposiciones que otorgan incentivos tributarios a los particulares para donaciones a actividades culturales y de conservación y/o difusión del patrimonio cultural, entre las cuales encontramos: la Ley N° 19.131 de Donaciones Culturales en su Artículo 8°; la Ley N° 19.247 de 1993 sobre Donaciones con Fines Educativos; la Ley N° 18.681 sobre donaciones a las Universidades, entre otras normas.

Un cuarto ámbito de normas vigentes en Chile sobre el patrimonio cultural lo constituyen el conjunto de Acuerdos y Tratados Internacionales que regulan el Patrimonio Cultural que Chile ha ratificado como la Convención Mundial sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la UNESCO de 1972, aprobada como Ley de la República de Chile en 1980 y las ratificadas recientemente sobre el patrimonio inmaterial y la diversidad cultural, junto a otras convenciones de carácter continental de la OEA, como la Convención sobre La Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las naciones americanas, conocida como Convención de San Salvador, realizada en Santiago de Chile en 1976.

Por último, existen un conjunto de disposiciones reglamentarias de diversas instituciones del Estado y de los municipios, que también inciden en la protección, gestión, conservación, difusión del patrimonio tales como instructivos, ordenanzas y resoluciones. Ellas constituyen un intrincado cuerpo de disposiciones inconexas, a veces contradictorias que motivan conflictos de interpretación entre las instituciones.

En suma, la situación legal que enfrenta el patrimonio del país en toda su diversidad es compleja y requiere de actualizaciones urgentes que superen aspectos obsoletos y permitan integrar de mejor manera al patrimonio cultural y natural al desarrollo armónico del país. Tanto la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, como el Consejo de Monumentos Nacionales, la Corporación Nacional Forestal, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Ministerio del Medio Ambiente, están empeñados en la adecuación de sus respectivas legislaciones, a fin de contar con instrumentos que las doten de mayor dinamismo, agilidad y eficacia, para enfrentar integralmente el problema de la gestión integral del patrimonio.

#### **4.9. Análisis Legislativo Comparativo del Patrimonio Cultural de Chile con otras Realidades en América Latina y Europa**

Hemos seleccionado la legislación sobre patrimonio y monumentos del Perú, España, México y Francia por ser ejemplos que Chile siempre ha observado, tal como hemos demostrado en páginas anteriores. El objetivo general es comparar



las normativas de estas legislaciones respecto de las categorías de patrimonio que cada una de ellas establece, de las instituciones que crean o que tienen la responsabilidad de su gestión, de las obligaciones y derechos que tienen los propietarios de tales bienes, de las formas de financiamiento público que otorgan, de las sanciones civiles y penales que tienen aquellos que destruyen o dañan el patrimonio y de la forma en que se aborda la protección del patrimonio arqueológico (Cabeza, A y Simonetti, S. 1996).

Las legislaciones analizadas han tenido algunas modificaciones, sea en algunos de sus artículos o porque se les adiciona alguna norma especial, tanto en la propia ley o en una nueva que la relaciona, como por ejemplo lo que ocurre con la legislación ambiental, la indígena o en la reformas constitucionales de reorganización del territorio de cada Estado, como es el caso de España, con las autonomías y sus leyes especiales. Por ello hay que entender los próximos párrafos como una referencia inicial para entender el derecho comparado patrimonial en su relación con Chile y no para poder explicar la situación actual de cada país.

En un capítulo anterior hemos hecho referencia a las Convenciones, Recomendaciones y Cartas Internacionales sobre el patrimonio, las cuales también han sido un referente muy importante en la actualización de las legislaciones nacionales. Las leyes seleccionadas son de la década de los 70 y 80 y están vigentes en sus aspectos centrales, aunque hay varios cambios en la administración del patrimonio y en el tipo de bienes protegidos. Por ejemplo es el caso mencionar la legislación peruana reciente que permite la concesión de sitios arqueológicos, aunque el Estado mantiene la propiedad de ellos (Ley Nº 29.164 de 2007) y la que permite establecer hoteles en centros históricos sin la intervención del Instituto Nacional de Cultura o del municipio correspondiente (Ley Nº 29.167 de 2007). Frente a las protestas por este tipo de legislación el Congreso peruano aprobó una modificación por la cual la decisión de la autorización de estas concesiones e instalaciones de servicios turísticos quedaba en manos de los gobiernos regionales (Ley Nº 29.202 de 2008).

Si bien antes había una relación en la gestación de cada texto legal entre los distintos países, lo cual se aprecia en las categorías de monumentos, términos, instituciones, hoy el vínculo y la influencia es mayor y más veloz, aunque no por ello homogéneo y se observa diversidad, debido al propio proceso histórico que cada país experimenta.

En cuanto a las definiciones de patrimonio la ley de Francia se aplica a monumentos históricos de carácter mueble e inmueble, incluidos los yacimientos arqueológicos, que se definen en virtud del interés público que revisten desde el punto de vista de la historia o del arte. Es interesante destacar que en el caso de los bienes inmuebles, la legislación también abarca a los cercanos al monumento,

tanto los colindantes o a los que se sitúan en su campo de visibilidad. La legislación de Perú se aplica a los bienes culturales en general, y sitúa dentro de esta categoría tanto a los bienes inmateriales como a las creaciones de la naturaleza. Establece una presuposición, en el sentido de que todos los bienes de la época prehispánica y virreinal tienen un status especial de protección por el solo ministerio de la ley. En el caso de Méjico se definen los monumentos artísticos, históricos y arqueológicos, y también zonas de monumentos de estos tres tipos. La legislación de España, por su parte, es la más amplia, y regula todo el Patrimonio Histórico de la Nación, incluidos los bienes culturales muebles e inmuebles, documentos y material bibliográfico, y los bienes culturales etnográficos, incorporando los bienes culturales intangibles. En el caso de Chile se establecen categorías solo para los bienes muebles e inmuebles, los de carácter intangible no son considerados. El patrimonio tangible puede ser nominado monumento nacional, en las categorías de monumentos históricos, monumento arqueológico, zonas típicas, santuarios de la naturaleza y monumentos públicos.

En cuanto a la institucionalidad, la legislación de Francia, de aplicación restringida a los bienes culturales muebles e inmuebles, asigna la responsabilidad de las declaratorias de monumentos al ministerio encargado de los asuntos culturales. Para casos de bienes que ameritan una protección, pero cuya relevancia es menor a la de los monumentos propiamente tales, la autoridad encargada de inscribirlos es la autoridad local. En el caso de bienes muebles, la resolución se hace previo dictamen de una comisión departamental integrada por autoridades locales, funcionarios del área de la cultura y personalidades seleccionadas por el prefecto, o bien de la comisión de los monumentos históricos.

Por su parte, la ley peruana se aplica a una gama más amplia de bienes que la francesa y asigna la responsabilidad a tres entidades: el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional de la Cultura. Estas tres instituciones deben realizar el inventario de los bienes y conservar, investigar y difundir el patrimonio. Más allá de estas instituciones fundamentales, la ley asigna a todas las autoridades (municipales, ministeriales, etc.) la tarea de velar por su cumplimiento.

En el caso de Perú se establece también un Consejo del Patrimonio Cultural de la Nación, integrado por el Ministro de Educación, representantes del Archivo, de la Biblioteca Nacional, del Instituto Nacional de Cultura, del Episcopado, las universidades, el Museo Nacional de Arqueología y Antropología, diversas instituciones del área de las artes y de la historia, y dos representantes de los museos y los coleccionistas privados. Este Consejo debe aprobar los reglamentos que regirán el inventario y los trabajos de identificación, conservación y difusión del patrimonio; debe también aprobar los proyectos de los convenios de cooperación cultural y de la exhibición en el exterior de los bienes culturales de

propiedad pública y privada. También es la entidad que autoriza la creación de museos públicos y privados.

En el caso de Méjico se encomienda la defensa del patrimonio a dos instituciones: el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se señala también que deben secundar sus esfuerzos el Presidente de la República y los Secretarios de Educación y del Patrimonio, además de todas las autoridades federales en lo que les competa. Se encomienda también a las dos instituciones patrimoniales la tarea de organizar a la sociedad civil para la defensa del patrimonio. Deben además llevar el registro de los monumentos y zonas arqueológicas e históricas, respectivamente, y llevar además un registro de las personas e instituciones que comercian bienes culturales, que además deben cumplir con los requisitos que estas entidades establecen. Se crea también una Comisión Nacional que debe dar su opinión sobre las declaratorias de monumentos.

La ley de España le asigna a la Administración del Estado en general la defensa del patrimonio, dejando mayores especificaciones a los reglamentos y espacio a las propias legislaciones e instituciones patrimoniales de cada autonomía regional<sup>95</sup>, pero la Administración del Estado debe elaborar un censo o registro de los bienes patrimoniales. La legislación establece también un Consejo del Patrimonio Histórico integrado por un representante de cada Comunidad Autónoma y el Director General correspondiente de la Administración del Estado. En España existe también una Junta de Calificación, Valorización y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, entidad encargada de avaluar los bienes culturales, para establecer las multas en caso de daño, y para la aplicación de las medidas de fomento que establece la ley, entre otros. Son también instituciones consultivas de la Administración del Estado para todo lo concerniente con el patrimonio las Reales Academias, las Universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los organismos públicos que se determinen. Se encarga velar por el cumplimiento de esta ley, particularmente, a los Ayuntamientos.

En Chile, tal como hemos reseñado antes, se crea un Consejo de Monumentos Nacionales de carácter colegiado integrado por instituciones públicas y privadas que debe aprobar las declaraciones de monumentos nacionales y autorizar las intervenciones en ellos y fiscalizar los bienes patrimoniales protegidos por el

---

<sup>95</sup> La legislación española sobre patrimonio es de 1985. Sobre esta legislación es interesante el artículo que aparece en:  
[http://www.bibliotecaspublicas.es/marchena/imagenes/V\\_1\\_Becerra\\_legislacion.pdf](http://www.bibliotecaspublicas.es/marchena/imagenes/V_1_Becerra_legislacion.pdf). Respecto a las normas especiales para las autonomías importa tener presente la actualización de la legislación autonómica de Andalucía que encontramos en:  
[https://ws096.juntadeandalucia.es/deposito/resources/pdf/decretos/ley\\_patrimonio\\_historico\\_andalucia.pdf](https://ws096.juntadeandalucia.es/deposito/resources/pdf/decretos/ley_patrimonio_historico_andalucia.pdf).

Estado. Este Consejo es presidido por el Ministro de Educación, teniendo la vicepresidencia ejecutiva el director de Bibliotecas, Archivos y Museos. El Consejo tiene además una secretaría que ejecuta los acuerdos de la entidad, sea de manera directa o a través de las diferentes instituciones.

Sólo dos de las legislaciones analizadas establecen mecanismos para el caso de que los propietarios de bienes culturales se opongan a su declaración como monumentos. La ley mejicana dispone para ese caso que el propietario ofrezca ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, o bien ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, según corresponda, "*pruebas*" que justifiquen su oposición; el Instituto correspondiente las analiza y emite una resolución definitiva. La legislación francesa es más compleja al respecto, siendo el Ministerio de Asuntos Culturales la entidad que efectúa las declaraciones y se deja al Consejo de Estado la tarea de decidir cuando el propietario se opone. Si se resuelve la declaratoria, cabe la posibilidad de que el propietario sea indemnizado. En el caso chileno la legislación no obliga la consulta al propietario, aunque esta se realiza como política institucional, pero la opinión no es vinculante. El Consejo de Monumentos Nacionales propone al Ministro de Educación que se curse el decreto que declara como monumento nacional un bien privado o fiscal, el propietario no puede oponerse porque no se altera su propiedad ni su uso, aunque debe someterse a las disposiciones legales de conservación, solicitando el permiso correspondiente cuando los quiere restaurar o modificar. No existe indemnización u obligación del Estado de ayudar a la conservación del bien, siendo esta de responsabilidad del propietario, sea este fiscal o privado.

Todas estas leyes resguardan el principio de que los propietarios de bienes culturales tienen la obligación de velar por su conservación. En el caso de Francia, los propietarios de bienes inscritos deben dar aviso al Ministerio de Asuntos Culturales cuando se proponen realizar algún trabajo de reparación o mantención, así como cuando trasladan o transfieren la propiedad de un bien mueble. En el caso de inmuebles clasificados, el ministerio debe autorizar los trabajos que se realicen en ellos, los cuales son supervisados por la misma entidad. Este mismo ministerio puede realizar por propia iniciativa y a cuenta del Estado, trabajos de reparación, pero además, puede requerir al propietario para que se realicen las obras, debiendo en este caso el Estado pagar un 50% por lo menos del costo de los trabajos. La ley de Francia es la única de las que se han analizado que establece ese mecanismo para los casos en que los propietarios no realizan los trabajos de conservación que los inmuebles necesitan. La ley establece también la revisión periódica de los bienes inmuebles y muebles clasificados por parte de la autoridad competente. La ley francesa consagra el derecho del Estado a expropiar los bienes patrimoniales cuando éstos están en riesgo de deteriorarse o destruirse.

En Perú la ley establece que todo propietario de bienes culturales patrimoniales puede convenir con las Instituciones encargadas del resguardo del patrimonio la realización de trabajos de conservación o reparación. El propietario puede pagar por este servicio o bien retribuirlo cediendo el bien temporalmente para su estudio o exhibición. Sin embargo, la ley no establece mecanismos para forzar al propietario a realizar tales trabajos, como es el caso de la legislación francesa. Otro tanto ocurre con la ley mejicana, que incluso establece que si el propietario, habiendo sido requerido para realizar trabajos, no los hace, el Instituto correspondiente puede realizar las obras por cuenta del Estado.

En España también se debe comunicar a la autoridad los traslados o transferencias de propiedad de todos los bienes culturales registrados, de tipo mueble o inmueble. Es obligatorio permitir la revisión por parte de las autoridades de estos bienes, para evaluar su estado de conservación y la ley consagra la obligación, con excepciones fundadas en el derecho a la intimidad de la vida privada, de permitir la revisión por parte de investigadores del patrimonio documental y bibliográfico. Los propietarios y poseedores de bienes patrimoniales pueden ser requeridos a realizar trabajos de restauración y todo trabajo de este tipo que se realice debe ser autorizado por los organismos competentes.

La legislación española es la única que establece la prohibición de reconstrucción a menos que se realice con piezas originales de autenticidad comprobada y, en caso de requerir los inmuebles, la adición de partes nuevas que aseguren su estabilidad, ellas deben ser fácilmente reconocibles. También se establece en la legislación española como causal de expropiación la destrucción o deterioro de tales bienes culturales, como también el no darles un uso compatible con sus valores.

Por su parte la ley francesa prohíbe en principio la exportación de bienes muebles clasificados y lo mismo ocurre en la legislación mejicana. En el caso peruano la exportación de bienes patrimoniales muebles requiere una autorización especial, al igual que en España y Chile. En el caso chileno el propietario, sea este privado o fiscal, está obligado a la conservación del mismo sin que el Estado esté obligado a ayudar, aunque existen mecanismos para cooperar en la conservación, aunque limitados por los recursos existentes.

En cuanto a beneficios para los propietarios de bienes declarados monumentos, en Francia el Estado debe correr con al menos el 50% de los costos cuando requiere la realización de trabajos de conservación sobre un bien inmueble. Pero aún sin que medie tal requerimiento, en el caso de los inmuebles inscritos, las autoridades regionales están autorizadas para subvencionar hasta un 40% de los gastos que demande el mantenimiento o reparación del bien en cuestión. En el caso de Perú, como se dijo, los propietarios pueden recurrir a las instituciones encargadas del patrimonio para que ellas realicen los trabajos; pueden a cambio

pagarles o bien cederles el bien temporalmente para su exhibición o estudio. Pero los propietarios de bienes patrimoniales muebles e inmuebles están eximidos de todo tributo que grave estos bienes. Además, gozan de reducciones en el impuesto a la renta del 100% de los costos de restauración y mantenimiento de los bienes; tal gasto lo deben acreditar ante las instituciones encargadas del resguardo del patrimonio. Las donaciones hechas al Estado para la conservación de bienes culturales pueden deducirse también para el cálculo del impuesto a la renta.

Al respecto la legislación mejicana sólo establece que pueden solicitar la exención de impuestos prediales los propietarios de bienes declarados monumentos que los mantengan conservados o que, en su caso, los restauren. Se encarga a los Institutos encargados de la defensa del patrimonio la misión de promover ante los gobiernos estatales la conveniencia de que se exima del impuesto predial a los inmuebles declarados monumentos que no se exploten con fines de lucro.

En España el organismo competente puede ordenar la ejecución de trabajos de conservación y mantenimiento en bienes patrimoniales si habiéndose requerido a sus propietarios para ello, los trabajos no son realizados. Además, se puede conceder una ayuda reintegrable a los propietarios con este fin. Los propietarios de bienes patrimoniales gozan de exenciones fiscales en virtud de la legislación que regula la Contribución Territorial Urbana y el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. Quienes realicen inversiones en la compra, restauración, conservación, o difusión de bienes patrimoniales y quienes realicen donaciones a instituciones públicas o privadas con tal fin, gozan además deducciones sobre el Impuesto a la Renta.

En el caso chileno los privados no tienen beneficios directos, salvo una reciente modificación de ley que faculta a aquellos propietarios de inmuebles declarados monumentos históricos, que no producen renta, los cuales pueden quedar exentos del pago de contribuciones de bienes raíces. También pueden optar a concursos públicos y determinados subsidios de vivienda, todos ellos insuficientes.

Respecto del financiamiento público del patrimonio es importante el caso de España, por disponer que en el presupuesto de cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida de al menos el 1% de los fondos que aporte el Estado, para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio o de fomento de la creatividad artística; se exceptúan de esta medida las obras relacionadas con la defensa del Estado o con la seguridad de los servicios públicos. Además, la ley encarga al Gobierno la misión de disponer las medidas necesarias para que el financiamiento de obras de todo tipo relacionadas con el patrimonio, puedan tener acceso preferente al crédito oficial.



Al respecto la ley peruana se limita a señalar que los recursos para la protección del patrimonio cultural de la nación son las asignaciones del presupuesto público de los organismos a los que se asigna la ejecución de esta ley, los de origen no presupuestario que destinen a tal fin la Biblioteca Nacional del Perú, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Cultura, y los legados y donaciones que se destinen a tal fin. Algo similar ocurre en Méjico y en Chile. En este último país se aplica también una ley de mecenazgo por el cual las empresas que entreguen recursos a actividades culturales, entre las que se cuentan las vinculadas al patrimonio, pueden descontar hasta el 50% de lo donado de los impuestos que deben pagar al fisco en el año siguiente de realizada la operación.

En lo concerniente a las infracciones a las disposiciones de las respectivas leyes, en todos los casos analizados hay sanciones y penas, pero la efectividad de ellas depende de muchos factores y del nivel de conciencia patrimonial de las autoridades y los ciudadanos. En el caso de Perú, el producto de las multas se destina a las tres instituciones encargadas del patrimonio. En este país se decomisan los bienes culturales que se intente exportar ilegalmente y los que se obtengan de excavaciones arqueológicas ilegales, así como la maquinaria e implementos que se utilicen. Por su parte la legislación francesa dispone también multas para las infracciones y, en el caso de trabajos no autorizados, se obliga devolver además al bien cultural a su condición original. Para casos más graves hay penas de prisión. En Méjico hay multas y penas de prisión para el caso de infracciones relacionadas con excavaciones ilegales y la destrucción de los bienes arqueológicos. Las multas son mayores para los intentos de sacar monumentos del país sin autorización y por el ejercicio del comercio ilegal de bienes culturales.

En el caso de la legislación española, cuando la lesión al patrimonio que se castiga se puede valorar económicamente (por la Junta de Clasificación, Valorización y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español), se sanciona con una multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado. Finalmente, en la legislación chilena las sanciones legales eran casi inexistentes en la práctica, salvo en los últimos años, debido a la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales de 2005, que estableció una tipificación de delitos, multas mayores y penas de cárcel para quienes destruyan el patrimonio protegido.

Respecto de las excavaciones arqueológicas, para el caso de Francia, éstas sólo pueden ser realizadas con autorización y bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos culturales, entidad que requiere el dictamen previo del Consejo Superior de Investigación Arqueológica. En Méjico autoriza y supervisa las excavaciones el Instituto Nacional de Antropología e Historia; en España dicha labor la realiza “el organismo estatal competente”, y en Perú, el Instituto Nacional de Cultura. En Chile las excavaciones arqueológicas y las intervenciones en tales monumentos están reglamentadas por la ley. Sólo arqueólogos profesionales pueden intervenir en los sitios, previo permiso del Consejo de Monumentos nacionales, y la

comercialización de los objetos arqueológicos está prohibida, debido a que los sitios y objetos arqueológicos son de propiedad estatal.

#### **4.10. Análisis comparativo de los monumentos declarados entre 1926 y 2008**

En esta sección se analiza desde una mirada diacrónica el proceso de declaración de monumentos nacionales protegidos por el Estado de Chile durante el período comprendido entre los años 1926 y 2008. Dentro de este horizonte temporal, que se extiende por más de ocho décadas de aplicación de la legislación patrimonial, se busca analizar el tipo y categoría de bienes declarados, sus características patrimoniales prioritarias, su relación con factores socioculturales y políticos del contexto nacional e incidencia en los procesos de configuración de la identidad nacional.

Como fuente de información se utilizaron los registros disponibles en el Consejo de Monumentos Nacionales, y en particular, los bienes declarados y protegidos mediante decreto bajo la categoría de monumento histórico, zona típica o santuario de la naturaleza, es decir, monumentos que fueron declarados a través de un acto administrativo que involucra decisiones y consideraciones, que en cierta medida, expresan la voluntad política de las instituciones del Estado de proteger determinados bienes que encarnan ciertos valores vinculados con la historia, la cultura y la identidad nacional.

Durante el período que aborda el estudio (1926 - 2008) se declararon en Chile un total de 1.010 monumentos nacionales, el 86,4% corresponde a la categoría de monumento histórico, 9,4% zona típica y 4,2% santuario de la naturaleza.

<b>Cuadro N°1 MONUMENTOS NACIONALES DECLARADOS EN CHILE, SEGÚN CATEGORÍA, PERIODO 1926-2008</b>		
<b>Categoría</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
Monumento Histórico (MH)	873	86,4
Zona Típica	95	9,4
Santuario Naturaleza	42	4,2
Total	1010	100,0

Del total de bienes declarados el 88,2% corresponde a bienes cuya característica patrimonial prioritaria es de carácter cultural, el 7,8% corresponde a bienes donde

está presente el componente natural y cultural y finalmente, el 4,0% se trata de bienes patrimoniales naturales.

<b>Cuadro Nº2</b> <b>CARACTERÍSTICA PATRIMONIAL PRIORITARIA</b> <b>DE LOS BIENES DECLARADOS, PERIODO 1926-2008</b>		
Característica patrimonial prioritaria	Frecuencia	Porcentaje
Natural	40	4,0
Cultural	891	88,2
Natural y Cultural	79	7,8
Total	1010	100,0

El 69,9% de los Monumentos declarados en Chile se ubica actualmente en la zona urbana y el 30,1% en la zona rural. Importante señalar, que la codificación de esta variable se hizo en función de la situación actual de emplazamiento, aún cuando algunos bienes originalmente se ubicaban en zonas rurales, pero actualmente integran al espacio urbano como resultado del crecimiento de las ciudades y los procesos de urbanización.

<b>Cuadro Nº 3</b> <b>MONUMENTOS NACIONALES SEGÚN ZONA</b>		
Zona	Frecuencia	Porcentaje
Rural	304	30,1
urbana	706	69,9
Total	1010	100,0

Del total de monumentos nacionales declarados entre los años 1926 y 2008, el 98,5% se mantiene vigente y el 1,5% corresponde a bienes que fueron desafectados.

<b>Cuadro Nº 4</b> <b>CONDICIÓN DE VIGENCIA DE LOS BIENES DECLARADOS</b>		
Condición actual de vigencia del decreto	Frecuencia	Porcentaje
Vigente	995	98,5
Desafectado	15	1,5
Total	1010	100,0

Respecto al proceso de declaratoria, los datos muestran que el 62,1% de los bienes fueron declarados a través de un proceso múltiple, esto significa que en un mismo decreto se declara un conjunto de bienes patrimoniales. El 37,9% corresponde a bienes declarados individualmente.

<b>Cuadro Nº 5</b>		
<b>NÚMERO DE BIENES DECLARADOS SEGÚN DECRETO</b>		
Decreto/Bienes Declarados	Frecuencia	Porcentaje
Individual	383	37,9
Múltiple	627	62,1
Total	1010	100,0

En relación a la distribución regional de los bienes declarados, el mayor porcentaje se concentra en la Región Metropolitana (29,9%) y en segundo lugar en la región de Valparaíso (15,3%). El resto de los bienes declarados se distribuye en porcentajes menos significativos en otras regiones del país. Si se tiene en consideración que el mayor porcentaje de bienes declarados corresponde a la categoría de monumento histórico (86,4%) es posible colegir que esto podría estar asociado a procesos fundacionales que contribuyen a otorgar mayor relevancia a las regiones donde se ubica la ciudad de Santiago y Valparaíso y su importancia como territorios fundacionales y por ende, ciudades donde reconcentra el mayor porcentaje de la población nacional.

<b>Cuadro Nº 6</b>		
<b>NÚMERO DE BIENES DECLARADOS SEGÚN REGIÓN</b>		
Región	Frecuencia	Porcentaje
Arica Parinacota	27	2,7
Tarapacá	70	6,9
Antofagasta	87	8,6
Atacama	26	2,6
Coquimbo	36	3,6
Valparaíso	155	15,3
Metropolitana	302	29,9
Bernardo O'Higgins	41	4,1
Maule	49	4,9
Bío Bío	35	3,5
Araucanía	59	5,8
De los Ríos	24	2,4
Los Lagos	60	5,9

Aysén	8	0,8
Magallanes	30	3,0
Todo el territorio nacional	1	0,1
Total	1010	100,0

En lo que concierne al tipo de patrimonio, el cuadro N° 7 muestra que el mayor porcentaje de bienes declarados (17,7%) corresponde a arquitectura civil privada, es decir casas, edificios o conjuntos arquitectónicos construidos originalmente con fines privados para uso residencial, comercial o de servicios. En segundo lugar, se ubica la arquitectura religiosa (16,6%), es decir catedrales, iglesias, conventos, monasterios, capillas y cualquier construcción dedicada al servicio u oficio de las distintas creencias religiosas. El tercer lugar corresponde a bienes muebles de transporte de personas o de carga (15,4%), con motor de arrastre terrestre tales como locomotoras, carros de ferrocarril, buses, ascensores, autos, carros bomba y otros similares.

Respecto a la arquitectura civil pública, es decir edificaciones construidas fundamentalmente por el Estado con fines de uso público o aquellas vinculadas a la administración del gobierno en su sentido más amplio, tales como edificaciones del Estado en todos sus niveles territoriales administrativos y de servicios, edificaciones educacionales y de salud sin incluir las que tienen funciones militares, representan el 8,7% de los bienes declarados y por tanto, su representación es menos significativa que los casos anteriores.

<b>Cuadro N° 7</b>		
<b>BIENES DECLARADOS SEGÚN TIPOLOGÍA</b>		
<b>Tipo de Patrimonio</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
Arquitectura civil privada ((ACPR)	179	17,7
Arquitectura religiosa (AR)	168	16,6
Medios de transporte terrestre	156	15,4
Arquitectura civil pública (ACPU)	88	8,7
Estaciones de ferrocarriles y edificaciones asociadas	56	5,5
Ecosistema (E)	37	3,7
Casas patronales de haciendas y estancias	36	3,6
Arquitectura militar (AM)	35	3,5
Medios de transporte aéreos	35	3,5
Objeto-Colección (OC)	34	3,4
Arquitectura industrial (AI)	31	3,1
Sitio arqueológico (SA)	30	3,0
Plazas y Parques (PP)	29	2,9
Infraestructura (I)	23	2,3
Cementerios y Mausoleos (CM)	21	2,1

Patrimonio marítimo	19	1,9
Sitios sagrados indígenas (SSI)	13	1,3
Sitio asociado a derechos humanos	8	0,8
Sitio paleontológico (SP)	6	0,6
Sitio histórico	6	0,6
<b>Total</b>	<b>1010</b>	<b>100,0</b>

Al analizar los bienes declarados y su relación con el origen temporal podemos observar que el 77,5% se asocia al periodo republicano. Dentro de este porcentaje, el 40,3% corresponde a la etapa II y el 37,2% a la etapa I. Los bienes de origen colonial representan el 15,1% y los de origen prehispánico alcanzan solo al 7,0%.

Al establecer una relación entre origen temporal y característica patrimonial prioritaria es posible observar que en el caso de los bienes culturales que el mayor porcentaje (43,4%) se vincula al periodo republicano etapa II y republicano etapa I (40,0%). Los bienes culturales de origen colonial representan el 16,2% y los de origen prehispánico tienen una escasa significación (0,3%), pero vale aclarar que sólo una ínfima parte han sido declarados como monumentos históricos ya que este tipo de bien patrimonial es monumento nacional en la categoría de monumento arqueológico por el sólo ministerio de la ley sin necesidad de ser declarado como tal.

<p align="center"><b>Cuadro Nº 8</b>  <b>CARACTERÍSTICA PATRIMONIAL PRIORITARIA SEGÚN PERIODO</b></p>							
Característica patrimonial prioritaria	Período temporal					Total	
	Prehispánico	Colonial	Republicano Etapa I	Republicano Etapa II	Todos los anteriores	Nº	%
Natural	39	0	0	1	0	40	4,0
Cultural	3	144	356	387	1	891	88,2
Natural y Cultural	29	9	20	19	2	79	7,8
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>153</b>	<b>376</b>	<b>407</b>	<b>3</b>	<b>1.010</b>	<b>100%</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>7,0%</b>	<b>15,1%</b>	<b>37,2%</b>	<b>40,3%</b>	<b>0,3</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Respecto a la distribución regional de los bienes declarados según período u origen temporal, el cuadro N°9 permite visualizar las regiones donde se concentran los bienes declarados.

<b>Cuadro N° 9</b>						
<b>PERIODO U ORIGEN TEMPORAL DE LOS BIENES DECLARADOS SEGÚN REGIÓN</b>						
Región	Prehispánico	Colonial	Republicano Etapa I	Republicano Etapa II	Todos los anteriores	Total
Arica Parinacota	9	10	8	0	0	27
Tarapacá	4	20	37	9	0	70
Antofagasta	5	9	32	41	0	87
Atacama	4	1	21	0	0	26
Coquimbo	3	5	22	6	0	36
Valparaíso	14	12	50	79	0	155
Metropolitana	10	40	99	152	1	302
Bernardo O'Higgins	3	11	23	4	0	41
Maule	4	8	29	8	0	49
Bío Bío	3	8	10	13	1	35
Araucanía	0	2	8	49	0	59
De los Ríos	0	8	11	5	0	24
Los Lagos	5	17	12	26	0	60
Aysén	2	0	0	6	0	8
Magallanes	5	2	14	9	0	30
Todo el territorio	0	0	0	0	1	1
Total	71	153	376	407	3	1010

Todos los cuadros desagregados por región muestran la preeminencia del centro del país: Metropolitana y Valparaíso y en tercer lugar el norte grande si se considera Arica Parinacota junto a Tarapacá y si se agrega Antofagasta como una gran macro zona norte, es decir el centro y las fronteras que podrían ser más relevantes en términos de soberanía e identidad nacional. Por el sur, el hito sería Los Lagos unido a los Ríos. Aysén es la región de menor peso en términos de los bienes declarados.

<b>Cuadro Nº10</b>				
<b>MONUMENTOS DECLARADOS SEGÚN REGIÓN Y CATEGORÍA</b>				
Región	Monumento Histórico (MH)	Zona Típica	Santuario Naturaleza	Total
Arica Parinacota	26	1	0	27
Tarapacá	62	5	3	70
Antofagasta	78	8	1	87
Atacama	24	1	1	26
Coquimbo	32	3	1	36
Valparaíso	124	18	13	155
Metropolitana	262	31	9	302
Bernardo O'Higgins	31	9	1	41
Maule	38	7	4	49
Bío Bío	31	1	3	35
Araucanía	59	0	0	59
De los Ríos	20	3	1	24
Los Lagos	53	4	3	60
Aysén	5	1	2	8
Magallanes	27	3	0	30
Todo el territorio nacional	1	0	0	1
Total	873	95	42	1010

El cuadro Nº 11 refleja lo mismo que el cuadro Nº 10, pero los datos se registran como porcentajes por columnas, es decir se considera como 100% cada categoría de monumento.

<b>Cuadro Nº 11</b>				
<b>PORCENTAJE SEGÚN REGIÓN Y CATEGORÍA DEL MONUMENTO</b>				
Región	Monumento Histórico (MH)	Zona Típica	Santuario Naturaleza	Total
Arica Parinacota	3,0%	1,1%	0,0%	2,7%
Tarapacá	7,1%	5,3%	7,1%	6,9%
Antofagasta	8,9%	8,4%	2,4%	8,6%
Atacama	2,7%	1,1%	2,4%	2,6%
Coquimbo	3,7%	3,2%	2,4%	3,6%
Valparaíso	14,2%	18,9%	31,0%	15,3%
Metropolitana	30,0%	32,6%	21,4%	29,9%
Bernardo O'Higgins	3,6%	9,5%	2,4%	4,1%
Maule	4,4%	7,4%	9,5%	4,9%
Bío Bío	3,6%	1,1%	7,1%	3,5%

Araucanía	6,8%	0,0%	0,0%	5,8%
De los Ríos	2,3%	3,2%	2,4%	2,4%
Los Lagos	6,1%	4,2%	7,1%	5,9%
Aysén	0,6%	1,1%	4,8%	0,8%
Magallanes	3,1%	3,2%	0,0%	3,0%
Todo el territorio nacional	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Para analizar el cuadro N°12 hay que tener en consideración que el 69,9% de los bienes declarados se ubican actualmente en la zona urbana y el 30,1% en zona rural. En este caso los resultados están expresados en frecuencias y porcentajes por columna, es decir cada zona en si misma representa el 100%, por lo tanto, permite visualizar lo siguiente: del total de bienes declarados que se ubican actualmente en la zona rural en qué región del país se observa una mayor concentración, por ejemplo, en la región de Antofagasta se concentra el mayor porcentaje de bienes declarados (18,4%) que se ubican actualmente en la zona rural. Lo mismo se puede analizar para el caso de las zonas urbanas. En la región Metropolitana se concentra el mayor porcentaje (38,5%) de bienes declarados que se ubican actualmente en zona urbana. Si fuera necesario para la investigación se pueden calcular los porcentajes por fila, es decir saber para cada región en particular en qué zona se ubican el total de bienes declarados en cada región en particular.

<b>Cuadro N° 12</b>				
<b>MONUMENTOS DECLARADOS SEGÚN REGIÓN Y ZONA</b>				
Región	Recuento	Rural	urbana	Total
Arica Parinacota	Frecuencia	20	7	27
	Porcentaje	6,6%	1,0%	2,7%
Tarapacá	Frecuencia	28	42	70
	Porcentaje	9,2%	5,9%	6,9%
Antofagasta	Frecuencia	56	31	87
	Porcentaje	18,4%	4,4%	8,6%
Atacama	Frecuencia	10	16	26
	Porcentaje	3,3%	2,3%	2,6%
Coquimbo	Frecuencia	8	28	36
	Porcentaje	2,6%	4,0%	3,6%
Valparaíso	Frecuencia	29	126	155
	Porcentaje	9,5%	17,8%	15,3%
Metropolitana	Frecuencia	30	272	302
	Porcentaje	9,9%	38,5%	29,9%

Bernardo O'Higgins	Frecuencia	11	30	41
	Porcentaje	3,6%	4,2%	4,1%
Maule	Frecuencia	18	31	49
	Porcentaje	5,9%	4,4%	4,9%
Bío Bío	Frecuencia	13	22	35
	Porcentaje	4,3%	3,1%	3,5%
Araucanía	Frecuencia	16	43	59
	Porcentaje	5,3%	6,1%	5,8%
De los Ríos	Frecuencia	7	17	24
	Porcentaje	2,3%	2,4%	2,4%
Los Lagos	Frecuencia	27	33	60
	Porcentaje	8,9%	4,7%	5,9%
Aysén	Frecuencia	5	3	8
	Porcentaje	1,6%	,4%	0,8%
Magallanes	Frecuencia	25	5	30
	Porcentaje	8,2%	0,7%	3,0%
Todo el territorio nacional	Frecuencia	1	0	1
	Porcentaje	0,3%	0,0%	0,1%
Total	Frecuencia	304	706	1010
	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%

En la perspectiva de analizar los bienes patrimoniales declarados y su relación con distintos períodos presidenciales se organizó la información en seis períodos que fueron definidos a la luz de consideraciones políticas y orientaciones ideológicas que estarían representadas en sus líderes y gobiernos respectivos. En este sentido, se trata de reagrupaciones que podrían ser analizadas como un indicador de voluntad política y que podría verse reflejado en el número de bienes patrimoniales declarados para cada período en particular.

<b>Cuadro Nº 13</b> <b>BIENES DECLARADOS SEGÚN PERÍODOS PRESIDENCIALES</b>					
Período	Sello político	Presidentes	Total años	Nº total de bienes declarados	Promedio bienes declarados por año
1926 1938	- Gobiernos conservadores y populistas	Emiliano Figueroa (1925-1927) Carlos Ibáñez (1927-1931) Juan Montero	13	13	1

		(1931-1932) Arturo Alessandri (1932-1938)			
1939 1952	- Gobiernos de coalición encabezados por el Partido Radical	Pedro Aguirre Cerda (1939-1941) Juan Antonio Ríos (1942-1946) Gabriel González Videla (1946-1952)	14	18	1,3
1953 1964	- Gobiernos Conservadores	Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) Jorge Alessandri (1958-1964)	12	10	0,83
1965 1973	- Gobiernos Democracia Cristiana y Unidad Popular	Eduardo Frei (1964-1970) Salvador Allende (1970-1973)	9	73	8,1
1974 1989	- Gobierno Militar	Augusto Pinochet (1973-1990)	16	333	20,8
1990 2008	- Gobiernos Concertación democrática	Patricio Aylwin (1990-1994) Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) Ricardo Lagos (2000-2006) Michelle Bachelet (2006-2010)	19	563	29,6
Totales			83	1.010	12,2

El cuadro N° 14 aporta un panorama de la característica prioritaria de los bienes declarados según periodo presidencial, lo cual deja en evidencia que el proceso de declaración se potencia significativamente en el período 1974-1989 (33% del total de bienes declarados) y alcanza su máximo dinamismo en el período 1990-2008 (55,7% de los bienes se declaran en este período). Por su parte, en lo que concierne al patrimonio natural su protección se da solo a partir del período 1965/1973 en las etapas anteriores no se registran declaraciones de bienes dentro de esta categoría.

<b>Cuadro Nº 14</b> <b>MONUMENTOS DECLARADOS SEGÚN CARACTERÍSTICA PRIORITARIA Y PERIODOS PRESIDENCIALES</b>							
Característica patrimonial prioritaria	Periodos presidenciales						Total
	1926 a 1938	1939 a 1952	1953 a 1964	1965 a 1973	1974 a 1989	1990 a 2008	
Natural	0	0	0	4	12	24	40
Cultural	12	18	10	54	293	504	891
Natural y Cultural	1	0	0	15	28	35	79
Total	13	18	10	73	333	563	1010
Porcentaje	1,3%	1,8%	1,0%	7,2%	33,0%	55,7%	100%

El cuadro Nº15 muestra las dinámicas y avances graduales en la participación diferencial de las regiones en el proceso de declaración de monumentos nacionales. Por ejemplo, en el período 1926/1938 se declaran bienes patrimoniales en tres regiones del país; entre 1939 y 1952 este proceso se extiende a seis regiones; en el período 1953/1964 involucra siete regiones; a partir de 1965/1973 se produce un aumento gradual de la cobertura regional y en los periodos siguientes esta tendencia se proyecta de manera sostenida para alcanzar su máxima expresión en el período 1990/2008.

<b>Cuadro Nº 15</b> <b>MONUMENTOS DECLARADOS SEGÚN REGIÓN Y PERIODOS PRESIDENCIALES</b>							
Región	Periodos presidenciales						Total
	1926 a 1938	1939 a 1952	1953 a 1964	1965 a 1973	1974 a 1989	1990 a 2008	
Arica	0	0	0	5	13	9	27
Parinacota	0	0	0	5	13	9	27
Tarapacá	0	3	3	7	27	29	69
Antofagasta	0	5	0	2	57	23	87
Atacama	0	1	1	0	16	8	26
Coquimbo	0	0	1	3	17	15	36
Valparaíso	3	0	1	7	37	107	155
Metropolitana	0	4	1	24	85	188	302
Bdo. O'Higgins	0	0	1	3	11	26	41
Maule	0	0	0	2	12	36	50
Bío Bío	0	0	2	4	10	19	35



Araucanía	0	0	0	0	16	43	59
De los Ríos	3	4	0	1	10	6	24
Los Lagos	7	1	0	8	4	40	60
Aysén	0	0	0	0	0	8	8
Magallanes	0	0	0	7	18	5	30
Todo el territorio	0	0	0	0	0	1	1
Total	13	18	10	73	333	563	1010
Porcentaje	1,3%	1,8%	1,0%	7,2%	33,0%	55,7%	100%

El cuadro N° 16 reitera lo señalado anteriormente, es decir preeminencia de los monumentos históricos; la declaratoria de zonas típicas y santuarios de la naturaleza adquieren una importancia relativa solo a partir de los dos últimos períodos presidenciales.

Categoría	<b>Cuadro N° 16</b> <b>MONUMENTOS DECLARADOS SEGÚN PERIODOS</b> <b>PRESIDENCIALES Y CATEGORÍA</b>						Total
	1926 a 1938	1939 a 1952	1953 a 1964	1965 a 1973	1974 a 1989	1990 a 2008	
Monumento Histórico	13	18	10	66	294	472	873
Zona Típica	0	0	0	4	26	65	95
Santuario Naturaleza	0	0	0	3	13	26	42
Total	13	18	10	73	333	563	1010

Con el cuadro N° 17 ocurre algo semejante a los anteriores se empieza a saturar la información, pienso que en los cruces de variables hay que optar por aquellos cuadros que reflejan de mejor manera las hipótesis que estás trabajando y si consideras que es necesario hacer otros cruces los hacemos.

Característica	<b>Cuadro N° 17</b> <b>MONUMENTOS DECLARADOS SEGÚN</b> <b>CARACTERÍSTICA PRIORITARIA Y</b> <b>PERIODOS PRESIDENCIALES</b>						Total
	1926 a 1938	1939 a 1952	1953 a 1964	1965 a 1973	1974 a 1989	1990 a 2008	
Natural	0	0	0	4	12	24	40

Cultural	12	18	10	54	293	504	891
Natural/Cultural	1	0	0	15	28	35	79
Total	13	18	10	73	333	563	1010

El cuadro N° 18 muestra claramente el avance de los procesos de urbanización, porque hasta 1973 hay una relación más o menos equilibrada entre los bienes patrimoniales que se ubican en zona rural y urbana. Respecto a cómo va cambiando esta relación en cada período, se puede analizar lo siguiente:

Entre 1926/1938 el 53,8% de los bienes se ubican en zona rural; entre 1939/1952 el 44,4% de los bienes se ubican en zona rural; entre 1953/1964 el 50% de los bienes se ubican en zona rural; entre 1965/1973 el 50,7% de los bienes se ubican en zona rural; entre 1974/1989 el 33, % de los bienes se ubican en zona rural; entre 1990/2008 el 24,3% de los bienes se ubican en zona rural.

Zona	<b>Cuadro N° 18</b> <b>MONUMENTOS DECLARADOS SEGÚN PERIODOS</b> <b>PRESIDENCIALES Y ZONA</b>						Total
	1926 a 1938	1939 a 1952	1953 a 1964	1965 a 1973	1974 a 1989	1990 a 2008	
Rural	7	8	5	37	110	137	304
Urbana	6	10	5	36	223	426	706
Total	13	18	10	73	333	563	1010

El cuadro N° 19 muestra la relación existente entre periodos presidenciales y origen del bien declarado, tal como se puede observar desde 1926 hasta 1964 el mayor porcentaje de bienes declarados es de origen colonial. A partir de 1965 el mayor porcentaje de bienes declarados su origen corresponde al período republicano etapa I y II.

Periodo/origen	<b>Cuadro N° 19</b> <b>MONUMENTOS DECLARADOS SEGÚN PERIODOS</b> <b>PRESIDENCIALES Y ORIGEN</b>						Total
	1926 a 1938	1939 a 1952	1953 a 1964	1965 a 1973	1974 a 1989	1990 a 2008	
Prehispánico	1	0	0	14	27	29	71
Colonial	10	17	8	27	53	38	153
Republicano I	2	1	2	32	174	165	376

Republicano II	0	0	0	0	78	329	407
Todos anteriores	0	0	0	0	1	2	3
Total	13	18	10	73	333	563	1010

El cuadro N° 20 es muy interesante porque muestra el tipo de patrimonio que se declara y protege en cada periodo presidencial, por ejemplo en el periodo 1926/1938 hay una clara focalización en la arquitectura militar; en el período siguiente 1932/1952 el primer lugar lo ocupa la arquitectura religiosa; entre 1953/1964 el mayor número de bienes declarados corresponden a arquitectura religiosa y militar; entre 1965/1973 si bien como tendencia general se observa una mayor diversificación respecto al tipo de bienes declarados, la arquitectura religiosa sigue ocupando un lugar importante, aún cuando paralelamente, se declara un número similar de bienes tipificados bajo la categoría de arquitectura civil privada.

Esta tendencia de diversificación del tipo de bienes declarados se mantiene y amplía en el periodo siguiente 1974/1989 y en este caso la arquitectura civil privada ocupa un lugar levemente superior a la arquitectura religiosa. En el período 1990/2008 se potencia el proceso de diversificación del tipo de bienes declarados, si bien los bienes declarados se concentran mayoritariamente en medios de transporte terrestre, es preciso analizar este dato con cierta cautela, dado que se trata de bienes inmuebles que por sus características particulares representan un mayor volumen. No obstante, si se analiza en mayor detalle la situación de los bienes inmuebles la arquitectura civil privada y la religiosa sigue concentrando la mayor frecuencia de bienes declarados y ésta última se mantiene como un ámbito que ha sido priorizado en todos los periodos presidenciales.

Como tendencia general dentro de este horizonte temporal lo privado y religioso constituyen los ejes centrales del patrimonio declarado en Chile, me parece un punto muy interesante de analizar, especialmente si se compara con el lugar que ocupa la arquitectura pública.

Tipo de Patrimonio	<b>Cuadro N° 20</b> <b>MONUMENTOS DECLARADOS SEGÚN</b> <b>PERIODOS PRESIDENCIALES Y TIPO DE</b> <b>PATRIMONIO</b>						Total
	1926 a 1938	1939 a 1952	1953 a 1964	1965 a 1973	1974 a 1989	1990 a 2008	
Sitio arqueológico	1	0	0	9	15	5	30
Arquitectura civil privada	1	0	2	16	61	99	179

Arquitectura civil pública	0	1	0	6	29	52	88
Arquitectura militar	11	4	3	6	6	5	35
Arquitectura religiosa	0	12	4	16	59	77	168
Arquitectura industrial	0	0	0	3	8	20	31
Infraestructura	0	0	0	0	4	19	23
Plazas y Parques	0	0	0	2	15	12	29
Cementerios y Mausoleos	0	0	0	0	10	11	21
Sitios sagrados indígenas	0	0	0	0	1	12	13
Sitio paleontológico	0	0	0	2	3	1	6
Ecosistema	0	0	0	3	10	24	37
Objeto-Colección	0	0	0	3	10	21	34
Patrimonio marítimo	0	0	0	1	15	3	19
Medios de transporte terrestre	0	1	0	0	37	118	156
Estaciones de ferrocarriles y edificaciones asociadas	0	0	1	1	31	23	56
Casas patronales de haciendas y estancias	0	0	0	5	17	14	36
Medios de transporte aéreos	0	0	0	0	0	35	35
Sitio histórico	0	0	0	0	2	4	6
sitio asociado a derechos humanos	0	0	0	0	0	8	8
Total	13	18	10	73	333	563	1010

## 5. SÍNTESIS DE CONTENIDOS Y CONCLUSIONES

En las sociedades contemporáneas el patrimonio ha cobrado una importancia creciente. Si bien en el pasado, la protección del patrimonio junto con la instalación de monumentos conmemorativos, eran facultades controladas casi exclusivamente por el Estado, constituyéndose en dispositivos culturales fundamentales en la construcción y reproducción de la identidad nacional, en la actualidad se aprecia de manera sostenida, como las comunidades locales reclaman para ellas ese derecho de decidir lo que es patrimonial y cómo administrarlo.

En el desarrollo de esta investigación sobre el patrimonio y la identidad cultural de Chile hemos analizado la evolución de estos conceptos y su relación con los de Estado y Nación. Para ello ha sido fundamental describir los procesos de formación de la sociedad chilena a través de su historia, reconociendo sus orígenes, momentos de síntesis, su diversidad cultural y sus contradicciones. Por cierto estos temas son motivo de debates teóricos e ideológicos permanentes. Creemos haber contribuido a su discusión al incorporar la variable patrimonial y más específicamente su relación con el patrimonio arquitectónico y las instituciones y legislaciones patrimoniales.

La búsqueda de documentación original en archivos nos permitió descubrir aspectos desconocidos de la gestación de la Ley de Monumentos Nacionales de Chile, como también entender mejor el rol del Estado y la apropiación por parte de la sociedad de las diferentes funciones del patrimonio, tanto en sus aspectos formativos de una identidad nacional como de las identidades culturales de las diferentes comunidades que existen en el país.

La hipótesis central que guió este estudio fue demostrar que el desarrollo del concepto de patrimonio en Chile ha sido impulsado y controlado desde el Estado, el cual ha tenido un rol fundamental en la formación de la nación chilena y de su identidad cultural oficial. Para esta aseveración, nos basamos en la argumentación sostenida en 1981 por el historiador Mario Góngora (2003), de que la nacionalidad chilena fue creada por un Estado que tiene su origen en la administración colonial española, el cual durante el siglo XIX logra crear y consolidar en la mayor parte de sus habitantes una conciencia nacional.

Nuestra investigación nos llevó a analizar gran cantidad de documentos históricos, algunos de ellos inéditos, como también el trabajo interpretativo realizado por arquitectos, historiadores, arqueólogos y antropólogos. Un primer esfuerzo fue dedicado a la comprensión y definición de los conceptos de cultura, identidad, estado y nación, los cuales tienen connotaciones diferentes según el marco teórico

que los explique. La segunda tarea fue identificar la evolución de las identidades culturales que ha tenido Chile y la que oficialmente ha construido el Estado nacional. El tercer desafío fue comprender el rol que el patrimonio en tales procesos para finalmente proponer nuestra visión del problema que estudiamos.

Al respecto coincidimos en el papel central que ha tenido el Estado en la formación de la nacionalidad chilena, pero advertimos que tal proceso ha sido condicionado, desde sus inicios, por las contradicciones culturales y el mestizaje de poblaciones de diversos orígenes. Las elites gobernantes impusieron su visión de mundo, primero en el período colonial y después en la república, estando en permanente tensión con las distintas identidades culturales, tanto las originarias de los pueblos indígenas, como las que se formaron debido al mestizaje cultural y racial, que se produjo a lo largo de los siglos en los territorios que pretendía administrar el Estado, las cuales reclamaron siempre mayores espacios de autonomía cultural y política, enfrentándose al concepto de Estado Nacional construido en los últimos doscientos años. En las próximas páginas explicaremos las funciones que ha tenido el patrimonio en estos procesos de formación de identidades, tanto de resistencia como de construcción.

### **5.1. El Patrimonio y su vinculación con los Conceptos de Identidad Cultural, Estado y Nación**

Diversas disciplinas se han ocupado de comprender la cultura en sus aspectos materiales, sociales, psicológicos e ideológicos, de analizar sus estructuras conscientes e inconscientes y de su evolución, adaptación y cambio. Se han utilizado distintos enfoques teóricos, contribuyendo todos a explicar el concepto de cultura como un sistema complejo creado por cada grupo humano, que proporciona un conjunto de herramientas, conocimientos, valores y visión de mundo para relacionarse con su entorno natural y social.

Por su parte la identidad cultural es la expresión de pertenencia de un individuo o grupo a una determinada comunidad que constituye un sistema de referencia y de sentido que permite reconocerse como integrantes de una comunidad particular y diferenciarse de otras. Existen distintos marcos teóricos para analizar la identidad, pero para nuestro trabajo utilizamos un enfoque histórico y estructural, comprendiendo que la identidad está en permanente construcción individual y grupal dentro de determinados contextos, proporcionando seguridad, cohesión y reconocimiento, como también continuidad, unidad y autoconciencia, en ámbitos colectivos culturalmente definidos (Larraín, J. 2001). Al respecto sostenemos que la identidad tiene en la memoria un componente básico en su construcción, siendo el patrimonio un aspecto esencial de ella.

Max Weber (1979) definía el Estado en 1919 como una asociación institucional que monopolizaba el poder gobernando una población en un determinado territorio. Eric Hobsbawm (2004) concordaba con esta definición, la cual se puede aplicar a distintas formas de gobierno de sociedades que han logrado cierta complejidad social, económica, política y demográfica, donde el Estado controla y administra los habitantes de un territorio mediante diversos mecanismos para lograr su lealtad e identificación. Tales funciones se facilitaban al existir comunidades que reconocen un origen común, una historia de relaciones sociales o de parentesco y una identidad cultural reconocida como propia. La idea de Estado tiene una connotación más política, pero también otra que añade lo cultural y que entendemos como el Estado – Nación.

Por su parte, el concepto de nación ha sido interpretado de diversas maneras. Hay quienes lo describen como la pertenencia a un pueblo que comparte un mismo territorio o las pretensiones sobre un espacio ancestral, que posee una lengua, historia y tradiciones comunes; en cambio para otros el concepto es más político que cultural, siendo una asociación que puede incluir grupos de distintos orígenes, los cuales se unen y autogobiernan en un territorio. Al respecto, Benedict Anderson (1983), ha definido la nación como una comunidad política imaginada, como un artefacto cultural creado socialmente con fines políticos y económicos por ciertos grupos hegemónicos o aquellos que aspiran al poder, el cual es precedido muchas veces, y sostenido casi siempre después, por el nacionalismo.

Anderson y Hobsbawm argumentan que el concepto de nación tiene poco más de dos siglos, pero otros, como Anthony D. Smith (1994), señalan que es más antiguo, destacando que su esencia es el sentimiento colectivo de un grupo humano. Desde la antropología, la nación tiene su correlato en la etnicidad de una población, que tiene un parentesco de origen real o simbólico, historia, lengua y organización social común. Por tanto, debemos tener presente que la idea de nación tiene, por una parte, en su formación o génesis un componente centrado en la identidad cultural y, por otra parte, un componente formativo en la asociación política de individuos y grupos, que pueden compartir o no, ciertas características culturales.

Los Estados modernos aspiran construir una unidad nacional en los territorios que controlan, basándose en la identidad cultural e historia común de los grupos mayoritarios. Algunos de estos Estados han impuesto, a través de instrumentos políticos, jurídicos y educativos, una conciencia nacional que consideran fundamental para su organización y gobierno de su territorio y población. El nacionalismo por lo general antecede a la formación de las naciones, pero también el Estado, según quien lo administre, puede crear y fomentar la existencia de un nacionalismo acorde a sus intereses que le de proyección y solidez en el tiempo. Pero también hay ejemplos de Estados con poblaciones que tienen distintas identidades que logran constituir Estados plurinacionales, donde la asociación



política de los ciudadanos está por sobre su diversidad étnica, cultural o lingüística.

En ambos contextos, el patrimonio cultural y natural de una comunidad, pueblo, nación o Estado, como también los monumentos conmemorativos, cumplen una serie de funciones identitarias, sociales, económicas y políticas, en atención a su relación con la memoria y la construcción de un proyecto de unidad presente y futura. Entendemos el patrimonio en su sentido más amplio, como la herencia común, familiar e individual del conjunto de bienes materiales e inmateriales que recibimos de anteriores generaciones y que legamos, de manera consciente o no, a las futuras. Tales bienes expresan nuestra comprensión del tiempo, del espacio, de la gente, de los objetos, de las ideas y de las relaciones entre ellos. Por otra parte, el concepto de monumento, en su sentido original, es un hito en el espacio, una construcción o representación simbolizada en un rasgo natural, que buscaba perpetuar la memoria de personas o actos significativos, que una comunidad y sus líderes querían que fueran admirados y/o recordados por las futuras generaciones, los cuales tenían un sentido colectivo, tanto religioso y/o político.

Lo central de los conceptos de patrimonio y monumento radica en su funcionalidad respecto de la identidad y de la memoria, las cuales tienen una mutua dependencia, aunque por una parte, podemos señalar una relación más estrecha entre patrimonio e identidad, y por la otra, entre monumento y memoria. No obstante estos énfasis, el concepto de patrimonio en la actualidad ha logrado gran popularidad incluyendo el de monumento en su sentido conmemorativo, histórico y nacional.

Hoy día el concepto de patrimonio comprende tanto lo cultural como lo natural, incluyendo tanto lugares, conjuntos construidos, bienes inmateriales, tradiciones y saberes como también determinados ecosistemas y todos sus componentes, en los cuales se reconocen ciertos atributos y valores que son importantes de conservar y legar a las próximas generaciones. En el mundo occidental, primero en el Renacimiento y después la en Ilustración, se fue construyendo la noción actual del patrimonio, teniendo la Revolución Francesa una influencia importante en una nueva forma de valorar los bienes heredados del pasado desde una perspectiva nacional y desde una óptica colectiva, rescatando su importancia histórica y artística, además de su función educativa en la formación de una identidad nacional, seleccionando del pasado aquellos bienes que servían a sus fines o construyendo nuevos símbolos que recordar, proceso que también se dio bajo otros contextos en diferentes sociedades, las cuales crearon primero el concepto de monumento histórico y después el de monumento nacional, donde ambos se fusionaban.

Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX diferentes Estados copiaron o adaptaron el modelo francés, creando instituciones y leyes para el resguardo del patrimonio histórico y artístico, aunque algunos ya tenían incorporados tales

conceptos en sus legislaciones e instituciones dedicadas a la protección de sus antigüedades. Algo similar ocurrió en los Estados americanos que lograron su independencia de las potencias europeas, cuya administración estatal colonial adopta el modelo republicano unitario o federal, inspirados tanto en la Revolución Norteamericana como en la Revolución Francesa, los que durante el siglo XIX se concentran básicamente en la construcción de sus estados nacionales, para solo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, iniciar un proceso de creación de instituciones y leyes de protección de su patrimonio, siguiendo en lo central el modelo francés.

La creación de la UNESCO a mediados del siglo XX y la aplicación de sus recomendaciones y convenciones para la protección del patrimonio cultural y natural, permitieron un notable desarrollo del concepto, abarcando hoy todas las manifestaciones humanas, pasadas y presentes, tangibles e intangibles, que son representativas, singulares, significativas y trascendentes de una sociedad o comunidad, las cuales incluyen objetos, estructuras o construcciones, sitios o lugares, tradiciones, saberes, lenguas, etc. En este enfoque, las especificidades del patrimonio cultural y natural, confluyen cada vez más, siendo un ejemplo de ello la protección integral de los bienes culturales y naturales en los parques nacionales y diversas áreas protegidas, como también la implementación de categorías de manejo como los paisajes culturales, tanto rurales como urbanos.

La importancia del patrimonio en las sociedades actuales es ampliamente reconocida, siendo cada vez más un tema de debate público cómo se define lo que es patrimonial, quién lo decide, cómo se conserva, cómo la comunidad puede beneficiarse mejor de su protección, cómo superar las contradicciones latentes entre lo nuevo y lo antiguo, quién debe pagar por la conservación de los bienes patrimoniales y las relaciones entre lo público y lo privado.

En este contexto la apropiación social del patrimonio por parte de las comunidades ha dado mayor profundidad y amplitud al concepto, que sin alejarse del componente esencial que alude al pasado, lo ha vinculado con fuerza a la esencia misma de la identidad cultural de cada pueblo, donde su identificación y protección pasa por un proceso simbólico de apropiación colectiva, que se ha denominado patrimonialización, que involucra tanto las instituciones públicas como privadas, tanto estatales como locales, como a la sociedad civil, siendo el patrimonio un referente simbólico de los valores de identidad, aunque no sean compartidos por todos los estratos sociales y grupos culturales, tal como señala R. Méndez (2002). Complementando lo anterior, Josep Ballart y Jordi Juan i Tresserras (2001), destacan que en este proceso de patrimonialización se produce una seducción entre lo intelectual y lo emocional, siendo en la actualidad, tal como señala A. Hernando (2009), un mecanismo imprescindible en la construcción de las sociedades contemporáneas.

En América Latina, con la excepción de México que se anticipa, podemos situar entre 1910 y 1940, un período donde las elites intelectuales logran instalar el concepto de patrimonio de manera legal e institucional, lo cual se venía gestando desde el siglo XIX, en que lo patrimonial comienza a ser valorado como base de la identidad histórica de cada país, tanto en su origen preeuropeo como colonial, siendo evidentes las contradicciones culturales y sociales entre lo europeo, lo indígena y el mestizaje de diversas poblaciones y culturas, cuya síntesis es diferente en cada país.

Nuestra posición para explicar estos procesos en relación a Chile, sigue el marco conceptual utilizado por el sociólogo Jorge Larraín (1996; 2001), quien adopta una visión histórica y estructural, donde los individuos y grupos van desarrollando sus identidades culturales o crean otras nuevas que el Estado trata de agrupar bajo el concepto de Estado-Nación, promoviendo la unidad cultural de sus integrantes, aunque siempre está latente su diversidad y el mestizaje cultural y racial. La sociedad chilena comparte los aspectos centrales señalados por Néstor García Canclini para los países hispanoamericanos en un devenir no concluido:

*“...de la sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre todo en las áreas mesoamericana y andina), del hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales... Pese a los intentos de dar a la cultura de élite un perfil moderno, recluyendo lo indígena y lo colonial en sectores populares, un mestizaje interclasista ha generado formaciones híbridas en todos los estratos sociales. (García Canclini, N. 1990:71)*

## **5.2. La Génesis y Síntesis Inicial de la Sociedad Chilena en la Conquista y la Colonia**

El territorio actual de Chile posee una gran diversidad geográfica, con una longitud de más de 5.000 km cuyos ejes centrales son la Cordillera de Los Andes y la costa del océano Pacífico, lo que ha permitido la evolución de distintos ecosistemas tales como desiertos, altiplanos, valles templados, bosques, pampas y archipiélagos. En tales ambientes incursionaron y se adaptaron distintos pueblos indígenas. Los primeros llegaron hace unos 14.000 años formando distintas identidades culturales, cuya forma de vida inicial fue la caza y recolección, derivando algunas de estas comunidades milenios después, en ambientes más favorables, hacia la ganadería y la agricultura. Algunos de estos pueblos, ubicados en el norte y centro de Chile, fueron incorporados a finales del siglo XV y comienzos del XVI al imperio andino de los Incas.

Las fronteras culturales de cada uno de estos grupos, en distintos períodos de su historia varió, como también el concepto de ocupación del territorio y su control.

Algunos tuvieron gran movilidad, otros menos. También sus fronteras fueron difusas, existiendo permanentes contactos e intercambios de bienes y migraciones, ocupando territorios que hoy día no son parte de la República de Chile.

La conquista y colonización del continente americano por los europeos, como también la llegada de esclavos africanos, significó la gestación de nuevas identidades que fueron influenciadas por las originarias, algunas de las cuales sobrevivieron, desapareciendo la mayoría ante el impacto de la conquista. En Chile, la conquista española significó el fin de parte de estas culturas indígenas, logrando algunas sobrevivir y defender su independencia hasta el siglo XIX, como fue el caso de los mapuches de la Araucanía. La colonización estableció relaciones de dominación siendo las encomiendas de indígenas, estancias y haciendas, espacios donde el mestizaje racial y cultural fue intenso. La minería del oro en Chile fue el primer foco de atención de la economía colonial, seguida después por la producción agrícola, ganadera y artesanal, en la medida de las necesidades de los mercados internos, de otras regiones americanas y de la metrópoli. La población indígena ubicada al norte del río Bio-Bio, se mezcló con los colonos españoles, formando una sociedad dividida en grupos, estratos o clases sociales por su origen étnico y el mestizaje: españoles, indígenas, mestizos, negros, mulatos y zambos, cuya fuerza de trabajo estaba orientada hacia los colonos españoles (Jara, A. 1971; De Ramón, A. 2003).

A finales del siglo XVIII la elite de la sociedad colonial se autodefinía como españoles americanos, reconociéndose ya ciertas diferencias regionales, respecto de los habitantes de otras administraciones coloniales españolas como las del Perú y del Plata, y otras menores hacia el interior del territorio, siendo posible identificar rasgos distintivos entre la Zona Norte, donde la actividad minera era la más importante; la Zona Central, donde la actividad agrícola y ganadera dominaba el escenario rural a través de grandes haciendas; y la Zona Sur, que tenía una sociedad fronteriza militarizada, con focos de colonización y defensa aislados en Valdivia, Osorno y Chiloé. Siguiendo a algunos autores nacidos en Chile en la segunda mitad del siglo XVIII, como el abate Juan Ignacio Molina, se observa en tales años la maduración de un sentimiento criollo regional sin una dimensión política manifiesta de independencia (Kirsi, B. 2003; Cid, G. y San Francisco, A. 2009).

La formación de identidades regionales se fue gestando generación tras generación, asumiendo los colonos recién llegados las pautas y costumbres ya establecidas en la sociedad colonial en la cual el asilamiento, las características geográficas del territorio y la guerra intermitente contra los mapuches, fueron entregando un sello distintivo a los habitantes (Góngora, M. 2003). Tales aspectos fueron destacados en los escritos de religiosos, militares y poetas de la época. Por cierto se nota en dichos documentos una constante reafirmación de la autoridad

real y de la iglesia a través de las festividades públicas y religiosas, además del carácter épico de la conquista de Chile y la cristianización de sus habitantes originales, realzando algunos cronistas y poetas el valor de la resistencia indígena en la defensa de su tierra.

Más allá del registro histórico y de la memoria colectiva no se constata un interés por instalar monumentos conmemorativos, salvo a finales del siglo XVIII, los que tienen relación exclusiva con la inauguración de grandes obras civiles como los tajamares del río Mapocho en Santiago, el puente de Cal y Canto sobre el mismo río y el camino de Santiago a Valparaíso, siguiendo una antigua tradición ya instalada en España desde la época romana. Al respecto debemos mencionar que en la España del siglo XVIII y comienzos del XIX, el concepto de monumento ya estaba siendo utilizado como bienes del pasado cuya existencia debía ser cautelada por la autoridad, dictándose para España la Real Cédula de 6 de julio de 1803, cuyo objeto era la investigación y rescate del patrimonio arqueológico y monumental del reino, realizándose acciones similares en México y el Perú.

La inexistencia en Chile de ciudades prehispánicas no provocó la búsqueda de antigüedades y tesoros como en otros lugares de América, lo que añadido a la relativa pobreza de la colonia tampoco permitió el desarrollo de una arquitectura monumental, salvo algunos edificios religiosos, civiles y las fortificaciones del sur de Chile, destruyendo y dañando los constantes terremotos muchos de estos inmuebles. Amediados del siglo XVIII llegan religiosos con mejores conocimientos en construcción, destacándose los jesuitas bávaros, que edifican varios inmuebles religiosos en cuyo diseño y ornamentación se aprecia la influencia del barroco en sus diversas expresiones, tanto peruanas como europeas. También a partir de dicha época son enviados por la Corona los primeros arquitectos, ingenieros militares, agrimensores y constructores, españoles, irlandeses e italianos todos, quienes fueron empleados en mejorar las defensas y la construcción de diversas obras públicas, que muestran una tendencia hacia el neoclasicismo, cuyos proyectos enfatizaban armonía, fortaleza, seguridad, sobriedad y unidad, cuya influencia continuó hasta las primeras décadas del siglo XIX (Benavides, A. 1961; Benavides, A. 1988; Binda, E. y Trebbi, R. 1996; Jocelyn-Holt, A. 2008).

A comienzos del siglo XIX, existían en Chile distintas sociedades cuyas identidades culturales tenían grados de diferenciación, pero en contante relación y tensión. Por una parte, una sociedad colonial, cuya identidad era hispanoamericana y adscrita a la autoridad estatal monárquica española, con una población que compartía un sentimiento de origen e historia común, formada en un intenso mestizaje racial y cultural. Por otra parte, una variedad de culturas indígenas, siendo mayoritaria la del pueblo mapuche, que vivía al margen de la autoridad española aunque en permanente relación con ella en los territorios no controlados por la administración colonial; además de otros pueblos indígenas,

principalmente cazadores y recolectores, que vivían en sus territorios ancestrales australes de la Patagonia y en la Cordillera de Los Andes.

Estos dos contextos culturales fundamentales del territorio tenían formas sociales, materiales e ideológicas opuestas, mediatizadas por el mestizaje y las relaciones fronterizas. Unos y otros, en mayor o menor grado, demuestran cambios en sus identidades culturales iniciales, de acuerdo a la historia de sus interacciones, donde la presión por la dominación de unos y la resistencia de otros, fueron configurando realidades diferentes a las que existían en el siglo XVI, aunque algunos elementos ancestrales persistieron en ambos contextos. Sin embargo se debe señalar que si bien la conquista y colonización española fue profunda e impuso por la fuerza su cultura, siendo su lengua, religión e institucionalidad, las que imperaron en los territorios realmente dominados, el mestizaje cultural y racial fue gestando identidades y formas de ser cuya fuerza diferenciadora se haría sentir durante el siglo XIX.

### **5.3. El Patrimonio y los Monumentos en la Independencia, Formación de la República de Chile y Construcción de una Identidad Nacional en el siglo XIX**

A mediados del siglo XVIII la monarquía de los Borbones inicia un cambio del sistema de administración de las colonias, el cual también tuvo por objetivo centralizar el poder y neutralizar la influencia creciente que tenían las élites de terratenientes, mineros y comerciantes de las colonias americanas. El comercio es ampliado, mejor organizado y se produce un crecimiento económico.

La administración colonial de Chile fue menos dependiente del Virreinato del Perú y la elite terrateniente logró progresivamente el control del comercio y las exportaciones, gestándose en ella una conciencia de grupo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la cual no podemos asimilar todavía a una conciencia de tipo nacional. Esta elite, proveniente de la fusión de algunas de las familias de los conquistadores con los nuevos inmigrantes, algunos de cuyos miembros tenían títulos nobiliarios y habían constituido mayorazgos, resentían que los cargos más altos de la administración fueran asignados a españoles peninsulares. Sin embargo tal malestar no se manifiesta entonces en un sentimiento de independencia, no obstante conocer los referentes de las revoluciones norteamericana y francesa, causando esta última, como también los levantamientos indígenas andinos, su preocupación por el estallido social que se podía provocar en el orden colonial y la pérdida de los privilegios que gozaban, aunque los principios que animaban la ilustración y tales movimientos políticos y sociales, influenciarían posteriormente a que parte de esta elite criolla tomara el control del gobierno colonial y decidiera finalmente declarar la independencia a finales de la segunda década del siglo XIX (De Ramón, A. 2003; Kirsi, B. 2003; Jocelyn-Holt, A. 2008).

La invasión francesa de España aceleró este proceso que quizás habría tardado varias décadas más. En la península el pueblo español se rebeló contra las autoridades impuestas por Napoleón y las colonias americanas, imitando acciones similares de algunas ciudades españolas, crearon Juntas de Gobierno, las cuales inicialmente juraron lealtad al Rey, para después derivar en procesos de independencia total.

En Chile la Primera Junta Nacional de Gobierno del 18 de septiembre de 1810 siguió el mismo camino, pero pocos meses después, líderes de la elite local, como José Miguel Carrera, quien había luchado contra los franceses en España, tomaron el control del poder por la fuerza y crearon un primer gobierno autónomo. Tal decisión fue respaldada por el grupo de la elite que se autodenominó patriota, pero resistida por el sector realista y por el Virrey del Perú, quien organizó un ejército integrado principalmente por las tropas acantonadas en el sur de Chile, al cual se agregaron reclutas de la misma zona, derrotando al ejército patriota, logrando retomar el poder e instalando nuevamente un gobernador español en Chile. Las fuerzas patriotas que habían huido a Mendoza se reorganizaron bajo la dirección del General José de San Martín y el General Bernardo O'Higgins Riquelme, quienes formaron el Ejército Libertador de Los Andes gracias al apoyo del gobierno independiente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este ejército cruza la Cordillera de Los Andes a comienzos de 1817, derrota a las fuerzas realistas declarándose la independencia de Chile en 1818, nombrándose como primer Director Supremo al General Bernardo O'Higgins. La resistencia realista se mantuvo por algunos años más en varios enclaves y fortificaciones del sur, hasta que en 1826 se logró derrotar a la última autoridad española que tenía el control de la Isla de Chiloé, subsistiendo algunas guerrillas en los años siguientes (Silva, B. 2003; Maltés, J. y Corti, L. 2003; Zaldívar, T y Sánchez, M. 2009).

La independencia de Chile de la corona española lleva a la elite patriota al poder y a la formación de un estado republicano inspirado en los ideales de la revolución francesa y la ilustración. El proceso revolucionario tuvo el respaldo no declarado oficialmente de Inglaterra y Estados Unidos, la primera interesada en la apertura del comercio y en el declive del poder colonial de España, y el segundo en afianzar su área de influencia en América y expulsar el dominio de las potencias europeas del continente. La independencia de la metrópoli, establece un nuevo escenario político, económico y también social, donde el nuevo Estado republicano, que tiene su fundamento en el gobierno colonial, va generando la idea de una nueva nacionalidad que integre la diversidad existente del territorio que heredaba y comenzaba a administrar.

El Estado republicano controlado por la aristocracia criolla se construiría sobre una población fundamentalmente mestiza, con asentamientos rurales muy dispersos



secularmente fragmentados, con extensos territorios todavía en poder de pueblos indígenas, existiendo identidades culturales diversas no asimiladas a un ideal de nación y fronteras políticas difusas con las otras repúblicas americanas que nacieron en la Independencia. La resistencia ancestral del pueblo mapuche, potenció simbólicamente la lucha por la independencia y la formación del estado republicano en el ideario patriota, no obstante en la práctica estos apoyaron principalmente la causa realista. Décadas después, el Estado republicano chileno, controlaría por la fuérzalos territorios donde los mapuches persistían en mantener su autonomía (Bengoa, J. 2000).

El nuevo Estado que se estaba formando no tenía una identidad nacional y ese fue uno de sus primeros desafíos después de lograr el control militar del territorio que correspondía a la antigua gobernación española, para lo cual debía unificar a sus habitantes y creando una idea de nación y un nacionalismo que contradecía en parte la diversidad cultural existente y que por muchos años se construyó negando la herencia indígena, la herencia africana y la herencia española.

Por tanto los primeros gobiernos patriotas crearon símbolos nacionales como banderas, escudos, canciones e instituciones que expresaran el cambio y que fueran asumidos como propios por la población, impulsando un nacionalismo que sustentara al nuevo régimen, aunque en la primera etapa de la guerra contra el poder colonial español la independencia fue vista por el pueblo como una disputa por el poder entre las clases dominantes. Sin embargo, la represión realista incentivó el movimiento nacionalista emergente, el cual después de la victoria patriota se hace cada vez más popular, generándose por varias décadas un sentimiento anti español (Silva, B. 2003: 60-67; Zaldívar, T. y Sánchez, M. 2009: 73-115).

Declarada la Independencia, el general Bernardo O'Higgins, quien era hijo del prestigiado Gobernador de Chile y después Virrey del Perú Ambrosio O'Higgins, se dio a la tarea de organizar el nuevo estado republicano, debiendo enfrentar la resistencia de los grupos más conservadores, iniciándose un período de inestabilidad política por el control del Estado que duró una década, resultando estos últimos vencedores. No obstante todos asumieron la nueva realidad política y la necesidad de consolidar el gobierno republicano donde no el pasado, sino el futuro, era su principal proyecto.

Durante los primeros gobiernos patriotas de José Miguel Carrera y de Bernardo O'Higgins, existió la intención de construir monumentos para simbolizar la Independencia Nacional, pero nunca fueron realizados. Sin embargo en 1826 el general patriota Juan O'Brien erigió a su costo y por motivos personales, el primer monumento en Santiago, conocido como la "Pirámide del Salto", en honor del patriota Manuel de Salas Corbalán. Por otra parte, el diplomático chileno radicado en París Francisco Javier Rosales Larraín, compró en 1827 al escultor italiano

Francesco Orsolino, un monumento dedicado a la libertad americana, el cual fue adquirido por la Municipalidad de Santiago e instalado en la Plaza de Armas de la capital en 1836. De esta forma, se constatan las primeras acciones de patrimonialización de los sucesos revolucionarios de la independencia, utilizando la función primigenia de los monumentos conmemorativos, iniciativas que se repetirán constantemente, incluso hasta la actualidad, siendo el Estado el único que puede autorizar su erección en los espacios públicos, cautelando así el tipo de memoria social que se desea perpetuar.

La victoria de los conservadores permitió dictar la Constitución de 1833, la cual estableció un sistema presidencialista y un Estado centralista y nacional, fortaleciéndose las instituciones estatales republicanas, donde el poder estaba radicado en la elite terrateniente, minera y comercial, siendo el Estado y el fortalecimiento de la nacionalidad su principal instrumento de articulación, dominación y construcción de la república oligarca del siglo XIX. Para ello fue necesaria la formación de una cultura nacional que se alejara del pasado colonial, siendo política estatal la contratación de profesores y científicos extranjeros que se hicieran cargo de la educación e investigación del territorio. Tal como señala Ricardo Iglesias para el caso de Chile:

*“La construcción de la nación no es una tarea en abstracto, sino que se materializa en la fundación del sujeto nacional. Este se identifica y adquiere conciencia de su relación con el mundo a partir de la vinculación que realiza el Estado por medio de la educación... Convencidos del valor del saber y la enseñanza, el Estado veía en la educación uno de los medios más eficaces a través del cual la naciente república en construcción podía alcanzar el horizonte de la “civilización”, el “progreso” y la integración nacional.”*  
(Iglesias, R. 2009:53)

En la década de 1840 se gesta un movimiento intelectual tanto político como cultural que después del fallecimiento de los primeros patriotas permite que se inicie el proceso de convertirlos en los Padres de la Patria y de erigir en su nombre varios monumentos para su recuerdo ciudadano, lo cual fue avalado por las normas constitucionales de 1823, 1828, 1833, 1925 y la actual de 1980. En forma paralela se impulsa el Museo Nacional, creándose después otros museos especializados en la historia y las artes, aunque siempre estuvieron escasos de recursos.

Para impulsar las obras públicas el gobierno contrata extranjeros como el francés Claude Brunet De Baines en 1848, a quien se le asigna la tarea de crear la primera escuela de arquitectura en la Universidad de Chile. Por entonces, las ciudades chilenas y su arquitectura mantenían su tradicional característica hispana colonial, teniendo Santiago edificios públicos con un predominio del estilo neoclásico dado por los arquitectos e ingenieros reales de las últimas décadas

coloniales. Sin embargo, la élite dirigente liberal buscaba alejarse del pasado colonial español que consideraba atrasado y aspiraba a copiar los modelos arquitectónicos que se estaba dando París. De tal manera que durante la segunda mitad del siglo XIX, Santiago fue cambiando su fisonomía colonial siguiendo dicho patrón y el de otras ciudades europeas, copiando también la elite su estilo de vida, creándose parques, avenidas, edificios, plazas, museos, monumentos, esculturas, alumbrado y otros adelantos de la época, que reflejaran el progreso y el deseo de transformación urbana.

En la década de 1870 Benjamín Vicuña Mackenna sería el primer político e intelectual en proponer y producir culturalmente un puente entre el futuro que quería la elite y el pasado que habían renegado las anteriores generaciones, todo dentro del espíritu nacional que se estaba forjando. Para tal desafío rescató parcialmente el legado español como origen de la sociedad chilena, superando la visión de rechazo que estaba impuesta desde hacía décadas y lo incorporó como parte de la identidad chilena, sin que fuera un peso negativo, pero siempre mirando al futuro que representaban las naciones más desarrolladas. Hasta comienzos del siglo XX hay un aumento de jóvenes de la elite becados a Europa para estudiar arquitectura, arte y otras disciplinas, cuya influencia fue importante cuando regresaron a Chile.

Durante el siglo XIX Chile tuvo tres guerras que potenciarían una conciencia nacionalista popular. La primera contra la confederación Perú-boliviana (1836-1839), que si bien tuvo lugar en tierras peruanas, provocó un fervor nacionalista y un sentimiento de unidad nacional; la segunda fue la guerra naval contra España (1864-1866), en la cual la flota española bombardeó Valparaíso, lo que incentivó otra vez más el nacionalismo y reavivó la imagen negativa del pasado colonial que se había cultivado en las décadas anteriores; y la tercera fue la Guerra del Pacífico (1879-1883) contra Perú y Bolivia, debido a la cual Chile logró incorporar al territorio nacional las provincias peruanas de Arica y Tarapacá, y la provincia boliviana de Antofagasta, conflicto que sintetizó la idea nacionalista de Chile como país guerrero y victorioso. Además de estas guerras externas, continuaron los enfrentamientos con los mapuches de la Araucanía, que concluyen con la ocupación militar de ese territorio hacia 1880. Tal como señala Góngora, si consideramos la guerra de la Independencia, cada generación de chilenos del siglo XIX vivió un conflicto armado que incidió en la formación del Estado primero y después de la nacionalidad (Góngora, M. 2003:66-67).

Los sucesivos gobiernos chilenos se preocuparon de controlar las regiones extremas y las fronteras del país estableciendo una férrea administración con funcionarios trasladados desde el gobierno central, instalación de unidades militares, creación de escuelas fiscales y programas de educación escolar que socializaran a los niños con los símbolos patrios y la chilenidad (González, S. 2002, 2009).

Los héroes caídos en combate durante la Guerra del Pacífico fueron objeto homenaje mediante numerosos monumentos que sirvieron para potenciar el nacionalismo chileno. Situación similar ocurrió con la celebración del Centenario de la Independencia Nacional en 1910, en cuyo contexto se recordaron a los padres de la Patria y a los personajes que se destacaron en la formación del Estado Nacional durante el siglo XIX como también los principales sucesos históricos.

En forma paralela a la construcción oficial de la memoria del Estado, el Gobierno crea en 1887 la Comisión Permanente de Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, la cual es reformulada en 1903, teniendo un favorable impacto en el ambiente artístico nacional. En 1909 el Diputado Jorge Huneeus Gana asume como Ministro de Justicia y de Instrucción Pública, dando nuevas atribuciones a esta comisión transformándola en el Consejo Superior de Letras y Bellas Artes, sentando las bases para proponer el primer proyecto de ley sobre conservación de monumentos históricos de 1910, el cual finalmente no fue tramitado en el Congreso Nacional.

No obstante ello debemos destacar dicho proyecto de ley de Conservación de Monumentos Históricos, ya que se realizó una acuciosa investigación legislativa en Europa y Estados Unidos, siendo clara la influencia francesa en los conceptos utilizados como monumentos históricos, conservación, restauración y también en la institucionalidad que se proponía para Chile. Esta iniciativa del Gobierno llama la atención por ser uno de los primeros intentos de legislación sobre la materia en América Latina, la cual simbólicamente contribuye a la formación de la identidad nacional.

Concluyendo al respecto, durante el siglo XIX, estamos en presencia de un doble proceso de construcción de la memoria histórica, que es esencial en el concepto de patrimonio y de identidad nacional en Chile. Por una parte, un esfuerzo oficial en establecer símbolos unitarios como la bandera, escudo e himno nacionales, como también la selección y construcción de los discursos oficiales de los eventos y personajes históricos que deben ser recordados como fundacionales de la nueva nacionalidad, los cuales motivarán las festividades civiles y militares nacionales y la erección de los monumentos conmemorativos. Y, por otra parte, en un proceso más lento, donde se entrelazan discursos contradictorios, tanto oficiales como populares, de reinterpretar el pasado colonial y republicano, el pasado y actualidad indígena y la diversidad cultural de todo el territorio administrado por el Estado chileno. No obstante el discurso oficial del Estado, como también el popular, asumirán finalmente que la identidad nacional de Chile es el producto del mestizaje e integración cultural y racial ocurrido a lo largo de su historia, el cual logra su expresión nacional unitaria en el siglo XIX, donde los pueblos indígenas

son incorporados por la fuerza pero los más numerosos, como el pueblo mapuche, resisten su asimilación al Estado – Nación.

#### **5.4. El Patrimonio y los Monumentos en la formación de una identidad cultural nacional más plural y diversa en el siglo XX y comienzos del siglo XXI**

En las primeras décadas del siglo XX se precipitan una serie de procesos, que llevan al fin de la dominación oligárquica, cuya elite controló y administró el poder del Estado sin contrapeso del resto de la sociedad durante el siglo XIX. En América Latina, y Chile no era la excepción, las nacientes repúblicas se esforzaron por crear una identidad cultural nacional desde arriba, desde el Estado dominado por elites conservadoras y liberales, las cuales impusieron discursos nacionalistas y progresistas, que negaban y desvalorizaban las culturas y tradiciones populares, fueran mestizas, criollas o indígenas. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, diversos sectores de la sociedad, descontentos con el modelo político, económico, social y cultural imperante, van acumulando fuerzas que provocarán cambios más o menos radicales en varios países.

Como antecedente de este proceso en Chile, al celebrarse los primeros cien años de vida independiente en 1910, el país ya mostraba síntomas de una crisis no solo política, sino también social, donde la identidad nacional sería debatida. En este contexto varios intelectuales expresan su malestar por la excesiva influencia francesa, británica y norteamericana, creando varios de ellos movimientos que buscan redescubrir y valorar lo propio, pero que también desean explorar nuevos referentes y paradigmas. La arquitectura, el arte y la creación literaria dan cuenta de este proceso, abandonándose en el caso de la arquitectura progresivamente los viejos estilos y adoptándose otros nuevos, que se inspiran tanto en lo propio como en lo foráneo, como lo demuestra el movimiento neocolonial y también la influencia del Art Nouveau y el Art Decó americano (Eliash, H. y Moreno, M. 1996:46).

El Centenario también permite una nueva mirada al pasado, el cual ya no está atado al conflicto y trauma de la independencia, permitiendo un nuevo tipo de acercamiento a España, reconocida ya como la Madre Patria. Ello impulsa la creación de nuevos museos, como es el caso del Museo Nacional de Bellas Artes y del Museo Histórico Nacional, al cual se agregó la construcción de un nuevo edificio para la Biblioteca Nacional, tareas todas en que el estado oligarca se empeñó concretar como símbolos de la identidad nacional y del progreso.

Como clara señal de los nuevos tiempos, a comienzos de la década de 1920, asume la presidencia de Chile Arturo Alessandri con un amplio respaldo de las clases medias y obreras, proponiendo un programa con innovaciones sociales y

políticas (legislación social, fortalecimiento del poder ejecutivo frente al que tenía el Congreso, código del trabajo, impuesto a la renta, etc.). Sin embargo la inestabilidad política llevó a los militares al poder, quienes demandaron reformas aún más profundas, que el Congreso Nacional, aún dominado por la élite oligarca, se negaba a conceder. Ante la crisis política Alessandri decide abandonar el país, pero retorna al poder logrando dictar una nueva constitución, para finalmente renunciar pocos meses antes del fin de su mandato.

En este convulsionado contexto político se dicta el Decreto Nº 3.500 del 19 de junio de 1925 sobre monumentos históricos, mientras aún gobernaba el Presidente Alessandri y, poco después, el Decreto Ley Nº 651 del 17 de octubre de 1925, que crea el Consejo de Monumentos Nacionales, cuando la presidencia de la República estaba a cargo de Luis Barros Borgoño. Ambos decretos tenían como antecedente directo la realización la Quinta Conferencia Panamericana realizada en Santiago de Chile en 1923, pero también uno previo que quedó en el olvido, o no se quiso mencionar, por ser iniciativa de un gobierno oligarca anterior, el proyecto de ley de conservación de monumentos históricos de 1910, del cual copia parte de su contenido.

El decreto de 1925, que crea el Consejo de Monumentos Nacionales, enuncia la responsabilidad del Estado respecto de la conservación del patrimonio relacionado con los principales eventos de la historia del país y su significación para la identidad nacional, mediante el cual se declararon los primeros monumentos históricos del país, entre los que se contaron varias fortificaciones coloniales. Esta nueva institucionalidad patrimonial fue importante, pero su funcionamiento fue débil, y pasaron varias décadas para que su accionar fuera más visible, siendo este más bien producto de las personas que la integraron que de los sucesivos gobiernos.

Por otra parte en 1929 se crea la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), entidad que integró la antigua Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional, el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Bellas Artes y los Museos de Valparaíso, Concepción y Talca, creados todos durante el siglo XIX y comienzos del XX, estableciendo así la columna vertebral de los servicios del patrimonio del Estado hasta la actualidad.

Debemos destacar los orígenes de esta primera legislación como una iniciativa impulsada por el Ministro Jorge Huneeus Gana de orientación liberal, amante de las artes y coleccionista, que pertenecía a la elite de los gobiernos oligarcas de principios de siglo, quien apoyó la nueva legislación, la cual, debido a los azares de la política contingente de entonces, solo logra concretarse 15 años después.

Con la Constitución de 1925 y la legislación sobre protección de monumentos históricos se consolidan dos ámbitos del patrimonio que discurrían por caminos

diferentes, aunque se cruzaban frecuentemente. El primero de ellos era el del concepto de monumento conmemorativo, que una vez más fue ratificado como una potestad de los poderes del ejecutivo y del Congreso, al cual el presidente y los congresistas acudirían para fijar en la memoria de la ciudadanía los hechos y personas que se querían perpetuar. Por otro lado, el concepto de monumento histórico, que incluía construcciones, ruinas, edificios y lugares en donde el valor histórico, de importancia para el Estado y la Nación, justificaba su protección legal. Por cierto ambos eran designados por la administración estatal. Pero el segundo abre la puerta a un conjunto de bienes más amplio, en donde la ciudadanía irá influyendo en la protección de aquellos que reflejen la identidad y memoria vital para cada uno de sus grupos integrantes, con una mirada que será cada vez más diversa en lo cultural, natural, material e inmaterial.

En las siguientes décadas la sociedad chilena experimenta cambios importantes, logrando la clase obrera y, especialmente la denominada clase media emergente, una inclusión creciente y mayor influencia en la gestión del Estado, gracias a su mejor educación y los movimientos sociales y políticos que fueron su correlato. Por su parte, la elite tradicional debió adaptarse a la nueva realidad, comprendiendo que su accionar y mantención de sus privilegios debía incorporar nuevas estrategias, en las cuales estuvo la incorporación de algunos de los líderes sociales o políticos en su grupo social, sea por alianzas matrimoniales o por su vinculación en las nuevas empresas que el Estado crea, al instalarse un nuevo modelo económico que busca reemplazar parte de las importaciones favoreciendo la producción nacional.

Por otro lado, diferentes historiadores e intelectuales iniciaron un revisionismo de la historia nacional del siglo XIX, cuyas orientaciones estuvieron marcadas por el hispanismo, el indigenismo y una mejor comprensión del mestizaje como tema clave de la identidad nacional, las cuales influyeron en los programas escolares y en la reafirmación de la nacionalidad chilena, siendo constante en esta búsqueda la contradicción entre lo propio y lo ajeno, entre la revitalización del pasado y la búsqueda del progreso (Larraín, J. 1996). Ejemplos de estos cambios y su influencia en la arquitectura y el urbanismo impulsados desde el Estado, son el desarrollo del Plan para la ciudad de La Serena y la renovación de Barrio Cívico de Santiago.

El primero de estos ejemplos fue impulsado personalmente por el Presidente Gabriel González Videla a finales de la década de los 40, quien buscaba revitalizar la ciudad de La Serena, de donde era originario, otorgándole un estilo que denominó “renacimiento colonial”, el cual era parte de un plan de desarrollo económico y social para toda la Provincia de Coquimbo. Al respecto, años más tarde, en sus memorias, el ex Presidente recordaba sus intenciones al ejecutar este proyecto:



*“Por eso al dar a La Serena el estilo arquitectónico de una raza que es la nuestra, no sólo se rendía homenaje a la Madre Patria, sino que se daba a aquélla una personalidad, un colorido y una belleza plástica que ninguna otra ciudad de Chile puede exhibir.” (González Videla, G. 1975: 1133-1148)*

El segundo ejemplo se venía madurando desde finales de la década de los 20, tanto por la Municipalidad de Santiago como por el Gobierno Nacional, contratando para ello al célebre urbanista austriaco Karl Brunner, entre otros arquitectos chilenos, cuyo proyecto buscaba crear un barrio cívico en torno al Palacio de la Moneda en Santiago, edificio colonial que previamente fue ampliado hacia la Alameda Bernardo O’Higgins replicando su propio diseño, concentrando a su alrededor y en una nueva avenida que se abrió hacia el sur, la construcción de edificios de altura gubernamentales, inspirados todos en un estilo arquitectónico racionalista moderno, fortaleciendo así la imagen del Estado y particularmente del poder ejecutivo presidencial, que la nueva Constitución de 1925 establecía. Tal iniciativa tenía sus antecedentes en proyectos anteriores, algunos de las cuales plantearon abrir avenidas diagonales en la capital y la construcción de un nuevo palacio de gobierno de estilo francés frente a la Moneda que no llegaron a ejecutarse.

Sobre lo anterior es necesario hacer una reflexión que integre aspectos históricos y urbanos, junto con visiones políticas y de desarrollo de la capital, que tuvieron varios mandatarios y las elites gobernantes desde la independencia, en su concepción de expresar el poder del Estado. Debemos recordar primero el proyecto del Director Supremo Bernardo O’Higgins sobre la antigua Cañada de San Francisco, que constituía el borde sur de la ciudad entonces, y transformarla en la Alameda de Las Delicias, para que fuera el nuevo paseo público ciudadano, la cual es actualmente la avenida principal de la ciudad que lleva su nombre. En dicha alameda Bernardo O’Higgins diseñó un óvalo central y plantó en su interior el árbol de la libertad, simbolizando el nuevo orden que se distanciaba del foco del poder político y religioso colonial radicado en la antigua Plaza de Armas.

Décadas después, el Presidente Manuel Bulnes, trasladaba el Ejecutivo desde las antiguas dependencias de la Real Audiencia y del Palacio de los Gobernadores españoles a la Casa de Moneda, donde se radicaría la sede del Gobierno y de la Presidencia. Con esta acción se desplazaba espacialmente, pero también simbólicamente, el poder estatal republicano desde su eje colonial en la Plaza de Armas, hacia un nuevo centro político y administrativo, desde donde se comenzaba a construir la nueva ciudad republicana hacia el sur y el poniente, a la cual la elite del siglo XIX se trasladó, dejando atrás el pasado colonial e invocando su ideal de progreso y de los nuevos tiempos que lideraba. No obstante ello, la Presidencia de la República, heredera del poder real de los gobernadores coloniales, se instalaba en el edificio de mayores proporciones construido por la

administración española, dedicado originalmente a la acuñación de monedas, función que continuaría teniendo hasta comienzos del siglo XX.

Posteriormente se realizarían las obras del centro cívico que continuarían por décadas, sin concluirse totalmente los proyectos originales. El Gobierno Militar de Augusto Pinochet en los años setenta también realizaría cambios simbólicos en este espacio ciudadano, instalando en uno de sus ejes el Altar de la Patria, sobre el cual estaría el monumento a O'Higgins y la "Llama de la Libertad" y en el subsuelo un mausoleo. Con la vuelta de la democracia, los gobiernos de la Concertación remodelaron dicho espacio, retirando la "Llama de la Libertad" que simbolizaba al Gobierno Militar y construyeron frente a la Moneda la "Plaza de la Ciudadanía" y bajo ésta un centro cultural que inauguró el Presidente Ricardo Lagos. Finalmente, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en ocasión de celebrarse el bicentenario de la Independencia instaló un asta monumental para la bandera nacional y colocó al lado del monumento a O'Higgins el monumento a José Miguel Carrera, integrando simbólicamente ambos padres de la patria. Como vemos, este espacio ha sido y será un lugar simbólico del Estado disputado por quienes ejercen el poder, democráticamente o no, en nombre de los ciudadanos y de la nación.

En cuanto a la declaración de monumentos, durante la primera mitad del siglo XX continúa el interés por las fortificaciones coloniales del sur, lográndose además proteger legalmente las primeras iglesias y algunas edificaciones coloniales de Santiago, varias de las cuales estaban amenazadas por las obras viales. Al mismo tiempo que algunos profesionales e instituciones luchaban por proteger el patrimonio construido, otras autoridades no consideraban tales bienes como valiosos, sino más bien como un obstáculo al progreso, promoviendo planes de renovación urbana, lo cual será constante hasta la actualidad.

Este período de transición hacia el predominio de la arquitectura moderna abarca varias décadas y coexisten diversos estilos como el art nouveau, art déco, neocolonial, el historicismo y la arquitectura académica. En las nuevas construcciones el Estado tuvo un papel central, financiando importantes edificaciones públicas y proyectos de construcción de viviendas populares masivas de bajo costo, donde tales estilos e ideas se expresaron. A finales de los años 50, el movimiento moderno de la arquitectura ya era el preferido, siendo modelos a imitar los proyectos de Mies van der Rohe, Gropius y Le Corbusier, para dar paso después a la influencia de la arquitectura norteamericana que predomina hasta la actualidad (Eliash, H. 1997).

Hacia 1960 varios sectores de la sociedad chilena se movilizan para impulsar cambios más profundos en las estructuras sociales, económicas y políticas del país, potenciados en atención a lo que estaba ocurriendo en Europa, Estados Unidos y otros países americanos. La búsqueda de una nueva identidad cultural

nacional es patente en este período, donde las generaciones más jóvenes privilegiaban todo aquello que promoviera el cambio de los patrones tradicionales de conducta y gustos. Unos se inclinaron por lo propio, lo nacional, lo popular, lo latinoamericano; en cambio otros suscribieron la cultura pop internacional. En este contexto asume la Presidencia de Chile Eduardo Frei Montalva con un amplio respaldo político, logrando el apoyo del Congreso Nacional para la chilenización de la gran minería del cobre, impulsar un modelo mixto de propiedad e iniciar una reforma agraria que modernizara el sector rural y terminara con las estructuras económicas y sociales ancestrales y patriarcales que allí imperaban desde la Colonia.

En este contexto, entre 1963 y 1969, el Consejo de Monumentos Nacionales logra la declaración de 19 nuevos monumentos históricos, avanza en su institucionalización, pero lo más importante es que después de décadas de insistencia, logra sensibilizar a las autoridades de gobierno para la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso Nacional y así actualizar la legislación que estaba vigente desde 1925.

El concepto de patrimonio que animaba la nueva legislación, que tenía en cuenta la Cata de Venecia, se inspiraba en la comprensión de los valores y significados que determinados bienes culturales tienen, los cuales contenían un mensaje espiritual del pasado de la Humanidad y constituían un patrimonio común y una autenticidad que debía ser conservado por las nuevas generaciones. Al mencionar los bienes culturales se expande el concepto de monumentos que hasta entonces se tenía, siendo objeto de ser considerado como patrimonio todo tipo de bienes, sean materiales o inmateriales, como también el entorno natural y social en el que están insertos.

A partir de dicho contexto, la legislación chilena incorporó una nueva categoría de monumento nacional que no estaba en la legislación de 1925, que fue denominada como zona típica, la cual fue pensada para proteger áreas históricas de una ciudad o pueblo, un barrio determinado, una calle, una plaza o el entorno de un monumento histórico, estén situados estos en el ámbito rural o urbano. La nueva legislación patrimonial de 1970, estableció que el Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo público dependiente del Ministerio de Educación, encargado de la declaración, protección y tuición de los monumentos nacionales, que son aquellos bienes del patrimonio cultural y natural de la nación que poseen una importancia científica, histórica, arquitectónica, artística y social. Este enfoque más amplio de patrimonio permite incluir una mayor diversidad de bienes culturales y naturales bajo la protección estatal. Así también el concepto de valor, significado e importancia de los bienes es más complejo y profundo que la sola referencia a su antigüedad e historia, incorporando también aspectos ambientales, dando señales de una comprensión más integral del patrimonio.

A finales de los años 60 y comienzos de los 70 el discurso oficial de la identidad cultural nacional es más diverso e inclusivo de lo popular, existiendo en la juventud una predisposición a aceptar e incluir como propios, conceptos, costumbres y discursos identitarios globales. Es una época de exploración ideológica de nuevos referentes, en los cuales unos se inclinan hacia los modelos externos y otros, sin renunciar a la perspectiva internacional, buscan en lo popular y regional los nuevos discursos que los identifiquen.

En 1970 asume Salvador Allende como Presidente de Chile gracias a una coalición de partidos de izquierda, con un programa que buscaba profundizar los cambios sociales, económicos y políticos alcanzados hasta entonces, en donde lo popular nacional y los movimientos que promovían la integración cultural latinoamericana, se expresaron plenamente en el arte, la música, la pintura, y el teatro. En atención a la nueva legislación de monumentos y la modernización de su institucionalidad, se constata en sus actos su preocupación en declarar un rango más amplio de bienes patrimoniales, sin dejar de lado aquellos tradicionales, incorporando oficinas salitreras, casas de hacienda, sitios geológicos y arqueológicos, edificaciones coloniales y republicanas del siglo XIX, sin dejar de lado el interés por los monumentos conmemorativos. No obstante debemos mencionar que la atención central del gobierno estaba en lo político y cómo impulsar su programa de reformas.

El 11 de septiembre de 1973 tiene lugar un golpe militar cuya dirección la asume el General Augusto Pinochet. El bombardeo del Palacio de Gobierno, el suicidio del Presidente Allende, las detenciones masivas, torturas, fusilamientos sumarios y desapariciones de personas, seguidas del exilio de miles de chilenos, causaron un gran impacto en la vida nacional con repercusiones internacionales. La Junta Militar impuso un programa político cuyo ideario era esencialmente conservador en cuanto a los valores y neoliberal en lo económico, estableciendo un gobierno dictatorial que concebía el país como homogéneo en lo cultural. Años después del Golpe Militar, el historiador Mario Góngora, de tendencia conservadora, advirtió que el modelo neoliberal impulsado por sectores empresariales tenía contradicciones profundas con el Estado que se había formado en Chile desde su independencia, señalando que:

*“El neoliberalismo no es...un fruto propio de nuestra sociedad...sino una “revolución desde arriba”, paradójicamente antiestatal, en una nación formada por el Estado.” (Góngora, M. 2003:301)*

La nueva visión del Estado es impuesta por los militares y el sector neoliberal en la Constitución Política de 1980, en donde la propiedad privada es colocada como un valor máximo y el rol del Estado es considerado subsidiario y no central en el desarrollo de la sociedad. No obstante, en dicha constitución se señala que la protección e incremento del patrimonio de la nación es uno de los deberes del

Estado. De esta manera, aunque incipientes, aparecen por vez primera como garantías constitucionales, normas sobre el patrimonio cultural y el patrimonio ambiental.

Durante el Gobierno Militar, desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990, se declararon 309 monumentos nacionales y el Consejo de Monumentos Nacionales tuvo un promedio de 10 sesiones anuales. Podemos decir que la legislación de 1970 logró avanzar en dicho período en cuatro aspectos fundamentales: constituirse en un organismo técnico al alero de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, validado por el Estado en sus aspectos formales, pudiendo sesionar regularmente con la participación de los representantes de instituciones públicas y privadas que indicaba la ley; declarar bienes culturales y naturales como monumentos nacionales en las diversas categorías patrimoniales, con un promedio de 18 declaraciones anuales; aplicar la legislación de manera creciente, otorgando permisos de excavaciones arqueológicas, proyectos de restauración, instalación monumentos públicos y préstamos de colecciones patrimoniales; consolidar una vinculación jerárquica bajo la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos a través de sus directores, que tenían la vicepresidencia ejecutiva de la entidad, impulsando varios convenios con instituciones del Estado que facilitaron y contribuyeron a su quehacer, particularmente la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Nacional Forestal.

No obstante lo anterior, el Consejo de Monumentos Nacionales continuó con falencias y debilidades estructurales que comprometieron su trabajo y credibilidad a lo menos en tres aspectos esenciales: no lograr un presupuesto fiscal permanente para que la institución funcionara; no pudo concretar medidas económicas en favor de la conservación de los monumentos; y no logró que se dictaran los reglamentos que la ley de monumentos nacionales de 1970 establecía.

En la década de los 80 vastos sectores de la sociedad chilena se oponen crecientemente al Gobierno Militar, lo que unido al aislamiento internacional del régimen, motivó al General Pinochet a iniciar una transición pactada hacia la democracia, concordándose con los líderes políticos de la oposición un plebiscito en 1988, donde la ciudadanía votó mayoritariamente por concluir el régimen militar y se convocaron elecciones generales en 1989, triunfando ampliamente la oposición.

Los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010) y Sebastián Piñera (2010-2014) avalaron en lo central el modelo económico neoliberal pero minimizando sus impactos adversos en los sectores sociales más desprotegidos, incluyendo en sus programas aspectos antes ignorados o emergentes, tales como el medio ambiente, la cultura y los pueblos indígenas. Si bien la ciudadanía compartió

inicialmente que los costos de la transición y el tutelaje militar de la democracia no permitían medidas más profundas, con el correr de los años se gestó una insatisfacción creciente que llevó a la derrota de la Concertación en las elecciones presidenciales de 2009, siendo elegido el candidato de la derecha Sebastián Piñera por un escaso margen electoral.

En las últimas dos décadas la sociedad chilena ha transitado, en su definición tradicional de identidad nacional unitaria, hacia una más diversa y tolerante, no obstante subsistir grupos y sectores conservadores en diferentes temas. En este contexto, las ideologías políticas tradicionales de los años 60 y 70, cuyas orgánicas partidarias sucesoras se reorganizan a finales de los 80 para lograr la democracia, logran entusiasmar a la ciudadanía con los cambios anunciados en su primera etapa de gobierno, para después caer en un descrédito constante, debido a la política de consensos que implicó la transición, no obstante que la economía del país mejoró.

El Gobierno de Aylwin abordó esencialmente a los temas políticos de la transición, los derechos humanos y las relaciones cívico-militares, no existiendo espacio para el patrimonio cultural, aunque diversos grupos de la sociedad civil y algunas autoridades reconocieron la urgencia de renovar las políticas e instituciones culturales, cuestión que sería abordada en los gobiernos siguientes, pero especialmente en el Gobierno de Lagos, en el cual se crea una nueva institucionalidad: el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Concluyendo al respecto, podemos decir que este período permitió consolidar al Consejo de Monumentos Nacionales como un organismo técnico del patrimonio monumental en Chile, se logró conformar una secretaría ejecutiva con un grupo de profesionales especializados en el patrimonio, disponer de un presupuesto fiscal que aumentó cada año, aunque siempre insuficiente a las tareas del organismo, y tener una presencia territorial que nunca antes tuvo.

En las últimas dos décadas hubo un aumento sostenido de declaraciones de monumentos nacionales en sus diversas categorías, alcanzando alrededor de 600, dándosele mayor énfasis a aquellas que abarcaban mayor superficie y número de inmuebles. Al mismo tiempo se logró inscribir seis sitios en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, avanzando en los aspectos normativos y de gestión, diseñándose instructivos de intervención para las zonas típicas y la realización de los primeros planes maestros o de manejo de algunos bienes patrimoniales. No obstante lo anterior, no se logró modernizar la legislación, salvo modificaciones parciales, quedando pendiente obtener medidas económicas y financieras en favor de la conservación del patrimonio protegido en manos de particulares, situación que ha sido una demanda permanente del sector privado. Pese a ello se elaboró en 1997 un “Anteproyecto de Ley sobre la Protección y Fomento del Patrimonio Cultural de la Nación” y, en 1998, se formuló una “Propuesta de Política Nacional

de Protección, Conservación y Desarrollo del Patrimonio Cultural”, impulsándose diversos proyectos de alcance nacional como la instalación del Día del Patrimonio Cultural de Chile.

El Estado debió asumir progresivamente en su institucionalidad, la realidad diversa de la sociedad chilena pudiendo los pueblos indígenas adquirir nuevos derechos garantizados por ley. Este aspecto pluricultural de la sociedad chilena reconocido por el Estado, aunque ello no significa autonomía territorial para los pueblos indígenas, es una diferencia central respecto de la visión de comienzos del siglo XX, donde gran parte de la sociedad chilena consideraba a los indígenas de manera contradictoria e incluso extraños a la nacionalidad chilena. Al respecto, los gobiernos de la Concertación iniciaron varios programas en favor de su desarrollo, no obstante el pueblo mapuche ha reclamado por su autonomía cultural y política del Estado chileno de manera cada vez más persistente.

No debemos olvidar que los pueblos indígenas y especialmente el pueblo mapuche, constituyen un referente clave en la formación de la nacionalidad chilena, sea por oposición, sea por el profundo mestizaje racial y cultural a lo largo de casi cinco siglos. Para la sociedad chilena el pueblo mapuche pasa por ciclos de aceptación y de negación, debatiendo el Estado entre reconocer la especificidad propia de dicho pueblo como nación y su deseo de integrarlo y asimilarlo a la nacionalidad chilena.

Durante el siglo XX la sociedad fue haciéndose más compleja, demostrando el Estado ser el mejor instrumento de su unidad política y cultural, cuya administración ha sido disputada tanto por la oligarquía como por los estratos medios y populares emergentes. A comienzos del siglo XX las clases altas debieron admitir el ascenso de las capas medias de la sociedad y compartir el poder político del Estado, perdiendo el control total que disfrutaron durante todo el siglo XIX. Sectores políticos de diversos signos se alternaron en la administración del Estado, propiciando modelos de desarrollo centrados primero en la industrialización y modernización de país, con políticas proteccionistas, que incluso fueron extremadas en los gobiernos de los frentes populares de la primera mitad del siglo XX, y en los gobiernos de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular en la segunda mitad de dicho siglo. Para pasar después a una reacción conservadora que por la fuerza logró imponer un modelo neoliberal centrado en la competencia y apertura a los mercados internacionales, donde prima la concentración de capitales que administran las principales riquezas del país. La elite actual que detenta el poder económico es diferente de la que existía a principios del siglo XX, incluyendo progresivamente a los profesionales y empresarios más exitosos en lo económico y político no obstante seguir tendencias distintas respecto de los valores más conservadores o liberales que deben guiar la sociedad.



La modernización de la sociedad durante el siglo XX ha sido profunda en determinados aspectos. Hoy día más de un 80% de la población vive en ciudades, cifra que era inversa a comienzos del siglo XX. Por otra parte el Estado y los grupos mayoritarios de la sociedad han debido reconocer la diversidad cultural originaria y regional que el país tiene, cuyas comunidades exigen mayores cuotas de poder de decisión local e incluso autonomía, cuestión no imaginada hace cien años atrás. Síntomas de este proceso son las demandas de las regiones por una descentralización más profunda del Estado y la exigencia permanente porque cada región pueda elegir sus máximas autoridades administrativas y que éstas no sean designadas por el Presidente de la República. Lo mismo ocurre en sus procesos de formación y consolidación identitaria, en donde algunas regiones del país ya han logrado inventar y legalizar sus propias banderas, que son izadas junto a la nacional, como es el caso en las regiones de Atacama y Magallanes.

Paralelamente la sociedad civil, muy activa políticamente en los años sesenta, comienzos de los setenta y en las movilizaciones sociales que permitieron lograr la vuelta a la democracia en los ochenta, para entrar después en un cierto letargo, comienza a organizarse a finales de la primera década del siglo XXI en referentes diferentes a los tradicionales después de cierta apatía durante los gobiernos de la Concertación.

En lo cultural la mayor parte de la sociedad es en la actualidad más abierta y permisiva a las diferencias que ayer, pero sectores minoritarios conservadores, amparados en leyes y costumbres anacrónicas, se han resistido a cambios más profundos. En este contexto la noción de patrimonio es radicalmente distinta de la existente hace 50 años, incorporando distintos bienes y territorios culturales, con una comprensión más holística vinculados a los modos de vida actuales que se ven amenazados por la globalización. El aumento de la conciencia sobre el valor del patrimonio incidió en un crecimiento de las demandas sociales para otorgar protección oficial a diversos bienes culturales y sitios patrimoniales.

La protección del patrimonio cultural y ambiental a través de los planes de ordenamiento territorial, sólo se ha desarrollado progresivamente en Chile desde la década de los 90. Explica lo anterior la ausencia de especialistas en patrimonio en la mayoría de las municipalidades. También es relevante mencionar ciertas confusiones y conflictos institucionales entre las entidades públicas nacionales y locales que se ha ido resolviendo poco a poco. Sin embargo subsisten los conflictos de poder entre las instituciones respecto de cuál de ellas o qué normas legales son de mayor rango.

Como hemos advertido antes, tanto en Chile como en la mayoría de los países, salvo algunas excepciones, existe una separación legal e institucional en el tratamiento del patrimonio natural y cultural. No obstante ello, la realidad del patrimonio en determinados contextos territoriales no puede dividirse de manera

tan arbitraria, y esta situación se da particularmente en los ambientes naturales o poco intervenidos por los seres humanos, algunos de los cuales han sido protegidos por legislaciones especiales, creándose categorías de manejo como los parques nacionales y otras áreas protegidas.

Los proyectos nacionales de identificación, conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio Cultural en Chile partieron hace algunas décadas. No obstante ello hay que señalar que previamente, tanto a través de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Consejo de Monumentos Nacionales, se venían desarrollando proyectos de esa naturaleza a menor escala. Hasta entonces, la preocupación de las máximas autoridades por invertir en la puesta en valor del patrimonio era marginal, no existiendo incluso un presupuesto anual para ello.

A finales de los 90, dos hechos posibilitan un cambio en la atención del Estado frente al patrimonio: la postulación de Chile de varios Sitios como Patrimonio Mundial y la celebración del Día del Patrimonio Cultural. Las situaciones anteriores motivaron una mayor exposición de los problemas de conservación del patrimonio nacional, llevando al Estado a solicitar el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para generar proyectos de inversión de mayor escala, con créditos compartidos en su financiamiento por el propio Fisco. El primero de ellos fue dirigido a las Iglesias de Chiloé declarados como Sitios del Patrimonio Mundial el año 2000, el cual significó un monto de alrededor de 10 millones de dólares, que fueron invertidos en la restauración de dichos inmuebles religiosos. Este proceso, que ha continuado hasta el presente con nuevos aportes financieros del Estado, ha sido evaluado positivamente por la comunidad, aunque debió sortear problemas de gestión y la escasez de especialistas.

El segundo gran programa de actividades tuvo como foco la ciudad de Valparaíso cuyo sector histórico también fue declarado como Sitio del Patrimonio Mundial, el cual tenía graves problemas de conservación y estaba amenazado por la construcción de edificios. Para ello el Estado solicitó y logró un nuevo crédito BID de 65 millones de dólares. El desarrollo de este programa de puesta en valor implicaba desafíos aún mayores que los de Chiloé, ya que no se trataba sólo de inmuebles aislados, sino de una ciudad que por décadas venía experimentando varios problemas. Por diversas razones, este programa ha sido criticado por distintos actores sociales e incluso por algunas autoridades de Valparaíso. Entre las principales críticas se encuentran la falta de un plan director integral, que las decisiones estaban centralizadas en Santiago, la débil capacidad del Municipio de Valparaíso, que las autorizaciones de las intervenciones debían ser resueltas por el Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago y no en Valparaíso, etc. Paralela a la inversión pública también han aumentado los proyectos financiados por privados, aunque estos dirigidos a la conversión de antiguas residencias en

hostales y hoteles para un turismo en aumento. Esta actividad no ha estado exenta de crítica debido a su concentración en algunos barrios, generando migración de los antiguos vecinos, lo que ha afectado la identidad y el valor patrimonial de los mismos. Por otro lado también ha sido positiva la formación de una oficina municipal de gestión del patrimonio que, a pesar de su escaso número de profesionales, se ha esmerado en articular la acción del Estado y de los privados.

Otra iniciativa de impacto nacional fue la formulación del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio impulsado por un nuevo crédito BID de 100 millones de dólares, gestionado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que ejecuta la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas por medio de los Gobiernos Regionales. Este programa busca poner en valor los bienes patrimoniales declarados Monumentos Nacionales, o en proceso de serlo, contribuir a su desarrollo y conservación con usos sustentables, siendo posible la participación de actores privados. Entre sus objetivos específicos está fomentar la valoración del patrimonio, lograr declaraciones de monumentos nacionales, fortalecer a las instituciones, mejorar las capacidades profesionales y difundir la protección del patrimonio.

La implementación inicial del programa BID, no obstante sus beneficios, evidenció una serie de problemas, como la falta de profesionales y técnicos especializados para abarcar proyectos simultáneos en las diferentes regiones, ausencia de procedimientos administrativos adecuados, inexistencia de normativas técnicas nacionales para la restauración, poca experiencia en la propuestas de modelos gestión, etc.

Este programa implicó contratar y capacitar profesionales de apoyo en las instituciones nacionales y regionales, lo que demoró su puesta en práctica, enfrentando también problemas en las metodologías tradicionales de evaluación de proyectos de inversión, todas pensadas en un marco de proyectos de obra nueva o en formatos no acordes con las prácticas de conservación y gestión del patrimonio dentro del Estado. A pesar de ello, el programa iniciado en el 2008 logró levantar unas 350 iniciativas que incluyen estudios básicos, proyectos de prefactibilidad, factibilidad, diseño y ejecución; establecer una institucionalidad propia que coordina a diferentes servicios públicos con mesas de trabajo en todas las regiones del país; levantar proyectos que se centraron preferentemente en la restauración de iglesias, museos, centros culturales, bibliotecas y de edificios de servicios públicos, seguidos en un menor número, por proyectos asociados espacios públicos, fortificaciones, cementerios y sitios arqueológicos. Otro aspecto novedoso del programa fue la integración de bienes patrimoniales en rutas patrimoniales, como las planteadas para las iglesias del altiplano, el salitre y la red vial incaica. Todo lo cual, además de fortalecer a antiguas instituciones del Estado

asociadas al patrimonio, generó a su vez nuevas capacidades en fundaciones y corporaciones privadas dedicadas a la gestión de sitios patrimoniales.

En este contexto podemos decir que la identidad cultural de la sociedad chilena impulsada desde el Estado nacional está, una vez más, en un punto de inflexión en su largo proceso de construcción histórica. Después de una larga apertura, experimentación e influencia de los modelos impuestos por la globalización, se manifiesta en la sociedad cierto malestar e incertidumbre, pero también se constatan acciones decididas hacia la construcción de modos de vida que le permitan reencontrarse con su propia historia y diversidad.

Las influencias externas han sido gravitantes en los modelos a seguir, pero el contrapunto ineludible para la identidad cultural chilena y que su patrimonio refleja será su origen mestizo y su referente dual de oposición entre lo hispano y lo indígena. Ambos referentes han tenido matices contradictorios, tanto positivos y negativos, en razón de sucesos y momentos históricos, odiados y respetados, reconocidos y negados. Si bien el referente hispano nutre esencialmente lo chileno y con el devenir su oposición se olvida, salvo en las efemérides de la Independencia y del Día de la Raza o del Descubrimiento de América, lo mapuche sigue dos procesos diferentes. Por una parte se inserta en la identidad cultural chilena, en su memoria histórica y patrimonio, donde debe admitir su origen mestizo, pero por otro lado permite rescatar, reconocer y valorar, no sin contradicciones, la resistencia heroica de las comunidades mapuches por mantener su propia identidad, la cual cobra cada vez más fuerza, reclamando su autonomía de la identidad chilena formada a través del tiempo. Por tanto, la identidad chilena formada desde el Estado nacional con una ideología unitaria, va a adquirir formas regionales particulares cada vez más poderosas con el tiempo, que el patrimonio cultural local avala, cuyos procesos tienen siglos de formación desde la Colonia e incluso antes, las cuales van a determinar la necesidad de construir una organización política del Estado diferente a la actual siendo el patrimonio un componente vital para ello.

## 7. BIBLIOGRAFÍA

Archivo Actas del Consejo de Estado, 1910, Archivo Nacional, Santiago, Chile.  
Archivo Actas Consejo de Monumentos Nacionales, Santiago, Chile.  
Archivo Emilio Bello Codecido, Archivo Nacional, Santiago, Chile.  
Archivo Real Audiencia, Archivo Nacional, Santiago, Chile.  
Archivo Museo Histórico Nacional.  
Archivo Fotográfico de la Biblioteca Nacional.  
Archivo Fotográfico del Consejo de Monumentos Nacionales.  
Archivo Fotográfico de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Acosta Rico, Fabián (2004). *El pensamiento político de José Vasconcelos*. Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. México.

Aguirre Arias, Beatriz (2007). "Del concepto de bien histórico-artístico al de patrimonio cultural. Parte II. El patrimonio urbano y arquitectónico en Chile". *Revista electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje Volumen IV N°12*. Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje, Universidad Central de Chile. Santiago, Chile.

Aguirre, Max (2011). *La arquitectura moderna en Chile (1907-1942). Importancia de las revistas de arquitectura*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Ahumada, Eugenio et al (1989). *Chile: La memoria prohibida. Las violaciones a los Derechos Humanos 1973-1983*. Pehuén Editores. Santiago, Chile.

Alegría, L. y Mellado, L. (2004). "Crisis e iconografía de un espacio público, la plaza de Armas de Santiago de Chile." En: Guzmán, F. et al (2004). *Arte y Crisis en Iberoamérica, Segundas Jornadas de Historia del Arte*, Chile.

Alegría, Luis y Paz, Gloria (2007). "Patrimonio y modernización en Chile (1910). La Exposición Histórica del Centenario". *Revista Atenea N° 495*, p. 69-81. Concepción, Chile.

Álvarez, José Luis (1992). *Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural*, Espasa Universidad. España.

Anales de la Universidad de Chile, 1849. Santiago, Chile

Amunátegui, Miguel Luis (1849). "Apuntes sobre lo que han sido las Bellas Artes en Chile". *Revista de Santiago*, Tomo III. Imprenta Chilena. Santiago, Chile.

Amunátegui, Miguel Luis. (1876). "Creación de una galería histórica de pintura i escultura i de un museo de bellas artes en el palacio de la Exposición

Internacional chilena de 1875". *Anales de la Universidad de Chile*, Tomo I. Santiago, Chile.

Anderson, Benedict (1983). *Imagined communities: reflection on the origin and spread of nationalism*. Londres, Inglaterra.

Anderson, Benedict (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica, México.

Arriagada, G. (1974). *De la vía chilena a la vía insurreccional*. Editorial del Pacífico. Santiago, Chile.

Augé, Marc (1998). *Las Formas del Olvido*. Editorial Gedisa. Madrid, España.

Avrami, E., Mason, R. y De la Torre, M. (2000). *Values and Heritage Conservation*. Research Report. Getty Conservation Institute. Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Ballart, Josep y Juan i Treserras, Jordi (2001). *Gestión del patrimonio cultural*. Ariel Patrimonio, España.

Basáez, Patricio y Amadori, Ana María (1989). *1889-1989, el pabellón chileno en la exposición universal de París*. Santiago, Chile.

Benavides Rodríguez, Alfredo (1961). *La arquitectura en el Virreinato del Perú y en la Capitanía General de Chile*. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile.

Benavides Rodríguez, Alfredo (1988). *La arquitectura en el Virreinato del Perú y la Capitanía General de Chile*. Edición revisada y actualizada por Juan Benavides C. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile.

Benavides, Juan, Márquez de la Plata, Rodrigo y Rodríguez, León (1977). *Arquitectura del altiplano: Caseríos y Villorrios ariqueños*. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Benedict, Ruth (1971). *El hombre y la cultura*. Ediciones Centro Editor de América Latina, México.

Bengoa, José (1999). *Historia de un conflicto, el Estado y los mapuches en el siglo XX*. Editorial Planeta. Santiago, Chile.

Bengoa, José (2000). *Historia del Pueblo Mapuche, siglo XIX y XX*. Editorial Lom. Santiago, Chile.

Bengoa, José (2004). "Identidad, memoria y patrimonio". En: *VI Seminario sobre Patrimonio, Instantáneas Locales*. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). Santiago, Chile.

Benoit, Iván (2005). *Geografía de Chile*. Tomo VII. Santiago, Chile.

Berducou, M. (1996). "Introduction to archaeological conservation". En: Price, N., Kirby Talley, M. y Melucco Vaccaro, A. (1996). *Readings in Conservation, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage.* Publicado por Getty Conservation Institute. Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Binda, Edwin y Trebbi, Romulo (1996). "Joaquín Toesca y su escuela en Chile". En: *La huella de Europa en Chile, de Toesca a la arquitectura moderna, 1780 – 1950*. Centro de Arquitectura, diseño y geografía C.A.D. Santiago, Chile.

Blanco Fombona, Rufino (1911). *La evolución política y social de Hispanoamérica*. Madrid, España.

Boas, Franz (1964). *Cuestiones fundamentales de antropología cultural*. Ediciones Solar, Argentina.

Boito, Camilo (1884). "I restauratori". Conferencia dada el 7 de junio de 1884, Turín, Italia. En: Price, N., Talley, M. y Vaccaro, A. (1996): *Readings in Conservation, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage*. Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Boletín de Leyes. Publicación anual del Congreso Nacional. Santiago, Chile.

Bonfil Batalla, Guillermo (1990). *México profundo, Una civilización negada*. Editorial Grijalbo. México.

Boudat y Cía. (2000). *Álbum de las salitreras de Tarapacá*, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). Santiago, Chile.

Bourdieu, Pierre (2002). *Campo de poder, campo intelectual*. Editorial Montessor. Buenos Aires, Argentina.

Bourdieu, Pierre (1971). "Genèse et structure du champ religieux", *Revue Française de Sociologie*, vol. XII. París, Francia.

Boza, Cristian (1984). *Parques y Jardines Privados de Chile*. Impresión Ograma. Santiago, Chile.

Brandi, C. (1963): Teoría del restauro. Edizione di Storia e Letteratura, Roma. En: Price, N., Talley, M. y Vaccaro, A. (1996). *Readings in Conservation, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage*. Publicado por Getty Conservation Institute, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Bravo de Goyeneche, José Alberto (2007). *Francisco Bilbao 1823-1865: el autor y la obra*. Editorial Cuarto Propio. Santiago, Chile.



Bruck, Joana (2001). "Monuments, power and personhood in the British Neolithic." *Royal Anthropological Institute*. 2001. 7 p. 649-667. Londres, Inglaterra.

Buschiazzi, Mario (2014). *Estudios de arquitectura colonial hispano americana*. Impresión Gracel Asociados/Kalam. España.

Bustamante, Javiera (2009). *Patio 29*. Introducción de Ángel cabeza. Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel y Jaime, Mauricio (1986). "Demografía de las encomiendas indígenas chilenas a fines del siglo XVIII". *Cuadernos de Investigación y Difusión del Centro de Estudios Antropológicos Cordillera*. Vol. 1, N° 2. Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel (1986). *El Santuario de Altura Inca Cerro El Plomo*. Tesis de Licenciatura para optar al título profesional de Arqueólogo. Departamento de Antropología. Universidad de Chile.

Cabeza, Ángel (1988). "Aspectos históricos de la legislación forestal vinculada a la conservación: la evolución de las áreas silvestres protegidas de la zona de Villarrica y la creación del primer parque nacional de Chile." *Documento de trabajo de la Corporación Nacional Forestal*, N° 101, Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel, Poblete, Sergio y Rauch, Marcos (1991). *Recopilación de la obra de Federico Albert Faupp*. Bosques de Chile y CONAF. 11 tomos. Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel y Simonetti, Susana (1996). "Legislación comparada de patrimonio cultural: Perú, España, México, Francia." *Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales*, N° 13. Consejo de Monumentos Nacionales. Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel y Simonetti, Susana (1997). "Convenciones Internacionales sobre Patrimonio Cultural". *Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales* N° 20, Consejo de Monumentos Nacionales. Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel et al (1997). *Primer Seminario de Patrimonio Cultural*. Consejo de Monumentos Nacionales y Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel et al (1997). *Plan de Manejo Parque Nacional Rapa Nui*. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel y Simonetti, Susana (1998). "El Puente de Cal y Canto". *Revista Patrimonio Cultural*, año III, N° 11. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel (2004). "Reflexiones sobre la aplicación de las convenciones y cartas de patrimonio cultural en América Latina". *Revista Diplomacia*, N° 98. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel y Simonetti, Susana (2004). "Nuevo paradigma desde Chile: valoración del patrimonio industrial". *Revista Hereditas*, p. 10-13. México.

Cabeza, Ángel (2007). "La autenticidad e integridad en la políticas de patrimonio mundial en Chile". En: *New views on authenticity and integrity in the World Heritage of the Americas*. ICOMOS-IUCN, San Miguel de Allende, México.

Cabeza, Ángel (2009). "La Rebelión de los Barrios". *Revista del Colegio de Arquitectos de Chile*, N°141. Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel (2010). "Los Paisajes Culturales de Chile". *Revista Hereditas*, diciembre 2010. INAH, México.

Cabeza, Ángel (2010). "Propuestas y plan de restauración y reconstrucción patrimonial". *Revista Colegio de Arquitectos de Chile*, N° 145. Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel, Gutiérrez, Alejandro, Barros, Magdalena y Osorio, José (2010). *Guía de Zonas Típicas de Chile: gentes y paisajes de nuestro patrimonio*. Proyecto FONDART. Fundación Patrimonio Nuestro. Santiago, Chile.

Cabeza, Ángel (2011). "Chile y el Patrimonio Mundial". *Revista América Patrimonio*, Santiago, Chile. Artículo publicado en el sitio web de la *Revista América Patrimonio* (2011). [www.revistaamericapatrimonio.org](http://www.revistaamericapatrimonio.org).

Cabeza, Ángel (2011). "Los lugares sagrados y el patrimonio inmaterial". Conferencia dictada por Ángel Cabeza M. en el Monasterio Benedictino de Las Condes, Santiago, con ocasión de la celebración del Día Mundial de los Monumentos y Sitios, el viernes 18 de Abril del 2008. Artículo publicado en el sitio web de la *Revista América Patrimonio* (2011). [www.revistaamericapatrimonio.org](http://www.revistaamericapatrimonio.org).

Calderón, Alfonso (1987). *Diego Barros Arana, páginas escogidas*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Calderón, Alfonso. (1979). *1900*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Castells, Manuel (1999). *La era de la información. Economía sociedad y cultura*. Siglo XXI Editores. México.

Carrera, José Miguel (1913). *Documentos del Diario Militar de don José Miguel Carrera*. Colección de Historiadores y Documentos de la Historia de Chile (CHDI) tomo XXIII. Santiago, Chile.

Celedón, Pedro (1997). *La sandía amenazada, análisis cultural del Chile de hoy*. Editorial Orígenes. Santiago, Chile.

Cerda, Boris (1978). *Política y Clasificación de la Legislación Forestal Chilena*. Documento de Trabajo N°6. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

Childe, Vere Gordon (1996). *Los orígenes de la civilización*. Fondo de cultura económica. España.

Child, Theodore (1891). *Les republiques hispanoamericaines*. Hachette. París, Francia.

Choay, Françoise (2007): *Alegoría del Patrimonio*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España.

Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (2009). *Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX*. Vol. 1 y 2. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

Cid, Gabriel (2009). "Un ícono funcional: la invención del roto como símbolo nacional, 1870-1888". En: Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (2009). *Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX*. Vol. 1. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

Cid, Gabriel y Torres, Isabel (2009). "Conceptualizar la identidad: patria y nación". En: Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (2009). *Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX*. Vol. 1. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

Claro Valdés, Samuel y Peña Fuenzalida, Carmen (1994). *Chilena o Cueca tradicional*. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Cleere, Henry (1989). "Introduction: the rationale of archaeological heritage management." *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. Londres, Inglaterra.

Colón, Cristóbal (1985). *Diario a Bordo, Cristóbal Colón*. Instituto Gallach. España.

CONAMA (1994). *Perfil ambiental de Chile*. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

Consejo de Monumentos Nacionales (2000). *Lista Tentativa de Bienes Culturales de Chile a ser postulados como Sitios del Patrimonio Mundial UNESCO*. Consejo de Monumentos Nacionales. Santiago, Chile.

Consejo de Monumentos Nacionales (2003). *Tres Miradas al Estadio Nacional de Chile*. Consejo de Monumentos Nacionales. Santiago, Chile.

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (2005). *Parque por la Paz Villa Grimaldi: una deuda con nosotros mismos*. Santiago, Chile.

Corvalán, Luis (2003). *El Gobierno de Salvador Allende*. Editorial Lom. Santiago, Chile.

Correa, Sofía et al (2001). *Historia del siglo XX chileno*. Editorial Sudamericana. Santiago, Chile.

Cousiño, Carlos (1985). "Reflexiones en torno a los fundamentos simbólicos de la nación chilena". *Revista Lateinamerica Studien*, N°19. Alemania.

Couyoumdjian, Juan (2000). "Panorama de las obras públicas. Contexto, fuentes y bibliografía". *Revista América Latina en la Historia Económica*. N° 14. Santiago, Chile.

Cruz de Amenábar, Isabel (2003). "Dulces agasajos, notas sobre la creación culinaria y su significado en el arte festivo del barroco en Chile." *Memoria del I Encuentro Internacional del Barroco Andino*, p. 87-91. La Paz, Bolivia.

Cruz de Amenábar, Isabel (2004). "Imágenes de civilización y barbarie en el sur de Chile, rapto de mujeres blancas por caciques indígenas desde Ercilla a Rugendas". *Barroco y fuentes de la diversidad cultural, Memorias del II Encuentro Internacional del Barroco Andino*, p. 101-113. La Paz, Bolivia.

Damell, D. et al (1994). "The cultural heritage in society". *Cultural Heritage and Preservation. National Atlas of Sweden*, p. 154-175. SNA Publishing. Stockholm, Suecia.

Dávila, Roberto (1991). "Una búsqueda constante". *Revista De Arquitectura* 2. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, septiembre 1991, p. 2-5. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

De La torre, Marta y Mason, R. (1999). *Economics and Heritage Conservation*. A meeting organized by the Getty Conservation Institute, December 1998. Los Ángeles, California, Estados Unidos.

De la Torre, Marta (2002). *Assesing the Values odf Cultural Heritage*. Research Report. Getty Conservation Institute, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

De la Torre, Marta et al (2005). *Heritage Values in Site Managment, Four Cases Studies*. The Getty Conservation Institute, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

De Ramón, Armando (2003). *Historia de Chile, desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000)*. Editorial Catalonia. Santiago, Chile.

Díaz, Andrea (1997). *Parques y Jardines de Chile*. Impresión Ograma. Santiago, Chile.

División de Cultura, MINEDUC (1992). *Seminario Políticas Culturales en Chile*. Ministerio de Educación. Santiago, Chile.

Donoso, Ricardo (1925). *Don Benjamín Vicuña Mackenna: su vida, sus escritos y su tiempo: 1831-1886*. Imprenta Universitaria. Santiago, Chile.

Donoso, Ricardo (1937). *Recopilación de Leyes, Reglamentos y Decretos relativos a la Enseñanza Pública*. Ministerio de Educación Pública. Talleres de Imprenta de la Dirección General de Prisiones. Santiago, Chile.

Edwards, Alberto (1928). *La fronda aristocrática*. En: [www.memoriachilena.cl](http://www.memoriachilena.cl).

Eliash, Humberto y Moreno, Manuel (1996). "La arquitectura moderna en Santiago". *La huella de Europa en Chile, de Toesca a la arquitectura moderna, 1780-1950*. C.A.D. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Encina, Francisco (1912). *Nuestra inferioridad económica, sus causas, sus consecuencias*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Encina, Francisco (1952). *Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891*. (20 tomos). Editorial Zig-Zag. Santiago, Chile.

Ercilla, Alonso de (1569). *La Araucana*. Versión digital en [www.memoriachilena.cl](http://www.memoriachilena.cl).

Errázuriz K., Ana (1987). *Manual de Geografía de Chile*. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile.

Eyzaguirre, Jaime (1957). *Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Eyzaguirre, J. (1969). *Hispanoamérica del Dolor*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Ferrari, Claudio (1991). "Las obras de los arquitectos de la Universidad Católica de Chile en sus primeros 50 años. 1894-1945". En: Universidad Católica (1991). *Cien años de arquitectura en la Universidad Católica*. Santiago, Chile.

Ferreira, M., Eckert, C. y Beltrao, J. (2007). *Antropología e Patrimonio Cultural: diálogos e desafíos contemporáneos*. Editado por la Asociación Brasileira de Antropología, Brasil.

Fonseca, Mario (1999). *Cousiño, Huellas de Familia*. Impresión Ograma. Santiago, Chile.

Foster, Hal (2006). *La Posmodernidad*. Barcelona, España.

Freud, Sigmund (2011). *Introducción al Psicoanálisis*. Alianza Editorial. España.

Frías Valenzuela, Francisco (2006). *Manual de Historia de Chile*. Santiago, Chile.

Frías, A. (1873). "La Exposición del Coloniaje, resultado que debe producir". *Revista Las Bellas Artes*, N° 8, septiembre 1873. Santiago, Chile.

Galeano, Eduardo (1971). *La venas abiertas de América Latina*. Editorial Siglo XXI. España.

Galeano, Eduardo (1986). *Memorias de fuego*. Editorial El Chanchito. Montevideo. Uruguay.

Gallardo, Enrique (1983). *Recopilación de la Legislación Forestal*. Corporación Nacional Forestal (CONAF). Santiago, Chile.

García Canclini, Néstor (1990). *Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Editorial Grijalbo, México.

Gay, Claudio (2004). *Atlas de la historia física y política de Chile*. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y Lom Ediciones. Santiago, Chile.

Gazmuri, Cristián (2001). *El Chile del centenario, los ensayistas de la crisis*. Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Gazmuri, Cristián. (2004). "Alberto Edwards y la fronda aristocrática." *Revista Historia* (Santiago), Vol. 31, N° 1. Santiago, Chile.

Geertz, Clifford (1973). *Visión del mundo y análisis de los símbolos sagrados*. Universidad Católica del Perú.

Giménez, Gilberto (2011). *Teoría y análisis de la Cultura*. México.

Gissi, Jorge, Larraín, Jorge y Sepúlveda, Fidel (1995). *Cultura e Identidad en América Latina*. Instituto Chileno de Estudios Humanísticos. Santiago, Chile.

Godoy, Hernán (1977). *El Carácter Chileno*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Góngora, Mario (2003). *Ensayo histórico sobre la noción de estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Gómez, Vicente (2006). "El pensamiento urbanístico de la CORMU (1965-1976)". *Revista Urbano*, mayo 2006, Vol. 9, N° 13. Universidad del Bío-Bío, Chile.

González Echeñique, Javier. "La influencia francesa en la vida social de Chile de la segunda mitad del siglo XIX". En: <http://www.docstoc.com/docs/44926975/la-influencia-francesa-en-la-vida-social-de-chile>.

González, Sergio (2002). *Hombres y mujeres de la pampa. Tarapacá en el ciclo de expansión del salitre*. LOM Ediciones. Santiago, Chile.

González, Sergio (2009). "El Norte Grande de Chile: la definición histórica de sus límites, zonas y líneas de fronteras y la importancia de las ciudades como geosímbolos fronterizos". *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, N° 13 (2) p. 9-42. Santiago, Chile.

González Videla, Gabriel (1975). *Memorias*. Editora Nacional Gabriela Mistral. Santiago, Chile.

Grez Toso, Sergio (1997). *De la Regeneración del pueblo a la huelga general, génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). Santiago, Chile.

Guarda, Gabriel (1990). *Flandes Indiano: las fortificaciones del Reino de Chile 1541 – 1826*. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Gutiérrez, Rodrigo (2004). *Monumento Conmemorativo y Espacio Público en Iberoamérica*. Madrid, España.

Gutiérrez, Ramón et al (1995). "Martín Noel en el contexto iberoamericano. La lucidez de un precursor". *El arquitecto Martín Noel: su tiempo y su obra*. Editores Gutiérrez, Ramón, Gutman, Margarita y Pérez Escolano, Víctor. Junta de Andalucía, España.

Gutiérrez, Ramón y Gutiérrez, Rodrigo (1997). *Pintura, Escultura y Fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX*. Madrid, España.

Guzmán, Fernando (2004). "Crisis temprana del retablo hispanoamericano en Chile". *Arte y Crisis en Iberoamérica, Segundas Jornadas de Historia del Arte*. Santiago, Chile.

Hernández, Macarena y Ruíz, E. (2008). "El patrimonio como proceso social. Intervención, desarrollo y consumo del patrimonio minero en Andalucía". En: Arrieta Urtizberea, Iñaki (2008). *Participación ciudadana, patrimonio cultural y museos: entre la teoría y la praxis*. Universidad del País Vasco. España.

Hernando, Almudena (2009). "El Patrimonio, entre la memoria y la identidad de la modernidad". *Revista PH*. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, N° 70, mayo 2009, p. 88-97. España.

Hidalgo, Jorge et al (1996). *Etnografía, sociedades indígenas contemporáneas y su ideología*. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile.

Hidalgo, Jorge et al (2000). *Prehistoria, desde sus orígenes hasta los albores de la conquista*. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile.



Huerta, Víctor (2008). *Morir con honor y vivir en la infamia: los desertores del Ejército Patriota entre 1817 y 1822*. Tesis de licenciatura en historia. Universidad Arcis, Santiago, Chile.

Hobsbawm, Eric (2004). *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Editorial Crítica. Barcelona, España.

Huerta, Víctor (2008). *Morir con honor y vivir en la infamia: los desertores del Ejército Patriota entre 1817 y 1822*. Universidad Arcis. Santiago, Chile.

Huidobro, Vicente (1928). "Balance patriótico". *Revista Acción*, N° 4, agosto. Santiago, Chile.

Huneeus, Jorge (1910). *Cuadro histórico de la producción intelectual de Chile*. Imprenta Barcelona. España.

Huneeus, Carlos (2.000). *El régimen de Pinochet*. Editorial Sudamericana. Santiago, Chile.

Huntington, Samuel P. (2004). *¿Quiénes somos?: Los desafíos a la identidad nacional estadounidense*, Editorial Paidós. Barcelona, España.

Ibarra, María Ignacia (2008). "Lo mapuche dentro de la identidad chilena: doble Discurso". *Revista HAOL*, Núm. 1, pp. 1-20. Historia Actual Online 2008. Santiago, Chile.

Iglesias, Ricardo (2009). "El papel de la educación en la construcción del estado nacional". En: Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (2009). *Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX*. Vol. 2. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

Illanes, María Angélica (2002). *La batalla de la memoria*. Editorial Planeta/Ariel. Santiago, Chile.

Irrázabal, Guadalupe y Piñera, Magdalena (1996). *Chile: discursos con historia*. Editorial Los Andes. Santiago, Chile.

Jara, Álvaro (1971). *Guerra y sociedad en Chile, la transformación de la Guerra de Arauco y la esclavitud de los indios*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Jocelyn-Holt, Alfredo (1997). *El peso de la noche, nuestra frágil fortaleza histórica*. Editorial Ariel. Santiago, Chile.

Jocelyn-Holt, Alfredo (2008). *La Independencia de Chile, Tradición, modernidad y mito*. Santiago, Chile.

Joignant, Alfredo (1998). *El gesto y la palabra, ritos políticos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile*. Universidad Arcis. Santiago, Chile.

Jokilehto, Jukka (2002). *A History of Architectural Conservation*. BH, ICCROM. Roma, Italia.

Juan, Jorge y de Ulloa, Juan (2011). *Noticias Secretas de América*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. España.

Junta de Andalucía (2000). *Guía de la Arquitectura de Santiago de Chile*. Santiago, Chile.

Kennedy Troya, A. (2004). "Formas de construir la nación, el barroco quiteño revisitado por los artistas decimonónicos." En: *Barroco y fuentes de la diversidad cultural, Memorias del II Encuentro Internacional del Barroco Andino*, p. 49-60. La Paz, Bolivia.

Khol, Philip y Fawcett, Clare (1998). *Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology*. Cambridge, University Press. Reino Unido.

Kirsi, Bárbara (2003). *Símbolos y discursos en torno a la nación, Patria Vieja y Centenario*. Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Krebs, Ricardo (2009). "Orígenes de la conciencia nacional chilena". En: Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (2009). *Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX*. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

Lavín, Joaquín (1987): *Chile: la revolución silenciosa*. Editorial Zig-Zag. Santiago, Chile.

Larraín, Jorge (1996). *Modernidad, Razón e Identidad en América Latina*. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile.

Larraín, Jorge (2001). *Identidad Chilena*. Lom Ediciones. Santiago, Chile.

Lawner, Miguel (2008). "El derecho a la ciudad". *Coloquios INVI – FAU – UCH*. Santiago, Chile.

León, Leonardo (2002). "Reclutas forzados y desertores de la patria: el bajo pueblo chileno en la guerra de la independencia, 1810-1814". *Revista Historia* (Santiago) V.35. Santiago, Chile.

León Echaíz, René (1975). *Historia de Santiago. Tomo I, La Colonia*. Santiago, Chile.

Linton, Ralph (1945). *Cultura y personalidad*. Fondo de Cultura Económica. México.

Lévi-Strauss, Claude (1969). *Antropología Estructural*. Eudeba. Buenos Aires, Argentina.

Lira, Osvaldo (1952). *Hispanidad y mestizaje, y otros ensayos*. Cultura Hispánica. Colección hombres e ideas. Madrid, España.

Lira, Osvaldo (1985). *El Poder Político*. Editorial Covadonga. Santiago, Chile.

Llull Peñalba, Josué (2005). "Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural". En: *Arte, Individuo y Sociedad*. Vol. 17, p. 175-204. España.

Lohmann, Guillermo, Lumbreras, Luis et al (2001). *Historia de la Cultura Peruana*. Fondo Editorial del Congreso del Perú.

López Morales, Francisco y Vidargas, Francisco (editores) (2014). *Los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio cultural: 50 años de la Carta de Venecia*. Instituto de Nacional de Antropología e Historia. México.

López Rodríguez, Raquel (2011). *La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Sevilla*. Sevilla, España.

Lumbreras, Luis (2005). *Arqueología y Sociedad*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.

Maier Allende, Jorge (2003). "El centenario de la Real Cédula de 1803. La Real Academia de la Historia y el inicio de la legislación sobre el Patrimonio Arqueológico Monumental en España". *Boletín de la Real Academia de la Historia*, Volumen 200, Cuaderno 3, 2003, p. 439-473. España.

Malinowski, Bronislaw (1981). *Una teoría científica de la cultura*. Edhasa. España.

Maltés, Julio y Gorti, Lucía (2003). *Diccionario histórico de Chile*. Industrias gráficas Mármol. Barcelona, España.

Maquiavelo, Nicolás. (1534). *El Príncipe*. Edición electrónica 2004. En: [www.laeditorialvirtual.com.ar](http://www.laeditorialvirtual.com.ar).

Martínez Baeza, Sergio (1982). *El libro en Chile. Biblioteca Nacional*. Santiago, Chile.

Martínez, René (1996). "La teoría y la práctica del urbanismo en Santiago." En: *La huella de Europa en Chile, de Toesca a la arquitectura moderna 1780-1950*. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Martínez Estrada, Ezequiel (1968). *Meditaciones Sarmientinas*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Martínez, René (2011). *Santiago: Historia, Arquitectura y Urbanismo en la ciudad*. Universidad Central de Chile, 2 vol. Santiago, Chile.

Medina, José Toribio (1962). *Viajes Relativos a Chile*. Tomos 1 y 2, Fondo histórico y bibliográfico José Toribio Medina. Biblioteca Nacional de Chile. Santiago, Chile.

Mellafe, Rolando (1959). *La introducción de la esclavitud negra en Chile*. Ediciones Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Mellafe, Rolando (1986). *Historia Social de Chile y América*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Méndez, Rosa (2002). "De la invención de las raíces a los procesos de patrimonialización folklórica".

En: <http://usuarios.multimania.es/odiseomalaga/pc03.htm>.

Molina, Juan 1(782). *Ensayo sobre la historia natural de Chile. Compendio de la historia geográfica, natural y civil del Reyno de Chile / escrito en italiano por don Juan Ignacio Molina; traducida en español por Domingo Joseph de Arquellada Mendoza*.

Montandón, Roberto (1973). "La idea de la protección y problemas de conservación e integración de los monumentos y conjuntos históricos". *Boletín de la Academia Chilena de la Historia*, N° 87. Santiago, Chile.

Montandón, Roberto y Pirotte, Silvia (1990). *225 fichas de Monumentos Nacionales de Chile*. Instituto de Cooperación Iberoamericana. MOP. Santiago, Chile.

Montecinos, Max (1983). Recopilación de disposiciones legales sobre el Patrimonio Silvestre Protegido del Estado. Documento de Trabajo N°6. Corporación Nacional Forestal (CONAF). Santiago, Chile.

Morandé, Pedro (1984). *Cultura y Modernización en América Latina*. Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Mostny, Grete y Niemeyer, Hans (1983). Museo Nacional de Historia Natural. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). Santiago, Chile.

Morris, William (1878). "Manifesto of the Society for the Protection of Ancient Buildings". The Builder, 25 de agosto de 1877. Londres, Inglaterra.

Muñoz Hermosilla, José (1929). "Monumentos Nacionales". *Revista Chilena de Historia y Geografía*, N° 65, p. 329-346. Santiago, Chile.

Munizaga, Juan Eduardo (2008). *Escipión Munizaga Suárez, arquitecto 1906-2002*. Universidad Diego Portales. Santiago, Chile.

Moulian, Tomás (1997). *Chile actual: anatomía de un mito*. LOM ediciones. Santiago, Chile.

Necochea, Eugenio (1874). *Memoria sobre el asesinato del Ministro Portales*. Imprenta el Ferrocarril. Santiago, Chile.

Ossenbach, Gabriela (1993). "Educación en América Latina a partir de su independencia (siglos XIX y XX)". *Revista iberoamericana de Educación*, N° 1. Santiago, Chile.

Palacios, Nicolás (1918). *Raza Chilena*. Imprenta Universitaria. Santiago, Chile.

Paz, Octavio (1959). *El Laberinto de la Soledad*. Fondo de Cultura Económica. México.

Pearson, M. y Sullivan, S. (1995). *Looking After Heritage Places*. Melbourne University Press. Australia.

Pedemonte, Rafael (2009). "Cantemos la gloria: himnos patrióticos e identidad nacional en Chile (1810-1840)". En: Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (2009). *Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX*. Vol. 2. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

Peludo Gómez, María del Rosario (2001). *México y las Conferencias Panamericanas, 1889-1938. Antecedentes de las Globalización*. México. Coordinador Carlos Marichal. Biblioteca Digital Daniel Cosío Villegas. Versión digital en: [http://biblio2.colmex.mx/coinam/copa\\_1889\\_1938/base1.htm](http://biblio2.colmex.mx/coinam/copa_1889_1938/base1.htm).

Peralta, Paulina (2007). *¡Chile tiene fiesta! El origen del 18 de septiembre (1810-1837)*. LOM, Santiago, Chile.

Peralta, Sofía y Baeza, Francisca (1979): "Antecedentes para una historia de la Dirección de Arquitectura". Documento de trabajo de la Dirección Nacional de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas de Chile. Santiago, Chile.

Pereira Salas, Eugenio (1953). "La iglesia y convento de San Francisco". *Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales*, N° 4. Santiago, Chile.

Pérez de Arce, Rodrigo, Astaburuaga, Ricardo y Rodríguez, Hernán (1993). *La Montaña Mágica, el cerro Santa Lucía y la ciudad de Santiago*. Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Pérez Rosales, Vicente (1986). *Ensayo sobre Chile*. Ediciones Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Peri, René (1999). *La Raza Negra en Chile: una presencia Negada*. Ediciones LOM. Santiago, Chile.

Philippot, Paul (1972). "Historic Preservation: Philosophy, Criteria, Guidelines". En: Price, N., Talley, M. y Vaccaro, A. (1996). *Readings in Conservation, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage*.

Publicado por Getty Conservation Institute, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Piga, José y Cabeza, Ángel (2011). "El Barrio Cívico de Santiago". *Revista del Colegio de Arquitectos de Chile 2011*. Santiago, Chile.

Pinto, Jorge (2003). *La formación del Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión*. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago, Chile.

Pinto, Jorge (2009). "El orden, el progreso y los mapuches. Algunos dilemas del Estado." En: Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (2009). *Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX*. Vol. 2. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

Pinto, Julio; Valdivia, Verónica y Artaza, Pablo (2003). "Patria y clase en los albores de la identidad pampina (1860 – 1890)". *Revista Historia*, Vol. 36. Santiago, Chile.

Plath, Oreste (1994). *Olografías: Libro para ver y creer*. Santiago, Chile.

Plath, Oreste (2009). *Folclor chileno*. Fondo de Cultura Económica. Santiago, Chile.

Platón (2003). *Diálogos*. Obra completa en 9 volúmenes. Editorial Gredos. Madrid, España.

Poirier, Eduardo (1915). *Reseña General del 4º Congreso Científico (1º Pan-Americano), 25 de diciembre de 1908 – 5 de enero de 1909*. Editado por Eduardo Poirier. Imprenta Barcelona. Santiago, Chile.

Pontificia Universidad Católica de Chile (1994). *Cien años de arquitectura en la Universidad Católica*. Ediciones Arq. Escuela de Arquitectura. Colección Arquitectura, volumen 5. Santiago, Chile.

Porras, Raúl (2010). *San Marcos, La Cultura Peruana*. Fondo Editorial UNMSM. Lima, Perú.

Prats, Llorenç (2004). *Antropología y Patrimonio*. Editorial Ariel. Barcelona, España.

Price, N., Talley, M. y Vaccaro, A. (1996). *Readings in Conservation, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage*. Publicado por Getty Conservation Institute, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Subercaseaux, Bernardo (2007). *Historia de las ideas y de la cultura en Chile*. Tomo IV: Nacionalismo y cultura. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Smith, Anthony D. (1994). "Gastronomy or geology? The role of nationalism in the reconstruction of nations." *Nations and Nationalism* 1, N°1. Inglaterra.

Sotomayor Valdés, Ramón (1954). *El Ministro Portales*. Ministerio de Educación. Santiago, Chile.

Raposo, Alfonso y Valencia, Marco (2005). "La interpretación de la obra arquitectónica: historia de las realizaciones habitacionales de la CORMU en Santiago (1967-1976)". *Revista Diseño Urbano y Paisaje*, Vol. 2, N° 4, Universidad Central de Chile. Santiago, Chile.

Reyero, Carlos (1999). *La escultura conmemorativa en España: La edad del oro del monumento público, 1820-1914*. Madrid, España.

Reyes, Alberto (2008). *El pensamiento indígena en América, Los antiguos andinos, mayas y nahuas*. Editorial Biblos. Argentina.

Reyno Gutiérrez, Manuel (1973). *José Miguel Carrera*. Editorial Quimantú. Santiago, Chile.

Riegl, Alois (1987): *El culto moderno a los monumentos*. Editorial Visor. Madrid, España.

Riquelme, Fernando (1996). "Neoclasicismos e historicismo en la arquitectura de Santiago". En: *La huella de Europa en Chile, de Toesca a la arquitectura moderna 1780-1950*. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Riva Agüero, José de la (1952). *La Historia en el Perú*. Madrid, España.

Rodó, José Enrique (1967). *Obras completas*. Editorial Aguilar. Madrid, España.

Rodríguez, Hernán (1982). *Museo Histórico Nacional*. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). Santiago, Chile.

Rodríguez Barberán, Francisco Javier (1995). "Arquitectura historicista y ecléctica en la España del siglo XIX: breve resumen de tendencias, obras y autores." En: *Martín Noel, su tiempo y su obra*. Junta de Andalucía. Sevilla, España.

Rodríguez Barberán, Francisco Javier (2006). "El jardín de las delicias arquitectónicas: la exposición de Sevilla y los pabellones americanos". *Revista Apuntes*, Vol. 19, N° 2, pp. 284-299. Colombia.

Ropert, Rodrigo (2006). "La conservación del patrimonio cultural urbano en el ordenamiento jurídico chileno". *Revista de Derecho Ambiental* (2006). Universidad de Chile. Santiago, Chile.



Rosales, Diego de (1878). *Historia General del Reyno de Chile: Flandes Indiano*. Copia digital se encuentra en [www.memoriachilena.cl](http://www.memoriachilena.cl).

Rosenblitt, Jaime (2013). *Las revoluciones americanas y la formación de los estados nacionales*. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Biblioteca Nacional. Santiago, Chile.

Ruskin, John (1944). *Las siete lámparas de la arquitectura*. Editorial El Ateneo. Buenos Aires, Argentina.

Saelzer, Federico (1973). *La Evolución de la Legislación Forestal Chilena*. Universidad Austral. Valdivia, Chile.

Salazar, Gabriel (2000). *Labradores, Peones y Proletarios*. Ediciones LOM. Santiago, Chile.

Salazar, Gabriel y Pinto, Jorge (1999) *Historia Contemporánea de Chile II, Actores, Identidad y Movimiento*. Editorial LOM. Santiago, Chile.

Salinas, Max (2005). *Canto a lo Divino y Religión Popular en Chile hacia 1900*. Editorial Lom. Santiago, Chile.

Sánchez, Alfredo y Morales, Roberto (2004). *Las Regiones de Chile*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Sater, William (2005). *La imagen heroica de Chile: Arturo Prat, santo secular*, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

Schobinger, Juan (2001). *El santuario incaico del cerro Aconcagua*. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.

Sechi, Eduardo (1952). "La casa chilena hasta el siglo XIX". *Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales*, N° 3. Santiago, Chile.

Silva, Bárbara (2003). "Símbolos y discursos en torno a la nación, Patria Vieja y Centenario". Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia. Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Squella, Agustín (2005). *El Jinete en la lluvia. La cultura en el gobierno de Lagos*. Editorial Aguilar. Santiago, Chile.

Stabili, María Rosario (2003). *El sentimiento aristocrático, elites chilenas frente al espejo (1860-1960)*. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile.

Stark, Carlos (1998). *Aspectos financieros de la legislación sobre monumentos nacionales en Chile: antecedentes y proposiciones*. Consejo de Monumentos Nacionales. Santiago, Chile.

Stewart Julian. (1955). *Theory of culture change*. University of Illinois Press. Estados Unidos.

Stuven, Ana María (1987). "La generación de 1842 y la conciencia nacional". *Revista de Ciencia Política*, Vol. IX, N°1. Santiago, Chile.

Subercaseaux, Bernardo (1997). *Chile ¿un país moderno?* Editorial Zeta. Barcelona, España.

Tap, Pierre (1986). *Identités collectives et changements sociaux*, Editions Privat. Toulouse, Francia.

Taylor, Charles (1989). *Fuentes del yo: La construcción de la identidad moderna*. Harvard University Press. Estados Unidos.

Todorov, Tzvetan (1989). *La Conquista de América, el problema del otro*. Editorial Siglo XXI. México.

Torrent, Horacio (2004). "El patrimonio territorial y arquitectónico: el Plan Serena." *Revista Urbano*, Vol. 7, N° 10. Universidad de Bío Bío. Concepción, Chile.

Torres Balbás, Leopoldo (1996). *Sobre Monumentos y otros escritos*. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Madrid, España.

Tylor, E. B. (1975). "La ciencia de la cultura". En: Kahn. J.D., *El concepto de Cultura, textos fundamentales*. Editorial Anagrama. España.

Universidad Adolfo Ibáñez (1994). *Padre Osvaldo Lira: En torno a su pensamiento. Homenaje en sus 90 años*. Editorial Zig-Zag. Santiago, Chile.

Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo (1999). *150 años de enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile (1849-1999)*. Santiago, Chile.

Valcárcel, Luis (1948). *Historia de la Cultura antigua del Perú*. Lima, Perú.

Valcárcel, Luis (1972). *Tempestad en Los Andes*. Lima, Perú.

Valdés, Ximena, Rebolledo, Loreto y Willson, Angélica (1995). *Masculino y femenino en la hacienda chilena del siglo XX*. Centro de Estudios del Desarrollo de la Mujer. Santiago, Chile.

Verdugo, Patricia y Orrego Vicuña, Claudio (1980). *Detenidos-desaparecidos: Una herida abierta*. Editorial Aconcagua. Santiago, Chile

Verdugo, Patricia (2000). *La caravana de la muerte. Pruebas a la vista*. Santiago, Chile.

Vergara, Jacinta (2009). "Desde el bastidor al imaginario nacional, Rugendas y la representación de la identidad chilena". En: Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (2009). *Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX*. Vol. 1. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

Vial, Gonzalo (1981). *La sociedad chilena en el cambio de siglo (1891-1920)*. Editorial Portada. Santiago, Chile.

Vicuña Mackenna, Benjamín (1873). *Esposición del Coloniaje*. Imprenta de la Librería del Mercurio. Santiago, Chile.

Vicuña Mackenna, Benjamín (1873). *Catálogo razonado de la Esposición del Coloniaje celebrada en Santiago de Chile en septiembre de 1873, por uno de los miembros de su comisión directiva*. Imprenta de Sud América. Santiago, Chile.

Vicuña Mackenna, Benjamín (1874). *Álbum del Cerro Santa Lucía, Colección de las principales vistas, monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo*. Santiago, Chile.

Vicuña Mackenna, Benjamín (1875). "Una visita al Museo Histórico Indígena del Santa Lucía". *Revista Chilena*, Tomo I, Imprenta de la República. Santiago, Chile.

Vicuña Mackenna, Benjamín (1875). *Catálogo del Museo Histórico del Santa Lucía*. Imprenta de la República. Santiago, Chile.

Vicuña Mackenna, Benjamín (1884). "El Arte Nacional i su estadística ante la exposición de 1884 (revista retrospectiva 1858-1884)". *Revista de Artes y letras*, Tomo II. Santiago, Chile.

Vidargas, Francisco (1997). *La sociedad civil frente al patrimonio cultural*. Universidad Nacional Autónoma de México. México.

Villalobos, Sergio (1977). *Para una meditación de la conquista*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Villalobos, Sergio (1995). *Relaciones fronterizas en la Araucanía: el mito de la guerra de Arauco*. Editorial Antártica. Santiago, Chile.

Vitruvio, Marco Lucio (1955). *Los diez libros de la arquitectura*. Editorial Iberia. Barcelona, España.

Vivar, Gerónimo (1987). *Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Voionmaa, Luisa Flora (2004). *Escultura Pública en Santiago, 1792-2004*. 2 vol. Santiago, Chile.

Waisberg, Myriam (1979). "El patrimonio arquitectónico y el concepto de restauración en la época contemporánea". Documento del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Sede Valparaíso, Chile.

Weber, Max (1979). *El político y el científico*. Alianza Editorial. Madrid, España.

Wiener, Charles (1888). *Chili et chiliens*. Lib. Cerf. París, Francia.

William, James (1890). *Principles of Psychology*. Londres, Inglaterra.

Yaeger, Gertrude (2009). "Sobrellevar el pasado español. Liberalismo latinoamericano y la carga de la historia colonial en el siglo XIX: el caso chileno." En: Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (2009). *Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX*. Vol. 1. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

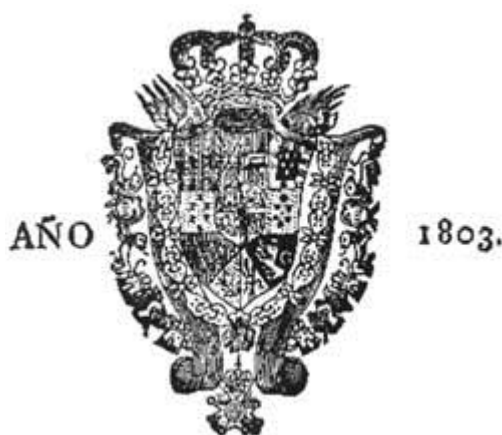
Zaldívar, Trinidad y Sánchez, Macarena (2009). "Símbolos, emblemas y ritos en la construcción de la nación. La fiesta cívica republicana: Chile 1810-1830." En: Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (2009). *Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX*. Vol. 2. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, Chile.

## ANEXO Nº 1

***Real Cédula de S(u) M(ajestad) y Señores del Consejo, por la qual se aprueba y manda observar la Instrucción formada por la Real Academia de la Historia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos ó que se descubran en el Reyno (6 de julio de 1803)***

España. Rey (1788-1808: Carlos IV)

REAL CEDULA  
DE S. M.  
Y SEÑORES DEL CONSEJO,  
POR LA QUAL DE APRUEBA Y MANDA OBSERVAR  
La Instrucción formada por la Real Academia de la Historia sobre el modo de  
recoger y  
conservar los monumentos antiguos descubiertos ó que se descubran en el  
Reyno.



MADRID EN LA IMPRENTA REAL

.....

DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Milan; Conde de Abspurg, de Flándes, Tirol y Barcelona; Señor

de Vizcaya y de Molina &c. A los de mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros qualesquiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos, así de Realengo, como de Señorío, Abadengo y Ordenes, y á todas las demas personas de qualquier grado, estado ó condicion que sean, á quienes lo contenido en esta mi Cédula toque, ó tocar pueda en qualquier manera: SABED, que á consecuencia de lo que tuve á bien encargar á mi Real Academia de la Historia con el deseo de hallar algun medio que pudiese á cubierto las antigüedades que se descubren en la Península de la ignorancia que suele destruirlas, con daño de los conocimientos históricos y de las artes, á cuyos progresos contribuyen en gran manera, me propuso por medio de mi primer Secretario de Estado un plan razonado [1] de las diligencias y medidas que juzgaba poderse adoptar para el reconocimiento y conservacion de los monumentos antiguos que en gran número tiene el tiempo sepultados en España. Por este plan, que me digné aprobar, se confiere á la citada Academia la inspeccion general de las antigüedades que se descubran en todo el Reyno. Y siendo forzoso, para que pueda ejercerla, que todas las personas que tienen conocido influxo, autoridad y jurisdiccion, Prelados, Cabildos y Corregidores la den aviso de todos los hallazgos de antigüedades que lleguen á su noticia, y la presten auxilio en todo quanto penda de sus facultades; con este fin manifesté al mi Consejo en treinta de Enero del año próximo ser mi voluntad circulase órdenes á los mismos Prelados, Cabildos y Corregidores del Reyno para que así lo cumpliesen, contribuyendo con su zelo á que no se pierdan unos monumentos en cuya conservacion interesa la instruccion pública, y aun el honor de la Nacion. Publicada en el mi Consejo esta mi resolucion, pidió y se le pasó de mi orden el referido plan; y en su vista, y de lo expuesto por mis Fiscales, en consulta de veinte y seis de Marzo del mismo año próximo me hizo presente sería muy oportuno, para la mas completa verificacion de los fines insinuados, el que se formase desde luego, y se le remitiese á efecto de reconocerla, la instruccion que según el citado plan habia de imprimir y publicar la Academia, y se extendiese de todo una mi Real Cédula, para ocurrir de este modo á las dificultades ó inconvenientes que pudiese haber en la execucion de algunos de sus capítulos, especialmente los que tratasen de instrumentos de archivos particulares, ó de monumentos y memorias que tambien lo fuesen. Habiéndome conformado con el dictámen del mi Consejo, se previno de mi orden á la Academia formase, como lo hizo, la Instruccion que indicó, y es la siguiente.

*Instruccion formada de orden de S. M. por la Real Academia de la Historia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos ó que se descubran en el Reyno.*

#### I.º

Por monumentos antiguos se deben entender las estatuas, bustos y baxos relieves, de qualesquiera materia que sean, templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumachías, palestras, balos, calzadas, caminos, aqueductos, lápidas ó inscripciones, mosaycos, monedas de qualquiera clase,

camafeos : trozos de arquitectura, columnas miliarias; instrumentos músicos, como sistros, liras, crótalos; sagrados, como preferículos, símpulos, lituos, cuchillos sacrificatorios, segures, aspersorios, vasos, trípodes : armas de todas especies, como arcos, flechas, glandes, carcaxes, escudos: civiles, como balanzas, y sus pesas, romanas, relojes solares ó maquinales, armillas, collares, coronas, anillos, sellos : toda suerte de utensilios, instrumentos de artes liberales y mecánicas; y finalmente cualesquiera cosas, aun desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean Púnicas, Romanas, Cristianas, ya Godas, Árabes y de la baxa edad.

## 2.º

De todos estos monumentos serán dueños los que los hallasen en sus heredades y casas, ó los descubran a su costa y por su industria. Los que se hallaren en territorio público ó realengo (de que es dueño S. M.) cuidarán de recogerlos y guardarlos los Magistrados y Justicias de los distritos. Puesto en custodia, los descubridores, poseedores y Justicias respectivamente darán parte y noticia circunstanciada de todo á la Real Academia de la Historia por medio de su Secretario, á fin de que esta tome el correspondiente conocimiento, y determine su adquisicion por medio de compra, gratificacion, ó según se conviniese con el dueño.

## 3.º

Cooperarán á todo lo dicho en quanto sea de su parte (como personas ilustradas) los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Abades, Cabildos y demas superiores Eclesiásticos, así como los Magistrados seculares, indagando y adquiriendo noticias de los hallazgos, y poniéndolos en la de la Academia, según y para los fines enunciados en el artículo 2.º

## 4.º

Los descubridores tendrán el mayor cuidado de notar puntualmente el parage de los hallazgos, para que por este medio pueda la Academia conjeturar ó resolver á qué Pueblo, Colonia ó Municipio pudieron pertenecer; expresando con exáctitud á quantas leguas, millas ó pasos esten Ciudad, Villa, Lugar, rio, monte ó valle conocido, y hácia qué region celeste de ellos, esto es, si al Levante, Norte, Sur ó Poniente.

## 5.º

Si en algunas Ciudades ó Pueblos hay antigüedades de las indicadas en el artículo 1.º, halladas en otro tiempo, y que aun exístan en parages en que puedan aniquilarse por descuido, ó por injuria del tiempo, sus dueños ó las Justicias darán noticia del mismo modo que se ha dicho, para que la Academia la tenga de ellas, y vea las ventajas que puede sacar de nuestra Historia secular ó eclesiástica.

## 6.º



La Academia quedará agradecida á los buenos patriotas que coadyuden á la ilustracion de la patria por el medio de buscar, conservar y comunicarla los monumentos antiguos arriba nombrados; sin que por eso dexé de satisfacer á los poseedores de las cosas halladas el tanto en que se convinieren, quedando la conduccion de ellas á cargo de la Academia.

## 7.º

Generalmente las Justicias de todos los Pueblos cuidaran de que nadie destruya ni maltrate los monumentos descubiertos ó que se descubrieren, puesto que tanto interesan al honor, antigüedad y nombre de los Pueblos mismos; tomando las providencias convenientes para que así se verifique. Lo mismo practicarán en los edificios antiguos que hoy exísten en algunos Pueblos y despoblados, sin permitir que se derriben, ni toquen sus materiales para ningun fin; antes bien cuidarán de que se conserven; y en el caso de amenazar próxima ruina, lo pondrán en noticia de la Academia por medio de su Secretario, á efecto de que esta tome las providencias necesarias para su conservacion.

Esta instrucción la dirigí al mi Consejo, á fin de que examinándola sirviese para los efectos que me habia propuesto; y habiéndolo executado, con presencia de lo expuesto por mis tres Fiscales, se acordó expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á todos y cada uno de vos en vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdicciones veais la Instrucción inserta, guardéis y cumplais lo dispuesto en ella, y lo hagais guardar, cumplir y executar, sin permitir su contravencion en manera alguna. Y encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y á los que los sean Cabildos de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales, sus Visitadores ó Vicarios, y á los que lo sean Capitulares en Sede vacante, á los Cabildos de las Iglesias Colegiatas, Capillas Reales, Abades y demas Ordinarios Eclesiásticos que exerzan jurisdiccion, y á los Superiores ó Prelados de las Ordenes Regulares, y de las Militares, Párrocos y demas personas Eclesiásticas, hagan observar lo dispuesto en esta mi Cédula, sin consentir con ningun pretexto su contravencion; contribuyendo con su ilustrado zelo, como conviene al honor de la Nacion, y al adelantamiento de la instrucción pública, á que por la expresada mi Real Academia se consigan los fines á que se dirige esta mi Cédula, prestándola con el mismo objeto todos los auxilios que penden de su autoridad y respectivas facultades: que así es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Cédula, firmado de D. Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fe y crédito que á su original. Dada en Madrid á seis de Julio de mil ochocientos y tres.= YO EL REY.= Yo Don Juan Ignacio de Ayestaran, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su mandado.= Don Joseph Eustaquio Moreno.= Don Bernardo Riega.= Don Domingo Fernandez de Campománes.= Don Sebastian de Torres.= Don Andres Lasauca.= Registrada, Don Joseph Alegre.= Teniente de Canciller mayor, Don Joseph Alegre.

*Es copia de su original, de que certifico.*

**Anexo 2**

**DECRETO ORGANICO DE CREACION DEL CONSEJO  
SUPERIOR DE LETRAS Y BELLAS ARTES**

***Santiago, 31 de Mayo de 1909.***

“Nº 1,909.- En uso de las atribuciones que conceden al Presidente de la República los números 2 y 21 del artículo 73 de la Constitución Política; y visto lo dispuesto en el artículo 144 de la misma Constitución; y teniendo presente;

1º.- Que la enseñanza artística del país carece en general de una organización sistemática en armonía con el progreso alcanzado por las Letras y por las Artes en todas sus manifestaciones;

2º.- Que para obtener una dirección eficaz de la Enseñanza Artística, el Gobierno necesita el concurso permanente de un Cuerpo Consultivo que estudie en conjunto, y particularmente, la organización, funcionamiento y desarrollo de los establecimientos especiales destinados á esta enseñanza que actualmente funciona sin sujeción á un plan directivo uniforme;

3º.- Que, si bien es cierto que con tal objeto existe hoy la Comisión Permanente de Bellas Artes, esta Comisión tiene atribuciones muy limitadas y que se relacionan solo con algunas de las ramas de la Enseñanza Artística;

4º.- Que aún cuando el artículo 12 de la Ley de Instrucción Secundaria y Superior de 9 de enero de 1879, establece una facultad con la denominación de: “Filosofía, Humanidades y Bellas Artes”, no por eso ha querido claramente que sea universitaria la enseñanza técnica especial de todas las Bellas Artes, pues aquella denominación parece referirse más apropiadamente á las nociones generales que forman parte del plan de estudios en la Enseñanza Secundaria, pues de otro modo no figuraría como simple agregado complementario y final de las Humanidades, cuyo estudio y gobierno representa por sí solo la suma general de todos los conocimientos humanos;

5º.- Que esta misma interpretación del citado artículo 12 de la ley del 79 parece haber sido aceptada por la Universidad, puesto que no ha considerado comprendida entre sus atribuciones la de dirigir, vigilar y desarrollar los Establecimientos Especiales de Educación Artística sostenidos por el Estado, con la sola excepción de la Escuela de Bellas Artes que ha funcionado bajo su dependencia;

6º.- Que es menester que el Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución Política, estimule el desenvolvimiento intelectual,

manifestado en forma de producciones literarias y artísticas, como medio práctico de armonizar la cultura intelectual del país con su desarrollo material; y

7º.- Que el desenvolvimiento de las Letras y de las Artes debe ser considerado no solamente como manifestación superior de cultura y progreso intelectuales, sino también como factor de mayor producción económica nacional, puesto que las producciones literarias, artísticas y teatrales de todo orden, representan valores materiales, como podría comprobarse, entre otros medios, estableciendo las cantidades relativamente considerables que invierte el país en la importación de obras y artistas extranjeros.

#### DECRETO:

ART. 1º Créase un Consejo Superior de Letras y de Bellas Artes, que residirá en Santiago, y que tendrá a su cargo la vigilancia general de todos los establecimientos públicos de Enseñanza Artística, Fomento de las Letras, del Arte Nacional y del Arte aplicado á las industrias; y la supervigilancia y dirección de la Escuela de Bellas Artes que corresponde por la ley especialmente al Consejo de Instrucción Pública;

ART. 2º. Este Consejo se compondrá de las siguientes Secciones:

Primera Sección: De Letras y arte Dramático, que será formada: a) por el Rector de la Universidad; b) por un profesor ó un ex – profesor de Literatura ó Castellano; y c) por diez personas de reconocida competencia en Literatura y Arte Dramático. Será Secretario de esta Sección, un profesor titulado de Declamación, nacional ó extranjero.

Segunda Sección: De Artes Gráficas (Dibujo, Pintura, Escultura, Arquitectura, Monumentos, Paseos Públicos y Arte aplicado á las Industrias), que será formado; a) por tres profesionales de Artes Gráficas que hayan obtenido distinciones en Exposiciones Nacionales ó Extranjeras; b) por nueve personas de reconocida competencia en Artes Gráficas; y c) por el Primer Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago.

Tercera Sección: De Música, que será formada; a) por el Sub-Secretario del Ministerio de Instrucción Pública; b) por dos profesores ó ex – profesores titulados en Chile ó en el extranjero; y c) por nueve personas de reconocida competencia en música.

ART. 3º. Las tres Secciones anteriores funcionarán separadamente en el desempeño de su cometido, y sólo se reunirán en Sesión General cuando una de ellas invite á las otras, ó cuando sean convocadas al efecto por el Ministro de Instrucción Pública, que presidirá el Consejo. En ausencia del Ministro, presidirá el Consejo uno de los miembros del mismo, que elegirá en la calidad permanente de Vice-Presidente.

Cada una de las Secciones elegirá su Presidente y Secretario respectivos, El Consejo, en sesión plena, elegirá un Secretario General y propondrá al

Gobierno el nombramiento y condiciones del personal de *Secretaría* que estime necesario para el servicio.

Los Consejeros comprendidos en las letras *b)* y *c)* de la Sección Primera; *a)* y *b)* de la Segunda; y *b)* y *c)* de la Tercera, serán designados por el Presidente de la República, durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.

ART. 4º. Las Secciones del Consejo se reunirán en sesión á lo menos cada quince días dentro del período escolar, y cada vez que sean convocadas extraordinariamente por sus respectivos Presidentes ó por el Ministro de Instrucción Pública, que presidirá todas las reuniones á que concurra. Para que las Secciones puedan sesionar, bastará la concurrencia de tres de sus miembros.

El Consejo General formará *quórum* con la tercera parte de sus miembros.

ART. 5º. El Consejo y sus Secciones funcionarán por ahora en el Ministerio de Instrucción Pública, y en época oportuna, en el Palacio de Bellas Artes, para lo cual se destinarán en él los salones y departamentos necesarios.

ART. 6º. El Consejo y sus Secciones podrán llamar á sus sesiones, cada vez que lo estimen conveniente, á cualesquiera de los Directores ó empleados de Enseñanza Artística.

ART. 7º. Corresponderán al Consejo las siguientes atribuciones, que ejercerá independientemente cada una de sus Secciones, en su respectiva materia:

- A) La Dirección Superior y vigilancia de todos los establecimientos de enseñanza y Fomento Artísticos y del Arte aplicado á las industrias, con excepción de la Escuela de Bellas Artes, respecto de la cual el Consejo tendrá solo el derecho de elevar las representaciones y peticiones que juzgue adecuadas, al Consejo de Instrucción Pública;
- B) El Fomento de las Letras y de las Artes por medio de Certámenes, Concursos, Museos, Exposiciones, Bibliotecas, Representaciones, etc.;
- C) La conservación y el fomento del buen gusto general en las construcciones y monumentos públicos, y en la disposición y ornamentos de las ciudades;
- D) La administración y vigilancia de todos los pensionados de Arte en el extranjero.

ART. 8º. Para cumplir con los fines de la Dirección Superior, fomento y supervigilancia de los establecimientos de enseñanza artística señalados en la letra A del artículo anterior, el Consejo tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

1º.- Proponer al Gobierno ó, en su caso, al Consejo de Instrucción Pública, la creación ó supresión de Establecimientos de Enseñanza Artística y de cursos ó clases de ellos y vigilar los existentes;

2º.- Dictar ó modificar, con acuerdo del Gobierno, y en su caso, con la aprobación del Consejo de Instrucción Pública, los planes de estudios y reglamentos internos de los diversos Establecimientos Artísticos;

3º.- Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la enseñanza artística;

4º.- Proponer al Gobierno el nombramiento de Directores de Establecimientos de Educación y Fomento Artísticos, por medio de listas que se tomarán cada vez que se produzca una vacante, previo concurso de aspirantes, y proponer la remoción de estos mismos Directores. En estas listas se incluirán las personas idóneas que se presentaren.

5º.- Proponer el nombramiento, promoción y separación de los profesores y demás empleados de Enseñanza Artística, é indicar la condiciones en que deben ser contratados sus servicios;

6º.- Determinar las pruebas que deban exigirse á los alumnos de Establecimientos Artísticos que aspiren al título de idoneidad profesional y expedir estos mismos títulos.

Las facultades consideradas en los inciso 4º, 5º y 6º de este artículo, no se refieren á la Escuela de Bellas Artes, respecto de cuyos Directores, profesores, pruebas y títulos, podrá el Consejo elevar simples proposiciones al Consejo de Instrucción Pública, que este considerará como estime conveniente;

7º.- Recibir las donaciones, herencias ó legados que se hagan ó dejen á favor de la Enseñanza Artística, y dirigir y reglamentar la administración de los bienes ó fondos respectivos;

8º.- Visitar periódicamente, por sí ó por alguno de sus miembros, y en casos especiales por otra persona ó personas de reconocida competencia, los Establecimiento de Educación Artística.

9º.- Pedir á los Intendentes y Gobernadores, á los Jefes de Servicios y Directores de Establecimientos de Enseñanza Artística, podrán dirigirse á su vez al Consejo ó á cualesquiera de sus Secciones para proponer las medidas que estimen convenientes en orden á sus respectivos objetos.

ART. 9º. Para desempeñar las funciones de Fomento de las Letras y las Artes, indicadas en la letra B del artículo 7º, el Consejo tendrá, entre otras cosas, las siguientes atribuciones:

1º. Proponer la creación de Museos, Exposiciones, Bibliotecas y Concursos Públicos, en conformidad á reglamentos que se presentarán á la aprobación del Gobierno;

2º. Organizar y realizar Exposiciones, Certámenes, Publicaciones, Representaciones Dramáticas ó Ejecuciones Musicales, destinadas al Fomento de las Letras y del Arte Nacional, con los fondos que anualmente se destinarán APRA estos objetos en el Presupuesto de Instrucción Pública;

3º. Proponer las medidas conducentes á la fundación del Teatro Nacional;

4º. Proponer las modificaciones que sea necesario introducir en los Presupuestos destinados al sostenimiento y fomento de las Artes y Las Letras Nacionales;

5º. Informar al Gobierno sobre las Obras de Arte que deban adquirirse anualmente para los Museos, sobre las Producciones Literarias, Dramáticas ó Musicales que deban ser patrocinadas para su publicación, representación ó ejecución;

6º. Proponer al Gobierno los alumnos distinguidos de los Establecimientos de Enseñanza Artística que deban recibir pensión del Gobierno para atender á los gastos de sus estudios dentro del país; y

7º. Proponer é informar al Gobierno todas las medidas que estime conducentes á la difusión y progreso de las Letras y de las Artes Nacionales.

ART. 10. Serán también atribuciones del Consejo, á fin de atender á la conservación y fomento del buen gusto general en las construcciones y Monumentos Públicos y ornamentos de las ciudades, de conformidad con lo dispuesto en la letra C del artículo 7º del presente decreto, entre otras, las siguientes:

1º. Vigilar y fomentar los Museos Artísticos, Monumentos, Edificios y Paseos Públicos, haciendo las representaciones del caso á las autoridades respectivas;

2º. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes que se relacionan con la ornamentación de las ciudades y el fomento del buen gusto estético, y velar por la conservación, aumento ó mejora de las plantaciones y jardines en plazas y vías públicas, haciendo las representaciones del caso á las autoridades correspondientes;

ART. 11. A fin de dar sanción legal efectiva á lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno someterá al Congreso Nacional, para su aprobación, el respectivo proyecto de Ley.

ART. 12. Las atribuciones que corresponderán al Consejo, de conformidad con lo dispuesto en la letra D del artículo 7º, serán entre otras, las siguientes:

1º. Proponer al Gobierno un plan de pensionados artísticos en el extranjero;

2º. Determinar las pruebas y requisitos que deban exigirse á los artistas que aspiren á ser pensionados por el Gobierno, y proponer y contratar, con aprobación del Gobierno, á los mismos pensionados, y velar por el buen cumplimiento de los deberes impuestos á estos pensionados; recibir y exponer las obras que estén obligados á enviar al país, é informar al Gobierno sobre el mérito de ellas.

ART. 13. Todas las resoluciones y acuerdos tomados por cada una de las Secciones en sus respectivas materias, serán consideradas como resoluciones y acuerdos de todo el Consejo Superior de Letras y Bellas Artes.

ART. 14. Quedan derogadas todas las disposiciones administrativas vigentes relativas á las materias de que trata el presente decreto, y especialmente el decreto de 20 de Noviembre de 1903, que crea la Comisión Permanente de Bellas Artes.

Montt

Jorge Huneeus

### **Anexo N°3**

## **MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA**

MENSAJE PRESENTADO

AL

H. CONSEJO DE ESTADO

Sobre conservación de

MONUMENTOS HISTORICOS

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados:

En muchas naciones europeas la necesidad de conservar en su estilo propio i en buen estado todos los edificios que tienen un carácter artístico o histórico, ha traído como consecuencia la creación de una Comisión de Monumentos, que tiene a su cargo los trabajos de ésta índole.

En Francia se instituyó el año 1837 i llevó a cabo bastas restauraciones en todo el territorio francés, provocando de ese modo una saludable emulación en las comunas i en los particulares, para la conservación de los monumentos, dejados, hasta entonces, en completo abandono.

La mayor parte de las naciones poseen comisiones de esta clase análogas a la de Francia. Algunas, como Italia, Grecia i Egipto, poseen leyes que aún prohíben en absoluto vender a los extranjeros objetos de arte que pertenecen a las ciudades o a los particulares, como asimismo las estatuas i otros objetos encontrados en las excavaciones.



En Chile se encuentran edificios que tienen carácter artístico i monumentos históricos de diferentes jénero, algunos de los cuales cuentan varios siglos de existencia. Esos edificios i monumentos están expuestos a sufrir graves deterioros, como ha ocurrido a los fuertes construidos, bajo la dominación española, en diversos puntos de la frontera i principalmente en la bahía de Corral, i con tantos otros que es innecesario recordar.

Se impone la necesidad de dictar una lei que proteja los edificios i monumentos históricos i que conserve a las jeneraciones futuras el patrimonio dejado por las que nos han precedido.

En mérito de las consideraciones espuestas, i oído el Consejo de Estado, tengo el honor de someter a vuestra deliberación el siguiente

#### PROYECTO DE LEY:

ARTICULO PRIMERO. Los monumentos históricos que se encuentran en el territorio chileno están colocados bajo la salvaguardia del Estado, i los que los deterioren o destruyan estarán sujetos a las penas fijadas en los artículos 485 i 486 del Código Penal.

Si los daños sancionados con arreglo al inciso precedente fueren cometidos por empleados públicos, la pena correspondiente se aplicará en su grado máximo.

ART. 2º. Habrá una Comisión, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, que se denominará Comisión de Monumentos Históricos.

ART. 3º. Compondrán la Comisión:

- 1º.- El Ministro de Instrucción Pública, que la presidirá;
- 2º.- Un miembro de la Cámara de Senadores i otro de la Cámara de Diputados, elegidos por ellas mismas;
- 3º.- Dos arquitectos;
- 4º.- Un artista pintor o un escultor;
- 5º.- Otras dos personas mas nombradas por el Presidente de la República; i
- 6º.- Un profesor de historia nacional designado por la Universidad.

El Presidente de la República designará los miembros a que se refieren los números 3º i 4º del presente artículo.

ART. 4º. Corresponde a la Comisión de Monumentos Históricos:

Llevar una lista completa de los monumentos históricos;

Formar para cada uno de estos monumentos una relación histórica i artística, una descripción i un plano;

Clasificar los referidos monumentos;

Indicar al Gobierno las reparaciones que deben ejecutarse en dichos monumentos para su conservación i mantenimiento;

Solicitar del Gobierno los fondos que necesite para los efectos indicados;

Perseguir la responsabilidad criminal i civil que afecte a las personas que destruyan o transformen los monumentos, i

Proponer al Gobierno la expropiación de aquellos edificios particulares, de carácter histórico, que convenga adquirir.

ART. 5º. Se entenderá histórico un monumento cuando se le declare tal por un decreto supremo, que se dictará de acuerdo con la Comisión de Monumentos.

ART. 6º. Las reparaciones i la conservación de los monumentos históricos, fiscales o particulares, serán de cargo del Estado, sin perjuicio de que las Municipalidades puedan contribuir, en la proporción que crean conveniente.

ART. 7º. Las solicitudes en que se pida que un monumento sea calificado como histórico se elevarán a la Comisión de Monumentos, por intermedio del Intendente respectivo, i deberán ir acompañadas de una reseña histórica i de planos, dibujos, fotografías i demás datos necesarios para que la Comisión pueda apreciar la justicia de la petición.

En vista de estos datos, la Comisión designará uno o varios de sus miembros para que se trasladen al lugar en que se encuentre ubicado el monumento, i presenten un informe en el que se espese si debe o no accederse a lo solicitado.

ART. 8º. Declarado como tal un monumento histórico, ninguna otra autoridad o repartición administrativa, fuera de la Comisión respectiva, podrá intervenir en su conservación, i podrá ser destruido sin su consentimiento.

En los casos en que la aplicación de estas medidas irroque grave perjuicio a particulares, se deberá proceder a la expropiación del monumento.

Santiago, a

E. FIGUEROA

CARLOS BALMACEDA S.

## APENDICE

---

### LEJISLACION COMPARADA SOBRE MONUMENTOS HISTORICOS

---

#### FRANCIA

La Comisión de Monumentos Históricos fue creada en 1837, clasificándose, al mismo tiempo, los monumentos.

En interés del arte i de la ciencia se dictó la Lei de 30 de marzo de 1887, completado con el Reglamento de Administración Pública de 3 de Marzo de 1889.

La Comisión de Monumentos Históricos, instituida bajo la Dirección de Bellas Artes, tiene por misión establecer la lista de monumentos i objetos de interés artístico e histórico; de indicar lo que conviene restaurar, examinar los proyectos presentados para su restauración; proponer al Ministro la distribución de fondos destinados a la conservación de monumentos clasificados.

Todo monumento clasificado, es decir, inserto en la lista de la Comisión, no puede ser destruido, ni aún en parte, ni ser objeto de un trabajo de restauración o de modificación alguna, si el Ministro de Instrucción Pública i de Bellas Artes no da su consentimiento.

Los objetos que pertenecen al Estado son inalienables e imprescriptibles.

En la Comisión de Monumentos Históricos entran altos funcionarios de Bellas Artes, arquitectos, pintores, arqueólogos, especialistas competentes. Preside el Ministro de Instrucción Pública, su Vice-Presidente es el director de Bellas Artes.

Hai también una Inspección General de Monumentos Históricos, que comprende cuatro Inspectores Jenerales i una Oficina de Monumentos Históricos.

## INGLATERRA

Se dictó en esta país, sobre monumentos históricos, la Lei de 18 de Agosto de 1882.

## DINAMARCA

En Dinamarca hai legislación, sobre la materia, desde el año 1852, i posteriormente se han ido dictando diversas Leyes en 1807, 1848, i 1861. Una Comisión Real para la conservación de antigüedades dirige la lista de monumentos, i está provista de fondos para su adquisición, conservación i restauración. Ley de 17 de Noviembre de 1907.

## HUNGRIA

Existe una Lei mui completa, de fecha 28 de Mayo de 1881. Los propietarios de un monumento histórico están obligados a indicarlo a la autoridad comunal, inmediatamente después de su descubrimiento, i conservarlo intacto durante dos meses hasta que el Ministro haya decidido acerca de su conservación. Si ésta se decide, el propietario queda sometido a medidas de vigilancia mui serias, i a multas en caso que viole la Lei sobre la materia.

## ITALIA

Tiene legislación mui importante i data desde 1462. El Papado ha tomado en este sentido las primeras medidas. Los Edictos de Pacea (1820) aseguran una protección eficaz a los manuscritos i a los documentos históricos, a los monumentos i objeto de arte. La Lei de 7 de Febrero de 1892 ha reglamentado de nuevo la clasificación de objetos i colecciones que tengan interés histórico i artístico. Lei de 27 de Junio de 1907 i de 14 de Julio del mismo año.

## GRECIA

Tiene una legislación (10 de Mayo 1834) inspirada en la de Italia.

## RUMANIA

La Rumania posee dos leyes de Noviembre de 1892, la una, para la conservación i restauración de monumentos públicos, i la otra sobre descubrimientos de monumentos i objetos de antigüedad, cuyas prescripciones se parecen mucho a la legislación francesa, salvo en lo que concierne a las sanciones, que son mui severas: como, por ejemplo, de 500 a 5,000 francos al propietarios que repara o restaura un monumento sin autorización, o *prisión de un día a seis meses al que destruye o deteriora un monumento público*.

## PRUSIA

Sobre protección de monumentos históricos i de bellas artes se ha dictado en este país la lei de 15 de Julio de 1907.

La administración tendrá el derecho de rehusar la autorización de construir o modificar las construcciones existentes, cuando, por las nuevas construcciones, el carácter de ciertas calles o plazas, o el carácter del conjunto de la localidad, se alteran sustancialmente. Se vigila, por lo tanto un monumento histórico, como también sus alrededores.

## NEW YORK

La Lei número 465 de junio de 41907 castiga toda destrucción de objetos encerrados en bibliotecas, museos o galerías de colecciones, con *la pena de tres años de prisión* en una prisión de Estado, o multa de 500 dollars, o dos penalidades acumuladas.

## NORUEGA

La lei de 19 de mayo de 1904 prohíbe la exportación de antigüedades (de las épocas primitivas, o de la Edad Media, tales como monedas, armas, herramientas, muebles, adornos, buques, piezas sueltas, piedras con inscripciones i figuras) sin previa autorización del correspondiente Departamento. Toda persona que contravenga a estas disposiciones, o se haga cómplice de tal contravención, incurrirá en una multa de 1 a 5,000 coronas sin perjuicio de la confiscación de los objetos en cuestión o del pago del valor correspondiente en provecho del Tesoro.

## ESPAÑA

En España ya la Lei 3ª, tit. XX, libro VIII, de la Novísima Recopilación, provee a la conservación de las antigüedades que se descubran en todo el Reino. Desde el 24 de Noviembre de 1865 están perfectamente reglamentadas las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos i Artísticos. Por Reales Ordenes se ha ido declarando qué monumentos i edificios son *nacionales históricos i artísticos*. En 30 de Septiembre de 1887 se provee a la conservación de los monumentos históricos i de los edificios.

## ANEXO Nº 4

Resolución de la Quinta Conferencia Panamericana de Santiago de Chile aprobada el 13 de abril de 1923 sobre Protección de los Documentos Arqueológicos. Citado en las páginas 241 y 242 del documento *Conferencias Internacionales Americanas, Primer Suplemento*, que publica la Biblioteca Digital Daniel Cosío Villegas del Colegio de México en: [http://biblio2.colmex.mx/coinam/coinam\\_1\\_suplemento\\_1938\\_1942/base2.htm](http://biblio2.colmex.mx/coinam/coinam_1_suplemento_1938_1942/base2.htm).

“La Quinta Conferencia Internacional Americana,  
Resuelve:

1º Recomendar a los Gobiernos de América la asignación en los presupuestos anuales de una suma conveniente para las excavaciones y estudios de los restos arqueológicos, para la expropiación de los que sea necesario, como también de los documentos históricos que convengan y para el fomento de los museos y bibliotecas en que han de conservarse para ser utilizados.

2º Con el mismo objeto se recomienda a los Gobiernos que se indican, la fundación de dos Institutos Arqueológicos en los centros de más alta cultura precolombina, uno en la región de México y Centro América y otro en la de Ecuador y Perú, según acuerden los respectivos Gobiernos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en los demás países.

3º Pedir a los Gobiernos de las diversas naciones americanas que establezcan o estimulen en sus institutos superiores de enseñanza, el estudio de las respectivas lenguas aborígenes.

4º Insinuar a los mismos Gobiernos la conveniencia de que se legisle en el sentido de obligar a quienes descubran restos arqueológicos, a denunciar a la autoridad administrativa, sin que puedan ser removidos antes de un plazo prudencial para su examen.

5º Igualmente que se dicten leyes que faculden a los Gobiernos para expropiar, por causa de utilidad pública, los restos arqueológicos, los documentos, las construcciones y objetos muebles de interés histórico, cuya exportación debe ser prohibida en todo caso.

6º Recomendar a los Gobiernos aludidos la designación de expertos que dictaminen sobre la procedencia de las exportaciones; sobre la preservación de tales restos, documentos, construcciones y objetos muebles de interés histórico; y que supervigilen, además, la restauración de los edificios y construcciones a los cuales se les haya asignado ese carácter, a fin de conservárselo.

Se recomienda igualmente que dentro de lo posible dichos expertos formen parte de las delegaciones que cada Gobierno designe para concurrir a las reuniones internacionales de americanistas.

7º Recomendar a cada Gobierno la formación del mapa antropogeográfico de su respectivo país.

8º Recomendar a cada Gobierno la formación de un archivo histórico cuyo índice debe ser canjeado entre las distintas naciones para facilitar los estudios internacionales de los problemas y de los hombres de América. En cuanto fuere posible, los archivos proporcionarán copias de los documentos que se les soliciten.

9º Llamar la atención sobre la eficacia que tendría un Anuario Oficial que diera cuenta de los avances realizados en cada país sobre las materias anteriores.

10º Encargar a la Unión Pan Americana que coopere a la difusión de los estudios arqueológicos e históricos sirviendo de intermediario entre los Museos, Sociedades Científicas y especialistas para el intercambio de datos, monografías, moldes, calcos de objetos, etc., y que preste, además, su apoyo a las misiones arqueológicas de los diversos países del Continente.

La misma oficina procurará hacer publicaciones dedicadas principalmente al desarrollo de las actuales condiciones arqueológicas e históricas, a fin de establecer una estrecha cooperación entre los organismos y asociaciones similares de los distintos países que forman parte de la Unión.

(Número 5 del Acta Final)

Aprobada en la Quinta Sesión, de la Conferencia, del 13 de Abril de 1923.”



## ANEXO Nº 5

El siguiente documento está incluido en el libro de Ricardo Donoso (1937), Recopilación de Leyes, Reglamentos y Decretos relativos a la Enseñanza Pública. Ministerio de Educación Pública. Talleres de Imprenta de la Dirección General de Prisiones, Santiago de Chile.

---

“Se nombra una comisión encargada de la vigilancia y conservación de los monumentos históricos nacionales.

Santiago, 19 de junio de 1925. – Nº 3500.

Considerando:

1º.- Que una de las manifestaciones de cultura de un país es el empeño que demuestran sus autoridades en conservar, con su estilo propio y en buen estado, las construcciones o monumentos de carácter artístico o histórico donde se han desarrollado acontecimientos notables de la vida nacional;

2º.- Que en las naciones de mayor cultura se ejerce por es Estado una severa vigilancia y decidida protección sobre los citados monumentos, por medio de Comisiones Gubernativas que han llevado a cabo importantes restauraciones en edificios y monumentos que fueron levantados en épocas pasadas y gloriosas, y que habían quedado en completo abandono;

3º.- Que mediante los trabajos de esas comisiones se ha provocado una saludable y patriótica emulación entre la autoridades comunales y aún entre los particulares de las distintas regiones donde existen esos monumentos, para la conservación y la restauración de esas reliquias que recuerdan los esfuerzos que hicieron las generaciones pasadas por cimentar su nacionalidad;

4º.- Que en todos los países europeos existen leyes que establecen las normas a que debe estar sujeto el comercio de las piezas etnológicas, antropológicas y arqueológicas y aun los objetos de simple folklore, a fin de que no puedan ser sacados del territorio nacional sin el control de las autoridades científicas, protegiendo con esto los estudios de las ciencias naturales o históricas del país;

5º.- Que la 5ª Conferencia Panamericana celebrada en Santiago el año 1923 tomó resoluciones concretas sobre la preservación y conservación de los restos históricos y arqueológicos que existen en los países americanos, recomendado a los Gobiernos la dictación de leyes que obliguen a los particulares a denunciar ante las autoridades los hallazgos arqueológicos y ruinas históricas e impidan la explotación con fines de lucro, de los objetos que de ellos se extraigan:

6º.- Que estas resoluciones de la 5ª Conferencia Panamericana han traído como resultado la dictación de leyes sobre esta materia en las Repúblicas de

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Santo Domingo, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Méjico, Perú y Venezuela, donde se ha prohibido o reglamentado el comercio y la explotación de todo objeto arqueológico o histórico:

7º.- Que existen en Chile monumentos y construcciones de carácter artístico, histórico y arqueológico que están expuestos a sufrir graves deterioros, como ocurre con los fuertes, capillas, molinos, hornos de fundición, etc., construidos bajo la denominación española en diversos puntos de la frontera y región austral, principalmente en las bahías de Corral y Ancud; y lo mismo sucede con los monumentos de la isla de Pascua;

8º.- Que a causa del abandono en que se encuentran esos edificios y monumentos; de la falta de legislación sobre la materia y de una autoridad que esté especialmente encargada de su vigilancia y conservación, se cometen robos de especies y objetos de inapreciable valor histórico y científico, lo que constituye un atentado contra la cultura del país y contra los bienes del Estado;

9º.- Que hay evidente necesidad y conveniencia en adoptar medidas eficaces para resguardar esos bienes fiscales mientras se dictan las leyes que el interés y el progreso de la ciencia del país reclaman y es deber del Estado proteger los mencionados edificios y monumentos y conservarlos en condiciones de que las generaciones presentes y futuras puedan apreciar debidamente los esfuerzos que hicieron las precedentes para fundamentar nuestra nacionalidad,

#### DECRETO:

Artículo 1º. Los edificios y monumentos históricos y arqueológicos que se encuentran en el territorio nacional están colocados bajo la protección del Estado; y mientras se dicta una ley sobre esta materia, de acuerdo con las resoluciones de la 5ª Conferencia Panamericana, créase una Comisión Gubernativa que estará encargada de la vigilancia, restauración y conservación de esos monumentos, con las atribuciones y deberes que se expresan en este decreto.

Artículo 2º. La Comisión Gubernativa de monumentos históricos estará formada:

- a) Por el Ministro de Instrucción Pública, que la presidirá;
- b) Por el Presidente de la Sociedad de Historia y Geografía, que será el Vice-Presidente;
- c) Por el Director del Museo Histórico Natural;
- d) Por el Director del Museo de Antropología y Etnología;
- e) Por el Director del Museo de Bellas Artes;
- f) Por el Director del Archivo Histórico Nacional;
- g) Por un abogado del Consejo de Defensa Fiscal;
- h) Por el Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos;
- i) Por dos escritores, de preferencia de los que se hayan dedicado a los estudios históricos;

- j) Por un artista pintor o dibujante, y por un escultor, en las mismas condiciones anteriores; y
- k) Por un Jefe de Ejército del arma de ingenieros.

El Presidente de la República nombrará los miembros a que se refieren las letras g), i), j) y k).

Artículo 3º. La Comisión nombrará de su seno un Secretario, encargado de extender las actas, tramitar sus acuerdos y desempeñar las comisiones que se le encomienden. La Comisión podrá sesionar con cinco de sus miembros y sus acuerdos serán tomados por no menos de cuatro votos.

Artículo 4º. Las atribuciones y deberes de la Comisión serán los siguientes:

1º.- Formar un registro completo de los edificios y monumentos históricos y arqueológicos que existan en el territorio nacional, y clasificarlos según sus características;

2º.- Redactar para cada uno de ellos una relación artística e histórica; hacer una descripción detallada; levantar un plano y tomar los aspectos fotográficos. Estos trabajos se harán en las condiciones que la Comisión acuerde y se publicarán en la misma forma, en los Anales de la Universidad o en el Boletín de la Sociedad de Historia y Geografía, depositando los originales en el Archivo Histórico Nacional;

3º.- Indicar al Gobierno los trabajos de restauración, reparación y conservación que sea necesario ejecutar en los edificios y monumentos históricos y arqueológicos para volverlos a su estilo y aspecto primitivo; dirigir y vigilar los trabajos que se ejecuten y fiscalizar la inversión de los fondos que el Estado, las Municipalidades y los particulares le concedan para efectuar estos trabajos;

4º.- Dirigirse a las autoridades civiles o militares para pedirles la cooperación que necesiten con el objeto de llevar a cabo su cometido;

5º.- Gestionar por los medios legales o por cualquiera otro, la reivindicación o cesión por el Estado de los terrenos donde estén ubicados los monumentos o edificios históricos o arqueológicos que figuren como de propiedad particular, como asimismo sus alrededores, a fin de dejarlos accesibles al público que vaya a visitarlos;

6º.- Perseguir la responsabilidad civil y criminal de las personas que deterioren o hayan destruido los referidos monumentos, o de los ocupantes que se encuentren en ellos, o los usen a título precario o sin título alguno;

7º.- Dirigir por todos los medio legales o por cualquier otro, la devolución de los objetos que pertenezcan o hayan pertenecido a los monumentos y edificios históricos que hubieren sido de uso fiscal, y que se encontraren en otro poder;

8º.- Proponer al Gobierno la expropiación de los edificios de propiedad particular de carácter histórico que convenga adquirir o conservar;

9º.- Promover y fomentar la cooperación de los particulares a los trabajos de reparación y conservación de los monumentos históricos de la época colonial;

10º.- Reglamentar el acceso de los visitantes al recinto de los edificios y monumentos históricos y proponer al Gobierno la dictación de aquellas medidas que sean conducentes ala mejor vigilancia y conservación de los mismos;

11º.- Presentar al Gobierno un proyecto de legislación sobre la materia que establezca, principalmente las normas a que deben sujetarse:

- a) La restauración y conservación de los monumentos y edificios históricos y arqueológicos;
- b) La conservación y vigilancia de los monumentos, estatuas, columnas conmemorativas, etc., que se levanten en sitios públicos;
- c) La adquisición y reserva para el Estado de los elementos que deben conservarse en los Museos nacionales;
- d) El comercio de los objetos que se extraigan de cualquiera excavación que se efectúe por cualquier motivo en el territorio nacional, sean ellos piezas etnológicas, antropológicas, arqueológicas o simples objetos de folklore; y
- e) La exportación de las mencionadas piezas u objetos.

Artículo 5º. Será considerado como histórico para los efectos del presente decreto, un monumento, edificio, ruina o lugar que sea declarado tal por un decreto supremo que se dictará a solicitud y por acuerdo de la Comisión Gubernativa.

Artículo 6º. Cualquiera autoridad o ciudadano podrá denunciar la existencia de un monumento o edificio histórico ante el Gobernador respectivo o ante la Comisión Gubernativa, acompañando los antecedentes que tenga para estimarlo tal, y la ubicación exacta o aproximada en que se encuentra. En vista de estos datos, que el Gobernador comunicará la Comisión a la brevedad posible, ésta designará a uno o varios de sus miembros para que se trasladen al sitio que haya indicado, practiquen las investigaciones y estudios necesarios y presenten un informe que sirva de antecedente para el pronunciamiento de la Comisión.

Artículo 7º. Declarado histórico un monumento, edificio, ruina, o lugar, ninguna autoridad o repartición administrativa, fuera de la Comisión de Monumentos, podrá intervenir en su conservación y vigilancia, sino por un expreso mandato. Los objetos que existan en sus recintos o en el monumento mismo, si fuera transportable, no podrán ser removidos ni trasladados de un sitio a otro sin acuerdo de la Comisión; ni podrán ser sacados del país sin que una ley de la República lo autorice. Las personas que infrinjan estas disposiciones caerán en las penas que fijan los artículos 485 y 486 del Código Penal. Las autoridades del departamento están en el deber de prevenir e impedir estos

hechos, y en el caso de producirse, los comunicarán inmediatamente a la Comisión Gubernativa.

Artículo 8º. En las comunas donde se encuentren estas clases de monumentos o edificios, funcionará un Comité de Vecinos que tendrá por objeto cooperar a la labor de la Comisión de Monumentos, la que delegará en él las atribuciones que estime necesarias para el correcto desempeño de su cometido. De este Comité formará parte el Gobernador o Subdelegado, que lo presidirá; y el Alcalde en ejercicio que será el Vice-Presidente. La Comisión Gubernativa designará los demás miembros del Comité de Vecinos en el número que lo crea conveniente.

Artículo 9º. Las Municipalidades de las comunas donde existan monumentos o edificios históricos o arqueológicos podrán contribuir, en la proporción que les sea posible, a los gastos de restauración, conservación y vigilancia de los mismos.

Artículo 10º. Los Intendentes, Gobernadores, Comandantes Generales de Armas, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa Fiscal, prestarán a la Comisión Gubernativa y a los Comités de Vecinos la cooperación necesaria dentro de sus jurisdicciones, para que se realicen los trabajos y se cumplan las disposiciones que se contienen en el presente decreto.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el “Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno”. – ALESSANDRI. – José Maza.

## ANEXO Nº 6

Biblioteca del Congreso Nacional

-----

Identificación de la Norma : DL-651

Fecha de Publicación : 30.10.1925

Fecha de Promulgación : 17.10.1925

Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; SUBSECRETARIA DE GUERRA

Núm. 651.- Santiago, 17 de octubre de 1925.-

El Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros de Estado, dicta el siguiente

DECRETO- LEI:

### TITULO I

#### Monumentos Nacionales

Artículo 1º Los edificios o ruinas de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios de aborígenes; los objetos o piezas antropo-arqueológicas o de formación natural que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional y cuya conservación interese a la ciencia, a la historia o al arte; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en jeneral, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo, quedan, como monumentos nacionales, bajo la protección del Estado. La vijilancia sobre ellos se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales y en la forma que determine la presente lei.

### TITULO II

#### Consejo de Monumentos Nacionales

Art. 2º Compondrán el Consejo de Monumentos Nacionales:

a) El Ministro de Instrucción Pública, que lo presidirá; b) El Presidente de la Sociedad de Historia y Jeografía, que será el vice-presidente; c) El Director del Museo Histórico Nacional; d) El Director del Museo de Etnología y Antropología; e) El Director del Museo de Bellas Artes; f) El Director Jeneral de Obras Públicas; g) El Conservador del Archivo Histórico Nacional; h) El Presidente de la Asociación de Arquitectos de Chile; i) Un Jefe del Ejército, del arma de ingenieros, en actividad o en retiro; j) Un Jefe de la Armada, en actividad o en retiro; k) Un abogado del Consejo de Defensa Fiscal; l) Dos escritores; m) Un artista, pintor o dibujante; y n) Un escultor. El Presidente de la República elejirá, cada tres años, los siete últimos miembros, prefiriendo a personas que se hayan dedicado a asuntos históricos.

Art. 3º El Consejo nombrará, cada tres años, de su seno, un Secretario, encargado de extender las actas, tramitar sus acuerdos y desempeñar las comisiones que se le encomienden. El Secretario, como delegado del Consejo, será el Visitador Jeneral de Monumentos, y ejercerá la inspección inmediata de los monumentos nacionales a que se refiere esta lei, sin perjuicio de los visitantes especiales que pudiese designar el Consejo para casos determinados.

Art. 4º El Consejo de Monumentos Nacionales podrá sesionar con siete de sus miembros y sus acuerdos serán válidos cuando concurren con su voto más de la mitad de los asistentes.

Art. 5º Son atribuciones y deberes del Consejo:

1º Formar el Registro de Monumentos Históricos y Públicos. Deberán incluirse en el Registro los que existan en el territorio nacional, clasificándolos según sus características, con una relación histórica, una descripción detallada, un plano y los aspectos fotográficos de cada uno de ellos. Estos trabajos se publicarán en el Boletín de la Sociedad de Historia y Jeografía, y una copia autorizada de ellos se depositará en el Archivo Histórico Nacional.

2º Indicar al Gobierno los trabajos de restauración, reparación y conservación que sea necesario ejecutar en los monumentos históricos; presentar el presupuesto de su costo; dirigir estos trabajos y fiscalizar la inversión de los fondos que para ellos se le concedan.

3º Gestionar la reivindicación o la cesión para el Estado de los monumentos históricos o arqueológicos que figuren como de propiedad particular; exigir la devolución de los objetos que pertenezcan a monumentos que sean de propiedad nacional y que se encontraren en otro poder, y perseguir la responsabilidad de las personas que infrinjieren la presente lei.

4º Reglamentar el acceso a los monumentos históricos o públicos y proponer al Gobierno las medidas administrativas que sean conducentes a la mejor vijilancia y conservación de los mismos.

5º Proponer al Gobierno los reglamentos que deban dictarse para el cumplimiento de la presente lei, y dirigirse a las autoridades civiles y militares y demás funcionarios de la administración, recabando su cooperación con el mismo objeto.

Art. 6º En las comunas donde existan monumentos históricos o públicos, la Municipalidad respectiva tendrá la obligación de cooperar a las labores del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determine el Reglamento.



## TITULO III

### Monumentos históricos

Art. 7º Será considerado monumento histórico, para los efectos de esta ley, todo edificio, ruina, lugar o sitio, pieza u objeto antro-po-arqueológico, mueble o inmueble, de propiedad nacional, municipal o particular, que sea declarado tal por decreto supremo que se dicte a solicitud y por acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales, previos los trámites que fijará el Reglamento.

Cualquier autoridad o ciudadano podrá denunciar ante el Gobernador del departamento, o ante el Consejo, la existencia de un monumento histórico, indicando los antecedentes que tenga para considerarlo tal y el sitio exacto o aproximado en que está ubicado, si es inmueble, o el poder en que se encuentra, si es mueble.

Art. 8º Cuando un monumento sea declarado histórico, quedará sujeto, en su conservación, reparación y vijilancia, al Consejo de Monumentos Nacionales. Los objetos que se encuentren dentro del recinto de un inmueble declarado monumento histórico, o que le pertenezcan, aunque no estén dentro de él, no podrán ser sacados ni removidos sino con acuerdo del Consejo, el cual indicará la forma en que se debe proceder en cada caso. El Consejo determinará el destino que deba darse a estos objetos.

Art. 9º Si el monumento declarado histórico fuere un inmueble de propiedad particular, no podrá el propietario destruirlo, transformarlo, repararlo o cambiar su aspecto, ni hacer en sus alrededores construcción alguna que lo desvirtúe, sin haber obtenido antes autorización por decreto supremo, que será dictado previo informe favorable del Consejo.

Si se tratare de un lugar o sitio eriazo, el propietario no podrá excavarlo o edificarlo sin haber obtenido antes autorización suprema, en la misma forma. La infracción de este artículo será penada con multa de quinientos a mil pesos, sin perjuicio de la restauración o destrucción consiguientes, por cuenta del infractor.

Art. 10º Si el monumento declarado histórico, fuere un objeto mueble de propiedad particular, no podrá ser exportado, bajo pena de comiso y multa de un mil a cinco mil pesos, si se intentare hacerlo clandestinamente. Solo en virtud de autorización suprema, otorgada previo informe favorable del Consejo de Monumentos Nacionales, se permitirá la exportación de objetos antro-po-arqueológicos o de carácter histórico, y siempre que existan dos ejemplares, por lo menos, en museos nacionales.

Art. 11º En caso de venta del objeto, el Estado tendrá preferencia para su adquisición, previa tasación de tres peritos, que se nombrarán: uno por el Consejo de Monumentos Nacionales, otro por el propietario del objeto y el tercero por el Juez Letrado del departamento.

El Consejo de Monumentos Nacionales podrá pedir la expropiación de los monumentos históricos de propiedad particular que, en su concepto, convenga conservar en poder del Estado. Su justiprecio se hará como en el caso del inciso anterior.

## TITULO IV

### Monumentos públicos

Art. 12º Se declaran monumentos públicos y quedan bajo la vijilancia del Consejo de Monumentos Nacionales, los edificios y recintos, urbanos y rurales, que tengan carácter histórico o artístico, las estátuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en jeneral, todos los objetos que se hubieren colocado y se colocaren en campos, calles, plazas y paseos públicos, para perpetua memoria.

Art. 13º Antes de iniciar trabajos para construir monumentos u objetos de carácter conmemorativo, el constructor deberá presentar los planos y bocetos de la obra en proyecto al Ministerio de Instrucción Pública, para que previo informe del Consejo de Monumentos Nacionales, sobre su faz artística y panorámica, autorice la construcción o colocación. Sin este requisito no podrá iniciarse la obra. En caso de infracción, el constructor incurrirá en una multa de quinientos a mil pesos, sin perjuicio de ordenarse administrativamente la destrucción o retiro del monumento u objeto, a costa del infractor.

Art. 14º Solo en virtud de autorización suprema, y previo acuerdo del Consejo, se podrá cambiar la ubicación de los monumentos públicos.

Art. 15º Las corporaciones o fundaciones, de derecho público o privado, a quienes corresponda cubrir los gastos de conservación de un monumento público, deberán comunicar al Consejo la cantidad que destinarán anualmente a este objeto. El Consejo podrá observar el monto de esta cantidad y fiscalizar su inversión.

## TITULO V

### Excavaciones

Art. 16º Ninguna persona o corporación podrá hacer, en el territorio nacional, excavaciones de carácter arqueológico, antropológico, paleontológico o paleantropológico sin haber obtenido previamente la correspondiente autorización suprema, que solo se otorgará en virtud del informe favorable del Consejo de Monumento Nacionales, y una vez que hubieren llenado los requisitos que establezca el Reglamento.

La infracción de esta disposición será penada con multa de un mil a cinco mil pesos y los objetos que se hubieren extraído pasarán a poder del Estado. La reincidencia será penada, además, con prisión de veinte a sesenta días.

Art. 17º Serán considerados bienes nacionales los objetos o piezas de carácter científico que se extraigan de excavaciones que se practiquen en terrenos de propiedad del Estado o de las Municipalidades; o en terrenos cuyos tenedores los gocen por concesión fiscal, o a título precario o sin título de dominio.

Como compensación, el Estado cederá a la persona o corporación que hubiere hecho, por su sola cuenta, los gastos de las excavaciones respectivas, un ejemplar de cada pieza que se hubiere encontrado en ellas.

Art. 18º Cuando las excavaciones hubieren sido hechas por el Consejo de Monumentos Nacionales o por personas o corporaciones que reciban o recibieren, para el caso, cualquiera subvención del Estado, los objetos que se extraigan pasarán a poder del Estado y serán distribuidos entre los Museos de la República, en la forma que determine el Consejo.

Art. 19º La autoridad, funcionario, contratista o persona natural o jurídica, que practicare excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, minas u otros análogos, está obligado a denunciar ante el Gobernador del departamento, el hallazgo o descubrimiento de cualquier objeto, pieza o ruina de carácter antro-po-arqueológico, o histórico que encontrare en las excavaciones que esté practicando, y será responsable de su vijilancia y conservación, hasta que la autoridad administrativa se haga cargo del hallazgo.

Los plazos a que se refiere este artículo, tanto para el denuncia como para la conservación del hallazgo, serán fijados por el Reglamento. Transcurridos los plazos para la conservación del hallazgo, cesa la responsabilidad del funcionario, contratista o persona, natural o jurídica que hubiere mandado practicar la excavación. La responsabilidad de que trata este artículo, es solidaria entre todos los empresarios y jefes de los mencionados trabajos, y será penada con multa de doscientos a mil pesos.

Art. 20º Cuando se practiquen excavaciones antro-po-arqueológicas en terrenos de propiedad particular, sin costo alguno para la Nación, la cuarta parte de los objetos o piezas que se extraigan pasará a poder del Estado; del resto se tomará planos y aspectos fotográficos, y sus copias, así como los objetos cedidos, se distribuirán entre los museos nacionales en la forma que determine el Consejo.

## TITULO VI

### Registro e inscripciones

Art. 21º Los Museos Históricos Nacional y de Antropolojía y Etnografía, enviarán una copia del catálogo de los efectos que se conservan en sus establecimientos, al Consejo de Monumentos Nacionales y otra copia a la Oficina de Bienes Nacionales. Además, comunicarán semestralmente al Consejo y a la mencionada Oficina, las nuevas adquisiciones que hayan hecho durante ese período.

Art. 22º Los jefes de establecimientos de enseñanza fiscal o particular y de corporaciones científicas que posean museos o colecciones de objetos históricos, antropológicos o arqueológicos, inscribirán sus establecimientos en el registro que, para este efecto, llevará el Consejo de Monumentos Nacionales. Enviarán, además, al Consejo una copia del catálogo, para los efectos que posean, y remitirán otra a la Oficina de Bienes Nacionales.

Los museos que se funden en lo sucesivo, se inscribirán previamente en el registro de que trata el inciso anterior. Los establecimientos registrados enviarán semestralmente al Consejo y a la Oficina de Bienes Nacionales la nómina de los objetos que hubieren ingresado a sus museos durante ese período.

## TITULO VII

### Penas

Art. 23º Los particulares que destruyan u ocasionen perjuicios en los monumentos históricos o públicos, o en los objetos o piezas que se conserven en ellos o en los museos, sufrirán las penas que se establecen en los artículos 485 y 486 del Código Penal, sin perjuicio de perseguir la responsabilidad civil que les afecte, para obtener la reparación de los daños materiales que hubiere causado en los citados monumentos o piezas.

Art. 24º Los empleados públicos que infrinjeren cualquiera de las disposiciones de esta lei, o que de alguna manera facilitaren su infracción, serán suspendidos de sus cargos por el término de uno a seis meses, previa petición del Consejo.

Art. 25º Los trabajos que se inicien en contravención a la presente lei, se denunciarán como obra nueva.

Art. 26. Toda infracción a las disposiciones de la presente lei, que no esté expresamente contemplada, será castigada con multa de cien a cinco mil pesos, sin perjuicio de la que corresponda según la lei común.

Art. 27. Se concede acción popular para denunciar toda infracción a la presente lei.

## TITULO VIII

### Recursos

Art. 28º El Consejo de Monumentos Nacionales tendrá una asignación anual no inferior a treinta mil pesos (\$ 30.000), para gastos de secretaría, impresiones, publicaciones, pago de trabajos técnicos, movilización, viajes, útiles de escritorio e imprevistos. Los gastos serán autorizados, en cada caso, por el Consejo.

Art. 29. Autorízase al Presidente de la República para invertir la cantidad de diez mil pesos (\$ 10.000), para organizar el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales.

Artículo transitorio.- Mientras se dicta el Reglamento de la presente lei, el Consejo de Monumentos Nacionales se regirá por las normas que establece el decreto número 3,500, de 19 de junio del presente año, que designó la Comisión Gubernativa de Monumentos Históricos.

Artículo final.- La presente lei regirá desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Refréndese, tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese como lei de la República, en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.- Luis Barros Borgoño.- Oscar Fenner.

## **ANEXO Nº 7**

### **LEY Nº 17.288, DE 1970: LEGISLA SOBRE MONUMENTOS NACIONALES**

Publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero de 1970

Se incluyen las disposiciones de:

#### **Ley Nº 20.021 que modifica la Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales**

Publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2005.

#### **TITULO**

De los Monumentos Nacionales.

I

Artículo 1º.-Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antro-po-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina la presente ley.

#### **TITULO**

Del Consejo de Monumentos Nacionales.

II

Artículo 2º.-El Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo técnico que depende directamente del Ministerio de Educación Pública y que se compone de los siguientes miembros:

- Del Ministro de Educación Pública, que lo presidirá.
- Del Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, que será su Vicepresidente Ejecutivo.
- Del Conservador del Museo Histórico Nacional.
- Del Conservador del Museo Nacional de Historia Natural.
- Del Conservador del Museo Nacional de Bellas Artes.
- Del Conservador del Archivo Nacional.
- Del Director de Arquitectura de la Dirección General de Obras Públicas.
- De un representante del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
- De un representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.
- De un representante del Colegio de Arquitectos.

- De un representante del Ministerio del Interior, que podrá ser un oficial superior de Carabineros.
- De un representante del Ministerio de Defensa Nacional, que deberá ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas.
- De un abogado del Consejo de Defensa del Estado, que será su asesor jurídico.
- De un representante de la Sociedad de Escritores de Chile.
- De un experto en conservación y restauración de monumentos.
- De un escultor que represente a la Sociedad Nacional de Bellas Artes y a la Asociación de Pintores y Escultores de Chile.
- De un representante del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile.
- De un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología,
- De un miembro del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
- Un representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

El Presidente de la República designará, cada tres años, a los miembros del Consejo que no lo sean por derecho propio, a propuesta de las respectivas instituciones, a excepción del cargo de la letra o), que será propuesto por el Ministerio de Educación Pública, y del de la letra p), que será designado a propuesta en terna de las dos entidades que allí se mencionan.

Artículo 3º.-El Consejo tendrá un Secretario encargado de extender las Actas, tramitar sus acuerdos y desempeñar las comisiones que se le encomienden y cuya remuneración se consultará anualmente en el Presupuesto del Ministerio de Educación Pública. El Secretario tendrá el carácter de ministro de fe para todos los efectos legales.

Artículo 4º.-El Consejo designará anualmente de su seno un Visitador General, sin perjuicio de los Visitadores Especiales que pueda nombrar para casos determinados.

Artículo 5º.-El Consejo de Monumentos Nacionales podrá sesionar en primera citación con ocho de sus miembros y en segunda con un mínimo de cinco, y sus acuerdos se adoptarán por simple mayoría de votos.

El Consejo podrá hacerse asesorar por otros especialistas cuando lo estime conveniente.

Artículo 6º.-Son atribuciones y deberes del Consejo:

- Pronunciarse sobre la conveniencia de declarar Monumentos Nacionales los lugares, ruinas, construcciones u objetos que estime del caso y solicitar de la autoridad competente la dictación del decreto supremo correspondiente.
- Formar el Registro de Monumentos Nacionales y Museos.



- Elaborar los proyectos o normas de restauración, reparación, conservación y señalización de los Monumentos Nacionales y entregar los antecedentes a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la ejecución, de común acuerdo, de los trabajos correspondientes, sin perjuicio de las obras que el Consejo pudiera realizar por sí mismo o por intermedio de otro organismo y para cuyo financiamiento se consultaren o se recibieren fondos especiales del Presupuesto de la Nación o de otras fuentes.
- Gestionar la reivindicación o la cesión o venta al Estado o la adquisición a cualquier título por éste, de los Monumentos Nacionales que sean de propiedad particular.
- Reglamentar el acceso a los Monumentos Nacionales y aplicar o, en su defecto, proponer al Gobierno las medidas administrativas que sean conducentes a la mejor vigilancia y conservación de los mismos.
- Conceder los permisos o autorizaciones para excavaciones de carácter histórico, arqueológico, antropológico o paleontológico en cualquier punto del territorio nacional, que soliciten las personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras en la forma que determine el Reglamento, y
- Proponer al Gobierno el o los Reglamentos que deban dictarse para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 7º.- El Consejo de Monumentos Nacionales queda asimismo facultado para:

- Editar o publicar monografías u otros trabajos sobre los Monumentos Nacionales.
- Organizar exposiciones como medio de difusión cultural del patrimonio histórico, artístico y científico que le corresponde custodiar.

Artículo 8º.-Las autoridades civiles, militares y de carabineros tendrán la obligación de cooperar con el cumplimiento de las funciones y resoluciones que adopte el Consejo, en relación con la conservación, el cuidado y la vigilancia de los Monumentos Nacionales.

## TITULO

III

### De los Monumentos Históricos

Artículo 9º.-Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo.

Artículo 10º.-Cualquiera autoridad o persona puede denunciar por escrito ante el Consejo la existencia de un bien mueble o inmueble que pueda ser considerado Monumento Histórico, indicando los antecedentes que permitirían declararlo tal.

Artículo 11º.-Los Monumentos Históricos quedan bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos, estará sujeto a su autorización previa.

Los objetos que formen parte o pertenezcan a un Monumento Histórico no podrán ser removidos sin autorización del Consejo, el cual indicará la forma en que se debe proceder en cada caso.

Estarán exentos de esta autorización los préstamos de colecciones o piezas museológicas entre museos o entidades del estado dependientes de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos del Ministerio de Educación Pública.

Artículo 12º.-Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas.

Si fuere un lugar o sitio eriazo, éste no podrá excavararse o edificarse, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, como en los casos anteriores.

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa de cinco a doscientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 38 de esta ley y de la paralización de las obras mediante el uso de la fuerza pública.

Artículo 13º.-Ninguna persona natural o jurídica chilena o extranjera podrá hacer en el territorio nacional excavaciones de carácter científico sin haber obtenido previamente la autorización del Consejo en la forma establecida por el Reglamento el que fijará las normas a que deberán sujetarse dichas excavaciones y el destino de los objetos que en ellas se encontraren.

Artículo 14º.-La exportación de objetos o bienes muebles que tengan el carácter de Monumentos Históricos queda sujeta a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley Nº16.441, de 22 de Febrero de 1966, previo informe favorable del Consejo.

Artículo 15º.-En caso de venta o remate de un Monumento Histórico de propiedad particular, el Estado tendrá preferencia para su adquisición, previa tasación de dos peritos nombrados paritariamente por el Consejo de

Monumentos Nacionales y por el propietario del objeto. En caso de desacuerdo, se nombrará un tercero por el Juez de Letras de Mayor Cuantía del departamento del domicilio del vendedor.

Las Casas de Martillo deberán comunicar al Consejo de Monumentos Nacionales, con una anticipación mínima de 30 días, la subasta pública o privada de objetos o bienes que notoriamente puedan constituir monumentos históricos, acompañando los correspondientes catálogos. El Consejo tendrá derecho preferente para adquirirlos.

Corresponderá a la Dirección de Casas de Martillo aplicar las sanciones a que haya lugar.

Artículo 16º.-El Consejo de Monumentos Nacionales podrá pedir a los organismos competentes la expropiación de los Monumentos Históricos de propiedad particular que, en su concepto, convenga conservar en poder del Estado.

#### TITULO

IV

#### De los Monumentos Públicos

Artículo 17º.-Son Monumentos Públicos y quedan bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, las estatuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estuvieren colocados o se colocaren para perpetuar memoria en campos, calles, plazas y paseos o lugares públicos.

Artículo 18º.-No podrán iniciarse trabajos para construir monumentos o para colocar objetos de carácter conmemorativo, sin que previamente el interesado presente los planos y bocetos de la obra en proyecto al Consejo de Monumentos Nacionales y sólo podrán realizarse estos trabajos una vez aprobados por el Consejo, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes.

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de ordenarse la paralización de las obras.

Artículo 19º.-No se podrá cambiar la ubicación de los Monumentos Públicos, sino con la autorización previa del Consejo y en las condiciones que establezca el Reglamento.

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la restitución a su lugar de origen, a costa del infractor.

Artículo 20º.-Los Municipios serán responsables de la mantención de los Monumentos Públicos situados dentro de sus respectivas comunas.

Los Intendentes y Gobernadores velarán por el buen estado de conservación de los Monumentos Públicos situados en las provincias y departamentos de su jurisdicción, y deberán dar cuenta al Consejo de Monumentos Nacionales de cualquier deterioro o alteración que se produzca en ellos.

## TITULO V

De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes.

Artículo 21º.-Por el solo ministerio de la ley, son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional.

Para los efectos de la presente ley quedan comprendidas también las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren.

Artículo 22º.-Ninguna persona natural o jurídica chilena podrá hacer en el territorio nacional excavaciones de carácter arqueológico, antropológico o paleontológico, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma establecida por el Reglamento.

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa diez a quinientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio del decomiso de los objetos que se hubieren obtenido de dichas excavaciones.

Artículo 23º.-Las personas naturales o jurídicas extranjeras que deseen efectuar excavaciones de tipo antro-po-arqueológico y paleontológico, deberán solicitar el permiso correspondiente al Consejo de Monumentos Nacionales en la forma establecida en el Reglamento. Es condición previa para que se otorgue el permiso, que la persona a cargo de las investigaciones pertenezca a una institución científica extranjera solvente y que trabaje en colaboración con una institución científica estatal o universitaria chilena.

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, la que se hará efectiva en conformidad con las disposiciones del decreto ley N° 1.094, de 1975, sin perjuicio de la multa y del comiso señalados en el artículo precedente.

Artículo 24º.-Cuando las excavaciones hubieren sido hechas por el Consejo de Monumentos Nacionales, por organismos fiscales o por personas o corporaciones que reciban cualquiera subvención del Estado, los objetos encontrados serán distribuidos por el Consejo en la forma que determine el Reglamento.

Cuando las excavaciones o hallazgos hubieren sido hechos por particulares, a su costo, éstos deberán entregar la totalidad del material extraído o encontrado al Consejo, sin perjuicio de las facilidades que obtuvieran para el estudio de dicho material en la forma que lo determine el Reglamento.

El Consejo deberá entregar al Museo Nacional de Historia Natural una colección representativa de "piezas tipo" de dicho material y los objetos restantes serán distribuidos en la forma que determine el Reglamento.

Artículo 25º.-El material obtenido en las excavaciones o hallazgos realizados por misiones científicas extranjeras, autorizadas por el Consejo, podrá ser cedido por éste hasta en un 25% a dichas misiones reservándose el Consejo el derecho a la primera selección y efectuando su distribución según lo determine el Reglamento.

La exportación del material cedido a dichas misiones se hará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la ley Nº 16.441 y en el Reglamento, previo informe favorable del Consejo.

Artículo 26º.-Toda persona natural o jurídica que al hacer excavaciones en cualquier punto del territorio nacional y con cualquier finalidad, encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico, esta obligada a denunciar inmediatamente el descubrimiento al Gobernador Provincial, quien ordenará a Carabineros que se haga responsable de su vigilancia hasta que el Consejo se haga cargo de él.

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa de cinco a doscientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad civil solidaria de los empresarios o contratistas a cargo de las obras, por los daños derivados del incumplimiento de la obligación de denunciar el hallazgo.

Artículo 27º.-Las piezas u objetos a que se refiere el artículo anterior serán distribuidos por el Consejo en la forma que determine el Reglamento.

Artículo 28º.-El Museo Nacional de Historia Natural es el centro oficial para las colecciones de la ciencia del hombre en Chile. En consecuencia, el Consejo de Monumentos Nacionales deberá entregar a dichos Museos colecciones representativas del material obtenido en las excavaciones realizadas por nacionales o extranjeros, según lo determine el Reglamento.

## TÍTULO VI

### De la Conservación de los Caracteres Ambientales

Artículo 29º.-Para el efecto de mantener el carácter ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos, el Consejo de Monumentos

Nacionales podrá solicitar se declare de interés público la protección y conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas poblaciones o lugares o de determinadas zonas de ellas.

Artículo 30º.-La declaración que previene el artículo anterior se hará por medio de decreto y sus efectos serán los siguientes:

- Para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, se requerirá la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, la que sólo se concederá cuando la obra guarde relación con el estilo arquitectónico general de dicha zona, de acuerdo a los proyectos presentados.
- En las zonas declaradas típicas o pintorescas se sujetarán al Reglamento de esta ley los anuncios, avisos o carteles, los estacionamientos de automóviles y expendio de gasolina y lubricantes, los hilos telegráficos o telefónicos y, en general, las instalaciones eléctricas, los quioscos, postes, locales o cualesquiera otras construcciones, ya sean permanentes o provisionales.

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con multa de cinco a doscientos unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la paralización de las obras mediante el uso de la fuerza pública.

## TÍTULO VII

### De los Santuarios de la naturaleza e investigaciones científicas

Artículo 31º.-Son santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado.

Los sitios mencionados que fueren declarados santuarios de la naturaleza quedarán bajo la custodia del Consejo de Monumentos Nacionales, el cual se hará asesorar para estos efectos por especialistas en ciencias naturales.

No se podrá, sin la autorización previa del Consejo, iniciar en ellos trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que pudiera alterar su estado natural.

Si estos sitios estuvieren situados en terrenos particulares, sus dueños deberán velar por su debida protección denunciando ante el Consejo los daños que por causas ajenas a su voluntad se hubieren producido en ellos.

Se exceptúan de esta disposición aquellas áreas que en virtud de atribución propia, el Ministerio de Agricultura declare Parques Nacionales o tengan tal calidad a la fecha de publicación de esta ley.

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 32º.-El Museo Nacional de Historia Natural, centro oficial de las colecciones de ciencias naturales, reunirá las colecciones de "tipos" en dichas ciencias. Las personas e instituciones que efectúen recolecciones de material zoológico o botánico, deberán entregar a este museo los "holotipos" que hayan recogido.

## TITULO VIII

### De los Canjes y préstamos entre Museos

Artículo 33º.-Los Museos del Estado dependientes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos podrán efectuar entre ellos canjes y préstamos de colecciones u objetos repetidos, previa autorización del Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, otorgada mediante resolución fundada.

Artículo 34º.-Los Museos del Estado podrán efectuar canjes y préstamos con Museos o instituciones científicas de carácter privado, siempre que su solvencia garantice el retorno de las especies o colecciones dadas en préstamo, lo que será calificado por el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, previo informe del Conservador del Museo respectivo. El Reglamento determinará las condiciones y modalidades de estos canjes y préstamos.

Igualmente, podrán efectuar préstamos o comodato al Congreso Nacional y a la Exma. Corte Suprema de Justicia, a petición de los Presidentes del H. Senado o de la Exma. Corte Suprema, en su caso.

Artículo 35º.-Los Museos del Estado podrán efectuar canjes de sus piezas o colecciones o darlas en préstamo a Museos extranjeros, en las condiciones establecidas en el artículo 43 de la ley número 16.441, previo informe favorable del Consejo de Monumentos Nacionales.

Artículo 36º DEROGADO.-

## TITULO IX

### Del Registro e Inscripciones

Artículo 37º.-Los Museos del Estado y los que pertenezcan a establecimientos de enseñanza particular, universidades, municipalidades, corporaciones e institutos científicos o a particulares, estén o no abiertos al público, deberán ser inscritos en el Registro que para este efecto llevará el Consejo de Monumentos Nacionales en la forma que establezca el Reglamento. Deberá, además



confeccionar un catálogo completo de las piezas o colecciones que posean, el que deberá ser remitido en duplicado al Consejo.

Anualmente, los Museos de los servicios y establecimientos indicados en el inciso primero deberá comunicar al Consejo de Monumentos Nacionales las nuevas adquisiciones que hubieren hecho durante el año y las piezas o colecciones que hayan sido dadas de baja, facilitadas en préstamo o enviadas en canje a otros establecimientos similares.

Los Museos que se funden en lo sucesivo, se inscribirán previamente en el Registro a que se refiere el inciso primero de este artículo.

## TÍTULO X

### De las penas

Artículo 38º.- El que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 38º bis.- La apropiación de un monumento nacional, constitutiva de los delitos de usurpación, hurto, robo con fuerza en las cosas, o robo con violencia o intimidación en las personas, así como su receptación, se castigará con pena de multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales, además de la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo a las normas generales.

Tratándose del hurto, si no fuere posible determinar el valor del monumento nacional, se aplicará la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo, además de la multa aludida en el inciso precedente.

Artículo 39º.- Los empleados públicos que infringieren cualquiera de las disposiciones de esta ley o que de alguna manera facilitaren su infracción, estarán sujetos a las medidas disciplinarias de carácter administrativo que procedan, sin perjuicio de la sanción civil o penal que individualmente mereciere la infracción cometida.

Artículo 40º.-Las obras o trabajos que se inicien en contravención a la presente ley, se denunciarán como obra nueva, sin perjuicio de la sanción que esta ley contempla.

Artículo 41º.-DEROGADO.

Artículo 42º.-Se concede acción popular para denunciar toda infracción a la presente ley. El denunciante recibirá, como premio, el 20 por ciento del producto de la multa que se aplique.

Artículo 43º.-DEROGADO.

Artículo 44º.-Las multas establecidas en la presente ley, a excepción de aquellas fijadas en el artículo 38, serán aplicadas por el juez de letras en lo civil que corresponda al lugar en que se cometa la infracción, a petición del Consejo de Monumentos Nacionales o por acción popular.

## TÍTULO XI

### De los Recursos

Artículo 45º.- La Ley de Presupuesto de la Nación consultará anualmente los fondos necesarios para el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales y el cumplimiento de los fines que la ley le asigna.

Los Juzgados de Letras ingresarán mensualmente en la Tesorería Fiscal respectiva, en una cuenta especial, a la orden del Consejo de Monumentos Nacionales, el producto de las multas que apliquen por infracciones a la presente ley.

## TÍTULO FINAL

Artículo 46º.- Derógase el Decreto-Ley N° 651, de 17 de octubre de 1925, y todas las disposiciones legales contrarias a la presente ley.

Artículo 47º.- El Presidente de la República dictará el Reglamento para la aplicación de la presente ley dentro de los 180 días siguientes a su publicación.

Artículo 48º.- Los permisos ya otorgados por el Consejo de Monumentos Nacionales, para excavaciones de cualquiera naturaleza, quedarán automáticamente caducados si no se solicitaren nuevamente en el plazo de 30 días, desde la fecha de la publicación del Reglamento de la presente ley en el Diario Oficial, y en la forma que determine dicho Reglamento.

Artículo 49º.- Los trabajos de habilitación y reconstrucción de la casa en que nació Gabriela Mistral, en la ciudad de Vicuña, del mismo modo que el establecimiento de un museo para honrar la memoria de la ilustre poetisa, a que se refiere el artículo 3º de la ley N° 16.719, estarán a cargo del Ministerio de Educación Pública, que los ejecutará a través de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales S. A., con cargo a los fondos a que se refiere el artículo 4º de esa ley.

La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes pondrá a disposición del Ministerio de Educación Pública los fondos que se hubieren entregado para su realización.

Artículo 50º.- Los profesores y funcionarios dependientes del Ministerio de Educación Pública, actualmente en servicio, reincorporados por la ley N° 10.990, artículo 4º, tendrán derecho a efectuar por su cuenta, las imposiciones correspondientes al tiempo que duró su separación del servicio. En virtud de ese integro se les reconocerá dicho tiempo para el goce de los beneficios establecidos en el DFL N° 1.340 bis, y en el artículo 19º de la ley 15.386 y el Decreto Supremo 163 de 1964, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, desde el momento en que esos servidores hayan completado o completen

treinta años de imposiciones en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

Los mismos profesores y funcionarios, si estuvieren disfrutando de una pensión de jubilación, en razón de servicios anteriores a la reincorporación dispuesta por la ley N° 10.990 podrán renunciar a dicha pensión y por ese hecho se les validarán dichos servicios para computarlos en el goce de los beneficios indicados en el inciso anterior.

Artículo 51º.- Modifícase el inciso primero del artículo 32 de la Ley N° 16.617, en la parte que sigue a la palabra "inclusive" quedando como sigue: "serán compatibles con las rentas derivadas del desempeño de seis horas de clases el cualquier establecimiento educacional o con seis horas de clases en la Educación Superior o en el Centro de Perfeccionamiento".

Artículo 52º.- Facúltase al Presidente de la República para que, en nombre del pueblo de Chile, haga donación oficial al Gobierno de la República de Venezuela de una réplica del monumento de don Andrés Bello ubicado en la Avenida B. O'Higgins, de Santiago.

Artículo 53º.-El Tesorero General de la República pondrá a disposición de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas los fondos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 letra a) de la ley N° 15.720, deben aportar las Municipalidades, deduciéndolas de los fondos que, por cualquier concepto deba entregar el Fisco a dichas Corporaciones, cuando éstas no hayan cumplido con esta obligación oportunamente.

Artículo 54º.- Autorízase a la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional para transferir al Fisco, a título gratuito, el inmueble ubicado en la ciudad de Valparaíso, calle Merlet 195 (Cerro Cordillera) a fin de que sea destinado al funcionamiento del Museo del Mar, dependiente del Ministerio de Educación Pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10º de la ley N° 17.236.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévase a efecto como ley de la República.

Santiago, veintisiete de enero de mil novecientos setenta.-

EDUARDO FREI MONTALVA.- Máximo Pacheco Gómez, Ministro de Educación.

Ernesto Livacic Gazzano, Subsecretario de Educación.

Letra t) agregada por el artículo 37º de la Ley N° 19.891 de 2003, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Publicada en el Diario Oficial el 23 de agosto de 2003.

El Decreto Supremo N° 19, de 2001, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial del 10 de febrero de 2001, delega en los Ministros de Estado la

facultad de suscribir, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, los decretos supremos relativos a diversas materias. En el caso del Ministerio de Educación, una de esas materias es la “declaración de Monumentos Nacionales de conformidad con la Ley N° 17.288” (Artículo 1º, Numeral X, N° 4).

Ídem anterior.

El Decreto Supremo N° 603, de 1972, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial del 26 de mayo de 1972, establece en su artículo único lo siguiente: “Prohíbese, salvo expresa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, otorgada en la forma señalada en la Ley N° 17.288, la colocación de placas, láminas, insignias, grabados, letreros y cualquier otra anotación en los Monumentos Públicos e Históricos de la Nación”.

Inciso agregado por artículo único de la Ley N° 18.745, de 1988, que modifica la Ley N° 17.288, que legisla sobre Monumentos Nacionales. Publicada en el Diario Oficial el 6 de octubre de 1988.

Modificado por la Ley N° 20.021, de 2005, que modifica la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales, con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan sus multas. Publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2005.

La Ley N° 16.441 de 1966, que crea el Departamento de Isla de Pascua, llamada también “Ley Pascua”, publicada en el Diario Oficial el 1 de marzo de 1966, establece en su Artículo 43 que “Sólo el Presidente de la República por decreto fundado, podrá autorizar la extracción fuera del territorio nacional, de partes de edificios o ruinas históricas o artísticas o enterratorios o cementerios de aborígenes, de objetos o piezas antro-po-arqueológicas o de formación natural que existan bajo o sobre la superficie y cuya conservación interese a la ciencia, a la historia o al arte, y de bienes, monumentos, objetos, piezas, cuadros, libros o documentos privados o públicos que por su carácter, histórico o artístico, deban conservarse en museos o archivos o permanecer en algún sitio público a título conmemorativo o expositivo.”

El Decreto Supremo N° 329 de 1997, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial el 19 de junio de 1997, señala en su artículo único: “Delégase en el Ministro de Educación la facultad de otorgar la autorización contenida en el artículo 43 de la Ley 16.441. El correspondiente decreto será suscrito por dicho Ministro bajo la fórmula: ‘Por orden del Presidente de la República’.”

Véase nota N° 4.

Modificado por Ley N° 20.021, publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2005.

Ídem. Ver Decreto Supremo N° 484, de 1990, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial el 2 de abril de 1991: Reglamento sobre

Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.

Modificado por Ley N° 20.021, publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2005.

Ídem. Véase nota N° 6.

Modificado por Ley N° 20.021, publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2005.

Ídem. Inciso agregado por la Ley N° 20.021, publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2005.

Ídem. Inciso agregado por el artículo 1° de la Ley N° 19.094 de 1991, que modifica leyes N° 17.288 y 18.918, publicada en el Diario Oficial el 14 de noviembre de 1991.

Además, el artículo 2° de este cuerpo legal intercaló en la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el siguiente artículo 55°, pasando el actual artículo 55° a ser 56°: “Artículo 55°: Declárese que los bienes muebles, adheridos o no, que alhajaban el edificio del Congreso Nacional ubicado en Santiago, en calle Compañía entre las calles Bandera y Morandé, que fuera declarado Monumento Histórico por decreto del Ministerio de Educación Pública N° 583, de 1976, pertenecen al Congreso Nacional.”

Véase nota N° 6.

El artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, publicado en el Diario Oficial el 5 de mayo de 1979, derogó, a contar del 1° de enero de 1980, las franquicias y liberaciones aduaneras contenidas en el artículo 36° de la Ley 17.288.

Artículo 38 remplazado por Ley N° 20.021, publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2005.

Artículo 38 bis, nuevo, introducido por la Ley N° 20.021 de 2005.

Artículo derogado por la Ley N° 20.021 de 2005.

Ídem. Artículo 44 reemplazado por la Ley N° 20.021 de 2005.

Inciso modificado por la Ley N° 17.577, de 1971, que modifica la Ley N° 17.288, publicada en el Diario Oficial el 14 de diciembre de 1971.

Artículo modificado por el artículo 5° de la Ley N° 17.341, de 1970, que libera de pagar pasajes que indica a los profesores que señala y concede facultades al Presidente de la República para modificar las plantas que menciona. Publicada en el Diario Oficial el 9 de septiembre de 1970.

El artículo 10º de la Ley N° 17.236, de 1969, que aprueba normas que favorecen el ejercicio y difusión de las artes, publicada en el Diario Oficial del 21 de noviembre de 1969, dispone: “Créase el Museo del mar, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que funcionará en el inmueble denominado “Casa de Lord Cochrane”, en Valparaíso. La Ley de Presupuesto de la Nación consultará los recursos para el funcionamiento de dicho Museo.”

## ANEXO N° 8

### CAMPOS DE LA BASE DE DATOS DE MONUMENTOS NACIONALES DE CHILE 1926-2008

<b>Campo o variable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Subcampo asociado</b>	<b>Codificación</b>
Número de Monumento	correlativo según antigüedad, menor número=mayor antigüedad		Variable por agregación
Nombre del Monumento			Variable por agregación
Región			1.- Tarapacá 2.- Antofagasta 3.- Atacama 4.- Coquimbo 5.- Valparaíso 6.- O'Higgins 7.- Maule 8.- Bío Bío 9.- Araucanía 10.- Los Lagos 11.- Aysén 12.- Magallanes 13.- Metropolitana 14.- Arica Parinacota 15.- De los Ríos 16.- Todo el territorio nacional
Número decreto o Ley	variable por agregación		Número del decreto del Ministerio de Educación o de la Ley

Número de bienes que se declaran con un mismo decreto			1.- Un solo bien patrimonial 2.- Dos bienes 3.- Tres bienes 4.- Cuatro bienes 5.- Cinco bienes 6.- De seis a 10 7.- De 11 a 15 8.- De 16 a 20 9.- De 21 a 25
Condición actual de la vigencia del decreto	Indica si se mantienen como monumento o ha sido desafectado		1.- Vigente 2.- Desafectado
Año de declaración	variable por agregación		año

Categoría del Monumento			1.- Monumento Histórico (MH) 2.- Zona Típica (ZP) 3.- Santuario de la Naturaleza (SN)
Característica prioritaria patrimonial	Indica si el patrimonio es prioritariamente natural, cultural o mixto		1.- Natural 2.- Cultural 3.- Natural y cultural
Período	Corresponde a su origen temporal, es decir período en el que se construye		1.- Prehispano 2.- Colonial 3.- Republicano XIX 4.- Republicano XX 5.- Todos los anteriores
Tipo de patrimonio			1.- Sitio Arqueológico (SA) 2.- Arq. civil privada (ACPR) 3.- Arq. civil pública (ACPU) 4.- Arq. Militar (AM) 5.- Arq. Religiosa (AR) 6.- Arq. Industrial (AI) 7.- Infraestructura (I) 8.- Plazas y parques (PP) 9.- Cementerios y mausoleos (CM) 10.- Sitios Sagrados indig. (SSI) 11.- Memorial (M) 12.- Sitio Paleontológico (SP) 13.- Ecosistema (E)



			14.- Objeto – Colección ( OC) 15.- Patrimonio Marítimo (PM) 16.- Medios de transporte terrestre 17.- Estaciones de ferrocarriles y edificaciones asociadas 18.- Casas patronales de haciendas y estancias 19.- Medios de transporte aéreos 20.- Sitio histórico
Zona			1.- Rural 2.- Urbana
¿Está vinculado a la Independencia nacional?			1.- Si 2.- No
¿Está vinculado a un presidente de la República?			1.- Si 2.- No

## DESCRIPCIÓN DE LA CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES

- **Número de Monumento:** Cada bien patrimonial lleva un número correlativo desde el primero declarado en 1926. Un decreto puede incorporar varios bienes y cada uno de ellos lleva un número correlativo, salvo las colecciones de bienes muebles (libros, objetos, muebles, cuadros y otros similares) que se les asigna un solo número en función de la colección y que generalmente están conservadas en museos y archivos.
- **Nombre del Monumento:** Cada bien patrimonial lleva su nombre oficial de acuerdo al decreto de creación, aunque en algunos casos se ha abreviado y colocado la provincia y comuna cuando no es de fácil ubicación territorial.
- **Región:** El territorio nacional está dividido en 15 regiones. Se ha agregado un número más para representar a todo el país cuando un decreto de declaración patrimonial es genérico para todo el territorio. Los números de cada región están orientados generalmente de norte a sur, pero la Región Metropolitana (Santiago) y las dos últimas regiones creadas (Arica y Parinacota, y la de Los Ríos) tienen números intercalados.

- **Número decreto o Ley:** Corresponde al número del decreto del Ministerio de Educación o de la Ley que determina legalmente que el bien patrimonial está protegido por el Estado.
- **Número de bienes que se declaran con un mismo decreto:** Si bien la mayoría de los bienes patrimoniales son declarados en decretos individuales, existen otros casos en que se nominan dos o más. De los números 1 al 5 se indican el número secuencial de bienes decretados. Del 6 al 9 de agruparon de cinco en cinco.
- **Condición actual de la vigencia del decreto:** el 1 corresponde a la vigencia del decreto y el 2 indica que el monumento fue desafectado de su condición debido a la destrucción del mismo o porque perdió su valores patrimoniales originales o por conflictos legales con los propietarios.
- **Año de declaración:** Indica el año de declaración del decreto.
- **Categoría del Monumento:** Corresponde a las tres categorías que se declaran expresamente mediante decreto por la Ley 17.288 que son Monumento Histórico, Zona Típica y Santuario de la Naturaleza. Si bien la ley contempla dos categorías más como la Monumento Arqueológico y Monumento Público, estas lo son por el solo ministerio de la ley y no requieren declaración por decreto, salvo en el caso de los monumentos públicos a los grandes servidores de la nación que requieren de una ley especial de acuerdo a la Constitución de la República.
  1. Los **monumentos históricos (MH)** pueden ser todo tipo de bienes patrimoniales muebles o inmuebles, de cualquier antigüedad, y constituir más de una unidad, no existiendo límite en cuanto a extensión o superficie, siendo su característica principal que reúnen mayores valores patrimoniales y la ley contempla una normativa más precisa para su intervención.
  2. Las **zonas típicas (ZT)** están destinadas a mantener el carácter ambiental de un lugar y ocupan áreas más extensas tanto urbanas como rurales y generalmente incluyen uno o más monumentos históricos o monumentos arqueológicos. Las normas de intervención son más flexibles.
  3. Los **santuarios de la naturaleza (SN)** son por lo general áreas más extensas, mayoritariamente ubicadas en áreas rurales y que incorporan parte de un ecosistema o varios ambientes, tanto naturales como intervenidos, siendo su principal característica la conservación y ser lugares para la investigación científica.

- **Característica prioritaria patrimonial:** Establece si el bien patrimonial es fundamentalmente del área cultural, natural o de ambos.
- **Período:** Indica el origen temporal del bien, sea del período prehispánico, colonial, republicano del siglo XIX y republicano del siglo XX. El período prehispánico comprende desde 1536 hacia atrás, el colonial desde 1536 hasta 1810, el republicano del siglo XIX hasta 1900 y el republicano del siglo XX hasta la actualidad. Estos cortes temporales son por cierto arbitrarios, no dejan de tener un sesgo cultural, historicista y nacionalista, pero son comprendidos por todos y ampliamente utilizados en Chile.
- **Tipo de patrimonio:** Con el objetivo de clasificar los bienes patrimoniales se establecieron tipos que tienen su principal caracterización por el tipo de uso al cual fue destinado originalmente el bien, pero también, en algunos casos por su rasgo temporal, étnico o natural. De nuevo nos encontramos con clasificaciones arbitrarias y discriminadoras, pero que son ampliamente usadas. Por cierto algunos bienes podrían estar en más de un tipo patrimonial pero para aclarar y evitar dudas hemos definido cada uno de los tipos. También varios bienes han tenido usos distintos en su historia, pero se ha priorizado su uso original.
  1. **Sitio Arqueológico (SA):** Todos los bienes patrimoniales prehispánicos, sean estructuras superficiales o enterradas, de cualquier magnitud y que pueden incluir restos humanos y su contexto ambiental. Los sitios arqueológicos indígenas coloniales o republicanos también se incluirán aquí si es que corresponden a sitios enterrados, abandonados y sin conocimiento por los actuales pueblos indígenas, tales como asentamientos, cementerios y otros tipos de sitios.
  2. **Arquitectura Civil Privada (ACPR):** Casas, edificios o conjuntos de éstos, que han sido construidos por particulares, con fines privados, sean de residencia, comerciales o de servicios. En los casos de conjuntos arquitectónicos se ha priorizado que si la mayoría de los bienes son de uso particular o privado, aunque existan algunos de procedencia pública, los bienes se incorporen en este tipo patrimonial, tal es el caso de pueblos, calles o centros históricos.
  3. **Arquitectura Civil Pública (ACPU):** Corresponden a edificaciones construidas fundamentalmente por el Estado, con fines de uso público o vinculadas a las actividades administrativa de gobierno en su sentido más amplio tales como edificaciones de administración del Estado en todos sus niveles territoriales administrativos y de servicios, edificaciones educacionales y de salud, excluyendo las que tienen fines militares.

4. **Arquitectura Militar (AM):** Todas las construcciones o edificaciones que tienen un objetivo militar defensivo u ofensivo o de servicios para tales fines, tales como fuertes, arsenales, cuarteles o bases de las fuerzas armadas de tierra, mar o aire. Se excluyen aquellas instalaciones como faros, que si bien pueden ser administradas por fuerzas militares tienen un sentido civil de la navegación.
5. **Arquitectura Religiosa (AR):** Catedrales, iglesias, conventos, monasterios, capillas y toda construcción dedicada o servicio a las distintas creencias religiosas.
6. **Arquitectura Industrial (AI):** Todas las edificaciones, construcciones o instalaciones destinadas a la extracción o producción que pueden incluir tanto la actividad extractiva como fabril y la asociada a ellas, incluso las de servicio o residencia de obreros y empleados, tales como fábricas, minas y asentamientos mineros, fundiciones, etc.
7. **Infraestructura (I):** Corresponde a construcciones tales como puentes, viaductos, vías férreas.
8. **Plazas y Parques (PP):** Áreas verdes de ciudades y pueblos que tienen un uso de esparcimiento y recreación y que han sido diseñadas y construidas. También pueden ser incorporados aquí los parques o jardines de las edificaciones urbanas o rurales cuando ese ha sido el único objeto de la declaración.
9. **Cementerios y Mausoleos (CM):** Áreas urbanas o rurales destinadas a sepulturas sean colectivas o individuales.
10. **Sitios Sagrados Indígenas (SSI):** Son lugares que actualmente las poblaciones indígenas consideran sagradas por sus atributos o porque allí se realizan ceremonias y rituales religiosos propios de su cultura. Estos sitios pueden tener estructuras permanentes o efímeras.
11. **Memorial (M):** Es un lugar conmemorativo de personas o acontecimientos ubicado tanto en lugares públicos como privados.
12. **Sitio Paleontológico (SP):** Es un área donde existen fósiles o evidencias de la naturaleza de hace miles y millones de años atrás.
13. **Ecosistema (E):** Son lugares esencialmente naturales o parcialmente intervenidos por los seres humanos que pueden comprender parte de un ecosistema o varios.

**14. Objeto y/o Colección (OC):** Corresponde a todo tipo de objetos muebles patrimoniales que individualmente o de manera agrupada forman parte de colecciones públicas o privadas, generalmente conservadas en museos, bibliotecas y archivos.

**15. Patrimonio Marítimo (PM):** Se incluyen aquí construcciones, barcos y todo tipo de embarcación y restos de ella, en servicio o hundida, o vinculadas a la navegación como faros, incorporando instalaciones en tierra directamente conectadas a ríos, lagos y mares, tales como muelles.

**16. Medios de transporte terrestre (MT):** Corresponde a bienes muebles de transporte de personas o carga, con motor o de arrastre terrestre tales como locomotoras, carros de ferrocarril, buses, ascensores, autos, vehículos de bomberos y similares.

**17. Estaciones de ferrocarril (EF):** Todo tipo de instalaciones o construcciones ferroviarias, sea de transporte o de servicios tales como estaciones de todo tipo, su arquitectura asociada, casas de máquinas, etc.

**18. Casas Patronales (CP):** Corresponde a viviendas de los propietarios o administradores de haciendas y estancias, fundamentalmente rurales, pero también hoy urbanas debido a la expansión de las ciudades, que pueden incluir capillas, bodegas, jardines y parques y otras instalaciones asociadas.

**19. Medios de transportes aéreos (MTA):** Aviones de pasajeros o carga, civiles o militares.

**20. Sitio Histórico (SH):** Lugares de carácter histórico generalmente sin construcción alguna salvo hitos o monumentos conmemorativos donde ocurrieron acontecimientos memorables, tales como campos de batalla, fundaciones, firmas de documentos históricos, etc.

- **Zona:** Se establece la ubicación preferentemente rural o urbana del bien en la actualidad. En este caso es importante tener presente que muchos bienes originalmente estaban en ambientes rurales pero que la expansión urbana los ha englobado o que ellos mismos han sido la causa de su crecimiento.
- **Vinculación con la Independencia Nacional:** Corresponde a la relación que tienen el bien patrimonial con el proceso de la independencia nacional.
- **Vinculación con algún presidente de la República:** Corresponde a la relación del bien patrimonial con la vida de algún presidente de la Republica.